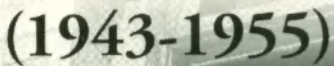
NUEVA HISTORIA ARGENTINA



DIRECCIÓN DE TOMO

Juan Carlos Torre

LOS AÑOS PERONISTAS (1943-1955)



Editorial Sudamericana

Proyecto editorial: Federico Polotto
Coordinación general de la obra: Juan Suriano
Asesor general: Enrique Tandeter
Investigación iconográfica: Graciela García Romero
Diseño de colección: Isabel Rodrigué

NUEVA HISTORIA ARGENTINA

TOMO 8

LOS AÑOS PERONISTAS (1943-1955)

Director de tomo: Juan Carlos Torre

EDITORIAL SUDAMERICANA
BUENOS AIRES

IMPRESO EN ESPAÑA

Queda hecho el depósito
que previene la ley 11.723.

Humberto I° 531, Buenos Aires.

www.edsudamericana.com.ar

ISBN 950-07-2181-3
ISBN O.C. 950-07-1385-3

COLABORADORES

Carlos Altamirano
Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, CONICET

Damián Antúnez
Universidad Torcuato Di Tella

James P. Brennan
University of California

Lila Caimari
Universidad de San Andrés-CONICET

Louise Doyon
University of Toronto

Pablo Gerchunoff
Universidad Torcuato Di Tella

Marysa Navarro
Dartmouth College

José Paradiso
Universidad del Salvador

Elisa Pastoriza
Universidad Nacional de Mar del Plata

Robert A. Potash
University of Massachusetts, Amherst

Silvia Sigal
École des Hautes Études en Sciences Sociales

Juan Carlos Torre
Universidad Torcuato Di Tella

ÍNDICE

I

Introducción a los años peronistas

por JUAN CARLOS TORRE



ifestantes durante el 17 de octubre de 1945.



La historia política de la Argentina en el siglo XX se divide en dos: antes y después del surgimiento del peronismo. Al constituirse como fuerza política en 1945 desplazó hacia el pasado la tradicional oposición entre radicales y conservadores sobre la que habían girado las luchas políticas desde la cruzada por la libertad del sufragio. En el lugar de esa oposición se levantó otra, más cargada de contenidos de clase y tributaria de los conflictos que acompañaron la expansión de los derechos sociales y la integración política y social de vastos sectores del mundo del trabajo. En 1945 se modificaron tanto los términos como las fuentes de la principal oposición en torno de la que estaba organizada la vida política. Sin embargo, no cambió demasiado la intensidad con la que vivieron sus contrastes los bandos situados a ambos lados de esa fractura política. La hostilidad que enfrentó a radicales y conservadores en tiempos de Yrigoyen se prolongó en la hostilidad existente entre peronistas y antiperonistas durante el ascenso y la consolidación de Perón en el poder. Dos momentos clave en la formación de la Argentina moderna —la apertura del sis-

tema político y la institucionalización de las realidades propias de una sociedad industrial— estuvieron, así, atravesados por profundos desgarramientos del consenso nacional. La extrema facciosidad que caracterizó las luchas políticas tuvo un desenlace previsible: la gestación de una recurrente crisis de legitimidad que incidió negativamente sobre la perduración de cada avance hecho en la construcción de una comunidad política más democrática y más igualitaria.

Este libro se ocupa de un capítulo central de esa trayectoria del país, los años peronistas. Su comienzo se ubica en 1943, cuando se inició la secuencia histórica que llevó al encuentro de Perón y las masas obreras y a la conquista del poder político. Su terminación se produjo en 1955 por un golpe militar con un fuerte respaldo civil. Siguiendo la organización de los volúmenes de la *Nueva Historia Argentina*, los aspectos más significativos del período son abordados en diferentes capítulos. Este formato, si bien permite un tratamiento más pormenorizado, tiene el inconveniente de diluir la trama compacta de esa historia. Para subsanarlo, hemos incluido una introducción donde se ofrece un relato unificado para que sirva como guía de lectura de los capítulos de varios autores que contribuyen a este libro.

LA REVOLUCIÓN DEL 4 DE JUNIO Y EL ASCENSO POLÍTICO DE PERÓN

En 1943 el ciclo de la restauración conservadora abierto en septiembre de 1930 con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen terminó abruptamente también por obra de un golpe militar. El 4 de junio el gobierno de Ramón Castillo fue desplazado sin ofrecer resistencia. Comenzó, entonces, un nuevo ciclo político destinado a producir transformaciones de amplio y duradero impacto en los equilibrios políticos y sociales del país. Sin embargo, la dirección de los cambios futuros fue difícil de discernir en medio de la confusión política que rodeó los primeros momentos del alzamiento militar. Un episodio revelador fue la renuncia antes de asumir de quien encabezara inicialmente el golpe, el general Arturo Rawson, y su reemplazo por el general Pedro Ramírez, ministro de Guerra del depuesto gobierno constitucional.

La Revolución de Junio fue la obra de unas Fuerzas Armadas atravesadas también ellas por los principales contrastes que dividían a la vida política nacional. El primero de ellos era la actitud frente a los bandos en pugna en la Segunda Guerra Mundial. En sintonía con la tradición del país, el presidente Castillo había optado por la política de neutralidad, pero decidió persistir en ella aun después que los Estados Unidos la abandonaran, al entrar en el conflicto bélico a fines de 1941. En estas condiciones, la neutralidad cambió de significado para ser la expresión de toda una definición ideológica, la resistencia a incorporarse a la cruzada mundial de las democracias contra el fascismo. La posición oficial se convirtió así en objeto de ásperas controversias y fuertes presiones. Sectores crecientes de la opinión pública levantaron tribunas, y desde ellas figuras políticas e intelectuales del conservadurismo liberal, del radicalismo y del socialismo hicieron escuchar su voz reclamando el alineamiento argentino con la causa de los países aliados. Por su parte, Washington respondió al recalcitrante neutralismo de Castillo suspendiendo la venta de armamentos. Estas divergencias se trasladaron dentro de la corporación militar: la política de ruptura con las potencias del Eje era compartida por altos oficiales del Ejército; no obstante, la opinión mayoritaria de los cuadros intermedios se inclinaba por el mantenimiento de la neutralidad.

Un segundo e importante contraste estaba planteado en torno del funcionamiento de las instituciones políticas. Tres años antes de la Revolución de Junio, durante la presidencia de Roberto Ortiz, había comenzado un proceso destinado a depurar las prácticas políticas de la restauración conservadora. Electo por medio del fraude y al frente de una coalición fragmentada por disputas internas, Ortiz buscó un acercamiento con los radicales. Con ese fin, a principios de 1940, anuló elecciones fraudulentas en las provincias e intervino el bastión conservador más importante, la provincia de Buenos Aires. Ese mismo año los radicales triunfaron en las elecciones legislativas y consolidaron su predominio en el Congreso. El programa de regeneración democrática iniciado por Ortiz fue, empero, de corta duración. En julio de 1940, enfermo, debió delegar el gobierno en su vicepresidente, Ramón Castillo, quien pronto desandó el camino recorrido: tomó distancia de los radicales e

incluso de su propio partido y recurrió otra vez al fraude para asegurar las victorias electorales de sus contados aliados políticos. En el deslizamiento hacia una gestión cada vez más autoritaria, Castillo se replegó sobre el respaldo que le brindaban sus apoyos en las Fuerzas Armadas. En ellas la evolución de la situación política suscitaba también reacciones divergentes. Había quienes, por sus contactos con el partido radical, seguían con inquietud el retorno del fraude, pero éste era un sector minoritario; en el grueso de la oficialidad el rechazo era más amplio y se extendía hasta abarcar a los partidos y a las instituciones de la democracia liberal.

En el contexto definido por estos contrastes, a principios de 1943 Castillo tomó una decisión que sería fatal para su suerte política. En el mes de septiembre debían realizarse las elecciones convocadas para elegir a un nuevo presidente. A ellas los partidos de la oposición se aprestaron a concurrir reuniendo fuerzas en una coalición, la Unión Democrática, constituida en diciembre de 1942 a partir de la confluencia de la Unión Cívica Radical con el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista. Con ese mismo fin, Castillo designó como candidato de sus sectores adictos al senador conservador Robustiano Patrón Costas. Gran hacendado del norte, asociado según la opinión pública con las prácticas feudales dominantes en los ingenios azucareros y conocido partidario del fraude, el candidato de Castillo resumía los rasgos más irritativos de la restauración conservadora. A estos antecedentes, Patrón Costas agregaba otro y éste era su simpatía hacia la causa aliada y la posición de los Estados Unidos.

La decisión de Castillo tuvo por efecto aglutinar en un rechazo unánime al único sector del país que estaba en condiciones de obstaculizar sus planes: las Fuerzas Armadas. Tanto los oficiales que mantenían viva la idea de una regeneración de las prácticas políticas como los que eran partidarios del neutralismo encontraron en la postulación de Patrón Costas razones suficientes para coincidir en un golpe de Estado que, por un lado, los liberara de verse complicados con una nueva farsa electoral y, por el otro, bloqueara la rectificación de la política exterior. Las distintas facciones militares se sumaron a la Revolución de Junio creyendo cada una que de ese modo quedaba despejado el camino para sus propias aspiraciones. La confu-

sión que siguió al 4 de junio fue la consecuencia previsible de esa diversidad de objetivos. En un punto, sin embargo, el acuerdo fue total: la represión al comunismo y a las organizaciones obreras. Más allá, los rumbos del alzamiento militar permanecieron inciertos en los meses iniciales.

Quienes primero vieron frustradas las esperanzas puestas en el golpe fueron los radicales, al comprobar que el régimen militar en lugar de preparar la vuelta a comicios libres ponía límites a la actividad política. Luego fue el turno de los que abogaban por la ruptura con el Eje, que asistieron impotentes al descabezamiento del reducido grupo de oficiales aliadófilos, después de un fallido intento de aproximación a los Estados Unidos. En octubre de 1943 se produjo, finalmente, una revolución dentro de la revolución. El poder pasó a manos de un núcleo de coroneles y tenientes coroneles pertenecientes a la logia secreta autodenominada Grupo de Oficiales Unidos (GOU) que se formó en los meses previos al golpe. Los miembros del GOU, la mayoría de ellos sin mando de tropa, habían cedido la iniciativa en el derrocamiento de Castillo a la jerarquía del Ejército y a los jefes de unidades; para sí se reservaron posiciones clave en el Ministerio de Guerra y en la presidencia. Desde allí maniobraron con éxito, usando sus influencias, y al cabo de cuatro meses se apoderaron de la conducción política de la Revolución de Junio. Partidarios de un neutralismo intransigente, estos jóvenes oficiales concebían el 4 de junio como la oportunidad histórica para reorganizar las bases institucionales del país a fin de ponerlo al abrigo de la corrupción de los políticos y de la amenaza comunista. Esta reorganización vendría con el establecimiento del imperio de la cruz y de la espada en el lugar hasta entonces ocupado por la Argentina liberal y laica.

Con los resortes del poder bajo control pasaron a la acción rápida y contundentemente: redoblaron las medidas represivas contra los grupos de izquierda y los sindicatos, declararon fuera de la ley a los partidos políticos, intervinieron las universidades, lanzaron una campaña moralizadora en los espectáculos y las costumbres; finalmente, implantaron la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. En esta empresa contaron con la colaboración de un elenco entusiasta de nacionalistas y católicos integristas, cuya gravitación desde sus

cargos en la administración y la enseñanza fortaleció el sesgo clerical-autoritario que presentaba la Revolución de Junio hacia fines de 1943.

No sorprende que en la opinión democrática del país y del exterior el régimen militar fuese visto como un experimento fascista. Ello se tradujo bien pronto en su aislamiento político, que fue acentuándose con la evolución de la guerra a favor de la causa aliada. En un esfuerzo por salir de una situación que se tornaba insostenible pero asimismo bajo la presión de los Estados Unidos, en enero de 1944 el presidente Ramírez decidió la ruptura de relaciones con el Eje. La decisión, que sólo tenía consecuencias diplomáticas y no implicaba el enrolamiento activo del país en la guerra, provocó, no obstante, una fuerte conmoción dentro de la cúpula militar. Una primera consecuencia fue el desplazamiento de Ramírez y la designación del ministro de Guerra, general Edelmiro Farrell, en la presidencia. La segunda consecuencia habría de ser la que en breve plazo tendría el impacto mayor: el desencadenamiento de una intensa y sorda puja entre los miembros del GOU y de la que emergería convertido en el hombre fuerte de la revolución el coronel Juan Domingo Perón.

Por entonces Perón tenía 49 años. Hijo de un propietario rural mediano radicado con modesta fortuna en el sur del país, había ingresado al Ejército siendo adolescente. En 1913 se graduó en el Colegio Militar con el grado de subteniente y optó por el arma de infantería. En 1920 fue transferido a la Escuela de Suboficiales, con asiento en Campo de Mayo, donde hizo sus primeras experiencias como instructor militar. En los cinco años en los que se desempeñó en ese destino se hizo conocer, además, por su afición a los deportes, el boxeo y en particular la esgrima, en la que llegó a ser campeón del Ejército. En 1926 fue enviado a la Escuela Superior de Guerra. Fundada en 1900 con el propósito de profesionalizar el cuerpo militar, los cursos de perfeccionamiento impartidos en esta institución se convirtieron en 1915 en requisito para ascender a capitán. Con este grado Perón se recibió en 1929 y en su foja de servicios quedó registrado que tenía “condiciones excelentes para el servicio de Estado Mayor y muy buenas para aspirar al profesorado de historia militar”. En los años sucesivos ocuparía ambas posiciones; antes, dos acontecimientos, uno en el plano priva-

do y otro en el profesional, marcarían su trayectoria personal. El primero fue su casamiento en 1929 con Aurelia Tizón, catorce años más joven e hija del dueño de un negocio de fotografía del barrio porteño de Belgrano. Tanto la diferencia de edad como la pertenencia de su esposa a una respetable familia de clase media se correspondían con las prácticas convencionales de los jóvenes oficiales como Perón a la hora de contraer matrimonio y formar un hogar.

El otro acontecimiento fue su participación en el movimiento militar que derrocó a Yrigoyen. Perón se vinculó inicialmente con la facción de militares nacionalistas que rodeaba al general José F. Uriburu sólo para apartarse pronto de ella desilusionado por su incompetencia para las tareas conspirativas. El golpe de Estado lo habría de encontrar, finalmente, detrás de los altos oficiales ligados al rival de Uriburu, el general



El teniente primero Juan Domingo Perón (sexto desde la izquierda) en una cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, 1923.

Agustín P. Justo, entre los que se contaban los tenientes coroneles B. Descalzo y J.M. Sarobe, profesores suyos en la Escuela de Guerra y el primero, padrino de su casamiento. Ambos sectores tenian visiones opuestas sobre los objetivos de la Revolución de 1930. El círculo de Uriburu era favorable a un régimen militar que llevara a cabo una reforma institucional para suprimir los partidos y abrir paso a un sistema corporativista; los allegados a Justo estaban, en cambio, más inclinados por una intervención militar transitoria, seguida luego por el llamado a elecciones y la vuelta al gobierno civil. Las secuelas de este conflicto se hicieron visibles con la instalación del gobierno revolucionario y alcanzaron también a Perón. Uriburu, sobre quien recaería la jefatura política de la revolución, una vez en la presidencia purgó inmediatamente la nueva administración de los elementos asociados a Justo. Entre ellos ése fue el caso de Perón: designado al día siguiente del golpe en la secretaría privada del ministro de Guerra, un mes más tarde fue separado de su cargo oficial y transferido a la Escuela de Guerra como titular de la cátedra de historia militar.

Los avatares de la política militar lo condujeron, así, al podio de profesor, en el que adquiriría una experiencia crucial para su futura carrera política. Allí tuvo ocasión de iniciarse en las rutinas de la docencia: hablar en público, expresar ideas con coherencia, interesar y mantener la atención de la audiencia. El ámbito militar, acostumbrado a las consignas claras y a las órdenes simples, era, por otra parte, poco propicio a la retórica elegante y elaborada e imponía un estilo de comunicación llano y directo. De todo ello Perón sacaría buen partido cuando, llegado al poder, hizo de la presidencia un púlpito, al servicio ahora de su propio mensaje. Durante los años en la Escuela de Guerra escribió tres libros de historia militar, que revelaron en él más a un lector atento que a un pensador original. En 1932 volvió al centro de la burocracia militar traído por el desenlace final de la Revolución de Septiembre. Luego de que la tentativa de Uriburu fracasara en medio de su soledad política dentro de la corporación militar, ese año se llevaron a cabo elecciones. En ellas resultó electo presidente al frente de una coalición conservadora el general Justo, con el auxilio de la proscripción de los candidatos radicales. Perón fue designado entonces ayudante de campo del nuevo ministro de Guerra, general Manuel Rodríguez.

Desde esa posición pudo observar de cerca la exigente tarea que se asignó el general Rodríguez por encargo del presidente Justo: devolver a la disciplina profesional a un Ejército que acababa de salir de los cuarteles para hacer conocer al país sus preferencias políticas. No obstante los esfuerzos del ministro de Guerra, el cuerpo de oficiales se desenvolvió a partir de 1930 en un estado de deliberación permanente. En esas circunstancias la preservación de la unidad militar demandó una vigilancia incesante así como la manipulación de las rivalidades internas. Durante los dos primeros años del gobierno de Justo oficiales de origen radical intentaron sin éxito el camino de la rebelión desde las lejanas guarniciones de provincia adonde habían sido relegados. Luego, el epicentro de las actividades conspirativas se trasladó a los seguidores de Uriburu, los cuales sin peso suficiente en la jerarquía castrense condensaron su condena a la traición de los ideales nacionalistas en gestos simbólicos de protesta. Perón, por su parte, se mantuvo alejado de estas tentativas. "Oficial de gran porvenir" fue la calificación que mereció del general Rodríguez en su paso por el Ministerio de Guerra, donde revistó hasta 1935 mientras dictaba simultáneamente su cátedra en la Escuela de Guerra.

Su próximo destino fue la agregaduría militar en la embajada argentina en Chile, en enero de 1936. Durante los dos años en los que se prolongó su estadía, Perón aplicó sus cualidades personales —una estudiada y, sin embargo, fresca simpatía— para ganarse amigos con el fin de cumplir con la misión que le fuera asignada: obtener clandestinamente información sobre los planes expansionistas chilenos en el sur del país. Sus actividades no pasaron desapercibidas para los servicios de inteligencia locales, que infiltraron progresivamente sus contactos. No obstante, éstos se abstuvieron de intervenir a la espera de la ocasión que hiciera más efectiva dentro de la política interna de Chile la denuncia del espionaje argentino. Esa ocasión llegó en 1938, cuando Perón ya estaba de regreso en Buenos Aires. Fue su sucesor en la agregaduría militar, el mayor Eduardo Lonardi, quien terminó siendo sorprendido en plena negociación con agentes dobles chilenos y, en consecuencia, forzado a abandonar el país en medio del escándalo político. Unos diecisiete años más tarde, Perón y Lonardi volverían a cruzarse pero en circunstancias bien diferentes.

El Ejército al que se reintegró Perón después de su estadía en Chile era una institución en plena efervescencia política. Con el paso del tiempo la correlación de fuerzas de 1930 se había ido invirtiendo a medida que los elementos liberales fueron reemplazados por una nueva generación de cuadros de orientación más nacionalista. Esta evolución de la opinión militar era el fruto de varias influencias. Durante la década del treinta se produjo un fortalecimiento de los vínculos profesionales con el Ejército alemán al reanudarse la práctica anterior a la Primera Guerra Mundial de enviar oficiales a perfeccionarse en Alemania. A su vez, la embajada de ese país en Buenos Aires desarrolló fluidos e intensos contactos con el personal militar argentino. En ese marco, la admiración por la maquinaria bélica alemana se extendió para numerosos oficiales hasta el mismo régimen nazi, cuyas realizaciones eran vistas como la culminación feliz de la supresión de la política democrática y de la industrialización para el rearme nacional. Otra influencia decisiva fue la ejercida por la Iglesia, embarcada en la época en una vigorosa ofensiva contra la tradición liberal del país con el fin de dilatar su presencia pública y, más ambiciosamente, recuperar al Estado para la fe católica. En esta empresa, la conquista del Ejército fue una operación previa y necesaria, que se llevó a cabo a través de un trabajo capilar y silencioso en los cuarteles por una densa red de capellanes castrenses e intelectuales católicos. Finalmente, estaba la gravitación negativa del espectáculo poco edificante que ofrecía la vida política del país sobre las exhortaciones a la disciplina hechas por la cúpula militar. La combinación de estas influencias hizo que fuese cada vez mayor la brecha entre la concepción oficial del papel del Ejército y la que era propia de una mayoría creciente de oficiales. Para éstos, la misión del Ejército dejó de estar asociada a la defensa del territorio y la legalidad constitucional para ser concebida más bien en términos de la defensa de la nacionalidad, de una identidad argentina radicada en la tradición, la historia, los valores cristianos.

El eco de este clima de ideas en Perón quedó registrado en su correspondencia personal. En la carta que dirigiera en 1936 al general Francisco Fasola Castaño solidarizándose con su actitud, luego de que éste fuera sancionado por haber criticado públicamente al presidente Justo, escribió: "A poco de asumir

el actual Presidente de la República, muchos de nosotros nos dimos cuenta de que las intenciones y el rumbo de la primigenia revolución se habían torcido; ¡y pensar, mi querido general, que fuimos algunos utilizados en los designios y en los provechos de aventuras personales!" Y agregó: "Hombres esclarecidos como Ud., nos permitirán seguramente retornar a un sendero más argentinista que el actual". En otra carta de 1939, comentando la coyuntura política en el comienzo de la presidencia de Ortiz a uno de sus familiares, vaticinó: "Los conservadores, tarde o temprano, volverán a mostrar la hilacha y el pobre pueblo sufrirá otra vez las consecuencias. No habrá paz hasta que un verdadero gobierno nacional tome las riendas de la nación". Quien así escribía, haciendo suyas las expresiones características de la retórica nacionalista, tenía por delante todavía otra e importante experiencia formadora, la de ser testigo en directo del fascismo en el poder. A ella llegó a través del infortunio: la muerte de su esposa, a la edad de 30 años, enferma de cáncer, en septiembre de 1938. Esta pérdida personal probablemente influyó para que sus superiores en el Estado Mayor aprobaran su pedido de ser destinado a una misión de estudios en el extranjero. En febrero de 1939 el ya entonces teniente coronel Perón partió a la Italia de Mussolini con la finalidad de perfeccionarse en las prácticas del ejército de montaña.

Los dos años que habría de pasar en su nuevo destino dejarán en él impresiones profundas y duraderas sobre las que volvería una y otra vez en el futuro, cuando buscara explicar a otros y a sí mismo la evolución de sus ideas. Esas impresiones poco y nada tuvieron que ver con el arte militar de las tropas destacadas en los Alpes italianos a las que fue asignado. Este hubo de ser más bien el observatorio desde donde pudo seguir, con la curiosidad intelectual que lo distinguía entre sus contemporáneos, los acontecimientos políticos y bélicos de Europa. Después de un primer año en la montaña logró su traslado a la agregaduría militar de la embajada argentina en Roma, un lugar más conveniente para adquirir un conocimiento de primera mano sobre el experimento corporativista de Mussolini. La misión de estudios terminó en diciembre de 1940. De regreso al país, al mes siguiente recibió la orden de trasladarse a Mendoza en calidad de profesor del centro de instrucción de

las tropas de montaña. Allí tuvo la oportunidad de frecuentar y hacer amistad con varios oficiales que más tarde lo acompañarían en su carrera política; entre ellos, el teniente coronel Domingo Mercante, luego su mano derecha, y el general Edelmiro Farrell, su apoyo importante dentro de la jerarquía militar. Había pasado poco más de un año en Mendoza cuando Farrell intervino y lo trajo consigo a sus oficinas en Buenos Aires. Desde ellas, y con el flamante grado de coronel, Perón se volcó de lleno a la actividad dominante del cuerpo de oficiales, la conspiración, y en febrero de 1943 se contó entre los miembros fundadores de la logia militar que habría de apoderarse del control político del golpe del 4 de junio.

Cuando hacia mediados de 1944 estalló el conflicto dentro del GOU la Revolución de Junio se hallaba a la defensiva. En parte por el giro adverso de la situación internacional. El avance triunfal de las potencias del Eje se había detenido y comenzaba el repliegue bajo el asedio de los ejércitos aliados. En parte también por su propia orfandad de ideas y apoyos. Durante el año transcurrido en el gobierno, la elite revolucionaria había invertido sus energías más en la condena doctrinaria que en las políticas concretas, mostrando a la vez un desinterés manifiesto por el respaldo civil, convencida de la autosuficiencia de su cruzada regeneradora. Todo parecía indicar que se encaminaba a una frustración semejante a la del fallido intento de Uriburu en 1931. Si ese destino no se cumplió entonces ello se debió al aporte oportuno de Perón. Fue él quien supo ofrecer en esos momentos difíciles dos cosas de las que carecía la Revolución de Junio: un programa social y económico y una apertura hacia grupos estratégicos de la sociedad. Con esas cartas en la mano y un talento muy superior a la rusticidad política de sus rivales, Perón logró definir la disputa interna a su favor. En julio de 1944, acumulando los cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo se convirtió en el jefe virtual de la revolución.

Con respecto a las propuestas de Perón, en mayo de 1944 fue creado por su iniciativa el Consejo Nacional de Posguerra, con la tarea de preparar un programa económico que permitiera al país sobrellevar las consecuencias del fin inminente del conflicto bélico en el mundo. En los círculos militares era una opinión difundida que la terminación de la guerra entrañaba el

riesgo de la crisis económica, una vez desaparecidas las condiciones extraordinarias que habían protegido la expansión de la industria. En su visión, el retorno de la paz estaba asociado al peligro de la recesión —como ocurriera después de la Primera Guerra Mundial— y al previsible incremento de la agitación social. Por otro lado, las lecciones de la guerra habían ilustrado a los militares acerca de la importancia de contar con una industria capaz de producir armamentos y asegurar la defensa nacional. Estas razones sirvieron de inspiración a los expertos, empresarios y sindicalistas que Perón reunió en el Consejo Nacional de Posguerra en torno de un programa industrialista sostenido por el Estado y orientado a la preservación de las fuentes de empleo.

Una segunda y trascendente iniciativa de Perón comenzó a esbozarse con su designación en octubre de 1943 al frente del Departamento Nacional de Trabajo. Desde esa repartición gubernamental, que poco después elevó a la jerarquía de Secretaría de Trabajo, se hizo cargo de otra de las preocupaciones de la elite revolucionaria, el temor al auge del comunismo en el país y, en particular, en el mundo del trabajo. Pero mientras buena parte de sus camaradas era partidaria de una política de represión, Perón se propuso desactivar esa amenaza mediante una política de concesiones a los trabajadores. Con ese fin y tomando distancia de la reacción inicial de la Revolución de Junio, puramente regresiva, buscó un acercamiento con los principales dirigentes sindicales, a excepción de los comunistas. Su iniciativa cayó sobre un movimiento obrero desarrollado en el clima hostil de la restauración conservadora y despertó la expectativa de unos cuadros sindicales que habían reclamado en vano en los años previos la protección estatal. Sin embargo, los frutos de ese acercamiento tardaron en materializarse. La posición de Perón dentro del régimen militar aún no estaba consolidada y, en consecuencia, no tenía el poder ni los recursos para hacer efectivas las promesas de un nuevo trato de la cuestión social.

Resuelta la disputa interna de la elite revolucionaria a mediados de 1944, las promesas del secretario de Trabajo se convirtieron, a partir de allí, en una rotunda e innovadora realidad: los poderes públicos irrumpieron en la vida de las empresas, imponiendo la negociación colectiva, estimulando la afiliación

La era de la justicia social

"Simple espectador como he sido en mi vida de soldado de la evolución de la economía nacional y de las relaciones entre patrones y trabajadores, nunca he podido avenirme a la idea tan corriente de que los problemas que esa relación origina son materia privativa sólo de las partes interesadas. A mi juicio, cualquier anormalidad surgida en el más ínfimo taller y en la más oscura oficina repercute directamente en la economía general del país y en la cultura general de sus habitantes. [...] Por tener muy firme esta convicción he lamentado la despreocupación, la indiferencia y el abandono en que los hombres de gobierno, por escrúpulos formalistas repudiados por el propio pueblo, preferían adoptar una actitud negativa o expectante ante la crisis y convulsiones ideológicas, económicas, que han sufrido cuantos elementos intervienen en la vida de relación que el trabajo engendra. El Estado manteníase alejado de la población trabajadora. No regulaba las actividades sociales como era su deber, sólo tomaba contacto en forma aislada, cuando el temor de ver perturbado el orden aparente de la calle le obligaba a descender de la torre de marfil, de su abstencionismo suicida. No se percataban los gobernantes de que la indiferencia adoptada ante las contiendas sociales facilitaba la propagación de la rebeldía, resultado del olvido de los deberes de los patrones que, libres de la tutela estatal, sometían a los trabajadores a la única ley de su conveniencia. Los trabajadores, por su parte, al lograr el predominio de sus agrupaciones sindicales, enfrentaban a la propia autoridad del Estado, pretendiendo disputar el poder político. [...] Con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la Era de la Justicia Social en la Argentina. Atrás quedarán para siempre la época de la inestabilidad y el desorden en que estaban sumidas las relaciones entre patrones y obreros. De ahora en adelante las empresas podrán trazar sus previsiones con la garantía de que si las retribuciones y el trato que otorgan al personal concuerdan con las sanas reglas de la convivencia no habrán de encontrar por parte del Estado sino el reconocimiento de su esfuerzo por el engrandecimiento del país. Los obreros, por su parte, tendrán la garantía de que las normas de trabajo que se establezcan habrán de ser aplicadas con el mayor celo por las autoridades. Unos y otros deberán persuadirse de que ni la astucia ni la violencia podrán ejercitarse en la vida del trabajo, porque una voluntad inquebrantable exigirá de ambos la vigencia de los derechos y obligaciones..."

Fragmento del discurso de Perón en la asunción del cargo de secretario de Trabajo y Previsión el 2 de diciembre de 1943.

sindical, reparando viejos agravios por decreto. Sus primeros beneficiarios fueron los gremios más organizados de la época, cuyos dirigentes, en su mayoría sindicalistas y socialistas, aprovecharon las ofertas de Perón evitando, empero, comprometerse abiertamente con un régimen cuyo perfil clerical-autoritario era poco compatible con sus simpatías políticas. En la coyuntura, Perón no tuvo más remedio que convivir con esa conducta oportunista. La compañía de los dirigentes sindicales todavía le era indispensable para poder llegar con su mensaje de reparación social al conjunto de los trabajadores, acrecidos en número por las migraciones internas impulsadas por el crecimiento de la industria.

Al tiempo que puso en marcha la apertura laboral, Perón convocó a los sectores empresarios invitándolos a colaborar con ella. En un recordado discurso en la Bolsa de Comercio, en agosto de 1944, argumentó que si el Estado no intervenía para tutelar las relaciones entre el capital y el trabajo, el malestar de las masas podría tornarse explosivo, poniendo en peligro el orden social y la propia subsistencia de la nación. Y, dirigiéndose a ellos directamente, sostuvo que había llegado la hora de sacrificar algo de su poder patronal para evitar la agudización de la lucha de clases. En la defensa pública de sus iniciativas, Perón colocó la acción de la Secretaría de Trabajo en línea con la doctrina social de la Iglesia; en un plano más privado, reconoció su deuda con el fascismo social europeo en su lucha contra el comunismo, de la que había sido un observador atento en su reciente estadía italiana.

No estaba, sin embargo, en el cálculo político de Perón dirigir sus propuestas hacia la creación de un sistema corporativista. De hecho, él habría de estar entre los primeros dentro de la elite revolucionaria en darse cuenta de que con el triunfo de los ejércitos aliados llegaba el fin para las alternativas no democráticas al comunismo. Con esa convicción, a comienzos de 1945, encabezó el ajuste del régimen militar a los nuevos tiempos. En el mes de marzo la Argentina aceptó el reclamo de los Estados Unidos y declaró la guerra a Alemania e Italia, con vistas a romper el aislamiento diplomático y lograr la admisión en las Naciones Unidas. En el plano interno, los admiradores locales del nacionalsocialismo perdieron sus cátedras en la enseñanza oficial, las libertades públicas fueron restableci-

das, los partidos volvieron a la legalidad y se convocó a elecciones presidenciales para 1946. Al tiempo que conducía la súbita reconversión de la Revolución de Junio, Perón se preparaba para gravitar sobre la próxima transición a la democracia. Así, mientras desmentía en público aspirar a la presidencia, inició contactos con políticos radicales y conservadores con la finalidad de poner a su servicio máquinas políticas de probada eficacia electoral. Con ese aporte, con el de los dirigentes sindicales y la colaboración que esperaba de las clases patronales, Perón fue reuniendo las piezas de la gran coalición con la que se proponía presidir, sostenido por el apoyo del Ejército y la bendición de la Iglesia, la Argentina de posguerra.

Concebido de ese modo, su proyecto político terminó en un fracaso. En primer lugar, la apertura laboral fue recibida al principio con frialdad y, luego, con hostilidad por el mundo de los negocios. En verdad, las iniciativas de la Secretaría de Trabajo no fueron al encuentro de unos empresarios atemorizados por una revolución social inminente y, por lo tanto, dispuestos a hacer sacrificios para evitarlo. Si había en sus filas preocupación y alarma, el origen estaba más bien en la propia gestión de Perón, que en nombre de la justicia social alentaba la movilización obrera y exasperaba las tensiones laborales. No era necesaria demasiada sagacidad para advertir en todo ello la tentativa de convertirse en árbitro de la paz social y de forzarlos a delegar en él todo el poder político.

En segundo lugar, la búsqueda de apoyos entre los partidos tradicionales tampoco halló en ellos suficientes voluntarios dispuestos a acompañar la empresa política de quien tenía los días contados, a juzgar por la evolución de la situación internacional. El revés más clamoroso fue la negativa de Amadeo Sabattini, el líder del ala progresista del radicalismo, al que Perón llegó a ofrecerle la vicepresidencia en una fórmula encabezada por él. Esa reticencia no era sólo el fruto de especulaciones políticas. También fue la expresión de la vigilancia moral ejercida sobre la clase política por el vasto movimiento de resistencia democrática que emergió a la luz con el aflojamiento de los controles autoritarios. Animado por estudiantes universitarios, asociaciones de profesionales y figuras de la intelectualidad, ese movimiento civil se lanzó a las calles y ocupó la prensa, impaciente por ver realizada en el país la victoria

del antifascismo sobre los campos de batalla del mundo. Desde su perspectiva, el viraje de Perón era demasiado tardío para ser tomado en serio; su gestión estaba demasiado entreverada con la trayectoria neutralista y antiliberal del régimen del que era el verdadero jefe.

Las políticas laborales de Perón no alteraron esa visión crítica de la resistencia democrática. Dichas políticas exhibían mucho en común con empresas corporativistas europeas como para facilitar la valoración de cuánto tenían de innovadoras en el contexto local. Además, que éstas encontraran una recepción favorable en los medios obreros no las hacía por ello más aceptables ya que tanto Hitler como Mussolini habían ejercido el poder con un fuerte respaldo de masas. Para quienes contemplaban la coyuntura argentina a partir de las claves provistas por el escenario internacional, del enfrentamiento de la causa de la democracia con sus enemigos de entonces, la transición desde el antifascismo al antiperonismo habría de ser un proceso casi natural e inevitable, como ha mostrado Silvia Sigal en su capítulo "Intelectuales y peronismo". Sólo quienes no adjudicaban la misma importancia al restablecimiento de las instituciones democráticas permanecieron al margen de él, como ocurrió con sectores del catolicismo y el nacionalismo. En cambio, la mayoría de los universitarios e intelectuales vio en la acción de Perón desde la Secretaría de Trabajo nada más que la faz demagógica del régimen autoritario en retirada.

Estimulada por la derrota del Tercer Reich y por la forzada reorientación del gobierno, a mediados de 1945 la movilización opositora redobló la ofensiva, decidida a imponer la rendición incondicional de Perón. En junio se sumaron a ella los empresarios. En un manifiesto público, muchos de los que poco antes habían aplaudido las medidas oficiales a favor de la industria cuestionaron las concesiones a los trabajadores y denunciaron a la Secretaría de Trabajo por alentar la agitación social en las empresas. Este desplazamiento del eje de los conflictos obligó a los sindicatos a tomar partido. En el mes de julio organizaron un gran acto en defensa de las reformas laborales. Fue sugestivo que su defensa estuviese revestida de un carácter institucional y que evitaran personalizarla en la figura de Perón. En esas horas decisivas era evidente que la preocupación de los sindicalistas estaba en ubicarse en el bando ga-

nador, por lo que seguían con indisimulada ansiedad la fuerza que adquiría la ofensiva opositora y el paralelo retroceso del gobierno. Lo cierto es que, luego de realizado el acto, las huestes sindicales permanecieron conspicuamente ausentes de las calles de Buenos Aires.

Fue en esas circunstancias que Perón tomó una decisión estratégica: apelando a una retórica que le ganaría el fervor popular proclamó el advenimiento de la era de las masas, el fin de la dominación burguesa, y convocó a los trabajadores a movilizarse contra el complot reaccionario que amenazaba la obra de la Revolución de Junio. Cobró forma, de este modo, un nuevo intento político. Entre el proyecto original y este que emergía en medio del hostigamiento de las clases medias y altas había una diferencia capital, el sobredimensionamiento del lugar político de los trabajadores que, de ser una pieza importante pero complementaria en una coalición de orden y paz social, se transformaron en el principal soporte de la fórmula política de Perón.

El llamado a los trabajadores no habría de suscitar en ellos una respuesta inmediata y serviría más bien para dar la señal a la acometida final del movimiento opositor. El 19 de septiembre la Junta de Coordinación Democrática organizó una formidable demostración de fuerzas en el centro de la ciudad. Más de 240.000 personas desfilaron desafiantes en la Marcha de la Constitución y la Libertad detrás de la consigna de la entrega del poder a la Suprema Corte. El gobierno reaccionó dando marcha atrás a la liberalización política: restableció el estado de sitio y ordenó a la policía ocupar las universidades, los focos más activos de la resistencia. A esa reacción siguió otra de signo completamente opuesto. El 9 de octubre la poderosa guarnición de Campo de Mayo impuso a Perón la renuncia a todos sus cargos y tres días más tarde fue enviado en prisión a la isla Martín García. En su fulminante ascenso en el régimen militar, Perón había despertado recelos y críticas entre sectores de la oficialidad y a través de esa brecha se filtró la presión incesante de las fuerzas opositoras. Los cuestionamientos incluían su desprejuiciado manejo de la política exterior, la audacia de las reformas laborales, el uso de las posiciones oficiales para promover su candidatura no obstante las promesas en contrario. Y en un lugar también destacado figuraba la censura

hacia la abierta, y por consiguiente transgresora, relación con su amante, la joven actriz Eva Duarte. El desplazamiento de Perón tuvo, sin embargo, corta duración. Una semana después, en la cual sus adversarios no supieron explotar la momentánea victoria alcanzada, recuperó el poder político pero ahora convertido en un líder de masas.

En la gestación de este desenlace concurrieron varios factores, según la reconstrucción hecha por Robert Potash en el capítulo "Las Fuerzas Armadas y la era de Perón". El primero fue el error táctico de la oposición democrática. En lugar de darse por satisfecha con la salida de Perón de escena continuó insistiendo en el retiro de los militares a los cuarteles y en la transferencia del poder a la Suprema Corte. Ello comportaba una verdadera humillación para los hombres de armas porque era equivalente a dar por concluida la Revolución de Junio, admitiendo su fracaso político. El nuevo responsable político del régimen, el general Eduardo Ávalos, jefe de Campo de Mayo, rechazó esa propuesta y sostuvo a Farrell en la presidencia. No obstante, se avino a la formación de un gabinete compuesto por personalidades civiles aceptables a la oposición. Las demoras y desinteligencias que rodearon la concreción de esa solución de compromiso crearon el espacio político para la intervención de un segundo factor: la movilización de los trabajadores al rescate de Perón. Al cabo de dos años, durante los cuales había distribuido beneficios y favores pero sobre todo formulado un mensaje que exaltaba los valores del trabajo y la justicia social, Perón era ya por mérito propio una figura popular.

Las noticias de su renuncia y su posterior encarcelamiento hicieron cundir inquietud y descontento en las fábricas y los barrios obreros. Contra este telón de fondo, el 16 de octubre los dirigentes sindicales se reunieron en la CGT y declararon la huelga general, luego de un largo debate y bajo el acicate del estado de agitación de los trabajadores. En la mañana del día siguiente, columnas de manifestantes comenzaron a afluir desde los suburbios a la Plaza de Mayo con la consigna de la libertad a Perón. Fue en esos momentos que entró en acción un tercer factor: la actitud del general Ávalos ante la movilización obrera. Poco antes del mediodía los oficiales de Campo de Mayo le solicitaron autorización para avanzar sobre la ciudad y empezar la represión, a la vista de la pasividad de la policía,

Inminente Formación de Gabinete

GRUPOS AISLADOS QUE NO REPRESENTAN AL AUTENTICO PROLETARIADO ARGENTINO TRATAN DE INTIMIDAR A LA PODLACION



DISUELVEN A GRUPOS PERONISTAS.—

A las 19.30 se Sabrá la Resolución Definitiva

La Policía Actnó Hoy Mansamente

AVANZA UNA COLUMNA DEL CNEL. PERON



HE AQUI UNA

En la Casa Rosada Esperan Respuesta

Perón Está en el Hospital Militar; se Entrevistó con Delegados Obreros

Tapa de Crítica, *17 de octubre de 1945.*

en gran parte solidaria con los manifestantes. Ávalos negó su consentimiento, renuente a tomar medidas que produjeran hechos de violencia, y les ordenó permanecer en Campo de Mayo mientras él se hacía cargo de la situación. Con el paso de las horas quedó claro que no tenía plan alguno, fuera de resistir el uso de la fuerza. Por la tarde debió admitir la derrota: si antes que la marcha obrera se convirtiera en avalancha no había estado dispuesto a reprimir, ahora la multitud congregada en Plaza de Mayo sólo podía ser desalojada al costo de muchas vidas. En consecuencia, inició negociaciones con oficiales cercanos a Perón, quien por entonces se encontraba en el Hospital Militar tras haber sido trasladado desde la isla Martín García. El acuerdo final fue una capitulación: Ávalos y sus aliados debían renunciar. Farrell nombraría un nuevo gabinete con hombres de confianza de Perón y éste, entre tanto, quedaría fuera del gobierno para proseguir con libertad su carrera hacia la presidencia. La confluencia de estos factores definió el desenlace de la jornada de octubre y, a través de él, la historia por venir. Con la aparición de Perón en los balcones de la Casa de Gobierno en la noche del 17, aclamado por la muchedumbre, nació el movimiento peronista a la vida política nacional.

LA PRIMERA PRESIDENCIA

Las elecciones generales que despejarían la vía de la transición democrática fueron convocadas para el 24 de febrero de 1946. En ellas, Perón participó como candidato del oficialismo. Con el rechazo de la entrega del poder a la Suprema Corte el Ejército había ejercido una vez más, como en 1930 y en 1943, su capacidad de veto, en esta ocasión contra las pretensiones inaceptables de la oposición democrática. Luego, la inesperada y reconfortante prueba de apoyo popular a la obra social de la Revolución de Junio contribuyó a clarificar sus propias opciones. Ante la perspectiva del retorno de los políticos tradicionales, su lugar detrás de la candidatura de Perón no ofreció mayores dudas. Cualesquiera que fueran sus reticencias o prevenciones, para los cuadros de oficiales el ex vicepresidente representaba la continuidad del proyecto revolucionario y su victoria en las urnas la oportunidad para poner a sal-

vo el prestigio militar. Por otro lado, la imprudente seguridad con la que la resistencia democrática prometía duros castigos a los responsables del experimento fascista cohesionó en un reflejo defensivo a los miembros de la corporación castrense.

Razones parecidas condujeron a Perón a ser también el candidato de la Iglesia. Lanzada la confrontación electoral, las fuerzas de la oposición no ocultaron tampoco su intención de poner fin a la orientación clerical del régimen militar, agitando la bandera de la enseñanza laica. Ello forzó a salir de sus vacilaciones a la jerarquía eclesiástica, cuya simpatía inicial por la elite revolucionaria habia disminuido a causa de la radicalización del discurso de Perón y su llamado a la movilización de las masas. En la busca de una salida a la transición democrática menos contaminada por el conflicto social, las máximas autoridades de la Iglesia dirigieron su atención a los partidos políticos sólo para comprobar que en sus filas prevalecía un espíritu de revancha tanto contra la Revolución de Junio como contra las conquistas que ésta garantizara al mundo católico. Fue así que en las vísperas de los comicios dieron a conocer una pastoral donde recomendaban a sus fieles, con escaso entusiasmo pero sin dar lugar a equívocos, el voto por el candidato del gobierno que había perseguido a los comunistas y establecido la enseñanza religiosa.

Frente a la proximidad de las elecciones y cerrada la opción de contar con el aporte de aparatos partidarios existentes, Perón y quienes lo apoyaban debieron organizar en breve plazo su coalición electoral. Fortalecidos por la exitosa culminación del 17 de octubre, los dirigentes sindicales tomaron la iniciativa y crearon un partido político propio, el Partido Laborista. El otro componente de la coalición fue la UCR-Junta Renovadora, una escisión del radicalismo promovida por Perón con el fin de limitar el sesgo obrerista de su candidatura y captar segmentos más amplios del electorado. Desde un principio la convivencia entre ambas agrupaciones se desenvolvió con dificultades, en particular por la resistencia de los laboristas, que acusaban a los disidentes del radicalismo de ser el caballo de Troya de la vieja política dentro del nuevo movimiento popular. Perón debió extremar su poder de persuasión primero para la concertación de un pacto de unidad electoral y luego para imponer a Hortensio Quijano, un veterano dirigente radical de Corrientes, como su compañero de fórmula.

Las fuerzas de la oposición se nuclearon nuevamente bajo el estandarte de la Unión Democrática. A los miembros originales de 1942 —la UCR, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista— se agregó ahora el Partido Comunista. Los partidos aliados se comprometieron a votar la fórmula presidencial del radicalismo, integrada por José P. Tamborini y Enrique Mosca, y presentar listas separadas para los demás cargos electivos. Su programa de gobierno no fue menos novedoso ni más conservador que el sostenido por la coalición peronista. Uno y otro se dirigían a un país en el que la industrialización era un proceso ya irreversible y respondían al clima ideológico de la posguerra, con su énfasis en la intervención del Estado en la economía y la distribución más igualitaria de la riqueza. Incluso en lo concerniente a la política laboral, la Unión Democrática abogó por el perfeccionamiento de cuanto había sido hecho y no por una marcha atrás. Pero este programa de gobierno ocupó un lugar secundario en su campaña electoral. Su propio candidato a la presidencia subrayó que el



Acto de cierre de campaña de la Unión Democrática, diciembre de 1945.

momento de decidir el futuro social y económico del país llegaría una vez superados los peligros que se cernían sobre las libertades públicas. "Sería un desconocimiento de la realidad argentina si yo creyera que éste es el momento de explayarme sobre temas de esta índole" —se explicó Tamborini—. "El drama que nos conmueve a todos en la hora presente es la pérdida de las libertades". Alertando sobre este peligro, corporizado en el triunfo de Perón, y levantando la consigna "Por la libertad contra el nazifascismo" los partidos opositores salieron al encuentro del electorado.

Esta perspectiva sobre lo que estaba en juego tuvo un primer efecto en la polémica que se desató en sus filas a propósito de la incorporación de los conservadores en la Unión Democrática. Al final primó el veto de los radicales, que aun en esa hora de definiciones no estuvieron dispuestos a presentarse a los comicios en compañía de los responsables del fraude de los años treinta. El veto radical provocó la división de las filas conservadoras. De un lado estuvieron los dirigentes que de todos modos decidieron apoyar a la coalición opositora; del otro aquellos que eligieron sumarse calladamente a los partidarios de Perón, movidos por su vieja rivalidad con el radicalismo. Esta adhesión de caudillos conservadores, con peso en las zonas rurales, vino a equilibrar en forma oportuna el carácter sustancialmente urbano de la organización del frente peronista.

Dos incidentes marcaron la batalla electoral, breve y ásperamente disputada. El primero fue el decreto firmado en diciembre por el presidente Farrell, invocando instrucciones expresas dejadas por el ex secretario de Trabajo, que establecía un aumento general de salarios, la extensión de las vacaciones pagas a la mayoría de los trabajadores, el aumento de las indemnizaciones por despido; además, creaba el sueldo anual complementario o aguinaldo, con la indicación de que empezaba a regir inmediatamente y debía abonarse a fines del corriente año. Con el argumento de su inconstitucionalidad, los empresarios se negaron a pagarlo. La respuesta obrera no se hizo esperar: el 8 de enero las grandes tiendas de la capital fueron ocupadas por sus empleados y su ejemplo se multiplicó en las fábricas de la periferia industrial. La situación se agravó cuando los empresarios decidieron el cierre de sus estableci-



Propaganda electoral peronista en las elecciones de 1946.

mientos el 13, 14 y 15 de enero. Por tres días la actividad del país estuvo paralizada y con ella la campaña proselitista. El conflicto se resolvió finalmente con el repliegue de los empresarios. Accediendo a las necesidades electorales del frente opositor, cuyo triunfo prometía acabar legalmente con el controvertido decreto, optaron por pagar el aguinaldo. La comprensible irritación de los partidos de la Unión Democrática ante el golpe electoralista del gobierno hizo que también ellos cuestionaran las medidas mismas. Esa reacción contribuyó a definir su lugar en la confrontación, diluyendo el perfil socialmente progresista de su plataforma electoral. Perón supo luego sacar las consecuencias y redefinió los términos del conflicto político. "En nuestra patria no se debate un problema entre libertad o tirania, democracia o totalitarismo" —sostuvo en el acto de proclamación de su candidatura—, "lo que en el fondo del drama argentino se debate es, simplemente, un partido de campeonato entre justicia social e injusticia social".

El otro incidente fue la intervención intempestiva del ex embajador norteamericano en Buenos Aires, Spruille Braden, en la campaña electoral. Desde sus nuevas funciones en el Departamento de Estado dio a conocer a pocos días de los comicios un informe donde denunciaba las antiguas conexiones de los círculos militares con el régimen nazi. Perón aprovechó la oportunidad que la ostensible injerencia de Braden ponía en sus manos para cerrar con una apelación nacionalista su con-

vocatoria final al electorado. Luego de recordar que el mismo presidente Roosevelt había sido acusado de fascista por promover una política semejante a la suya, denunció al ex embajador como el "inspirador, creador, organizador y jefe verdadero de la Unión Democrática" y concluyó, acuñando la consigna que al otro día recorrería el país: "Sepan quienes votan el 24 la fórmula del contubernio oligárquico-comunista, que con este acto entregan su voto al señor Braden. La disyuntiva en esta hora trascendental es ésta: ¡Braden o Perón!".

El 24 de febrero la coalición peronista se impuso por 1.486.866 votos contra 1.288.880 de la Unión Democrática. El resultado del escrutinio fue conocido muy lentamente y hasta último momento los principales diarios, que habían apoyado al frente opositor, se obstinaron en juzgar imposible la victoria de Perón. A fines de marzo, con la difusión de los cómputos finales, la derrota de la Unión Democrática era definitiva. No obstante ser claro, el triunfo de Perón no fue abrumador. Ello hizo que, retrospectivamente, cobrara importancia el impacto que tuvo la conducción de la campaña de la Unión Democrática sobre sus posibilidades electorales. Es probable que el informe Braden y la entusiasta recepción que encontró en sus filas le haya restado apoyos potenciales. Asimismo, la exclusión de los conservadores también la afectó. Los resultados de las elecciones legislativas y de gobernadores así lo indicaron. En ellas, los distintos partidos de la oposición concurrieron en forma independiente y, en algunos distritos, radicales y conservadores libraron una batalla paralela, cuya virulencia eclipsó la disputa con Perón. Esto facilitó el triunfo de la coalición peronista, que obtuvo el 70% de las bancas en la Cámara de Diputados, 28 de las 30 senadurías y todas las gobernaciones de provincia con excepción de una, Corrientes.

El mapa electoral que emergió de los comicios tendió a reflejar, quizá como nunca antes, las principales fracturas de la sociedad. En las grandes concentraciones urbanas el electorado obrero se volcó en masa en favor de Perón mientras que la oposición recogió sus votos en las clases medias y altas. Los efectos de este realineamiento según criterios de clase fueron devastadores para la izquierda. Los socialistas no lograron elegir un solo legislador cuando estaban seguros de obtener la mayoría en la Capital Federal; en el extremo norte del país, en

el enclave obrero de los ingenios azucareros de Tucumán, la federación socialista local desertó en masa hacia el Partido Laborista. En las zonas rurales la penetración peronista en las clientelas populares de los partidos tradicionales también fue amplia, particularmente en las áreas más modernas del Litoral. Como mostraron los resultados de la provincia de Buenos Aires, las pérdidas mayores correspondieron al conservadurismo, donde fueron numerosos los jefes locales que emigraron con sus seguidores hacia el frente de Perón. El apoyo rural al peronismo también se reclutó en los sectores medios, atraídos por el congelamiento de los arrendamientos y la promesa de la reforma agraria. En las regiones más atrasadas y a la vez menos densas, la maquinaria política de la oposición resistió mejor y el peronismo no tuvo los votos que tendría más tarde, desde el gobierno.

El 24 de febrero la coalición oficialista resolvió exitosamente su objetivo más inmediato: asegurarse el control del poder por medios constitucionales. Restaba definir todavía el perfil del nuevo régimen político. En un aspecto crucial, éste estaba definido de antemano. La decisiva intervención de Perón en la formación de la alianza electoral le garantizaba un papel igualmente prominente en el futuro gobierno. Otra cuestión que ahora debía dilucidarse era la participación institucional que correspondía a las fuerzas reunidas en torno de su candidatura. Formada en un lapso relativamente breve y a partir de sectores de orígenes muy diversos, la coalición peronista estuvo casi al borde de la desintegración, una vez concluidas las elecciones. En el centro del conflicto estaban los dirigentes sindicales del Partido Laborista y los políticos agrupados en la UCR-Junta Renovadora. Los puntos en litigio giraron en torno de la distribución del poder en las legislaturas y en los gobiernos provinciales. Pocos días antes de asumir la presidencia, Perón ordenó la disolución de los partidos de la alianza electoral y llamó a la creación de un nuevo partido invocando la necesidad de tener un movimiento cohesionado para gobernar con eficacia y unidad.

La UCR-Junta Renovadora no resistió la orden pero la dirección laborista, que era la que insistía con más vigor en su autonomía, debatió por varios días la conducta a seguir. A mediados de junio de 1946 concluyó la breve resistencia laboris-

ta. Perón nombró a los organizadores del nuevo partido entre los legisladores recientemente electos; aunque entre ellos había algunos sindicalistas, la mayoría eran políticos de clase media de origen radical y conservador. Este rasgo habría de acentuarse con el tiempo ya que no había dentro del esquema de la flamante organización un lugar para sectores que tuvieran una base de poder independiente del partido mismo. Cuando en enero de 1947 los organizadores del nuevo partido se dirigieron a Perón para que aprobara llamarlo Partido Peronista sancionaron explícitamente otro y más decisivo rasgo de la estructura política del movimiento. El personalismo fue una consecuencia casi inevitable de la trayectoria de ese vasto conglomerado político, formado en muy corto tiempo, a partir de fuerzas muy heterogéneas y muy dependiente de quien fuera su inspirador. En estas condiciones Perón llegó a ocupar, naturalmente, la posición intransferible de conductor político y de enunciador e intérprete autorizado de las iniciativas e ideas del movimiento que se reconocía en su nombre.

No obstante, la amalgama de los apoyos políticos de Perón dentro de una misma organización siguió siendo una empresa difícil. Las elecciones internas de septiembre de 1947 en preparación del primer congreso del partido fueron escenario de fuertes enfrentamientos entre los sectores de origen laborista y los de origen político, con episodios de fraude y de abierta rebelión ante los resultados. Las autoridades centrales terminaron por intervenir todos los distritos y ése fue el estado en el que se desenvolvieron la mayor parte del tiempo. Gracias a la división en ramas —masculina, femenina y sindical—, decidida recién en 1949, disminuyó el clima de beligerancia interna pero ya para entonces el partido estaba sometido a un férreo verticalismo.

Una vez doblegadas las resistencias al reagrupamiento político de sus fuerzas adictas, Perón apuntó hacia el último bastión donde se habían refugiado los sobrevivientes de la experiencia laborista: la CGT. En noviembre de 1946 Luis Gay, quien fuera el presidente del disuelto partido de los sindicatos, fue electo secretario general de la central obrera. En esta nueva plataforma, Gay pretendió seguir una línea de colaboración con el gobierno pero desde una posición de independencia y ello lo enfrentó bien pronto con Perón. La visita de una delega-

ción de sindicalistas norteamericanos, auspiciada por el propio gobierno, suministró el pretexto para resolver el conflicto. La prensa oficial montó entonces una maliciosa campaña contra Gay, acusándolo de buscar abrir una cuña entre Perón y los trabajadores en combinación con los visitantes extranjeros. En enero de 1947 Gay presentó la renuncia y el resto de la vieja guardia sindical optó por replegarse a sus organizaciones; la insistencia en la autonomía corría el riesgo de dejarlos al margen de los tangibles beneficios de la naciente Argentina peronista. Desde entonces, y conducida por figuras casi sin antecedentes, la CGT se transformó en un agente de las directivas oficiales en el movimiento obrero. La rebeldía solitaria de Cipriano Reyes, ex vicepresidente del Partido Laborista, concluyó en 1948 cuando, acusado de complotar contra Perón en una operación política tramada desde el propio gobierno, fue puesto en prisión, donde permanecería hasta 1955.

Además del Partido Peronista y la CGT, otro pilar fundamental del régimen eran las Fuerzas Armadas. La brecha abierta entre los militares y la oposición democrática en 1945 había permitido a Perón lanzarse a la conquista de la presidencia. Luego de ser elegido por el voto popular procuró presentarse como un hombre de armas con el fin de atraerse la solidaridad de la corporación militar; según Robert Potash, Perón se esforzó por colocar su relación con ésta sobre bases estrictamente institucionales. Si bien se registró una alta participación de los militares en las principales funciones de gobierno, la institución como tal no fue involucrada. Perón se fijó como objetivo la neutralidad del cuerpo de oficiales y para conseguirlo apeló ante todo a la satisfacción de sus demandas profesionales.

Varias disposiciones aumentaron sensiblemente los cargos en los más altos rangos, lo que se tradujo en una duplicación de la cantidad de generales entre 1946 y 1951. Éstos fueron los años de la expansión y modernización de las Fuerzas Armadas, con un aumento en el presupuesto militar que llevó a la Argentina al primer lugar en el ranking de los gastos en defensa de América Latina. Este intercambio político no habría sido posible sin algún grado de identificación de los militares con los principios generales del gobierno de Perón. El nacionalismo, la industrialización y el anticomunismo coincidían con creencias arraigadas en el cuerpo de oficiales. Confinadas a un pa-

pel profesional que les reportó crecientes beneficios, las Fuerzas Armadas se insertaron discretamente en el régimen peronista.

La Iglesia contribuyó asimismo al afianzamiento del nuevo régimen. La opción que hiciera en la víspera de los comicios de 1946 rindió sus frutos. El decreto que implantaba la enseñanza religiosa en las escuelas emitido en 1944 fue convertido en ley en 1947; las partidas del presupuesto con destino a las actividades de culto experimentaron un importante incremento. A esto se sumaron manifestaciones de consideración y respeto por parte de Perón que la eventual victoria de la Unión Democrática hubiera hecho menos probables: la participación oficial en las ceremonias religiosas, la convocatoria a numerosos cuadros católicos a desempeñar cargos públicos, la reiterada invocación a la Doctrina Social de la Iglesia. Estas circunstancias, destaca Lila Caimari en su capítulo "El peronismo y la Iglesia católica", condujeron a la jerarquía eclesiástica a ofrecer un fervoroso apoyo al nuevo régimen. Más tarde, la intervención gubernamental en el campo de la asistencia social y el uso político de la enseñanza debilitaron el entusiasmo de los obispos, que no hallaban tampoco fácil conciliar su respaldo a Perón con sus tradicionales vinculaciones con las clases altas. Sin embargo, durante los primeros años, se abstuvieron de hacer públicas sus reservas, esforzándose por preservar su autonomía y sus ámbitos de acción.

Con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Iglesia, y la adhesión de una masa popular progresivamente encuadrada bajo una conducción centralizada, el nuevo orden tenía un futuro relativamente seguro. No obstante, Perón se propuso reforzar el régimen mediante mecanismos de control burocráticos y represivos. La primera víctima fue la Corte Suprema, que, desde un comienzo, había resistido las reformas laborales de Perón. En septiembre de 1946, el Congreso inició juicio político a sus miembros, llegando a incluir entre las acusaciones el haber reconocido como legítimos a los gobiernos de facto surgidos de los golpes militares de 1930 y 1943. Ocho meses más tarde fueron destituidos, como parte de una purga generalizada del Poder Judicial. Otro reducto de la resistencia en 1945, la Universidad, pasó por un proceso de depuración semejante tras la expulsión de miles de profesores hostiles; las

agrupaciones estudiantiles fueron declaradas fuera de la ley y una nueva legislación suprimió gran parte de las instituciones de la Reforma de 1918. En 1947 los periódicos de la oposición fueron clausurados y comenzó la compra del sistema de radiodifusión nacional por grupos económicos ligados al régimen. La expropiación de uno de los diarios más tradicionales, *La Prensa*, en 1951 y su transferencia a la CGT condujeron prácticamente al monopolio estatal de los medios de comunicación de masas. Quienes sobrevivieron con cierta independencia se ocuparon de no desafiar en forma ostensible el tono uniforme y proselitista utilizado por la Secretaría de Prensa y Difusión para celebrar las políticas de régimen peronista.

Ante esta progresiva supresión de las libertades públicas, la oposición política quedó limitada a las tribunas parlamentarias. En ellas el margen de votos que dio la victoria a la coalición peronista se transformó, por obra de la legislación electoral, en una abrumadora mayoría gubernamental. La aplicación de la Ley Sáenz Peña, que adjudicaba los dos tercios de los cargos electivos a la mayoría y el tercio restante a la primera minoría, otorgó a los peronistas no sólo el control del Poder Ejecutivo sino un amplio dominio en la Cámara baja, con 109 diputados sobre 158. Además, 13 de los 14 gobiernos provinciales fueron a los peronistas y con ellos el control del Senado. En sus cargos del Congreso, el puñado de legisladores de la oposición mantuvo el mismo espíritu belicoso de la reciente confrontación electoral frente a un gobierno que, lejos de desmentir, ratificaba con creces sus peores temores acerca de la salud de las libertades públicas. Para algunos de ellos el precio a pagar fueron el juicio por desacato, la pérdida de los fueros, la prisión; para los demás fue el silenciamiento bajo el peso de las mayorías oficialistas.

Garantizada su legitimidad en el plano interno, el nuevo gobierno buscó una reaproximación a los Estados Unidos, que surgía de la guerra como la potencia hegemónica. A pocas semanas de asumir, Perón envió al Parlamento las Actas de Chapultepec para ser ratificadas y oficializar el reingreso de la Argentina a la comunidad interamericana. En febrero y marzo de 1945, los países del continente se habían reunido en México y acordado suscribir un tratado para prevenir y reprimir la agresión contra cualquiera de ellos. El tratado era parte de las

operaciones diplomáticas que siguieron a los acuerdos de Potsdam entre las grandes potencias. Bajo la guía de los Estados Unidos, el continente americano se alineaba en la nueva división política del orden mundial.

Con el envío de las Actas de Chapultepec al Congreso, Perón procuró dar una señal de su disposición al acuerdo, aunque se permitió simultáneamente un gesto de independencia al reanudar relaciones con la Unión Soviética, interrumpidas desde 1917. A esto le siguió la deportación de un número de espías nazis y la adquisición por el Estado de empresas de propiedad alemana y japonesa. En junio de 1947 el presidente Truman anunció su satisfacción con la conducta de la Argentina, despejando la vía a la convocatoria de la conferencia de Río en septiembre de 1947. En ella, el canciller de Perón suscribió el tratado de seguridad hemisférica y el premio fue el levantamiento del embargo de armas impuesto por Estados Unidos en los años previos.

Estas iniciativas de Perón coexistieron con la proclamación de la Tercera Posición en el plano de la política internacional. En sus formulaciones habituales, ésta se condensaba en una doble demanda: el respeto por la autodeterminación de los Estados nacionales y la aspiración a un orden económico mundial más equitativo. Como ha indicado José Paradiso en su capítulo "Vicisitudes de una política exterior independiente", la variante argentina del tercerismo en auge entre los países que emergían del proceso de descolonización de la posguerra no llegaba hasta abogar por la neutralidad en el conflicto que dividía al mundo. Perón subrayó más de una vez que el país no sería equidistante frente a la amenaza comunista. Empero, los matices de la Tercera Posición se correspondían mal con las simplificaciones propias de la Guerra Fría y fueron una fuente permanente de tensiones en sus relaciones con los Estados Unidos.

Al final de la guerra, la Argentina se encontró libre de deuda externa, con importantes reservas de divisas, una gran demanda y altos precios para sus exportaciones de alimentos y una industria en crecimiento. En este marco, la administración peronista realizó sus decisiones de política económica. Como destacan Pablo Gerchunoff y Damián Antúnez en el capítulo "De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo", tres fueron

los ingredientes del programa implementado en 1946: la expansión del gasto público, otorgando al Estado un papel más central en la producción y en los servicios públicos a través de una política de nacionalizaciones, la distribución más equitativa del ingreso nacional y, finalmente, el paulatino montaje de un régimen de incentivos que premió las actividades orientadas al mercado interno y desestimuló la producción destinada a los mercados internacionales. Esta combinación de intervencionismo estatal, justicia social y sustitución de importaciones no fue una experiencia aislada en la América Latina de los años cuarenta. Es verdad que en la Argentina, caracterizada por un mercado de trabajo sin grandes bolsones de marginalidad social y por un movimiento sindical muy activo, el sesgo igualitarista fue más marcado que en otros países del área. Pero el papel protagónico del sector público en la acumulación de capital y el creciente énfasis en el mercado interno constituyeron, casi sin excepciones, el correlato regional al keynesianismo en boga en los países centrales de Occidente.

La economía peronista no fue, ciertamente, el resultado de una estrategia exclusivamente económica. Los apoyos sociales de Perón condicionaron sus opciones en materia económica. Entre el proyecto industrialista para la defensa nacional, asentado sobre las industrias básicas, propiciado por oficiales del Ejército durante la guerra, y la continuidad de la industrialización liviana, Perón escogió esta última alternativa, que era más congruente con una distribución progresiva del ingreso. Fue revelador que el programa siderúrgico del general Manuel Savio terminara siendo postergado y que se confiara a Miguel Miranda, un industrial de reciente fortuna, el timón de la economía, al frente del Banco Central nacionalizado y del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI). La opción hecha en favor de la industria existente se completó con otra, asegurarle un sostenido nivel de actividad vía la expansión de la demanda interna. El instrumento escogido para ello fue el aumento de los salarios nominales. Convertidos, a su turno, en aumentos de salarios reales, condujeron a un rápido incremento del consumo popular que impulsó la producción industrial. En este contexto, el optimismo de la comunidad de negocios superó la aprensión que generaban la audaz política de ingresos y el poder sindical, pavimentando el camino a una

prolongada euforia bursátil y a un auge inversionista de los propios empresarios privados.

La política económica del peronismo, con sus rasgos distribucionistas y nacionalistas, fue posible gracias a la combinación de un conjunto de circunstancias favorables, que no volverían a repetirse. Las reservas de fondos externos acumulados durante la guerra —una gran proporción de los cuales era inconvertible— permitieron afrontar la nacionalización de los ferrocarriles, teléfonos, gas, marina mercante y aerolíneas comerciales. Más importante todavía, después de casi dos décadas de crisis comercial, la abrupta mejoría en los precios de las exportaciones agrícolas en 1945 —y, consecuentemente, en los términos de intercambio— facilitó el financiamiento en divisas de la economía peronista. La creación del IAPI, organismo que tuvo el virtual monopolio del comercio exterior, proveyó al gobierno de un acceso indirecto a esa fuente de recursos. Para tal fin, compraba los granos a los productores locales a un precio fijado por las autoridades y vendía en los mercados internacionales a un precio más alto. Los recursos movilizados por el IAPI, junto al ahorro forzoso proveniente de un régimen de jubilaciones con fuerte superávit en sus orígenes y una amplia batería de impuestos directos e indirectos que recayeron sobre los estratos de mayores ingresos, fueron conformando la imagen bastante veraz de un Estado rico y generoso.

Así, la excepcional evolución del mercado internacional de posguerra, los acrecidos ingresos fiscales y la masificación del ahorro institucionalizado fueron las condiciones de posibilidad de la economía peronista, plasmada en el Primer Plan Quinquenal de 1947. Este esquema, basado en el poder de compra del Estado y en los salarios altos y que, por estar orientado hacia el mercado interno, pudo desentenderse de sus inevitables costos en términos de eficiencia y competitividad, apenas duró tres años. Pero estos años fueron los que marcaron en la memoria colectiva el perfil duradero de la década peronista. Y, explicablemente, porque en ellos dio comienzo una nueva edición de la experiencia colectiva de movilidad social que el país conociera a principios del siglo.

Para la masa de los migrantes provenientes del interior la incorporación al trabajo de mercado urbano implicó de hecho una elevación social ya que ponía a su alcance ocupaciones

con salarios superiores a los que recibían en sus lugares de origen. Los trabajadores de más antigua residencia urbana, por su parte, con más recursos y contactos, pudieron subir un escalón más en la pirámide social. Ello ocurrió sea ascendiendo en sus empresas a puestos mejor remunerados, sea instalándose por su cuenta para atender la mayor demanda de servicios personales de la economía urbana. Un rasgo de los años peronistas fue el fuerte crecimiento de los asalariados de cuello y corbata impulsado por la expansión de la administración pública y las burocracias de las empresas privadas. En una medida importante, ésta fue una oportunidad de movilidad para hijos de familias obreras a los que sus padres habían conseguido mandar a la escuela. Los contingentes de las clases medias experimentaron también un incremento con el aporte de los nuevos pequeños y medianos propietarios de la industria, los servicios, el comercio, crecidos al abrigo del desarrollo del mercado interno y del consumo masivo. En el marco de una sociedad otra vez más móvil, los sectores trabajadores vieron ampliarse sus horizontes de vida más allá de sus necesidades inmediatas. Para las clases medias se abrieron nuevas fuentes de confort y de expectativas; fue significativo que a pesar de que la propaganda oficial pusiera el acento sobre la enseñanza primaria haya sido la matrícula de la enseñanza secundaria la que más aumentó durante este período.

La inserción de las fuerzas económicas en el escenario político resultante de los comicios de 1946 mostró al principio un singular contraste. Los grandes propietarios del campo, nucleados en la Sociedad Rural, escogieron pragmáticamente una política de acomodación. Perón facilitó las cosas designando a uno de ellos al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Asimismo les hizo saber que las promesas de una reforma agraria hechas durante la campaña electoral serían archivadas. Distinta fue la actitud de los empresarios industriales, que recibieron al gobierno de Perón nombrando en la Unión Industrial una conducción anticolaboracionista. El costo de ese atrevimiento fue la intervención de su organización. Sin embargo, poco a poco también ellos fueron reconciliándose con la nueva situación al comprobar que la política oficial no pasaba por la confiscación de los beneficios de la favorable coyuntura económica. Las diferencias entre las grandes y las

pequeñas y medianas empresas, entre los capitales radicados en Buenos Aires y su periferia y los que tenían mayor peso en el interior —que son el eje del capítulo de James Brennan "El empresariado: la política de cohabitación y oposición"— mantuvieron, no obstante, a los industriales en un estado de pugna y fraccionamiento que se reflejó en el carácter cambiante de sus organizaciones.

Al margen de sus diferencias, unos y otros debieron convivir con los profundos cambios que se operaban en el mundo del trabajo. Con el apoyo oficial los sindicatos continuaron reclutando nuevos afiliados. En la mayoría de las actividades de la economía urbana la tasa de sindicalización se ubicó entre el 50 y el 70%. La mayor implantación de los sindicatos promovió la extensión de la cobertura de las negociaciones colectivas sobre el mercado de trabajo. Los nuevos convenios comportaron una verdadera redistribución del poder en la empresas al incorporar garantías y ventajas a los trabajadores que recortaban la autoridad patronal. En forma paralela, el Congreso dio fuerza de ley a los beneficios otorgados por decreto durante la Revolución de Junio: el aguinaldo anual, la generalización de las vacaciones pagas, la inclusión de los asalariados de la industria y el comercio en el sistema jubilatorio, las indemnizaciones por despido y accidentes de trabajo. Estos mayores niveles de protección laboral cobraron vigencia efectiva al compás de la ola de movimientos reivindicativos que acompañó el ascenso del peronismo al poder. Las medidas de fuerza no estuvieron dirigidas contra el gobierno sino contra empresarios que resistían los cambios. En estos primeros años —señala Louise Doyon en su capítulo "La formación del sindicalismo peronista"— la huelga fue el instrumento mediante el cual los trabajadores buscaron replicar en el terreno de las relaciones laborales la victoria alcanzada en las urnas.

Con la consigna de la justicia social, el gobierno prosiguió ensanchando los cambios en el nivel de vida de las clases trabajadoras mediante las políticas de un incipiente Estado Benefactor: el congelamiento de los alquileres, la fijación de salarios mínimos, el establecimiento de precios máximos a los artículos de consumo popular, los créditos y los planes de vivienda, las mejoras en la oferta de salud pública, los programas de turismo social, la construcción de escuelas y colegios,

la organización del sistema de seguridad social. Junto a estas políticas de democratización del bienestar, que son examinadas por Juan C. Torre y Elisa Pastoriza en el capítulo "La democratización del bienestar", desde el vértice del gobierno se otorgó una dignidad hasta entonces desconocida a los valores y prácticas del mundo del trabajo. Por los derechos que consagraba, por los bienes que ponía a su disposición, la justicia social condujo a una mayor integración sociopolítica de los trabajadores. Así, con el paso del tiempo, las masas que habían entrado a la arena política como los descamisados, definiéndose a partir de su exclusión, pasaron a identificarse como los trabajadores, subrayando, de este modo, el reconocimiento alcanzado en una sociedad ahora más igualitaria.

Esa identificación fue indisociable de su condición peronista. El vínculo establecido entre Perón y los trabajadores el 17 de octubre resultó ser sólido y duradero. Ello se puso de manifiesto en las pruebas por las que habría de pasar en el futuro, cuando el régimen peronista, urgido por los problemas económicos, puso un freno a las demandas de los trabajadores; también cuando, llevado por su celo autoritario, inició la supresión sistemática de las expresiones de independencia que surgían desde las filas del sindicalismo. En estas ocasiones, la oposición política a Perón aguardó esperanzada que se abriera una brecha entre él y sus apoyos obreros. Sin embargo, las expresiones de descontento, los conatos de rebelión, no avanzaron hasta poner en cuestión esa identidad política primordial y constitutiva del movimiento peronista.

La lealtad a Perón se hizo extensiva a Evita. Después de 1946, ésta emergió del segundo plano y fue ganando responsabilidades que desbordaron bien pronto el lugar pasivo tradicionalmente asignado a las esposas de los presidentes. Sus mayores responsabilidades se dieron en el marco de una división de tareas en la estructura del poder peronista. Perón se concentró en las actividades de gobierno; Evita tomó a su cargo la activación política del movimiento oficial, a cuyo servicio puso una oratoria vibrante y combativa que enfervorizaba a sus seguidores y provocaba el temor y el odio entre sus adversarios. Su intervención fue visible primero desde las oficinas del Ministerio de Trabajo, donde se instaló para recibir a las delegaciones obreras, escuchar sus demandas y prometerles hacerlas lle-

"¡Cuánta gente en la playa! Parecen hormiguitas. Eladio pregunta:
—Papá, ¿cómo puede venir tanta gente? ¿Nadie trabaja?
El padre le contesta:
—Sí, todos trabajamos. Pero ahora, desde que gobierna el general Perón, todos los obreros y empleados tienen derecho a sus vacaciones. Estos hoteles que ves son para que el obrero gaste menos. Aquí descansa. Luego volverá a su trabajo para producir más.
—¿Y quién atiende estos hoteles, papá?
—La Fundación Eva Perón."

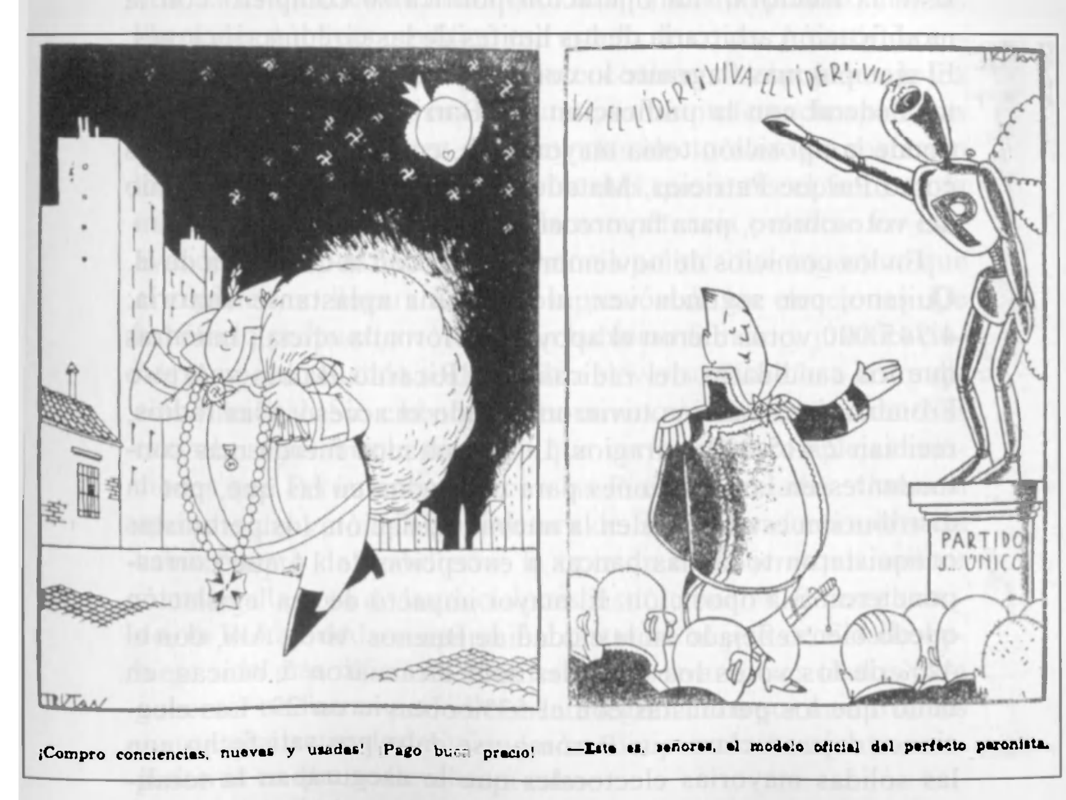
Libro de lectura para Primer Grado Superior *Alegría*

gar a Perón. En su papel de intermediaria entre el líder y las masas, distribuyó también premios y castigos a los dirigentes sindicales, iniciándolos en la severa disciplina del nuevo régimen. Luego se ocupó de extender la justicia social a los sectores más marginales de la población, el subproletariado urbano y los sectores populares de las provincias menos desarrolladas, para los cuales el impacto de las reformas laborales tenía una significación muy limitada. Con ese fin creó una vasta red de asistencia social a través de la Fundación Eva Perón, sostenida con donaciones no siempre voluntarias de empresas, fondos públicos y aportes regulares de los trabajadores, que tuvo una gran resonancia entre sus beneficiarios. La participación en la campaña por el derecho al voto de la mujer, sancionado en 1947, fue otra de las empresas de Evita. Marysa Navarro ha prestado especial atención a ella en su capítulo "Evita", iluminando los matices del compromiso de Evita para con la condición femenina y la política.

La prosperidad económica, el apoyo popular y el autoritarismo contribuyeron a que el régimen se desenvolviera sin tropiezos. Era previsible que buscara su consolidación y ésa fue la intención que inspiró la reforma constitucional de 1949. Una Asamblea Constituyente en la que los partidarios de Perón eran cómoda mayoría introdujo modificaciones en el viejo texto liberal de 1853. A él incorporó una larga enumeración de derechos sociales; las novedades operativas incluyeron: el voto directo para presidente y vice, suprimiendo el Colegio

Electoral, y para senadores, sin el trámite previo de las legislaturas provinciales; la ampliación del mandato de los diputados y senadores a seis años y su renovación parcial cada tres; el fortalecimiento del Ejecutivo por medio de la facultad del veto parcial. Un artículo extraído del modelo mexicano consagró la propiedad estatal sobre los recursos energéticos. En la coyuntura, la modificación políticamente más significativa fue la supresión de la cláusula que prohibía la reelección presidencial inmediata.

Una vez aprobada la reforma se inició una campaña destinada a la reelección de Perón en 1951. La central sindical proclamó a Evita para el segundo puesto de la fórmula presidencial. Esta iniciativa sacó de su discreto segundo plano a los jefes militares, quienes aconsejaron a Perón su rechazo. El presidente se inclinó ante el veto militar y Evita anunció luego que renunciaba a su candidatura. No obstante, el episodio sirvió de pretexto para una conjura militar lanzada por un pequeño gru-



¡Compro conciencias, nuevas y usadas! Pago buen precio! —Este es, señores, el modelo oficial del perfecto peronista.

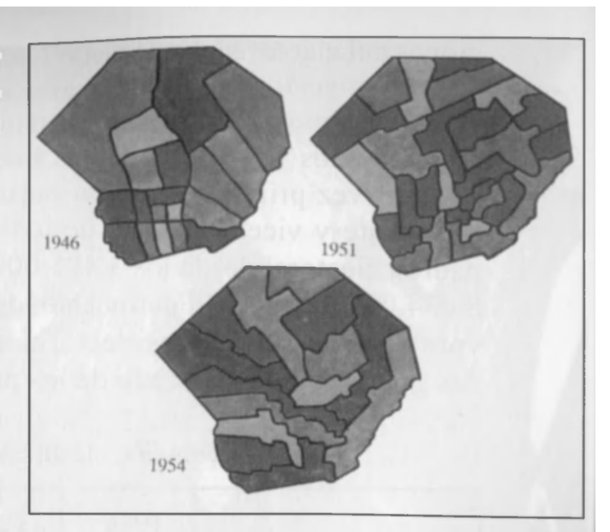
Perón visto por el famoso caricaturista Tristán, del periódico La Vanguardia.

po de oficiales en combinación con políticos opositores. El alzamiento del 28 de septiembre de 1951, mal organizado, a destiempo, sin respaldo alguno, fue fácilmente sofocado. Perón reaccionó imponiendo el estado de guerra interno y con ese instrumento procedió a depurar los cuadros de oficiales y a limitar la acción de los partidos de oposición en la campaña electoral.

En la preparación de los comicios tomó otras precauciones adicionales. Siguiendo instrucciones de la presidencia, el Congreso sancionó una nueva ley electoral, que sustituía el tradicional sistema de la lista incompleta de la Ley Sáenz Peña por el de circunscripciones uninominales. Los distritos electorales del país fueron divididos en tantas circunscripciones como diputados se eligieran. En cada una de ellas se ponía en disputa una banca de diputado y el partido que obtenía el mayor número de votos se quedaba con ella. Utilizado en 1904 y luego suprimido, este mecanismo acentuaba el sesgo mayoritario del sistema electoral. La operación política se completó con la modificación arbitraria de los límites de las circunscripciones. El ejemplo más flagrante lo constituyó el rediseño de la Capital Federal con la unificación del Barrio Norte y el Centro, donde la oposición tenía mayor peso, con otros más distantes como Parque Patricios, Mataderos, Barracas, con predominio del voto obrero, para favorecer al oficialismo.

En los comicios de noviembre Perón, con la compañía de H. Quijano, por segunda vez, alcanzó una aplastante victoria: 4.745.000 votos dieron el apoyo a la fórmula oficial, mientras que los candidatos del radicalismo, Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, que también tuvieron vedado el acceso a las radios, recibían 2.415.000 sufragios. Los resultados fueron más contundentes en las elecciones para diputados en las que, por la distribución establecida en la nueva legislación, los peronistas conquistaron todas las bancas a excepción de 14 que correspondieron a la oposición. El mayor impacto de esa legislación quedó bien reflejado en la ciudad de Buenos Aires. Allí, con el 42% de los votos los radicales sólo alcanzaron 5 bancas, en tanto que los peronistas con el 53% obtuvieron 23. Las elecciones dejaron claro que Perón no se daba por satisfecho con las sólidas mayorías electorales que le aseguraban la totalidad del Senado y los dos tercios de la Cámara de Diputados;

además, aspiraba a anular toda disidencia, reduciendo al mínimo la presencia opositora en el único ámbito donde podía expresarse.



Trazado de las circunscripciones electorales de 1946, 1951 y 1954.

Terminaba, así, la transición en la naturaleza de la competencia política que venía incubándose en los años previos. El peronismo dejó de ser un partido cuyo predominio electoral era el resultado de su mejor oferta política en la contienda con los partidos opositores por el voto de los ciudadanos. El sistemático atrofiamiento del pluralismo político y de las libertades públicas modificó ese estado de cosas. A partir de entonces, los partidos opositores se encontraron despojados de los recursos elementales para disputar por las preferencias políticas del electorado. A su vez, las mayorías electorales que sostenían los triunfos del peronismo fueron más que antes el fruto de la manipulación de las reglas de la competencia política. En este avance arrollador hacia la hegemonía política fue sugestivo que el régimen no llegara hasta la supresión de las elecciones. De habérselo propuesto votos no le hubieran faltado y justificaciones tampoco, cuando se disponía a elevar su filosofía a la condición nacional. Sin embargo, este camino no fue explorado. Las razones seguramente tuvieron que ver con las complejas relaciones que Perón mantenía con las Fuerzas Armadas. Como el episodio del veto a la candidatura de Evita a la vicepresidencia había puesto de manifiesto, la opinión de la jerarquía militar contaba a la hora de las decisiones institucionales. En este sentido, la lealtad de la corporación castrense al jefe de Estado hubiera sido más difícil de obtener y conservar si sus títulos para gobernar no fueran periódicamente legitimados por medio de las consultas electorales, aun en las condiciones escasamente competitivas en que se llevaban a cabo.

Las elecciones de 1951 mostraron asimismo las transforma-

ciones del electorado peronista. Dichas elecciones tuvieron lugar con un padrón sustancialmente ampliado por la sanción del voto femenino. Al aporte de las mujeres se agregó la incorporación de los residentes de los nueve territorios nacionales, que por vez primera pudieron participar en las elecciones de presidente y vice. La suma de los nuevos inscriptos llevó el padrón electoral desde los 3.405.000 registrados en 1946 a los 8.634.000 de 1951. El peronismo logró captar una porción mayoritaria de los flamantes electores al tiempo que abrió profundas grietas en el electorado de los partidos tradicionales.

Evolución electoral 1946-1954

	1946	1948	1951	1954
Inscriptos en padrón electoral (en miles)	3.405	3.794	8.634	8.616
Votantes (en miles)	2.840	2.816	7.594	7.451
Votos peronistas (en miles)	1.488	1.728	4.745	4.659
Votos peronistas (en %)	52.4	61,3	62,4	62,5

Fuente: Cantón, Darío: *Materiales para el estudio de la sociología política en la Argentina*, Edit. del Instituto. Buenos Aires. 1968.

En los resultados finales, el voto peronista femenino superó en todos los distritos al voto peronista masculino. A la vez, en las provincias más periféricas las victorias del oficialismo se consiguieron con altos porcentajes: 81% en Chaco, 77% en Jujuy. En las zonas más centrales su predominio fue relativamente más reducido. Ése fue el caso de la Capital Federal ya indicado, donde la mayoría peronista no pasó del 53%, y de Córdoba en la que alcanzó el 55%. Este contraste entre regiones fue la contrapartida de los matices que presentaba la composición del electorado peronista. En las áreas urbanas de la Argentina moderna el peronismo emergió de los comicios como la expresión política de las clases trabajadoras; su capacidad de penetración en otros sectores sociales fue más limitada y le sumó sólo un caudal marginal respecto del fuerte y esta-



Segunda asunción de Perón a la Presidencia de la Nación, 1952.

ble componente de los votos de obreros y empleados. En las áreas menos desarrolladas del interior el electorado peronista se reclutó a partir de todos los estratos sociales, adquiriendo una fisonomía marcadamente policlasista. Aquí el control político tendió a estar en manos de fracciones de las clases altas locales, en línea con la experiencia del viejo conservadurismo popular. Entre tanto, en los centros más urbanos y modernos se imponía la gravitación de los trabajadores organizados dentro del formato original de Partido Laborista. La articulación de estas dos constelaciones sociopolíticas bajo un mismo liderazgo consolidó con rasgos definitivos la fortaleza de la coalición peronista.

LA SEGUNDA PRESIDENCIA

Al votar en una proporción de dos a uno para que Perón continuara con su mandato, el electorado autorizó a éste a avanzar en la peronización de las instituciones. En 1952, el Congreso,

donde los 44 diputados de la oposición de 1946 habían quedado reducidos a 14, convirtió por medio de una ley la doctrina peronista —el justicialismo— en doctrina nacional, cuya matriz ideológica Carlos Altamirano reconstruye en el capítulo "Ideologías políticas y debate cívico". Esta "nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular y fundamentalmente cristiana y humanista", tenía "por finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación mediante la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política, armonizando los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad". La consagración del peronismo como único movimiento nacional eliminó todo vestigio de pluralismo en la vida política: las otras expresiones partidarias fueron relegadas a una existencia casi clandestina, la afiliación al partido oficial pasó a ser requisito para el desempeño de car-

Las Veinte Verdades del Justicialismo

1- La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.

2- El justicialismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y, por lo tanto, no es justicialista.

3- El justicialismo trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un hombre o caudillo, lo es solo de nombre.

4- No existe para el justicialismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan.

5- En la Nueva Argentina el trabajo es un derecho, que crea la dignidad del hombre, y es un deber porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume.

6- Para un justicialista no puede haber nada mejor que otro justicialista.

7- Ningún justicialista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un justicialista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca.

8- En la acción política la escala de valores de todo justicialista es la siguiente: primero, la Patria, después el movimiento, y luego los hombres.

9- La política no es para nosotros un fin, si no sólo el medio para el bien de la Patria que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional.

10- Los dos brazos del justicialismo son la justicia y la ayuda social.

gos en la administración, las imágenes de Perón y Evita se multiplicaron en los libros de lectura de la escuela primaria y en los sitios más diversos del espacio público.

Esta presión unificadora venía acompañada por la retórica propia de una tentativa fundacional. En ella, el advenimiento del peronismo era el acontecimiento desencadenante de un recomienzo de la historia. A un lado quedaba el pasado ominoso, hecho de pobreza, exclusión, inseguridad; al otro se desplegaba el presente radiante de un país en paz, próspero y más justo. En el marco de esta Nueva Argentina no había un lugar reconocido para el conflicto y todo debía ser la expresión de la concordia social por fin y definitivamente alcanzada. Sus consecuencias fueron visibles en la producción cultural dirigida a públicos masivos, que estuvo dominada por un tono pasatista y superficial, especialmente en el cine. Cuando por los intersti-

---

Con ellos damos un abrazo de justicia y amor.

11- El justicialismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes pero no mártires.

12- En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños.

13- Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social: el Justicialismo.

14- El justicialismo es una nueva filosofía de vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humana.

15- Como doctrina política el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad.

16- Como doctrina económica el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social.

17- Como doctrina social el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social.

18- Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.

19- Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre.

20- En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo.

Leídas por Perón el 17 de octubre de 1950, desde los balcones de la Casa de Gobierno.

cios del aparato de vigilancia gubernamental se colaba alguna obra que ofreciera una visión más crítica de la realidad, aunque ésta fuera una realidad distante como la evocada en 1952 por la película *Las aguas bajan turbias*, del director Hugo del Carril, un hombre del peronismo, la censura se ocupaba de silenciarla. En otro ejemplo, los historiadores de la escuela revisionista, entre los que se contaban partidarios del gobierno, no consiguieron el auspicio oficial para llevar su debate con la tradición liberal a la audiencia más amplia de la enseñanza pública. Perón vio en ellos la fuente de una división innecesaria e inconveniente y debieron continuar su prédica en los márgenes, en una existencia casi tan periférica como la de los círculos de intelectuales y literatos antiperonistas. Como destaca Silvia Sigal, más que acallar las manifestaciones disidentes en el terreno cultural, el régimen puso especial cuidado en que fueran políticamente inaudibles. Poco importaba que en los grandes actos de masas la voz airada de Perón o de Evita condenando a ese treinta por ciento del electorado tercamente opositor desmintiera la imagen oficial de una sociedad armónica. En verdad, el mismo carácter minoritario de "la contra" —tal la palabra utilizada para nombrarlo— era una prueba más de la pacífica felicidad que debía reinar en la Argentina peronista.

Esa preocupación por la paz social presidió la reorganización de las relaciones entre el Estado y los intereses sociales. Anticipado una y otra vez por Perón desde que surgiera a la vida política, el objetivo era la creación de un orden capaz de armonizar las exigencias legítimas de los sectores sociales y de neutralizar los efectos desestabilizadores de las luchas de clases. Para ello el instrumento era la "Comunidad Organizada", en la cual los diversos grupos de interés, previamente organizados, pudiesen dirimir sus diferencias con la supervisión del Estado. Este proyecto de cuño corporativista empezó a tomar forma en 1952 a través de pasos sucesivos. A la CGT se agregó la Confederación General Económica, la nueva asociación de los empresarios, y después la Confederación General de Profesionales, la Confederación General Universitaria y la Unión de Estudiantes Secundarios.

Las motivaciones ideológicas no eran las únicas razones que impulsaron estas iniciativas, que tuvieron desigual implemen-

tación. En forma congruente con las transformaciones que introduciría en la agenda económica de su segunda presidencia, Perón también aspiraba a construir un sistema institucional que estuviera menos centrado en sus apoyos populares y que, en consecuencia, le devolviera al Estado su papel de árbitro. A estos cambios se sucedieron otros que —como muestra Robert Potash— alteraron el lugar ocupado por las Fuerzas Armadas. A partir de 1952 fueron más abiertas las tentativas de reemplazar la subordinación constitucional de las Fuerzas Armadas al jefe de Estado por la lealtad al liderazgo de Perón: la doctrina justicialista fue incorporada a los programas de las escuelas militares, las promociones dentro de la corporación premiaron más la fidelidad individual que la competencia profesional. La cúpula militar se inclinó ante las nuevas exigencias, pero un malestar creciente cundió particularmente en los cuerpos intermedios, generando en sus filas el terreno fértil para las actividades conspirativas. Esta reorientación de los militares respecto del peronismo era parte de un proceso más amplio.

Por sus orígenes y sus relaciones familiares, los militares compartían de cerca la ansiedad y también la intolerancia con que las clases medias más antiguas y establecidas acompañaban los cambios sociales y políticos en curso. Hasta ellas habían llegado igualmente los beneficios de la bonanza económica y no eran las destinatarias de los ataques a "la oligarquía", el blanco predilecto de la retórica política peronista. Todo ello no bastó, sin embargo, para disminuir su rechazo a la abrumadora presencia de las masas obreras en la vida pública, a la atmósfera de forzado conformismo impuesta por los aparatos de propaganda oficial, al culto de la personalidad que coronaba la marcha del régimen. Ese rechazo hizo del antiperonismo una reacción política, pero también social y cultural, y sirvió de fermento a la gestación de un movimiento de desobediencia civil, al principio subrepticio y hecho de pequeños y simbólicos gestos de rebeldía. Al igual que en 1945, ese movimiento se desenvolvió por fuera de los partidos opositores, que subsistían con dificultades en la periferia de la vida política.

Los socialistas, desprovistos súbitamente de sus apoyos obreros, mantuvieron sin cambio su condena al nuevo fenómeno político surgido del 17 de octubre. Para su núcleo dirigente, más que algo nuevo, el peronismo era la reencarnación de la

vieja hostilidad de la cultura política criolla a los ideales de la razón y la libertad. Desde su perspectiva, detrás de Perón y sus masas se recortaba inconfundible el perfil de Juan Manuel de Rosas y las suyas. Por consiguiente, no se mostraron dispuestos a escuchar a los pocos socialistas que reclamaban una postura un poco más comprensiva. Tampoco lo hicieron los jefes del Partido Comunista frente a demandas semejantes de grupos aún más reducidos de su militancia sindical. En 1951 y en 1952 en uno y otro partido se registraron intentos aislados de acercamiento al movimiento oficial que terminaron con la expulsión de sus promotores. Por su parte, los conservadores, después de las deserciones de los primeros tiempos, se alinearon detrás de una línea de oposición frontal. La crisis posterior a 1946 fue más intensa dentro del radicalismo. Una vez conocidos los resultados electorales, la corriente intransigente, la minoría en el partido, criticó a sus autoridades por haber privilegiado en exceso las consignas antifascistas, entregando a Perón el monopolio de las banderas reformistas. Este ajuste de cuentas fue seguido luego por un esfuerzo de renovación programática, que le dio al radicalismo una plataforma de corte nacionalista popular, y por una movilización exitosa por el control del partido. Los integrantes de la fórmula presidencial de 1952 fueron dos figuras de la corriente intransigente. Desde la conducción de la UCR se pronunciaron por la lucha a través de las instituciones, no obstante las restricciones puestas por el régimen, en el intento por conformar una oposición que no se confundiera con los reflejos socialmente conservadores del antiperonismo. Sus adversarios, la corriente unionista, ahora minoritaria y más en sintonía con ese estado de opinión prevaleciente en las clases medias y altas, optaron por la política de ruptura mediante el aliento a la resistencia clandestina y al golpe militar. Con sus fuerzas desunidas, el radicalismo quedó, empero, sumergido en el enfrentamiento faccioso que dividía al país en dos bloques antagónicos y excluyentes, impregnando de una violencia todavía sólo simbólica la convivencia entre los argentinos.

Al tiempo que el país se deslizaba hacia la polarización política y social, el 26 de julio de 1952, murió Evita, a los 33 años, víctima del cáncer. Con ella desaparecía quien mejor representaba lo que el movimiento peronista significaba para los



Ricardo Balbín dirige la palabra en un acto en 1951.

sectores populares, pero también cuanto tenía de aborrecible para sus adversarios. Su ausencia gravitaría sobre el desenvolvimiento futuro del régimen. Al perder la figura que mantenía vivo el activismo original y sus consignas, éste apareció más que antes exhibiendo los vicios propios de un orden autoritario seguro de sí mismo. Para entonces, su personal político había experimentado significativos cambios. Una buena parte de los hombres que rodearon a Perón en los comienzos de su gestión ya no estaba a su lado, víctima de celos políticos y de intrigas de palacio. Entre ellos, Domingo Mercante, su lugarteniente en los tiempos de la Secretaría de Trabajo y luego gobernador de la provincia de Buenos Aires; Juan Atilio Bramuglia, que fuera su primer Canciller; José Miguel Figuerola, abogado de origen español con un papel destacado en la elaboración de la legislación laboral y en los trabajos de la Comisión Nacional de Posguerra y a partir de 1946 en la Secretaría Técnica de la Presidencia; Ricardo C. Guardo, el primer presidente de la Cámara de Diputados; Arturo Sampay, el redactor de la Constitución de 1949. Quienes ocupaban ahora los altos cargos buro-

cráticos eran típicamente figuras de menor brillo que debían sus posiciones al conformismo obsecuente con el que secundaban las demandas de lealtad cada vez más exigentes hechas desde el vértice del poder. Con ese comportamiento y la impunidad con la que se sabían protegidos, ellos fueron en gran medida responsables de los excesos autoritarios, los escándalos, las manifestaciones extravagantes de verticalismo que caracterizaron este tramo del régimen peronista.

A comienzos de 1953 el círculo íntimo de Perón se vio envuelto en un sonado caso de corrupción. Las sospechas convergieron sobre su secretario privado, Juan Duarte, hermano de Evita. Después que el gobierno ordenara una investigación a fondo Duarte fue encontrado muerto, lo que provocó un escándalo público no obstante la censura oficial. La CGT convocó entonces a una concentración popular para solidarizarse con Perón. El acto del 15 de abril habría de tener un dramático final al estallar dos bombas, con un saldo de siete muertos y casi un centenar de heridos. Esa noche, grupos de manifestantes incendiaron y redujeron a escombros las sedes del Jockey Club y del Partido Socialista, y provocaron daños en los locales centrales del Partido Demócrata y la Unión Cívica Radical. En los días que siguieron al sanguinario atentado terrorista —obra de comandos antiperonistas integrados por jóvenes universitarios y profesionales— la policía realizó una amplia e indiscriminada detención de dirigentes y personalidades opositoras; entre los casi cuatro mil arrestados se contaron desde Alfredo Palacios hasta Victoria Ocampo. Meses más tarde, el régimen pareció advertir la necesidad de disipar las tensiones y aceptó liberar a los presos en una negociación con representantes de partidos opositores. A fines de 1953 el Congreso aprobó una ley de amnistía y con ella la mayoría de los detenidos recuperó la libertad. Estos gestos de descompresión política sirvieron para crear un clima más propicio a la búsqueda de un mejoramiento de las relaciones con los Estados Unidos.

Este objetivo era parte de las nuevas prioridades del programa económico, obtener capitales y contar con asistencia técnica a los efectos de impulsar la modernización industrial. La reciente elección del presidente republicano Dwight D. Eisenhower había abierto la posibilidad de colocar los vínculos entre los dos países sobre bases más pragmáticas y menos

principistas debido a su orientación favorable al mundo de los negocios. La visita a Buenos Aires en el mes de julio de 1953 de Milton Eisenhower, el hermano del mandatario norteamericano, en gira por América Latina, facilitó ese entendimiento y dio comienzo a un período de distensión luego de los años de fricciones y desencuentros. Ello trajo aparejado un relativo eclipse de la Tercera Posición y una cooperación más estrecha con los Estados Unidos en la arena internacional.

La reorientación de la agenda económica de Perón y sus corolarios en la relación con los Estados Unidos tenían como telón de fondo el fin de la bonanza del comercio exterior que lo acompañara al instalarse en el poder. En 1949 se invirtió el signo favorable de los términos de intercambio. En ese año los precios de las exportaciones del campo se colocaron un 12% por debajo de los de 1948, concluyendo así el pequeño ciclo positivo iniciado en 1945. En esas circunstancias, el gobierno hizo dos apuestas para contornear la desfavorable coyuntura. Primero, especuló con el estallido de una Tercera Guerra Mundial, que sostuviera en alza la demanda de los productos del campo argentino. Pero la guerra de Corea de 1950 quedó confinada al Extremo Oriente. La segunda apuesta fue participar en el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa puesto en marcha en 1947. Tampoco aquí tuvo mejor suerte porque el gobierno norteamericano le adjudicó al país una cuota mínima en el abastecimiento de alimentos debido a la presión de intereses locales y a la subsistencia de las reservas hacia su política exterior.

En este marco estalló la crisis del sector externo, que se trasladó a la actividad industrial nacional, por la dificultad para importar maquinarias y equipos, e impulsó un crecimiento de la inflación. Frente a la emergencia, sostienen Gerchunoff y Antúnez, las autoridades oscilaron entre la continuidad y el cambio. Para una política de desarrollo basada en el liderazgo del sector público y el crédito barato para financiar la expansión del mercado interno, la alternativa de un plan de ajuste comportaba altos costos en términos de empleo y salarios. Por ello las primeras reacciones fueron parciales e inefectivas y condujeron al reemplazo de Miguel Miranda en el timón de la economía. El nuevo equipo, a cargo de Alfredo Gómez Morales, procuró ganar tiempo recortando las importa-

ciones, racionando el crédito y reduciendo los compromisos fiscales.

Una de sus consecuencias fue la sucesión de conflictos entre 1949 y 1951 en las actividades más afectadas por la disminución de subsidios públicos. Éstos no contaron ahora con la benevolencia del gobierno y terminaron con la detención de sus promotores y la intervención de los sindicatos involucrados. Tal fue lo que ocurrió con los obreros de los ingenios azucareros de Tucumán, los trabajadores de los frigoríficos, los bancarios, los gráficos, los ferroviarios. La huelga de estos últimos, a principios de 1951, provocada por las medidas de racionalización de los ferrocarriles recién nacionalizados, tuvo una gran resonancia. No solamente por sus efectos sobre el orden público sino porque se realizó a espaldas de la conducción oficial del sindicato, contó con el apoyo encubierto de grupos opositores y no cedió a los llamados de volver al trabajo hechos por Evita. La reacción gubernamental incluyó la prisión para los dirigentes rebeldes y llegó hasta la movilización militar de los trabajadores. En el contexto de este endurecimiento del clima social, el pico de la crisis habría de alcanzarse en 1951-1952, cuando el déficit del sector externo fue potenciado por las secuelas de dos sequías sucesivas. En el aciago invierno de 1952 y teniendo por marco los funerales de Evita, los argentinos debieron consumir un pan más negro, elaborado con mijo, escaseó la carne y se volvieron frecuentes los cortes de luz.

Fue entonces que el gobierno decidió una nueva estrategia económica, que involucró la revisión de sus prioridades. A partir de ese momento se privilegió la estabilidad por sobre la expansión, la agricultura por sobre la industria, la iniciativa privada y el capital extranjero por sobre el crecimiento del sector público. Con este remozado libreto se pasó a la acción tomando en cuenta, además, los condicionamientos puestos por la composición de la coalición peronista. Así, el recurso a la devaluación fue descartado porque si bien era un medio rápido para corregir la situación externa, su costo era un alza en el precio interno de los alimentos y, por lo tanto, un fuerte golpe a los ingresos de los sectores populares. Descartada la devaluación, el equilibrio externo fue buscado recortando todavía más las importaciones.

El intento por resolver el problema del déficit externo se desenvolvió en paralelo con la lucha contra la inflación. En ambos planos el mensaje oficial apuntó en la misma dirección: había llegado la hora de la austeridad luego del gran aumento del consumo de los primeros años. El llamado a gastar menos procuraba aliviar la situación externa y aquietar las presiones inflacionarias. Con este propósito, el gobierno tomó la iniciativa mediante una batería de restricciones fiscales y monetarias de cuño ortodoxo. El programa de estabilización recurrió, además, a las reservas de la colaboración de clases y promovió una tregua entre empresarios y sindicatos para neutralizar la puja distributiva y sus efectos inflacionarios. Luego de un reajuste general de precios y salarios por decreto, éstos fueron congelados por dos años, y por ese mismo lapso se suspendieron las negociaciones colectivas. Finalmente, en sintonía con su nueva estrategia, el gobierno modificó su política de incentivos con vistas al aumento de las exportaciones del agro. Después de años de ser perjudicados por la política del IAPI, los productores rurales comenzaron a recibir precios más favorables, mayores incluso que los que tenía su producción en el mercado internacional.

Juzgado por sus resultados inmediatos, el plan de ajuste lo-

La hora de la austeridad

"La economía justicialista establece que de la producción del país se satisface primero la necesidad de sus habitantes y solamente se vende lo que sobra; lo que sobra nada más. Claro que aquí los muchachos con esa teoría cada día comen más y consumen más y, como consecuencia, cada día sobra menos. Pero han estado sumergidos, pobrecitos, durante cincuenta años; por eso yo los he dejado que gastaran y que comieran y que derrocharan durante cinco años todo lo que quisieran; se hicieran el guardarropas que no tenían, se compraran las cositas que les gustaban y se divirtieran también; que tomaran una botella cuando tuvieran ganas. [...] pero, indudablemente, ahora empezamos a reordenar para no derrochar más..."

Fragmento del discurso de Perón a los delegados obreros del "Comité de la Unidad Sindical Latinoamericana", 19 de febrero de 1952.

gró capear la emergencia: la inflación se redujo en forma significativa, después de la recesión de 1951-1952 la economía volvió a crecer en 1953 y 1954, y en ese mismo período las cuentas del comercio exterior cerraron con un saldo positivo. La reanudación de las negociaciones colectivas en 1954 permitió, a su vez, si bien aplicando la presión sindical, recuperar los salarios perdidos en los años previos.

El giro estratégico de 1952 no quedó confinado a la nueva importancia que recibió la estabilidad económica. A fines de ese mismo año fue dado a conocer el Segundo Plan Quinquenal que aportó novedades de más largo plazo. Ya se hizo referencia a la decisión de devolver al sector rural parte de la rentabilidad perdida, redefiniendo la política de subsidios y precios hasta entonces sesgada en su contra. A ello se agregó la decisión de corregir la excesiva dependencia de la industria, típicamente productora de bienes de consumo, de los insumos importados. La reciente emergencia había revelado en forma contundente esa dependencia: cuando fue preciso recortar las importaciones a fin de equilibrar las cuentas externas, se advirtió que el margen para hacerlo era bien estrecho ya que estaban mayormente integradas por componentes indispensables al funcionamiento de las manufacturas locales. Dicha decisión se tradujo en el aliento a una nueva fase de sustitución de importaciones por medio de la producción de maquinarias e insumos industriales, sobre todo combustibles. Para encarar esta profundización de la industrialización y aliviar así el peso de las importaciones en el balance externo del país, el Estado no contaba empero con los recursos suficientes. El ajuste fiscal impuesto por la reciente emergencia había reducido los fondos disponibles para la inversión pública. Fue en este contexto que surgió el llamado a los capitales extranjeros. A principios de 1953 el Congreso aprobó una legislación más permisiva de radicación de capitales, y con sus auspicios se concretaron varios proyectos de inversión de firmas norteamericanas y europeas para la producción de tractores, camiones y automóviles.

La apertura hacia el capital extranjero, junto con la reorientación del IAPI a favor del campo, atrajeron hacia Perón las simpatías del mundo de los negocios, que vio en ellas una auspiciosa rectificación de la política de desarrollo. Paralela-

mente generaron un clima de inquietud entre muchos de los integrantes de su coalición de apoyo. El conflicto se hizo manifiesto con la iniciativa más audaz hacia el capital extranjero: la negociación de un contrato con la Standard Oil de California para explorar y explotar los yacimientos de petróleo del sur del país. La justificación oficial puso el acento en la creciente demanda de combustible y en la incapacidad de la empresa estatal YPF para afrontar las inversiones necesarias. Estas razones resultaron poco convincentes en el tratamiento del contrato por parte del Congreso. Allí había sido enviado para su ratificación por ley, ya que rozaba la cláusula nacionalista de la Constitución de 1949. La oposición radical, a través de Arturo Frondizi, impugnó el contrato con un discurso antiimperialista, denunciando la enajenación de la soberanía sobre los recursos nacionales. A la vez, el bloque oficialista mostró escaso entusiasmo en su defensa porque para una mayoría comportaba la traición al principio justicialista de la independencia económica. En definitiva, la ratificación legislativa del contrato fue postergada indefinidamente. Tampoco Perón insistió en la iniciativa, consciente quizá de que había franqueado el límite de la tolerancia ideológica de sus partidarios para con el nuevo rumbo económico.

En su segunda presidencia, Perón no solamente tropezó con la resistencia de ideas y creencias que él mismo contribuyera a arraigar; asimismo entró en colisión con intereses que eran centrales para su sustentación política. El tránsito desde una etapa distribucionista hacia otra que tenía por eje los problemas de la producción, anunciado en el Segundo Plan Quinquenal, incluyó también una campaña nacional por el aumento de la productividad. El objetivo era producir más para que hubiese más bienes a repartir. Con esta idea, durante 1953 los empresarios iniciaron una abierta ofensiva que abogó por la revisión de los convenios y la legislación laboral en nombre del mayor rendimiento de la fuerza de trabajo. Como indica Louise Doyon, se trataba, en verdad, de eliminar las normas que ponían límites a la autoridad patronal sobre las condiciones de trabajo y de recortar la injerencia de los delegados de personal en la vida interna de las empresas. A fines de 1954 el gobierno se hizo cargo de esas demandas y promovió un nuevo ejercicio de concertación social reuniendo a la CGT y a la

CGE en el Congreso Nacional de la Productividad. Durante las deliberaciones, que se extendieron hasta abril de 1955, la delegación sindical rechazó cada una de las concesiones que en materia de flexibilidad laboral reclamaban los empresarios. Bajo la presión del estado de movilización obrera puesto de manifiesto en las negociaciones colectivas de 1954, la CGT reafirmó que el conjunto de garantías y protecciones al trabajo constituía parte integral de la Revolución Justicialista y no era negociable. Al final, las conclusiones del congreso se caracterizaron por su ambigüedad e indefinición y dejaron pendiente el compromiso de modificar las cláusulas laborales así como la recuperación de las prerrogativas patronales en la dirección de las empresas.

El hecho a destacar es que Perón no apeló a su liderazgo político para forzar un desenlace más acorde con el nuevo rumbo económico. Como ocurriera en el debate sobre el petróleo, también ahora optó por acomodarse a las resistencias opuestas por su propio movimiento. Estos episodios indicaban que para avanzar en la agenda de la modernización económica era preciso emprender la compleja operación política de recomponer la coalición de gobierno. Este era un desafío que Perón no estaba preparado para afrontar, sobre todo cuando a principios de 1955 se encontró envuelto en otro, más urgente, con las fuerzas de la oposición política.

Luego de la dura prueba de 1952 y del mejoramiento de la situación económica, el gobierno pudo afrontar las elecciones legislativas de 1954 con éxito, recibiendo el voto favorable de dos tercios del electorado. La solidez de las mayorías electorales del oficialismo, más su mejor imagen en los medios empresarios y la normalización de las relaciones con los Estados Unidos confirmaron a los sectores opositores en su alienación política: sólo cabía una esperanza a sus aspiraciones si desde adentro del propio régimen estallaba el conflicto. Y esto fue lo que ocurrió cuando Perón se enfrentó con la Iglesia ya que, al hacerlo, dividió sus apoyos en las Fuerzas Armadas y puso en marcha la conspiración militar. En noviembre de 1954, en una de sus intervenciones públicas, Perón acusó a "ciertos sacerdotes" de actividades antiperonistas, trayendo a primer plano un conflicto que había venido madurando en los años previos y cuya evolución es tratada por Lila Caimari en su capítulo.



Perón con integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), 8 de marzo de 1955.

El ejercicio crecientemente absolutista del poder por parte de Perón fue afectando con el tiempo y sin remedio sus relaciones con la Iglesia. Esto se hizo visible en el desplazamiento progresivo de la Iglesia de los ámbitos tradicionales de su acción pastoral, entre las mujeres, los niños, la juventud. Perón sumó a ello su propio comportamiento personal que, en forma desafiante a los usos y costumbres de un jefe de Estado, lo exhibía en los jardines de su residencia y en las calles céntricas de Buenos Aires rodeado por la alegre comitiva de las adolescentes de la UES. La afrenta mayor fue el intento de convertir al justicialismo ya no sólo en la doctrina oficial del Estado sino a la vez en la expresión del verdadero cristianismo. Desde las esferas oficiales comenzó a delinearse el mensaje de un "cristianismo peronista", independizado de la tradición católica y con frecuencia incluso en contra de ella. El nuevo evange-

lio se asignó la misión de rescatar el mensaje social de Cristo del olvido al que lo confinara un clero dominado por preocupaciones mundanas y atento al cumplimiento formal de los preceptos religiosos. Esta prédica fue acompañada de consecuencias prácticas: los líderes peronistas se dedicaron a repartir por su cuenta las credenciales de buen o mal cristiano, los cultos no católicos disfrutaron de una sospechosa tolerancia, la devoción popular que rodeó a la figura de Evita después de su muerte fue transformada en una liturgia religiosa paralela.

Frente a la injerencia del régimen y sus ambiciones hegemónicas, la jerarquía eclesiástica reaccionó con cautelosa prudencia pero ésa no fue la actitud del mundo católico en general. Sus asociaciones de laicos devinieron cada vez más en refugios de una militante resistencia, canalizando las disidencias que los partidos mostraban no ser capaces de articular. La acusación de Perón en noviembre de 1954 fue el fruto de su irritación frente al espacio creciente que los adversarios del peronismo iban ganando en esos ámbitos sin que las autoridades de la Iglesia hicieran nada por evitarlo. El malestar se hizo más vivo al conocerse el proyecto de fundar un Partido Demócrata Cristiano. Luego de la intervención de Perón una sucesión de medidas suprimió de un plumazo los derechos y privilegios otorgados a la Iglesia. Se eliminó la enseñanza religiosa en las escuelas y los subsidios a la enseñanza privada, se aprobó una ley de divorcio, se autorizó la reapertura de prostíbulos, se prohibieron las procesiones religiosas.

Las reformas legales fueron seguidas de una intensa campaña anticlerical orquestada por la prensa oficial. En los primeros meses de 1955 se anunció una futura reforma de la Constitución para decidir la separación entre la Iglesia y el Estado. Frente a estos ataques, inimaginables ocho años atrás cuando el catolicismo hizo suya la causa peronista, sus sectores militantes convirtieron los templos en tribunas de protesta política y moral y lanzaron una insidiosa campaña de panfletos que desafió los controles oficiales. Los grupos más diversos de la oposición política cerraron filas en torno de ellos, entreviendo en el distanciamiento entre el régimen y la opinión católica la ocasión para poner en marcha una ofensiva como la de 1945. El 8 de junio, desafiando las prohibiciones, se celebró una multitudinaria procesión de Corpus Christi, en la que católi-

cos, radicales, socialistas y comunistas marcharon en el centro de Buenos Aires al grito de ¡Viva Cristo Rey!

A la protesta civil le siguió el 16 de junio un atentado en gran escala contra la vida de Perón; la crónica de sus alternativas y desarrollo posterior se encuentra en la contribución de Robert Potash en este libro. Un sector de la Marina y la Fuerza Aérea se alzó en rebeldía, bombardeando y ametrallando la Casa de Gobierno y sus alrededores. Advertido a tiempo, Perón encontró un refugio seguro y salió ileso. Los grupos de trabajadores que acudieron a la Plaza de Mayo para apoyar a su líder y los transeúntes que se encontraban allí no tuvieron la misma suerte; entre ellos se contaron unos 300 muertos y 600 heridos. Esa noche, sofocado el movimiento insurgente, ardieron las principales iglesias del centro de la ciudad, luego de ser saqueadas por fuerzas de choque peronistas, exhibiendo sin atenuantes la extrema radicalización del conflicto. Al estupor provocado por estos hechos de violencia inéditos en la historia reciente se sumó la alarma entre los jefes militares que permanecían leales debido a la intervención de la CGT, que distribuyó armas entre los obreros. Aconsejado por los altos mandos del Ejército, Perón lanzó una política de conciliación. El estado de sitio fue levantado, cesaron los ataques a la Iglesia y se sustituyeron las figuras del gabinete asociadas a ellos, los dirigentes de la oposición fueron invitados a discutir una tregua. A sus seguidores, Perón declaró: “La revolución peronista ha terminado. Comienza una nueva etapa que es de carácter constitucional. Yo dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios”.

Este llamado a la pacificación no tuvo, empero, el eco esperado. De hecho dio renovados bríos a la oposición, la cual desde las radios, adonde accedió por primera vez en diez años, reclamó el fin de la estructura represiva y formuló programas de gobierno alternativos. El fracaso de la tregua llevó a Perón a dar un nuevo golpe de timón. El 31 de agosto, en una carta dirigida al Partido Peronista y la CGT, comunicó su decisión de abandonar el gobierno para garantizar el éxito de la pacificación. Como era previsible, la central sindical organizó una gran demostración de apoyo y la Plaza de Mayo asistió a una nueva edición del 17 de octubre de 1945. Siguiendo el libreto

"La revolución peronista ha terminado"

"Para lograr nuestros tres grandes objetivos, la independencia económica, la reforma constitucional y la reforma cultural, hemos debido indudablemente recurrir en muchas circunstancias a ciertas restricciones que nosotros no negamos. Con una absoluta licencia para que todo el mundo hiciera lo que quisiese, nosotros no hubiéramos podido cumplir nuestro objetivo, y como dije los objetivos son irrenunciables. En cambio, los medios de acción eran libres. Recurrimos por lo tanto a esos medios de acción, limitamos las libertades en cuanto fue indispensable limitarlas para la realización de nuestros objetivos. No negamos nosotros que hayamos restringido algunas libertades: lo hemos hecho siempre de la mejor manera, en la manera indispensable y no más allá de ello. [...] Por eso, terminado ese período en que hemos afirmado nuestros objetivos fundamentales en la acción social, ya en amplia medida, lo que queda por hacer será obra de la legislación empíricamente paulatina y del propio desenvolvimiento del país. [...] La revolución peronista ha finalizado, comienza ahora una nueva etapa que es de carácter constitucional, sin revoluciones, porque el estado permanente de un país no puede ser la revolución. Yo dejo de ser el jefe de una revolución para ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios."

Palabras de Perón en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno frente a legisladores peronistas de ambas Cámaras del Congreso, 15 de julio de 1955.

preparado, Perón comunicó a la muchedumbre que retiraba su renuncia y pronunció el discurso más violento de toda su carrera política. Comenzó diciendo que había ofrecido la paz a sus adversarios pero que éstos no la querían, y concluyó afirmando: "A la violencia le hemos de responder con una violencia mayor; cuando uno de los nuestros caiga caerán cinco de ellos. Hoy comienza para todos nosotros una vigilia en armas".

Esta inesperada declaración de guerra no tuvo consecuencias entre sus partidarios, pero terminó por convencer a muchos militares todavía indecisos sobre qué hacer. El 16 de septiembre se produjo finalmente el alzamiento militar. Luego de cinco días, durante los cuales las fuerzas leales a Perón, superiores en número, no mostraron voluntad de luchar, las tropas

rebeldes se impusieron. Perón, entre tanto, buscó asilo en la embajada de Paraguay, dando comienzo a un largo exilio. El 23 de septiembre, mientras la CGT reclamaba a los trabajadores conservar la calma, otra multitud llenó la Plaza de Mayo, ahora para aclamar al nuevo presidente, el general Eduardo Lonardi, y celebrar el fin de la década peronista.

En el futuro, peronistas y antiperonistas prolongarían sus conflictos, confrontándose en torno de versiones opuestas de la experiencia histórica que acababa de concluir. Para los partidarios de Perón, durante el período 1945-1955 los trabajadores alcanzaron una participación en el ingreso nacional nunca igualada, y la obra de una legislación social generosa y un amplio reconocimiento político hizo que abandonaran su condición de ciudadanos de segunda clase para convertirse en miembros plenos de la comunidad política. Para los adversarios de Perón, los años peronistas fueron aquellos en los que tuvo lugar, en una medida hasta allí desconocida, el cercenamiento de las libertades públicas y del pluralismo político por



La Plaza de Mayo luego del bombardeo de junio de 1955.

la acción de un liderazgo y un movimiento que se concibieron a sí mismos como la encarnación de la voluntad nacional. Como era de esperar éste fue un diálogo de sordos. Los argumentos de una y otra de las dos configuraciones sociopolíticas en las que se dividió el país colocaron el énfasis en aspectos distintos de la compleja realidad histórica. La disociación entre los valores de la justicia social y los ideales de la democracia política abierta en las elecciones de 1946 mantuvo, así, toda su vigencia.

Los efectos de este contrapunto de interpretaciones sobre la convivencia entre los argentinos fueron potenciados porque, una vez llegados a su fin, los años peronistas no entraron en la historia llevándose consigo sus proyectos fallidos, la carga de los conflictos que habían desatado. Ésa fue la ilusión de los vencedores de 1955 que presidió la tarea de desperonización del país a la que se lanzaron, aplicando el mismo espíritu excluyente, los mismos instrumentos coercitivos que combatieron hasta entonces. Ésa fue una ilusión fugaz. Al poco tiempo se vieron confrontados con el legado último de los años peronistas: una fuerza social y política sólidamente arraigada en el tejido social e institucional. Éste había sido el desenlace de la empresa original de Perón, conjurar el peligro del comunismo actuando sobre las condiciones de postergación social y alienación política en el mundo del trabajo que eran propicias para su penetración. Vista en perspectiva, ésa fue una empresa exi-



Perón asciende a la nave paraguaya que lo lleva al exilio.

tosa. En América Latina, la Argentina estará entre los países donde las corrientes ideológicas de izquierda perdieron gravitación social, quedando confinadas a una influencia en los círculos intelectuales y los medios universitarios.

Aprovechando las oportunidades que ofreció el breve ciclo de prosperidad de la posguerra, Perón puso al alcance de los trabajadores niveles de vida y de expectativas sociales que hicieron de ellos componentes principales de la sociedad y la economía que crecieron sobre esos cimientos. Esa experiencia de ascenso social y el papel protagónico que alcanzaron a través de sus organizaciones sindicales hizo surgir en los trabajadores una capacidad de intervención política y social que adquirió vida propia, aun después que comenzaron a debilitarse las circunstancias extraordinarias que la habían hecho posible. Perón mismo habría de experimentar los límites que esa capacidad de intervención imponía cuando hacia el final de su gestión intentó la búsqueda de alternativas al rumbo original de la economía peronista. Para los que lo derrocaron en 1955, esos límites serían más duros y difíciles de franquear porque hicieron sentir su influencia en el marco del conflicto de legitimidad que rodeó la obra de los años peronistas.

BIBLIOGRAFÍA

Caimari, Lila: *Perón y la Iglesia católica*, Ariel-Historia, Buenos Aires, 1995.

Ciria, Alberto: *Política y cultura popular: la Argentina peronista 1946-1955*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1983.

Crespo, Jorge: *El coronel Perón*, Ayer y Hoy Ediciones, Buenos Aires, 1998.

Gambini, Hugo: *Historia del peronismo*. Vol. 1, 1999, vol. 2, 2001, Planeta, Buenos Aires.

Garcia, Marcela Alejandra: *La oposición política al peronismo. Los partidos políticos en la Argentina entre 1943 y 1951*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1997.

Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach: *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*, Ariel, Buenos Aires, 1998.

Godio, Julio: *La caída de Perón*, Granica Editor, Buenos Aires, 1973.

Halperín Donghi, Tulio: *Argentina en el callejón*, Ariel, Buenos Aires, 1995.

———: *Argentina: La democracia de masas*, Paidós, Buenos Aires, 1983.

Luna, Félix: *El 45. Crónica de un año decisivo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1981.

———: *Perón y su tiempo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1993.

Mackinnon, María Moira: *Los años formativos del Partido Peronista (1946-1950)*, Tesis de Maestría en Investigación en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 1999.

Manson, Enrique: *Argentina en el mundo del siglo XX*, Ediciones Caligraf, Buenos Aires, 2000.

Mora y Araujo, Manuel e Ignacio Llorente (eds.): *El voto peronista: ensayos de sociología electoral argentina*, Sudamericana, Buenos Aires, 1980.

Navarro, Marysa: *Evita*, Corregidor, Buenos Aires, 1981.

Page, Joseph: *Perón. Una biografía*, Grijalbo, Buenos Aires, 1999.

Pavón Pereira, Enrique: *Perón. Preparación de una vida para el mando (1895-1942)*, Ediciones Espiño, Buenos Aires, 1953.

Potash, Robert: *El Ejército y la política en la Argentina*, vol. 2, Sudamericana, Buenos Aires, 1981.

Romero, Luis Alberto: *Breve historia contemporánea de la Argentina*, FCE, Buenos Aires, 1994.

Rouquié, Alain: *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, Emecé, Buenos Aires, 1982.

Torre, Juan Carlos (ed.): *La formación del sindicalismo peronista*, Legasa, Buenos Aires, 1988.

Torre, Juan Carlos: *La vieja guardia sindical y Perón*, Sudamericana, Buenos Aires, 1990.

Waldman, Peter: *El peronismo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1981.

Zanatta, Loris: *Perón y el mito de la nación católica*, Sudamericana, Buenos Aires, 1999.

BIBLIOGRAFÍA

Caimari, Lila: *Perón y la Iglesia católica*, Ariel-Historia, Buenos Aires, 1995.

Ciria, Alberto: *Política y cultura popular: la Argentina peronista 1946-1955*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1983.

Crespo, Jorge: *El coronel Perón*, Ayer y Hoy Ediciones, Buenos Aires, 1998.

Gambini, Hugo: *Historia del peronismo*, Vol. I, 1999, Vol. 2, 2001, [illegible], Buenos Aires.

García Sebastiani, Marcela: *La oposición política al peronismo. Los partidos políticos en la Argentina entre 1943 y 1951*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1997.

Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach: *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*, Ariel, Buenos Aires, 1998.

Godio, Julio: *La caída de Perón*, Granica Editor, Buenos Aires, 1973.

Halperin Donghi, Tulio: *Argentina en el callejón*, Ariel, Buenos Aires, 1995.

———: *Argentina: La democracia de masas*, Paidós, Buenos Aires, 1983.

Luna, Félix: *El 45. Crónica de un año decisivo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1981.

———: *Perón y su tiempo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1993.

Mackinnon, María Moira: *Los años formativos del Partido Peronista (1946-1950)*, Tesis de Maestría en Investigación en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 1999.

Manson, Enrique: *Argentina en el mundo del siglo XX*, Ediciones Caligraf, Buenos Aires, 2000.

Mora y Araujo, Manuel e Ignacio Llorente (eds.): *El voto peronista. Ensayos de sociología electoral argentina*, Sudamericana, Buenos Aires, 1980.

Navarro, Marysa: *Evita*, Corregidor, Buenos Aires, 1981.

Page, Joseph: *Perón. Una biografía*, Grijalbo, Buenos Aires, 1999.

Pavón Pereyra, Enrique: *Perón. Preparación de una vida para el mando (1895-1942)*, Ediciones Espiño, Buenos Aires, [illegible].

II

Las Fuerzas Armadas y la era de Perón

por ROBERT A. POTASH



residente Perón junto al general Humberto Sosa Molina (primero desde la ierda) y el capitán de navío Fidel Anadón (en el centro).



Aunque Juan Domingo Perón fue elegido dos veces presidente, la primera en febrero de 1946 y la segunda en noviembre de 1951, fueron las Fuerzas Armadas argentinas, y dentro de ellas sobre todo el Ejército, los que le proporcionaron la plataforma que necesitaba para conquistar el apoyo popular a sus ambiciones presidenciales. El respaldo tácito de los militares, junto con el de otros sectores, le permitieron permanecer en el cargo durante casi una década. Empero, como lo mostraremos a continuación, fueron esos mismos militares, y en especial la Armada, quienes lo desalojaron de la presidencia en septiembre de 1955, luego de transcurridos sólo tres años de su segundo mandato.

Las páginas que siguen examinarán la naturaleza de las Fuerzas Armadas argentinas y los distintos papeles que desempeñaron tanto durante el régimen militar que permitió a Perón salir de la oscuridad y llegar a una posición de poder (1943-1946) como durante los casi diez años en los que él controló los destinos del país como presidente constitucional.

Para empezar, hay que tener presente que el propio Perón era un oficial profesional del Ejército, un producto de su Colegio Militar y su Escuela Superior de Guerra. En 1942, un año después de volver de una misión en Italia y como coronel recientemente ascendido, tomó la iniciativa de organizar el GOU, la logia militar secreta que desempeñó un papel clave en la destitución del presidente Ramón Castillo en junio de 1943. En un comienzo, y gracias a ese grupo, Perón pudo alcanzar puestos de importancia crucial en el régimen militar que sucedió a Castillo y crear una red de oficiales leales. Pero fue su astucia en el uso de la autoridad que le conferían sus cargos como secretario de Trabajo y ministro de Guerra lo que le permitió establecer una base de apoyo tanto en círculos laborales como militares y derrotar a sus rivales en una lucha de dos años por el poder.

LA NATURALEZA DE LOS MILITARES ARGENTINOS: UN PANORAMA GENERAL

Antes de proseguir con el análisis de la relación de Perón con los militares es preciso entender cómo usaremos este término. En este capítulo, "militares" se referirá a las Fuerzas Armadas en su conjunto: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, o más específicamente a sus cuerpos de oficiales. En el caso del Ejército y la Armada, estos oficiales salían de sus respectivas escuelas militares, fundadas por el presidente Sarmiento en el siglo XIX. En lo que se refiere a la Fuerza Aérea, en cambio, antes de 1945 sólo existía como un sector del Ejército. Como ministro de Guerra del régimen militar, fue Perón quien decidió elevarla al rango de fuerza independiente, la Aeronáutica. Esta decisión y sus ulteriores esfuerzos por proveerla de aviones modernos y crear una industria aeronáutica nacional, un tema que se analizará más adelante, generarían un vínculo especial entre Perón y la Fuerza Aérea. Sin embargo, hasta bastante después de la destitución de aquél en 1955, los oficiales que comandaban la fuerza todavía eran graduados del Colegio Militar y, por lo tanto, compañeros de sus pares del Ejército.

El régimen militar que tomó el poder en 1943 fue el respon-

sable de considerables aumentos en el tamaño y el costo de las Fuerzas Armadas. En 1942, los gastos militares absorbían el 27 por ciento del presupuesto nacional o el equivalente del 2,6 por ciento del producto bruto interno (PBI); hacia 1945, más del 43 por ciento del presupuesto (o el 6 por ciento del PBI) correspondía a ellos. Se trataba de una pesada carga para un país que estaba decidido a mantener su neutralidad y no intervenir en la guerra contra el Eje. Sin embargo, el temor a un conflicto con Brasil, cuyos militares se fortalecían gracias al suministro de armas estadounidenses que se le negaban a la Argentina debido a sus políticas con respecto al Eje y sus ciudadanos, condujo al régimen militar a aumentar la dimensión de las Fuerzas Armadas y buscar armas y equipamientos en otras fuentes. No obstante, tanto un esfuerzo hecho en 1943 por importar técnicos alemanes para desarrollar la industria armamentística nacional como el intento, un año más tarde, de obtener armas pesadas de una Alemania ya vacilante y en retirada, terminaron en la nada.

En 1945, el Ejército argentino recibía la tajada más grande del presupuesto militar, el 65 por ciento, seguido por la Armada con el 26 por ciento y la bisoña Fuerza Aérea con el 9 por ciento. Durante las presidencias de Perón, la participación del Ejército disminuiría como resultado de los esfuerzos por fortalecer a la Aeronáutica, pero aún en 1955 aquella fuerza se llevaba el 47 por ciento del total. En términos de tamaño, el Ejército era la más poderosa de las tres fuerzas. En efecto, en 1945 su dotación general alcanzó el pico histórico de 137 mil soldados y oficiales; como ministro de Guerra, Perón había decidido convocar a toda la clase de veinte años de edad, 104 mil hombres, para que cumplieran un año de servicio militar. Desde hacía mucho tiempo una de las aspiraciones de los planificadores militares era brindar instrucción castrense a todo un grupo de edad, pero Perón fue el primer ministro que concretó esa ambición.

A fin de dar instrucción a esa gran cantidad de conscriptos, el Ejército había convocado al servicio activo temporario a casi mil quinientos oficiales de reserva, que se sumarían a los 3.454 oficiales de los cuerpos de combate o comando y a los 1.296 oficiales del cuerpo profesional que conformaban la fuerza permanente. Los oficiales de combate, desde luego,

eran quienes constituían el segmento más importante del cuerpo de oficiales. A diferencia de los oficiales del cuerpo profesional que se incorporaban al Ejército tras adquirir sus capacidades profesionales en instituciones civiles, o de los oficiales de reserva que a menudo eran simplemente egresados de liceos militares, todos los oficiales de combate eran egresados del Colegio Militar. En él tenían que elegir una de las cinco armas (infantería, caballería, artillería, ingenieros, comunicaciones) en la que proseguirían su carrera y en la que, también, se entablaban amistades que influirían en sus actitudes y acciones en años futuros.

Pero el hecho de que todos los oficiales de combate hubieran surgido de una sola institución no significaba que tuvieran las mismas ideas sobre los problemas que enfrentaba el país o, a decir verdad, sobre el papel que los militares debían desempeñar en épocas de crisis política. En los años anteriores al golpe de 1943 y al surgimiento de Perón, habían existido divisiones entre los oficiales "liberales" —partidarios del general y ex presidente Agustín P. Justo hasta su muerte repentina en enero de 1943—, los "democráticos" —que simpatizaban con el objetivo de la Unión Cívica Radical de recuperar el poder por medio de elecciones limpias— y el creciente sector de "nacionalistas", con influencia en los niveles inferiores y medios. Para algunos nacionalistas, la eliminación de la influencia británica, en particular sobre la economía, era un objetivo fundamental que daba forma a su actitud con respecto a la guerra; para otros, la meta era el desarrollo de una Argentina industrializada y una industria armamentística nacional; un tercer grupo, inspirado en ideas fascistas importadas o en el clericalismo de algunos capellanes castrenses, quería terminar con las instituciones liberales de la Argentina, expandir el papel de la Iglesia Católica y crear algún tipo de Estado corporativo. Mientras que tanto los oficiales liberales como los democráticos tendían a ser aliadófilos en lo que se refería a la guerra, los oficiales nacionalistas se inclinaban hacia el Eje, aunque en ambos grupos eran pocos los que querían que la Argentina entrara en el conflicto.

Hay que señalar que la Armada argentina cumplió un papel relativamente limitado en el golpe que el 4 de junio de 1943 destituyó al presidente Castillo y en los acontecimientos que lo

siguieron. Probablemente con la intención de asegurar el respaldo de la Marina al nuevo régimen, el almirante Sabá Sueyro fue designado vicepresidente. Sin embargo, cuando este marino murió pocos meses después, su cargo fue asumido por el general Edelmiro Farrell, en ese momento ministro de Guerra, y quedaría desde entonces en manos del Ejército. El cuerpo de oficiales de la Armada, formado por un poco más de 1.220 hombres, era mucho más pequeño que el del Ejército. En parte como resultado de experiencias profesionales que incluían viajes al exterior y contactos con las marinas de Gran Bretaña y los Estados Unidos, los oficiales navales argentinos, con pocas excepciones, simpatizaban con los aliados y se oponían a cualquier abandono de las tradiciones liberales del país.

EL RÉGIMEN MILITAR, 1943-1955: LAS FRICCIONES INTERNAS Y EL TRIUNFO DE PERÓN

Las Fuerzas Armadas que tomaron el poder en junio de 1943 lo hicieron sin haber alcanzado un acuerdo sólido sobre la naturaleza y la orientación del régimen que instaurarían. El resultado fue un período de confusión en el que tres generales del Ejército ocuparon la presidencia en un lapso de ocho meses. El primero fue el general Arturo Rawson, jefe nominal del golpe, cuya pretensión unilateral a la presidencia se enfrentó a la oposición de Perón y otros dirigentes del GOU, en parte por su postura en favor de los aliados. El sucesor de Rawson como presidente fue el general Pedro Ramírez, que había sido ministro de Guerra de Castillo. Sus estrechos lazos con varios de los líderes del GOU y su disposición a aceptar tanto las políticas internas antiliberales de éstos como su insistencia en mantener la neutralidad argentina, le permitieron permanecer en el cargo durante ocho meses. Sin embargo, cuando en enero de 1944 los Estados Unidos amenazaron con publicar pruebas de la intervención de su gobierno en el reciente derrocamiento del presidente boliviano y de sus esfuerzos secretos por obtener armas de la Alemania nazi, el presidente Ramírez capituló y emitió un decreto por el que se rompían las relaciones con el Eje. Al hacerlo, se enajenó el apoyo de muchos oficiales nacionalistas del Ejército y se vio obligado a entregar su cargo al

general Farrell. Uno de los grandes beneficiarios de este cambio fue el coronel Perón, el consejero más íntimo de Farrell; ahora con éste como presidente, Perón se hizo cargo del Ministerio de Guerra a la vez que conservaba su puesto de secretario de Trabajo. Pocos meses después, tras haber desplazado con sus maniobras a su principal rival en el gobierno, el general Luis Perlinger, Perón también asumió la vicepresidencia.

Su ascenso al poder en el régimen militar generó divisiones en la oficialidad. Los oficiales más antiguos consideraban que el GOU y los juramentos de lealtad que en nombre de Farrell y Perón se habían exigido de los oficiales subalternos en el momento de la destitución del general Ramírez de la presidencia representaban violaciones de la organización jerárquica tradicional del Ejército. En rigor, en marzo de 1944 un grupo de 16

La situación política vista por el GOU

"Es cada vez más alarmante la situación de corrupción social a que está llegando el país; se trata de un pavoroso problema que es urgente estudiar a fondo, para encontrarle la solución que nos ha de volver a la tranquilidad de espíritu necesario para comprender que la República Argentina es un país soberano, de orden, de legalidad y justicia.

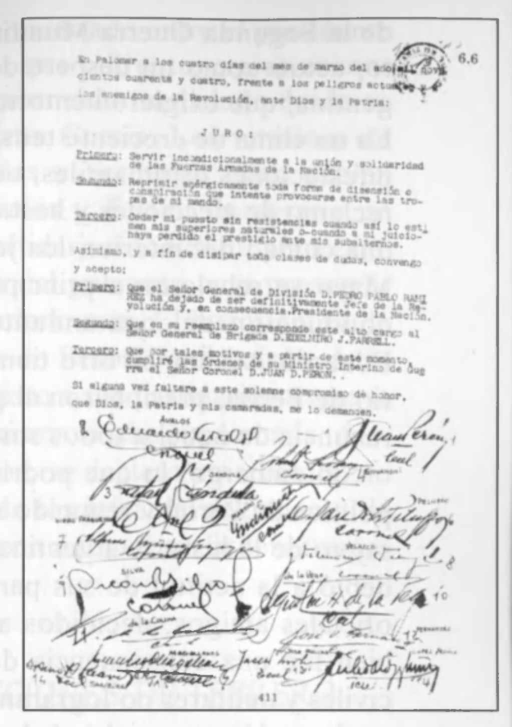
Es menester no querer darse por entendido, si no palpamos lo que significa la obra de medio millón de terroristas asalariados por entidades extranjeras, que ya sea por medio de la prédica o la violencia, tratan de corromper la moral ciudadana, alterar la marcha normal de las instituciones y preparar el caldo propicio que ha de cultivar el germen disoluto de la nacionalidad.

[...]

El Ejército, que aún no está contaminado con aquella enfermedad, ha encontrado la vacuna inmunizadora que nos ha de salvar de la calamidad. El veneno aliancista de una conjunción seudodemocracia (Unión Democrática), vulgo reunión de elementos comunizantes con los políticos incondicionales al servicio de judaísmos, tiene su antídoto: la Institución Armada, que si bien no debe actuar en la política interna, tiene la obligación de observar una actitud vigilante para, llegado el caso, cortar de raíz el mal. Acabar con los frentes populares [...]"

Robert A. Potash, *Perón y el GOU. Los documentos de una logia secreta*, Sudamericana, Buenos Aires, 1984, pp. 104 y 105.

generales trató de presionar al presidente Farrell para que convocara a elecciones anticipadas y "devolviera al Ejército a su misión específica y su rumbo jerárquico y disciplinario". No tuvieron éxito. En otros oficiales suscitaba inquietudes el enfoque pragmático de Perón hacia cuestiones de política exterior. Aunque él se había ingeniado para eludir cualquier censura durante la crisis interna provocada por la ruptura de las relaciones con el Eje, intervino directamente en la decisión de declarar la guerra a Alemania y Japón en marzo de 1945.



6.6

En Palomar a los cuatro días del mes de marzo del año [illegible] cientos cuarenta y cuatro, frente a los peligros actu[illegible] los enemigos de la Revolución, ante Dios y la Patria:

J U R O :

Primero: Servir incondicionalmente a la unión y solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Segundo: Reprimir enérgicamente toda forma de disensión o conspiración que intente provocarse entre las tropas de mi mando.

Tercero: Ceder mi puesto sin resistencias cuando así lo estimen mis superiores naturales o cuando a mi juicio haya perdido el prestigio ante mis subalternos.

Asimismo, y a fin de disipar toda clase de dudas, convengo y acepto:

Primero: Que el Señor General de División D. PEDRO PABLO RAMIREZ ha dejado de ser definitivamente Jefe de la Revolución y, en consecuencia, Presidente de la Nación.

Segundo: Que en su reemplazo corresponde este alto cargo al Señor General de Brigada D. EDELMIRO J. FARRELL.

Tercero: Que por tales motivos y a partir de este momento, cumpliré las órdenes de su Ministro Interino de Guerra el Señor Coronel D. JUAN D. PERON.

Si alguna vez faltare a este solemne compromiso de honor, que Dios, la Patria y mis camaradas, me lo demanden.

Compromiso de honor de los miembros del GOU jurando lealtad a la nueva conducción, 4 de marzo de 1944.

Esta medida, adoptada para permitir que la Argentina quebrara su aislamiento diplomático en el hemisferio y estuviera en condiciones de participar en la próxima conferencia organizativa de las Naciones Unidas, fue una píldora difícil de tragar para muchos oficiales jóvenes. Algunos consideraban que era un deshonor para la Argentina volverse contra una Alemania derrotada, por cuyo ejército todavía sentían gran admiración; otros juzgaban como una actitud solapada que unos dirigentes que se habían opuesto firmemente a los Estados Unidos dieran una voltereta y esperaran ser aceptados como aliados. La hostilidad de otros, y entre ellos se incluían tanto oficiales de la Armada como del Ejército, se debía a una combinación de factores: aversión a las políticas laborales de Perón; resentimiento por la abierta relación que mantenía con su amante, la actriz Eva Duarte; y la existencia de pruebas cada vez más evidentes de que usaba la posición oficial para promover su candidatura presidencial a pesar de repetidas promesas a sus camaradas de que no lo haría.

La rendición de Japón en agosto de 1945, que señaló el fin

de la Segunda Guerra Mundial luego de siete años de conflicto, actuó como un despertador para varios sectores de la Argentina, que exigieron entonces el retorno a un gobierno civil. En un clima de creciente tensión que había sido testigo de manifestaciones estudiantiles, una masiva marcha de protesta en reclamo de elecciones y hasta un intento abortado de golpe en una ciudad del interior, los jefes del regimiento de Campo de Mayo se rebelaron a principios de octubre de 1945. Bajo la conducción del comandante de su guarnición, el general Eduardo Ávalos, en otro tiempo dirigente del GOU y partidario de Perón, presionaron al presidente Farrell para obtener la renuncia de aquél a todos sus cargos oficiales.

Sin embargo, lo que podría haber terminado con la carrera política de Perón y reducido su significación a un episodio pasajero de la historia argentina no se produjo. En parte, esto se debió a la actitud de sus partidarios en la clase obrera y sus oficiales amigos, decididos a devolverlo al poder; pero también fue una consecuencia del hecho de que sus adversarios civiles y militares no lograran llegar a un acuerdo sobre el curso de acción que podría haberlo impedido. El general Ávalos, quien asumió como ministro de Guerra y que junto con el almirante Héctor Vernengo Lima había formado un gabinete interino, resultó ser el blanco de la presión de varios grupos. Algunos civiles exigían la transferencia inmediata del poder a la Corte Suprema y la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Sin embargo, el general Ávalos, que no estaba dispuesto a poner fin de esa manera al gobierno militar, quería que el general Farrell siguiera como presidente, si bien con un gabinete representativo de las fuerzas civiles, hasta que un gobierno electo pudiera asumir el poder. Las demoras y discrepancias de los dirigentes civiles con respecto a la composición de ese gabinete dieron a los partidarios de Perón más tiempo para organizar su contragolpe.

El 17 de octubre de 1945, trabajadores del cinturón industrial que rodeaba la capital afluyeron a ésta y se concentraron frente a la Casa de Gobierno exigiendo la vuelta de Perón. Pese a que los jefes del regimiento de Campo de Mayo y la conducción naval estaban dispuestos a desplegar sus fuerzas y dispersar a la multitud, el general Ávalos se resistió a tomar medidas que pudieran producir bajas entre los civiles. En lugar

de ello, participó de un acuerdo concertado entre el presidente Farrell y representantes de Perón, que por entonces se encontraba en el Hospital Militar tras haber sido trasladado desde su lugar de detención en la isla Martín García. Los términos de ese arreglo establecían que Ávalos y Vernengo Lima debían renunciar a sus cargos ministeriales y Farrell nombraría un nuevo gabinete compuesto por partidarios de Perón, pero éste, por su parte, se mantendría fuera del gobierno para proseguir su carrera política como un ciudadano más. El histórico 17 de octubre terminó con la aparición de Perón en el balcón de la Casa de Gobierno, desde donde instó a sus partidarios a que se dispersaran pacíficamente. Esa misma noche, la Armada, descontenta con la decisión de Ávalos, se declaró en rebeldía; no obstante, sin el esperado apoyo de los jefes del regimiento de Campo de Mayo, quienes se negaron a actuar sin órdenes superiores, el levantamiento fracasó.

LOS MILITARES Y LAS ELECCIONES DE FEBRERO DE 1946

Aunque el nuevo gabinete estaba compuesto por personas a quienes se creía partidarias de Perón, pronto se dividió en dos fracciones: quienes estaban abiertamente dispuestos a dedicar sus cargos oficiales a garantizar la elección de aquél y quienes trataban de mantener al menos la apariencia y gran parte de la sustancia de la neutralidad oficial. Entre los principales miembros del primer grupo se contaban el secretario de Trabajo y Bienestar Social, teniente coronel Domingo Mercante; el secretario de la Fuerza Aérea, comodoro Bartolomé de la Colina, y el secretario de Industria y Comercio, coronel Joaquín Sauri. El jefe de la Policía Federal, el general Juan F. Velazco, compañero de promoción de Perón en el Colegio Militar, también se incluía en esta categoría. Entre quienes se esforzaban por garantizar una elección limpia figuraban en primer lugar el nuevo ministro de Guerra, general José Humberto Sosa Molina, y el oficial que finalmente quedó a cargo del Ministerio del Interior, el general Felipe Urdapilleta, compañero de promoción de Sosa Molina.

Si bien era personalmente favorable a la elección de Perón, el

ministro de Guerra se oponía a que el Ejército tuviera una coloración partidista. Sabía que si bien una minoría de sus generales eran fervientes peronistas y otra minoría antiperonistas, la mayoría quería que la fuerza retornara a su misión profesional con su honor intacto. De tal modo, aun cuando Sosa Molina no vaciló en sancionar a los oficiales de Campo de Mayo que se habían levantado contra Perón y ordenó investigar la conducta de otros oficiales en todo el país, su principal preocupación era restablecer la jerarquía y la disciplina en una fuerza en la que una y otra habían desaparecido. Por otra parte, en su manipulación de los ascensos y destinos a fin de año, trató de mantener un equilibrio que evitara la apariencia de un favoritismo político. Así, de los cinco oficiales promovidos al grado de general de división, sólo uno era partidario de Perón; pero tres, si no los cuatro coroneles ascendidos a generales de brigada, sin duda lo eran. Sin embargo, el hecho de que los dos puestos supremos del Ejército, el de comandante en jefe y el de comandante general del interior, continuaran en manos de oficiales a los que se consideraba sin compromisos políticos, sirvió para preservar la imagen del Ejército entre sus miembros como una institución profesional consagrada a los intereses nacionales.

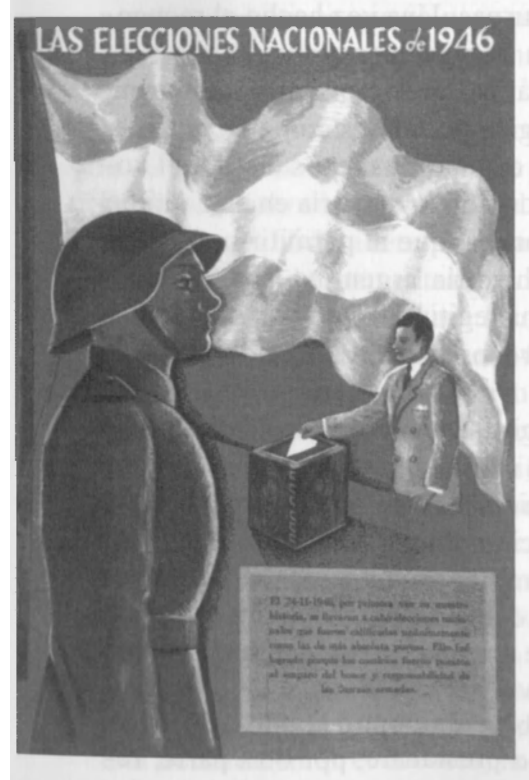
Mientras el ministro de Guerra Sosa Molina y sus pares de la Armada y la Fuerza Aérea se afanaban en las decisiones de fin de año sobre los destinos del personal, el ministro del Interior, general Urdapilleta, se veía ante el desafío de mantener la neutralidad gubernamental con respecto a los partidos políticos que se preparaban para las elecciones generales anunciadas el 1° de diciembre para el 24 de febrero de 1946. Empero, y a pesar de sus reiteradas instrucciones para que los funcionarios oficiales tanto de nivel nacional como provincial se abstuvieran de participar en la actividad política y se comportaran con total imparcialidad, la Unión Democrática, la coalición de partidos constituida para oponerse a la candidatura de Perón, tenía frecuentes motivos de queja. Los trabajadores postales mostraban sus simpatías partidistas negándose a repartir sus publicaciones; los funcionarios policiales revelaban las suyas al negar o demorar las autorizaciones para realizar reuniones callejeras. En esas circunstancias, el gobierno militar tomó una decisión sin precedentes, la de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.

La práctica tradicional había consistido en asignar a las policías provinciales el mantenimiento del orden en los lugares de votación y la vigilancia de las urnas hasta el cómputo de los sufragios. Pero como esas policías recibían órdenes de sus respectivos gobernadores, en el pasado se habían generado episodios de violencia y fraude y existía la probabilidad de que éstos volvieran a producirse con resultados similares, habida cuenta de las pasiones políticas despertadas por la campaña electoral de 1946. Para desalentar los desórdenes el día de la votación y garantizar un cómputo limpio de los votos, las Fuerzas Armadas asumían ahora la responsabilidad directa de supervisar las elecciones. Se creó un comando militar electoral nacional, compuesto por las jefaturas de las tres fuerzas, y se designaron comandantes militares electorales para la Capital Federal y para cada una de las catorce provincias. Cinco días antes de las elecciones, estos comandantes asumieron el control de la policía en sus respectivos distritos, y el 24 de febrero unidades militares garantizaron el libre acceso a las mesas de votación y la integridad de las urnas. Una vez hecho el recuento de los votos, Perón obtuvo la presidencia derrotando a su oponente de la Unión Democrática, el doctor José Tamborini, con mayoría tanto en los sufragios populares como en el Colegio Electoral; sin embargo, un cambio de menos de 38 mil votos en cinco distritos habría otorgado la mayoría en este último a Tamborini. Es evidente, entonces, que al permitir una de las elecciones más limpias de la historia argentina, los militares dieron a la victoria de Perón una legitimidad que de otro modo las acciones de sus más fervorosos partidarios podrían haber puesto en tela de juicio.

La asunción de Juan Domingo Perón como presidente constitucional el 4 de junio de 1946 marcó el retorno de las Fuerzas Armadas a sus deberes profesionales. De todos modos, sería incorrecto decir que la presencia militar quedó absolutamente eliminada del gobierno. El mismo Perón, a pesar de que se había retirado del Ejército por decisión propia en octubre de 1945, recuperó la condición de oficial en actividad una semana antes de su asunción, y prestó el juramento de oficio vestido con el uniforme de general de brigada, rango al que había sido recientemente ascendido. Como presidente, por otra parte, recurrió a militares para que encabezaran una serie de organis-

mos que cubrían áreas de interés estratégico para las Fuerzas Armadas: petróleo, transporte y energía; y mantuvo en el gabinete al general, ahora retirado, que había ejercido como ministro de Obras Públicas desde 1943.

Al margen de ese ministro, el general (R) Juan Pistarini, los únicos militares en el gabinete eran los oficiales a cargo de las tres Fuerzas Armadas, el general Humberto Sosa Molina como ministro de Guerra, el capitán de navio (que pronto llegaría a almirante) Fidel Anadón como ministro de Marina y el brigadier Bartolomé de la Colina como secretario de Aeronáutica. Las Fuerzas Armadas transmitían sus inquietudes al presidente por medio de estos tres oficiales, pero a través del Consejo Nacional de Defensa (CND) también llevaban a cabo estudios y hacían recomendaciones políticas sobre cuestiones que trascendían la esfera estrictamente militar. Un caso digno de mencionarse al respecto es la política inmigratoria implementada por el nuevo gobierno.



ropaganda oficial sobre las Fuerzas Armadas.

LOS MILITARES Y LA POLÍTICA INMIGRATORIA

Uno de los objetivos expuestos en el Plan Quinquenal que el Presidente anunció en octubre de 1946 era promover la inmigración en gran escala como un instrumento esencial para alcanzar las metas de desarrollo económico que constituían el meollo del programa. Como se creía que el crecimiento de la población del país era muy lento, los inmigrantes suministrarían al menos parte de la mano de obra requerida para la expansión de la agricultura y la industria y crearían nue-

vos centros de población en zonas donde vivían pocos argentinos. Pero ¿cómo se los seleccionaría, habida cuenta de que decenas de miles de europeos procuraban escapar de las caóticas condiciones dejadas por la guerra? Un detallado memorándum preparado por el general Pablo Dávila, comandante general de regiones militares, proponía un conjunto de recomendaciones que reflejaban la preocupación castrense por incorporar elementos fácilmente asimilables que no constituyeran un peligro en tiempos de guerra y fueran individuos sanos, susceptibles de reclutarse para el servicio militar. Las recomendaciones también ponían de relieve la aceptación de los dogmas racistas o étnicos que había elaborado Santiago Peralta, un personaje ultranacionalista y antisemita que por entonces era director de Inmigración.

De conformidad con estas concepciones, el memorándum militar sostenía que no había que permitir la entrada de personas de color, especialmente africanos o asiáticos, como inmigrantes. Debía darse preferencia a los europeos blancos, y dentro de esta categoría a los españoles e italianos, a quienes profesaran la religión católica, hablaran el idioma y supieran leer y escribir. España e Italia habían aportado anteriormente la mayor cantidad de inmigrantes, quienes demostraron su capacidad de asimilarse con rapidez e identificarse con los valores argentinos. En contraste, el memorándum mencionaba otros grupos, a saber, judíos e ingleses, de quienes sostenía que sólo se asimilaban de manera superficial y nunca se identificaban satisfactoriamente con las tradiciones y la nacionalidad argentinas. Su influencia en caso de que llegaran en gran cantidad (advertía el documento) representaría el peligro de que, en el futuro, la Argentina tuviera dentro de sus fronteras colectividades gobernadas por intereses extranjeros y claramente ajenos.

Como presidente de la comisión de estudio del CND encargada de recomendar políticas inmigratorias al Poder Ejecutivo, las ideas del general Dávila tenían un peso considerable. En los años siguientes, el consejo de dar preferencia a los inmigrantes católicos se llevó a la práctica y los italianos constituyeron el grupo nacional más grande que ingresó a la Argentina, aunque también se admitieron en gran cantidad católicos no italianos que huían de los regímenes comunistas. Pero lo que mantuvo un carácter constante a lo largo de esos años, aun des-

pués de que el abiertamente antisemita Santiago Peralta fuera obligado a renunciar a su cargo de director nacional de Inmigración, fue la implementación de la política respaldada por los militares de negar el permiso de entrada a los postulantes judíos. Pese a ello, hubo una considerable inmigración clandestina de individuos judíos y no judíos, la mayoría de los cuales pudo finalmente legalizar su presencia en el país de acuerdo con lo establecido por un decreto de Perón de 1948.

LOS MILITARES Y LAS CUESTIONES DE POLÍTICA PETROLERA

La influencia ejercida por las Fuerzas Armadas sobre las decisiones políticas en otras áreas de interés para el gobierno de Perón no siempre fue tan definida o uniforme, incluso cuando estaban en juego intensos sentimientos nacionalistas, como en el caso de la industria petrolífera. A fines de 1946, ni el general (R) Ramón Albariño, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), ni el coronel (R) Bartolomé Descalzo, director de la Comisión Nacional de Energía, plantearon objeciones cuando el presidente habló con representantes de la Standard Oil de Nueva Jersey sobre la posibilidad de constituir una compañía mixta con YPF para hacer exploraciones en busca de petróleo en el sur de la Argentina. Perón sabía que por sí sola YPF no podría satisfacer la creciente demanda de nafta y combustibles industriales y que la dependencia de las importaciones no haría más que aumentar. Sin embargo, la idea de invitar al capital extranjero a explotar recursos argentinos era un anatema para los nacionalistas de ciertos círculos tanto militares como civiles y despertaba fuertes resistencias en el Congreso, el gabinete y la misma YPF; Perón, que no estaba dispuesto a entablar una gran batalla política, desistió de profundizar las negociaciones.

La cuestión de la política oficial frente a las empresas extranjeras que participaban en la industria petrolífera volvió a surgir de diferente manera un año después. En ese momento, pocos días antes del discurso presidencial anual por el Día del Petróleo, el secretario de Aeronáutica De la Colina, el secretario de Industria Barro y el secretario de Hacienda Cereijo pro-

pusieron la expropiación inmediata de las instalaciones de comercialización y distribución de Standard Oil, Shell y otra compañía más pequeña, Ultramar. Esta medida permitiría al presidente hacer un anuncio caro al espíritu de los nacionalistas argentinos: que YPF tenía ahora el control total de la industria petrolífera del país.

Cuando el gabinete consideró por primera vez la propuesta, el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Bramuglia; el presidente del Consejo Económico, Miguel Miranda, y el presidente del Banco Central, Orlando Maroglia, junto con Perón, se opusieron a ella; ni el ministro de Guerra, Sosa Molina, ni el de Marina, Anadón, participaron activamente en la discusión, aunque su silencio parecía implicar un apoyo a su colega de la Fuerza Aérea. Sin embargo, cuando la propuesta se presentó para su consideración final en una segunda reunión de gabinete, aunque se decía que algunos oficiales del Ejército habían instado en privado al presidente a que la respaldara, el general Sosa Molina (que en el ínterin había hablado con un funcionario de la embajada de los Estados Unidos) la atacó vigorosamente. Su argumento de que la expropiación podía perjudicar intereses nacionales más importantes demostró ser decisivo, y la propuesta fue abandonada.

Los intereses nacionales que el ministro de Guerra tenía en mente eran los planes del Ejército, por entonces en marcha, para la adquisición de nuevas armas y la construcción de una industria armamentística nacional, dos objetivos que requerían la cooperación del gobierno norteamericano. En efecto, sólo seis meses antes, en junio de 1947, Washington había levantado por fin el embargo a la venta de equipos militares a la Argentina, impuesto durante la guerra. Las Fuerzas Armadas argentinas se consideraban en desventaja frente a su rival tradicional, Brasil, que se había unido a los aliados en la guerra contra el Eje y cuyas fuerzas habían recibido armas modernas de los Estados Unidos. Esa sensación de inferioridad militar prestaba urgencia a los esfuerzos por comprar armas, y también al compromiso del gobierno de desarrollar una capacidad de producción armamentística que pudiera impedir en algún conflicto futuro la repetición de la experiencia argentina en ambas guerras mundiales, en las que no había podido adquirir armas y equipos en el extranjero.

LOS ESFUERZOS POR CONSTRUIR UNA INDUSTRIA ARMAMENTÍSTICA MODERNA

El principal organismo responsable del desarrollo de una capacidad armamentística era la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), creada en 1941. Desde esa fecha y durante varios años, este organismo, bajo la conducción del general Manuel Savio, puso en funcionamiento una media docena de pequeñas fábricas de armas y se asoció al capital privado para constituir una serie de compañías mixtas en los campos minero, químico y metalúrgico. Con la terminación de la guerra en Europa, la DGFM planificó una importante expansión de las industrias militares; y en procura de las capacidades técnicas y gerenciales para dirigir estos emprendimientos, orientó su atención hacia Europa y en especial hacia Alemania. Con la colaboración de diplomáticos argentinos destinados en Suiza y la participación de una unidad de inteligencia presidencial especial, la DGFM pudo reclutar varias docenas de ingenieros y científicos alemanes a los que el fin de la guerra había dejado sin trabajo y organizar su traslado clandestino a la Argentina a pesar de que los aliados prohibían su partida.

En su celo por obtener los servicios de científicos e ingenieros, la DGFM se cuidó muy poco de sus afiliaciones políticas anteriores, siempre que no fueran comunistas. De tal modo, una cantidad sustancial (por lo menos el veinte por ciento) de los casi doscientos alemanes y austríacos que entraron a su servicio habían sido miembros del partido nazi; además, unos pocos también habían sido integrantes de las Schutzstaffel o SS. Por otro lado, la DGFM también contrató a más de cincuenta ingenieros polacos, muchos de los cuales habían combatido contra los alemanes durante la guerra.

Los planes elaborados por la DGFM bajo la conducción del general Savio contemplaban la creación de una infraestructura de industrias pesadas que pudieran proporcionar los elementos básicos a las fábricas de armas. Durante 1946 se hicieron sondeos en empresas norteamericanas con respecto a la posibilidad de diseñar y construir una fundición de cobre y una acería, pero no se podía llegar a ningún acuerdo mientras el embargo

de Estados Unidos estuviera vigente. La eliminación de este obstáculo en junio de 1947 allanó el camino para que la DGFM siguiera adelante con el proyecto que era el núcleo de los planes del general Savio, la construcción de una planta siderúrgica integrada. El Congreso votó su autorización para la constitución de una empresa mixta con un capital de cien millones de pesos, el ochenta por ciento de los cuales sería aportado por el Estado, y se firmó un contrato de diseño con una compañía norteamericana. La meta inicial era tener en funcionamiento en 1951 una acería con una capacidad de producción de trescientas mil toneladas de hierro y acero. Tal como resultaron las cosas, obstáculos de diverso tipo demoraron el proyecto, y la planta recién produjo acero seis años después de que Perón dejara la presidencia.

LA FUERZA AÉREA: EL PAPEL DE LOS INGENIEROS Y PILOTOS ALEMANES

Mientras la DGFM trataba de crear industrias que proporcionaran armas al Ejército, incluidos tanques y piezas de artillería, la Fuerza Aérea, a través del Instituto de Aerotécnica, procuraba desarrollar una industria de aviación militar. Lo mismo que la DGFM, apeló a los diseñadores e ingenieros alemanes para obtener las aptitudes profesionales necesarias. Y también en este caso, a pesar de que los aliados prohibían la partida de alemanes que hubieran desempeñado un papel de importancia en la guerra o que hubiesen participado en actividades criminales, el gobierno de Perón organizó el ingreso clandestino en la Argentina de un grupo de ingenieros que habían trabajado en la industria aeronáutica alemana. El más destacado era Kurt Tank, director de diseño de aviones militares de la fábrica Focke-Wulf de Bremen, que entró en 1947 con un nombre falso y los diseños microfilmados de varios tipos de aviones. Con garantías personales de apoyo del propio presidente, Tank armó un equipo de unos sesenta ingenieros y pilotos de prueba en la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba. En ella se diseñaron y construyeron los prototipos de varias aeronaves, la más notable de las cuales fue el Pulqui II, el primer caza argentino de reacción, que se probó con éxito en



El presidente Perón saluda al diseñador y piloto del avión "Pulqui II", el ingeniero Kurt Tank, luego de una exhibición, el 8 de febrero de 1951.

1951 en presencia de Perón. Lamentablemente, varias de las pruebas ulteriores terminaron en caídas fatales.

Al prestar apoyo al trabajo de la fábrica de Córdoba, Perón era consciente de que las necesidades inmediatas de la Fuerza Aérea no podían esperar hasta un futuro incierto y que sería indispensable comprar aviones a algún proveedor extranjero. La oportunidad de hacerlo surgió a principios de 1947 cuando, pese a las protestas de los Estados Unidos, que todavía trataban de mantener el embargo de armas, Gran Bretaña manifestó su disposición a vender aviones militares a reacción y buques de combate. El resultado fue un acuerdo por el cual la Argentina adquirió cien cazas a reacción Meteor y 36 bombarderos Avro-Lincoln, junto con varias naves, por un valor de veinte millones de libras esterlinas, que se deducirían de los créditos bloqueados que la Argentina había acumulado durante la guerra. La Fuerza Aérea tenía ahora aviones modernos, pero aún necesitaba que sus pilotos recibieran entrenamiento en las téc-

nicas de la guerra en el aire. Sin embargo, en vez de utilizar pilotos del país del que procedían los aviones, contrató los servicios de un grupo de ex pilotos de la Luftwaffe alemana, encabezados por el general Adolfo Galland, que había combatido contra los británicos en la reciente guerra.

LOS CONVENIOS MILITARES CON LOS ESTADOS UNIDOS

A fin de satisfacer las necesidades inmediatas de armamento y equipos modernos para el Ejército, hasta tanto éstos pudieran producirse en el país, la Argentina recurrió a los Estados Unidos. La aceptación por parte del presidente Perón de los términos del Tratado Interamericano de Defensa firmado en Río de Janeiro en septiembre de 1947 allanó el camino para que el ministro de Guerra, Sosa Molina, expusiera esas necesidades ante funcionarios del Ejército norteamericano. Tras varios meses de discusión, se llegó a un acuerdo por el cual Sosa Molina reducía su pedido original y aceptaba recibir del Ejército de los Estados Unidos el equipamiento organizativo, con exclusión de los vehículos, para seis unidades de tropas mecanizadas. Proveedores privados europeos suministraron tanques y camiones excedentes en condiciones operativas. De todos modos, el Ministerio de Guerra obtuvo un permiso para enviar una misión de compra a los Estados Unidos a fin de negociar directamente con la industria privada la compra de más equipos militares y la maquinaria para fabricarlos. En contraste con lo que hizo la Fuerza Aérea, la decisión del gobierno de Perón de adquirir equipamiento militar estadounidense para el Ejército condujo lógicamente a dar un paso más: solicitar que personal del Ejército norteamericano entrenara a los soldados argentinos en su uso. En octubre de 1948, representantes de los dos gobiernos firmaron un convenio de misiones militares que establecía el envío de asesores norteamericanos para el Ejército argentino, con lo que al menos en sentido formal se sustituía la prolongada tradición de éste de recurrir a asesores militares alemanes.

EL PRESIDENTE Y LAS FUERZAS ARMADAS: LOS PRIMEROS AÑOS

Desde el momento de su asunción hasta principios de 1949, las relaciones del presidente Perón con las Fuerzas Armadas fueron de respeto mutuo y no interferencia. Los militares no se inmiscuían en las esferas no militares y disfrutaban a su vez de considerable autonomía en el manejo de sus asuntos. Con presupuestos anuales estables, podían implementar un programa de construcciones militares que incluía la creación de nuevas bases con viviendas, hospitales y hasta colonias de vacaciones; también podían completar una reestructuración de sus fuerzas. En el caso del Ejército, esa reestructuración produjo una disminución de sus efectivos, ya que fueron convocados al servicio menos conscriptos. Al mismo tiempo, sin embargo, una decisión de 1945 por la que prácticamente se duplicaba la cantidad de ingresantes al Colegio Militar resultó en un considerable aumento del cuerpo de oficiales.

Bajo la firme conducción del ministro de Guerra Sosa Molina, el personal del Ejército no tenía incentivos para ventilar o exhibir sus opiniones o lealtades políticas. En las recomendaciones de ascensos y destinos, Sosa Molina trataba de poner la competencia profesional por encima de cualquier otra consideración, con el resultado de que los oficiales a quienes no se sabía partidarios de Perón podían proseguir normalmente su carrera y en algunos casos eran nombrados para los mandos más altos. Pero también es cierto que las unidades con base en la Capital Federal y sus alrededores, que podían representar una amenaza potencial para el gobierno, estaban en manos de oficiales amigos del Presidente. Por otra parte, en 1947 Sosa Molina llevó a cabo una purga de oficiales conocidos por haber actuado contra Perón en los acontecimientos de octubre de 1945, a los que no obstante se les había permitido mantenerse en actividad durante más de un año. El retiro forzoso de setenta oficiales entre los rangos de mayor y general, muchos de ellos con esperanzas de permanecer en el servicio, los dejó profundamente resentidos, transformándolos en un reservorio potencial de futuras conspiraciones.

Retrospectivamente, 1949 demostraría ser una divisoria de aguas en las relaciones del presidente con los militares, como

resultado de los cambios que se producían en la situación económica y en las esferas constitucional y política. El crecimiento económico que había caracterizado los dos primeros años de la presidencia de Perón se interrumpió a fines de 1948; las reservas de oro y divisas extranjeras habían mermado y estaba en pleno desarrollo una grave crisis de la balanza de pagos, especialmente en el área del dólar. Lo que en un inicio parecía un retroceso temporario iba a continuar durante varios años, en los que los ingresos por exportaciones se vieron adversamente afectados por la declinación del sector agrícola, muy golpeado por una serie de sequías y los efectos negativos de las políticas de precios oficiales. La inflación se convirtió en un problema persistente y los ingresos reales se redujeron. Para enfrentar la crisis en la balanza de pagos, el gobierno recurrió a diversas medidas, desde tratar de reducir el consumo interno de carne hasta imponer restricciones a las importaciones. Una de las víctimas de la situación fue la planta siderúrgica auspiciada por el Ejército; el gobierno no pudo aportar los ochenta millones de pesos que correspondían a su porcentaje de capital y al mismo tiempo se negó a permitir que la acería gestionara créditos extranjeros para financiar la compra de equipamiento.

El comienzo de la crisis económica generó demandas para que se destituyera al principal asesor económico del Presidente, Miguel Miranda. Anteriormente, como presidente del Banco Central y del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), con su control casi monopólico del comercio exterior, Miranda había sido acusado de usar su cargo para obtener ganancias personales, pero se las había arreglado para conservar la confianza de Perón. Esta vez, sin embargo, entre sus opositores se contaba el ministro de Guerra Sosa Molina, que probablemente todavía sentía irritación por la interferencia del IAPI en los esfuerzos de la empresa siderúrgica por importar una fundición en 1947 y por la desaparición de fondos que el Ejército esperaba utilizar. Por otra parte, la campaña para desalojar a Miranda se volvió irresistible cuando la esposa del Presidente, Eva Perón, prestó su apoyo al movimiento.

Pese a su postura común en la cuestión de la destitución de Miranda, el papel creciente de Eva Perón en el gobierno era una fuente de preocupaciones para el ministro de Guerra y también para una serie de antiguos oficiales entre los que se

contaban los tenientes generales (R) Carlos von der Becke. ex comandante en jefe del Ejército, y Juan Pistarini, ministro de Obras Públicas. En un episodio que aún está envuelto en el misterio, en febrero de 1949, estos oficiales trataron de persuadir a Perón de que sacara a Evita del país o al menos declarara públicamente que ella ya no tendría ningún papel en el gobierno. Este intento no sólo fracasó, sino que en una ceremonia realizada en Campo de Mayo, una de las principales bases del arma, y a la que asistieron el Presidente y su mujer, el general Sosa Molina se sintió obligado a hacer un discurso en el que elogió a la señora de Perón y sus buenas obras, a la vez que ordenaba que sus propias observaciones se dieran a conocer en todas las unidades del Ejército.

Este episodio tendría efectos a largo plazo para el general Sosa Molina y el Ejército. A los ojos de los oficiales más jóvenes, aquél ya no era el líder duro e independiente que había protegido el arma de la interferencia externa, y en efecto su personalidad parecía haber sufrido un cambio. Perón mismo decidió que había llegado la hora de hacer una modificación en la jerarquía militar y, aprovechando la oportunidad que le brindaba la reciente reforma constitucional para modificar el gabinete, rebajó a Sosa Molina al recién creado cargo de ministro de Defensa. Para manejar el Ministerio de Ejército, como ahora se llamaba esa anterior dependencia estatal, el Presidente apeló a un viejo amigo y ex subordinado, un hombre a quien le sería difícil oponerse a sus deseos, el general Franklin Lucero.

Discurso del ministro de Guerra Sosa Molina en defensa de Eva Perón, marzo de 1949

"No es otro el significado de encontrarse entre nosotros como especial invitada de honor, que el de un rotundo desmentido a versiones que señalan al Ejército contrariando su acción y, por ende, el sentir del pueblo que la apoya, para despertar así esta confianza hacia la institución. Sepa el país que las Fuerzas Armadas como parte viviente de su pueblo sienten con la misma intensidad en su fuero interno la grandiosa obra de justicia social que encara como estoica abanderada de sus reivindicaciones."

La reforma constitucional que una convención dominada por los peronistas adoptó en marzo de 1949 contra la oposición de los partidos radical, socialista y otros, puso en marcha cambios que en definitiva afectarían las relaciones de las Fuerzas Armadas con el gobierno. La reforma no sólo eliminó el obstáculo constitucional a la reelección de Perón como primer mandatario, sino que introdujo una orientación estatista y colectivista en lugar del espíritu liberal e individualista que había caracterizado la carta original del siglo XIX. Por otra parte, la reforma daba ahora status constitucional a las ideas centrales de la doctrina peronista. Al hacerlo, fortalecía las tendencias hegemónicas que estaban presentes en el partido y el gobierno peronistas.



Ricardo Balbín durante su cautiverio.

Estas tendencias se manifestaron en una serie de medidas destinadas a restringir las posibilidades de acción de una oposición política eficaz. En la Cámara de Diputados, dominada por los peronistas, los miembros de la Unión Cívica Radical eran frecuentemente sancionados y no se les permitía hablar cuando planteaban cuestiones embarazosas, en especial si implicaban críticas al Presidente o a Evita. Fuera del Congreso, la "ley de desacato", recientemente enmendada, se usaba como un instrumento para intimidar a los críticos. Un ejemplo fue el del diputado radical Ricardo Balbín, a quien se privó de su inmunidad parlamentaria y se lo sentenció a una prolongada pena de cárcel por expresiones vertidas durante una campaña electoral. Por otra parte, para garantizar la continuidad de la dominación peronista del sistema político, una nueva ley negó a los partidos de oposición el derecho a formar coaliciones electorales.

La acometida peronista para limitar la crítica se extendió

también a las radios y los diarios del país. El gobierno tomó el control directo o indirecto de todas las estaciones radiofónicas de la Argentina y se aseguró de que las voces de la oposición no pudieran escucharse, sobre todo durante los procesos electorales. Circunstancias bastante similares vivieron los diarios, varios de los cuales fueron adquiridos por un consorcio asociado a Eva Perón; a partir de entonces en todos ellos se escuchó una sola voz. Diarios antigubernamentales como *La Vanguardia*, del Partido Socialista, o *El Intransigente*, de la ciudad de Salta, fueron clausurados ya en 1947, y muchos otros corrieron la misma suerte en los años siguientes. La culminación de este proceso fue la confiscación, en 1951, del crítico más vigoroso y firme del régimen peronista, el diario *La Prensa* de Buenos Aires. Confiscado por una ley del Congreso, quedó en manos de la organización que era el principal respaldo del régimen de Perón, la Confederación General del Trabajo (CGT).

LOS ESFUERZOS PRESIDENCIALES POR PERONIZAR A LOS MILITARES

La tendencia hegemónica recién mencionada cobró nuevo impulso después de 1950, en el esfuerzo por integrar al movimiento peronista las instituciones hasta entonces no políticas. Con sus conceptos centrales de justicia social, independencia económica y soberanía política incorporados al preámbulo de la Constitución reformada, los partidarios del Presidente se propusieron crear en varios sectores de la sociedad organizaciones económicas, culturales y sociales que proclamaran la aceptación de su ideología, ahora llamada "doctrina nacional", y se convirtieran en parte del movimiento. Fue inevitable, tal vez, que las Fuerzas Armadas se transformaran en blanco de esos esfuerzos.

El proceso de creación de un sentimiento de identificación y afinidad ideológica entre las Fuerzas Armadas y el presidente evolucionó con el paso del tiempo. El mismo Perón desempeñó un papel directo con sus frecuentes visitas a instalaciones militares y mediante discursos que destacaban los estrechos lazos que existían entre el pueblo argentino y las Fuerzas Armadas; lazos que él atribuía a la creencia de ambos sectores en

los principios de su movimiento. El Congreso, por su parte, alentó el proceso de integración derogando una vieja disposición del derecho militar. Los oficiales invitados a aceptar la postulación de un partido político para cargos electivos podían ahora computar el tiempo transcurrido en el cargo como parte de la antigüedad requerida para obtener ascensos. Sin embargo, el hecho de que un oficial tuviera que obtener la aprobación previa del ministro de su fuerza antes de aceptar esa postulación virtualmente garantizaba que la práctica quedara limitada a los candidatos del partido peronista.

En el Ejército, el general Franklin Lucero, el nuevo ministro, se esforzó por promover un sentimiento de aprecio, tanto personal como profesional, hacia el presidente Perón, por los diversos beneficios que concedía a los integrantes de la fuerza. Entre ellos se contaba un decreto reservado que establecía un aumento salarial más alto que el otorgado a los empleados civiles para compensar la inflación. Un beneficio especial que se concedía a un grupo selecto de oficiales (menos del diez por ciento de todo el cuerpo) era un permiso que autorizaba al receptor a comprar un automóvil importado a un precio llamado "de lista", en un momento en que, como resultado de los controles a la importación, el valor de mercado era de más del doble. El oficial que recibía este regalo podía comprar un vehículo para sus propias necesidades o bien vender el permiso y embolsar una suma sustancial. La idea de que de ese modo se compraba su lealtad no parecía preocupar a los oficiales que recibían los permisos.

Los cambios en las leyes y reglamentos que regían los ascensos y retiros beneficiaron a un sector mucho más grande de la oficialidad. El tiempo mínimo en el grado para estar en condiciones de ascender se redujo en todos los niveles desde teniente primero hasta general de brigada, lo que abría la perspectiva de promociones más rápidas y permitía que un oficial llegara al rango de general a menor edad que nunca antes. En el caso de los oficiales a quienes no se consideraba susceptibles de ascensos, las nuevas políticas de retiro les permitían permanecer en actividad por períodos más largos que en el pasado, con lo que conservaban los salarios y los beneficios correspondientes a su jerarquía.

Otra tendencia de la política para el personal militar, aparen-

temente concebida para fortalecer la lealtad del Ejército en el nivel superior, fue la significativa expansión de los puestos presupuestados para coroneles y generales. Entre 1950 y 1955, en un periodo en el que la cantidad total de efectivos del Ejército se mantuvo estable y el cuerpo de oficiales en su conjunto disminuyó en número, los cargos para coroneles se incrementaron en un cuarenta por ciento (214 a 299) y para generales en un 47 por ciento (61 a 90). Y para que no se crea que éstos eran meros aumentos en los papeles, la cantidad de generales en actividad en 1955 se elevó a 96. Más importante, tal vez, que la cantidad de ascensos era la forma de elección de los nuevos oficiales superiores. Durante la permanencia de Lucero en el Ministerio de Ejército, las consideraciones políticas parecen haber desempeñado un papel más importante que con su predecesor. Si bien de vez en cuando ascendía algún oficial políticamente neutral, la mayoría de los promovidos a generales eran partidarios de Perón. Por otra parte, y en contraste con lo que ocurría antes de 1949, las posiciones más altas en la estructura de mandos estaban ahora en una proporción abrumadora en manos de generales cercanos al Presidente. La única excepción era el general Eduardo Lonardi, quien fue designado comandante del Primer Cuerpo, con base en Rosario, y con quien el Presidente, al parecer, se sentía especialmente obligado.

EL INICIO DE LA ACTIVIDAD CONSPIRATIVA CÍVICO-MILITAR: EL INTENTO DE GOLPE DE SEPTIEMBRE DE 1951

Durante el quinto año de Perón en la presidencia el clima político de la Argentina se cargó cada vez más de tensiones, a medida que resultaba más y más notorio que aquél se preparaba para su reelección. Algunos líderes opositores, frustrados por las limitaciones impuestas a su libertad de expresión, comenzaron a pensar seriamente en recurrir a métodos extralegales para impedir otros seis años de gobierno peronista. La inflación constante y los signos de división en las filas del movimiento obrero, como lo evidenciaban una serie de paros que culminaron en la huelga de los ferroviarios en enero de 1951,

alentaban a los dirigentes que creían que el sostén de Perón en el poder era por entonces más débil que nunca y que podrían encontrar apoyo en círculos militares. Hallaron una respuesta estimulante en las filas de los oficiales retirados, muchos de los cuales se habían entregado a conspiraciones de café desde su retiro obligado cuatro o más años antes.

Lo novedoso en 1951, sin embargo, era la disposición de algunos oficiales en actividad a participar en una conjura antiperonista. Los esfuerzos de Perón y sus ministros militares por promover la conformidad ideológica, y las decisiones sobre el personal que parecían valorar la lealtad individual a expensas de la competencia profesional, tenían un impacto negativo en oficiales de las tres armas, el Ejército, la Armada y la Aeronáutica. La mayor concentración de oficiales hostiles se encontraba en la elite intelectual de los militares, las planas mayores de los colegios militares y navales de la zona de Buenos Aires. Un factor que contribuía a su malestar pero que también inquietaba a muchos otros oficiales era la campaña de la CGT para lograr que Evita fuera designada candidata a vicepresidente y acompañara a Perón en la fórmula para la próxima elección presidencial. La idea de que una mujer ocupara ese cargo (y ni hablar de Evita, con su atractivo popular y su capacidad para la intriga) era demasiado audaz para los hombres que integraban las Fuerzas Armadas.

La Escuela Superior de Guerra, en la que tal vez el ochenta por ciento de sus cuatrocientos directores de curso, profesores y oficiales cursantes eran opositores a Perón, se convirtió en 1951 en el centro de un movimiento conspirativo para destituir al Presidente antes de que se produjera su reelección. Sin embargo, casi desde el inicio el movimiento estuvo plagado de rivalidades internas, dado que dos grupos competían por el control de la conjura. Uno de ellos buscaba el liderazgo del general de división Lonardi, el antes mencionado comandante del Primer Cuerpo de Ejército con sede en Rosario. Lonardi, un oficial muy estimado, había obtenido el segundo lugar en su promoción del Colegio Militar y servido en la artillería hasta su ascenso a general. De temperamento modesto y calmo en sus modales, se lo conocía como un profesional dedicado que nunca había intervenido en política. El hecho de que en marzo de 1951 un grupo de oficiales de la Escuela Superior de Guerra

consiguiera convencerlo de aceptar la conducción de su movimiento indica hasta qué punto las políticas de Perón habían polarizado la opinión militar. El grupo conspirativo rival estaba encabezado por un oficial retirado, el general de brigada Benjamín Menéndez. En su personalidad y su experiencia profesional, éste era casi lo opuesto de Lonardi. Impetuoso oficial de caballería, había librado varios duelos contra otros oficiales, lanzado desafíos a políticos civiles y participado en una serie de conspiraciones, ninguna de ellas exitosa, en las décadas del treinta y el cuarenta. Nacionalista pro alemán durante la guerra, había suavizado sus posturas con el paso de los años y, a la vez que mantenía contactos dentro de las Fuerzas Armadas, había establecido vínculos con una serie de dirigentes políticos civiles, especialmente conservadores. Incitado por éstos a entrar en acción y convencido de que el sentimiento antiperonista en el Ejército estaba cerca de explotar, se lanzó con avidez a encabezar el movimiento y dirigir un golpe exitoso por primera vez en su carrera.

A instancias de los partidarios civiles y militares del golpe propuesto, incluidos los participantes de la Armada y la Fuerza Aérea, los líderes de ambos grupos se reunieron para ver si podían crear un movimiento unificado. Sin embargo, la renuencia de cada uno de los dos generales a subordinarse al otro, junto con diferencias con respecto a las tácticas revolucionarias y las ideas para un gobierno posterior a Perón, demostraron ser obstáculos insuperables. Menéndez apostaba todas sus fichas a moverse lo más rápidamente posible; Lonardi era más cauteloso y prefería posponer la acción hasta estar seguro de contar con mayor apoyo; Menéndez proponía establecer una dic-



El general Benjamín Menéndez en una caricatura de Mundo Peronista, *1951.*

tadura provisional, abolir la reforma constitucional de 1949 y barrer con la mayor parte de la legislación peronista; Lonardi creía necesario preservar la mayoría de las leyes sociales de Perón. Entre tanto, el gobierno sabía que algo estaba en vías de preparación y mantenía una estrecha vigilancia sobre los oficiales sospechosos de conspiración.

A fines de agosto comenzaron a producirse en el escenario electoral ciertos acontecimientos que afectarían el clima de la conjura. La campaña de Perón para su reelección llegó al climax el 22 de ese mes, cuando una enorme concentración organizada por la CGT proclamó su candidatura y la de Evita a la presidencia y la vicepresidencia respectivamente. Aunque Perón indicó que aceptaría, Evita pidió que le concedieran algunas horas antes de responder. De hecho, nueve días después anunció, en una emotiva alocución radial, que renunciaba a su candidatura. Al parecer, durante ese lapso Perón había sondeado las posibles reacciones a su postulación y llegado a la conclusión de que las Fuerzas Armadas no la tolerarían. Irónicamente, un factor que contribuyó a que sacara esa conclusión fue la solicitud del general Lonardi, pocos días después de la concentración, de que lo relevaran del mando del Primer Cuerpo de Ejército. Sin sospechar que Lonardi ya estaba envuelto en la conspiración o que la renuncia se relacionaba con su deseo de desempeñar un papel más activo, es posible que Perón haya creído que si un oficial de su estatura no era capaz de conciliar sus opiniones privadas con su sentido del deber, poco podía esperarse de otros oficiales que carecían de las cualidades profesionales de Lonardi.

Al suprimir una de las fuentes inmediatas de descontento, el desplazamiento de la candidatura de Evita cambió las perspectivas de éxito del movimiento revolucionario en gestación. El propio general Lonardi empezó a vacilar y luego se retiró de la conjura, tras dejar a sus seguidores en libertad de acción para imitar su ejemplo o unirse al grupo de Menéndez, cosa que algunos oficiales subalternos hicieron. El general Menéndez, sin embargo, estaba decidido a seguir adelante aun sin contar con la seguridad de un amplio respaldo, y el 28 de septiembre lanzó su levantamiento. Geográficamente limitado a las instalaciones del Ejército y la Aeronáutica en los alrededores de la Capital y a la base aérea naval de Punta Indio, fue sofocado

con relativa facilidad. Una mala planificación, errores en su ejecución y una exagerada creencia en que el accionar de unos pocos valientes generaría un torrente de apoyo en las tres fuerzas contribuyeron a su fracaso.

SECUELAS DEL GOLPE FALLIDO: MEDIDAS REPRESIVAS Y PURGA DEL CUERPO DE OFICIALES

El levantamiento abortado de Menéndez tuvo consecuencias de gran alcance tanto para el país como para las Fuerzas Armadas. El gobierno de Perón proclamó de inmediato el estado de guerra interna, similar a un estado de sitio, que le permitía suspender las garantías individuales y detener a personas sin someterlas a juicio. Utilizaría ese instrumento no sólo contra los conspiradores sino para reprimir a los opositores legítimos, como quedó demostrado durante las semanas precedentes a las elecciones del 11 de noviembre de 1952, en las que se prohibieron las reuniones de la Unión Cívica Radical y fueron detenidos algunos candidatos del Partido Socialista. El estado de guerra interna seguiría vigente mientras Perón permaneciera en el poder.

Pese a su fracaso, el levantamiento de septiembre de 1951 tuvo una seria incidencia en las relaciones de Perón con las Fuerzas Armadas, ya que él no sólo quería erradicar a los elementos desleales activos sino a quienes tenían una actitud pasiva o no habían sido suficientemente enérgicos en la detección y denuncia de la conjura. Decidido a empezar por la cima, el Presidente reemplazó a los ministros de Aeronáutica y Marina y sólo dejó en sus puestos al general Lucero como ministro de Ejército y a Sosa Molina como ministro de Defensa. Se ordenó realizar una investigación sobre la conducta de todos los oficiales y suboficiales durante la emergencia y se aplicaron diversas sanciones. Dentro del Ejército, la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Superior Técnica y el Colegio Militar fueron las instituciones más gravemente afectadas, ya que muchos de sus instructores, integrantes de la plana mayor y oficiales cursantes recibieron sentencias de cárcel, fueron obligados a retirarse o se los destinó a guarniciones remotas.

El general Menéndez y los otros dirigentes del movimiento

quedaron a disposición de un tribunal militar. Pero a pesar de que la prensa peronista exigía su ejecución, Menéndez fue sentenciado a 15 años de cárcel en una prisión patagónica más la expulsión de la fuerza; sus principales colaboradores recibieron penas de cuatro a seis años de cárcel. Un total de 111 oficiales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea fueron condenados a la cárcel; otros 66, que habían huido del país o se habían ocultado, no pudieron ser juzgados, pero se los dio de baja por rebeldes. Si se incluye a quienes recibieron sanciones administrativas, alrededor de doscientos oficiales vieron frustradas sus carreras como consecuencia del levantamiento de 1951.

Pero la agitación militar no terminó ahí. En los meses siguientes, el Presidente reemplazó al general Ángel Solari, comandante en jefe del Ejército que había reprimido la rebelión, y dispuso el retiro de otros 14 generales. La mayoría de estos oficiales habían empezado su carrera en la caballería o la artillería, las armas a las que pertenecían Lonardi y Menéndez. Al designar a los nuevos generales, Perón apeló cada vez más a oficiales de su propia arma, la infantería, presuntamente en la creencia de que podría contar con su lealtad para suprimir cualquier nueva conspiración. Pero dada la naturaleza autoritaria del régimen, la desavenencia de los oficiales retirados y la persistencia entre los militares en actividad, en especial los oficiales navales, de una actitud crítica hacia Perón, su entorno y sus políticas, era prácticamente inevitable que se produjeran nuevos intentos en su contra.

En efecto, casi inmediatamente después de las elecciones del 11 de noviembre, que determinaron la reelección del Presidente para un segundo mandato por casi dos tercios de los votos y una abrumadora mayoría peronista en el Congreso, se organizó una nueva conspiración dirigida por el ex coronel José F. Suárez. En ella participaban algunos de los civiles y oficiales retirados que habían apoyado la anterior conjura antiperonista. Esta vez, sin embargo, en su desesperación por acabar con el régimen, sus planes giraban en torno de un asalto a la residencia presidencial y del asesinato de Perón y su esposa. La fecha prevista para el ataque era el 3 de febrero, aniversario de la batalla de Caseros que había derrocado a Rosas. No obstante, antes de que los conspiradores pudieran poner en prácti-

ca su plan, un infiltrado alertó a las autoridades. Suárez y sus principales colaboradores fueron detenidos, y aquél torturado. Acto seguido se produjo la detención de cientos de civiles, miembros de la Unión Cívica Radical y otros partidos opositores; más adelante, muchos recibieron prolongadas sentencias de prisión.

PERÓN Y LOS MILITARES: FRÁGIL ESTABILIDAD, 1952-1954

Desde mediados de 1952 hasta fines de 1954, las relaciones entre el gobierno de Perón y las Fuerzas Armadas transcurrieron sin conflictos graves. La muerte de Eva Perón en julio de 1952 eliminó del escenario uno de los principales motivos de inquietud castrense. Vale la pena señalar que los militares no tomaron parte en la siguiente oleada de tensiones políticas que conmovió a la Capital. Éstas se produjeron en abril de 1953, en medio de revelaciones de corrupción en la oficina privada de la presidencia, que comprometían al secretario de Perón, Juan Duarte, hermano de la difunta Eva Perón. Elementos de la oposición mostraron su desprecio por el régimen haciendo estallar bombas debajo de la Plaza de Mayo, en coincidencia con un discurso que el Presidente dirigía a una multitud de sus seguidores. La reacción de Perón consistió en lanzar ataques contra las sedes de los partidos opositores, incendiar la Casa del Pueblo del Partido Socialista y quemar el edificio que para muchos argentinos era el símbolo de la clase alta, el Jockey Club de la calle Florida. Una vez más, fueron arrestados veintenas de dirigentes políticos de la oposición, pero en la segunda mitad del año gestos de ambos lados condujeron a un alivio de las tensiones y culminaron en la promulgación de una ley de amnistía en diciembre. La ley establecía la liberación de los presos políticos civiles, pero los militares que hubieran sido condenados por tramar actos de violencia contra el gobierno debían cumplir su sentencia.

Durante la mayor parte de 1954, las relaciones de las Fuerzas Armadas con el gobierno mantuvieron un curso estable, aunque las medidas tomadas por el ministro de Ejército Lucero para politizarlas aún más tendrían en definitiva un efecto

erosivo. No sólo se exigía ahora que la doctrina nacional de Perón fuera una materia de estudio en todos los establecimientos educativos militares, sino que la separación entre la actividad profesional y la política era cada vez más ignorada. En vísperas de las elecciones vicepresidenciales y parlamentarias de abril, por ejemplo, el general Lucero invitó a los comandantes de todas las unidades del Ejército del Gran Buenos Aires a un almuerzo en su residencia de Campo de Mayo, a fin de que se reunieran con el candidato peronista a la vicepresidencia, Alberto Teisaire. Por otra parte, Lucero y otros altos oficiales, deseosos de demostrar su lealtad al Presidente, se entregaron a una orgía de adulación.

Sin tener en cuenta la reserva que caracterizaba tradicionalmente el discurso público de los líderes militares, utilizaban oportunidades tales como el Día del Ejército para ensalzar las virtudes del presidente Perón. Y en otro desvío de la tradición, iniciaron la práctica de bautizar unidades militares con el nombre de "General Juan D. Perón", en vez de designarlas con el nombre de algún héroe militar decimonónico, como se había hecho hasta entonces.

Adhesión incondicional del ministro de Defensa Sosa Molina al general Perón al celebrarse el Día del Ejército el 29 de mayo de 1953

"Señor, estamos aquí para testimoniaros solemnemente ante propios y extraños y con la más alta, genuina y resonante expresión de nuestros sentimientos, la más firme solidaridad y absoluta identificación con la ciclópea obra del gobierno que realizáis a favor del pueblo argentino y con la orientación de vuestra política internacional... Es que le asignamos tal trascendencia y estamos tan convencidos de que vuestra política interpreta los sentimientos del pueblo argentino que los componentes de las Fuerzas Armadas —que son parte integrante de ese mismo pueblo— han sentido la necesidad de decirlo pública y solemnemente para que todos, propios y extraños, sepan que ellos unen en este caso al principio inconmovible de subordinación que los alienta, un fuerte sentimiento de adhesión inquebrantable al Excelentísimo Señor Presidente y la noble causa que representa..."

Para los oficiales del Ejército con mentalidad profesional, estas medidas agravaban una sensación de malestar que ya empezaba a crecer como resultado de otras disposiciones de la conducción militar. Una de ellas era el programa de autosuficiencia del general Lucero: la exigencia de que las unidades del Ejército produjeran sus propios alimentos y forraje en las vastas zonas de su jurisdicción. Cualquiera fuera la lógica subyacente al programa, los oficiales del arma no consideraban la agricultura como parte de su profesión y se sentían agraviados por el hecho de que, en su inspección de unidades, el ministro de Ejército pareciera hacer mayor hincapié en la producción de alimentos que en los logros militares. Su insatisfacción aumentaba cuando comprendían cada vez más que sólo los oficiales que hacían una demostración positiva de lealtad al gobierno podían alcanzar los rangos más altos.

FACTORES QUE PRECIPITARON EL DESCONTENTO MILITAR: LAS POLÍTICAS ECLESIÁSTICA Y PETROLERA

Los problemas que convirtieron el malestar profesional de una serie de oficiales en la disposición a participar en una acción armada contra el gobierno surgieron en el curso de un período de seis meses a partir de noviembre de 1954. Fue en esa fecha cuando Perón, como reacción a la crítica católica contra el Ministerio de Educación debido a los esfuerzos de éste por organizar a los estudiantes de los colegios secundarios, lanzó una denuncia de las actividades de la Acción Católica y de algunos miembros del clero. Lo que comenzó como un intercambio retórico evolucionó rápidamente, ante las protestas católicas, hasta transformarse en una serie de medidas anticlericales: limitación de las procesiones religiosas callejeras; clausura del diario católico *El Pueblo*; leyes precipitadamente aprobadas por el Congreso que legalizaban el divorcio y la prostitución; y pasos preliminares para la convocatoria de una convención constitucional que eliminara el status especial de que disfrutaba la Iglesia Católica.

Más que cualquier otro factor, la campaña anticlerical del gobierno fue el catalizador que socavó la lealtad de muchos

militares hacia Perón. Ya descontentos por las razones antes mencionadas, encontraron en su ataque a la Iglesia una justificación moral para violar sus juramentos de lealtad al gobierno. Hay que señalar que en esa época, para ser oficial de combate del Ejército, era preciso ser al menos nominalmente católico. Pero aun los oficiales que no eran especialmente religiosos y que tal vez no se habrían inquietado por la nueva legislación tenían a menudo familiares mujeres que sí lo eran y los instaban a movilizarse contra el gobierno. También sufrían las presiones de los elementos nacionalistas católicos, tanto civiles como militares, que habían apoyado a Perón en su primera elección. Ahora, explotando el clima de tensión creado por el conflicto con la Iglesia, estos últimos montaban una amplia campaña de propaganda dirigida a convencer a los miembros de las Fuerzas Armadas de que se volvieran contra el gobierno.

Otra cuestión que tuvo peso en manos de los opositores fue la decisión del gobierno de invitar a una empresa estadounidense, la Standard Oil de California, a explorar y explotar los recursos petrolíferos del sur de la Argentina. Desde un punto de vista económico, éste era un paso lógico, habida cuenta de la creciente dependencia argentina de las importaciones de petróleo y la incapacidad de YPF de responder a una demanda en aumento. En efecto, ya en 1953 el gobierno había llegado a la conclusión de que se necesitaban capitales extranjeros para llevar a cabo sus planes de industrialización, por lo que había promulgado leyes para atraer inversores de los Estados Unidos y Europa. La mejoría del clima de inversiones había permitido que SOMISA, la compañía siderúrgica controlada por ingenieros militares, comprara en 1954 al gobierno norteamericano un tren de laminación para fabricar planchas de acero, y que un año después obtuviera la promesa de un préstamo del Export-Import Bank para financiar la compra de un alto horno. Los militares se sentían complacidos con esos hechos y aparentemente también consideraban beneficioso que corporaciones extranjeras instalaran una planta de montaje de automóviles y una fábrica de tractores.

El hecho de permitir que una gran empresa estadounidense, la Standard Oil de California, cumpliera un papel de importancia en la explotación del petróleo argentino, sin embargo, exponía al gobierno a la acusación de que entregaba el control de

un recurso considerado vital para la preservación de la soberanía nacional. El contrato con la Standard se convirtió en la víctima propiciatoria para una heterogénea oposición que atravesaba todo el espectro político, pero fue utilizado en especial por los tradicionales adversarios radicales, socialistas y conservadores de Perón para apelar a la sensibilidad de aquellos cuya misión era defender esa soberanía, las Fuerzas Armadas. A la luz de su ulterior disposición a aceptar la inversión extranjera en la industria petrolífera, es lícito preguntarse si el contrato firmado por el gobierno de Perón fue una causa real o sólo un pretexto para las medidas tomadas por los militares en 1955 a fin de expulsarlo del poder.

EL FRACASO DE LA VIOLENTA REBELIÓN CÍVICO-MILITAR DE JUNIO DE 1955

La rebelión armada que sus partidarios civiles y militares llamarían "Revolución Libertadora" atravesó dos etapas: una acción geográficamente limitada en junio de 1955 que fracasaría en sus objetivos; y las operaciones militares más amplias que, tres meses después, enviarían al presidente Perón al exilio. Los iniciadores de la primera fase fueron oficiales navales, miembros de un arma que había podido evitar someterse a un estrecho control peronista. Los oficiales de la Armada, en parte debido a la naturaleza de sus experiencias profesionales, tendían a identificarse con grupos de clase alta y sectores políticos que se oponían a Perón. Con todo, y como el funcionamiento de los buques de la fuerza exigía un personal técnicamente calificado y experimentado, el Presidente no había podido prescindir de ellos o reemplazarlos con partidarios leales. A lo largo de 1954, oficiales de la gran base naval de Puerto Belgrano llegaron incluso a elaborar planes estratégicos para un movimiento revolucionario contra Perón que implicaba el despliegue de la flota de mar para bloquear la capital, a la vez que se defendía la base contra los previstos ataques de elementos del Ejército y la Aeronáutica.

El levantamiento de junio de 1955, sin embargo, no respetó ese escenario. Ese mismo año, el contraalmirante Samuel Toranzo Calderón, un oficial de la infantería de marina, había

aceptado la conducción de un movimiento revolucionario que un grupo de capitanes de fragata y de corbeta organizaban junto con dos oficiales de la Aeronáutica. A lo largo de los meses siguientes, Toranzo Calderón se reunió con diversas figuras políticas y finalmente llegó a un acuerdo con tres dirigentes, el radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, el socialista Américo Ghioldi y el conservador Adolfo Vicchi, sobre la formación de un régimen cívico-militar posrevolucionario. Su principal problema, sin embargo, era conseguir la participación de un alto oficial del Ejército, pero ni el general (R) Lonardi ni el general Pedro Eugenio Aramburu estaban dispuestos a unirse a él: el primero porque sentía que aún no era el momento y el segundo porque no tenía tropas a su mando. De todos modos, Toranzo Calderón logró interesar al general León Bengoa, comandante de la Tercera División con base en Entre Ríos, que aceptó participar pero quería posponer las acciones hasta después de las celebraciones del aniversario de la Independencia, el 9 de julio.

Entre tanto, el clima político se caldeaba aún más, ya que el conflicto entre la Iglesia y el Estado se había trasladado a las calles de la capital. El 11 de junio, en desafío a las disposiciones gubernativas, se realizó una masiva manifestación en celebración del Día de Corpus Christi; miles de argentinos, entre ellos muchos que nunca iban a la iglesia, se unieron a las filas de la concentración, que se extendían desde la Catedral hasta el Congreso. El gobierno respondió denunciando a los concurrentes por actos ilegales, incluida la quema de la bandera argentina en las escalinatas del Congreso. Concebida para estigmatizar a los manifestantes como antiargentinos y despertar los sentimientos nacionalistas de los partidarios de Perón, algunos de los cuales atacaron la Catedral al día siguiente, esa quema, según se demostró más adelante, fue obra de policías que actuaban por orden del ministro del Interior. En esos momentos, Perón la utilizó para advertir al clero que si había más disturbios respondería con duras medidas, y el 14 de junio relevó de sus cargos a dos obispos y los expulsó del pais.

Ese mismo día, y en este clima de pasiones enardecidas, el contraalmirante Toranzo Calderón se enteró de que la inteligencia de la Fuerza Aérea filmaba a las personas que entraban y salían del edificio en que vivía. En la previsión de que las



Incendio de iglesias, 1955.

demoras implicarían el arresto y la tortura para él y la cárcel para quienes habían participado en esas reuniones, emitió órdenes para lanzar el asalto el 16 de junio, un día que no encontró al general Bengoa al mando de sus tropas sino en Buenos Aires, y la flota de mar de la Armada amarrada en Puerto Belgrano, con sus tripulaciones licenciadas. El plan de operaciones era simple, aunque desesperado: pilotos de la Marina y la Aeronáutica tratarían de matar a Perón bombardeando la Casa de Gobierno, mientras que un batallón de infantería de marina avanzaría desde el puerto y, con la ayuda de civiles armados, se apoderaría de las principales instalaciones gubernamentales. El ataque se fijó para las diez de la mañana, pero una intensa niebla demoró el despegue de los aviones, que recién llegaron a su blanco dos horas más tarde. A esa hora el presidente ya había sido alertado y estaba refugiado en un lugar seguro del Ministerio de Ejército, mientras que los comandos civiles, que suponían cancelado el ataque, empezaban a dispersarse. Llegados a ese punto, sin embargo, los pilotos bombardearon y ametrallaron la Casa de Gobierno y sus alrededores, matando o

hiriendo a centenares de civiles que se habían concentrado en la Plaza de Mayo en defensa del gobierno; luego, aquéllos huyeron en busca de la seguridad que les proporcionaba Uruguay.

El ministro de Ejército Lucero se encargó de la represión y ordenó a las unidades del arma entrar en acción; éstas pudieron recuperar rápidamente la zona tomada por la infantería de marina y obtener su rendición. Los oficiales del Ejército también aceptaron la rendición de los ocupantes del edificio del Ministerio de Marina, atacado por trabajadores armados. Aunque el ministro del arma, Aníbal Olivieri, y el comandante Benjamín Gargiulo no estaban comprometidos con el alzamiento, se unieron a él una vez comenzadas las operaciones porque sentían la obligación moral de solidarizarse con su camarada de la Armada. Ambos pagarían un alto precio por esa decisión: Gargiulo creyó en las afirmaciones del edecán de Perón que le decía que lo ejecutarían y se suicidó con la pistola que se le ofreció; Olivieri se negó a tomar el arma y prefirió enfrentar una corte marcial, que le aplicó una pena de cárcel. El contraalmirante Toranzo Calderón, líder de la rebelión, recibió el castigo más duro, prisión perpetua.

Los tres meses que siguieron a la violencia del 16 de junio fueron un período de tensión. En un principio, Perón adoptó una política de línea dura y ordenó numerosas detenciones de

Discurso de Perón contra la oposición el 31 de agosto de 1955

"Con nuestra tolerancia exagerada, nos hemos ganado el derecho a reprimirlos violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constitucionales, o en contra de la ley o de la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no va dirigida solamente contra los que ejercen actos de violencia, sino también contra los que conspiren e inciten... La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos."

acuerdo con el estado de sitio recién decretado. A fines de junio, sin embargo, y a instancias del general Lucero, cuya influencia había aumentado debido a la lealtad mostrada por el Ejército durante la crisis, el Presidente se lanzó a una política conciliatoria. Se levantó el estado de sitio y por primera vez en varios años los dirigentes de la oposición política pudieron dirigirse por radio a la nación. Perón, por otra parte, reorganizó su gabinete, en el que reemplazó a los ministros del Interior y de Educación y a otras personalidades polémicas. Pero si esperaba que con esas medidas apaciguaría a sus opositores y consolidaría el orden interno, estaba equivocado. Los partidos de oposición no dejaron de exigir un cambio fundamental; las calles siguieron siendo el escenario de disturbios, con bombas colocadas cerca de edificios peronistas y disparos contra agentes de policía. A fines de agosto, Perón volvió a efectuar un viraje y en uno de los discursos más enardecidos de su carrera autorizó a sus seguidores a hacer justicia con sus propias manos y responder a un acto de violencia con otro aún más violento.

LA REBELIÓN DE SEPTIEMBRE DE 1955 Y LA CAÍDA DE PERÓN

Por provenir de la cabeza del Estado, juramentada a sostener la ley, las palabras de Perón representaron una conmoción para muchos sectores de la sociedad argentina y en especial para las Fuerzas Armadas, en las que no hicieron más que enajenar la opinión y minar las lealtades. En la Armada, donde el espíritu de rebelión había seguido siendo alto a pesar de las medidas punitivas tomadas contra ella tras el fracaso del 16 de junio, aun antes del discurso del Presidente estaba en marcha una amplia conspiración. Los principales organizadores del movimiento, los capitanes de navío Arturo Rial en la zona de Buenos Aires y Jorge Perren en Puerto Belgrano, habían logrado convencer a un alto comandante de la fuerza, el contraalmirante Isaac Rojas, de que asumiera la conducción del levantamiento. Incluso se habían puesto un plazo, las semanas posteriores al 8 de septiembre, para que la tripulación de la flota de mar estuviera embarcada y lista para zarpar hacia Buenos Ai-

res. Su principal problema, sin embargo, era garantizar que no se tratara de una mera rebelión de la Marina y que también participaran unidades del Ejército; no querían repetir el error del 16 de junio, cuando esta última fuerza se mantuvo completamente leal al gobierno. Los conspiradores creían que si intervenía aunque fuera un solo regimiento del Ejército, las demás unidades del arma se sentirían menos inclinadas a aplastar la revuelta.

Dentro del Ejército había varios centros de actividad conspirativa y varios presuntos líderes. El general de división Pedro E. Aramburu, que desde mucho tiempo atrás estaba comprometido con la destitución de Perón, era la figura clave en la zona de la capital. Sin embargo, no tenía mando directo de tropas y contaba con pocos contactos con los regimientos de artillería y paracaidistas de la guarnición de Córdoba, donde era más intensa la fiebre revolucionaria. Y aunque los conspiradores de la Armada le habían pedido que asumiera la conducción general del próximo movimiento, a principios de septiembre,



Civiles rebeldes apostados en las terrazas del centro de Córdoba, septiembre de 1955.

luego de que el gobierno aplastara un levantamiento mal preparado en Río Cuarto, decidió que los riesgos de ser descubiertos eran demasiado grandes y dio un paso atrás. En ese momento, el general (R) Eduardo Lonardi, que estaba en estrecho contacto con los conspiradores cordobeses, aceptó su invitación de hacerse cargo de todo el movimiento revolucionario. Con las seguridades que le daba un representante del capitán de navio Rial de que la Marina apoyaría su accionar y promesas de varios oficiales de alto rango del Ejército de que tratarían de incorporar a la revolución a unidades de Cuyo y el Litoral, Lonardi lanzó la rebelión desde el regimiento de artillería de la guarnición de Córdoba el 16 de septiembre. Tres días después, y ya en el final de su gobierno de casi diez años, Perón buscó refugio en la embajada paraguaya.

¿Qué había pasado? Aunque Lonardi, luego de una ruda lucha, había logrado controlar la guarnición del Ejército en Córdoba y la base adyacente de la Fuerza Aérea, no era en modo alguno evidente que pudiera resistir frente a las fuerzas superiores que tenían la orden de recuperar el área. Esas fuerzas, sin embargo, aunque en apariencia leales al gobierno, tenian pocos deseos de librar una costosa lucha para defender a Perón. Al avanzar lentamente hacia Córdoba, dieron a la Armada el tiempo y la oportunidad de usar su poder de manera decisiva. Luego de desplazar la flota de mar desde Puerto Belgrano hacia las aguas frente a la capital el 18 de septiembre, la Marina proclamó un bloqueo de la costa y amenazó con destruir las destilerías petroleras de La Plata y Buenos Aires a menos que el gobierno se rindiera. En esas circunstancias, Perón solicitó al Ejército que negociara un acuerdo y ofreció traspasarle la autoridad a fin de facilitar las conversaciones. Para llevar adelante esa tarea se conformó una junta de diecisiete oficiales superiores. Tras prolongados debates, éstos decidieron que el ofrecimiento de Perón era equivalente a su renuncia, que en esos momentos la junta ejercía temporariamente el control y que el ex presidente debía buscar asilo si quería salvar la vida.

El hecho de que muchos veteranos generales del Ejército, incluidos varios que habían estado muy cerca del gobierno, aprobaran estas decisiones es un indicio de los efectos erosivos que las políticas de Perón habían tenido sobre las

lealtades de los oficiales de las tres armas. Es indudable que muchos actuaron con la esperanza de proteger sus carreras bajo los gobiernos que lo sucedieran, y no es sorprendente que algunos oficiales que nunca se opusieron a Perón mientras estaba en el poder se convirtieran en virulentos antiperonistas luego de 1955, cuando parecía ventajoso serlo.

El derrumbe del régimen peronista encontró una vez más a los militares en poder del gobierno, pero la lucha misma por derrocar a Perón suscitó graves diferencias entre las fuerzas. La Armada apareció con mayor poder político que nunca, en gran parte porque casi toda su oficialidad debajo del grado de almirante se había unido a la rebelión y podía adoptar un punto de vista unificado sobre las cuestiones de la hora. El Ejército, por su lado, y en menor medida la Fuerza Aérea, tenían que digerir el hecho de que sólo una minoría de sus oficiales había tomado parte en la destitución de Perón; y aun ellos diferían entre sí en su orientación política y sus aspiraciones para el país y su propia arma.

La destitución de Perón y la forma en que se efectuó dejaron un legado de rivalidades internas y purgas periódicas que debilitarían la estabilidad política del país. El concepto de profesionalismo y no intervención en la política que la conducción militar se había esforzado por propiciar en varios momentos del siglo y que las políticas peronistas después de 1949 habían contribuido a socavar, iba a seguir siendo una meta inalcanzable en las décadas venideras.

Traducción de Horacio Pons

BIBLIOGRAFÍA

Klich, Ignacio: "La contratación de nazis y colaboracionistas por la Fuerza Aérea Argentina", en: *Ciclos*, Año X, Nº 19, 2000.

Perren, Jorge: *Puerto Belgrano y la Revolución Libertadora*, Instituto de Publicaciones Navales, 1997.

Potash, Robert A.: *El Ejército y la política en la Argentina, 1928-1962*, Sudamericana, Buenos Aires, 2 vols., 1971-1981.

———: *Perón y el GOU. Los documentos de una logia secreta*, Sudamericana, Buenos Aires, 1984.

Potash, Robert A. y Celso Rodríguez: "El empleo en el Ejército argentino de nazis y otros científicos y técnicos extranjeros, 1943-1955", en: *Estudios Migratorios Latinoamericanos*, Año 14, Nº 43, diciembre de 1999.

Rouquié, Alain: *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, Emecé, Buenos Aires, 2 vols., 1984.

Ruiz Moreno, Isidoro J.: *La revolución del 55*, Emecé, Buenos Aires, 2 vols., 1994.

Zanatta, Loris: *Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo, 1930-1943*, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1996.

———: *Perón y el mito de la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo, 1943-1946*, Sudamericana, Buenos Aires, 1999.

III



De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo

por PABLO GERCHUNOFF y DAMIÁN ANTÚNEZ*

* Agradecemos a Juan Carlos Torre, Alberto Martín, Mauro Alessandro y Lucas Llach por sus valiosos comentarios; y a Lorena Rojas por la importante colaboración prestada para la realización del presente trabajo.



Mensaje del presidente Perón sobre el Segundo Plan Quinquenal en el Teatro Colón.



PERÓN ANTES DE PERÓN

Hay días muy particulares en la vida de las personas. El húmedo e inestable lunes 8 de octubre de 1945, el coronel Perón cumplía cincuenta años y lo celebraba con bastante discreción y no poca ansiedad junto a Eva Duarte, en su departamento de la calle Posadas. Durante la jornada anterior se había celebrado el Día de la Madre, pero es improbable que Perón haya visitado a Juana Sosa Toledo. El martes 9 amaneció más frío y se convertiría en una jornada políticamente importante: los principales jefes militares consiguieron que Perón renunciara a todos sus cargos oficiales en el gobierno de Edelmiro J. Farrell. Consideraban que el coronel se había apartado de los principios de la revolución del 4 de junio; lo acusaban de un desempeño demagógico al frente de la vicepresidencia, del Ministerio de Guerra y, fundamentalmente, de la Secretaría de Trabajo y Previsión; estaban convencidos de que Perón encubría una clara intención de ser presidente.

Luego de varios días de lu-

cha de palacio, lo que en los hechos había sido una destitución se convertía en detención. La orden en tal sentido fue expedida a las cinco de la tarde del viernes 12, mientras Perón y Eva Duarte descansaban en el paraje "Tres Bocas", del Tigre. De allí Perón fue trasladado a su domicilio, a donde llegó a la una de la mañana del sábado. Dos horas después fue embarcado en el cañonero "Independencia", que lo llevó a su provisorio destino: la isla Martín García. La sensación de que Perón ya no tenía futuro político se generalizaba, pero fue equivocada. Los militares que se le oponían intentaron que Farrell designara un gabinete de inequívoco tinte antiperonista, de modo de alzarse con el dominio pleno del gobierno. Sin embargo, el triunfo que inicialmente obtuvieron se diluyó. Las disidencias y las dudas hicieron que el gobierno perdiera finalmente la dirección de los acontecimientos. No se pudo impedir la proclamación de una huelga general para el día 18 de octubre, ni tampoco la sorpresiva congregación de multitudes obreras en la Plaza de Mayo desde las primeras horas del miércoles 17. Luego de los confusos episodios de la jornada que se narran en la introducción de este libro, el escenario quedó montado. El público no había fallado. Sólo faltaba el protagonista principal. Llegó a la noche y comenzó su victorioso discurso cuando sólo faltaban cuatro minutos para que el día terminara.

Pero el '45 no sólo tiene la importancia de ser el año fundacional del movimiento político que llevaría a Perón al poder pocos meses después. Es algo menos y algo más que eso. Es el año de una fuerte inflación —casi el 20%— que superó largamente el promedio mundial y cuyas consecuencias más inmediatas fueron la caída del nivel de actividad y de los salarios reales y la desaceleración en el ritmo de creación de empleo, en particular del empleo industrial. Es, por lo tanto, desde una perspectiva económica de corto alcance, un año mediocre y olvidable, durante el cual las autoridades económicas tuvieron como preocupación principal frenar la expansión del crédito y contener el desequilibrio fiscal. A la vez, sin embargo, 1945 es un momento de rupturas y cambios trascendentales. Por lo pronto, es el año en que termina la Segunda Guerra Mundial, en un siglo signado por las grandes guerras y por las secuelas traumáticas de las posguerras. Winston Churchill diría en 1948 que el período 1914-1945 había sido la "segunda guerra de los treinta años", y en esa frase expresaría el pensamiento de muchos líderes de la época,

incluido Perón. Y 1945 es el año de una cifra que se conocería años más tarde y que demarcaría una frontera simbólica: la participación de la industria manufacturera en el Producto Bruto Interno (PBI) superaba por primera vez en la historia argentina a la del sector agropecuario. Así, guerra, posguerra e industrialización constituirían el escenario inicial en que se iba a desplegar la política económica peronista. Serían, al mismo tiempo, origen de interrogantes cruciales que Perón iría contestando sobre la marcha y con acciones muchas veces contradictorias.

Después de la guerra

Ahora que los campos de batalla se silenciaban, ¿hacia dónde marcharía el mundo? El panorama internacional se le aparecía, a quien como Perón pensaba "a la Churchill" y conservaba en la memoria la frustrada reconstrucción de la pasada posguerra y la lúgubre experiencia cotidiana de la Gran Depresión, salpicado de malos presagios. ¿Por qué no iba a suceder lo mismo? Ya no era apenas un teniente de 23 años, como en 1918. La experiencia de militar maduro que en 1929 había comenzado a enseñar historia en la Escuela Superior de Guerra y que en alguna ocasión había tomado cursos de economía política le dibujaba un horizonte cargado de *oscuros nubarrones*. Así lo había dicho en 1944:

> "[...] Está por terminar la guerra en Europa, y los que no somos ya muy jóvenes conocemos cuáles son las consecuencias de las terminaciones de las guerras en Europa. Los gobernantes de hoy deben mirar fijamente a ese período de posguerra que viene como para nosotros, cargado de oscuros nubarrones que las mentes más privilegiadas no pueden prever en sus consecuencias cuando comienzan a descargar su acción. La posguerra traerá profundos problemas, [...] en primer término una paralización y una desocupación. Traerá, asimismo, una agitación natural en las masas, pero traerá también una agitación que no será natural sino artificial de esas mismas masas."[1]

[1] Juan D. Perón, "El sindicalismo gremial sucede al sindicalismo político", en: *El pensamiento del secretario de Trabajo y Previsión en el análisis de los problemas de la clase media*, Buenos Aires, 1944, p. 28.

Atrás habían quedado las bondades de la *belle époque*, del comercio multilateral y del patrón oro, presididas por el dominio mundial británico; eran para Perón piezas arqueológicas y no una escena a la que se pudiera volver. La lectura que hacía Perón de la posguerra partía de considerar que de aquélla no habían surgido ganadores claros, y de ello se iría convenciendo aún más al transcurrir los tres primeros años posteriores al armisticio, cuando los estrepitosos fracasos de los gobiernos de coalición de la Europa occidental dieran lugar al inicio formal de la denominada "guerra fría" entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Tampoco creyó Perón en las promesas de crear un nuevo orden económico internacional, basado en la libre convertibilidad de las monedas y en el restablecimiento del comercio multilateral. Esa promesas habían surgido de la Conferencia de Bretton Woods, pero el escepticismo de Perón no era un capricho. Con la mente puesta en experiencias como Locarno, Génova y Londres, Perón creía poco en el éxito de las conferencias internacionales.

Las idas y vueltas de Bretton Woods parecían darle la razón. El objetivo de esta conferencia había sido diseñar instituciones y políticas que evitaran los errores cometidos en el tratado de Versalles y durante el período de entreguerras, errores que acabaron por dejar sin un manejo unificado y coherente al sistema de pagos internacionales al pretender una reedición del patrón oro que había funcionado con éxito hasta 1914. En eso coincidían todos los participantes, pero había serias diferencias operativas que acabaron siendo conceptuales. Para el titular de la delegación británica, John M. Keynes, no se podría adoptar un sistema de pagos internacionales basado en la libre convertibilidad de las monedas si antes no se atendía financieramente a las destruidas economías que emergían de la contienda. Para ello era imprescindible dotar al continente que había sido escenario bélico de cuantiosos fondos destinados a la reconstrucción. Keynes observaba, ya hacia el final de la guerra, una Europa que, tal como la describe Derek Aldcroft:

> "[...] se encontraba desorganizada y muy cerca de la miseria. Desde Stalingrado a Saint-Nazaire y desde Murmansk a Bengasi había una estela de devastación y destrucción, con los peores estragos producidos en las regiones central y orien-

tal. La extensión de los daños y las pérdidas de la producción eran más graves de lo que habían sido en la Primera Guerra Mundial. Las manufacturas estaban paralizadas, el comercio estaba casi paralizado, la producción agrícola estaba por los suelos y las comunicaciones estaban seriamente interrumpidas... Europa se encontraba en un estado sumamente débil [...]"[2]

Para Keynes, sólo con la ayuda norteamericana Europa se encaminaría a recuperar un potencial exportador que la dotara de divisas que hicieran sostenible la aplicación de tipos de cambio fijos y convertibles. Sin embargo, la oposición inicial de los Estados Unidos a invertir sumas importantes de dinero dejó sin efecto las propuestas de Keynes, dando lugar a las más ortodoxas —y más mezquinas— del representante estadounidense Harry White, sobre las cuales se crearían finalmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), más conocido como Banco Mundial. Otra institución, el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT), surgiría recién en 1947. Su propósito no era otro que el de revertir el bilateralismo comercial surgido al finalizar la guerra como consecuencia de los controles de cambios implantados para racionalizar las exiguas divisas disponibles. En definitiva, el GATT procuraría inducir al comercio mundial hacia el multilateralismo, limitando barreras arancelarias y paraarancelarias.

Lo cierto es que ninguna de estas instituciones cumpliría en el futuro inmediato con la misión que se les había encomendado. El fracaso del FMI obedeció a la combinación de dos factores: por un lado, la gran escasez de dólares que afectó tanto a Europa occidental como a Japón y cuya contrapartida fue la abundancia de dólares en los Estados Unidos, que para 1945 llegaron a poseer dos tercios del stock de oro monetario mundial; por otro lado, el propio triunfo de la posición norteamericana en Bretton Woods determinó la insuficiencia de efectivo con que fue dotado inicialmente el organismo, y por lo tanto su impotencia para hacer frente a los graves desbalances en la

[2] Derek H. Aldcroft, *Historia de la economía europea (1914-1990)*, Crítica, Barcelona, 1998, p. 131.

distribución de la liquidez internacional. El caso del BIRF fue un calco: nació prácticamente sin fondos, y hubo que esperar más de una década para que comenzara a financiar, fundamentalmente, proyectos de inversión en infraestructura pública. En cuanto al GATT, muy pronto demostró su incapacidad para combatir el bilateralismo —cuya causa era la mala distribución de la liquidez—, al tiempo que debió permitir la vigencia de una fuerte batería de subsidios y protecciones en el sector agropecuario de los países europeos.

Las dificultades del flamante orden económico internacional para resolver con eficacia los recurrentes problemas de la posguerra, en combinación con el notorio crecimiento electoral de los partidos comunistas en países como Italia, Francia, Holanda o Bélgica, impusieron una revisión de la ahorrativa política norteamericana. Poco a poco los Estados Unidos fueron acrecentando su disposición a intervenir en forma directa y comprometida en tanto líder del naciente bloque occidental constituido como alianza militar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Así, para 1947, el presidente Harry Truman y su secretario de Estado George Marshall retornaron al pensamiento de Keynes e idearon un programa esencialmente financiero para recuperar la capacidad productiva de la región occidental del continente. Pero la evolución hasta llegar a esa decisión sería lenta; en todo caso, en 1945 ni siquiera estaba planteada.

Si la economía internacional iba o no hacia una mayor integración monetaria y comercial en un plazo más o menos corto era una incógnita difícil de develar en 1945. En cambio, Perón tenía ante sí una realidad palpable sobre la que poco se podía discutir: la ampliación de los roles del Estado en el mundo entero. Sobraban ejemplos. Meses después de la liberación de París se puso en marcha en Francia el programa por el cual había abogado la Resistencia. Primero se nacionalizó Renault —cuyos propietarios fueron acusados de colaboracionistas—, una parte de la industria del carbón y la compañía aérea Air France; más tarde ocurrió lo mismo con el Banco de Francia, las mayores instituciones de crédito, las empresas de seguros, gas y electricidad. En Gran Bretaña, luego del triunfo electoral de los laboristas en julio de 1945, se transitó por los mismos carriles. La política de nacionalizaciones del primer ministro

Clement Attlee abarcó las finanzas, los telégrafos, la aviación civil, la electricidad, el gas, los transportes, la industria del carbón y la del acero. A ello se agregó la Health Service Act —que garantizó una completa asistencia médica a todos los residentes de las islas británicas— y un conjunto de prestaciones sociales que realizaron casi por completo las ideas de Beveridge. Por otra parte, Perón había visto de cerca la organización productiva estatal del fascismo, que los partidos democráticos italianos heredaban y no tenían intenciones de desmontar, y la experiencia de política económica nazi cuando ya se había superado la Gran Depresión. Más lejos de él, a uno y otro lado, se extendían el socialismo de Estado en el oriente europeo y las prácticas de regulación pública en los Estados Unidos.

Para cualquier observador atento, el origen de esta transformación debía quedar claro. Se trataba menos de una victoria cultural de las ideas socialistas que de un cambio en los signos de los tiempos. Partidos políticos y coaliciones de muy distinta raigambre ideológica adoptaron, con sus matices, programas en cuyo centro había una mayor intervención estatal. Las guerras, la depresión, y en muchos países el atraso económico, eran los factores convocantes de la actividad del Estado. Las guerras y la depresión, por otra parte, forjaban un clima solidario que había estado ausente durante la larga bonanza de la Pax Británica y el patrón oro: ahora, en los 40, el desempleo y la pobreza no eran ya calamidades naturales e inevitables, sino problemas políticos que debían ser resueltos con instrumentos que sólo los gobiernos tenían a la mano.

La herencia de la industrialización

Ahora que el final de la contienda iba a restablecer la circulación internacional de mercancías, ¿qué iba a ser de la industria manufacturera y del empleo que ella generaba?; ¿cuál era, en otras palabras, la "capacidad destructiva" de la paz sobre la estructura productiva argentina? Muchos se hacían esas preguntas en 1945, pero seguramente a nadie desvelaban tanto como a Perón. Es que no se trataba, para él, sólo de una discusión sobre estrategias de desarrollo en la que la cuestión cen-

tral era el grado de diversificación del tramado industrial. Estaba en juego, también, la consolidación del movimiento político que lideraba. Su base social, aquella con la cual iba a ganar las elecciones de febrero, eran, antes que nada, los seis millones de ocupados y, muy en particular, el millón y medio de trabajadores industriales que venían cambiando la fisonomía de las grandes ciudades. Nada debía poner en riesgo la seguridad de sus empleos.

Una mirada retrospectiva desde 1945 revelaba un hecho irrefutable: la industrialización argentina y sus consecuencias sobre la estructura social eran un fenómeno acumulativo que venía de lejos. Entre 1880 y 1914 había sido lo que alguien denominó felizmente "la armonía de los opuestos", ese proceso en el que la locomotora agropecuaria vinculada al imperio inglés arrastraba actividades industriales que giraban en torno del ferrocarril y de la elaboración de alimentos; más tarde, el estallido de la Primera Guerra significó no sólo el principio del fin de la *belle époque*, sino también un primero y efímero impulso a la sustitución de importaciones; ese impulso dejó huellas apenas perceptibles, pero en la década del 20 el presidente Alvear pudo recibir con beneplácito un flujo masivo de inversiones extranjeras en la industria, predominantemente de origen norteamericano, que amplió aceleradamente la gama de la producción nacional; durante los 30, el cambio de régimen macroeconómico le dio otro impulso a la industria: la política monetaria, como en casi todo el mundo, se volvió más autónoma de los avatares externos y por lo tanto más expansiva durante la fase depresiva del ciclo económico. Como ello ocurrió en el contexto de una penuria de divisas que desde 1931 terminó instalando el control de cambios como una pieza clave de las políticas económicas, el resultado fue un mayor y más diversificado crecimiento industrial. El mecanismo era simple: la demanda aumentaba pero esa demanda no podía canalizarse hacia bienes importados. Por lo tanto, la sustitución de importaciones florecía.

Sin embargo, lo que para Perón representaba una experiencia vívida eran los cinco años previos a su llegada a la presidencia. Al comenzar la Segunda Guerra, la opinión ilustrada coincidía en que el conflicto bélico tendría efectos deletéreos sobre la producción. El recuerdo de la Primera Guerra, durante

la cual el nivel de actividad había caído más que durante la Gran Depresión, alimentaba los temores. Ésa fue la principal razón por la que, durante 1940, Federico Pinedo presentó al Congreso su Plan de Reactivación Económica, el primer intento articulado y consciente en la historia argentina de llevar a cabo una política que contrarrestara, con instrumentos monetarios y fiscales, las tendencias recesivas del mercado. Afectado a su conocida misión militar a Europa, Perón no estaba en la Argentina para presenciar y aprender del debate. Pero a su regreso pudo compartir la perplejidad de muchos: por causas que la historiografía ha tratado profusamente, el Plan Pinedo nunca se puso en práctica y, sin embargo, la depresión no llegó. Entre 1914 y 1918, el nivel de actividad cayó al 1% anual; entre 1939 y 1945 aumentó al 2,6% anual.

¿Qué es lo que había ocurrido? Desde comienzos de la Segunda Guerra, la economía argentina estaba experimentando un proceso distinto del de la Primera Guerra y del de la Gran Depresión. En aquellos dos eventos, el derrumbe de las exportaciones y la fuga de capitales habían llevado a la Argentina a recesiones profundas: faltaban divisas y sobraban bienes. Durante la Segunda Guerra la dinámica fue otra: sobraban divisas y faltaban bienes, en particular los bienes indispensables para mantener en movimiento la maquinaria de la producción. Sobrante de divisas y faltante de bienes fueron cara y contracara de un mismo fenómeno. Las naciones involucradas en el conflicto necesitaban toda su producción fronteras adentro e importar lo que fuera necesario para evitar escaseces a las poblaciones movilizadas. El caso de mayor impacto en la economía mundial fue el de los Estados Unidos: prohibió algunas exportaciones, redujo otras, se retiró de muchos mercados, aumentó sus importaciones y usó las bodegas de sus barcos casi exclusivamente para transportar pertrechos bélicos. La Argentina fue afectada por los movimientos del gigante. Por un lado, sufrió dificultades para acceder a bienes que hasta ese momento formaban parte de su comercio regular; por otro, comenzó a venderle significativamente a la primera potencia mundial y a ocupar su lugar como proveedor de muchos países latinoamericanos.

Así, el tradicional modelo de comercio triangular implantado durante los años '20, que implicaba superávit comercial

con Inglaterra y déficit comercial con los Estados Unidos, quedó por lo menos en suspenso. Durante la guerra, la Argentina tuvo superávit en todas las áreas comerciales. Y si bien es cierto que los importantes excedentes con Inglaterra estaban bloqueados y fue un debate permanente de la época qué hacer con esos fondos, el acceso de las exportaciones argentinas al área del dólar permitió acumular divisas de libre disponibilidad. Un retrato estilizado de las estadísticas de la balanza de pagos entre 1941 —año en que los Estados Unidos entran en la guerra— y 1945 —año en que la guerra finaliza— clarifica acerca del escenario inicial que le esperaba a Perón: para el promedio del quinquenio, la Argentina le vendió al conjunto de América el 50% de sus exportaciones totales y el saldo neto de la balanza de pagos fue un 63% en divisas de libre transferencia y un 37% en divisas de compensación. Eso explica que en 1946, inmediatamente después del cambio de gobierno, las reservas internacionales del Banco Central estuvieran constituidas en un 65% por oro y divisas de libre transferencia y en un 35% por divisas de compensación.

Ciertamente, que sobraran divisas y faltaran bienes conformó un paisaje económico de características excepcionales. Como consecuencia del racionamiento impuesto por las naciones en guerra y de la escasez de bodegas, las importaciones en esos años fueron tan bajas como durante la Gran Depresión y más bajas que las registradas durante la Primera Guerra. La insuficiencia en la oferta de bienes provenientes del extranjero en un contexto en que el sector externo creaba dinero tuvo una doble consecuencia. La primera consistió en que los gobernantes tuvieron que cuidarse de la inflación y no de la recesión. La segunda fue que se abrió un espacio para una industria que había venido consolidándose desde fines del siglo anterior y que ahora estaba en condiciones de ocupar el lugar de las importaciones que no podían efectivizarse. También en este sentido la Segunda Guerra era distinta de la Primera. Durante la Primera, la industria era todavía muy frágil y poco desarrollada y la clase dirigente demasiado aferrada a las bondades indiscutibles de la *belle époque* como para esperar un impulso irreversible hacia la sustitución de importaciones. Durante la Segunda Guerra las cosas habían cambiado, tanto en la estructura productiva como en las mentalidades.

Que la inflación haya sido durante la guerra una de las principales preocupaciones económicas fue una sorpresa, pero una sorpresa explicable. Mientras las restricciones a la circulación internacional de mercancías operaran como el principal factor limitante del crecimiento, una estrategia macroeconómica expansionista sólo conduciría al incremento incesante de los precios. Fue en este nuevo escenario, diametralmente opuesto al que había proyectado Federico Pinedo pocos meses antes, que su sucesor en la cartera de Hacienda, Carlos Acevedo, lanzó un plan para frenar el crecimiento del gasto público y reducir el poder de compra de la población mediante nuevos impuestos. No es que estuvieran enfrentadas dos visiones del mundo económico, una reactivante —la de Pinedo— y otra ortodoxa —la de Acevedo—. Simplemente, las circunstancias habían experimentado un viraje profundo e inesperado. El mismo Raúl Prebisch, artífice del plan reactivante de 1940, escribió más tarde:

> "De un momento de sombrío pesimismo, de negras perspectivas, como fue 1940, pasamos, con unos meses de transición, a una situación opuesta. Esto aconseja dar una gran flexibilidad a los planes monetarios o financieros para poder adaptarse rápidamente a los cambios en la situación. Basta reflexionar lo que habría ocurrido de haberse iniciado el plan de construcciones y si al poder de compra lanzado en esa forma se hubiese agregado el nuevo poder de compra derivado del aumento de las exportaciones: se habría dilatado exageradamente la circulación, con las consecuencias perniciosas que tiene siempre. Lo peligroso en estos planes es detener el impulso cuando sobrevienen factores de otra índole que hacen innecesario proseguirlo."[3]

El menú tributario de Carlos Acevedo tuvo un cierto sabor peronista *avant la lettre*, pero puesto al servicio de un programa de estabilización: hubo un impuesto destinado a apropiarse del incremento de los precios ganaderos, que atravesaban una

[3] Raúl Prebisch, "La experiencia del Banco Central Argentino, en sus primeros ocho años", en: *Banco Central de la República Argentina, 1935-1985: Cincuentenario del Banco Central de la República Argentina*, Buenos Aires, 1985.

inédita bonanza internacional; también un aumento en las alícuotas del impuesto a los réditos; finalmente un gravamen a los beneficios extraordinarios. La propuesta fracasó después de haber aglutinado un poderoso frente opositor liderado por los ganaderos, pero tras el movimiento militar del 4 de junio una versión más moderada de ese mismo plan terminó por aprobarse: el campo fue gravado con un impuesto al "excedente de beneficios" que se cobraba en proporción a la diferencia entre el precio vigente para los productos de exportación y un precio promedio del pasado. Un año atrás, el gobernador Rodolfo Moreno había logrado la sanción de una ley de impuesto progresivo a las propiedades rurales de más de diez mil hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Borrosamente, se prefiguraban los lineamientos de una política que luego el peronismo haría propia y desarrollaría hasta sus últimas consecuencias. Y Perón pudo seguirla de cerca luego de su regreso de Europa.

Mientras tanto, la expansión del producto y del empleo industrial proseguían sin prisa y sin pausa, y ya no habría retrocesos, como había ocurrido después de la Primera Guerra. La oportunidad que brindaba el racionamiento en la oferta de bienes extranjeros no se desaprovechaba. Las manufacturas de origen nacional abastecían el mercado interno e incluso se proyectaban hacia el exterior: durante 1943, las exportaciones industriales explicaron casi el 20% de las exportaciones totales y alimentaron la efímera fantasía de que la Argentina podía participar de un modo distinto al del pasado en la división internacional del trabajo. Más realista, un informe del Banco Central del mismo año 1943 alertaba que el final de la guerra no debía ser también el final de los nuevos bríos que mostraba la industrialización. Es que, para ese momento, algo estaba claro: era el crecimiento industrial el que había neutralizado los pronósticos recesivos, casi unánimes al iniciarse la contienda.

Por otra parte, el impulso industrialista no era apenas el fruto de un evento externo que podía ser fortuito y temporario. Había, a diferencia de lo ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, políticas específicas que lo alentaban. Ya regía desde principios de los 30 un esquema de control de cambios que se perfeccionaba permanentemente y que desde la recaída recesiva que había sorprendido al mundo en 1937 estaba acompa-

ñado de un sistema de permisos previos de importación; los redescuentos del Banco Central, aunque moderados por la necesidad de contener la inflación, favorecieron durante la guerra más a la industria que a la agricultura, la ganadería y el comercio; se organizó un Comité de Exportación y Estímulo Industrial y Comercial; se aprobaron no menos de quince regímenes de promoción industrial en provincias y municipios; respondiendo a los retos económicos de la guerra, el presidente conservador Ramón Castillo creó la Flota Mercante del Estado para atemperar la escasez de bodegas y promovió la sanción de la ley de Fabricaciones Militares para autoabastecerse en la esfera de la producción bélica y para invertir en industrias estratégicas en las que el empresariado nacional no iba a invertir.

Así pues, en 1945 Perón tenía ante sus ojos a la Argentina que emergía de la guerra e iba, con sus profundos cambios, al encuentro del fenómeno político que lo tendría como protagonista. Se podía decir, con Alfredo Gómez Morales, que esa Argentina no había sufrido "graves deterioros en su mecanismo productor". En verdad, se podía decir más que eso. La guerra había sido un test con resultado positivo sobre la salud de la nueva estructura productiva y sobre su capacidad de sostenerse y expandirse; había significado industrialización con crecimiento del empleo. Si una primera reacción iba a tener Perón contemplando este cuadro, eventualmente amenazado por las consecuencias económicas de la paz, sería la de conservar el principal activo que heredaba: la industrialización. Ya no se trataba de debatir si industrialización diversificada o industrialización selectiva; ésa podía ser una discusión relevante a principios de la guerra, no al final. A mediados de los 40, después de alguna vacilación que parecía emerger de los documentos del Consejo Nacional de Posguerra, a Perón le quedó claro que, por razones económicas y políticas, todo lo que había nacido merecía seguir viviendo.

MUNDO FELIZ (1946-1949)

Cuando Perón accedió a la conducción del Poder Ejecutivo el 4 de junio de 1946, el que iba a ser su colaborador más estre-

cho en materia económica durante los dos primeros años y medio de gestión, Miguel Miranda, ya lo estaba esperando desde posiciones de gobierno. A pedido del presidente electo, que quería evitar un complicado debate en el nuevo Congreso, Farrell había nacionalizado y reformado el sistema financiero por decreto y había creado el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) como parte de ese sistema financiero. Corrían los meses de marzo a mayo y dos de los instrumentos más poderosos de la política económica peronista estaban listos para funcionar. También a pedido de Perón, Farrell nombró a Miranda presidente del Banco Central y al mismo tiempo titular del IAPI. Miranda era un empresario de 56 años, inquieto por las cuestiones económicas pero de una formación poco sistemática y de lecturas ocasionales. Llegó al gobierno de Perón acompañado de unos pocos hombres de confianza —Rolando Lagomarsino, que a partir de junio ocuparía la Secretaría de Industria y Comercio; Orlando Maroglio, que lo sucedería desde julio de 1947 en la presidencia del Banco Central— y con una obsesión: convertirse en el custodio del desarrollo industrial argentino. Con el único contrapeso de la prudencia que puso Ramón Cereijo desde el Ministerio de Hacienda y bendecido por Perón con la conducción del Consejo Económico Nacional, Miranda puso en ello el foco de su accionar. En ese lenguaje militar al que a veces apelaba, Perón diría más tarde que Miranda había encabezado el "equipo de asalto" que tuvo a su cargo "abrir el fuego" en el campo de batalla de las transformaciones del peronismo.

Pero la preservación de una estrategia de industrialización, con ser una pieza fundamental de la política económica peronista, no fue, en los años iniciales, el signo distintivo de la acción del gobierno. De hecho, si alguna característica particular e irrepetible tuvo esa edad dorada que transcurrió entre 1946 y 1948 y que ha quedado en la memoria colectiva como el "auténtico peronismo" fue la persecución del ideal del pleno empleo —que, por cierto, no estaba muy lejos—, el aumento de los salarios reales y un profundo cambio distributivo. Si la guerra había sido industrialización y empleo, la inmediata posguerra de Perón iba a ser un aumento acelerado del nivel de actividad en todos los sectores vinculados al mundo urbano, un incremento inédito de las remuneraciones populares y un

salto en la participación de los trabajadores en el ingreso. Lo segundo no podía ser sin lo primero. El "mundo feliz" del peronismo se montó sobre el legado de una estructura productiva profundamente modificada por la expansión de la manufactura.

Es probable que no podamos encontrar en esos años un caso similar, al menos entre aquellas economías de ingresos intermedios que estaban transformando sus estructuras al calor de la sustitución de importaciones. Muchos países con los que la Argentina era por una u otra razón comparable —Chile, Brasil, México, Colombia, Australia, Nueva Zelanda— se embarcaron por entonces en políticas de industrialización acelerada, nacionalización de servicios públicos y de algunas manufacturas, consolidación de políticas sociales. La Argentina tuvo todo eso pero tuvo también el agregado de una impresionante política de reparto. En apenas tres años, los estratos sociales más sumergidos experimentaron la multiplicación en el poder de compra de sus ingresos y las clases medias accedieron a un conjunto de nuevos bienes que implicaron un salto de calidad en su confort. Ésa fue la impronta del peronismo.

¿Prosperidad sin fin?

¿Por qué se hizo?; ¿cómo se hizo? Había en Perón una necesidad política y un diagnóstico económico. La necesidad política era la de sortear sin problemas el desafío de unificar en un movimiento político y bajo su liderazgo personal los fragmentos que lo habían apoyado en las elecciones de febrero de 1946. Naturalmente, los incrementos salariales y la distribución progresiva del ingreso eran funcionales a ese propósito. En cuanto al diagnóstico económico, no podía estar, y no lo estaba, en contradicción con su estrategia política. Hemos visto ya que Perón entreveía, al llegar a la presidencia en junio de 1946, un equilibrio político internacional inestable, con posibilidades ciertas de un nuevo estallido bélico. Estaba convencido, además, de que al igual que en la Primera Guerra la reconstrucción europea sería lenta y costosa, signada por la escasa liquidez de las naciones que habían participado del conflicto y por un esquema de comercio internacional básicamente cerrado. No todos pensaban

lo mismo en el mundo de la inmediata posguerra. De hecho, el presidente Dutra estaba llevando a la práctica en Brasil una política ilusionada en que las promesas de Bretton Woods se cumplirían rápidamente. Pero si los pronósticos debían ser evaluados a la luz de lo que ocurriría en los años inmediatos siguientes, a Perón no le faltaría razón.

Esa razón, por lo menos provisoria, hacía necesario que la Argentina se refugiase en su mercado interno como el espacio económico y político donde asegurar su futuro. Desde luego que si lo que había que atender era el mercado interno, lo primero que había que hacer era darle forma. Para ello Perón necesitaba consolidar una demanda interna que actuara como locomotora de un ciclo virtuoso de crecimiento económico y cuyo punto de partida fuera la expansión del consumo. Como, a diferencia de otros países, la inmensa mayoría de la población ya estaba integrada a través del empleo al circuito capitalista, ello sólo se podía lograr con un fuerte aumento en los salarios nominales que, convertidos en concomitantes aumentos en los salarios reales, provocaran una redistribución del ingreso que actuara como impulsora de la producción.

Un factor vital ayudó al gobierno de Perón a cumplir su objetivo: con el final de la guerra y la gradual adaptación de las naciones beligerantes a los nuevos tiempos de paz fue desapareciendo el racionamiento de bienes importados. Rápidamente los Estados Unidos comenzaron a reconvertir su economía, ocupar mercados y expandir su oferta de bienes al resto de las naciones. Otros países siguieron, gradual y dificultosamente, un camino similar. Al mismo tiempo, quedaron disponibles para el transporte de mercaderías las bodegas que en años anteriores se habían utilizado para cargar pertrechos bélicos o tropas. Las angustias de Perón, que tiempo antes había prometido que barco que llegara a puertos argentinos vacío se iría vacío, quedaban en el olvido. Volvía a haber productos para comprar y volvía a haber medios de transporte para acercarlos al país. Era un retorno a la normalidad.

Quizá, como pensaba Perón, se trataba de una normalidad transitoria. Pero, en todo caso, ella abrió un espacio muy cómodo para que la Argentina desplegara políticas monetarias, fiscales y salariales expansivas. Es que el racionamiento había

puesto un límite a las importaciones al tiempo que el país aprovechaba condiciones para exportar a destinos inimaginables hasta poco tiempo antes. Entre 1939 y 1948 hubo, como nunca antes ni después durante el siglo, diez años consecutivos de superávit de balanza comercial. Entre 1941 y 1948 hubo ocho años consecutivos de superávit de cuenta corriente; entre 1940 y 1946 hubo siete años consecutivos de acumulación de reservas. La Argentina había estado ahorrando en exceso y disponía de un sobrante de divisas; era, por lo tanto, una invitación a gastar, fuera para consumir, fuera para invertir, fuera para repatriar deuda.

Nadie rechaza una invitación así, y Perón no lo hizo. El liderazgo fue del consumo popular, y el instrumento para impulsarlo fue el aumento de los salarios nominales, que a partir de 1944 ya se venía gestando, aunque todavía con poca fuerza, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Sin embargo, algo falló inicialmente. Como lo diría el propio Perón más tarde para describir circunstancias muy diferentes, los salarios iban por la escalera y los precios por el ascensor. Que los precios que viajaban por el ascensor fueran en buena medida los de los productos primarios que la Argentina exportaba, era una bendición para el país. Pero, desafortunadamente, esos productos constituían a la vez los insumos para elaborar aquellos bienes que componían el núcleo de la canasta familiar, de modo que los intentos oficiales por aumentar el poder de compra de los trabajadores se esterilizaban. Hasta que Perón llegó a la presidencia en junio de 1946, los salarios todavía no habían aumentado en términos reales.



Propaganda oficial sobre el Primer Plan Quinquenal.

A partir de 1946, las cosas cambiaron favorablemente para los objetivos del gobierno, en parte por la fortuna, en parte por una política económica deliberada. La fortuna residió en que las cotizaciones internacionales de las exportaciones argentinas permanecieron muy altas hasta 1949, y ello determinó que el país se beneficiara de los mejores términos del intercambio exterior del siglo. Sin embargo, las autoridades económicas comandadas por Miranda encontraron ahora los mecanismos para que de las buenas nuevas participaran los trabajadores. Hubo, en ese sentido, una primera y eficaz herramienta: la abundancia de reservas internacionales en oro y divisas de libre disponibilidad y la perspectiva que tenia el gobierno de que esa abundancia se perpetuaría, hicieron posible que los múltiples tipos de cambio permanecieran estables hasta la devaluación inglesa de septiembre de 1949. La paridad fija durante un período prolongado moderó la inflación y consecuentemente moderó también la erosión de los salarios reales que la inflación producía.

La segunda y crucial herramienta fue el IAPI. Liquidada la Corporación para la Promoción del Intercambio creada por Federico Pinedo como parte de su Plan de Reactivación Económica de 1940, el IAPI la reemplazó, pero el empuje de Miranda terminó convirtiéndolo, hasta 1949, en un poder autónomo y multifacético dentro del aparato del Estado. El instituto financió la venta de productos argentinos a países europeos que —como España, Francia, Italia u Holanda— no tenían por entonces liquidez para comprar; importó arpillera, cemento, caucho, madera, maquinarias y material de transporte —en muchos casos se trataba de pertrechos de guerra— que luego eran colocados a precios promocionales en el mercado interno; subsidió precios de artículos de consumo masivo; participó en la adquisición de los ferrocarriles de propiedad británica y francesa; otorgó créditos a las empresas públicas y a los ministerios para apoyar las inversiones previstas en el Primer Plan Quinquenal; prestó en forma directa a firmas privadas a tasas de interés que resultaron fuertemente negativas.

Pero si algo hizo el IAPI para que los salarios reales aumentaran durante esos primeros años de gobierno de Perón, ello tuvo que ver con su función más relevante: la centralización del comercio exterior. Su intervención permitió cortar el

vínculo hasta entonces automático entre los precios internacionales y los precios nacionales de los bienes agropecuarios. Hasta 1949, el IAPI, que se presentaba oficialmente como la superación de las prácticas explotadoras llevadas a cabo por el tradicional oligopolio comercializador de granos, pagó a los productores rurales una cotización algo así como un 50% menor que la que percibía por sus ventas al mercado mundial. Los excedentes obtenidos por esa vía eran usados por el instituto para algunos de sus variados fines o canalizados hacia el sistema financiero nacionalizado. Mientras los campos devastados de Europa —en particular los campos graníferos de Europa oriental— no recuperaran su capacidad productiva, los precios de los productos agropecuarios que la Argentina exportaba se mantendrían en un nivel muy alto, de modo que el mecanismo de transferencia de ingresos del campo a la ciudad que el IAPI ponía en práctica conservaría su viabilidad sin llevar a los productores rurales a la quiebra.

De los múltiples objetivos a los que podía aspirar un gobierno popular industrialista como el de Perón, más de uno se alcanzaba, entonces, a través de la administración de precios relativos, en cuyo centro estaba el IAPI. Al recortarse los precios nacionales de los alimentos, los incrementos de los salarios nominales, que se tornaron muy frecuentes con el nuevo gobierno, derivaron en mayores salarios reales y en una expansión del consumo que adicionó demanda efectiva e incentivó la producción y las inversiones. A esa dinámica contribuyeron también otras iniciativas políticas: los controles de precios —habituales por entonces en la Argentina y en buena parte del mundo occidental—; la institución del aguinaldo, decretada por Farrell en diciembre de 1945 como parte de la campaña electoral de Perón; la ley de alquileres, aprobada por el Congreso en noviembre de 1946 para favorecer al 63% de la fuerza de trabajo que todavía no tenía casa propia.

El signo de los cambios ocurridos en materia distributiva entre 1946 y 1948 puede o no sorprender, pero su magnitud sorprende sin duda: los salarios reales se incrementaron un 40% durante el trienio; la participación de los asalariados en el ingreso total pasó del 37% a casi el 40% y siguió aumentando hasta alcanzar un nivel del 47% en 1950, cuando se registró un máximo histórico que no se repetiría; la tasa de crecimiento

del PBI fue del 8% anual, pero la del consumo fue del 14% anual; consecuentemente, el consumo total pasó del 81% del PBI en 1945 al 93% en 1948. Semejante terremoto social no ocurrió a costa de la inversión, que se incrementó del 10% del PBI en 1945 al 16% en 1948, sino de una modificación radical en las cuentas externas. Más consumo y más inversiones significaron que las importaciones casi se sextuplicaran entre 1945 y 1948, pero como el nivel inicial era irrisorio debido a los últimos coletazos de desabastecimiento y como los precios de exportación todavía estaban altos en ese último año de fulgurante esplendor económico que fue 1948, todo lo que ocurrió fue que el país dejó de acumular reservas y eliminó lo que para Perón era, con justicia, un indeseado superávit comercial.

La "marca física" del nuevo patrón distributivo se hizo notar rápidamente. Los comerciantes de todos los ramos vivieron su momento de euforia. Entre 1945 y 1948 las ventas de cocinas aumentaron un 106%, las de heladeras un 218%, las de indumentaria para "señoras y niños" provista por grandes tiendas minoristas un 125%, las de indumentaria para hombre un 100%, las de calzado un 133%, las de discos fonográficos algo más de un 200%. Poder adquisitivo alto y crédito barato para el consumo fue la combinación explosiva, y su expresión más visible, el acceso masivo a los aparatos de radio. El medio de comunicación de última generación llegaba a todos los hogares. Durante los primeros tres años del gobierno peronista, su venta creció casi un 600%. Mientras tanto, algo más sutil que la bonanza del comercio a la calle estaba ocurriendo en el centro de la Capital Federal. El Banco Municipal de Préstamos había dejado de recibir el desfile de pequeños propietarios disminuidos que iban allí a empeñar sus bienes. Ahora era a la inversa. El Banco organizaba masivos remates de muebles, vajillas, alhajas y pinturas que había venido acumulando durante los malos tiempos. Eran remates populares y alegres, en los que una clase media repentinamente próspera convertía su dinero en efectivo en bienes con los que hasta poco antes no había soñado.

Protección, crédito, industrialización

La voluntad oficial de proteger la producción de manufacturas "de interés nacional", calificación que en los hechos le cabía a toda la industria, ya había quedado tempranamente reflejada en el "Régimen para la protección y la promoción de la industria de 1944". Si se los compara con los que estaban poniendo en juego otras naciones que apostaban a la industrialización como fórmula para salir del atraso, los instrumentos de ese régimen combinados con otros que se aplicaron luego no tuvieron nada de original. Se elevaron los aranceles; se reforzaron en algunos momentos y se relajaron en otros —siempre de acuerdo con la disponibilidad de divisas— los permisos previos para la obtención de cambios; se estableció un sistema de preferencias para la importación de materias primas y bienes de capital; se mantuvo el control de cambios, con tipos de cambio múltiples según actividades productivas. Durante los años iniciales del gobierno peronista, esta batería de políticas se volcó a favorecer el surgimiento de nuevas empresas industriales y el reequipamiento de las existentes, aprovechando los grados de libertad que otorgaba el buen nivel de reservas internacionales.

Pero, a partir de 1946, la política monetaria y crediticia se convirtió en una estrella de la economía peronista y en una potente palanca para el sostén de la industria. En marzo de ese año prolífico, al tiempo en que se ponía en funcionamiento el IAPI, se modificó profundamente el régimen de funcionamiento del Banco Central. La nacionalización lo convirtió en un instrumento pleno de la acción del gobierno. La cantidad de dinero ya no estaría vinculada a las reservas internacionales, como en las viejas épocas del patrón oro, ni tampoco a los depósitos del público. Lo que importaba bajo el nuevo régimen eran las autorizaciones que el Banco Central otorgaba a las instituciones financieras para que éstas inyectaran dinero en la economía concediendo préstamos. Y el único límite a los redescuentos era la prudencia de los gobernantes. En ese contexto, los bancos privados se convirtieron en meros intermediarios que trabajaban a comisión, sin capacidad de decidir a quién beneficiar con los créditos ni qué tasas cobrar. Ésas eran facultades exclusivas del Banco Central que, al ejercerlas, no

hacía otra cosa que reflejar las prioridades oficiales. Nada hace más patente la subordinación de la política crediticia a la estrategia general del gobierno que la composición del directorio de la institución: allí estaban representados el Banco Nación, el Banco Hipotecario Nacional, la Caja Nacional de Ahorro Postal, el recién creado Banco de Crédito Industrial, los ministerios de Hacienda, Agricultura y Obras Públicas y las secretarías de Industria y Comercio y de Trabajo y Previsión.

A decir verdad, la Argentina tampoco fue muy original en su reforma financiera. En diciembre de 1945 Francia nacionalizó su Banco Central y consagró el monopolio estatal de la emisión de dinero; diez días antes de las elecciones que llevarían a Perón a la presidencia, Inglaterra siguió el mismo camino; y lo mismo hizo Holanda dos años más tarde. Varios países latinoamericanos se acoplaron a esa política, un poco antes o un poco después de Perón. Pero si la arquitectura financiera de la reforma no fue un caso especial, la magnitud de lo que a partir de allí se puso en juego fue, al igual que en la política distributiva, una marca del peronismo. La consigna oficial era crédito abundante y barato. Los préstamos totales casi se quintuplicaron entre fines de 1945 y fines de 1948 después de haberse expandido menos de un 20% entre 1940 y 1945; los préstamos al sector privado estuvieron cerca de triplicarse; los préstamos al sector oficial se multiplicaron por 30, como reflejo monetario de la transformación del Estado. Las tasas de interés no pasaron del 5% anual, significativamente más bajas que la inflación. En todo esto se percibieron las huellas de Miranda.

La distribución del crédito revela otro rasgo de la política peronista. Al parecer, los préstamos a la industria se sextuplicaron mientras que los destinados al sector agropecuario se duplicaron. No caben dudas de que en la fiesta del crédito peronista, que lo abarcó todo, el privilegio mayor fue, durante los años iniciales de gobierno, para los empresarios industriales sin distinciones. Entre 1945 y 1948 las ramas más beneficiadas constituyeron un amplio abanico que comprendió desde la elaboración de harinas, fideos, azúcar, vinos, aceites y la confección de prendas de vestir, hasta las manufacturas del caucho, la madera y los metales y las inversiones en construcción, energía, transporte y comunicaciones. Había en esa heterogeneidad una elección más o menos consciente sobre el patrón producti-

Miguel Miranda y la industria nacional

"[...] Era yo un jovenzuelo cuando contesté al maestro Juan B. Justo que no estaba de acuerdo con su posición frente al librecambio. Le dije: 'Si aceptáramos su opinión de que las cosas deben traerse de cualquier parte por el solo hecho de que sean algo mejores o más baratas, deberíamos empezar por reemplazar a todos los ferroviarios criollos por ferroviarios japoneses, en vista de que estos últimos trabajan más y costarían menos, pues los mantendríamos con arroz (en aquel tiempo la bolsa era barata), con ventaja sobre los criollos que están acostumbrados a sus buenos churrascos'. También le dije que el librecambio nunca permitiría industrializar al país, y como consecuencia no habría elevación de la clase obrera, porque ésta no existiría. Es lógico: no puede haber clase obrera que merezca el nombre de tal donde no hay industrias."

Miguel Miranda. "Cómo se dirigió nuestra economía y retrasó el progreso industrial del país", en: *Hechos e Ideas*, Nº 42, Buenos Aires, agosto de 1947.

vo que se quería alentar: la industrialización sustitutiva de importaciones sin ninguna clase de selectividad, sin industrias naturales y artificiales, desde las confecciones, las cocinas y las heladeras, hasta los bienes de capital y los materiales que necesitaban los servicios públicos. El telón de fondo que guiaba esta política era el recuerdo fresco de las escaseces de la guerra. Por eso, para un Perón escéptico sobre un futuro de paz para el mundo, la cifra del progreso económico era el autoabastecimiento.

En esto, la Argentina no se diferenciaba de otros países que se habían embarcado en procesos similares. Pero había en esta preferencia por la industria algo más idiosincrásico: las tasas de interés reales negativas moderaban los costos de inversión y principalmente los del capital de trabajo, que se habían encarecido por el aumento de los salarios. Así como los precios internacionales altos de los bienes que exportaba la Argentina hacían viable la mejoría sustancial en el poder de compra de los trabajadores y la expansión de la demanda de consumo, así como el arsenal proteccionista garantizaba la reserva del mer-

cado interno para quienes producían fronteras adentro. el crédito barato permitía a la industria pagar el nuevo nivel de salarios. Cada pieza era necesaria. En ese ambiente nacieron cientos de empresas nuevas y se consolidaron otras: Agostino Rocca fundó Techint en 1947; en ese mismo año Leicer Madanes echó a andar FATE; Franco y Antonio Macri comenzaron a participar en el "Plan Eva Perón de Viviendas" a mediados de 1948; Torcuato Di Tella, cuyas primeras inversiones datan de principios de siglo, las multiplicó en los inicios del peronismo. Otros hombres del empresariado industrial crecieron y se enriquecieron por entonces: José Blanco, de Navenor; José Muro de Nadal, de Papelera Argentina y Papelera Río Paraná; Nicasio Antelo, de Picardo y Antelo.

La expansión del crédito a través de los redescuentos del Banco Central fue una lluvia de pesos para la mayoría de los argentinos, gratamente sorprendidos por lo que a todas luces era una novedad. Naturalmente, la inflación se aceleró, pero menos que lo que cualquier estudioso de los temas monetarios podría suponer. Después de décadas de estabilidad, inflación muy moderada o en algunos momentos deflación, los precios comenzaron a moverse más rápidamente. Pero, en todo caso, lo hicieron en un contexto mundial que a la finalización de la guerra se había tornado, previsiblemente, más inflacionario. El ritmo de incremento de los precios en la Argentina se mantuvo, durante el trienio 1946-1948, a la par que el de los países más importantes de América Latina, algo así como un 15% anual. Recién durante el segundo semestre de 1948 la inflación dejó de ser apenas un matiz de inquietud en un paisaje económico francamente idílico. Y en 1949, por primera vez, los precios crecieron más que durante la crisis de 1890. Habían transcurrido casi sesenta años para que un fantasma olvidado volviera.

La razón por la que en esos años iniciales del peronismo la sociedad respondió con una inflación moderada a la exuberancia monetaria de sus autoridades es todavía un enigma. Sin embargo, hay una certeza: a los argentinos no les parecía mal guardarse una buena cantidad de los billetes adicionales que recibían. No sólo ocurría que "nadie había visto un dólar alguna vez", sino que tampoco estaban, por el momento, ansiosos por verlo. Había, todavía, suficiente confianza; casi nadie pensaba que la Argentina había ingresado en una nueva era —dis-

tinta de la que iba a vivir el mundo occidental— caracterizada por la alta inflación. Dicho en términos técnicos, la demanda de dinero aumentó porque ésa era una forma como cualquier otra de atesorar una riqueza que repentinamente se había multiplicado y que nadie sospechaba que se iba a erosionar. Así fue que el agregado monetario más simple y que mejor expresa la preferencia por liquidez de la sociedad —el circulante más los depósitos en cuenta corriente en relación con el PBI— pasó del 24% durante el quinquenio 1940-1944 al 31% durante el quinquenio 1945-1949. Ése se convertiría en el nivel más alto del siglo.

Hubo otro factor, vinculado al corazón de la política peronista, que debe haber contribuido a la monetización: el aumento de los salarios reales y el cambio en la distribución del ingreso. La gente retiene en forma de dinero una proporción de sus ingresos y de su riqueza, pero los sectores de menores ingresos retienen una proporción mayor. Ello ocurre porque el dinero de inmediata disponibilidad sirve para consumir y para afrontar circunstancias adversas inesperadas, y ésos son los dos fines a los que las capas sociales menos favorecidas destinan la mayor parte de sus ingresos. Es posible, entonces, que la política de Perón se haya beneficiado de un encadenamiento de hechos virtuosos: los salarios reales aumentaban, el patrón distributivo se volvía más igualitario, la demanda de dinero se incrementaba y consecuentemente las presiones inflacionarias se moderaban.

La transformación del Estado

Si la distribución del ingreso y el crédito barato eran signos distintivos del peronismo que acababa de llegar al poder, si la industrialización era la plataforma que había que preservar y expandir para construir desde ella un tejido social distinto, entonces el Estado tenía una función importante que desempeñar. Había que coordinar voluntades dispersas; había que construir instituciones nuevas —como el IAPI o el Banco Central nacionalizado—; había que nacionalizar (estatizar) lo que Perón llamaba "el sistema nervioso de la economía", esto es, los servicios públicos; había que invertir en muchas actividades que re-

querían grandes volúmenes de capital y que por lo tanto no estaban al alcance del empresariado nacional pero que eran fundamentales para el buen desempeño de una estructura productiva de la que se pretendía la autosuficiencia; había que preparar a las Fuerzas Armadas para desenvolverse en un mundo que se presumía conflictivo; había que incorporar hasta al último de los argentinos a un proyecto político que no debía tener adversarios porque era el proyecto de una nación movilizada; había que resolver las controversias internacionales que dejaba como legado la guerra. Y había que hacerlo todo rápido y simultáneamente.

No se partía de cero. Hemos visto ya que las grandes guerras, la depresión económica y el atraso de muchas naciones eran desde hacía tiempo el caldo de cultivo propicio para una mayor intervención pública en países de tradiciones políticas muy disímiles. Y hemos visto también que antes de que llegara Perón a la presidencia, y aun antes de la asonada militar de junio de 1943, ese desplazamiento hacia una creciente participación del Estado en las cuestiones económicas permeaba en la Argentina. Primero había sido la creación del Banco Central, de las Juntas Reguladoras de granos y carnes, de la CAP (Corporación Argentina de Productores). Pero durante los años de la Segunda Guerra los gobiernos de la concordancia y las autoridades surgidas del golpe del 4 de junio fueron más allá: comenzaba a prefigurarse un Estado empresario con un rol central de los militares, complemento ineludible de un proceso de industrialización cada día más proclive a la autarquía. En parte por esa tendencia a un cambio estructural, en parte porque las circunstancias externas obligaron en algunos años a comprar cosechas invendibles en el mercado, el gasto público ya había comenzado a aumentar durante la guerra.

Lo que Perón hizo al acceder a la presidencia fue imprimir velocidad a la transformación del Estado. Si la evolución de las erogaciones públicas indica prioridades, entonces la prioridad de Perón fue poner al Estado nacional al servicio del modelo de desarrollo económico naciente. Las participaciones en el gasto público total de la seguridad exterior e interior, de la salud, de la educación, de los intereses de la deuda pública, de los gastos administrativos, se mantuvieron aproximadamente constantes o descendieron. En cambio, la participación del Es-

tado empresario en el gasto total pasó del 36% en 1946 al 47% en 1950. La obvia explicación de este fenómeno reside en el traspaso a manos del Estado de los servicios públicos y de las fuentes de energía, hasta entonces de propiedad extranjera. Este traspaso era central para la nueva política económica. A propósito de las nacionalizaciones de los puertos, una publicación oficial dejaba traslucir, en 1950, el clima de ideas que impulsaba el proceso:

> "[...] Los puertos en manos extranjeras eran un eslabón de la cadena de explotación de los capitales internacionales.
> Como se ha visto, gran número de ellos eran verdaderas posesiones de capitalistas extranjeros. Los argentinos que los transitaban tenían la sensación de caminar por tierra extraña. Hoy esos puertos son argentinos y la firmeza de nuestro paso dice con elocuencia del sentimiento de orgullo que nos domina al haber reconquistado esos pedazos de suelo criollo. Los beneficios de la explotación de esos puertos iban al exterior; hoy quedan acrecentando el bienestar de nuestro pueblo.
> La política portuaria que ayer era de explotación cruda, hoy es de fomento y tiende a promover el progreso de vastas zonas que estaban libradas a la arbitrariedad del concepto típicamente capitalista que regía."[4]

La nacionalización de los ferrocarriles fue la más importante, no sólo por la magnitud de la operación o por el carácter simbólico que tenía la ruptura con el capital inglés vinculado a la vieja Argentina pastoril, sino también porque a través de ella se resolvería un problema que estaba pendiente en las relaciones económicas y financieras con Gran Bretaña: qué hacer con los saldos comerciales acumulados en el pasado y que permanecían bloqueados en Inglaterra; y qué hacer a futuro con la inconvertibilidad de la libra. El primer intento por encontrar una solución simultánea que abriera paso a la nacionalización y destrabara el litigio financiero fue el pacto Eady-Miranda, acordado apenas tres meses después de la asunción de Perón

[4] *La Nación Argentina. Justa, libre y soberana*, Peuser, Buenos Aires, 1950, p. 108.



Acto por la nacionalización de los ferrocarriles encabezado por Miguel Miranda, 1° de marzo de 1948.

como presidente. Hubo una condición necesaria para que ese pacto pudiera firmarse: si bien Gran Bretaña había salido muy golpeada de la guerra, con un importante desequilibrio en el balance de pagos y con una abultada deuda externa en libras esterlinas, en 1946 sus autoridades ratificaron los convenios de Bretton Woods y, con ello, se comprometieron a restablecer en un plazo breve la convertibilidad de la libra con el dólar a la paridad acordada con el FMI. A cambio, Gran Bretaña obtendría préstamos de los Estados Unidos y Canadá que servirían como reaseguro financiero para abandonar exitosamente la inconvertibilidad.

En ese contexto, signado por el optimismo sobre la futura liberalización financiera británica, la delegación argentina logró el acuerdo formal para que las libras que obtendría del comercio con Gran Bretaña pudieran canjearse por dólares estadounidenses a partir de la firma del tratado. En cuanto a los

ferrocarriles, luego de fracasar las negociaciones para conformar una sociedad nacional de capitales mixtos para su explotación, se avanzó muy rápidamente por el camino de la adquisición definitiva. En febrero de 1947 se firmó un contrato de compraventa según el cual la Argentina pagaría 150 millones de libras por la nacionalización de los activos, y ese pago se efectuaría en más de un 85% con los fondos bloqueados en el Banco de Inglaterra. Así, considerado en su conjunto, el arreglo Eady-Miranda parecía tener sólo beneficios para la Argentina: ya no habría libras bloqueadas a futuro; y las libras bloqueadas en el pasado, que si bien estaban protegidas por una cláusula de garantía oro pagaban un interés misérrimo, servirían para recuperar lo que para Perón era un resorte esencial para el desenvolvimiento económico.

Pero todo se derrumbó. En julio de 1947 Gran Bretaña adoptó finalmente la convertibilidad y sin embargo no pudo sostenerla por más de cinco semanas debido a la violenta corrida desatada contra la libra. La Argentina denunció el convenio Eady-Miranda por incumplimiento de parte, puesto que el mismo estaba supeditado a la vigencia de la convertibilidad. Esto obligó, por lo tanto, a una nueva negociación que culminó en la firma del denominado Pacto Andes, en febrero de 1948. De acuerdo con el nuevo convenio, la Argentina terminó pagando los ferrocarriles con un crédito otorgado por el propio gobierno inglés a cuenta de los futuros excedentes comerciales. Para un gobierno como el argentino, temeroso de que tarde o temprano la libra esterlina terminara devaluándose, esa forma de



Propaganda oficial sobre la nacionalización de los teléfonos.

pago era conveniente: después de la crisis de la efímera convertibilidad inglesa, los saldos corrientes del comercio con Inglaterra no tenían garantía oro, mientras las libras bloqueadas sí. En ese contexto, nada era más conveniente que pagar con la moneda vulnerable y quedarse con la moneda garantida.

El caso de los ferrocarriles fue el primero y el más importante, pero forma parte de un corpus de nacionalizaciones que, si bien no constituyó una rareza en términos de la comparación internacional, ayuda a pintar el cuadro de época. A los ferrocarriles les siguieron los teléfonos —que pertenecían a la ITT—, las usinas eléctricas, las empresas de gas, los puertos con sus elevadores, las plantas de servicios sanitarios, los seguros, los silos de campaña. De esas nacionalizaciones surgieron nuevas empresas estatales que impulsaron la inversión pública. Así nació la Empresa Nacional de Energia, que en poco tiempo tuvo a su cargo la construcción de treinta y siete plantas hidroeléctricas; la de Yacimientos Carboníferos Fiscales, que inició la explotación de las minas de Río Turbio; la de Gas del Estado, que comenzó el tendido del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires. Se expropiaron, además, las empresas alemanas que fueron la base del grupo DINIE (Dirección Nacional de Industrias del Estado) al tiempo que se estatizaba el transporte urbano de pasajeros de la Capital Federal.

En el lenguaje de Perón, para 1949 "el sistema nervioso de la economía" ya estaba en manos del Estado. En ese mismo año, el nuevo texto constitucional consagró legalmente esa política al declarar al Estado dueño natural de los servicios públicos y de las fuentes de energía. El Primer Plan Quinquenal 1947-1951 complementó las nacionalizaciones con una guía sistematizadora de las inversiones públicas que incluyó la defensa exterior, un rubro que durante 1946 había explicado el 60% de los gastos de capital llevados a cabo por el sector público. Y sin embargo, era todavía posible preguntarse si, para los patrones dominantes en el mundo de posguerra, Perón era un estatista. Años más tarde, Antonio Cafiero iba a contestar que no:

> "El estatismo o capitalismo de Estado le es esencial al socialismo y no al Justicialismo. Nuestro Justicialismo, es verdad, carga una buena dosis de estatismo. Pero tan sólo por imperativo de las contingencias económicas internacionales.

No porque lo lleve en la sangre. Y, créame, si no tuviéramos que luchar contra el estatismo internacional y defender al país de la satelización de los imperialismos, echaríamos por la borda nuestra carga de estatismo sin desmedro, antes bien con medro del Justicialismo."[5]

En todo caso, sí se puede afirmar a la distancia que así como Perón aceleró la construcción de un Estado empresario, nunca construyó un Estado benefactor en sentido estricto. El núcleo de su política social fue de naturaleza macroeconómica: los salarios altos y el pleno empleo. Los gastos públicos en educación y salud se incrementaron, pero a un ritmo apenas mayor que el del PBI, y es recién a partir de 1950 cuando la suma de esos dos rubros iguala a las erogaciones militares. En cuanto a las transferencias para atender a los sectores sociales más postergados, un dictamen acerca de lo que ocurrió con ellas es difícil. Sabemos que recién experimentaron un aumento de importancia —aunque transitorio— entre 1949 y 1951, esto es, cuando los niveles de salarios y los volúmenes de empleo comenzaron a ceder como consecuencia de la crisis y por lo tanto creció la demanda colectiva por la aplicación de políticas compensatorias.

Sin embargo, algún rol difícil de cuantificar debe haber desempeñado la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. La fundación, administrada financieramente por Ramón Cereijo fue, sin dudas, una poderosa herramienta política del gobierno peronista, pero ese poder no era puramente publicitario: resultaba de la atención masiva y extendida que desde ella se prestaba a quienes no estaban integrados al circuito productivo formal. Financiada con donaciones empresarias obtenidas las mayoría de las veces con métodos cuasi compulsivos, la fundación construyó hogares de tránsito para los indigentes y los ancianos, distribuyó subsidios monetarios, edificó 21 hospitales policlínicos y 19 hogares-escuela en regiones abandonadas, repartió ropas, muebles, cocinas, máquinas de coser, proporcionó equipos a quienes querían instalar talleres independientes y útiles escolares a los chicos más necesitados. En

[5] Antonio F. Cafiero, *Cinco años después...*, edición del autor, Buenos Aires, 1961.

paralelo a las instituciones gubernamentales, se desarrollaba una parte no desdeñable de la política social.

La transformación del Estado estaba en marcha, y era tan vertiginosa y desafiante como el conjunto de la política económica de esos años. Como consecuencia de esa transformación, el gasto público liderado por las erogaciones de capital y en particular por la política de nacionalizaciones aumentó aceleradamente. Durante el quinquenio previo a la guerra, 1935-1939, los gastos consolidados en relación con el PBI alcanzaron el 21%; durante el quinquenio de la guerra, 1940-1944, al 19,5%; durante el primer quinquenio de gobierno peronista, 1945-1949, el 29,5%. Semejante avance en el gasto no tuvo una contrapartida equivalente en el desequilibrio fiscal. Eso fue así porque el gobierno de Perón concentró esfuerzos en cobrar impuestos y aumentar la presión tributaria: la tarea de Cereijo. Entre el quinquenio previo y el posterior a la guerra se triplicó la participación en el PBI de los gravámenes a los réditos, a los beneficios extraordinarios y a los beneficios eventuales; a pesar de que la sustitución de importaciones provocó una disminución en los recursos provenientes de la Aduana, los tributos indirectos en conjunto también crecieron. Sin embargo, lo que significó una verdadera revolución en la estructura impositiva fue la reforma previsional, dictada por Farrell en el mismo decreto por el que instauró el aguinaldo. Los aportes personales y patronales a las cajas fueron ganando año a año mayor relevancia y en 1948 ya representaban más del 4% del PBI. Como el sistema recién nacía, prácticamente no había jubilados que demandaran erogaciones, de modo que la reforma era para el gobierno maná del cielo. Años más tarde, criticando la gestión peronista, Raúl Prebisch escribió: "[...] el presupuesto de la administración no ha actuado directamente como factor inflacionario, pues se acudió a la colocación de títulos en las cajas de jubilaciones, a fin de conseguir el equilibrio desde el punto de vista monetario. Esto no significa que este tipo de financiación deje de representar un serio problema, pues destinar tan cuantioso ahorro [...] a gastos fiscales que sólo en parte corresponden a capitalización [...] significa malograr este ahorro". A principios del gobierno, ni Perón ni sus ejecutores de política económica estaban dispuestos a prestar atención a un desbalance que recién haría crisis un par de décadas más tarde.

ENTRE AYER Y MAÑANA (1949-1952)

¿Quién perdía lo que los sectores populares ganaban? Era una pregunta sencilla, y tenía una respuesta intuitiva que, hasta fines de 1948, resultó también certera: nadie. En la percepción colectiva, la Argentina había recuperado su riqueza de antaño, sólo que ahora estaba mejor distribuida. La economía se expandía a una velocidad similar a la de principios de siglo; los salarios reales crecían sin pausa en un contexto inédito de pleno empleo y de fortaleza institucional de los sindicatos; los beneficios empresarios también crecían, gracias al impresionante volumen de ventas y al crédito barato para financiar las inversiones y el capital de trabajo. Incluso el campo no tenía tantas razones para protestar y, de hecho, sus organizaciones gremiales se comportaban con bastante moderación: si bien el estatuto del peón y la ley de arrendamientos rurales habían sido iniciativas oficiales difíciles de digerir, si bien el IAPI se apropiaba de una buena parte de los extraordinarios precios internacionales de la producción agropecuaria, los ingresos que les quedaban a los hombres de campo eran suficientes para mejorar, entre 1945 y 1948, más de un 30% los términos del intercambio interior. Hubo durante esos años sustitución de cultivos en la pampa húmeda. Crecieron en importancia semillas nuevas como el girasol, el maní y la cebada; decrecieron cultivos tradicionales como el maíz, el trigo, el lino y la avena. Pero, en todo caso, no hubo una crisis rural. En palabras de Carlos Emery, ministro de Agricultura de Perón:

> "[...] Al productor se le dio un precio retributivo por su producción. Ahora, si el gobierno en la venta ganó, no era en detrimento del productor porque si hubieran hecho esa venta a través de los exportadores habituales hubieran recibido menos. Ahora, naturalmente el productor no piensa que fue bien retribuido sino piensa que también podía haber tenido derecho a esa plusvalía que benefició al país."[6]

[6] Entrevista al Ing. Carlos Emery, Archivo de Historia Oral, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1971, p. 20.

Para el 9 de julio de 1947, cuando el presidente Perón proclamó en Tucumán la independencia económica intentando otorgarle una jerarquía igual a la de la independencia política, el clima de optimismo era tan intenso como durante los festejos del Centenario. Y lo siguió siendo hasta fines de 1948. Fue entonces cuando el Poder Ejecutivo impulsó y aprobó con los votos de una Convención Constituyente abrumadoramente adicta una reforma constitucional que, al modificar el artículo 77, permitió la reelección del presidente. Eso ha quedado grabado a fuego en la historia política. Sin embargo, la reforma, consagrada en marzo de 1949, fue más que eso: desde una perspectiva económica, significó escribir en las "Tablas de la ley" la doctrina que dio sustento a las profundas transformaciones del "período de asalto" peronista: el artículo 37 fijó los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y a la educación; el artículo 38 incorporó la "función social" como límite al libre usufructo de la propiedad privada; el artículo 40 determinó que las fuentes naturales de energía eran propiedad "imprescriptible e inalienable" del Estado y que los servicios públicos "pertenecen originalmente al Estado y no pueden ser enajenados ni concedidos para su explotación".

Ironía de la historia: la doctrina fue escrita cuando los bríos económicos comenzaban a vacilar. Para que la expansión productiva y la justicia social se sostuvieran debían cumplirse dos condiciones: la perdurabilidad de los beneficiosos términos del intercambio exterior y la inflación bajo control. Los términos del intercambio favorables servían para financiar las importaciones de bienes de capital y de insumos necesarios para el crecimiento y, como había quedado claro durante los primeros años de gobierno peronista, para moderar el conflicto entre el campo y la ciudad; la inflación bajo control evitaba una carrera entre precios y salarios que inevitablemente terminaría perjudicando a los trabajadores. Desafortunadamente, desde 1949 y hasta principios de 1952 los términos del intercambio cayeron un 36%, hasta el mismo nivel que en 1935; en cuanto a la inflación, las cosas también empeorarían: el promedio simple del período 1949-1952 fue del 33%, significativamente más alto que el 10% de los países más importantes de América Latina, que el 9,5% de Australia y Canadá, que el 6% de una Europa que comenzaba su recuperación, que el 2,5% de los Estados Unidos.

A partir de 1949, la economía argentina ingresó en una zona de penumbra. La edad dorada había terminado. La economía ya no iba a crecer al 8% anual sino que permanecería estancada hasta entrado 1952. Pero esta nueva etapa ya no contaría con el liderazgo de Miguel Miranda y con la participación de otros hombres de la industria y el comercio como Orlando Maroglio o Rolando Lagomarsino. Un exceso de audacia y algunos errores de cálculo dejaron a Miranda a un costado del camino. En su lugar, un equipo más técnico, de formación universitaria y experiencia en la burocracia pública, tomaría la posta. Su figura más destacada, Alfredo Gómez Morales, un economista de apenas 40 años, ocuparía simultáneamente la cartera de Finanzas, la presidencia del Banco Central y la conducción del Consejo Económico Nacional. Corría el mes de enero de 1949 y los nuevos responsables de la gestión económica comenzaban a afrontar desafíos más complejos y menos heroicos que los de la etapa inaugural del gobierno: cómo adaptarse a un mundo que, lentamente, parecía alejarse del colapso y de la guerra; cómo contener la inflación sin afectar los salarios y el empleo.

En palabras de Gómez Morales, el propio Perón hacía la siguiente evaluación de la etapa en la cual Miranda había dirigido la política económica:

"*[...]* Perón: *—Sí, ya sé que Miranda en algunas cosas chapuceaba bastante, pero, dígame [dirigiéndose a Gómez Morales], si yo lo hubiera llamado a Ud. en 1946 y le hubiera dicho que había que hacer esto, que había que nacionalizar el Banco Central, que había que nacionalizar los depósitos, etc., Ud., funcionario de carrera, ¿qué hubiera contestado?*

Gómez Morales: *—Probablemente que no se podía hacer.*

Perón: *—¡Ah!, eso me pasó con muchos, Miranda dijo que sí, que se podía hacer, y ése es el mérito de Miranda. [...]*"

Entrevista al Dr. Alfredo Gómez Morales. Archivo de Historia Oral. Instituto Torcuato Di Tella. Buenos Aires, junio de 1972, pp. 47-48.



Eva Perón con George Marshall en Río de Janeiro, 1947.

Señales del mundo, señales del cielo

Durante 1947 y principios de 1948, Miranda había "invertido las divisas" —ésas eran sus palabras— en bienes de capital, insumos críticos y repatriación de deuda. Lo hacía sin vacilaciones porque hasta poco antes de su renuncia tuvo la convicción de que precisamente divisas era lo que nunca le faltarían. En su percepción, la conflictividad de las relaciones internacionales derivaría en una nueva guerra y, con ello, en otra etapa de desabastecimiento y altos precios de los alimentos y las materias primas. Así pues, las divisas quemaban en las manos y había que desprenderse de ellas. Los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas lo acompañaban en esa visión. Al fin y al cabo, la crisis y el bloqueo de Berlín, ya a mediados de 1948, eran acontecimientos que confirmaban el pronóstico: pronto, y en cualquier latitud, el dinero se desvalorizaría y los bienes se

valorizarían. Tan fuerte era la convicción de Miranda que durante 1948 se animó a una arriesgada apuesta especulativa: retuvo una parte de las cosechas suponiendo que la paciencia lo compensaría con mejores precios. Pero como a todo especulador, le podía ocurrir que un evento inesperado diera al traste con su juego. Ese evento irrumpió en la escena. Fue el Plan Marshall.

Es que las señales del mundo son muchas veces ambiguas, difíciles de desentrañar. Al mismo tiempo que se desarrollaba la crisis de Berlín, los Estados Unidos lanzaban el Plan Marshall. Si Berlín era el lado oscuro de la posguerra, aquel que prolongaba las turbulencias convirtiéndolas en una marca permanente del siglo, el Plan Marshall reflejaba la decisión norteamericana de reconstruir, bajo su control, una Europa próspera, capaz de producir y comerciar. Es que los Estados Unidos ya no podían sostener una situación económica internacional caracterizada por la ausencia de socios comerciales. Europa tenía que vender para comprar, y en particular para comprarle a los Estados Unidos. Y para vender tenía que producir. Como consecuencia política colateral, un Plan Marshall exitoso serviría también como dique de contención para las tentaciones expansionistas soviéticas.

En un comienzo, la idea del secretario de Estado George Marshall no parecía peligrosa para la Argentina ni contradecía la visión de Miranda acerca de la evolución futura de los precios agrícolas. Al menos como el embajador norteamericano se lo narró al propio Perón a fines de 1947, se trataba de lo siguiente: el gobierno de los Estados Unidos donaría —o vendería a precios muy bajos— equipamiento industrial y alimentos a los países europeos amigos. En el caso de los alimentos, que era el que interesaba a las autoridades argentinas, los norteamericanos comprarían saldos exportables a varios países pagando los precios de mercado para luego proceder a su distribución. Si alguien se hacía cargo del costo de la operación era el fisco de los Estados Unidos; para las naciones productoras, la iniciativa resultaba económicamente neutral y en todo caso era políticamente redituable, ya que significaba un gesto de colaboración para con los vencedores de la guerra.

Sin embargo, al tratarse en el Senado norteamericano, la iniciativa de Marshall sufrió varias modificaciones, una de ellas

muy dura para los terceros países. Cada gobierno le compraría los alimentos a sus propios productores y los donaría a las naciones europeas. Eso fue lo que hicieron los Estados Unidos por volúmenes muy cuantiosos, derrumbando los precios de mercado y haciendo fracasar la especulación de Miranda. Por otra parte, la Argentina no estaba en condiciones de actuar como los Estados Unidos. Mitigar el hambre de Europa significaba obtener menos divisas; obtener menos divisas significaba detener el proceso de industrialización y amenazar el pleno empleo. Así fue que el gobierno de Perón, después de algunas negociaciones que no significaron progreso alguno, quedó afuera del Plan Marshall. Formalmente, la Administración para la Cooperación Económica (ECA), que coordinaba la ayuda a Europa, se negó a incorporar a la Argentina a su cartera de clientes. En lugar de un acuerdo con los vencedores, volvieron a la memoria las tensas relaciones de Perón con el departamento de Estado hacia el final del gobierno de Farrell. No hubo, pues, negocio económico; tampoco negocio político.



Pieza de Alberto Vacarezza sobre el agio.

El canto del cisne para una visión del mundo que apostaba a la guerra ocurrió durante el invierno boreal de 1950-1951. La invasión de Corea del Norte a Corea del Sur había sucedido en junio, pero la señal de alarma sonó cuando a fines de año las tropas norteamericanas, que habían intervenido para darle un final expeditivo al conflicto, fueron rechazadas más allá del paralelo 38 por el Ejército de Corea del Norte y por los voluntarios chinos. El general Mac Arthur reclamó la invasión a China; el Estado Mayor comunicó a los comandantes de las fuerzas estadounidenses esparci-

das por el mundo "que la situación existente en Corea aumentaba considerablemente la posibilidad de un conflicto general". En la Argentina, mientras tanto, una escena conocida se repetía por última vez. Los militares y una parte del gobierno exigieron el uso masivo de las reservas para abastecer al país. Sin embargo, había en esta oportunidad dos diferencias: en primer lugar, las reservas internacionales venían descendiendo año tras año desde 1947 con la sola excepción de 1950; en segundo lugar, la conducción de la política económica ya no estaba en manos de Miranda sino de Gómez Morales, y eso significó un cambio. Gómez Morales, persuadido de que no habría una conflagración extendida y de que la recuperación europea era irreversible, se opuso a la renovada demanda por invertir las reservas. Su victoria no fue completa, las importaciones aumentaron durante 1951, pero la rápida estabilización del frente coreano y la posterior finalización de la guerra le dieron la razón.

Mientras tanto, las señales del cielo fueron, por esos años, más contundentes y más dañinas para el país que las señales del mundo. Además de la caída de los precios, fruto de la mutación en el escenario internacional, hubo una reducción de volúmenes en la producción y en las exportaciones agropecuarias. La fuerte sequía de la campaña 1949-1950 fue apenas un anuncio de la que con mayor rigor azotaría al campo durante 1951-1952. Las exportaciones totales en 1949 apenas pasaron el 70% del nivel del año anterior; y las de 1952 fueron casi un 25% menores a las de 1949. Durante 1952 la noticia cotidiana era la imposibilidad de sembrar, la muerte del ganado por falta de agua, los incendios espontáneos de campos. La escasez de granos fue tan intensa que el gobierno promovió la elaboración de pan mediante mezclas de mijo y centeno en sustitución del trigo. Aunque parezca un dato trivial, ello causó estupor en muchos argentinos, a quienes les parecía una aberración que en un país considerado el granero del mundo se acabara consumiendo, por casi dos años, un pan ajeno a su tradicional blancura. De todas maneras, Gómez Morales ha subrayado la equidad dentro de la calamidad: "Se comió pan negro, pero lo comieron todos, desde Anchorena hasta el hombre más humilde".

El duro trance climático golpeó con violencia a la economía,

pero no dejó de ser un factor coyuntural. El factor estructural, que venía de lejos, era la evolución decepcionante del comercio exterior y en particular de las exportaciones. Si bien durante los tres primeros años de gobierno peronista el precio promedio de los productos que vendía la Argentina se había incrementado en un 200%, el volumen exportado en 1946 había sido menor que el de 1935, que a su vez había sido inferior al de los años más exitosos de la década del '20. La tendencia descendente de las exportaciones argentinas era en parte el resultado de la crisis del '30 y del consecuente colapso del comercio internacional. Pero para el nuevo elenco económico, resultaba insatisfactorio y paralizante concentrar toda la explicación en una variable que no podían dominar. Si bien ellos compartían con muchos otros economistas latinoamericanos una visión pesimista sobre el comportamiento futuro de las exportaciones de materias primas, algo había que hacer: el país se enfrentaba por primera vez a lo que más tarde se conocería como el ciclo del *stop and go*. Pero ahora estaba pasando, después de los momentos felices, por la amarga fase del *stop*.

¿Qué hacer?

Caídas de precios y sequías derivaron entonces en una drástica reducción de las divisas disponibles, y ello obligó a comprimir aún más las importaciones, ya bastante restringidas. El gobierno debió ser más selectivo en la asignación de divisas, y gradualmente fue reforzando —salvo en 1951, un oasis climático y un error de perspectiva sobre las consecuencias de Corea— el sistema de permisos de cambio que regulaba la obtención de bienes extranjeros. Pero esta política, obligada por las circunstancias, tuvo un costo: el país había llegado a un punto en que era imposible contraer las importaciones sin alterar la producción industrial, que obtenía del exterior muchos de sus insumos. Uno de los sectores más dinámicos durante los primeros años de la posguerra sufrió así con las restricciones adicionales a las importaciones. Los años 1949 y 1952 fueron dos de los tres únicos entre 1944 y 1958 en los que la producción industrial resultó menor que la del año anterior. Las importaciones para la industria y el propio nivel de actividad del sector manufacturero caían

al compás de la disponibilidad de divisas, poniendo en evidencia el talón de Aquiles de un proceso de industrialización volcado hacia el mercado interno que había comenzado unos veinte años antes pero que se había profundizado durante el peronismo.



Propaganda oficial.

Acentuar el proteccionismo era, para la renovada conducción económica, apenas un reflejo defensivo. La verdadera solución consistía en aumentar las exportaciones, recibir inversiones extranjeras, o una combinación de ambas cosas. Al finalizar los años '40, las inversiones extranjeras orientadas a países como la Argentina constituían un casillero vacío; si había por entonces un flujo masivo de capitales entre naciones, éste era el del Plan Marshall, y su destino era Europa. Gómez Morales apenas encontró un resquicio cuando para saldar una deuda con acreedores de los Estados Unidos por operaciones comerciales obtuvo un préstamo del Eximbank por 100 millones de dólares que se desembolsaron durante 1951. De todas maneras, para un gobierno que, como repetía con frecuencia Perón, podía desenvolverse sanamente con recursos propios, sin recurrir "a la mendicidad" ni asociarse al FMI, ese préstamo fue tan necesario como desagradable. Faltaba todavía algún tiempo para que el mundo le abriera a Perón una ventana a la inversión y para que Perón abriera su mente a recibirla con beneplácito.

Había, pues, un único camino en ese momento de transición, entre el ayer de la guerra y el mañana de los "treinta años gloriosos" que viviría Occidente. Ese camino era el de alentar la oferta de bienes que pudiesen colocarse en el mundo para mitigar la escasez de divisas. Dos obstáculos dificultaban la tarea. Uno de ellos, la industria no estaba preparada para insertarse

en el circuito del comercio internacional: su expansión diversificada en un mercado relativamente pequeño le quitaba escala y le aumentaba costos; el otro obstáculo residía en que una herramienta de política económica le estaba vedada a la gestión de Gómez Morales: la devaluación. Por lo menos hasta que una victoria rotunda confirmara y reforzara el liderazgo político de Perón en los comicios de noviembre de 1951, nada debía reducir, por lo menos intencionadamente, los salarios reales. Es cierto que en septiembre de 1949 la depreciación de la libra esterlina en algo así como un 30% obligó a la Argentina, al igual que a casi cuarenta países, a reajustar sus tipos de cambio en una proporción equivalente. Pero ésa fue una medida inevitable, una movida en el tablero apenas para permanecer en el mismo lugar. No tuvo el objetivo de corregir, estructuralmente, las penurias del sector externo.

En ese escenario, el gobierno apostó al campo. Y lo hizo apelando a los mismos instrumentos que le habían servido para favorecer a la industria en los años anteriores. Un caso interesante fue el del IAPI. Las autoridades modificaron la carta orgánica del Banco Central durante 1949 y dejaron afuera del sistema financiero a la superinstitución creada por Miranda. Ya no se atenderían, desde ella, los requerimientos crediticios de la Fuerzas Armadas, de los ministerios, de muchas reparticiones públicas; ya no se utilizarían sus eventuales beneficios para expandir la capacidad prestable de los bancos. El IAPI se limitó desde entonces a su función primordial: la comercialización de las cosechas. Ésa era una cuestión de prudencia y de pulcritud administrativa, virtudes que siempre ocuparon un lugar alto en el orden de valores de Gómez Morales y de sus compañeros de gabinete económico. Pero además, y lo más importante, junto al cambio en la arquitectura institucional ocurrió otro. A partir de 1949 el gobierno se adaptó a los nuevos términos del intercambio exterior, menos beneficiosos para el país, y comenzó a comprar las cosechas a los productores a precios más altos que los que percibía por su venta en los mercados internacionales. Gómez Morales no era un industrial, como Miranda. Quizá por eso le resultó fácil comprender que el mandato del momento era, como había dicho Emery, garantizar cotizaciones remunerativas al campo, aunque ahora ello implicara pérdidas para el IAPI.

Gómez Morales había aprendido una ley de hierro: se necesitaban más saldos exportables si se quería mantener el desarrollo industrial al que Perón aspiraba irrenunciablemente. Por eso, un segundo instrumento que se dibujó con relieve entre 1949 y 1952 fue el de la reasignación del crédito por parte del sistema financiero nacionalizado. Una rápida comparación estadística ilustra el impresionante viraje ocurrido: desde fines de 1948 hasta fines de 1951, el crédito a la industria se multiplicó poco más que por uno y medio, mientras que el crédito al campo estuvo cerca de cuadruplicarse. Una silenciosa transformación estaba ocurriendo en el sistema financiero para que la revolución industrialista con que soñaba Perón se sostuviera. El campo recibía un flujo masivo de préstamos a tasas subsidiadas con la esperanza de que, en sintonía con la política de precios remunerativos, se amortiguara el golpe que el mundo le estaba asestando a las exportaciones argentinas. Nadie pensaba en recuperar los lozanos años '20, pero sí, al menos, en dejar atrás el largo estancamiento de la producción agropecuaria.

Al IAPI pro agrario y a la política crediticia pro agraria debía sumarse una última herramienta si es que el objetivo era superar la parálisis de la "rueda maestra". Había que ofrecerle al campo los insumos y los bienes de capital necesarios para incrementar su productividad y por lo tanto su volumen de producción; había que tornar más fructíferas las tareas de labranza y de cosecha, y hasta la propia actividad ganadera. En este sentido, la política comercial sirvió a las intenciones del gobierno. Consistentemente con la reasignación del crédito, también los permisos previos a la importación se reasignaron a favor del sector agropecuario, principalmente para la adquisición de maquinarias agrícolas. A partir de 1949, las palabras de orden fueron "tecnificar las explotaciones rurales". Esas palabras atravesarían todo lo que restaba del gobierno de Perón y su influencia se prolongaría hasta los tiempos de Frondizi.

¿Fue exitosa la apuesta al campo?; ¿tenía sentido llevarla a cabo sin el instrumento de la depreciación monetaria? Es imposible responder a esas preguntas: la maldición de las repetidas sequías afectó tanto al agro —probablemente como nunca durante el siglo— que la política económica se convirtió en un

factor secundario para explicar los avatares de la realidad. Gómez Morales no fue, hasta finales de 1952, un hombre de buena fortuna. La economía permaneció frenada: las exportaciones hundidas en un nivel muy bajo, los salarios comenzaron a deteriorarse. Las meditadas iniciativas de la conducción económica para adaptar a la Argentina a un mundo que marchaba hacia la paz se encontraban con demasiados obstáculos. Y tampoco el otro gran desafío, la lucha para abatir la inflación, ofrecía por entonces resultados prometedores. Pero en este caso, hay que convenir que la estrategia gradual y minimalista que se autoimpuso el gobierno hasta el plan de estabilización de 1952 ejerció un papel preponderante.

En realidad, la inflación se hizo consciente como problema de gobierno ya a fines de 1948. Miguel Miranda era todavía el conductor de la gestión económica, pero su criatura, que había llevado a la mayoría de los argentinos a la convicción del progreso material indefinido, comenzaba a exhibir su lado oscuro y a devorar el capital político que Miranda había acumulado. Para sorpresa de muchos, su reacción ante el fenómeno inflacionario fue la de un monetarista convencido: intentó reducir el crédito total a razón de 1% mensual cuando él mismo lo había expandido un 55% anual durante 1946, un 92% durante 1947 y un 60% durante 1948. Considerando que la inflación se había instalado en un régimen de casi el 3% mensual, era seguro para cualquier observador informado que semejante cambio de política tenía un solo final posible: la contracción económica y el desempleo. Uno de esos observadores era Alfredo Gómez Morales; otro era Perón, que en los últimos días del año terminó de comprender que Miranda no tenía una fórmula para resolver el problema y llamó a Gómez Morales para sustituirlo como máximo responsable de la política económica.

Gómez Morales no se comportó como un monetarista. Conocía los estrechos límites políticos y económicos dentro de los cuales debía desempeñarse durante esa larga transición que terminaría con la reelección de Perón. Así como no podía recurrir a la devaluación para devolverle rentabilidad al campo, tampoco podía estabilizar la economía con instrumentos que deterioraran el nivel de vida popular. Esos límites definieron la estrategia antiinflacionaria de la conducción económica como una estrategia gradualista. Difícilmente se encuentren palabras

más precisas que las del propio Gómez Morales para describir esa fase de su gestión: "...las medidas tendían a frenar el proceso inflacionario, si no del todo, al menos a disminuir su aceleración...". O bien: "...no paralizamos la actividad económica, frenamos la aceleración del proceso inflacionario, que de otra manera hubiera alcanzado magnitudes difíciles de prever...". O, por fin: "...había una situación de arrastre; los salarios, por razones lógicas de tipo político, no acompañaron del todo a las iniciativas del equipo económico...". Frenar la aceleración, apenas una tímida y secreta victoria de la política antiinflacionaria que sólo quienes participan del gobierno pueden valorar. Comprender las situaciones de arrastre, un peso muerto imposible de sobrellevar si se quiere estabilizar la economía. Por cierto, no había llegado todavía el tiempo de un plan antiinflacionario integral.

¿Qué hizo, pues, el gobierno para contener la inflación? En primer lugar, reducir el desequilibrio fiscal. A ello contribuyeron los nuevos impuestos sobre los salarios para financiar la seguridad social, los gravámenes sobre los ingresos de las personas y las corporaciones y, en menor medida, las cargas indirectas sobre el consumo. Había margen para incrementar la presión tributaria y Perón lo hizo a su manera: el trienio 1948-1950 fue el único de la historia argentina en que los impuestos directos explicaron dos tercios de los ingresos totales del Estado nacional. En cuanto al gasto público, la conducción económica le puso un freno a valores reales en los niveles de 1949: se suspendieron obras en marcha y se cancelaron definitivamente otras, al tiempo que, por primera vez desde el golpe militar de 1943, las Fuerzas Armadas tuvieron que ceder en sus pretensiones y contentarse con presupuestos sensiblemente más austeros. Entre 1950 y 1952, Perón podía sentirse al menos en un aspecto satisfecho. No era hombre al que le gustara el déficit fiscal, y el déficit fiscal cayó en esos años hasta niveles que podían despertar la envidia de aquellos críticos a su gestión que veían en el equilibrio de las cuentas públicas una virtud excluyente.

La disminución del déficit fiscal tuvo una consecuencia benéfica, buscada por Gómez Morales. Pudo "desacelerar" la expansión del crédito sin afectar mayormente la actividad privada considerada como un todo. Hubo una reasignación de la ca-

pacidad prestable a favor del campo, y ya hemos analizado las razones; hubo también una mayor selectividad y condicionalidad del crédito para desactivarlo como negocio especulativo y para desalentar inversiones que no fueran rentables. Pero los préstamos totales del sistema financiero al sector privado apenas variaron entre los tiempos de Miranda y los primeros tiempos de Gómez Morales. Durante el trienio 1946-1948 crecieron al 39% anual; durante el trienio 1949-1951, al 31% anual. En cambio, los préstamos al sector oficial tuvieron trayectorias abismalmente diferentes si se comparan los dos períodos. Bajo la gestión de Miranda casi se multiplicaron por treinta; bajo la de Gómez Morales, crecieron un 40%. He ahí el secreto: el desequilibrio presupuestario cayó, y esto permitió recortar el crédito sin generar problemas de liquidez en una economía argentina que ya comenzaba a mostrar sus grietas.

¿Por qué, en una época signada por la austeridad pública y la contención del crédito agregado, la inflación no cedió?; ¿por qué se mantuvo hasta 1952 por encima del 30%? Una respuesta posible es que el crédito total debió haber caído más. Se esgrime como prueba de la escasa fortaleza de las autoridades económicas en la lucha contra la inflación que durante 1951 se eliminara el último vestigio de convertibilidad, al anularse una cláusula que obligaba al Banco Central a respaldar con reservas internacionales por lo menos un 25% de la base monetaria. Ésa no era la respuesta de Gómez Morales, y no parece ser la respuesta correcta. Si la cláusula de convertibilidad se anuló, ello sucedió porque Perón y las Fuerzas Armadas estaban convencidos de que en lo más conflictivo de la Guerra de Corea había que utilizar las reservas para abastecer al país, y ésa era una razón de Estado a la que la conducción económica no podía oponerse. En todo caso había una respuesta más profunda para explicar la resistencia de la inflación: los precios subían porque los salarios subían, y los salarios subían porque los precios subían. La Argentina vivía ya en un régimen inflacionario, y nadie quería perder las posiciones ganadas. Sin embargo, a medida que los términos del intercambio se deterioraban, la ilusión de la riqueza nacional se volvía crecientemente insostenible. Alguien tenía que cortar ese nudo.

"Para que cada argentino sepa lo que debe hacer"
PERÓN ANUNCIA EL PLAN ECONÓMICO DE 1952
Y LOS PRECIOS DE LA COSECHA

ECONOMÍA FAMILIAR

"Consumir menos:

La regla debe ser ahorrar, no derrochar.

Economizar en las compras, adquirir lo necesario, consumir lo imprescindible.

No derrochar alimentos que llenan los cajones de basuras.

No abusar en la compra de vestuario.

Efectuar las compras donde los precios son menores, como cooperativas, mutuales y proveedurías gremiales o sociales.

Desechar prejuicios y concurrir a ferias y proveedurías en vez de hacerse traer las mercaderías a domicilio, a mayor precio.

No ser 'rastacueros' y pagar lo que le pidan, sino vigilar que no le roben denunciando en cada caso al comerciante inescrupuloso.

Evitar gastos superfluos, aun cuando fueran a plazos.

Limitar la concurrencia al hipódromo, los cabarets y salas de juego a lo que permitan los medios, después de haber satisfecho las necesidades esenciales."

Juan D. Perón, *Perón anuncia el Plan Económico de 1952 y los precios de la cosecha,* Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación. Buenos Aires, 18 de febrero de 1952, pp. 26-27.

A LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO (1952-1955)

La inflación derrotada

El 18 de febrero de 1952, luego de haber ganado en forma aplastante las elecciones de noviembre anterior, Perón anunció a los argentinos el "Plan de Emergencia", un programa de estabilización que durante más de tres años había venido postergando y que durante meses había venido discutiendo en secreto con el equipo económico comandado por Gómez Morales. Ese equipo iba a experimentar cambios cuando en junio diera

comienzo formal la segunda presidencia: Gómez Morales pasaría del Ministerio de Finanzas al de Asuntos Económicos, recién creado; Miguel Revestido ocuparía la plaza que dejaba vacante Gómez Morales; Rafael Amundarain reemplazaría a José Constantino Barro en la cartera de Industria y Comercio; Antonio Cafiero se haría cargo de un nuevo ministerio que reflejaba algunos de los actuales intereses del gobierno: el de Comercio Exterior; Pedro Bonanni reemplazaría a Ramón Cereijo en Hacienda, quien junto al entonces ocupante de la ya desaparecida cartera de Economía, Roberto Ares, abandonaría el gabinete. Iba a ser un cambio parcial de guardia, pero no de las inquietudes que guiaban al equipo económico. Ya casi nadie creía que la inflación era un instrumento beneficioso para redistribuir ingresos. Los precios se estaban moviendo más rápido que los salarios. Había que abatir la inflación.

¿Cómo hacerlo?; ¿qué había que modificar en la política económica para alcanzar un éxito que se venía negando desde 1949? En un aspecto, no había que cambiar nada. El Plan de Emergencia tuvo una dimensión fiscal que fue la continuidad y la profundización de lo que se venía haciendo. La austeridad en el gasto público se constituyó en una consigna de cumplimiento generalizado. El peso del ajuste ya no recayó sólo sobre las Fuerzas Armadas y algunas obras públicas. Los gastos de capital del Estado, que habían constituido uno de los pilares del modelo de desarrollo peronista y que a precios constantes se habían multiplicado por tres y medio entre el quinquenio preperonista 1940-1944 y el quinquenio de la euforia económica 1945-1949, cayeron un 30% durante el quinquenio de reestructuración 1950-1954. Ésa fue la clave explicativa de la política de equilibrio presupuestario. Los gastos corrientes, en cambio, no dejaron de aumentar. Si bien las erogaciones administrativas, la incorporación de personal, los salarios de los agentes públicos, la salud, la educación y hasta el gasto social destinado a paliar las penurias de los más necesitados sufrieron los rigores de la emergencia, hubo dos factores que presionaron incontenIblemente al alza. Uno de ellos, los subsidios al campo a través del IAPI y a los ferrocarriles crecientemente deficitarios; el otro, los pagos que lentamente comenzaban a aparecer en el nuevo sistema previsional.

Así fue que el total de los gastos públicos en relación con el

PBI pudo reducirse, aunque levemente, a partir de 1952. Nunca en lo que iba del siglo se había vivido una expansión tan acelerada de las funciones del Estado y de sus erogaciones. Detener ese tren en marcha no podía ser una tarea fácil. A Perón le gustaba decir por esos días —y lo hizo con alguna frecuencia en mensajes radiofónicos que apuntaban a explicar de manera simple el sentido del Plan de Emergencia— que ya no convidaba café importado sino mate cocido a los embajadores. Destacaba de ese modo, ante una sociedad que se había visto obligada a cambiar su pan, el esfuerzo en el ámbito de lo público que se estaba llevando a cabo para estabilizar la economía. Pero si el desequilibrio fiscal fue durante los primeros años '50 de los más bajos de la historia argentina, ello ocurrió también porque se mantuvo la tendencia a incrementar la presión tributaria. En este único aspecto, la sustitución de Miranda por Gómez Morales no fue una frontera entre dos políticas económicas disímiles. Durante 1940-1944 la presión tributaria fue del 15,7%; durante 1945-1949 aumentó a 21,2%; finalmente, durante 1950-1954 llegó a 25,6%. Los impuestos directos —aportes a las cajas previsionales, gravámenes a los réditos, a los beneficios extraordinarios, a las ganancias eventuales— seguían desempeñando un papel central en esa dinámica vertiginosa.

No hubo, entonces, a partir del Plan de Emergencia, un cambio de rumbo en la estrategia fiscal del gobierno de Perón. La verdadera innovación en materia de política antiinflacionaria, aquella que sorprendió a los argentinos en el discurso de Perón del 18 de febrero y se convirtió en la llave para acceder a la estabilización, fue el ataque a la puja distributiva, el intento de quebrarle el espinazo al régimen inflacionario que se había instalado en el país. Perón anunció ese día que los salarios, los precios y las tarifas públicas quedarían congelados por dos años, y anticipaba ya que una vez que se reabrieran las negociaciones colectivas que incluían la discusión salarial, ésta debería guiarse por la evolución de la productividad. Quince días después del lanzamiento del plan, Perón decía: "El lema argentino de la hora ha de ser producir, producir, producir [...] El pueblo es el encargado de producir. El justicialismo sólo puede asegurar una justicia distributiva en relación con el esfuerzo y la producción". Esas palabras condensaban una transforma-

ción profunda, el golpe de audacia que dejaba atrás la primera política económica peronista: así como no iba a haber una devaluación que redujera los salarios reales, tampoco se iba a avanzar más de lo que se lo había hecho por el camino de la redistribución progresiva del ingreso; las remuneraciones de los trabajadores ya no aumentarían porque ahora eso implicaba un juego de suma cero en el que algún otro sector tenía que perder. A partir de entonces el juego quedaba cancelado. Si la austeridad y el equilibrio fiscal se habían convertido en un mandato para el Estado, la productividad se colocaba en el centro del funcionamiento de los mercados. O, por lo menos, ésas eran las nuevas aspiraciones de Perón para el gobierno de la economía.

Ejercicio de una férrea disciplina fiscal y corte drástico con el régimen inflacionario que venía del pasado fue una original combinación que se repetiría varias veces a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, casi siempre con un éxito transitorio. Durante 1952, todavía, el incremento de los precios fue de casi el 39%, una cifra que atestiguaba sobre la difícil situación que había estado viviendo la economía argentina: desde las huelgas recurrentes hasta los síntomas de repudio al dinero como depósito de valor, todo indicaba la fragilidad de lo que se había conseguido hasta entonces. Pero el Plan de Emergencia consiguió modificar ese oscuro cuadro más rápidamente que lo que cualquiera hubiera imaginado. La inflación de 1953 fue del 4%; la de 1954, del 3,8%. Durante ese año, la inflación de Brasil fue del 18%; la de Chile, del 73%; la de Colombia, del 9%; la de México, del 5%; la de Holanda, del 4%; la del Reino Uni-



Propaganda oficial fomentando el incremento de la producción.

do, del 2%. Desde aquel 1952 de la alta inflación, de la sequía, del "agio y la especulación" y de la muerte de Evita, la Argentina de Perón parecía reencontrarse con las buenas nuevas. El ministro Gómez Morales podía sentirse satisfecho; y podía afirmar también que, por fin, la fortuna no le resultaba esquiva.

Hambre de ahorro, hambre de divisas

La estabilización era la urgencia que enfrentaba Perón a principios de 1952. Pero la crisis económica argentina no residía sólo en una inflación difícil de dominar. Hacía más de tres años que el país estaba prácticamente estancado y, poco a poco, para un gobierno que había hecho de la incorporación social su máxima prioridad, la reactivación también se transformaba en una urgencia. Las propuestas de las autoridades económicas para salir de la recesión no eran simples: respondían a un diagnóstico en el que los factores estructurales ejercían un papel principal como limitantes del crecimiento. En primer lugar, el ahorro de los argentinos debía aumentar para financiar más inversiones públicas y privadas. Pero si no se quería deprimir el consumo y la demanda efectiva, no había que pedirle todo al ahorro interno. Eso abrió paso a una visión más permeable hacia la inversión extranjera. El gobierno venía a descubrir que su nacionalismo inicial podía entrar en conflicto con la defensa del nivel de vida popular, y que a la hora de elegir lo iba a hacer por lo segundo. A diferencia de otras experiencias nacionales, en las que el sacrificio del consumo estaba financiando la acumulación de capital, Perón comenzó a abandonar sus antiguos recelos y a aceptar que un poco de ahorro externo serviría para amortiguar ese sacrificio.

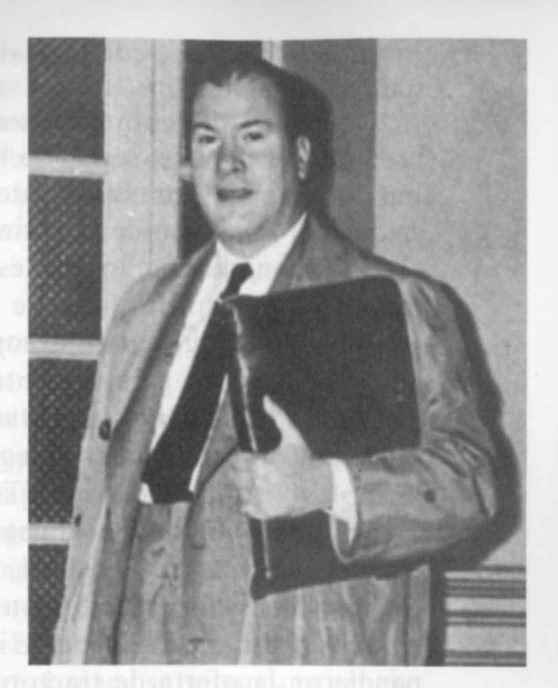
Además de la insuficiencia de ahorro, había otro obstáculo al crecimiento que el gobierno tenía que remover y cuyas consecuencias los argentinos venían padeciendo: la escasez de divisas. Podía aumentarse el ahorro interno, pero si con ese ahorro no se podía acceder a las divisas necesarias para adquirir bienes de capital en el resto del mundo, el sendero de expansión económica quedaba clausurado. En este aspecto, la gestión del ministro Gómez Morales se había concentrado, desde

1949, en mejorar la situación del sector agropecuario para expandir las exportaciones. Y así lo seguiría haciendo a partir del Plan de Emergencia. Estaba claro, sin embargo, que para los hombres que conformaban el equipo económico con ello no alcanzaba. Por eso apostaron, también, a un segundo rol benéfico de la inversión extranjera: ya no sólo el de reducir las presiones sobre el consumo, sino además el de aportar divisas para aliviar la restricción externa. Las idas y vueltas de esa apuesta, la convicción o la vacilación con que se la encaró, constituyeron el signo distintivo de la política económica hasta el mismo derrocamiento de Perón.

Hubo una primera conexión virtuosa entre el combate contra la inflación y el combate por el crecimiento, entre "estabilización y desarrollo", como lo frasearía Arturo Frondizi pocos años más tarde. El Plan de Emergencia de febrero del '52 sirvió para aumentar el ahorro por dos canales distintos. Por un lado, el Estado incrementó su superávit corriente, y de ese modo pudo financiar sus propias y menguadas inversiones —previstas en el Segundo Plan Quinquenal— sin un endeudamiento importante. Por otro lado, la estabilidad de precios estimuló la frugalidad privada, ya que las familias que podían hacerlo no se sentían urgidas a comprar bienes de consumo durable antes de que subieran de precio, como suele ocurrir en un proceso inflacionario. Ése fue uno de los fundamentos que explica el éxito de las campañas publicitarias a favor del ahorro que desplegaba en lugares de trabajo y en escuelas la Caja Nacional de Ahorro Postal. Durante 1954, la Caja anotó una cifra sin precedentes en sus libros: los depósitos alcanzaron al 22% de los depósitos totales del sistema financiero, cuando al comenzar el gobierno de Perón, en 1946, no llegaban al 10%; además, el acumulado de ese año fue superior al de la suma de los primeros treinta y tres años de vida de la institución.

En el contexto de una recuperación económica que se hizo visible a partir de 1953 y se extendió más allá de la caída de Perón, hasta 1958, el ahorro interno en efecto se incrementó. Había descendido a un mínimo del 12% del PBI durante 1949, pero en el trienio 1953-1955, posterior a la estabilización, el promedio fue de casi el 17%. Un objetivo crucial de la política de Gómez Morales quedaba así alcanzado. El otro era la generación de divisas, pero no concebida como un hecho efímero que dependiera del

buen clima o de los buenos precios. La dura lección de los años anteriores había sido que el buen clima se convierte en malo y los altos precios en bajos con demasiada facilidad, de modo que lo que hacía falta era un cambio estructural profundo en el comportamiento de la economía, un cambio que resolviera definitivamente las dificultades del sector externo. La convicción de Gómez Morales y del resto de los ministros del área económica era que para lograr esa corrección irreversible había que poner en juego una compleja batería de instrumentos. Y así se hizo desde el lanzamiento del Plan de Emergencia.



El economista Alfredo Gómez Morales.

Por lo pronto, se mantuvo y se profundizó la política de promoción de exportaciones y la vuelta al campo, inaugurada en 1949. Es cierto que la ofensiva del flamante ministro de Comercio Exterior, Antonio Cafiero, a favor de la devaluación, fue rechazada por Gómez Morales y, a partir de su influencia, por el propio Perón. Sin embargo, que se descartara la depreciación generalizada del peso no fue obstáculo para que se practicaran concesiones cambiarias sectoriales. Se incorporó un sistema inédito para proporcionar a algunos exportadores —en particular a aquellos que cubrían las necesidades del mercado interno— un tipo de cambio más satisfactorio y más rentable para vender al exterior. El mecanismo fue tan simple como lo que sigue: se combinaban las cotizaciones de los mercados básico, preferencial y libre en porcentajes que variaban según el producto. Naturalmente, las presiones particulares no dieron respiro a las autoridades. Cada sector, cada empresa, reclamaba su propio tipo de cambio. Pero, al fin y al cabo, parecía entonces no haber otro camino para incentivar exportaciones sin reducir en exceso los salarios reales y sin encarecer los

insumos y los bienes de capital necesarios para avanzar en la industrialización.

El trato al agro complementaba esa política. La preferencia crediticia con que el sector se había beneficiado desde el desplazamiento de Miranda se atenuó, pero nunca la Argentina retornó al escenario de los primeros tres años de la presidencia de Perón, durante los cuales el sistema financiero nacionalizado estuvo al servicio de la industria. El IAPI siguió subsidiando los productos agropecuarios. También se llevaron adelante acciones para aumentar la productividad y bajar los costos de producción: el Estado invirtió significativamente, como un anticipo de lo que luego sería el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en tecnologías de producción y en sanidad animal y vegetal; se amplió, en el contexto del Segundo Plan Quinquenal, la capacidad de almacenaje de granos; se siguió adelante con el programa de mecanización agraria, ahora con la ayuda de inversiones extranjeras que expandieron la oferta de tractores, cosechadoras y trilladoras. Ciertamente, la situación internacional no ayudaba: los precios agrícolas fueron, durante 1954 y 1955, los más bajos de la década peronista. Pero el gobierno no ahorró esfuerzos en su lucha contra las circunstancias adversas.

No fue, sin embargo, a través de la promoción de nuevas exportaciones y de la ayuda al campo como el gobierno creía que iba a saciar su hambre de divisas. Hacía falta algo más, y lo que faltaba era más importante. El alivio definitivo a las dificultades del balance de pagos vendría de la mano de un gran paso adelante en el proceso de industrialización. El Plan de Emergencia abría una oportunidad. Con estabilidad y más ahorro se generaban las condiciones para capitalizar al país sustituyendo importaciones en sectores básicos: materias primas, siderurgia, petroquímica, bienes de capital, energía, material de transporte. La empresa que se proponía el gobierno era harto ambiciosa y a la hora del balance se descubriría que los resultados habían sido insuficientes. Pero el esfuerzo concentrado durante los últimos años de la década peronista no fue de poca monta, ni por el viraje político que implicó ni por los recursos económicos puestos en juego. La inversión, que había llegado al 14% del PBI en la segunda mitad de los '40, alcanzó al 17% durante la primera mitad de los '50. Dentro de los seve-

ros límites impuestos por la nueva política de disciplina fiscal, el Estado jugó un rol importante en ese esfuerzo, y su herramienta fue el Segundo Plan Quinquenal. Además, facilitado su ingreso por los cambios que estaban ocurriendo en el escenario mundial y en la concepción de los gobernantes, un nuevo actor entró en escena: las empresas extranjeras.

Un nuevo plan, una nueva economía

Fábricas, escuelas, empresas estatales, organismos públicos, ciudades y pueblos de campaña se constituyeron en los múltiples blancos de una masiva propaganda oficial orientada a promocionar el nuevo plan quinquenal. No era un capricho. Aplicado a partir de 1953, el plan fue una pieza indispensable de las reformas de carácter estructural que acompañaron al proyecto estabilizador de 1952. En uno de los múltiples documentos oficiales que explicaban el plan, se reconocía sencillamente que: "el Primer Plan Quinquenal consolidó en el país la industria liviana y corresponde a este segundo plan arraigar la industria pesada". Esa visión secuencial mostraba las cosas más simples de lo que en realidad eran. El cambio de prioridades no obedecía al hecho de que una etapa del desarrollo argentino estaba concluida y se pasaba entonces a otra. Se trataba, más bien, de una reestructuración de acuerdo con la cual el consumo popular ya no diseñaría espontáneamente el patrón productivo, ni la producción se llevaría a cabo exclusivamente para satisfacer las demandas inmediatas del consumo popular. Había que garantizar que el crecimiento no fuera efímero, como lo había sido entre 1946 y 1948, y eso requería un importante cambio de políticas. A poco tiempo del abrupto final del gobierno, en 1955, Gómez Morales reconocía que:

> "Nosotros mismos hicimos la autocrítica del Primer Plan Quinquenal de gobierno y podemos afirmar, sin que nadie pueda seriamente desmentirnos, que en el Segundo Plan Quinquenal, que abarcaba el período 1952-1957, las inversiones previstas y el desarrollo de las distintas actividades fueron también reajustadas de modo que quedaba asegurada

una evolución armónica de los distintos sectores que componen la economía nacional."[7]

Esta evolución armónica tenía que ver con las nuevas prioridades de inversión que contemplaba el plan. Un objetivo explícito era el de "solventar las necesidades básicas del país", en parte a través de la acumulación de capital que podía realizar el Estado. Así es como la distribución de la inversión pública entre 1952 y 1955 fue muy distinta de la del quinquenio anterior. Aumentaron los porcentajes correspondientes a transportes (de 27,4% a 29% del total), energía y comunicaciones (de 16,7% a 24,4%) y siderurgia (de 0,5% a 2,1%). Como contrapartida, descendieron las inversiones en defensa (de 23,5% a 9,7%) y las de carácter social (las erogaciones de capital en salud cayeron de 18,3% a 12,5%). El énfasis puesto en el equipamiento militar y en la construcción de hospitales y escuelas durante los primeros años del peronismo ahora dejaba paso a una nueva prioridad: poner en orden las bases productivas de la nación. En la perspectiva de quienes definían el rumbo económico, la urgencia era avanzar hacia un estadio superior del desarrollo, y ello implicaba la instalación de la industria pesada en la Argentina.

Sin embargo, entre las intenciones del gobierno y su capacidad de convertirlas en realidades había una brecha. Es que el plan de emergencia de 1952 era a la vez una oportunidad y un límite. La austeridad fiscal reclamaba un recorte de la inversión pública, y por más que el Estado reasignara sus recursos, las penurias se hacían sentir. Tomando cifras en valores constantes, la inversión pública total disminuyó en alrededor del 35% entre 1948 y 1955. Hay ejemplos palpables del impacto: el gran proyecto de industria pesada del Segundo Plan Quinquenal, la planta siderúrgica SOMISA, sufrió postergación tras postergación. Ya en 1947 el Congreso Nacional había aprobado la ley Savio, con el objetivo de ponerla en marcha en 1951. Pero mientras el peronismo gozó de sus mejores años no se dedicaron demasiadas energías a ejecutar la obra. A partir de 1952, las demoras obedecieron a las restricciones financieras

[7] Alfredo Gómez Morales, *La política económica del Segundo Plan Quinquenal*, edición del autor, Buenos Aires, 1956.

del Estado nacional. Hubo, entre otros avatares, un pedido del directorio de la empresa para aumentar su capital que tardó dos años en obtener la aprobación pública. Recién en 1955 pudo incorporarse el alto horno, luego de un segundo crédito que el Eximbank otorgó al gobierno argentino.

El déficit de inversión pública no golpeó sólo el objetivo de forjar una industria pesada nacional y estatal. En otros sectores, sobre todo en los servicios públicos afectados en sus cuentas de resultado por el congelamiento tarifario, las consecuencias fueron más agudas y más visibles. Una manifestación conocida fueron los cortes de energía eléctrica en el Gran Buenos Aires, que consumía el 70% del total del país. Los esfuerzos del gobierno, que incluyeron la puesta en marcha de varias centrales hidroeléctricas, no alcanzaron para satisfacer la creciente demanda derivada de la expansión industrial. Algo parecido ocurrió con los ferrocarriles y con el sistema de transporte en general. Pero el caso más discutido y más polémico, el que terminaría constituyéndose en el centro del mayor debate de política económica desde mediados de los '50 hasta principios de los '60 fue el del petróleo. La producción pasó de 3,3 millones de toneladas en 1946 a casi 5 millones en 1955. A YPF correspondieron, respectivamente, un 68% y un 85% de esa producción. Nada de eso alcanzó para abastecer la demanda nacional, lo que se reflejó en la creciente participación del petróleo y sus derivados en las importaciones. Durante el quinquenio inmediatamente anterior al estallido de la Segunda Guerra, el petróleo representaba menos del 10% de las importaciones totales; durante el primer quinquenio de los '50, casi el 20%. Cada vez eran más las voces, en el oficialismo y en la oposición, que denunciaban la insuficiencia de la producción petrolera como el principal factor explicativo de la vulnerabilidad exterior argentina.

En el Segundo Plan Quinquenal se reflejaron, pues, los conflictos económicos que marcaron los últimos años de gobierno peronista: la política de corto plazo se concentraba en la defensa de la estabilidad de precios, pero ello requería limitar las inversiones públicas, necesarias a su vez para profundizar la industrialización y atenuar el drenaje de divisas. Un corolario se tornaba evidente: el Estado por sí solo no podía solucionar los problemas que aquejaban a la economía argentina. Si se

quería impulsar la acumulación de capital había que recurrir a las empresas privadas; si además se quería que el proceso de inversión no consumiera divisas, había que recurrir en particular a las empresas extranjeras. Éstas eran, por otra parte, las únicas que podían hacer frente a los volúmenes de inversión requeridos en la nueva etapa de sustitución de importaciones. Así es como pensaban las autoridades económicas poco después de haber puesto en marcha el Plan de Emergencia.

¿Vivir con lo nuestro?

En abril de 1953, una semana antes de la visita de Milton Eisenhower a la Argentina, Perón presentó al Congreso un proyecto de ley de inversiones extranjeras, cuyo objetivo era alentar la presencia de capitales internacionales en la industria y la minería. Si se examinaban experiencias de otros países, el proyecto no podía resultar sorprendente: Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Turquía, Japón y Egipto acababan de revisar o estaban revisando su actitud hostil hacia la presencia de empresas extranjeras en sus propios espacios económicos. Es que la oferta estaba creando su propia demanda. Para 1953, el mundo estaba casi completamente normalizado, el comercio internacional se revitalizaba y había indicios de que firmas poderosas con sede en las grandes potencias buscaban saltar por encima de las barreras proteccionistas de las naciones subdesarrolladas y ganar sus mercados de consumo. Si bien el escepticismo sobre los beneficios del comercio seguiría siendo por algún tiempo la visión predominante fuera de los Estados Unidos y Europa, asomaba cierto optimismo, no exento de polémicas, sobre el papel de la inversión extranjera para apurar el desarrollo.

El proyecto de Perón provocó un duro debate en la Cámara de Diputados, sobre todo porque la oposición sospechaba, razonablemente, que la aprobación de la ley abriría el camino a concesiones del gobierno a compañías petroleras extranjeras. Ésa era, todavía, la intocable vaca sagrada. De todas maneras la ley fue sancionada en agosto de 1953. Su letra y su espíritu apuntaban a un trato igualitario entre compañías nacionales y compañías extranjeras. El decreto reglamentario autorizaba la

transferencia de utilidades al exterior hasta un máximo del 8% anual libre de impuestos una vez transcurridos dos años de operaciones y la repatriación de capitales en cuotas del 10% al 20% anual una vez transcurridos diez años de operaciones. El último artículo de la ley dejaba una puerta abierta a beneficios extraordinarios: el gobierno podía eximir total o parcialmente de derechos de aduana a los bienes físicos que las empresas extranjeras ingresasen al país; podía también declarar de "interés nacional" algunas actividades, y de ese modo aumentar los derechos de aduana a los bienes importados que compitieran con ellas. Se trataba, claramente, de una ley que intentaba convertirse en un punto de inflexión, de una señal de que el nacionalismo inicial estaba quedando atrás. Era también un instrumento que debía contribuir a mejorar la siempre difícil situación de divisas que enfrentaba el país. Así lo consignaba el propio Banco Central en su memoria anual de 1953:

"[...] Además debe tenerse en cuenta que los capitales extranjeros tienen un destino determinado por la ley arriba citada, pues únicamente podrán incorporarse al país si vienen para cumplir objetivos industriales o mineros, y siempre que tiendan a economizar o crear divisas, para que no se transformen en un factor ulterior de desequilibrio del balance de pagos. En otros términos, las divisas que podrán introducirse al país, a raiz de esta legislación, deberán propender a crear nuevas fuentes de producción, que sustituyan a aquellos bienes que hasta ahora se importaban del exterior, o que permitan el estímulo de nuevas producciones, creadoras de saldos exportables y, por consiguiente, de nuevos ingresos de divisas. De este modo, el cumplimiento de los servicios financieros establecido especialmente en la Ley, podrá satisfacerse con el propio producido de estas inversiones."[8]

Entre la puesta en marcha de la ley de inversiones extranjeras y el derrocamiento de Perón transcurrieron dos años de luces y sombras para el proyecto de cambio que encarnaba

[8] Banco Central de la República Argentina, *Memoria Anual —Decimonoveno ejercicio, 1953—*, Buenos Aires, 1954.

Gómez Morales. Las prioridades del gobierno eran la mecanización agrícola y la producción local de insumos que hasta entonces se importaban. En relación con lo primero, la producción en territorio nacional de tractores por parte de empresas extranjeras fue un primer avance. El Poder Ejecutivo aprobó la instalación de cuatro fábricas (Fiat, Deutz, Fahr y Hanomag) con el compromiso de éstas de llegar a producir 13.200 unidades al año (en 1946, las existencias de tractores del país ascendían a sólo 10.000). El acuerdo con el gobierno incluía una cláusula según la cual la fabricación de tractores debería tener un componente de partes importadas que cayera con el tiempo. Así, se suponía que se partiría de un 80 o 90% de componentes importados para llegar a un 5% en el curso de cuatro años a partir de 1953. Aunque no tan relacionada con el ahorro de divisas, la instalación de la automotriz IKA (Industrias Kaiser Argentina) en Córdoba, ya sobre el final del gobierno peronista, fue otro indicio significativo de la nueva actitud hacia el capital extranjero.

Pero lo más innovador en materia de inversiones externas se dio en el ámbito de la política petrolera. En realidad, ya en 1946 se había considerado la posibilidad de una asociación entre YPF y la Compañía Standard Oil, que pronto sucumbió ante el encendido nacionalismo del primer peronismo. Pero, algo paradójicamente, esta postura autárquica chocaba con el objetivo de abastecerse internamente de petróleo, ya que YPF no tenía capacidad para explotar todos los yacimientos disponibles. La distancia entre la infraestructura necesaria para aprovechar al máximo las existencias de petróleo en suelo argentino y las modestas posibilidades de extracción de YPF se amplió con el descubrimiento de los yacimientos de Campo Durán y Madrejones en 1951. Una primera oferta de colaboración fue la de la compañía norteamericana Atlas, en 1954, pero el gobierno no la consideró satisfactoria.

Los acercamientos entre los empresarios petroleros norteamericanos y el gobierno de Perón no acabaron allí. En abril de 1955, un funcionario del gobierno argentino firmó con la California Argentina de Petróleo (empresa creada *ad hoc* por su propietaria estadounidense, la Standard Oil de California, que en el debate público se llamó "la California", a secas) un contrato de explotación petrolera cuya aprobación final

quedaba en manos del Parlamento argentino. Esto último respondía a un pedido de los norteamericanos, ya que la ratificación por ley daría al contrato una protección jurídica que de otro modo era débil en un país cuya Constitución consideraba los yacimientos petrolíferos "propiedad inalienable del Estado".

Las magnitudes involucradas en el acuerdo justificaban tales recaudos. El convenio concedía a la California Argentina de Petróleo los derechos para explotar, por un término de cuarenta años, 50.000 kilómetros cuadrados de tierra santacruceña, más de la quinta parte de la superficie de la provincia. En ese territorio, la empresa podría construir y usar con exclusividad caminos, embarcaderos y aeropuertos durante la vigencia del contrato. Es sorprendente que un gobierno que había volcado tantas energías en proclamar la independencia económica y atacar al imperialismo firmara estas cláusulas. Pero eso no es sino una evidencia nítida de que el problema de abastecimiento de combustibles, lo mismo que el de otros insumos, era un callejón que no tenía otras salidas. Una vez más, Perón mostraba que no era precisamente un dogmático a la hora de enfrentarse con problemas concretos, y respondía a los desafíos de cada coyuntura histórica con los instrumentos que consideraba más aptos. Todas las defensas oficiales del proyecto petrolero invocaban el sentido común y la razón práctica. Así se reflejaba en las palabras del propio Perón, que en una reunión con sindicalistas señalaba que el petróleo extraído por la California sería comprado por YPF:

"[...] Y bueno, si trabajan para YPF no perdemos absolutamente nada, porque hasta les pagamos con el mismo petróleo que sacan. En buena hora, entonces, que vengan para que nos den todo el petróleo que necesitamos. Antes no venía ninguna compañía si no le entregaban el subsuelo y todo el petróleo que producía. Ahora, para que vengan a trabajar, ¡cómo no va a ser negocio, un gran negocio, si nosotros estamos gastando anualmente en el exterior arriba de 350 millones de dólares para comprar el petróleo que necesitamos, que lo tenemos bajo tierra y que no nos cuesta un centavo! ¡Cómo vamos a seguir pagando eso!... ¿Que ellos sacan beneficios? Por supuesto que no van a venir a trabajar por amor

al arte. Ellos sacan su ganancia y nosotros la nuestra: es lo justo [...]"[9]

Pero el contrato con la California fracasó. El proyecto de ley quedó estancado en una comisión de diputados, sin ser tratado por ninguna de las Cámaras del Congreso. Perón era así víctima de las mismas ideas que había contribuido eficazmente a instalar. El antiimperialismo y la autosuficiencia económica ya no eran banderas exclusivas del peronismo. Desde el radicalismo, por ejemplo, se criticaba a la conducción económica no por excesivamente estatista y nacionalista, sino por todo lo contrario. Una publicación partidaria afirmaba de la política económica del gobierno:

"[...] Además de hallarse plagada de errores y excesos parciales, se mantuvo desde el comienzo dentro de la misma esfera que singularizó a la política económica de los gobiernos conservadores. Es decir, dentro de la esfera delineada por el interés de los privilegios nativos y extranjeros."[10]

Arturo Frondizi, uno de los líderes de la oposición radical, publicaba por entonces *Petróleo y política*, y defendía la tesis de que YPF era capaz de abastecer por sí sola las necesidades petroleras del país. En una alocución radial, Frondizi insistía sobre el carácter imperialista del acuerdo con la petrolera norteamericana:

"[...] Ese convenio enajena una llave de nuestra política energética, acepta un régimen de bases estratégicas extranjeras y cruza la parte sur del territorio con una ancha franja colonial, cuya sola presencia sería como la marca física del vasallaje [...]"[11]

La resistencia al proyecto de la California no era patrimonio exclusivo de los partidos opositores. En las filas peronistas no

[9] Juan D. Perón, *Discurso pronunciado en el Sindicato Unión Petroleros del Estado (SUPE)*, Secretaría de Informaciones del Estado, Buenos Aires, 1955.
[10] Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, *Acerca de la política económica oficial*, Buenos Aires, 1954.
[11] Arturo Frondizi, *Petróleo y política*, Raigal, Buenos Aires, 1955.



Orlando Santos firma el convenio petrolero, 24 de abril de 1955.

se notaba el menor entusiasmo por una iniciativa que, según muchos creían, traicionaba el principio justicialista de independencia económica. Esa oposición interna no se proclamaba a viva voz, pero la escasez de expresiones de apoyo era indicio suficiente para que el gobierno comprendiera que en esa empresa estaba solo. En cualquier caso, está claro que el Poder Ejecutivo tampoco puso todo su empeño para llevar adelante la iniciativa. Mientras que en otros ámbitos el gobierno respondía a las críticas con un contraataque más fuerte, en el proyecto de la California no hubo una voluntad similar, acaso porque las probabilidades de éxito se consideraban bajas desde un principio. No fue utilizado el aparato oficial de propaganda, y la defensa del contrato no fue tomada personalmente por Perón sino dejada en mano de funcionarios menores.

El toque del rey Midas

Habiendo transcurrido dos años de aplicación del Plan de Emergencia, parecía haberse logrado el equilibrio estable al que se había apuntado con el cambio en la política de ingresos. Algunas protestas aisladas, como las del sindicato Luz y Fuerza y las de los gráficos, ambas durante 1953, fueron controladas y solucionadas sin mayores costos para el programa económico en marcha. Pero para marzo de 1954, el gobierno debía enfrentar una prueba de fuego, ya que en esa fecha comenzaba la generalizada renegociación de salarios. Algunos gremios, notoriamente el de los metalúrgicos, organizaron huelgas y movilizaciones callejeras que convulsionaron a las grandes ciudades hasta el mes de agosto. A pesar de la contundente posición de las autoridades económicas, para las cuales los salarios debían fijarse de acuerdo con la productividad de cada actividad y de cada empresa, las demandas obreras fueron bastante exitosas y llevaron el salario real promedio de 1954 a un nivel 12% superior al registrado en 1952.

Este avance de los trabajadores tenía su lado negativo, ya que amenazaba con derrumbar los logros alcanzados tras dos años de neutralización del conflicto social. De hecho, si bien la inflación de 1954 fue la menor de toda la década peronista, hacia el segundo semestre comenzaron a percibirse aumentos de precios. La carrera entre precios y salarios daba signos de reaparecer. Ello preocupaba al presidente Perón, quien en muchas intervenciones públicas repetía aquello que había instalado al lanzar el Plan de Emergencia: ya no era posible beneficiar a un determinado sector mediante el aumento de su participación en el ingreso si ello se hacía en detrimento del resto. La mayor retribución sólo se habría de lograr incrementando la cantidad de bienes a repartir. Además Perón y sus colaboradores tenían una preocupación adicional: el congelamiento de precios y salarios, aun en el contexto favorable de la austeridad fiscal, sólo podía ser un instrumento transitorio. Había que buscar mecanismos de negociación colectiva que lo reemplazaran con eficacia.

Así, pues, el gobierno estaba convencido de que sólo existiría margen para aumentar los salarios reales o las utilidades de las empresas si crecía la productividad. Es que la productivi-

dad tenía un don que parecía mágico: podía hacer que, al mismo tiempo, los salarios fueran altos y los costos laborales bajos. Era el toque del rey Midas, que venía a realizar la armonía social. Eso podía conseguirse tanto con un aumento de la inversión —que estaba siendo estimulada por el Segundo Plan Quinquenal y por una actitud más receptiva hacia el capital extranjero— como con cambios en la organización laboral de las empresas que apuntaran hacia una mayor eficiencia. Con la intención de alentar esas innovaciones, en octubre de 1954 se convocó al Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social (CNP), que tendría lugar en marzo del año siguiente. La preparación de este Congreso fue una de las últimas ocasiones en las que el gobierno desplegó su imponente aparato de propaganda y mostró en toda su dimensión su sustento corporativo. El CNP tendría como protagonistas principales a los sindicatos, de los que formalmente partió la iniciativa, y a los empresarios nucleados en la Confederación General Económica (CGE). El líder de la representación empresaria sería José Ber Gelbard, un hombre de 37 años que en 1973 se convertiría en el ministro de Economía de las efímeras presidencias de Cámpora y Lastiri, hasta ser reconfirmado en el cargo por el propio Perón al asumir su tercera presidencia.

Las reuniones del CNP, en marzo de 1955, fueron presentadas por el gobierno como una muestra elocuente de que la conciliación de clases sobre la que tanto había insistido era una realidad palpable. Empresarios y trabajadores se sentaban a discutir acerca de sus problemas comunes. Pero la realidad estaba bastante lejos de esa imagen de concordia. Los debates en el CNP tuvieron mucho más de conflicto que de acuerdo. Los empleadores reclamaban la imposición de medidas contra el ausentismo —el "lunes criollo", que consistía en la deserción masiva de trabajadores, ya era una tradición—, la posibilidad de usar mecanismos de incentivos que estimularan el esfuerzo de los trabajadores, un mayor margen de maniobra en las convenciones colectivas y en el manejo del personal y la limitación del poder de las comisiones internas gremiales de fábrica. Asimismo, aprovecharon la oportunidad para presionar a las autoridades económicas. En el órgano de difusión del Congreso se publicó que el Banco Industrial Argentino estudiaba una línea de créditos especiales para aquellas empresas cuyos

"procesos de elaboración" fuesen más "racionales" y tuvieran como fin "elevar" la productividad. El ministro de Hacienda Pedro Bonanni, a su vez, quiso mostrarse conciliador con los empresarios y en una ponencia elevada al CNP afirmó que los mayores recursos tributarios que obtuviese el Estado como consecuencia del incremento de la productividad se destinarían a aliviar las cargas tributarias.

Los sindicalistas, por su parte, asumieron la posición previsible: se colocaron a la defensiva, custodiando palmo a palmo el terreno ganado desde 1944, cuando Perón se hizo cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión y tomó las primeras medidas para cooptar a los gremialistas. En estas condiciones, era poco lo que se podía sacar en limpio. Ya que una de las precondiciones del CNP era que los documentos resultantes fuesen votados por unanimidad, la mayor parte de las conclusiones fueron poco sustantivas, porque casi todas las propuestas empresarias chocaban contra la oposición firme de los caudillos sindicales. Si no se mantuvo completamente el *statu quo* fue sólo por un par de modificaciones menores, como la mayor importancia que se acordó otorgar a las consideraciones de productividad en las negociaciones salariales y por cierta libertad que consiguieron los empleadores para reubicar personal y premiar la eficiencia. Lo primero resultó demasiado genérico y casi inaplicable; lo segundo tuvo un impacto débil que únicamente se notó en las grandes empresas industriales.

El CNP, cuyo documento final fue el Acuerdo Nacional de la Productividad, terminó sin vencedores ni vencidos, lo que a esa altura no era un mal resultado para nadie. El gobierno contuvo la estampida salarial, y con ello la amenaza de un rebrote inflacionario. La CGT no cedió prácticamente nada en materia de relaciones laborales. Los empresarios encontraron un espacio institucional, hasta entonces inexistente, para dialogar con la cúpula gremial de los trabajadores y para canalizar reclamos ante las autoridades económicas. En verdad, todo esto ya no importaba. Al gobierno se le había hecho demasiado tarde para completar su viraje de política y para beneficiarse de sus resultados. Ya entrado 1955, los problemas económicos no eran la preocupación de casi nadie. El desgaste político del gobierno se estaba acelerando, y cada vez sonaban más fuerte los rumores de un levantamiento militar.

FINAL

El panorama político se agravó a partir del innecesario y casi insólito conflicto de Perón con la Iglesia Católica. Por motivos en todo caso menores, el mismo Presidente que había restablecido la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y que había elogiado la cláusula constitucional de apoyo oficial a la Iglesia se lanzó a un enconado ataque a la jerarquía eclesiástica. La escalada de acusaciones y reprobaciones mutuas entre gobierno e Iglesia pronto se salió de control. Mientras el gobierno provocaba al "obispero revuelto", suprimiendo la enseñanza religiosa, promoviendo el divorcio vincular y proyectando una reforma constitucional que separara más tajantemente la Iglesia del Estado, la oposición veía su oportunidad de resucitar. El 11 de junio de 1955, la celebración de Corpus Christi atrajo a una multitud que, desde fieles católicos hasta militantes comunistas, abarcaba todo el espectro opositor a Perón. La tensión estalló el jueves 16 de junio. Por la mañana, un Perón mal dormido por los inquietantes informes que le había alcanzado la noche anterior su ministro de Guerra Franklin Lucero, comenzó la jornada firmando decretos y concediendo audiencias. A las diez y media recibió al embajador norteamericano Nufer, quien horas más tarde diría que había encontrado al presidente "tranquilo y sosegado; estaba más afable que nunca". Poco después de esa visita, el bombardeo de aviones de la Marina sobre la Plaza de Mayo, operación que formaba parte de un plan para asesinar a Perón, terminó con no menos de trescientas víctimas civiles. La rebelión fue sofocada y grupos organizados presuntamente adictos al gobierno reaccionaron esa noche quemando varias iglesias de Buenos Aires contando con la sospechosa pasividad de la policía y los bomberos. Ante tanta violencia desbocada, Perón pensó en una táctica alternativa: tender una mano a sus adversarios. En el marco de vehementes llamados a la tranquilidad y la convivencia, se concedió a los opositores el uso de la radio, y fue en esos días de julio cuando Arturo Frondizi pudo dar a conocer a los oyentes los puntos de vista del Partido Radical. Pero la conciliación no duró mucho. La sensación de que un golpe de Estado se avecinaba convenció a Perón de cambiar nuevamente su política. El miércoles 31 de agosto "ofreció" su renuncia por la ma-

ñana y retiró su oferta por la tarde ante una concentración organizada por la CGT y por el Partido Peronista. Su discurso fue una convocatoria a la confrontación: "...y cuando uno de los nuestros caiga, ¡caerán cinco de los de ellos!".

El inestable tiempo de septiembre, con frío y viento, se desató recién el viernes 16. Ese día el general Eduardo Lonardi inició el levantamiento militar en Córdoba y Cuyo. Se suspendieron los espectáculos deportivos y las amas de casa comenzaron a agolparse en los almacenes por temor al desabastecimiento. El lunes 19 comenzó la larga lluvia. Percibiendo que la voluntad de poder de Perón estaba quebrada, más y más unidades se plegaron a la rebelión. Poco después del mediodía, Franklin Lucero transmitió en un mensaje radial un ambiguo comunicado de renuncia de Perón justificado como la única forma de evitar un baño de sangre. Lucero designó una junta de generales para negociar con los rebeldes. El martes 20, todavía en su residencia, Perón se levantó tan temprano como siempre. Le confesó a su mayordomo, el suboficial retirado Atilio Renzi: "Hace dos días que no duermo y ya no hay nada que hacer". Entre las siete y las ocho de la mañana partió rumbo a la embajada de Paraguay, donde solicitó asilo. Luego de un breve paso por el domicilio del embajador Chávez, Perón fue conducido al puerto de Buenos Aires para embarcarse en la cañonera "Paraguay". A la entrada del puerto había un enorme charco que el Cadillac que trasladaba a Perón no logró traspasar. El propio Perón, envuelto en un piloto blanco, descendió del automóvil y, empapado por la lluvia, le pidió a un camionero que lo remolcara hasta la dársena. Absorto, el camionero puso manos a la obra, amarró el Cadillac con una soga y lo arrastró hasta la cañonera. Cuando subió al barco, Perón ignoraba que no volvería a pisar tierra argentina hasta otro tormentoso día de noviembre de 1972.

El legado económico de Perón

Al abandonar el país, Perón dejaba como herencia una sociedad políticamente fracturada. Pero, ¿cómo era la economía que dejaba Perón? Es imposible formarse una opinión equilibrada tomando como elementos de juicio las expresiones apasionadas del momento. El gobierno provisional era, en materia

económica, un mosaico multicolor e incoherente que sólo se unificaba en la descalificación al "tirano". El encono hacia la gestión económica anterior era apenas un esfuerzo por ponerse a tono con el caldeado clima político, y muy ocasionalmente tenía un fundamento racional. Los argumentos que se invocaban para justificar la crítica eran muchas veces contradictorios: Julio Alizón García (primer ministro de Finanzas) y Álvaro Alsogaray (subsecretario de Comercio durante 1955 y ministro de Industria durante 1956) demandaban un "viraje de 180 grados" en el modelo "estatizante" y de carácter "nacionalsocialista" que había sido el sello de la década; Eugenio Blanco (primer ministro de Hacienda), que a partir de 1956 se convertiría en el vocero económico de la Unión Cívica Radical del Pueblo, criticaba el "espejismo monetario" que condujo a la inflación, pero a la vez sostenía que con el contrato con la California "el tirano entregó arrodillado las riquezas petrolíferas de la Patagonia a una empresa monopolista del exterior"; en las antípodas, Adalbert Krieger Vasena (segundo ministro de Hacienda) resaltaba que la ausencia de inversiones privadas había retardado el crecimiento "de las industrias básicas, del potencial energético y de la capacidad de transportes"; Raúl Prebisch (asesor del gobierno a través del Consejo Económico y Social) daba a conocer su propia opinión en el *Informe preliminar acerca de la situación económica*. Prologaba, allí, en forma lapidaria:

> "La Argentina atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico; más que aquella que el presidente Avellaneda hubo de conjurar 'ahorrando sobre el hambre y la sed' y más que la del '90 y que la de hace un cuarto de siglo, en plena depresión. El país se encontraba en aquellos tiempos con sus fuerzas productivas intactas. No es éste el caso de hoy: están fuertemente comprometidos los factores dinámicos de su economía y será necesario un esfuerzo intenso y persistente para restablecer su vigoroso ritmo de crecimiento. [...]"[12]

[12] Raúl Prebisch, *Informe preliminar acerca de la situación económica*, Secretaría de Prensa y Actividades Culturales de la Presidencia de la Nación, 1955.

Con todo, el informe de Prebisch es la más comprehensiva pieza crítica de la política económica peronista. En sus treinta y dos páginas, firmadas únicamente por él, se subraya la gravedad de dos problemas que, en su opinión, el gobierno anterior no sólo no había resuelto sino que había agravado: las dificultades de la balanza de pagos y la inflación. Según Prebisch, la pesada herencia negativa, el principal obstáculo para impulsar el desarrollo argentino, era la imposibilidad de expandir las importaciones de maquinarias, materias primas y combustibles. A su vez, las restricciones para importar se originaban en la escasez de divisas. Puesto que Perón y sus colaboradores económicos habían postergado una y otra vez la necesaria devaluación, las exportaciones agropecuarias estaban estancadas; la inversión en las industrias básicas para sustituir importaciones era completamente insuficiente; no había, por fin, estímulos para aumentar la producción petrolera. Los planes quinquenales habían acentuado la tendencia al estancamiento al concentrar las inversiones públicas en actividades no productivas. Prueba de ello, para Prebisch, era el cuadro desolador en las áreas eléctricas y de transporte. En definitiva, Perón no había tenido una estrategia de crecimiento. La economía estaba paralizada.

Por otra parte el Informe Prebisch criticaba al gobierno por las expansivas políticas monetaria y salarial, generadoras de inflación. Varios factores habian contribuido a la creación excesiva de dinero. En primer lugar, las pérdidas del IAPI. Escribió Prebisch al respecto: "Parecería ser que la resistencia a desplazar los tipos de cambio hacia un nivel adecuado se ha inspirado en el loable propósito de no influir adversamente sobre los precios. Pero, si bien se reflexiona, esto no ha evitado su alza, puesto que al emitirse dinero por el Banco Central para cubrir el déficit en las operaciones de granos, este incremento de dinero tiene necesariamente que elevar el nivel de aquéllos. De esta manera, el aumento de precios ha sido inevitable". Análogamente, según Prebisch, el congelamiento de las tarifas públicas derivó en un abultado desequilibrio financiero en el sistema de transportes, y la desaparición de las cédulas hipotecarias en emisión monetaria para solventar la construcción de viviendas. En cuanto a la política salarial, echó leña al fuego avivando la inflación por el lado de los costos, mientras

que el déficit fiscal lo hacía por el lado de la demanda. Curiosamente, el ejemplo al que apeló Prebisch no fue el de los años de Miranda, sino el de las negociaciones colectivas abiertas al cumplirse los dos años del Plan de Emergencia: los aumentos en las remuneraciones habían sido mayores que los aumentos en la productividad y eso impuso una presión al alza de los precios.

Mirado con la perspectiva que da el tiempo, el diagnóstico de Prebisch era demasiado sombrío. Los problemas estructurales del sector externo estaban certeramente analizados en el Informe Prebisch, pero no eran ninguna novedad. Los lineamientos económicos del peronismo a partir de 1949 y más nítidamente a partir de 1952 eran un obvio reconocimiento anticipado a lo que Prebisch denunciaba. Más allá de las vacilaciones en la ejecución y de lo magro de algunos resultados, el cambio en la política agropecuaria, el Segundo Plan Quinquenal, la apertura al capital extranjero y el Congreso de la Productividad, habían sido intentos válidos para superar los obstáculos. Por lo demás, la economía argentina no estaba paralizada ni en una espiral inflacionaria. El año 1955 iba a terminar con un crecimiento del 7%, y ese comportamiento no constituiría un episodio efímero: aunque todavía nadie lo sabía, el país se estaba expandiendo al 5% anual durante seis años consecutivos, entre 1953 y 1958. Sí se sabía, en cambio, que la inflación estaba controlada desde 1953. Sólo cuatro décadas más tarde se registraría otra vez un trienio con una inflación promedio menor del 10%. Sin dudas, muchas dificultades, muchas deudas pendientes, muchos interrogantes pueden corregir esta pintura algo benévola. Pero una cosa está clara: aquella tormenta política que culminó con el derrocamiento de Perón y que dejaría heridas tan profundas no tuvo mucho que ver con la economía. Se podrá escribir la historia de muchas maneras distintas, y sin embargo esa afirmación será difícil de discutir.

Cuadro 1.1: Actividad económica

	P.B.I.	Import.	Consumo	Inversión	Export
1940-1945					
Tasa de crecimiento anual	2,45%	-13,07%	1,87%	-1,13%	-3,36%
1946-1948					
Tasa de crecimiento anual	8,48%	54,59%	13,64%	25,44%	-1,48%
1949-1952					
Tasa de crecimiento anual	-0,55%	-16,32%	-2,23%	0,70%	-13,13%
1953-1955					
Tasa de crecimiento anual	5,49%	8,90%	5,36%	4,51%	13,85%
1956-1958					
Tasa de crecimiento anual	4,67%	1,35%	3,83%	5,12%	7,68%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de IEERAL y propios.

Cuadro 1.2: Actividad económica (como participación sobre el PBI)

	Import./PBI	Consumo/PBI	Invers./PBI	Export./PBI
1940-1945				
Participación promedio	9,86%	83,11%	9,60%	17,16%
1946-1948				
Participación promedio	18,32%	88,57%	14,88%	14,88%
1949-1952				
Participación promedio	12,60%	87,57%	15,65%	9,37%
1953-1955				
Participación promedio	9,93%	83,59%	16,40%	9,95%
1956-1958				
Participación promedio	10,33%	84,54%	15,90%	9,89%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de IEERAL y propios.

Cuadro 2: Comercio exterior

	Balanza comercial	Cuenta corriente	Variación de reservas	Términos del intercambio
	En millones de U$S corrientes	En millones de U$S corrientes	En millones de U$S corrientes	Índice 1960=100
1940-1945 Valor promedio	264,83	185,33	194,63	109,87
1946-1948 Valor promedio	268	229,33	-234,63	148
1949-1952 Valor promedio	-205	-207	-125	121,73
1953-1955 Valor promedio	44,67	46,67	20,6	101,77
1956-1958 Valor promedio	-253	-231	-25,67	85,33

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de IEERAL y propios.

Cuadro 3: Mercado de trabajo

	Salario real		Empleo total	Participación de los trabajadores en el ingreso
	General	No Agropec.*		
1940-1945				
Tasa de crecimiento anual	-0,53%	-0,79%	1,99%	
Valor promedio				37,30%
1946-1948				
Tasa de crecimiento anual	11,95%	13,11%	0,26%	
Valor promedio				39,42%
1949-1952				
Tasa de crecimiento anual	-2,47%	-2,51%	2,53%	
Valor promedio				46,52%
1953-1955				
Tasa de crecimiento anual	3,63%	2,14%	1,78%	
Valor promedio				46,72%
1956-1958				
Tasa de crecimiento anual	2,19%	1,93%	2,11%	
Valor promedio				

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de IEERAL (columnas 1-3) y *El desarrollo económico de la Argentina*, CEPAL, 1958 (columna 4).
* Excluye al sector gobierno.

Cuadro 4: Moneda, inflación y bancos

	M1/PBI	M3/PBI	Inflación al cons.	Depós. totales	Prést. totales	Préstamos al sector público	Préstamos al sector privado
1940-1945							
Valor promedio	23,92%	41,83%	5,20%				
Tasa de crec. anual				15,66%	3,04%	-5,59%	4,10%
1946-1948							
Valor promedio	31,33%	46,67%	14,77%				
Tasa de crec. anual				24,56%	68,75%	203,65%	39,19%
1949-1952							
Valor promedio	27,25%	36,88%	33,03%				
Tasa de crec. anual				13,25%	20,93%	10,88%	28,41%
1953-1955							
Valor promedio	24,00%	32,83%	6,70%				
Tasa de crec. anual				20,48%	17,94%	25,32%	13,83%
1956-1958							
Valor promedio	19,83%	28,00%	20,20%				
Tasa de crec. anual							

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de IEERAL (columnas 1 y 2); INDEC (columna 3); Vicente Vázquez Presedo (columnas 4 a 7).

Cuadro 5: Sector público

	Ingresos consolidados/PBI	Gastos consolidados/PBI	Déficit fiscal consolidado/PBI
1940-1944			
Valor promedio	15,7%	19,5%	3,8%
1945-1949			
Valor promedio	21,2%	29,4%	8,2%
1950-1954			
Valor promedio	25,6%	28,5%	2,9%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de *El desarrollo económico de la Argentina, primera parte*, CEPAL, 1958.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas: *El ciclo de la ilusión y el desencanto*, Ariel Sociedad Económica, Buenos Aires, 1998.

Luna, Félix: *Perón y su tiempo* (tres tomos), Sudamericana, Buenos Aires, 1986.

Mallon, Richard y Sourrouille, Juan V.: *La política económica en una sociedad conflictiva*, Amorrortu, Buenos Aires, 1973.

Rapoport, Mario: *Historia económica, política y social de la Argentina*, Macchi, Buenos Aires, 2000.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

Balboa, Manuel: "La evolución del balance de pagos de la República Argentina en el período 1930-1950", en: *Desarrollo Económico*, N° 45, Buenos Aires, abril-junio, 1972.

Bitrán, Rafael: *El Congreso de la Productividad*, El Bloque Editorial, Buenos Aires, 1994.

Bordo, Michael: "The Bretton Woods International Monetary System: A Historical Overview", en: Michael Bordo, Barry Eichengreen (eds.), *A Retrospective on the Bretton Woods System. Lessons for International Monetary Reform*, University of Chicago Press, Chicago, 1993.

Cafiero, Antonio F.: *Cinco años después...*, edición del autor, Buenos Aires, 1961.

Díaz Alejandro, Carlos F.: *Ensayos sobre historia económica argentina*, Amorrortu, Buenos Aires, 1975.

Di Tella, Guido y Rodríguez Braun, Carlos (eds.): *Argentina, 1946-83: The Economic Ministers Speak*, Macmillan Press, Londres, 1990.

Elizagaray, Atilio: *The Political Economy of a Populist Government: Argentina 1943-55*, University of Illinois at Urban Campaign (Ph.D. thesis), 1985.

Fodor, Jorge: "Argentine Nationalism: Myth or Reality?", en: Guido Di Tella y Rudiger Dornbusch (eds.), *The Political Economy of Argentina, 1946-83*, Macmillan Press, 1989.

———: "Peron's policies for Exports", en: David Rock (ed.), *Argentina in the Twenty Century*, Duckworth, 1975.

———: "The Origin of Sterling Balances, 1939-43", en: Guido Di Tella y D. C. M. Platt (eds.), *The Political Economy of Argentina, 1880-1946*, Macmillan Press, 1986.

Fodor, Jorge y O'Connell, Arturo: "La Argentina y la economía atlántica en la primera mitad del siglo XX", en: *Desarrollo Económico*, N° 49, Buenos Aires, abril-junio, 1973.

Frondizi, Arturo: *Petróleo y politica*, Raigal, Buenos Aires, 1955.

Gerchunoff, Pablo: "Peronist Economic Policies, 1946-55", en: Guido Di Tella y Rudiger Dornbusch (eds.), *The Political Economy of Argentina, 1946-83*, Macmillan Press, 1989.

Giménez Zapiola, Marcos y Leguizamón, Carlos M.: "La concertación peronista del año 55", en: Juan Carlos Torre (comp.), *La formación del sindicalismo peronista*, Legasa, Buenos Aires, 1988.

Jauretche, Arturo: *El Plan Prebisch - Retorno al coloniaje*, Ediciones El '45, Buenos Aires, 1956.

Llach, Juan J. y Sánchez, Carlos: "Los determinantes del salario en la Argentina. Un diagnóstico de largo plazo y propuestas de políticas", en: *Estudios*, Nº 29, Buenos Aires, enero-marzo de 1984.

Novick, Susana: *IAPI: Auge y decadencia*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1986.

Prebisch, Raúl: "La experiencia del Banco Central Argentino, en sus primeros ocho años", en: *Banco Central de la República Argentina, 1935-1985: Cincuentenario del Banco Central de la República Argentina*, Buenos Aires, 1985.

Schwartz, Hugh: *The Argentine Experience with Industrial Credit and Protection Incentives, 1943-1958*, thesis of Yale University, 1967.

Skupch, Pedro R.: "Nacionalización, libras bloqueadas y sustitución de importaciones", en: *Desarrollo Económico*, Nº 47, Buenos Aires, octubre-diciembre, 1972.

Vianna, Sergio: "Política econômica externa e industrializaçao: 1946-1951", en: Marcelo De Paiva Abreu (ed.), *A Ordem do Progresso*, Campus, Río de Janeiro, 1990.

Villarruel, José César: "El Estado, las clases sociales y la política de ingresos en los gobiernos peronistas, 1945-1955", en: Mario Rapoport (comp.), *Economia e historia - Contribuciones a la historia económica argentina*, Tesis, Buenos Aires, 1988.

FUENTES CONSULTADAS

Banco Central. *Memoria Anual* (desde el séptimo al decimonoveno ejercicio). Buenos Aires. 1941-1953.

Cámara de Senadores del Congreso Nacional. *Plan del Poder Ejecutivo sobre realizaciones e inversiones para el quinquenio 1947-1951*, sesión extraordinaria del 23 de octubre de 1946. Buenos Aires. 1946.

CEPAL. *El desarrollo económico de la Argentina - Anexo: algunos estudios especiales y estadísticas macroeconómicas preparadas para el informe*, Santiago de Chile, 1958.

Confederación General Económica. *Informe Económico 1954*. Buenos Aires. 1954.

Consejo Económico Nacional. *Situación económico-financiera del país*. Buenos Aires. 1950-1952.

Dirección Nacional de Estadística y Censos. *Anuario del Comercio Exterior de la República Argentina*. Buenos Aires. 1943-1957.

———: *Anuario Estadístico de la República Argentina*. Buenos Aires. 1947-1955.

Entrevista al Dr. Alfredo Gómez Morales. Archivo de Historia Oral. Instituto Torcuato Di Tella. Buenos Aires. 1972.

Entrevista al Dr. Roberto Ares. Archivo de Historia Oral. Instituto Torcuato Di Tella. Buenos Aires. 1971.

Entrevista al Ing. Carlos Emery. Archivo de Historia Oral. Instituto Torcuato Di Tella. Buenos Aires. 1971.

Gómez Morales, Alfredo: *Política económica peronista*. Escuela Superior Peronista. Buenos Aires. 1951.

———: *La política económica del Segundo Plan Quinquenal*, edición del autor. Buenos Aires. 1956.

La Nación, octubre-noviembre de 1945 y junio-septiembre de 1955, fechas varias.

La Nación Argentina. Justa, libre y soberana, Peuser. Buenos Aires. 1950.

La Prensa, octubre-noviembre de 1945 y junio-septiembre de 1955, fechas varias.

Perón, Juan D.: *Discurso pronunciado el 1° de julio de 1951, en ocasión de la ceremonia de colación de grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires*, Buenos Aires, 1951.

———: "El sindicalismo gremial sucede al sindicalismo político", en: *El pensamiento del secretario de Trabajo y Previsión en el análisis de los problemas de la clase media*, Buenos Aires, 1944.

———: *La realidad del panorama nacional. Conceptos del Presidente de la Nación pronunciados ante representantes de los gremios obreros*, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 24 de febrero de 1949.

———: *Mensaje del Presidente de la Nación Argentina General Juan Perón al inaugurar el 87° período ordinario de Sesiones del Honorable Congreso Nacional*, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1° de mayo de 1953.

———: *Perón anuncia el Plan Económico de 1952 y los precios de la cosecha*, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 18 de febrero de 1952.

———: *Perón y el cooperativismo agrario*, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1950.

———: *Perón y Eva Perón hablan a los mineros*, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1951.

Prebisch, Raúl: "Argentine Economic Policies since the 1930s.: Recolections", en: Guido Di Tella y D. C. M. Platt (eds.), *The Political Economy of Argentina 1880-1946*, Macmillan Press, 1986.

———: *Comentarios sobre el informe preliminar*, Secretaría de Prensa y Actividades Culturales de la Presidencia de la Nación, 1955.

———: *Informe preliminar acerca de la situación económica*, Secretaría de Prensa y Actividades Culturales de la Presidencia de la Nación, 1955.

Secretaría de Asuntos Económicos, *La política petrolera y el contrato con la compañía California Argentina*, Buenos Aires, 1955.

Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, *Manual práctico del Segundo Plan Quinquenal*, Buenos Aires, 1953.

La Prensa, octubre-noviembre de 1945 y junio-septiembre de 1955, fechas varias.

Perón, Juan D.: *Discurso pronunciado el 1º de junio de 1951 en ocasión de la ceremonia de colación de grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires*, Buenos Aires, 1951.

———: "El sindicalismo gradual sucede al sindicalismo político", en: *El pensamiento del secretario de Trabajo y Previsión en el análisis de los problemas de la clase media*, Buenos Aires, 1944.

———: *La realidad del [illegible] nacional. Conceptos del Presidente de la Nación pronunciados ante representantes de los gremios obreros*, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 24 de febrero de 1949.

———: *Mensaje del Presidente de la Nación Argentina General Juan Perón al inaugurar el 87º período ordinario de sesiones del Honorable Congreso Nacional*, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1º de mayo de 1953.

———: *Perón anuncia el Plan Económico de 1952 y los precios de la cosecha*, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 18 de febrero de 1952.

———: *Perón y el cooperativismo agrario*, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1950.

———: *Perón y Eva Perón hablan a los mineros*, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1951.

Prebisch, Raúl: "Argentine Economic Policies since the 1930s: Recollections", en: Guido Di Tella y D. C. M. Platt (eds.), *The Political Economy of Argentina 1880-1946*, Macmillan Press, 1986.

———: *Comentarios sobre el informe preliminar*, Secretaría de Prensa y Actividades Culturales de la Presidencia de la Nación, 1955.

———: *Informe preliminar acerca de la situación económica*, Secretaría de Prensa y Actividades Culturales de la Presidencia de la Nación, 1955.

Secretaría de Asuntos Económicos, *La política petrolera y el contrato con la compañía California Argentina*, Buenos Aires, 1955.

Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, *Manual práctico del Segundo Plan Quinquenal*, Buenos Aires, 1953.



IV

Ideologías políticas y debate cívico

por CARLOS ALTAMIRANO



Reunidos en el Congreso (desde la izquierda): Domingo Mercante, gobernador de Buenos Aires, Héctor J. Cámpora, presidente de la Cámara de Diputados, Ítalo Lúder y Arturo Sampay, principal redactor de la Constitución de 1949.



Hay, en general, consenso entre los estudiosos del peronismo respecto de los clivajes que éste provocó en la historia argentina del siglo XX, tanto desde el punto de vista político como social. Ahora bien, podemos preguntarnos también si las representaciones sobre la política y la sociedad que caracterizaron al discurso peronista introdujeron una discontinuidad equivalente en la vida ideológica del país. Esta pregunta es el punto de partida de las páginas siguientes, que no enfocan en reposo el verbo ideológico del peronismo sino que lo insertan en la dinámica del debate cívico que el movimiento nacionalista del 4 de junio de 1943 agudizó, pero que no nació con él.

Nuestra hipótesis es que, en lo relativo a las cuestiones mismas de lo que en pocos años recibiría el nombre oficial de "doctrina peronista", habría escasa novedad. Algunas de ellas —incluidos los lemas de las llamadas "tres banderas"— eran parte del temario nacionalista desde antes de 1943. Hasta el advenimiento del peronismo, sin embargo, ese temario que provenía de

los círculos del nacionalismo católico y hallaba eco en las filas del Ejército no había alterado el cuadro de fuerzas en que la Argentina se representaba políticamente. Pues bien, aquí radica, también desde el punto de vista ideológico, la innovación que incorporó Perón: al constituir y ofrecer expresión a un movimiento de masas, les proporcionó a esos tópicos una audiencia sin precedentes y contribuyó a la formación de una cultura política popular duradera en la Argentina. Ciertamente, Perón no extrajo sus motivos ideológicos de una sola fuente. A la manera de un *bricoler* los tomó de aquí y de allá —del repertorio militar, de su interpretación del fascismo, del vocabulario radical— para componer una de las versiones de ese fenómeno extendido en los países periféricos tras la Segunda Guerra Mundial, el del nacionalismo popular.

Se observará que, sin hacer distinciones, en el párrafo anterior hemos pasado del peronismo a Perón y, de hecho, en la descripción que sigue privilegiaremos el pensamiento político del fundador del movimiento. Nos referimos a su pensamiento público, tal como puede ser captado en las charlas radiales, escritos, conferencias y alocuciones, es decir, en todas aquellas formas que adoptó en la escena pública su verbo incansable. Por cierto, la constelación ideológica peronista era más intrincada, reunió más elementos que las concepciones del líder y su realidad efectiva no podría reducirse al solo componente del discurso de Perón. ¿Qué movimiento colectivo, por otra parte, podría reducirse aun ideológicamente al discurso de sus dirigentes? No es menos cierto, sin embargo, que entre 1946 y 1955 cualquier otro elemento ideológico, no importa de qué filón proviniera, sólo cobraba legitimidad entrando en simbiosis con la palabra de Perón, pues únicamente los juicios de éste, sus fórmulas y sus aforismos podían adquirir estado de doctrina en el peronismo. Mientras vivió, la de Evita fue también una palabra autorizada, pero la suya, cuando no se aplicaba a reforzar la autoridad del líder, exaltando sus cualidades y llamando a la adhesión más devota, era una reverberación vehemente y plebeya del discurso de Perón. Al margen de ambos, toda vez que, en los años del primer peronismo, cualquier otro dirigente o personalidad ligada al oficialismo tomaba a su cargo la explicación de la revolución peronista o su doctrina, la tarea asumía la forma de la paráfrasis, es decir, la

de glosar los argumentos ya expuestos por el líder, sea amplificándolos con elementos propios —como, por ejemplo, lo haría en una elaboración docta Arturo Sampay en la Convención Constituyente de 1949—, sea simplificándolos, como lo haría Raúl Mendé, cuyo breviario *El justicialismo (doctrina y realidad peronista)* alcanzó un grado de trivialización insuperable.

En resumen, desde 1946 Perón no sólo ejerció la dirección política del movimiento, sino que asumió igualmente el monopolio de la definición legítima del peronismo y su doctrina. En este papel de autoridad ideológica no tuvo ni admitió rival hasta su derrocamiento en 1955. Aunque no faltaron tentativas de dar vida a centros de elaboración ideológica relativamente autónomos del control político oficial, ellas tendrían escasa fortuna. En su libro autobiográfico, *Promediados los 40*, José Luis de Imaz recordará la breve experiencia de uno de esos núcleos, la Liga por los Derechos del Trabajador, creada por iniciativa del teniente coronel Castro. El proyecto de la Liga era "convertirse en una auténtica usina ideológica que fuera afinando los contenidos doctrinarios del movimiento iniciado en octubre", pero el centro fue desmantelado en poco tiempo: "Un día, sin que supiéramos exactamente cómo ni en qué forma, se cerró la Liga por los Derechos del Trabajador y nuestras publicaciones quedaron automáticamente clausuradas".

Al privilegiar el discurso público de Perón para hablar de la ideología del peronismo, aun cuando el recorte sea inevitablemente reductor, hemos tomado en cuenta este rango sin par de su palabra en las filas del movimiento peronista. Aun después de 1955, ya fuera del poder, cuando surgieron dentro del propio peronismo definiciones encontradas del movimiento que lo tenía como líder, siempre conservó la potestad para fijar, cada vez, lo que era y no era lícito considerar propiamente peronista.

Ciertamente, Perón no era un ideólogo ni un político doctrinario: empirista por vocación, jamás permitió que la elección de sus actos se dejara atrapar por disyuntivas de rigor ideológico. Pero no sería exacto tampoco describirlo sólo como un productor de poder, con un agudo sentido de la oportunidad política y del valor de la propaganda, aunque libre de toda orientación ideológica definible. En efecto, no es difícil identificar las preocupaciones y los esquemas que, asociados a una

interpretación de la época, constituyeron los motivos dominantes de su pensamiento público, tal como éste se fue anudando en interacción con el proceso político que lo consagraría como líder popular. Parafraseando uno de sus primeros y célebres proverbios —"Mejor que decir es hacer"—, podríamos afirmar que una de sus formas de hacer fue decir: tomar la palabra para conferir significado político a sus actos e incluirlos en el marco de una visión prescriptiva de la sociedad y del Estado. Los temas de estos mensajes no aparecieron de una vez, como un conjunto fijo y formalizado, sino que fueron anexándose y reajustándose en el discurso sin descanso de un político embarcado en la lucha por el poder. Sólo hallarán algo de codificación más tarde, insertos en la doctrina oficial del Estado Justicialista.

DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL A LA REVOLUCIÓN PERONISTA

A fines de 1944 apareció la primera recopilación de discursos del coronel Juan Perón, *El pueblo quiere saber de qué se trata*, la mayoría de ellos pronunciados como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Los editores añadieron, a manera de introducción, el artículo "La obra que desarrolla el coronel Perón", del escritor nacionalista Manuel Gálvez, publicado previamente en el diario católico *El Pueblo*. "La Revolución del 4 de junio —había escrito Gálvez— significa, para los proletarios, y en cuanto proletarios, el más grande acontecimiento imaginable. Y dentro de la revolución de junio, nada tan maravilloso como la obra del coronel Perón." Tras designarlo como "un nuevo Yrigoyen", aunque con más mérito que éste, y citar con aprobación un discurso de Perón, Gálvez agregaba: "Sí, no debe haber hombres demasiado ricos ni demasiado pobres. Las grandes fortunas son tan injustas como las grandes pobrezas [...] Las palabras del coronel Perón son verdaderamente cristianas, patrióticas y salvadoras".

No fue, por cierto, Manuel Gálvez, un intelectual con renombre más literario que político, el único nacionalista en saludar la aparición de Perón. En realidad, casi todos los grupos de esta dividida familia ideológica pusieron sus ojos en el co-

Juan D. Perón. "Trabajamos para todos los argentinos". Mensaje a los trabajadores el 1º de mayo de 1944

"[...] Un deseo superior de justicia fue el motor que impulsó a la revolución triunfante.

Enfrentamos el problema con decisión y con energía de soldados, condición que señalo porque entiendo que la solución de los problemas sociales no puede ser el privilegio exclusivo de individuos o de sectores, sino de todos los argentinos. Por el contrario, entiendo que la organización interna del Ejército está concebida con un auténtico sentido orgánico-social y es una cátedra ejemplar de disciplina, de camaradería, de patriotismo, de jerarquía y de respeto. Allí no existen ni postergaciones injustificadas ni ascensos inmerecidos. El escalafón se cumple sin excepciones y sin privilegios con un sentido estricto de selección y de justicia que no es, ni puede ser, ni queremos que sea, un beneficio exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino una conquista social que alcance a todos los argentinos.

El panorama que ofrecía en aquellos instantes todo lo que se refiere a la vida de la relación que el trabajo engendra, era desolador

El Estado se había mantenido alejado de la clase trabajadora. No regulaba las actividades sociales como era su deber, adoptando una actitud indiferente y suicida, mientras el incumplimiento de los deberes patronales, libres de la tutela estatal, sometía a los trabajadores a la única ley de su conveniencia, provocando rebeldías que amenazaban disputar el orden político.

Mientras tanto, en el campo, en ese sufrido campo argentino, la tierra se hacía cada vez más hostil para los hombres que la habían fecundado con su esfuerzo.

Comenzaron los éxodos en masa hacia las ciudades que ofrecían el espejismo de una prosperidad más aparente que real.

Las haciendas valorizadas desalojaban a los chacareros de la tierra donde habían nacido y crecido sus padres y sus hijos.

Fue entonces cuando la Secretaría de Trabajo y Previsión, fiel a su consigna de hacer, de crear, de realizar, comenzó su obra [...]."

Juan D. Perón, *El pueblo quiere saber de qué se trata*, s/c, Buenos Aires, 1944.

ronel que mostraba tan buenas aptitudes para la política. A comienzos de los años cuarenta los nacionalistas seguían siendo una minoría, pero ya no eran el exiguo núcleo que había hecho sus primeras armas políticas en 1930, con el general Uriburu. Los años no habían pasado en vano: los grupos identificados con el nacionalismo habían proliferado, al igual que sus publicaciones y revistas, y si bien fracasaron una y otra vez en el proyecto de unirse en una sola fuerza política, constituían un activo foco del campo ideológico argentino. Una nueva generación de intelectuales y militantes, formados en los Cursos de Cultura Católica, le había dado supremacía al ala católica del conglomerado, que desde mediados de la década anterior tenía aliados y directores espirituales en el clero, y contaba con simpatizantes en el Ejército. Todos reclamaban el fin del Estado liberal, la instauración de un nuevo orden, defendían la neutralidad argentina frente a la guerra mundial en curso y simpatizaban con los regímenes fascistas cuando no eran, simplemente, fascistas. Para todos era necesario un movimiento que salvara a la nación y ese acto salvador sólo podía provenir del Ejército. "Para evitar a Sila —escribió Ernesto Palacio en el periódico nacionalista *Nuevo Orden* del 27 de septiembre de 1940—, es necesario en trances críticos la aparición de César." Ese César, profetizaba, no será opresor, sino libertador, "o mejor dicho, será opresor de una minoría para libertar a la masa del pueblo".

Cuando se produjo el golpe del 4 de junio de 1943 la historia pareció concederles lo que pedían: la Revolución Nacional. El régimen militar no tardó en encontrar en ellos a su personal intelectual y los funcionarios civiles que se reclutaron de las filas del nacionalismo le dieron su tono ideológico a la primera fase del experimento autoritario. La figura del coronel Perón, quien no tardaría en ser identificado como el hombre de la revolución, se recortó sobre este fondo de deseos y expectación. Un documento del GOU previo al golpe y cuya redacción se atribuye al futuro líder muestra que la tendencia al encuentro obraba en las dos partes. En el texto, recogido por Robert Potash en *Perón y el GOU*, los nacionalistas eran destacados como "las fuerzas más puras y con mayor espiritualidad dentro del panorama político argentino". De manera que todo parecía conducir al encuentro de éstos con el coronel. En términos po-

líticos la sociedad fue breve, aunque ideológicamente dejó huellas perdurables en el discurso de Perón, quien extrajo de la cantera del nacionalismo varios de sus temas y aun las famosas tres banderas, como se desprende del clásico trabajo de Marysa Navarro Gerassi, *Los nacionalistas*, donde se consigna que en 1942 la Unión Cívica Nacionalista reemplazó, en su primer manifiesto como partido político, la consigna nacionalista tradicional por la de "Soberanía, Recuperación Económica y Justicia Social".

La deuda con el nacionalismo puede apreciarse en la recopilación mencionada, *El pueblo quiere saber de qué se trata*. ¿Qué es lo que encontramos como elementos reiterados a lo largo de las alocuciones con que este coronel recién llegado, un "hombre providencial", como lo llama Gálvez, se introducía en la arena política? La cuestión social y el anuncio de que ella se había puesto en el orden del día en la Argentina: la justicia social, proclamó, era parte del movimiento del 4 de junio, el de la Revolución Nacional. Hasta la revolución, dirá Perón una y otra vez, habían reinado la injusticia social y el desorden en las relaciones laborales, como consecuencia de un Estado abstencionista, el Estado liberal, de la "politiquería" y de la actividad disociadora de los perturbadores que buscaban explotar el descontento de los trabajadores. Pero, a partir de ese momento y con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se iniciaba la "era de la política social argentina". Había una gran deuda que saldar con "las masas sufridas" para restaurar el equilibrio entre las clases, condición del orden y de la unidad del cuerpo social. Esta misión reparadora era asumida por él, al frente de la nueva repartición estatal, y comprometía en ello su juramento de soldado. "Al defender a los que sufren y trabajan para plasmar y modelar la grandeza de la Nación —dirá Perón en el primero de sus discursos— defiendo a la patria, en cumplimiento de un juramento en que empeñé mi vida".

Si continuaba la pasividad frente a la disparidad social, si el Estado no intervenía para tutelar las relaciones entre el capital y el trabajo, el malestar de las masas —vaticinaba Perón— se tornaría explosivo y la lucha de clases terminaría por destruir a la nación. Era necesario, pues, que el Estado saliera de su indiferencia y actuara como regulador de las relaciones sociales,

que no se opusiera, sino que promoviera el ordenamiento de los obreros: si no se tomaba la iniciativa en este terreno, los sindicatos seguirían en manos de los comunistas y de los dirigentes gremiales que buscaban promover el conflicto y no las relaciones de colaboración. Así, al mismo tiempo que alertaba contra la acción de los agitadores, exhortaba a los obreros a presentar sus reclamos ante la Secretaría a su cargo, donde se estaba dando forma al "nuevo derecho de los argentinos". Los patrones no debían recelar de la acción reparadora que él había emprendido y que sólo buscaba el establecimiento de un trato justo entre capitalistas y asalariados bajo el control del Estado. Únicamente la avidez y el egoísmo de quienes quisieran seguir prosperando con la injusticia podían oponerse a la obra de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Tampoco debían temer a la sindicalización obrera: la estructura sindical encauzaba impulsos y reclamos que de otro modo serían inorgánicos y anárquicos, es decir, amenazadores para la unidad nacional.

En conexión con la preocupación por el ordenamiento de los grupos, brotaba otro tema que no desaparecería nunca de la prédica de Perón, el de la organización como principio obligado de la hora. Nada había sino organización, repetiría. La sociedad no se autorregulaba y librada a sí misma, a su espontaneidad, la sociedad es desordenada y ese desorden es amenazador: amenaza la integridad del "cuerpo social" y la unidad nacional. Sin organización, la sociedad se precipita en la disolución y la anarquía. En esta concepción de lo social, que a veces Perón figuraba con el símil tradicional del cuerpo y otras con el de la máquina y sus engranajes, las asociaciones profesionales asumían el papel de representar las partes, las funciones del organismo colectivo, y el Estado, que había abandonado la abstención, encarnaba el punto de vista de la totalidad. No había, en cambio, lugar legítimo para los partidos y los políticos, que aparecían exteriores al organismo social, asociados a la división artificial y a la pugna mezquina, a la "politiquería".

Al repertorio de ese dicurso tipo, incansablemente propalado por radio o en concentraciones públicas, se añadió el de las perspectivas económicas y sociales de posguerra cuando, ya en la segunda mitad de 1944, el fin de la contienda se instaló en el horizonte del régimen militar argentino. Algunas de las disertaciones célebres de Perón pertenecen a este período. Como la

que pronunció en la Universidad de La Plata el 10 de junio —"El significado de la defensa nacional desde el punto de vista militar"—, y que giró en torno de dos asuntos: el concepto de "nación en armas" y el desarrollo industrial argentino.

Con el concepto de "nación en armas o guerra total", tomado, como dice Perón expresamente, del militar prusiano Colmar von der Goltz, desarrollaría la idea de que las características de la guerra moderna imponían la necesidad de una preparación coordinada de todas las actividades del país y la movilización de la opinión popular, unificada tras los objetivos de la lucha. Dadas esas características de la guerra, la defensa no era, por lo tanto, un problema que incumbiera sólo a las Fuerzas Armadas. En el marco de esta concepción aparecería el tema de la industria ("constituye el punto crítico de nuestra defensa nacional"). El desarrollo unilateralmente agropecuario que tuvo durante mucho tiempo la economía argentina, el escaso interés del capital extranjero en colocar sus inversiones en actividades manufactureras y la imprevisión del Estado habían cooperado en el retraso del crecimiento industrial del país. Las divisas que la Argentina debió invertir para adquirir equipamiento militar, por ejemplo, hubieran podido ahorrarse de haber contado con las fábricas locales que lo produjeran; la guerra todavía en curso había desmentido, además, la creencia de que el país encontraría dónde abastecerse de lo que necesitara aun en caso de una situación bélica. Estas lecciones no debían ser desaprovechadas y ante el nuevo auge que conocía la producción manufacturera el Estado no actuaría con la misma despreocupación que mostró el poder público después de la Primera Guerra Mundial. "La defensa nacional exige una poderosa industria propia y no cualquiera, sino una industria pesada." Ello hacía necesaria la acción estatal, protegiendo a las manufacturas consideradas de interés estratégico, y la reciente creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares, dirá Perón, "contempla la solución de los problemas neurálgicos que afectan a nuestras industrias".

En esta misma línea hay que insertar la exposición que hizo el 6 de septiembre, al constituir el Consejo Nacional de Posguerra. El mismo Perón presidía este organismo, recientemente creado a instancias suyas con el objeto de realizar estudios para el ordenamiento económico y social del país. Perón colo-

có la charla bajo la reiterada divisa de la organización —el principio "polarizador de toda obra de gobierno", según dijo— y discurrió de manera más clara que en cualquier ocasión anterior sobre la concepción de la economía que lo animaba. Desde el título que dio a su exposición ("El Estado debe afianzar los principios de la libertad económica"), admitía, como premisa, que la actividad económica debía fundarse en la libertad de sus agentes. Pero, tras ese reconocimiento, el mayor esfuerzo de la argumentación se encaminaría a demostrar la necesidad de que el Estado interviniera en la economía, sea para coordinar las iniciativas de sus agentes, sea para estimularlas, sea, en fin, para corregir los excesos del individualismo.

Se trataba, en suma, de regular y también de planificar, pero preservándose de las "ilusiones colectivistas", contra las cuales actuaría el antídoto de la libertad económica. En este marco retomaría la cuestión del futuro industrial de la Argentina, para subrayar el criterio de que el estímulo que debía darse a algunas de las manufacturas —las que elaboraban materia prima nacional o tenían importancia vital para el país— no debía llevar al amparo de industrias artificiales, que sólo habían crecido con el cerco protector de la guerra. Si bien por momentos Perón parece atribuir la necesidad de la acción estatal en la economía a imperativos de la hora (controlar la transición de la economía nacional del contexto de la guerra al nuevo curso de posguerra), el conjunto del planteo, así como el documento *Ordenamiento económico-social*, que editaría poco después el Consejo Nacional de Posguerra, dejan ver que respondía a una convicción más permanente.

Aunque los temas de estas charlas inscribían el pensamiento de Perón en el campo de las ideologías industrialistas, la industrialización no era su centro ordenador. En sus exposiciones, los razonamientos sobre la industria —como, en general, los referentes a la economía— aparecen asociados con el problema de la defensa y la autonomía del Estado nacional, o bien remiten a la preocupación política que siempre vuelve, la del equilibrio social —la armonía del cuerpo colectivo—. "En lo económico —dirá en noviembre de 1944 al definir los objetivos de la revolución— hemos de equilibrar la economía de tal forma que sin perjudicar a los que trabajan con su capital se beneficie a los que contribuyen con su esfuerzo y con su

músculo." Para Perón lo económico no debía autonomizarse de lo social y ambos de la autoridad del Estado, órgano de la voluntad política y depositario de la unidad.

El término *masas* era desde los años treinta un nuevo nombre para lo que Gustave Le Bon había llamado la multitud, actor colectivo en el que creyó ver el advenimiento de un nuevo poder. Pues bien, el apelativo masas, en plural o en singular, con adjetivos o sin ellos (las "masas argentinas", la "masa popular"), recorre las alocuciones de Perón. Si se entrecruza a veces con la referencia al pueblo, la representación dominante es la del pueblo-obrero. Las masas, en efecto, son, antes que nada, los trabajadores, la "masa trabajadora", un dato inherente a la sociedad moderna que el Estado debe integrar. Libradas a sí mismas, sin organización, son un hecho amenazador. Las "masas inorgánicas —dirá en uno de sus discursos— son siempre las más peligrosas para el Estado y para sí mismas. Una masa trabajadora inorgánica como la querrían algunas personas es un fácil caldo de cultivo para las más extrañas concepciones políticas o ideológicas".

No sabemos si había leído a Le Bon, aunque en una ocasión nombrara su obra más célebre, *La psicología de las multitudes*. En efecto, en *Doctrina peronista* puede leerse: "Quien escribió *La psicología de las multitudes* fue un psicólogo, pero no fue un conductor de masas". El convencimiento de que se había ingresado en la era de las masas y de que resultaba necesario dar una respuesta a esa realidad si se quería gobernar, Perón decía haberlo extraído de su lectura de la experiencia europea (la de la Italia mussoliniana, en primer término, donde había es-



Tapa del libro Doctrina peronista.

tado durante los primeros años de la guerra, comisionado por el Ejército). La idea, por otra parte, formaba parte ya, desde años antes, del temario ideológico del nacionalismo argentino. Pero, independientemente de dónde la extrajera o de su novedad, lo decisivo es que terminaría por instalarla como convicción generalizada aun en las filas de buena parte de sus opositores, aunque no antes del triunfo en 1946. Ésa fue la certidumbre que buscó transmitir en un discurso, no menos famoso que los anteriores, pronunciado el 25 de agosto de 1944 en la Bolsa de Comercio, en el que Perón desarrolló, ante un receloso auditorio de empresarios, preocupados por la prédica del inquieto coronel, el argumento de que para gobernar a las masas era mejor organizarlas y que los pudientes debían ceder algo si no querían perder todo por obra de la agitación social que sobrevendría con la posguerra. "Una riqueza sin estabilidad social —dijo en esa ocasión— puede ser poderosa, pero será siempre frágil, y ése es el peligro que, viéndolo, trata de evitar por todos los medios la Secretaría de Trabajo y Previsión".

Ninguno de los temas del discurso de Perón era extraño al universo ideológico nacionalista. ¿Acaso no sobresalían en su prédica el llamado al fin de la lucha de clases y al fortalecimiento de la unidad nacional, la condena del comunismo y el cuestionamiento del régimen liberal; la valoración del orden y el compromiso con la justicia social; en suma, la búsqueda de una "tercera vía" entre los excesos del individualismo y la dominación del colectivismo? También al pensamiento lo obsesionaba la alternativa entre colectivismo y liberalismo individualista, que encuentra una exposición doctrinaria, primero francamente antiliberal y luego más matizada, en la revista *Criterio*.

La peronista no fue, sin embargo, la Revolución Nacional anunciada por los nacionalistas. "En lugar de la revolución que queríamos nacional, sobrevino la revolución social", dirá Rodolfo Irazusta evocando con estas palabras, años después, la amarga decepción que significó para él y una parte de los nacionalistas el giro que tomó el experimento político nacido del 4 de junio de 1943. Sería vano buscar en la lógica intrínseca de las ideas las razones de la divergencia que se abrió entre las expectativas de los nacionalistas más conspicuos y la ac-

ción de Perón. Fueron los vaivenes y las alternativas de la lucha por el poder los que precipitaron ese distanciamiento, así como precipitaron un nuevo alineamiento de fuerzas políticas en la Argentina. Esa lucha se libró en varios frentes y si bien en cada uno de esos ámbitos la disputa tenía rasgos propios, todos se hallaban comunicados entre sí e interactuaban recíprocamente. Estaba, por un lado, el enfrentamiento entre el régimen militar y la oposición civil, alentada por el desenlace de la guerra y el apoyo norteamericano, y en cuyas filas el movimiento universitario, el Partido Socialista y el Partido Comunista tenían el papel más activo; por otro lado, estaban las disputas dentro del propio régimen militar, libradas entre Perón y oficiales rivales o contrarios a su constante ascenso; estaba, por fin, el frente generado por la política social del coronel, que en un año se había convertido en el "abanderado de los trabajadores". Este último frente sería, a la postre, el decisivo para el curso de la lucha por el poder, al anudar la contraposición política con la pugna de clases.

A mediados de 1945 esa pugna se puso de manifiesto cuando las entidades empresarias, comenzando con el Manifiesto del Comercio y la Industria del mes de junio, hicieron público su rechazo a la política social del gobierno.

Las "fuerzas económicas", decía el documento, habían recurrido al presidente de la Nación ("en un intento de última esperanza"), preocupadas por el ambiente de agitación social que malograba "la disciplinada y pujante eficiencia del esfuerzo productor" y que se hacía más grave por el hecho de que hallaba estímulo "en el constante impulso" que provenía desde dependencias oficiales. Los firmantes no negaban la existencia del "problema social", propio de "la naturaleza humana y sus necesidades", pero denunciaban el "clima de recelos, provocación y rebeldía" que excitaba el espíritu de hostilidad y reivindicación en los trabajadores. Tampoco se oponían a la existencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero observaban que desde la creación de esta dependencia el espíritu que denunciaban se había introducido en el enfoque de los conflictos laborales. La unilateralidad del organismo oficial, remataba la argumentación, pretende justificarse "en la necesidad de combatir y extirpar el comunismo, granjeando al gobierno los presuntos méritos de una política social muy avanzada". La se-

gunda parte del manifiesto, que parecía una respuesta demorada al discurso de Perón en la Bolsa de Comercio, exponía una neta defensa de los principios del liberalismo económico y el cuestionamiento al intervencionismo estatal.

El contraataque de Perón no tardó en llegar. En una declaración a la prensa destinada a responder a la proclama elevó la apuesta y definió la disputa en términos más tajantes que hasta entonces. Según su "concepción realista del Estado moderno", dijo, los Estados actuales se clasificaban de acuerdo con una dicotomía: dictadura del proletariado, en la extrema izquierda, y dictadura del capital, en la extrema derecha. "La nuestra hasta ahora había sido una dictadura del capital", comentó, devolviendo así el documento empresario al campo de las reacciones de clase. Ante esa dicotomía, su proyecto era el de instalar una "nueva forma, creando la verdadera democracia en el medio, donde ni el capital ni el proletariado actúen sobre las decisiones del gobierno". En esa democracia integral sería "el Estado, el poder absoluto del poder político", el que gobernaría "sin presiones y sin interferencias".

Perón, en una intervención ante los empleados de las compañías de seguro, capitalización y ahorro, continuó devolviendo los golpes recibidos: "Se me ha acusado igualmente —dijo en una de sus alocuciones— de exacerbar las pasiones subalternas de las masas, porque he defendido las necesidades de dar a la gente el mínimo indispensable para que pueda vivir. Se dice que mi prédica va dirigida siempre hacia los salarios y las condiciones de trabajo, en vez de orientarse hacia los valores morales de la población". Y agregó, en el lenguaje sin eufemismos que solía hacer suyo: "Me explico por qué esas fuerzas prefieren los valores morales: es que a los otros hay que pagarlos".

La guerra de solicitadas, como la llamó Perón, culminó con una concentración obrera frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, esbozando el alineamiento que unos meses después, el 17 de octubre, sellaría la sociedad entre los trabajadores y el nuevo caudillo popular. ¿Cómo escapar a la conclusión de que Perón, incluso a través de su verbo, contribuyó a producir la realidad en nombre de la cual él había explicado la necesidad de una nueva acción del Estado: la "masa trabajadora" como actor político? Por cierto, el movimiento sindical no nació con

Perón. Antes de 1943 contaba ya con una larga historia y desde la segunda mitad de los años treinta los gremios más fuertes estaban bajo la dirección de los socialistas y de los comunistas. Como ha sido largamente demostrado, por otra parte, el sindicalismo peronista contó, en su génesis, con la cooperación de dirigentes y activistas gremiales de diferentes rangos y diverso origen ideológico, procedentes de la era preperonista. Pero todo este universo activo de tendencias y organizaciones sólo animaba a un segmento minoritario de las filas obreras. La ampliación de la movilización llegó sólo con Perón: las alternativas y los instrumentos que empleó para lo que describía como un problema (masas inorgánicas y abandonadas a su suerte por un Estado liberal en el cuadro de una sociedad capitalista en curso de industrialización) y para lo que denunciaba como una amenaza, el comunismo, contribuyeron no sólo a aislar a socialistas y comunistas, sino también a la activación general de los trabajadores y a su pasaje al estado de fuerza registrada en el juego político.

Esa inserción de los trabajadores en la ecuación política se volvió cada vez más indisociable de la adhesión al líder que desde el poder del Estado les ofrecía expresión y representación. A medida que la resistencia de los patrones alejaba en el horizonte la perspectiva de la colaboración de clases, las alocuciones de Perón exaltaban la orientación social como vocación esencial del movimiento del 4 de junio. El contenido fundamental de la revolución, dirá ante una concentración de obreros de la Alimentación, "ha sido de carácter social, por la simple razón de que el mundo evoluciona hacia lo social y el gobierno de los pueblos va siendo cada día menos político para ser cada día más social [...] La Secretaría de Trabajo y Previsión pasará a la historia como el puente magnífico de la evolución de la burguesía al dominio de las masas". Atento al nuevo cuadro que emergía al fin de la guerra, Perón no dejó que dos consignas de la oposición civil, libertad y democracia, fueran patrimonio exclusivo de sus adversarios. Las hizo suyas y las volvió contra ellos: la libertad y la democracia eran ficticias sin el fundamento de la justicia social; el movimiento de junio buscaba la democracia y la libertad verdaderas.

En un pasaje de su libro sobre el peronismo y la clase obrera (*Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajado-*

ra argentina. 1946-1976), Daniel James define como "herético" el papel que asumió el discurso de Perón entre 1943 y 1945, por su capacidad para producir en el mundo de los trabajadores una ruptura con el sentido común anterior, un sentido común ligado al lugar que ocupaban en las jerarquías de la vieja Argentina. Ese discurso, que proclamaba la hora de la justicia social, del derecho a participar de los frutos del progreso y del trato igualitario, les proporcionaba ahora expresión pública y articulación unitaria a prácticas y experiencias que, hasta entonces, habían sido vividas en forma dispersa, privada. James no ignora que radicales, socialistas y comunistas habían impugnado también el orden social y político regido por las elites conservadoras. Pero subraya que el peronismo tuvo sobre estos rivales una ventaja que no era discursiva sino de poder: "Sobre esas otras fuerzas políticas el peronismo tuvo la enorme ventaja de ser un 'discurso ya constituido', articulado desde una posición de poder estatal, lo que acrecentaba considerablemente la legitimidad que confería a las experiencias que expresaba".

El 17 de octubre, la "revolución de los descamisados" rubricó esta inflexión igualitaria y afianzó en el nuevo movimiento, que ya comenzaba a llamarse peronismo, la sensibilidad populista que sería uno de sus rasgos distintivos. Un nacionalismo de masas, popular, afín con el carácter de la fuerza política naciente, tomó la primacía sobre cualquier otra variante del pensamiento nacionalista. Una contribución especial a esta nota ideológica provino del nacionalismo de FORJA, que filiaría el movimiento encabezado por el coronel Perón en la tradición de los movimientos populares argentinos. Con el nuevo movimiento —dirá, por ejemplo, en 1946, en su libro *Montoneras y caudillos en la historia argentina*, el escritor forjista Atilio García Mellid— había reaparecido el pueblo histórico de la montonera, era la "montonera social", dirigida por quien asumía en el presente el papel de los grandes caudillos del pasado nacional. "Era evidente que el mito y la mística, vacantes desde la muerte de Yrigoyen, habían encontrado su nueva encarnación y su caudillo. Ya podían reiniciar su marcha las muchedumbres nacionales". Como ayer, las nuevas montoneras y su jefe se enfrentaban a la oligarquía y a los ilustrados.

Si Perón proclamaba que la justicia social era el alma del movimiento nacionalista del 4 de junio, ¿cuál era, en cambio, a los ojos de sus opositores, el sentido de la empresa que lo tenía como figura dominante? El establecimiento de una dictadura fascista. La disolución de los partidos políticos, la implanta-

Juan D. Perón: "Palabras pronunciadas en el acto de proclamación de su candidatura", 12 de febrero de 1946

"[...] Por eso, cuando nuestros enemigos hablan de democracia, tienen en sus mentes la idea de una democracia estática, quiero decir, de una democracia sentada en los actuales privilegios de clase. Como los órganos del Estado, y el poder del Estado, la organización de la sociedad, los medios coactivos, los procedimientos de propaganda, las instituciones culturales, la libertad de expresión del pensamiento, la religión misma, se hallan bajo su dominio y a su servicio exclusivo, pueden echarse tranquilos en los brazos de la democracia, pues saben que la tienen dominada y que servirá de tapadera de sus intereses. Precisamente en esa situación está basado el concepto revolucionario marxista y la necesidad que señalan de una dictadura proletaria. Pero si como ha sucedido en la Argentina y en virtud de mi campaña, el elemento trabajador, el obrero, el verdadero siervo de la gleba, el esclavizado peón del surco norteño, alentados por la esperanza de una vida menos dura y de un porvenir más risueño para sus compañeras y para sus hijos, sacuden su sumisión ancestral, reclaman como hombres la milésima parte de las mejoras a que tienen derecho, ponen en peligro la pacífica y tradicional digestión de los poderosos y quieren manifestar su fuerza y su voluntad en unas elecciones, entonces la democracia, aquella democracia capitalista, se siente estremecida en sus cimientos y nos lanza la imputación del totalitarismo. De este modo llegaríamos a la conclusión de que el futuro Congreso representará un régimen democrático si triunfan los privilegios de la clase hasta ahora dominante, y que representará un régimen dictatorial si, como estoy seguro, triunfan en las elecciones las masas de trabajadores que me acompañan por todo el país. [...]"

Juan D. Perón. *El pueblo ya sabe de qué se trata*, s/c, Buenos Aires, s/f (probablemente 1946).

ción de la enseñanza religiosa obligatoria, el neutralismo ante la guerra, la restricción de las libertades públicas, el antiliberalismo y el anticomunismo, todo, en fin, se colocaba bajo esa definición. ¿Y la política social que se había inaugurado bajo la guía del coronel Perón? Representaba la faz demagógica del fascismo, el complemento de las medidas represivas que se tomaban contra los gremios y los gremialistas que no acudían al llamado del coronel. El sindicalismo, por otra parte, ¿no había sido uno de los filones del fascismo?

Fue, justamente, con este tema que en noviembre de 1943 Américo Ghioldi inició desde las páginas de *La Vanguardia* ese largo pleito ideológico que haría de él un contradictor continuo de Perón y un símbolo del antiperonismo. La oportunidad la crearon unas declaraciones del coronel al diario chileno *El Mercurio*, reproducidas a los pocos días en la Argentina por *La Prensa*, y que mostraban ya públicamente su condición de hombre fuerte de la revolución de junio. "Yo personalmente soy sindicalista por antonomasia —dijo en la ocasión— y como tal anticomunista, pero creo que debe organizarse el trabajo en forma sindical, de modo que los trabajadores y no los dirigentes y agitadores sean los que aprovechen los mayores beneficios". Ghioldi se aferró a la autodefinición como sindicalista de Perón para referirse al "significante credo" del militar. Tras hacer un pasaje por las ideas de Georges Sorel y la alianza del sindicalismo con el corporativismo en el experimento de Mussolini, concluía con el sindicalismo de Estado: "En Sudamérica hay casos de gobiernos que auspician cierto curioso sindicalismo [...] En tanto el sindicalismo revolucionario exaltaba la función exclusiva del sindicato y repudiaba la política, el sindicalismo estatal y el corporativismo tienen al sindicato para atar a los obreros en una corporación estrecha, porque la política es reservada exclusivamente para los usuarios del poder". A la imagen del obrero identificado sólo como productor, Ghioldi contrapuso la síntesis del obrero-ciudadano.

Tras haber interrumpido varias veces su publicación, el gobierno militar clausuró por tiempo indeterminado *La Vanguardia* el 22 de abril de 1944. Cuando reapareció convertida en semanario ocho meses después, Ghioldi prosiguió desde sus columnas la crítica a los planes de quien era para entonces el

"jefe supremo de la situación", según lo llamaría. No había con él una cuestión personal, escribirá Ghioldi en uno de sus editoriales, tras afirmar que no temía reconocer la obra social que el coronel habia cumplido. Tampoco hacía cuestión por el hecho de que las medidas de justicia social procedentes de la Secretaría de Trabajo se inspiraran en proyectos que habían

Américo Ghioldi: Productores y ciudadanos

"[...] El sindicalismo estatal coloca al obrero en la posición de productor exclusivo, como si aquél no fuera sino un instrumento vocal —según la clasificación de Aristóteles— o una bestia de carga que nada es ni significa, fuera del papel mecánico en la producción y de las necesidades digestivas que se requieren para su mantenimiento y reproducción.

No es necesario esforzarse mucho para comprender que ésta es una concepción escasamente espiritualista del ser humano.

El obrero es productor. Los derechos del obrero son la sustancia de la justicia social. Cada día se comprende más que el obrero debe tener asegurado un nivel de vida compatible con el concepto de dignidad humana que cada generación es capaz de concebir y de realizar. El obrero como productor tiene funciones y deberes técnico-económicos, que acrecen en los tiempos modernos y se han puesto bien en evidencia en estos días de guerra. La participación creciente del productor auténtico en la dirección económica y técnica de la sociedad debe necesariamente aumentar. En el plano político los productores deben pesar cada vez más en virtud de su fuerza numérica y de su función social y económica. En el laborismo inglés, por ejemplo, y según es público y notorio, influyen grandemente las fuerzas sindicales.

Pero el productor es hombre. Esto es lo que se esfuerzan por contrariar los sindicalistas del Estado. Los derechos del hombre se expresan por el civismo. Los anhelos de justicia, las ansias de libertad, los programas de organización, los ideales de igualdad que bullen en el hombre se anudan y sintetizan en el ciudadano.

Por encima del sindicato están los intereses generales, y dominando al productor planea el hombre cívico o político, o sencillamente el hombre. [...]"

Américo Ghioldi. *Palabras a la nación*. Editorial La Vanguardia, Buenos Aires, 1945, pp. 149-151.

elaborado los socialistas. Las razones de la oposición eran otras, de principio, fundadas en la "línea democrática, liberal y socialista" del partido. De acuerdo con esta línea lo fundamental era "la conciencia de la clase obrera, de sus derechos y de su propia fuerza", porque las mejoras del salario o laborales eran obligadamente transitorias, "superadas en el término de poco tiempo por los progresos del proceso productivo". La justicia social era, pues, inseparable del sindicalismo libre, mientras que la concepción sindical de la Secretaría de Trabajo era tan parecida "a la idea corporativa del fascismo como una gota de agua a otra". Ese organismo oficial no sólo había anulado la autonomía sindical, sino que utilizaba "los aparatos gremiales para los fines políticos del oficialismo y para el endiosamiento e idolización de una persona".

Ghioldi no fue, por supuesto, el único dirigente socialista que escribió sobre el nuevo movimiento y contra él en los años que van de 1943 a 1946. Pero ningún otro produjo en esos años y en relación con el peronismo una obra equivalente a la suya. De hecho, aunque no formalmente, él fue hasta el fin del peronismo el guardián de la doctrina partidaria. Cuando, en 1948, la evidencia de que el socialismo ya había quedado sin comunicación con el mundo de los trabajadores hizo surgir en las filas del partido la inquietud por analizar el movimiento que los había alejado de la izquierda, en *El socialismo y la actual crisis argentina* Ghioldi replicó que el fenómeno había sido estudiado y remitió a los documentos de la agrupación y a su propia contribución: "Si ustedes me permiten una referencia a mí mismo, diré que en los artículos de *La Vanguardia* y en los tres o cuatro libros que he publicado durante esta breve crisis, analicé —y se me ocurre que con cierta hondura— la naturaleza de los hechos que estamos enfrentando". La crisis a que hacía referencia y que a su juicio estaba en el origen del peronismo no era de índole social, sino ético-política. A ella le había dedicado, en las semanas previas a las elecciones del 24 de febrero de 1946, dos artículos que desde su título ("Cuando salgamos de la crisis") revelaban la confianza en el triunfo sobre el candidato "continuista", como se llamaba a Perón en las filas de la Unión Democrática. "Sería un error creer —escribió entonces— que la crisis argentina se llama 4 de junio. El 4 de junio es una manifestación de la aguda crisis que durante más

de una década trabajó el suelo de la política y el subsuelo de las costumbres y de las ideas." Ahora bien, para superar esa crisis era necesario no sólo desterrar el analfabetismo literal, sino llevar adelante también una tarea de alfabetización política, histórica, económica y moral.

Alpargatas y libros en la historia argentina, ciclo de conferencias que publicó en 1946, fue una de sus contribuciones a esa regeneración del tejido colectivo que concebía como una empresa pedagógica. En ellas expuso la tesis de que el movimiento que se había engendrado bajo el régimen militar conjugaba el fascismo con el renacimiento de la montonera y el rosismo. "Nuestra dictadura es una mezcla de formas y modelos extranjeros y reedición de vicios y modos de ser criollos. Vivimos horas de restauración rosi-totalitaria". La tesis, que resumía un punto de vista extendido en el campo de la oposición liberal y de izquierda, cristalizará como una de las interpretaciones más corrientes del peronismo hasta 1955.

Tapa del polémico libro de Américo Ghioldi, 1946.

La lucha contra el nuevo movimiento se inscribía así en la causa de la civilización contra la barbarie. Los términos de la antítesis eran la contraparte exacta de la definición que los ideólogos cercanos al peronismo daban del antagonismo: para éstos, era el combate de la nación histórica y su pueblo por la recuperación nacional y la justicia social contra la oligarquía, el país cosmopolita y la intelligentsia antinacional. Cada uno de los oponentes parecía dispuesto a ilustrar, a sabiendas o inconscientemente, el tema nacionalista de las dos Argentinas, una de las cuales era total o parcialmente ilegítima a juicio de la otra.

La cultura política comunista no añadió nada a esta repre-

sentación de la antinomia, como no sea un lenguaje más estereotipado y la exaltación del papel de la Unión Soviética en la guerra contra el nazismo. Para sus voceros y sus publicaciones los coroneles del GOU no sólo eran un grupo nazi-fascista que había impuesto una dictadura de ese tipo en el país, sino que buscaban establecer una cabecera de puente en América para abrir el continente a la dominación del Eje. A partir de 1945, el enemigo ya no sería señalado con las expresiones hasta entonces de rigor —"camarilla del GOU" o "trío Farrell-Peluffo-Perón"—, sino con un término que los comunistas, un año y medio después, no sabrían cómo borrar de los documentos del partido, el de "nazi-peronismo". Aun después del 17 de octubre los peronistas representaban, de acuerdo con el principal dirigente comunista, Victorio Codovilla, una "ínfima minoría" que podía ocupar posiciones decisivas en el gobierno a causa de la insuficiente unidad de "las fuerzas democráticas y progresistas". Pese a la demagogia "antioligárquica", "anticapitalista" y "antimonopolista", el régimen que Perón se proponía establecer era el mismo que deseaban "las fuerzas reaccionarias de la oligarquía criolla aliada a los monopolios extranjeros", como afirmó en *Sobre el peronismo y la situación política argentina*.

En las elecciones del 24 de febrero de 1946, el frente político que tenía como núcleo a la alianza, resumida en Perón, entre el Estado, una fracción del Ejército y los trabajadores, se impuso a la coalición que congregaba al conjunto de los partidos históricos de la política argentina (con la excepción de los conservadores) y contaba con el respaldo de las clases medias —su base de masas— y el grueso de las clases propietarias. La Iglesia Católica había dado su apoyo a la primera y el progresismo laico, donde el liberalismo mezclaba sus aguas con la izquierda, fue parte de la segunda.

Lo único que tuvieron en común las fuerzas rivales fue la reivindicación de Hipólito Yrigoyen, por cuyo legado compitieron durante la campaña electoral. Cuando a comienzos de julio las dos cámaras del Congreso, con el apoyo del bloque oficialista y del radical, decidieron tributar un homenaje a la memoria del caudillo, el editorialista anónimo pero perspicaz del diario *El Día*, de La Plata, observaba que podía meditarse sobre la modificación del sentimiento público en lo que iba de

1930 a 1946 por esa nueva valoración de la figura de Yrigoyen. "Hasta diminutos sectores nacionalistas —señalaba—, que en 1930 saludaron alborozados su derrocamiento, ahora expresan que 'andaban equivocados' [...] Y sectores del izquierdismo también hacen su lugar a Yrigoyen ante actitudes que marcaron en el ex mandatario una tendencia al nacionalismo económico y de defensa antiimperialista". Y remataba, al concluir: "Hay estatuas en varias ciudades y se borran los nombres de Uriburu y 6 de Septiembre a partidos bonaerenses [...]."

LA DOCTRINA SE INSTITUYE

Los tres primeros años del gobierno peronista se caracterizaron por la energía reformadora y fueron acompañados por el crecimiento económico y la expansión del bienestar social. La ideología del movimiento alcanzó su configuración clásica en el marco de ese clima de prosperidad y pujanza. Las proclamas, medidas y actos gubernamentales alegóricos, que proliferaron entre 1946 y 1949 y alcanzaron el rango de emblemas de la Nueva Argentina, quedarían fijados de manera perdurable, por obra de una evocación repetida, en la memoria ideológica del peronismo histórico.



Foto de Juan D. Perón y su biblioteca en la propaganda oficial.

En 1946, a poco de asumir Perón la presidencia, se publicó con su firma el volumen *Doctrina revolucionaria*. "La Revolución —escribió en la presentación del libro—, si bien triunfante en un aspecto, no puede consolidarse y afianzarse, en sus

postulados, si no cuenta con una doctrina claramente expuesta, orgánicamente presentada y accesible a todos los sectores de la población." Era necesario que los principios del movimiento, formulados hasta entonces sobre la marcha de la acción política, se enunciaran en un solo cuerpo y, para evitar que interpretaciones de terceros desvirtuaran la doctrina, ningún intérprete era más adecuado que su fundador: "La mejor y más auténtica expresión de (una) idea, es la de su creador". Perón se hacía cargo así no sólo ya del papel que todos le reconocían en el nuevo movimiento —el de jefe de la revolución que se había validado en las urnas—, sino también el del inspirador doctrinario de esa fuerza política, bautizada poco antes como Partido Único de la Revolución Nacional.

Lo que el libro exponía eran, en gran medida, las ideas que Perón había propalado desde 1943, ahora insertas y desarrolladas hasta la redundancia a lo largo de una introducción y ocho capítulos. Algunas de las fórmulas que serían después clásicas del ideario justicialista aún no habían sido acuñadas, pero las definiciones de principios y postulados eran ya familiares: la inspiración cristiana del movimiento revolucionario ahora en el gobierno, su nacionalismo, el sentido de la justicia social, la prioridad de la unidad nacional ante la disociación en banderías ficticias ("por la mala acción de sus dirigentes"), el equilibrio entre los extremos del individualismo y el colectivismo. La doctrina estipulaba entre sus postulados el de la evolución, ley que regía para las sociedades como para los cuerpos orgánicos, y Perón le dedicará varias páginas a explicar por qué y cómo era necesario adaptarse a la corriente del cambio ineludible.

El mundo asistía a una acelerada evolución hacia nuevas fórmulas sociales y políticas y era necesario que la Argentina se preparara para esos cambios si se quería evitar que el movimiento trajera la "ruptura y la caída de nuestros propios organismos". Si bien este proceso asumía su carácter más dramático en la vieja Europa superpoblada, y la superpoblación no era un problema argentino, la evolución debía ser aceptada pues el país no podía conservarse al margen de un mundo que cambiaba. Desde 1789 hasta 1914 la humanidad había vivido bajo el signo de la Revolución Francesa y el dominio de la burguesía; el nuevo ciclo evolutivo se había iniciado en 1918, activado

por la Revolución Rusa, y se caracterizaba por la declinación de la burguesía y el ascenso de las masas. "Los países más adelantados nos están dando la pauta en ese sentido, cualquiera sea el campo ideológico en que se desenvuelvan sus actividades." "Nosotros", dirá Perón, hablando de sí mismo, no hemos hecho más que interpretar este "ambiente del mundo", conscientes de que quien esté en contra de la evolución está perdido. Asentir a la evolución era, asimismo, precaverse contra la revolución, que "es destrucción de valores, es acumulación de desgracias y sacrificios".

Acompañar la marcha de la época, no empeñarse en resistencias estériles a las tendencias del tiempo, asumir, si es necesario, el impulso y la legitimidad de la revolución para abrir cauce a la evolución. Al inaugurar las sesiones del Congreso, Perón había hablado ya de moderar la revolución en la evolución: "El resultado será tanto mejor cuanto más firmes en la doctrina sepamos atemperarla a la evolución graduada que la aplicación de la mística de la revolución requiere para su eficacia". (Cuando veintisiete años después su autoridad sea desafiada, dentro de su propio movimiento y en nombre del peronismo verdadero, por una tendencia juvenil que él mismo había bendecido y que reclamaba el cumplimiento de la revolución que asociaba con el regreso del peronismo al gobierno, Perón proclamará que en la disyuntiva entre el tiempo y la sangre, él prefería el tiempo, reafirmando su vieja adhesión al cambio evolutivo y gobernado.) La idea de gobernar el cambio se conectaba con otra, ya apuntada, la de administrar políticamente lo social y lo económico, acompasándolos: ambos debían marchar al mismo paso, evitando que la autonomización de uno conspirara contra el funcionamiento del otro. A esta regulación política, que reforzaba el poder del Estado, en primer término el del Ejecutivo, sobre la economía y sobre la sociedad, Perón la llamaría a veces "economía social".

El año 1947 fue prolífico en actos y ceremonias destinados a simbolizar la Nueva Argentina. Uno de ellos fue la proclamación que hizo Perón, en febrero, de los "derechos del trabajador". El presidente consideraba necesario y oportuno "enunciarlos mediante una declaración expresa, a fin de que, en el presente y en el futuro, sirva de norma para orientar la acción de los individuos y de los poderes públicos". El decálogo, que

daba cristalización al lema de la justicia social, se incorporaría dos años más tarde a la Constitución reformada. Otra celebración emblemática fue la del 9 de Julio de ese año, cuando la conmemoración del aniversario de la declaración de la independencia fue asumida por el gobierno como ocasión para rubricar el acta de declaración de la independencia económica. Suscripta como la de 1816 en la ciudad de Tucumán, la proclama anunciaba el compromiso de "los representantes de la Nación en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares" con el objetivo de realizar la emancipación económica del país, liberándolo del dominio del "capitalismo foráneo". La promulgación del voto femenino tuvo también su escenificación: el 23 de septiembre, en un acto en la Plaza de Mayo, con Perón y Evita, donde el Presidente firmó el decreto que ponía en vigencia la ley correspondiente.

La serie de actos fundadores que distinguieron el año 1947 se clausuró a comienzos de diciembre, con el congreso constituyente del Partido Peronista. La carta orgánica aprobada en la ocasión asentará el lugar eminente del líder en la nueva formación política. El artículo octavo, que dotaba al Presidente de los mayores poderes dentro del partido y respaldaba la identificación entre el partido y el gobierno, sería sólo un eslabón de la serie de identificaciones que articularían la ideología de la Nueva Argentina: la del pueblo con el peronismo, la del peronismo con el Estado Justicialista y la de éste con la persona del jefe de Estado.

La culminación del ciclo de reformas sociales y políticas que le dieron su signo a los primeros años del gobierno peronista fue la Constitución de 1949. La voluntad de modificar la Constitución de 1853 había sido anunciada por el peronismo en su primer congreso, con la recomendación de que la nueva carta constitucional autorizara la reelección del presidente y el vicepresidente. Perón dio su aval público a la iniciativa el 1° de mayo de 1948, en el mensaje con que inauguró el nuevo período de sesiones del Congreso, pero se declaró contrario a la enmienda del artículo 77, que obstaculizaba su reelección. Pese a la reacción adversa de los partidos opositores —que de Perón sólo aguardaban lo peor y veían detrás del empeño reformador el móvil de eliminar el artículo que estorbaba la reelegibilidad presidencial, cuando no la sombra de la reforma

fascista de las instituciones—, el proyecto se activó rápidamente. En la Cámara de Diputados, donde el oficialismo había incrementado su mayoría después de las elecciones de renovación parlamentaria, el bloque peronista aprobó una ley de convocatoria a una convención constituyente, tomándose las mayores libertádes para interpretar las reglas fijadas por la propia Constitución para proceder a su reforma.

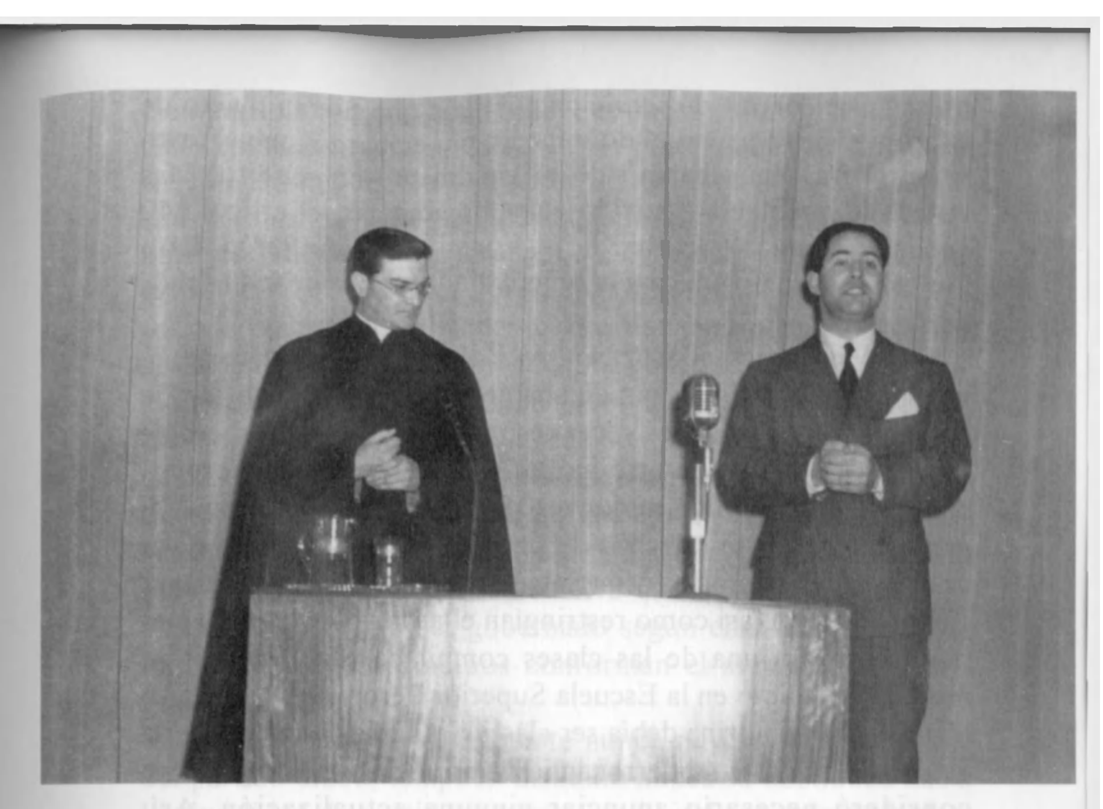
El problema de la sucesión presidencial era, sin duda, una de las razones de la reforma proyectada. Para el partido gobernante preservar el lugar eminente de Perón resultaba esencial, dado que seguía siendo la pieza que ligaba el heterogéneo universo de sindicalistas, radicales, nacionalistas y conservadores reunidos en el movimiento peronista. Perón, obviamente, no era ajeno al designio de su reelección, pero lo animaba también —y no sólo a él en las filas del partido oficial— el objetivo de conferir rango constitucional a los preceptos de la Nueva Argentina. "La revolución peronista —dijo el 3 de septiembre de 1948 en uno de los discursos destinados a propiciar la reforma— ha iniciado una nueva etapa en lo político, en lo social y en lo económico. Ha expuesto claramente su programa y ha elaborado una doctrina que ha enunciado con igual claridad al pueblo de la República, antes de llegar al Gobierno [...] Ese programa y esa doctrina actualmente en acción por voluntad popular deben ser desarrollados y consolidados en los fundamentos básicos de la Nación misma, para estabilizarlos y darles carácter de permanencia." Al inscribir sus postulados en la carta magna, la revolución peronista fijaría su carácter irreversible.

Como se esperaba, en la elección para convencionales el peronismo triunfó ampliamente y obtuvo una holgada mayoría de delegados a la convención reformadora, que comenzó a sesionar el 24 de enero de 1949. La minoría quedó en manos del partido radical, cuyo bloque encaró la asamblea sólo como una tribuna de denuncia —es decir, para impugnar la operación reformista sin comprometerse con la enmienda constitucional— y en cuanto creyó que había llegado la oportunidad para un gesto de resonancia se retiró de la convención. Dos días después, el 11 de marzo, ésta sancionó la nueva constitución, la "Constitución de Perón", según dijo Arturo E. Sampay, informante del despacho de la mayoría y teórico de la reforma, atri-

buyendo esa denominación a la "voz del pueblo, que es vox dei". Parafraseando de a ratos a Carl Schmitt y su crítica del orden liberal-burgués, Sampay había expuesto la concepción que animaba las enmiendas propuestas y el texto de su informe es una de las versiones intelectualmente más elaboradas de la revolución peronista.

La Constitución sancionada no se limitaba a autorizar la reelección presidencial, pero tampoco era la reforma fascista de la Constitución que habían augurado los partidos de la oposición: era la Constitución de la comunidad organizada, el orden de la Nueva Argentina. La institución de la doctrina peronista, así como el pacto entre lo viejo y lo nuevo que alojaba la Constitución reformada, aparecían ya en el preámbulo, donde se insertó, en el marco del texto de 1853, el lema del partido gobernante —"una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana"—. El centro de la innovación estaba en el capítulo relativo a los derechos y garantías. Allí, en la "parte dogmática" del texto constitucional, había dicho Sampay, estaba codificada la ideología que inspiró a los constituyentes de 1853, la del liberalismo. Fundado "sobre un concepto absoluto de propiedad y sobre la creencia de que la acción privada, movida por el solo interés personal, sería capaz de generar automáticamente un orden justo", el credo liberal había tenido efectos sociales y económicos penosos para el país. La nueva Constitución estaría regida por otra concepción, de acuerdo con la cual toda interacción humana es "objeto de la política, es decir materia propia de la función reguladora del Estado, pudiendo por tanto convertirse de materia de negocios privados, de objeto de justicia conmutativa, en materia de dirección pública, en objeto de la justicia social, pues los hombres están subordinados al Estado para, de esta manera, resultar coordinados para un mismo fin: el bien común". Esa concepción se traducía en los "derechos especiales" del artículo 37 (derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura), en el artículo 38, que establecía la función social de la propiedad privada, y en el artículo 39, según el cual "el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social".

En lo relativo a la función del Estado en la economía, la prescripción más concluyente de la Constitución de 1949 fue



José María Castiñeira de Dios presentando una conferencia del padre Hernán Benítez, 5 de septiembre de 1950.

la del artículo 40, cuyo inspirador fue Arturo Sampay. Le atribuía al poder público la facultad de "intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad" si lo exigía la custodia del interés general, nacionalizaba todas las fuentes naturales de energía y establecía la propiedad estatal de los servicios públicos ("bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación"), fijando las condiciones en que el Estado recuperaría los que estuvieran en manos de particulares. Las disposiciones del artículo 40 no desentonaban con las políticas de nacionalizaciones que se siguieron en muchos países después de la guerra y el eco ideológico de esas políticas podía registrarse también en las filas del radicalismo, de donde las había recogido el movimiento de la Intransigencia, incorporándolas en 1947 a sus "Bases de acción política".

Perón no estuvo enteramente de acuerdo con la redacción que finalmente recibió este artículo, por los criterios que fijaba para calcular la indemnización que debería pagarse a las em-

presas particulares de servicios públicos que fueran objeto de expropiación, pero no pudo impedir, sin embargo, que el texto se aprobara según había sido originalmente compuesto. Más allá de lo que había ocurrido entre bambalinas, el artículo 40 quedaría como un símbolo de la Constitución de Perón. Esto nos remite a la dinámica y la objetividad propias de los hechos de discurso.

Como ha observado Robert A. Potash, Perón era bastante más pragmático de lo que dejaba entrever el nacionalismo de su retórica, pero muchas veces resultaba también prisionero de esa retórica. Dicho de otro modo: los significados que producía su palabra pública se convertían en hechos con los que él mismo debía contar, hechos de sentido que ponían límites a la voluntad de ignorarlos, simplemente, cuando las circunstancias cambiaban, así como restringían el arbitrio de la mera manipulación. En una de las clases compiladas en *Conducción política* que dictó en la Escuela Superior Peronista, Perón proclamó que la doctrina debía ser elástica y había que mantenerla actualizada. Hasta su derrocamiento en 1955, sin embargo, no consideró necesario anunciar ninguna actualización. Así, cuando emprendió la reorientación de la política económica del gobierno y buscó, a partir de 1953 (muy atrás habían quedado ya los años de la pujanza del Estado Justicialista), atraer al capital extranjero en diversas áreas, entre ellas, la del petróleo, se creyó obligado a explicar que el medio que propiciaba para obtener el autoabastecimiento petrolero no contradecía los principios que siempre había sostenido. La doctrina no había cambiado. Para entonces, ella ya había recibido todas sus formas: la de la síntesis con ambición filosófica, *La comunidad organizada*, disertación con la que había clausurado el Congreso de Filosofía, reunido en Mendoza en 1949, y cuya redacción se ha atribuido a varios filósofos; la forma del compendio de citas, *Doctrina peronista*, que se publicó en 1951 y reunía temáticamente pasajes extraídos de discursos y declaraciones de Perón de los años 1943-1950; y la forma catequística de los preceptos, "Las veinte verdades del Justicicialismo", que Perón leyó el 17 de octubre de 1950 desde los balcones de la Casa de Gobierno.

En el discurso con que el Presidente lanzó, a comienzos de diciembre de 1952, el Segundo Plan Quinquenal, la identifica-

ción entre el gobierno, el Estado, el pueblo y la doctrina peronista como doctrina nacional era ya completa: "Para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación, la comunidad organizada debe ser socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Esta conclusión nos prueba que el Gobierno, el Estado y el Pueblo de un país, en orden a su felicidad y grandeza, tienen que ordenar armónicamente sus actividades sociales, económicas y políticas [...] La conducción de las actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad organizada exige, como toda forma de la conducción, la existencia de una doctrina, teoría y forma de ejecución, y de los elementos de conducción: conductor, cuadros auxiliares y masa organizada [...] La doctrina del Segundo Plan Quinquenal no puede ser otra que la doctrina aceptada por el Pueblo, para ser gobernado según ella. Es la Doctrina Peronista, cuyos principos conforman el alma del Segundo Plan", etcétera.

Aunque Perón explícitamente nunca reivindicó el principio del partido único, tampoco disimuló nunca su hostilidad hacia la pluralidad de partidos: aparecía casi indisociable de la desorganización que evocaba al relatar el momento de su ingreso en la vida pública. En cuanto al peronismo, era más que un partido: "Es un movimiento nacional; ésa ha sido la concepción básica. No somos, repito, un partido político; somos un movimiento, y como tal, no representamos intereses sectarios ni partidarios; representamos sólo los intereses nacionales. Ésa es nuestra orientación", afirmó ante los representantes del peronismo a la Convención Constituyente. ¿Quién podía oponerse, sino un traidor a la patria, al movimiento que se identifica con la nación misma? De todos modos, aunque las fuerzas políticas de oposición no podían funcionar con normalidad —se las vigilaba, obstruía y hostigaba—, continuaron existiendo. La vocación hegemónica, en otras palabras, no concluyó en el régimen de partido único.

FRENTE AL HECHO PERONISTA

Una vez que pasó la sorpresa, la certidumbre generalizada entre las fuerzas políticas y sociales derrotadas en 1946 fue

que el triunfo de la coalición peronista no podía ser sino un hecho pasajero. La victoria del "candidato continuista" era, para los socialistas, el signo de que la crisis nacional continuaba sin resolverse. Para los radicales intransigentes era la prueba palpable de las consecuencias producidas por la táctica de sus rivales en el partido, los "unionistas", mariscales de una derrota que tenía su explicación última en el abandono de la tradición popular del yrigoyenismo iniciada bajo la dirección de Alvear. La crisis que sufría el país resultaba indisociable de la crisis de un radicalismo que había perdido su rumbo revolucionario. Por este extravío de la tradición una parte de los votos radicales habían sido atraídos por Perón. Era, pues, necesario volver a las fuentes si se quería devolver al "pueblo radical" su mayoría momentáneamente perdida. Los dirigentes comunistas se autocriticaron por ciertos errores tácticos —en la búsqueda de aliados antifascistas habían descuidado algunas reivindicaciones populares—, eliminaron de sus declaraciones la expresión "nazi-peronismo" y se las arreglaron para componer en el papel la antinomia de la víspera: tanto las masas que habían votado por la coalición laborista-radical como las que lo hicieron por la Unión Democrática habían votado por la promesa de la "revolución agraria y antiimperialista".

Para todos la nueva situación era anormal, si bien los comicios habían sido —por primera vez desde 1932— incuestionablemente limpios. Juzgaban que el triunfo de Perón representaba el triunfo de la constelación del 4 de junio de 1943 y daba legalidad a un proyecto que no había dejado de ser el de la reforma fascista de la sociedad argentina. La resistencia, aunque dentro de un nuevo escenario, no podía, por lo tanto, sino continuar.

El antagonismo que había cristalizado en 1945 no se alteró, pues, tras las elecciones de 1946 y, en sus términos básicos, no se alteraría en los nueve años siguientes. Durante esos años el peronismo fue, para hablar el lenguaje de Tocqueville, la pasión dominante, tanto para sus partidarios como para sus opositores. Si el gobierno se consideraba portador de una nueva legitimidad, una legitimidad revolucionaria consagrada por el veredicto popular, para el arco antiperonista el voto —obtenido con engaños y una demagogia apuntalada por la represión— había dado legalidad, pero no legitimidad, a un desig-

nio que era y seguiría siendo totalitario y, por ello, fundamentalmente ilegítimo. Aunque la esperanza de que la supremacía electoral del peronismo fuera un hecho transitorio no tardó en disiparse, la oposición sistemática continuó, a cargo de partidos que aparecían cada vez más débiles pero nada dispuestos a aceptar que el orden justicialista se consolidara. La vocación dominadora del peronismo, que apenas se tomaba respiros y se mostraba siempre propenso a volver por más, ampliando el aparato oficial de propaganda, acosando a la prensa que no tenía bajo control y encontrando periódicamente motivos para detener a dirigentes opositores o clausurar las publicaciones adversas, tenía así su réplica en una oposición que no daba tregua, aunque no contara con los medios de su antagonista.

¿Había algún camino para salir del atolladero, es decir, para controlar y gobernar la hostilidad política, evitando un desenlace que no fuera el de la fuerza? Los signos de preocupación por hallar reglas de convivencia cívica aparecieron y se eclipsaron una y otra vez desde 1952. Pero, si había algún camino, los protagonistas no sabrían encontrarlo.

Ciertamente, los partidos antiperonistas no atravesaron los años que van de 1946 a 1955 como unidades monolíticas. La aparición y el desarrollo del peronismo no sólo les restó votos, fuerzas y aun dirigentes de segundo rango, sino que provocó brechas y disidencias en su interior. En el seno del radicalismo, la cuestión de las formas de practicar la lucha contra el gobierno terminó por darle nuevo alimento a viejas disputas entre fracciones y caudillos. A partir de 1953 dividió las filas del Movimiento de Intransigencia y Renovación, la tendencia que gobernaba el partido desde 1948, en dos líneas: la de los partidarios del jefe político cordobés Amadeo Sabattini, que se había aproximado a las posiciones de la minoría unionista y apoyaba la táctica de la abstención, o sea, la de abandonar las bancas en las legislaturas y en los Concejos Deliberantes y no participar de las elecciones, denunciando la falta de libertades públicas y el socavamiento del régimen republicano; y la línea que se autodenominaba "combatiente" y proponía la disputa en todos los frentes, que era contraria al abandono de todo foro, reclamando que la lucha por la libertad política no confundiera a los radicales con el antiperonismo conservador.

Los conservadores, por su parte, conocerían divisiones aná-

logas a las del radicalismo, superpuestas también a disputas por la dirección del agrupamiento. Fue en las filas del Partido Demócrata donde Perón halló mejor predisposición toda vez que buscó interlocutores para explorar alguna fórmula de coexistencia política. Pero las reacciones contrarias a esos pasos de negociación no tardaban en llegar. Cuando en marzo de 1952 Reynaldo Pastor, presidente del comité nacional, comunicó al partido que había tenido una entrevista reservada con Perón, la noticia encendió entre los conservadores una "enconada polémica, manifestada en cartas, declaraciones y discursos apasionados". La táctica de abandonar las bancas y todo cargo público se plantea desde entonces una y otra vez, pero nunca se la termina de adoptar y la resistencia contra esa táctica tiene su principal base en el conservadurismo bonaerense. En 1954, ante las elecciones convocadas para cubrir el cargo de vicepresidente de la Nación, vacante por la muerte de Hortensio Quijano, el Partido Demócrata se dividió entre "abstencionistas" y "concurrencistas", abriendo en el agrupamiento una crisis de la que no saldría antes del derrocamiento del gobierno peronista.

Los socialistas y los comunistas conocieron otro tipo de disyuntivas y crisis, asociadas no ya a las formas de luchar o a las de normalizar una situación juzgada anormal, sino a la definición del peronismo como régimen y como movimiento y, de allí, a la táctica que correspondía adoptar frente a él. Partidos que se consideraban representantes de la clase obrera no podían observar impasibles el hecho de que la mayoría de la clase obrera no sólo había votado por Perón, sino que se había vuelto peronista. Desde 1946 ese hecho se verificaba periódicamente en las pruebas electorales. Los sindicatos industriales habían pasado a ser organizaciones poderosas y sus columnas tenían una presencia dominante en los actos de masas, se tratara de las concentraciones rituales de la Fiesta del Trabajo, el día 1° de mayo, y del 17 de octubre, el Día de la Lealtad, o de los mítines convocados para celebrar y revalidar iniciativas del gobierno. Ahora bien, ¿qué significado darles a esas evidencias? Los gremios habían dejado de ser asociaciones civiles de trabajadores y no eran autónomos, es verdad, y lo serían cada vez menos (desde 1950 la Confederación General del Trabajo era una rama del movimiento peronista). ¿Pero no era una rea-

lidad que los trabajadores habían adquirido, bajo Perón, un nuevo poder y que la relación de fuerzas entre las clases se había alterado? ¿Qué registro dar al hecho de que la justicia social, una de las banderas del peronismo, no había sido un eslogan vacío, pues la situación de los trabajadores había mejorado sustantivamente?

"¿Perón es progresista o retrógrado?". Ésta fue la pregunta que presidió el discurso de Américo Ghioldi en el XXXVII Congreso del Partido Socialista, celebrado en 1950. La pregunta podía parecer puramente retórica en labios de Ghioldi y en una alocución aplicada a demostrar que se estaba frente a un experimento reaccionario. Pero había algo más, pues la réplica tenía como destinatarios a aquellos que, en las filas del socialismo, reclamaban un nuevo programa, más radical, capaz de devolver al PS su papel de partido de clase. Para Julio V. González, que había dado forma en un artículo a esta posición, el partido se hallaba en un punto muerto. El PS había hecho una contribución histórica al mejoramiento de la condición obrera bajo el orden capitalista, decía, y se había desangrado en la lucha por la democracia, bregando por la civilización de los hábitos políticos argentinos. Pero en esa brega fue perdiendo su especificidad socialista. El programa mínimo, al que sigue aferrado, ya no lo distingue de los otros partidos pues éstos lo han hecho suyo. Más aún, bajo el "régimen imperante", como denomina González al peronismo, no es mucho lo que "quedaría por conceder al obrero en punto a ventajas de vida y de trabajo", sin alterar su condición de asalariado del capital. Para salir del punto muerto, en suma, el PS debía adoptar el programa máximo, anticapitalista, del socialismo.

La tesis de Julio V. González no brillaba por su consistencia y él no era vocero de ninguna corriente, aun minoritaria. Pero no estaba solo en el inconformismo al que había dado forma a través de dos herejías: cuestionaba la mutación del socialismo en un partido liberal-democrático y registraba las mejoras efectivas que el peronismo había acarreado a los asalariados. El hecho de que el ideólogo más autorizado del socialismo se creyera obligado a replicar largamente al planteo de González, indica que las inquietudes y los interrogantes se habían alojado en las filas del PS. En el congreso, Ghioldi batió ampliamente a los críticos, pero las dudas respecto de la línea oficial, sobre

todo entre los afiliados más jóvenes, ya no desaparecerían. Ese mismo año, 1950, Ghioldi dictó en un Centro Socialista un ciclo de tres conferencias que editó después en forma de libro con el título de *Marxismo, socialismo, izquierdismo, comunismo y la realidad argentina de hoy*. En la nota preliminar, el autor dedicó el volumen a la masa anónima de trabajadores y ciudadanos que habían rodeado la tribuna de sus conferencias y "a los jóvenes estudiosos que buscan dramáticamente un camino y desean discernir entre socialismo democrático, comunismo y las vagarosas interpretaciones del izquierdismo".

Por cierto, la disidencia que llevó a un representante de la vieja guardia socialista, Enrique Dickmann, expulsado por haberse entrevistado con Perón, a dar respaldo al efímero Partido Socialista de la Revolución Nacional en 1953 no podría atribuirse sino parcialmente a ese malestar. Más que el apoyo de Dickmann, quien desempeñaría el papel de busto viviente, y el desasosiego partidario —al que también dio cierto cauce—, en la breve vida del PSRN contó más el patrocinio del gobierno y el activismo de círculos trotskistas que buscaban un vehículo político para el "frente único" con los obreros peronistas.

El Partido Comunista tampoco escaparía a los movimientos sísmicos que produjo el triunfo de Perón. Mucho más rígido en términos ideológicos que el PS, al mismo tiempo estaba más habituado a los virajes políticos y a los cambios de frente, de aliados y de enemigos. En poco tiempo desterró del lenguaje de sus documentos y publicaciones la expresión "nazi-peronismo", reconoció la legalidad del gobierno surgido de las elecciones y redefinió el agrupamiento de fuerzas que llamaba a organizar para llevar a cabo las transformaciones económicas y políticas que requería la Argentina. La consigna de la Unión Democrática fue reemplazada por la del Frente de Liberación Nacional. "Todos los argentinos nativos y habitantes de este país —declaró el principal dirigente del partido, Victorio Codovilla, el 1° de junio de 1946— que estén de acuerdo con un programa de justicia social y de prosperidad nacional, sean ellos miembros de los partidos que votaron por la Unión Democrática, sean adherentes de los partidos que apoyaron la candidatura del presidente electo, deben unirse en un poderoso Frente de Liberación Nacional y Social del pueblo argentino."

Apenas dos meses después un congreso partidario daba san-

ción a la nueva línea táctica, que abandonaba los esquemas del antifascismo empleados hasta entonces y redefinía el carácter de las fuerzas en presencia y los objetivos de la hora. En el nuevo cuadro, no se precisaba la identidad del flamante gobierno —el triunfo de Perón era producto de una conjunción social y política heterogénea— y los elementos antagónicos ya no se distribuían, como hasta las elecciones de seis meses atrás, en los campos opuestos de la coalición peronista y la Unión Democrática. Ahora, los que aspiraban al cambio económico y social que el PC llamaba "revolución agraria y antiimperialista" aparecían por igual en las filas del oficialismo como en las de la oposición. Otro tanto ocurría con los sectores designados como reaccionarios y pro imperialistas, repartidos entre peronistas y antiperonistas. Vaticinando que el nuevo gobierno estaría sometido a la doble presión que engendraría el antagonismo que atravesaba el campo del oficialismo y de la oposición, los comunistas se comprometían a apoyar las medidas positivas del gobierno, criticarían las negativas, e impulsarían un alineamiento de fuerzas que reordenara lo que se había distribuido mal —social y políticamente— en los comicios de 1946. Este giro táctico iba acompañado de la creencia, común desde entonces a los partidos de izquierda, de que entre la base obrera y popular del peronismo y su núcleo dirigente había una contradicción que tarde o temprano terminaría por expresarse.

El cambio no tenía únicamente el propósito de dar al PC una nueva colocación en el escenario surgido de los comicios. También salía al paso de las demandas de discusión, rectificaciones y autocrítica que la inesperada derrota había hecho surgir en las filas del partido. ¿No sería el nuevo gobierno la expresión de la burguesía nacional, esa clase siempre invocada en los documentos y cuya alianza era necesario buscar? Contra las prescripciones del marxismo-leninismo, ¿no se habían valorado más las formas (políticas) que los contenidos (sociales) al definir en 1945 los términos de la dicotomía? Si se habían cometido errores, ¿cuál era su origen? El grupo dirigente, que no ignoraba que era su autoridad política la que estaba en juego, consideró que las definiciones adoptadas en el congreso partidario daban respuesta a inquietudes legítimas y terminó expulsando a las secciones y afiliados que pretendían continuar la deliberación, entre ellos a quien era por entonces el in-

telectual más reputado del partido, Rodolfo Puiggrós. Cinco años después, fue nuevamente la caracterización del peronismo y la táctica correspondiente lo que trajo otra crisis, de desarrollo más brumoso, y que concluyó también con expulsiones. El principal exonerado fue esta vez Juan José Real, la segunda figura del Partido Comunista. Para entonces ya había pasado el breve período táctico de apoyar lo positivo y criticar lo negativo y los comunistas habían retomado el tema del fascismo: Perón, a partir de la Constitución de 1949, había implantado un régimen de tipo corporativo fascista.

A lo largo de los nueve años que van de 1946 a 1955, que trastornaron tan profundamente los datos de la vida pública argentina, los partidos antiperonistas asistieron a la merma de sus fuerzas y conocieron crisis y divisiones en torno de la táctica con que debían enfrentar al régimen peronista, pero en lo relativo al pensamiento político propiamente dicho la mayoría de esos partidos mantuvo las convicciones del comienzo. El cambio más notable se manifestó en la certidumbre, generalizada sobre todo en los llamados partidos progresistas, de que ningún orden posperonista podría edificarse sin contar con ese actor que Perón había activado, las masas. En un artículo de 1951 ("Indicaciones sobre la situación de las masas en Argentina"), el historiador José Luis Romero, miembro por entonces del Partido Socialista, daba cuenta de esta percepción extendida respecto de la realidad que había hecho emerger el peronismo: "El proceso político es, entre todos, el menos importante y lo fundamental es todo lo que se oculta detrás de él en el pla-





Propaganda oficial.

no económico y social, especialmente en relación con la situación de las masas, porque esa situación puede crear condiciones forzosas en el futuro". En otras palabras, el peronismo era antes que nada un fenómeno político; su visibilidad inmediata no debía ofuscar la lectura de lo que se agitaba bajo su superficie, el proceso social de las masas. Esta realidad más profunda, advertía Romero, tornaba ilusoria toda política que pretendiera retrotraer la situación de los trabajadores a diez o veinte años atrás. "Prácticamente lo han reconocido así los partidos progresistas que parten ya de esta nueva realidad para tratar de atraer o reconquistar partidarios". Lo que no aparecía en el horizonte de los partidos progresistas, que habían tomado nota de la nueva realidad, era la posibilidad de que el peronismo no resultara un hecho transitorio, sino una identidad política duradera.

El cambio de orden general más importante se registró en el radicalismo, que por primera vez hizo suya una plataforma que tomaría el nombre de "Programa de Avellaneda". No se podría decir que esa innovación fuera una respuesta a la situación creada por el advenimiento del peronismo, aunque tampoco se la podría desconectar del sacudimiento que en las filas de la UCR provocó la derrota de febrero de 1946. Pero el viento ideológico renovador vino también de afuera, de la inflexión de izquierda que tomó la política en varios países europeos en los primeros años de la posguerra. El credo de la Intransigencia, la fracción que terminaría por quedarse con la dirección del partido, conjugó así elementos que procedían del nebuloso humanitarismo espiritualista de Yrigoyen, del antiimperialismo de inspiración aprista, que desde los años treinta habían hallado eco en las filas juveniles del radicalismo, y del socialismo laborista.

El legendario documento fundador del Movimiento de Intransigencia y Renovación, la llamada "Declaración de Avellaneda", se aprobó en abril de 1945, en una asamblea de radicales intransigentes. Había sido redactada por Arturo Frondizi (solo o en colaboración: las versiones difieren), por entonces un político joven con fama de doctrinario. La preocupación central de los asambleístas no era entonces Perón ni el jaqueado régimen militar, sino la mayoría antipersonalista y su posición en favor de la alianza con otras fuerzas políticas en la

Unión Democrática (de ahí la denominación de "unionistas"). El acuerdo, más aún si en él tomaban parte los conservadores, significaba a los ojos de los antiunionistas una desnaturalización de la misión del radicalismo, el "pueblo radical" de cuya mayoría no dudaban los grupos intransigentes, como no dudaba, en verdad, ninguna fracción de la UCR.

De todos los documentos que formarán el "credo" intransigente, ese texto es el más despojado de la retórica de filiación yrigoyenista. Incluso la oposición al acuerdo con otras fuerzas políticas en la Unión Democrática está expuesta en los términos de un partido que se considera uno entre otros, no el movimiento que encarna la nación. En cuanto a los postulados, gran parte de ellos eran ya familiares en la literatura intransigente y en las declaraciones de la juventud radical de los años treinta, como el objetivo de la "liberación del hombre argentino y la Nación argentina", la consigna de que la "tierra será para los que la trabajen" y la de nacionalización de las fuentes de energía y los servicios públicos. Elementos más novedosos aparecían en la referencia, aunque apenas alusiva, a un "plan para el progreso social" que articularía acción estatal e iniciativa privada, y en la mayor especificación de la política social. De todos modos, el papel político indiscutido del texto compuesto por Frondizi es que le dio definición —o su primera forma, si se quiere— a una ideología de izquierda, de estructura laxa, izquierda democrática, nacionalista, socializante, que desde entonces existirá como un cauce, a veces amplio, a veces más estrecho, en las filas del partido radical.

El triunfo de la coalición peronista creó las condiciones para la ofensiva de los intransigentes, que ahora podían endosar a sus adversarios —los unionistas que habían promovido la participación en la Unión Democrática— no sólo el abandono de los principios del radicalismo, sino la pérdida de una mayoría que se tenía por descontada. Más aún: podían sostener que esa mayoría sólo sería recuperada si se recuperaba el sentido de "lo radical", esencia que se actualizaba y renovaba en la Intransigencia. La derrota y la oportunidad de la embestida dieron como resultado la renuncia del Comité Nacional, cuyas funciones pasaron a manos de una transitoria Junta Ejecutiva Nacional, en la que estaban representadas por partes iguales las dos fracciones, si bien la presidencia quedaba en manos de un unionista.

El 18 de diciembre de 1946 los tres integrantes intransigentes de la Junta Ejecutiva, Arturo Frondizi, Crisólogo Larralde y Antonio Sobral, dieron a conocer un manifiesto político. Aunque inseparable de ese momento de la lucha entre intransigentes y unionistas, la declaración contenía, al mismo tiempo, elementos que habrían de revelarse menos circunstanciales para la historia posterior de la UCR. Toda la primera parte del manifiesto, por ejemplo, animada por el propósito de definir la identidad radical y la misión que este partido tenía asignada en la vida de la república, anticipaba la orientación de la *Profesión de fe doctrinaria*, uno de los documentos que aprobaría en agosto de 1947 el primer congreso de la Intransigencia. En efecto, en el manifiesto de "los tres", como se lo conocería, al igual que más tarde en la *Profesión de fe...*, reaparecerán algunos de los temas del yrigoyenismo —el radicalismo no es un partido más, ni siquiera propiamente un partido— entrecruzados con el mensaje antiimperialista, la reivindicación de un linaje federal, nacional y popular, el espiritualismo antipositivista (es decir, finisecular) y el regeneracionismo cívico. O sea, la conjunción de elementos de diversa procedencia que habían ido depositándose en el cauce del radicalismo intransigente. Comparado con la declaración de Avellaneda, redactada por Frondizi, el documento que firmaban "los tres" era ideológicamente un texto más vario y mezclado y, por eso, seguramente más fiel a la cultura política del radicalismo.

Pero el manifiesto de 1946 no era sólo un documento doctrinario; anticipaba también otras cosas. Entre éstas, la cuestión de la actitud política respecto del gobierno peronista, cuestión que años después dividiría las filas de los propios intransigentes. El texto explicaba la nueva situación política por la larga crisis que sufría el país, indisociable de la crisis de un radicalismo que había perdido su rumbo revolucionario. Por este extravío de la tradición una parte de los votos radicales habían sido atraídos por Perón. No obstante, aunque la declaración era extremadamente crítica respecto del nuevo oficialismo, alertaba contra la tentación que veía surgir en el propio partido: hacer de la UCR un mero recolector de votos opositores, convirtiéndola de hecho "en fuerza de choque del régimen conservador o de intereses extranjeros". El deber del radicalismo era recuperar su auténtica tradición y mostrar que era la

única fuerza capaz de encauzar la nación y de dar cumplimiento a la justicia social.

En agosto de 1947, también en la ciudad de Avellaneda, se celebró el Primer Congreso de la Intransigencia, ocasión en que se aprobó la ya mencionada *Profesión de fe doctrinaria*, redactada por Gabriel del Mazo, y las *Bases de acción política*, cuya elaboración como en el caso de la anterior contó con el concurso de Frondizi. Este otro documento del credo intransigente, no menos invocado, llevado y traído que el anterior en el curso de la historia sucesiva, exponía las líneas de un programa avanzado de reformas políticas, económicas y sociales que revelaban la intención de oponerse y superar al peronismo por la izquierda, batalla que en realidad había comenzado apenas se iniciaron las sesiones en la Cámara de Diputados y que no fue librada únicamente por los radicales intransigentes. Menos de un año después, en junio de 1948, como reflejo de que los intransigentes han ganado al fin la mayoría en el partido, estos dos documentos van a ser aprobados por la Convención Nacional de la UCR. La circunstancia de que el principal partido de la oposición adoptara un programa con muchas definiciones afines a las que propagaba el gobierno peronista en sus primeros años —nacionalismo económico, intervencionismo estatal, industrialismo, justicia social— no reduciría el enfrentamiento entre ambos. De hecho, ante la modalidad que adquirió el juego político bajo Perón y el alineamiento de las fuerzas sociales, el radicalismo asumió más que el papel de partido de centroizquierda que indicaban sus documentos programáticos, el de partido liberal-democrático enfrentado a un régimen popular y autoritario, pero de difícil clasificación dentro del esquema convencional de derecha/izquierda.

Las divergencias en torno de la táctica opositora, entrelazadas con la disputa por la hegemonía entre sus dos bastiones principales —la provincia de Buenos Aires y Córdoba— dividieron en 1953 las filas del Movimiento de Intransigencia y Renovación. A la hora de designar una nueva conducción para el partido, la mayoría intransigente se agrupó alrededor de Arturo Frondizi, cuyo desempeño en la Cámara de Diputados le había dado nuevo brillo político a su reputación de hombre de doctrina. Elegido presidente del Comité Nacional a comienzos de 1954, Frondizi publicó ese mismo año *Petróleo y política*,

el libro que reforzaría su fama de político intelectual y de líder antiimperialista.

Había sido Perón quien puso la cuestión del petróleo en el debate desde que anunciara el 1° de mayo de 1954, en el men-

Congreso del movimiento de Intransigencia y Renovación
***Profesión de fe doctrinaria*, 11 y 12 de agosto de 1947**

"El Radicalismo es la corriente histórica de la emancipación del pueblo argentino, de la auténtica realización de su vida plena en el cultivo de sus bienes morales y en la profesión de los grandes ideales surgidos de su entraña. Hunde sus raíces políticas en lo histórico de la nacionalidad y constituye una requisitoria contra toda filosofía material de la vida humana y del destino de la Nación en el mundo. Así el Radicalismo se identifica con las más nobles aspiraciones de los pueblos hermanos y lo argentino se articula y adquiere sentido esencial en la lucha emancipadora sudamericana y en el anhelo universal por la libertad del hombre.

Desde el fondo de nuestra historia, trae el Radicalismo su filiación, que es la del pueblo en su larga lucha para conquistar su personería. En la tradicional contienda que nutre la historia argentina, el Radicalismo es la corriente orgánica y social de lo popular, del federalismo y de la libertad, apegada al suelo e intérprete de nuestra autenticidad emocional y humana, reivindicatoria de las bases morales de la nacionalidad: es el pueblo mismo en su gesta para constituirse como Nación dueña de su patrimonio y de su espíritu.

Por lo tanto, la Unión Cívica Radical no es un simple partido, no es una parcialidad que lucha en su beneficio, ni una composición de lugar para tomar asiento en los gobiernos, sino el mandato patriótico de nuestra nativa solidaridad nacional, y la intransigencia con que debe ser cumplido, el sentimiento radical indeclinable de la dignidad cívica argentina.

Ésa es la razón por la que el Radicalismo es una concepción de vida, de la vida toda del pueblo: y la revolución radical al plantearse partiendo del hombre y de su libertad hace de la política una creación ética, indivisible en lo nacional e internacional, que abarca todos los aspectos que al hombre se refieren, desde el religioso hasta el económico. [...]"

Gabriel del Mazo. *El Radicalismo. El Movimiento de Intransigencia y Renovación (1945-1957)*, Gure, Buenos Aires, 1957.

saje tradicional al Congreso, que se estaban tramitando convenios con firmas foráneas para la extracción del combustible. La oposición no desaprovecharía la oportunidad de colocar al peronismo en contradicción con sus propias posiciones doctrinarias, y al repertorio de consignas relativas a las libertades públicas y al orden político, se añadió la de defender el petróleo contra la entrega que estaba a punto de consumarse. Así, al mismo tiempo que el gobierno peronista se aplicaba a desandar cada vez más aceleradamente el camino del nacionalismo económico y buscaba atraer las inversiones extranjeras, bajo la dirección de Frondizi el pensamiento de la Unión Cívica Radical parecía curvarse resueltamente hacia el nacionalismo de izquierda.

Más allá de las opiniones encontradas que el debate cívico dejó ver, a lo largo de doce años, tanto respecto de los cambios que sobrevinieron en el curso de los acontecimientos que llevaron al 17 de octubre de 1945 como sobre la naturaleza del régimen que surgió del triunfo electoral del peronismo en 1946, lo que los peronistas y la mayor parte de sus críticos y opositores compartirán será el juicio de que con Perón —salvador o demagogo— había llegado la hora de las masas trabajadoras: en adelante ya no se podría gobernar ignorándolas. Esta representación del proceso peronista seguirá imperando después de 1955, incluso en las interpretaciones sociológicas y en las historias políticas del período. La convergencia de algunos títulos son elocuentes en este sentido: el del primer ensayo de Gino Germani sobre el peronismo, "La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo" (1956); el del capítulo que José Luis Romero le consagró a la etapa peronista, "La república de masas", en su *Breve historia de la Argentina*; en fin, el del volumen final de la historia argentina publicada por la editorial Paidós, *La democracia de masas* (1973), de Tulio Halperín Donghi. Lo que después de 1955 dividirá a los antiperonistas, a veces violentamente, será la cuestión de cómo integrar esa nueva realidad colectiva, sin mantener vigente el peronismo.

BIBLIOGRAFÍA

Amadeo, Mario: *Ayer, hoy y mañana*, Gure, Buenos Aires, 1956.

Buchrucker, Cristian: *Nacionalismo y peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial (1927-1955)*, Sudamericana, Buenos Aires, 1987.

Codovilla, Victorio: *Sobre el peronismo y la situación política argentina*, Anteo, Buenos Aires, 1945.

De Imaz, José Luis: *Promediados los 40*, Sudamericana, Buenos Aires, 1977.

Del Carril, Bonifacio: *Memorias dispersas. El coronel Perón*, Emecé, Buenos Aires, 1985.

García Mellid, Atilio: *Montoneras y caudillos en la historia argentina*, Recuperación Nacional, Buenos Aires, 1946.

Germani, Gino: "La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo" (1956), en: *Política y sociedad en una época de transición*, Paidós, Buenos Aires, 1962.

Ghioldi, Américo: *Palabras a la nación*, Editorial La Vanguardia, Buenos Aires, 1945.

———: *Alpargatas y libros en la historia argentina*, s/e, Buenos Aires, 1946.

———: *El socialismo y la actual crisis argentina*, Partido Socialista, Buenos Aires, 1948.

———: *Los trabajadores, el Señor Perón y el Partido Socialista. ¿Perón es progresista o retrógrado?*, Editorial La Vanguardia, Buenos Aires, 1950.

———: *Marxismo, socialismo, izquierdismo, comunismo y la realidad argentina de hoy*, Ediciones Populares Argentinas, Buenos Aires, 1950.

Halperín Donghi, Tulio: *La democracia de masas*, Paidós, Buenos Aires, 1973.

Hardoy, Emilio J.: *Historia de las fuerzas políticas conservadoras en la Argentina*, Fundación Argentina, Buenos Aires, 1993.

Ibarra, Pablo: "Del XI al XII Congresos del Partido Comunista. Contribución a la historia del Partido Comunista", en: *¿Qué hacer?*, Año I, N° 2, marzo-abril de 1964.

Irazusta, Rodolfo: *Artículos y discursos. Un homenaje a su memoria*, Ediciones Ateneo Rodolfo Irazusta, Buenos Aires, 1968.

James, Daniel: *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, Sudamericana, Buenos Aires, 1990.

Luna, Félix: *Perón y su tiempo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1992, t. II y III.

Navarro Gerassi, Marysa: *Los nacionalistas*, Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1968.

Perón, Juan D.: *El pueblo quiere saber de qué se trata*, s/e, Buenos Aires, 1944.

———: *El pueblo ya sabe de qué se trata*, s/e, Buenos Aires, s/f (probablemente 1946).

———: *Conducción política* (1951), Freeland, Buenos Aires, 1971.

———: *Doctrina peronista*, Ediciones Macacha Güemes, Buenos Aires, 1973.

———: *Doctrina revolucionaria*, Freeland, Buenos Aires, 1973.

———: *Yo, Juan Domingo Perón. Relato autobiográfico*, Planeta, Barcelona, 1976.

Plotkin, Mariano: *Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista*, Ariel Historia Argentina, Buenos Aires, 1994.

Potash, Robert A.: *El Ejército y la política en la Argentina (II). 1945-1962. De Perón a Frondizi* (1981), Hyspamérica, Buenos Aires, 1986.

Potash, Robert A. (comp.): *Perón y el GOU. Los documentos de una logia secreta* (Introducción y comentarios de Robert A. Potash), Sudamericana, Buenos Aires, 1984.

Quattrocchi-Woisson, Diana: *Los males de la memoria. Historia y política en la Argentina*, Emecé, Buenos Aires, 1995.

Romero, José Luis: "Indicaciones sobre la situación de las masas en Argentina", en: *Argentina: imágenes y perspectivas*, Raigal, Buenos Aires, 1956.

———: *Breve historia de la Argentina*, EUDEBA, Buenos Aires, 1965.

Sampay, Arturo Enrique: *Las Constituciones argentinas (1810-1972)*, EUDEBA, Buenos Aires, 1975.

Tarkus, Horacio: *El marxismo olvidado: Silvio Frondizi y Milcíades Peña*, El Cielo por Asalto, Buenos Aires, 1996.

Torre, Juan Carlos: *La vieja guardia sindical y Perón*, Sudamericana, Buenos Aires, 1990.

Zanatta, Loris: *Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo. 1930-1943*, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1996.



V



La democratización del bienestar*

por JUAN CARLOS TORRE y ELISA PASTORIZA

* Agradecemos la valiosa colaboración de Hernán Lerena en la realización de este capítulo.



l presidente Perón y el ministro de Salud Pública Ramón Carrillo (el primero desde
derecha) en una visita oficial.



Al contemplar las multitudes que ocuparon las calles de Buenos Aires el 3 de julio de 1933 para despedir los restos del ex presidente Hipólito Yrigoyen, el escritor nacionalista Federico Ibarguren formuló un sombrío vaticinio, recogido en su libro *Breviario político*:

"El entierro de Yrigoyen llevado a cabo ayer me ha sugerido las siguientes reflexiones personales. Fue un lúgubre candombe, extraordinariamente pintoresco a los ojos del observador. Orgía de instintos, desde la superstición inverosímil hasta el fanatismo de todo calibre. Tropa desatada de primitivos, turba sin origen. Parecía como si el espectáculo de la muerte para aquella comparsa fuera una fiesta dionisiaca y ancestral [...] Lo que se puede decir con certeza, después de ver el espectáculo de la turbamulta suelta en el entierro de Yrigoyen, es que para el país se acerca, sin duda alguna, la hora de las masas".

Cuando el 17 de octubre de 1945 la hora de las masas finalmente llegó de la mano

de otro caudillo popular, la sorpresa primero y la condena después dominaron la actitud del mundo político porteño. La crónica de la movilización peronista se detuvo sobre detalles que comportaban una ruptura respecto de lo que cabía esperar de una manifestación obrera; tal fue el caso de *La Capital*, del 18 de octubre:

> "La mayoría del público que desfiló en las más diversas columnas por las calles lo hacía en mangas de camisa. Viose a hombres vestidos de gauchos y a mujeres de paisanas [...] muchachos que transformaban las avenidas y plazas en pistas de patinaje, y hombres y mujeres vestidos estrafalariamente, portando retratos de Perón, con flores y escarapelas prendidas en sus ropas y afiches y carteles. Hombres a caballo y jóvenes en bicicleta, ostentando vestimentas chillonas, cantaban estribillos y prorrumpían en gritos".

Todo en esta descripción, por lo demás bastante generalizada, apuntaba a resaltar cuánto tenía de inesperado y a la vez de transgresor la multitud del 17 de octubre. En lugar de marchar encolumnados, entonando los tradicionales himnos de clase y siguiendo las reglas tácitas del decoro proletario, los hombres y mujeres que venían de los suburbios avanzaban sobre la Plaza de Mayo en medio de una atmósfera festiva y carnavalesca. Para *La Vanguardia*, el periódico del Partido Socialista, éstos no podían ser auténticos obreros:

> "Los obreros, tal como siempre se ha definido a nuestros hombres de trabajo, aquellos que desde hace años han sostenido y sostienen sus organizaciones gremiales y sus luchas contra el capital; los que sienten la dignidad de las funciones que cumplen y, a tono con ellas, en sus distintas ideologías, como ciudadanos trabajan por el mejoramiento de las condiciones sociales y políticas del país, no estaban allí".

Según este periódico, era inconcebible que esa clase obrera diera el espectáculo de "una horda, de una mascarada, de una balumba, que a veces degeneraba en murga". Y terminaba preguntándose: "¿Qué obrero argentino actúa en una manifestación en demanda de sus derechos como lo haría en un desfile

de carnaval?". Respondiendo a esta pregunta retórica los comunistas, por su parte, se apresuraron a decretar desde las páginas de *Orientación* que "los pequeños clanes con aspecto de murga que recorrieron ayer las calles de la ciudad no representaban a ninguna clase de la sociedad argentina".

Como los socialistas y los comunistas, en la jornada de octubre muchos más buscaron refugio en los viejos reflejos cívicos a fin de exorcizar a los nuevos demonios populares que había entrevisto Federico Ibarguren en el entierro de Yrigoyen y que ahora venían a tomar posesión de Buenos Aires, interrumpiendo las grandes comuniones políticas porteñas. Los mítines por la Guerra Civil Española, los festejos de la liberación de París, por fin, la Marcha por la Constitución y la Libertad, cada uno a su turno, habían hecho vibrar a la ciudad y consagrado la soberanía de los partidos y las clases medias sobre sus calles. De pronto, ese espacio político cedía y por sus grietas asomaba, tumultuoso, el perfil de otra Argentina. Sobre el telón de fondo de este descubrimiento, inesperado y también traumático, comenzaría entonces la compleja reacomodación de la sociedad existente a las nuevas realidades sociales de un país hondamente transformado.

Durante los quince años previos la estructura económica y social había experimentado, en efecto, importantes y continuos cambios debido a las consecuencias de la depresión mundial de 1929, en primer lugar, y del estallido de la Segunda Guerra, más tarde. El cierre de los mercados europeos y la depreciación de las exportaciones agropecuarias argentinas en los primeros años de la década del treinta forzaron a la elite conservadora en el poder a adoptar una serie de medidas de emergencia. Concebidas con el fin de preservar los rasgos básicos del orden económico amenazado, sus consecuencias contribuyeron, sin embargo, a alterarlo profundamente. Así, el control de cambios establecido para velar por el equilibrio de la balanza de pagos creó incentivos para la producción local de manufacturas. Un número significativo de empresas extranjeras que abastecían el mercado nacional reaccionó rápidamente y se instaló en el país, poniéndose al abrigo de las barreras proteccionistas indirectas levantadas por los gobiernos. Sumadas al parque industrial preexistente, las nuevas inversiones expandieron aceleradamente la oferta interna de manufac-

turas. Luego, la guerra, al dislocar el comercio internacional, acentuó todavía más las medidas defensivas que dirigían naturalmente el crecimiento del país hacia el mercado interno. Nuevos capitales de origen nacional afluyeron a la industria. Al final del conflicto bélico un vasto espectro de fábricas y talleres manufactureros rodeaba el cinturón de Buenos Aires, el epicentro del cambio económico.

Paralelamente al crecimiento industrial se produjo un importante reordenamiento de la población en el territorio nacional, que se tradujo en una mayor urbanización. Aquí operó tanto la expulsión de pobladores de las zonas agrícolas en dificultades como, sobre todo, la atracción ejercida por las nuevas oportunidades de empleo que surgían en las industrias y en las actividades de servicios de las ciudades. A diferencia de lo que ocurriera en el pasado, la satisfacción de esta demanda de trabajo no pudo asegurarse por medio de la inmigración extranjera, porque ésta había prácticamente cesado hacia 1930. Su lugar fue ocupado por grandes masas del interior del país que migraron a los centros urbanos, en especial a Buenos Aires y su periferia. El área metropolitana se llenó de provincianos. Su número empezó a aumentar vertiginosamente a mediados de los años treinta y mucho más a partir de 1940. Los 8.000 provincianos que recibía anualmente hasta 1936 pasaron a un promedio de 70.000 entre 1937 y 1943 y ascendieron hasta 117.000 entre 1944 y 1947. En total, sumaron un millón de nuevos residentes a Buenos Aires y su cinturón urbano, que creció de los 3.457.000 habitantes de 1936 a los 4.618.000 registrados en 1947. Fue un éxodo en masa.

Visto en perspectiva, su impacto sobre Buenos Aires puso en marcha un proceso en cierto sentido comparable con el que dio a lugar la masiva inmigración extranjera medio siglo antes. De ambas experiencias la ciudad emergió transformada. Las características de esa transformación fueron, no obstante, bien diferentes en uno y otro caso. Para apreciar este contraste vamos a retroceder en el tiempo a fin de describir sumariamente la trayectoria del país y Buenos Aires.

Desde mediados del siglo XIX miles y miles de inmigrantes provenientes de Europa llegaron al país para aprovechar el ciclo expansivo que comenzaba gracias a su afortunada inserción en la economía mundial como productor de alimentos.

Había los que venían a radicarse y también los que, en menor número, viajaban anualmente para trabajar en las cosechas. Entre 1871 y 1914 arribaron alrededor de 5,9 millones, de los cuales 3,1 millones permanecieron y se establecieron. Con el aporte de los inmigrantes extranjeros la población total del país creció durante ese período cuatro veces y media, de los 1,7 millones contabilizados en el primer censo de 1869 se llegó a los 7,8 millones en 1914. A la luz de estas cifras, como lo destacara Gino Germani, la Argentina no fue ya una nación con una minoría de inmigrantes sino un país con una mayoría de extranjeros.

La singularidad de este fenómeno se advierte al ubicarlo con relación a los países de gran inmigración. La Argentina, después de los Estados Unidos, fue el país que más inmigrantes europeos recibió en términos absolutos. Pero los inmigrantes que llegaban aquí encontraban un país más vacío, tanto en lo concerniente a las instituciones estatales, todavía en formación, como respecto del número de habitantes. En lo que se refiere a este último aspecto, en los Estados Unidos la proporción de extranjeros sobre la población nativa estuvo entre 1870 y 1910 en torno del 14%. En la Argentina, en cambio, durante esos años, debido a la escasa población existente al momento de la inmigración masiva y al gran volumen de inmigrantes, la proporción de los nacidos en el extranjero fue muy superior y se ubicó entre el 25 y el 30%. Si en lugar de un promedio general se toma en cuenta que la inmigración ultramarina se concentró en las zonas centrales y estuvo compuesta mayoritariamente por varones en edad adulta, se advierte que aquí la intensidad del impacto inmigratorio fue todavía mayor. Entre 1890 y 1920 la proporción de extranjeros entre los varones de 20 y más años fue, en Buenos Aires, del 80%, y en las provincias del Litoral, entre el 50 y el 60%.

La experiencia argentina de entonces no consistió en la absorción de una masa extranjera que llegó a asimilarse, es decir, a parecerse a la población nativa; más bien lo que ocurrió fue la emergencia de una sociedad nueva, que se mantuvo por bastante tiempo separada de los sectores criollos tradicionales, en un estado de fluidez, mientras procesaba la adaptación a las condiciones de vida y de trabajo en un país envuelto, a su vez, en la construcción de un Estado moderno. Previsiblemente,

esa adaptación fue laboriosa al principio: muchos inmigrantes emprendieron el camino del regreso, otros hicieron de sus frustraciones el motor de la agitación anarquista, todos debieron sobrellevar los brotes de xenofobia que acompañaron la gestación de esa Argentina aluvional y cosmopolita. La prosperidad del país en la época facilitó luego las cosas y una mayoría de los recién llegados fue llenando las posiciones que la modernización económica abría sin cesar, en la industria, el comercio, los servicios, la agricultura, aportando los principales contingentes a las clases medias en formación y al naciente proletariado.

Con el paso del tiempo, hacia la década del veinte, ese mundo de extranjeros, replegado sobre sí mismo pero atravesado internamente por cortes étnicos o nacionales, entró en un acelerado proceso de disolución. Varias circunstancias se combinaron para ello. En primer lugar, por la presencia creciente de los hijos de los inmigrantes. Argentinos por nacimiento, quedaron expuestos a la misión nacionalizadora que se asignó a la escuela pública obligatoria y al servicio militar, lo que contribuyó a debilitar cualquier identificación con las patrias de sus padres. Por otra parte, los distintos resultados que alcanzaban unos y otros inmigrantes en la aventura del ascenso tendieron a disgregar las comunidades de origen, disminuyendo la gravitación de las asociaciones de colectividades, tan importantes a principios de siglo. Finalmente, también colaboraron los efectos del temprano desarrollo de la propaganda comercial, al promover la homogeneización de las costumbres y estilos de vida y crear un mercado de consumo más alerta a las novedades que a la preservación de las tradiciones.

En este contexto y teniendo por animadores centrales a los descendientes de los inmigrantes cobró forma una sociabilidad de nuevo tipo. Entre sus aspectos sobresalientes se destacaron unas relaciones sociales directas y frontales, desprovistas de las actitudes de respeto y deferencia tradicionales; la confianza en el progreso individual que coexistía, no obstante, con una difundida práctica asociativa; la fuerte valorización de la educación y la cultura letrada; una moralidad austera y liberal a la vez, que combinaba el control de la natalidad con las pautas convencionales de autoridad dentro de la familia. En sus rasgos generales, este conjunto de orientaciones y actitudes, cu-

yos ámbitos naturales de expresión los constituían los barrios, los clubes, las asociaciones, los espacios públicos donde convivían las anchas franjas de las clases medias y los sectores obreros más establecidos, fue, con todo, menos visible en ambos extremos de la pirámide social: hacia arriba, entre los miembros más tradicionales de la elite, y hacia abajo, en los estratos de la periferia popular. En términos geográficos, su vigencia caracterizó la vida social de los centros urbanos y las áreas rurales prósperas del Litoral, extendiéndose hasta Córdoba y Mendoza. En cambio, fue mucho más débil en las zonas del interior del país menos tocadas por la modernización económica.

Retomando ahora el argumento sobre el diferente impacto del período de la inmigración masiva respecto del de las migraciones internas arribamos a una constatación inicial. En primer lugar, partiendo de 1870 y después de sesenta años de inmigración casi ininterrumpida podría decirse que la sociedad argentina se hizo de nuevo y que ésa fue la obra de los propios migrantes y de sus descendientes. Por medio de la mezcla y la aculturación, al cabo de tensiones y conflictos, éstos crearon una sociabilidad original, densa y extendida, que típicamente se condensó en Buenos Aires. Las repercusiones del proceso puesto en marcha por la llegada de la población extranjera al país se observaron, así, principalmente en el plano social, donde además se verificó —como ha mostrado Hilda Sabato— una intensa participación que sirvió de vehículo a sus demandas hacia los poderes públicos. Entre tanto, los efectos de dicho proceso en el terreno político-electoral fueron casi nulos porque la gran mayoría de los inmigrantes optó por no adquirir la ciudadanía argentina. En consecuencia, durante los treinta a cuarenta años en los que del 60 al 80% de los varones adultos de las zonas más importantes del país no tenían derecho a votar, el desenlace de las elecciones quedó en manos de la restante minoría del 20 al 40%. Esta situación paradójica comenzó a revertirse gradualmente, con el ingreso a la vida política de los hijos de los inmigrantes. En síntesis, el impacto de la inmigración masiva se hizo sentir en la conformación de la sociedad mucho antes de que gravitara sobre las luchas por el poder político.

Al considerar, en segundo lugar, las transformaciones que

trajo consigo el período de las migraciones internas constatamos una trayectoria diferente. Breve había sido el tiempo transcurrido desde que abandonaron sus lugares de origen cuando el millón de provincianos que afluyó a Buenos Aires y sus suburbios entre 1936 y 1947 fue llamado a desempeñar un papel político protagónico. Su llegada coincidió con una crisis política y el surgimiento de un líder necesitado de apoyo popular, lo cual les abrió las puertas a una influencia temprana y decisiva en el terreno político-electoral. En cambio, puede afirmarse que no habrían de tener una influencia equivalente en el plano social. Los trabajadores rurales, los pequeños arrendatarios, los empleados y obreros de los pueblos del interior no encontraron a su arribo al área metropolitana un escenario comparable al que recibió a los inmigrantes europeos medio siglo antes. Esto es, un escenario relativamente vacío en términos de la población y las instituciones existentes. Por lo tanto, más que ante una sociedad toda por hacerse, se encontraron con una sociedad sustancialmente hecha, cuyos valores y estilos de vida, popularizados por las radios, los periódicos, las revistas, estaban además revestidos de un prestigio que la Argentina criolla tradicional nunca tuvo entre los inmigrantes europeos.

En estas circunstancias, y en contraste con la experiencia de la inmigración masiva, lo que se puso en movimiento fue un proceso de asimilación o incorporación de los recién llegados en la sociedad receptora. Ésta también habría de ser modificada por dicho proceso. No obstante, en el balance final retuvo buena parte de sus rasgos originales y continuó ofreciendo esquemas de ideas y modelos de comportamiento que contaron con una amplia aceptación social durante los años peronistas. Después de la sucesión de cambios de todo tipo que siguió al 17 de octubre la visión de una Argentina transformada en sus cimientos por la irrupción de las masas tuvo una gran resonancia entre los contemporáneos. Sin embargo, la reconstrucción histórica del período pone de manifiesto una mutación menos abrupta y, por el contrario, la existencia de fuertes elementos de continuidad.

UN PAÍS MÁS VERTEBRADO

El escenario físico sobre el que tuvo lugar este nuevo episodio en el proceso de la integración de la sociedad argentina fue el de un país más vertebrado, esto es, un país en el que sus habitantes distribuidos en el territorio estaban en una relación más estrecha entre sí. En primer lugar, debido a los efectos de la mayor urbanización, que era un fenómeno congruente con la trayectoria demográfica del país. Ya en 1914, la población que residía en localidades de 2.000 y más habitantes —la medida convencional de urbanización— había superado a la población rural y representaba el 52,7% del total. En los años posteriores esta tendencia se acentuó y en 1947 la población urbana llegó a ser el 62,7% de los 15.893.827 habitantes registrados por el censo. El rasgo a resaltar es que la localización del mayor crecimiento de la población urbana se produjo en las aglomeraciones de mayor tamaño. En 1914 se contaban, además de Buenos Aires, dos ciudades con más de 100.000 habitantes: Córdoba y Rosario. Hacia 1947 en esta categoría figuraban cinco más, Mar del Plata, Bahía Blanca, Santa Fe, La Plata y Tucumán que, sumadas, albergaban el 66,2% de la población urbana.

Con sus más de 4.600.000 habitantes, Buenos Aires y el cinturón formado por Vicente López, San Martín, Morón, La Matanza, Avellaneda y Lanús se destacaban ampliamente. Durante la década previa su magnetismo se había ejercido principalmente dentro de la región pampeana. De allí provino la mayoría de los migrantes internos, que arribaron generalmente después de recorrer distancias cortas, con un primer desplazamiento a los pueblos vecinos seguido luego por la radicación en la ciudad y las localidades de su periferia. Una vez instalado el peronismo en el poder, la atracción del Gran Buenos Aires llegó hasta las provincias más lejanas, de donde partió la nueva ola de migrantes que engrosó la marcha sostenida de la urbanización. Entre 1945 y 1960 el saldo positivo de los argentinos que entraron y salieron del área metropolitana fue de unos 70.000 al año. El crecimiento de origen migratorio en el período, que incluyó, asimismo, un contingente de inmigrantes europeos al final de la Segunda Guerra, y en menor medida el crecimiento vegetativo llevaron el número de sus residentes a

6.700.000, según el censo de 1960. Para esa fecha sobre un total nacional de 20 millones de habitantes, la población urbana alcanzaba el 72% y casi los dos tercios de ella vivía en las ciudades de mayor tamaño, que de ocho que eran en 1947, habían aumentado ahora a quince.

Completando el perfil de esta Argentina cada vez más urbana subrayemos un rasgo ya presente en la trayectoria descripta: su fuerte concentración geográfica. La distribución de los pueblos y las ciudades reflejó el inalterable predominio de la región pampeana en el poblamiento del territorio. Sobre una superficie que era el 22% del espacio nacional, la región comprendida por la ciudad capital y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe reunía al 80% de los residentes urbanos. A partir de este panorama demográfico puede afirmarse que, en los años cuarenta y cincuenta, los contactos y las redes propias del mundo urbano constituían el



Almanaque Alpargatas, dibujo de L. J. Medrano, 1947.

ambiente natural de la mayoría de los hombres y mujeres del país. Esto implicó para todos ellos una ampliación de sus experiencias compartidas. Así, por ejemplo —como observara Carlos Ulanovsky—, sólo las partes más remotas del interior estaban ajenas a la influencia de la última tonada popular o al impacto de un evento deportivo principal difundidos por las emisoras de radio de las ciudades. De este modo, en paralelo a la mayor urbanización, la expansión de los modernos medios de comunicación fue otro de los procesos que contribuyó a que el país fuera más vertebrado.

Por su capacidad de suscitar un sentimiento de comunidad a la distancia y en forma instantánea entre millones de personas, la radio habría de ser el medio más efectivo para fortalecer el proceso de homogeneización cultural promovido por la escuela pública y el servicio militar. Con la primera transmisión experimental realizada en 1920, la Argentina estuvo entre los países que tomaron la delantera de la radiodifusión en el mundo. En sus comienzos, la nueva experiencia tenía un carácter individual: para escuchar la radio había que utilizar auriculares. La introducción del parlante en 1924 cambió ese estado de cosas y puso su recepción al alcance de una audiencia colectiva; al principio éste tenía grandes dimensiones y era vendido por separado pero luego fue integrado al aparato. A partir de 1930, la radio pasó a ser gradualmente un artefacto familiar en los hogares. También se produjo un afianzamiento del sistema de radiodifusión. De las numerosas emisoras instaladas en los años previos, algunas de las cuales desaparecieron al poco tiempo, las más consolidadas entonces eran Radio Belgrano (1934), Radio Splendid (1934) y Radio El Mundo (1935). La aparición de esta última, con un transmisor más potente y de mejor calidad, conmocionó el mercado; Jaime Yankelevich, el propietario de Radio Belgrano y una figura destinada a tener una presencia decisiva en el mundo de la radio, buscó la manera de hacer frente al desafío y lo hizo mediante contratos con emisoras del interior. Inició, así, las transmisiones en cadena y enseguida tuvo imitadores. En 1941, las estaciones de radio del país estaban agrupadas en tres redes encabezadas, respectivamente, por las tres grandes emisoras. Con el acceso a las radios del interior, por medio de las cadenas, las radios porteñas alargaron su penetración y pusieron en circulación a lo largo del territorio las señales

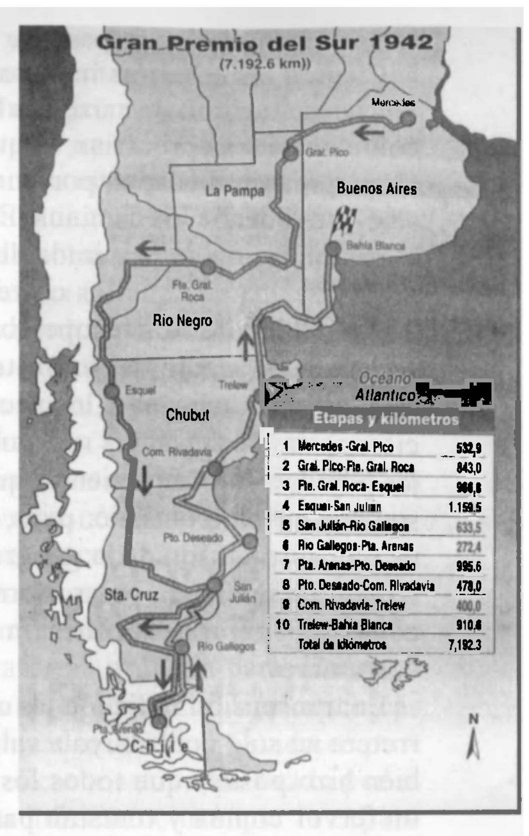
de identidad que irradiaban los modos de hablar y estilos de vida de Buenos Aires.

En 1938, la cantidad de aparatos receptores existentes fue estimada en 1.100.000, es decir, 100 por cada mil habitantes. Quince años después, en 1953, su número ascendía a 2.900.000, en una proporción de 158 por cada mil habitantes. Entre ambas fechas, el censo de 1947 registró un indicador más elocuente: una radio por cada dos viviendas. Durante estos años, muy pocos dudaron acerca de las emociones y los efectos que la radio era capaz de provocar. Perón se contó entre los primeros que supo aprovechar sus potencialidades para la actividad política. Durante la campaña electoral de 1946 recurrió a un método ingenioso con el fin de ampliar la repercusión de su mensaje: en las giras por el interior convocó a sus seguidores en forma simultánea a la plaza principal de distintas ciudades desde donde grandes altavoces acercaron su palabra transmitida por la radio que difundía el acto central en una de ellas. Es imaginable la sensación de unidad y fortaleza que experimentaron esas muchedumbres al escuchar multiplicados en un prolongado eco los cánticos y los vítores con que respondían a las arengas de Perón. Esta experiencia, y el papel de la radio con ella, tuvo mucho en común con otra que también caracterizó a esos años y por medio de la cual los argentinos ganaron un mejor conocimiento de la geografía de su país. Nos referimos a la transmisión radial de las competencias de turismo de carretera.

A principios de la década del treinta la puja que oponía el ferrocarril al transporte automotor se había finalmente resuelto en favor de este último, y ello se tradujo bien pronto en un fuerte impulso a las obras viales. La extensión de la red caminera ofreció a los aficionados al automovilismo deportivo nuevos escenarios y a partir de ellos comenzó a aumentar el recorrido de los grandes premios de turismo de carretera. Hasta entonces la principal competencia se corría sobre una distancia de unos 1.600 kilómetros, partiendo habitualmente desde Buenos Aires hasta Córdoba, pasando por Rosario. En 1937 el recorrido fue de 6.894 kilómetros, en un trayecto que cruzó el Litoral, prosiguió por las provincias del norte, se acercó a la precordillera para dirigirse luego a Bahía Blanca y arribar, finalmente, a La Plata. En 1940 se produjo el gran salto hasta

alcanzar casi 9.500 kilómetros, saliendo de Buenos Aires hacia el norte, atravesando Bolivia para llegar a Lima y emprender el regreso a Buenos Aires. La novedad de esta competencia no estuvo sólo en su extensión: consistió también en que fue íntegramente transmitida por Radio Excelsior, inaugurando así una experiencia de gran resonancia colectiva.

Después del Gran Premio del Sur, en 1942, sobre 7.192 kilómetros, de Mercedes a Puerto Deseado, con meta final en Bahía Blanca, las competencias se interrumpieron por cinco años debido a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en el abastecimiento de combustibles y repuestos. En 1947 los autos cupé de dos puertas y techo volvieron a mostrar su perfil característico sobre las rutas con el Gran Premio Internacional. En un recorrido de 5.374 kilómetros, la hoja de ruta comenzaba en Luján, seguía hasta Viña del Mar, después a Copiapó en el norte de Chile, Tucumán, Resistencia para arribar a Buenos Aires. Al año siguiente tuvo lugar la carrera más larga, 9.573 kilómetros, para unir Buenos Aires con Caracas, Venezuela, y otros 5.187 kilómetros de regreso, pasando por Lima, Perú. El trazado del Gran Premio República de 1949 condujo a los corredores por el perímetro del mapa del país, hacia Río Gallegos en el extremo sur, desde allí hasta Jujuy por el borde de los Andes, continuando la travesía hasta las Cataratas del Iguazú y retornando a Buenos Aires al cabo de 23 días en las rutas. A lo largo de este recorrido, y de tantos otros, las radios acompañaron a los corredores, relatando sus vicisitudes, que muchos seguían diligentemen-



1	Mercedes -Gral. Pico	532,9
2	Gral. Pico-Pte. Gral. Roca	843,0
3	Pte. Gral. Roca- Esquel	966,8
4	Esquel-San Julian	1.159.5
5	San Julián-Rio Gallegos	633,5
6	Rio Gallegos-Pta. Arenas	272,4
7	Pta. Arenas-Pto. Deseado	995,6
8	Pto. Deseado-Com. Rivadavia	478,0
9	Com. Rivadavia- Trelew	400,0
10	Trelew-Bahia Blanca	910,6
	Total de kilómetros	7,192.3

Mapa del Gran Premio del Sur de 1942.

te por medio de los mapas que distribuía el Automóvil Club.

Cuando las emisoras iniciaron la transmisión de las competencias de turismo de carretera las distancias eran grandes y las comunicaciones precarias, lo que daba lugar a vacíos informativos que eran llenados por minuciosas descripciones del paisaje que rodeaba los caminos. El efecto de la radio fue permitir la prolongación de la mirada del espectador que se asomaba a las rutas: una vez que los corredores desaparecían de su vista la voz del locutor los recuperaba y volvían a estar virtualmente presentes en medio del vasto territorio, ahora más próximo y familiar. Los relieves y los accidentes del terreno se enriquecieron, así, de trayectos reconocibles, se poblaron de personajes populares. La experiencia que la radio puso en acción entre sus oyentes no consistió, pues, en un mero conocimiento sino en una apropiación de la geografía del país. La imagen de una Argentina unificada por su territorio arraigó en la conciencia colectiva y reforzó la cohesión que se nutría de la lengua y las costumbres.

La transmisión radial de las competencias de turismo de carretera no sólo contribuyó a valorizar el espacio nacional; también hizo posible que todos los rincones del país vibraran con un fervor común y tomaran partido siguiendo las alternativas de la puja entablada entre los Chevrolet y los Ford por el dominio de las rutas. Estos duelos de ingenio mecánico y resistencia física, que tuvieron en Juan Manuel Fangio y Oscar Gálvez a sus principales protagonistas, no dejaron a casi nadie indiferente y pasaron a formar parte de las grandes fiestas deportivas, entre las cuales sobresalía, sin rivales, la celebración anual del campeonato de fútbol profesional.

También aquí la radio ejerció un papel de primer orden al galvanizar los vínculos formados a partir de las adhesiones masivas que los clubes de fútbol de la capital despertaban en las provincias. De hecho, el fútbol argentino era por definición el fútbol de Buenos Aires. Con la excepción de dos clubes de Rosario y otros dos de La Plata, los que integraron la liga profesional de fútbol creada en 1931 fueron los históricos clubes porteños fundados a la vuelta del siglo XX, como River Plate (1901), Racing (1903), Independiente (1904), Boca Juniors (1905), San Lorenzo (1908). Surgidos en los barrios de Buenos Aires, los medios de comunicación ampliaron luego su in-

fluencia hacia todo el territorio y progresivamente ganaron una popularidad difícil de encontrar en otras latitudes, según ha observado Eduardo Archetti. Un español nacido en Madrid no es probable que sea simpatizante de un club de Barcelona, y lo mismo cabe esperar en la situación inversa. En cambio, en la Argentina, un provinciano de Santiago del Estero bien podía hacer suyas las victorias y las derrotas de un equipo de fútbol porteño y compartir esa experiencia con muchos más argentinos dispersos en los diferentes puntos del país. La identificación personal con un club de Buenos Aires se convirtió, así, en parte de una identificación nacional, tan sólida y duradera como la producida por los símbolos y los rituales patrios.

El conjunto de circunstancias hasta aquí mencionadas se combinó para dar una mayor vertebración al país y, a la vez, potenciar el lugar central que en él ocupaba Buenos Aires y su entorno inmediato. En estas condiciones, el nuevo episodio en la integración social de la Argentina que tuvo lugar en los años del peronismo encontró la plataforma propicia para dilatar su influencia y transformarse en una experiencia de alcance nacional. Sin duda, las políticas lanzadas desde el Estado se propusieron ese objetivo. Pero su eficacia estuvo facilitada por el crecimiento de las ciudades y la infraestructura, por la expansión de los medios de comunicación, por la existencia de vínculos y lealtades entre la población distribuida en el territorio. Las muchedumbres que partieron de las estaciones de ferrocarril y las terminales de ómnibus de los pueblos de provincia hicieron el resto, al proyectar más tarde, sobre los lugares de origen, el eco de sus logros en la metrópoli.

LA SOCIEDAD MÓVIL

En relación con los inmigrantes internos que empezaron a arribar al Gran Buenos Aires desde mediados de la década del treinta en adelante, Gino Germani —a quien se deben los estudios pioneros sobre la estructura social argentina— señaló que los recién llegados tendieron a ubicarse en los niveles más bajos de la pirámide social, empujando a los que ya estaban hacia arriba, a posiciones obreras más altas y hacia los estratos medios. En verdad, para unos y otros éste fue un período de as-

censo social. Para los peones y jornaleros que venían del interior la entrada al mercado de trabajo del área metropolitana significó de por sí un movimiento ascendente porque se trataba de ocupaciones con ingresos superiores a los que recibían en sus zonas de origen. Entre tanto, para los trabajadores residentes en la ciudad el crecimiento económico de la época trajo aparejada la expansión de nuevas fuentes de empleo. Muchos las aprovecharon en primera persona subiendo en la jerarquía de la empresa o instalándose por su cuenta como trabajadores independientes o pequeños propietarios en el comercio, los servicios y la industria; muchos más lo hicieron por intermedio de sus hijos, a los que habían conseguido mandar a la escuela y contaban, por lo tanto, con la instrucción requerida para trabajar como empleados en las actividades privadas y la administración pública. La suma de estas experiencias de movilidad infundió durante estos años un renovado vigor al secular proceso de integración de la sociedad argentina.

Para seguir la trayectoria de los cambios en la estructura social se cuenta con los censos de 1947 y 1960, los cuales, si bien cubren un período que no se superpone en todo con aquéllos, brindan, no obstante, una imagen de las tendencias en curso. Al respecto, comencemos por establecer lo ocurrido con la población económicamente activa. Aquí nos encontramos inicialmente con un hecho ya anticipado al hacer referencia al ritmo creciente de la urbanización del país: la contracción del número de personas que se desempeñaban en las actividades rurales. El empleo agropecuario, que representaba el 26,3% de la población ocupada en 1947 se redujo al 19,5% en 1960, prolongando en el tiempo el éxodo rural que se iniciara hacia 1935-1936. La creación de oportunidades de trabajo continuó siendo un fenómeno urbano. El crecimiento de la población económicamente activa, que pasó de 6.267.000 en 1947 a 7.479.000 en 1960, fue absorbido en primer lugar por el sector secundario —la industria y la construcción— (que ganó un 4,3%) y luego por el sector terciario —el comercio y los servicios— (que ganó un 2,5%).

Cuadro I: Distribución de la población económicamente activa por grandes sectores de actividad

PEA del sector	1947 Miles	%	1960 Miles	%
Agropecuario	1.646	26,3	1.457	19,5
Secundario	1.801	28,7	2.473	33,0
Terciario	2.820	45,0	3.549	47,5
Total	6.267	100,0	7.479	100,0

Fuente: Censos Nacionales de Población de 1947 y 1960.

Como se desprende del cuadro, estamos en presencia de un sector secundario que mostraba un fuerte dinamismo en el marco de un despoblamiento del mundo rural y la existencia de un sector terciario que mantenía su predominio relativo, contribuyendo en forma sustancial al mantenimiento del empleo. A partir de este perfil ocupacional, puede obtenerse una idea bastante aproximada de los cambios en la estructura social por medio de la clasificación de las ocupaciones registradas en los sectores de actividad según su ubicación en la organización económica y luego por su agrupamiento en grandes conjuntos en términos de clases sociales. Este es un análisis realizado por Susana Torrado, a quien seguimos en este punto, prestando atención, con ella, principalmente a la situación de las clases medias y las clases trabajadoras urbanas. Al respecto, destaquemos que las ocupaciones de las clases medias se expandieron más rápido entre 1947 y 1960 que las correspondientes a las clases trabajadoras: las primeras lo hicieron a una tasa anual del 25%, mientras que las segundas crecieron al 18%. Es decir que, en términos comparativos, en la estructura ocupacional del país se crearon y llenaron más posiciones de empleados y pequeños y medianos empresarios que posiciones de obreros y trabajadores por cuenta propia.

Para colocar esta evolución en el contexto de la época evoquemos brevemente las transformaciones que experimentó la estructura ocupacional. Estos fueron los años en que se produjo la ampliación de las actividades a cargo del Estado, la modernización del aparato productivo, el gran aumento de la edu-

cación y los servicios. Todos estos procesos simultáneos impulsaron el incremento de las ocupaciones no manuales en relación de dependencia, los trabajadores de cuello y corbata. Así ocurrió en el sector terciario, donde la figura hasta entonces típica del vendedor de comercio perdió relieve frente a la multiplicación de los empleados del gobierno, el correo, los bancos, las instituciones escolares y las actividades recreativas. Un fenómeno similar se observó, asimismo, en el sector secundario. Allí la introducción de técnicas de administración más sofisticadas en los establecimientos manufactureros de mayor tamaño condujo al aumento de la demanda de empleados de oficina. Previsiblemente, la incorporación de personal administrativo fue acompañada por la reducción de la participación de los obreros en las plantillas de la industria: si en 1947 por cada 100 obreros habia 13 empleados, en 1960 el número de éstos era 24. La fuerte expansión de las burocracias públicas y privadas hizo, así, que las clases medias asalariadas fuesen el estrato social más dinámico entre las dos fechas censales, con un crecimiento por año del 26%.

En orden de magnitud le siguieron las clases medias autónomas, que en este registro incluyen a los pequeños propietarios de la industria, los servicios y el comercio, con una tasa de crecimiento entre los dos censos del 22,9%. El último sector, el de comercio, fue el que más oportunidades ofreció a este estrato social en la floreciente economía urbana, al absorber el 45% de su crecimiento entre 1947 y 1960, en la forma predominante de comerciantes por cuenta propia o con pocos dependientes. En la industria, las condiciones favorables dentro de las que tuvo lugar la sustitución de importaciones —el proteccionismo y los créditos subsidiados— también permitieron la instalación de muchas pequeñas empresas con muy poco capital y fuerte ayuda familiar. De acuerdo con el censo industrial de 1954 el 60% de los establecimientos existentes había sido creado después de 1945. En conjunto, éstos aportaban sólo un 22% a la producción total de la industria y tenian en promedio 3,6 asalariados; sus propietarios fueron el otro gran componente del que se nutrió la pequeña y mediana burguesia que creció al abrigo del desarrollo del mercado interno y del consumo masivo.

Aunque a un ritmo de crecimiento relativo menor que los

dos estratos anteriores, con una tasa anual del 18,2%, las clases trabajadoras asalariadas fueron las que más empleos sumaron en términos absolutos, unos 500 mil, entre 1947 y 1960, para ser la categoría más numerosa de la pirámide social urbana. Dentro de ella casi el 50% estaba ocupado en la industria manufacturera. De un censo a otro los obreros industriales pasaron de 1.000.000 a 1.200.000. En términos generales, ésta era una clase trabajadora joven: hacia 1947 entre el 50 y el 70% de los obreros preexistentes en el área metropolitana había sido reemplazado por nuevos obreros reclutados entre la masa siempre renovada de los inmigrantes del interior.

Finalmente, completando el cuadro, tenemos a los trabajadores autónomos, que comprenden a artesanos, cuentapropistas y personal doméstico, creciendo entre 1947 y 1960 a una tasa anual del 17,4%. Durante ese lapso su composición interna tuvo variaciones significativas ya que el sector mayoritario, integrado típicamente por mujeres que se desempeñaban en el servicio doméstico, perdió posiciones: del 63,5% del total en 1947 descendió al 53,6% en 1960, reflejando los nuevos horizontes que se abrían para aquéllas en el mundo del trabajo fabril y los servicios. Las que aumentaron, en cambio, fueron las ocupaciones en tareas de reparación (mecánicos, electricistas), en servicios personales (peluquerías, lavanderías) y oficios vinculados a la construcción (pintores, albañiles, plomeros), actividades todas que requerían un capital inicial mínimo y, por ello mismo, eran un primer canal de avance social para sectores de las clases trabajadoras urbanas.

Una visión más precisa de la fluidez de la estructura social en los años del peronismo desde la perspectiva de los estratos más bajos puede obtenerse a partir de la investigación sobre la movilidad social en Buenos Aires y su periferia que Gino Germani realizara en 1960 y cuyas conclusiones iluminan retrospectivamente lo sucedido en el período. Hacia 1960 la mitad de los que habían nacido de padres obreros radicados en la ciudad ya no se encontraba en la situación de trabajador asalariado: había ascendido a la clase media. Dentro del mismo estrato dependiente, otro 40% había pasado de empleos no calificados a ocupaciones calificadas. Estos cambios se produjeron tanto por la movilidad individual como por la sucesión generacional. Un tercio de los jefes de familia entrevistados en 1960

había pasado del estrato de trabajador manual al de clase media en el curso de su vida ocupacional; a su vez, para ese entonces, más del 50% de los hijos de padres obreros que habían ingresado al mercado de trabajo en las décadas del treinta y el cuarenta se desempeñaba en tareas no manuales.

Como ilustran los datos reseñados, a partir de 1946 cobró forma una nueva edición del proyecto de movilidad que había acompañado la trayectoria del país en los albores del siglo. En ese marco, más argentinos pudieron mirar a los que estaban situados arriba de ellos en la escala social con la expectativa de que en poco tiempo ellos o sus hijos habrían de alcanzarlos. Esta vez, sin embargo, lo que tenían por delante no era la simple repetición de las peripecias propias de la aventura del ascenso individual. La novedad del peronismo en el poder consistió en que el Estado se ocupó de allanarles el camino, removiendo los obstáculos y ampliando los procesos que venían ocurriendo en la economía nacional. Para constatarlo, una primera vía de entrada la brindan los cambios en la distribución del ingreso nacional. Aquí tenemos que la participación del componente salarial superó por vez primera en la historia la retribución obtenida en concepto de ganancias, intereses y renta de la tierra. En 1948 aquél ascendía al 53% contra el 47% de éste, una relación claramente favorable respecto de la situación imperante sólo cinco años atrás, cuando los asalariados percibían 44,4% mientras que los empresarios, capitalistas y rentistas recibían el 55,6%.

En los cambios operados en la distribución del ingreso nacional influyeron, por un lado, los efectos de las transformaciones estructurales en curso antes de 1946 y, por otro, los efectos de la acción gubernamental, que complementaron a aquéllos imprimiéndoles un impulso adicional. En cuanto a los primeros, se trató de las repercusiones de un fenómeno ya identificado: el desplazamiento de trabajadores de las zonas rurales a las actividades urbanas. La distribución del ingreso de los lugares de origen de los migrantes internos era notoriamente más desigual debido a las marcadas diferencias entre la situación de los trabajadores y la de los dueños de tierras. En el sector urbano de las áreas donde éstos afluían los contrastes tendían, en cambio, a ser menos intensos ya que, por ejemplo, el número de ocupaciones asalariadas en el estrato de ingresos

medios era más elevado. Por consiguiente, aquí la distribución de ingresos tenía un perfil menos desigual. En la relocalización de la fuerza de trabajo inducida por la industrialización y la urbanización radicó, pues, buena parte de la explicación del incremento observado en la participación de los salarios en el ingreso nacional.

Este resultado previsible de los procesos en marcha en el país fue luego potenciado desde el gobierno a través de diversos instrumentos. Uno de ellos fue el respaldo oficial a la sindicalización y a la fijación de salarios por medio de convenios colectivos. En un breve lapso, más del 50% de los trabajadores urbanos se organizó en sindicatos y con ese poder de presión acrecido por el alto nivel de empleo lograron aumentos generalizados de los salarios nominales en las mesas de negociación. Los avances en la posición relativa de los asalariados estuvieron también facilitados por otro instrumento de la acción gubernamental, una política general de salarios en consonancia con su estrategia de estímulo a la demanda interna. Esta política salarial oficial, además de tener aplicación directa en las actividades comprendidas en el sector público, delimitó el contexto en que se llevaron a cabo las negociaciones obrero-patronales, actuando como una sólida plataforma de la redistribución de los ingresos monetarios. A todo esto hay que agregar que la magnitud de los aumentos en los salarios nominales superó en los primeros años del período a los aumentos en la tasa de inflación. Ello trajo consigo una formidable expansión de los salarios reales, los cuales hacia 1949 eran un 62% más altos que en 1945.

La acción redistributiva del gobierno fue visible, asimismo, mediante otro instrumento, la política de precios relativos y su impacto sobre la canasta de consumo familiar. Recordemos al respecto que el peronismo aprovechó los altos precios internacionales de los productos del agro en el momento de su ascenso al poder para financiar el crecimiento industrial y el aumento del gasto público. Para ello el Estado se apropió de los mayores ingresos del campo a través del control del comercio exterior y la política cambiaria y los transfirió al sostenimiento de la economía urbana. Con esta política de precios relativos volvió compatible el incremento simultáneo de los salarios de los trabajadores y los beneficios de los empresarios. Dicha po-

lítica hizo posible también algo más: la redistribución del bienestar a favor de los sectores de más bajos ingresos. A ese objetivo contribuyó indudablemente la caída experimentada en los precios relativos de los productos del agro, que impidió que el alza de los precios internacionales repercutiera internamente encareciendo el precio de los alimentos. El reforzamiento del poder adquisitivo de los salarios fue alcanzado, además, mediante controles de precios a nivel minorista y subsidios a los bienes de consumo popular, incluidos los alquileres de vivienda.

Resumiendo, las medidas de política del gobierno sumaron sus efectos a los que se derivaban del desplazamiento de los trabajadores del campo a las actividades urbanas y unos y otros, combinados, promovieron una redistribución sustantiva del ingreso nacional. El mejoramiento de la posición relativa de los asalariados sufrió, empero, un vuelco hacia el cuarto año del gobierno peronista. En 1949 llegó a su fin la bonanza del comercio exterior iniciada en 1945 al invertirse el signo de los términos de intercambio: los precios de las exportaciones del agro disminuyeron con relación a los precios de los bienes que el país compraba en el exterior (insumos industriales y maquinarias). Esta tendencia negativa fue acompañada por la caída del volumen de las exportaciones debido tanto a la pérdida de cosechas a causa de dos grandes sequías como a la reacción de los productores rurales contra la política de precios del gobierno. Al contraerse su principal fuente de financiamiento, la prosperidad peronista se interrumpió, la economía entró en una fase de estancamiento y aumentó la inflación. En el corto plazo, éste habría de ser, no obstante, un paréntesis pasajero.

Pablo Gerchunoff y Damián Antúnez se han ocupado en este libro de la respuesta oficial a la coyuntura adversa que enfrentó el país entre 1949 y 1952 y a ellos nos remitimos. Basta con señalar aquí que cuando, después de iniciativas parciales y, a la postre, inefectivas, en 1952 el gobierno se decidió por un plan de ajuste, éste reflejó un cambio en sus prioridades: del énfasis en la expansión se pasó a la preocupación por la estabilidad y el respaldo a la industria fue sustituido por el estímulo al campo. El objetivo de la estabilidad fue instrumentado mediante una batería de medidas de corte ortodoxo en materia de gasto público y política monetaria e incluyó una novedad: la suspen-

sión por dos años de las negociaciones colectivas luego de un reajuste general de salarios y precios. En cuanto a la crítica situación externa, el gobierno recurrió a la contracción de las importaciones y al aliento a las exportaciones del agro pero lo hizo sin apelar a la devaluación de la moneda. Éste hubiera sido un medio rápido para salir del paso pero al costo de un incremento en el precio de los alimentos. En lugar de esta alternativa, que entrañaba un fuerte golpe sobre la canasta de consumo popular, las medidas adoptadas para devolver rentabilidad al campo consistieron en más créditos y en precios internos subsidiados.

Los cuidados puestos por la acción gubernamental con vistas a atenuar el impacto de la crisis sobre los asalariados no bastaron para impedir una caída de los salarios reales cercana al 26%. Lo cierto es que, en definitiva, el plan de ajuste permitió capear la emergencia, la inflación se redujo, la actividad económica recuperó su dinamismo a partir de 1953 e incluso el problema externo fue superado, al menos temporariamente. En este contexto, las convenciones colectivas volvieron a reunirse en 1954 y culminaron con una nueva ola de aumentos en los salarios nominales. Haciendo un balance final, tenemos que hacia 1955 los salarios reales todavía eran superiores en más del 60% a los correspondientes a 1945 y la participación de los asalariados en la distribución del ingreso nacional alcanzaba al 50%.

Impresiones de un inmigrante europeo recién llegado en los años 50

"Aquélla era una Argentina bullanguera, más bien próspera, 'con lo que tira a la basura una familia argentina vivirían dos familias europeas' decía Perón y en esto tenía razón. Acostumbrados los inmigrantes a comprar por cien gramos o hasta por gramos en aquellos años de la posguerra, sorprendía la abundancia argentina. El peso mínimo de la compra (para la manteca, el queso de rallar, el jamón) era de un cuarto de kilo y de un kilo para la carne. La gran parrillada, el asado, impresionaba al europeo."

Vanni Blengino. *Más allá del océano*. CEAL. Buenos Aires. 1990.

La sociedad móvil de los años del peronismo fue, pues, una sociedad con una estructura de ingresos más igualitaria. Y, con más ingresos disponibles, los argentinos pudieron consumir más y en forma más variada. La evolución de los dos rubros básicos del presupuesto de las familias —los alimentos y la vivienda— tuvo un papel central en la elevación de los niveles de vida de la población, particularmente de los estratos populares. Ya aludimos antes al abaratamiento de los alimentos. Destaquemos, ahora, lo ocurrido con ese componente tan esencial de la dieta nacional, la carne. Durante 1946-1952 se produjo en el país la mayor cantidad de carne registrada hasta entonces, pero a pesar de esa abundante oferta desde 1947 la cantidad de carne exportada disminuyó en forma continua. La razón: el aumento sostenido del consumo interno. En el destino de la producción, éste representaba el 75,2% en 1946, pero seis años más tarde ya alcanzaba al 88,8%. En la crisis de 1952, los precios máximos oficiales fijados para la carne fueron suprimidos y hubo que introducir días de veda en los restaurantes para frenar un consumo que, de todos modos, retornó con fuerza una vez superada la emergencia.

Con relación a los gastos de vivienda, lo que hizo el gobierno fue mantener la política puesta en marcha por la anterior administración conservadora, que en 1943 decidió el congelamiento de los alquileres y la prohibición de los desalojos. Por medio de una sucesión de decretos y leyes, dicha política fue prorrogada, de tal forma que entre 1943 y 1955 los alquileres subieron solamente un 27,8%, un aumento insignificante frente al incremento general del costo de vida, cercano al 700%, entre esos años. El impacto que tuvo la regulación de los alquileres emerge claramente al tomar en cuenta que, de acuerdo con el censo de 1947, más del 70% de las viviendas del área metropolitana estaban ocupadas por inquilinos. Un beneficio adicional lo aportó también el control oficial establecido sobre los precios de la electricidad y los servicios públicos como los transportes y teléfonos.

La reducción en el costo de los gastos básicos de la canasta de consumo popular permitió disponer de más ingresos para otros gastos. Esto se reflejó en la producción de una gran variedad de bienes. Los mayores gastos en bebidas llevaron a un aumento del 35% de la cantidad de vino de mesa producido

entre 1946 y 1953: en el mismo período, la producción de cerveza aumentó un 41%. También mejoró la indumentaria de las familias, impulsando a las manufacturas textiles y de confecciones, que crecieron en la década peronista el 40% y el 41%, respectivamente. Asimismo, durante esos años más hogares pudieron tener acceso a los artefactos de uso doméstico que la industria fabricaba en grandes cantidades. Así fue que la refrigeradora a hielo comenzó a ser reemplazada por la heladera eléctrica, cuya producción aumentó más de cuatro veces entre 1941 a 1953. A su vez, la cantidad de planchas eléctricas producidas en ese lapso se multiplicó por tres y la de los calefones eléctricos lo hizo por ocho. Entre tanto, el gas, traído a Buenos Aires desde las cercanías de Comodoro Rivadavia por un gasoducto iniciado en 1947 y terminado dos años después, decretó el fin de la antigua "cocina económica" y, en su lugar, se popularizó otra, más cómoda, limpia y manejable. El presupuesto de las familias incluyó, igualmente, más fondos para los gastos en recreación, como lo puso de manifiesto el incremento de los asistentes a las salas de cine y a los espectáculos deportivos.

LAS VÍAS DE ACCESO AL BIENESTAR SOCIAL

Con la redistribución de los ingresos y la expansión de los consumos, la prosperidad de los años del peronismo —sólo quebrada en los momentos difíciles de mitad del período— fluyó a lo largo de la pirámide social urbana como nunca antes en el pasado. Por cierto, esta vivencia directa y palpable en los más diversos aspectos de la existencia cotidiana tuvo distintas implicaciones dentro de la población. Entre los sectores trabajadores de más reciente radicación ella significó la ampliación de sus horizontes más allá de las necesidades inmediatas de subsistencia. Para los obreros más establecidos, los empleados y las clases medias representó el acceso a una mayor variedad de bienes y un mejor aprovechamiento de los beneficios de las políticas sociales y del gobierno. Un ángulo apropiado para observar este contraste lo ofrecen las iniciativas en torno de un problema candente de la hora, la cuestión de la vivienda.

Con la aceleración del proceso de urbanización a partir de

mediados de la década del treinta la pregunta acerca de cómo dar y garantizar abrigo y techo habia ido ganando relevancia pública. La decisión de congelar los alquileres y prohibir los desalojos adoptada en 1943 puede ser vista como una expresión de ello. Con esa iniciativa, el gobierno del presidente Castillo procuró neutralizar los efectos de la presión sobre el mercado inmobiliario que ejercía la afluencia creciente de nuevos residentes urbanos. Una idea de la envergadura que había alcanzado la cuestión de la vivienda en el epicentro de ese movimiento poblacional la suministró el censo escolar llevado a cabo ese mismo año. Los datos de dicho relevamiento permitieron establecer condiciones de hacinamiento colectivo, cuando más de cuatro familias compartían una misma casa, y de hacinamiento individual, allí adonde más de cuatro miembros de una misma familia dormían en una misma pieza.

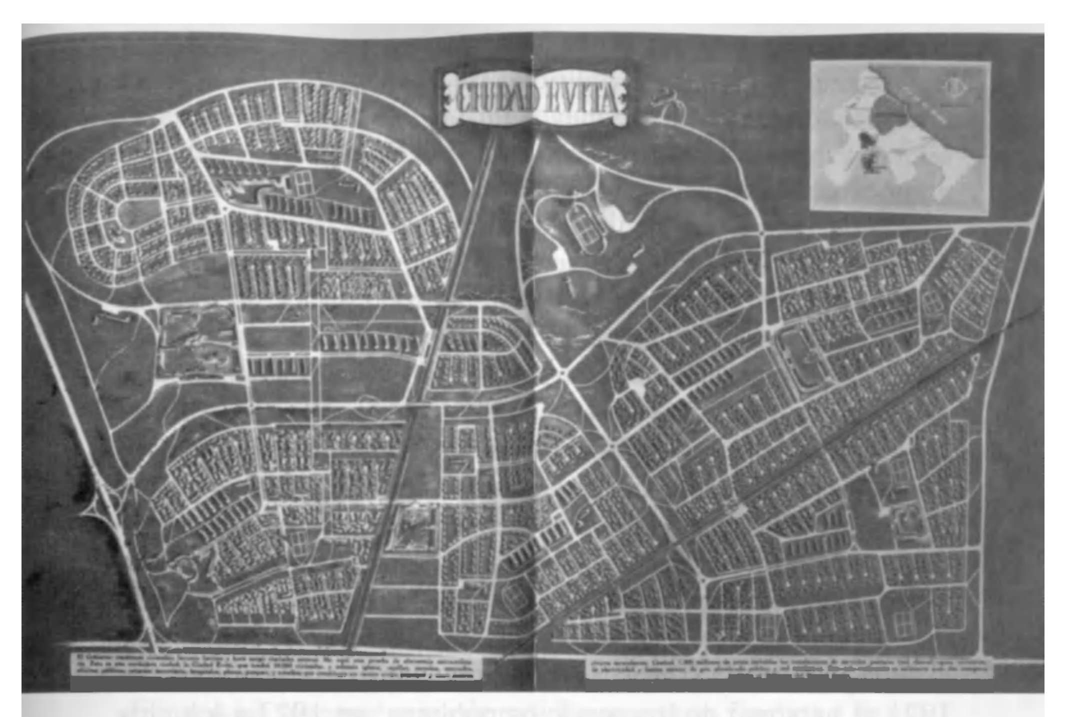
De acuerdo con el análisis del censo hecho por Anahi Ballent, en 1943 Buenos Aires mostraba el valor más alto del país en hacinamiento colectivo, una situación que comprendía al 22% de las familias. Por el contrario, su nivel de hacinamiento individual estaba entre los más bajos, afectando al 18,5% de las familias. Reuniendo ambos índices, tenemos que en la capital del país una familia tenía más probabilidades de disponer de una mayor cantidad de cuartos pero tendía a menudo a compartir la vivienda que habitaba con otras familias en condiciones escasamente confortables. En las provincias, en cambio, era más alto el índice de hacinamiento individual, revelando que era más frecuente encontrar viviendas con una única habitación o con un número reducido de habitaciones respecto de los que convivían en ellas. Para completar la descripción, destaquemos que la situación en la que varias familias compartían una misma casa tenía en Buenos Aires un alcance aún mayor. En efecto, sin llegar al límite del hacinamiento, ésta era la condición en que se hallaba el 54% de las familias censadas, superando los valores de los inquilinatos o pensiones. Un cuadro semejante indicaba por lo menos dos cosas: primero, que era frecuente que las familias alquilaran habitaciones de sus viviendas a fin de equilibrar el presupuesto; segundo, que muchas nuevas parejas, sin ahorros suficientes para instalarse por su cuenta, optaban por acomodarse como fuera en la que era la casa de sus padres.

No sorprende, por lo tanto, comprobar que en Buenos Aires las viviendas ocupadas por sus propietarios fuesen una minoría. Según el censo de 1947, comprendían sólo el 17,5% del total de viviendas. En el Gran Buenos Aires, donde la tierra tenía un costo menor, el panorama se presentaba mejor ya que los propietarios constituían el 43,3% de los habitantes de viviendas. En términos generales, se puede afirmar que la casa propia, que simbolizaba desde principios de siglo la culminación ideal de la aventura del ascenso individual, permanecía todavía fuera del alcance de muchos. El peronismo en el gobierno modificó ese estado de cosas. "El derecho a la vivienda" figuró desde muy temprano en su programa de reparación social y, al mismo tiempo, sirvió para dar estímulos a la industria de la construcción en forma consistente con su política de expansión del mercado interno.

Entre las iniciativas oficiales en el terreno de la vivienda ya se mencionó el congelamiento de los alquileres. Para ampliar el mercado de la construcción, en 1948 fue aprobada la Ley de Propiedad Horizontal. Antes de su promulgación sólo se podía ser propietario de casas individuales o de casas colectivas, como se llamaban los edificios de departamentos, habitados típicamente por familias de clase media. La ley 13.512 admitió en este último caso la división de la propiedad por unidades permitiendo, en consecuencia, la adquisición de departamentos. Aunque al amparo de la nueva legislación se construyeron edificios de departamentos, el auge de la propiedad horizontal se produjo recién en los años posteriores a la gestión del peronismo. En los hechos, el principal efecto de la ley fue facilitar la venta de los departamentos ya existentes a sus inquilinos, luego que el congelamiento de los alquileres restara todo atractivo a la propiedad con propósitos de renta. En verdad, la iniciativa oficial más importante para democratizar el acceso a la vivienda se concretó a través del crédito barato por intermedio del Banco Hipotecario Nacional. Como lo destacara Oscar Yujnovsky, los créditos del BHN operaron como mecanismos de redistribución de ingresos ya que no requerían depósitos previos y sus tasas de interés no se reajustaban al ritmo de la inflación. En estas condiciones, y a pesar de los aumentos en los costos de la construcción, los sectores asalariados pudieron afrontar los créditos para vivienda. La proporción del salario

que un obrero calificado necesitaba para pagar su crédito aumentó del 23,8% en 1943 al 31,7% en 1954. Ésta era, con todo, una deuda manejable; en cambio, los obreros no calificados tuvieron mayores dificultades pues las cuotas del crédito, que equivalían al 36,1% de su salario en 1943, alcanzaron al 42,7% en 1954. De acuerdo con las estadísticas recogidas por Peter Ross, quienes aprovecharon los créditos del BHN fueron, en particular, los empleados públicos. Así, por ejemplo, de las 54.895 solicitudes de crédito para vivienda en 1954, 24.870 correspondieron a ese estrato. Solamente solicitaron créditos 2.848 obreros del sector público. De manera similar, los empleados del sector privado sobrepasaban de lejos a los obreros de este sector, 13.948 y 6.761 respectivamente. En suma, en 1954 el 77% de las solicitudes provinieron de empleados y las restantes correspondieron a obreros.

Además de la política de crédito barato, el gobierno tomó a su cargo la construcción de viviendas con destino a sectores de menores recursos. Las iniciativas más importantes se localizaron en la periferia de la capital y respondieron en su diseño tanto a la imagen ideal de "la ciudad jardín" —tal fue el caso de las 5.000 casas del barrio Ciudad Evita, en dirección del aeropuerto de Ezeiza— como al perfil más adusto de los monobloques de cemento —por ejemplo, las 1.100 viviendas del barrio Los Perales en Mataderos—. Más que en estos programas oficiales, el crecimiento del Gran Buenos Aires, que llegó a concentrar en 1960 el 26,49% de la población urbana del país, descansó en el proceso más molecular de la autoconstrucción, a partir del financiamiento bancario y el loteo masivo de tierras. La inversión pública en infraestructura no pudo seguir, empero, el ritmo de esta urbanización rápida y desordenada, de tal modo que en 1960 en el Gran Buenos Aires cerca del 60% de la población no tenía agua corriente y el 75% tampoco tenía desagües cloacales. Carencias como éstas no alcanzaron, sin embargo, para cancelar el mayor logro de estos años: convertir el sueño de la casa propia en una realidad al alcance de más argentinos. El número de viviendas alquiladas en el área metropolitana que en 1947 se elevaba al 70% en 1960 descendió al 42%, mientras que las viviendas ocupadas por propietarios pasaron de 26,8% al 58,1% a lo largo del período.



Ciudad Evita en la propaganda oficial.

La contrapartida de esta evolución promisoria fue la situación en que se encontraron los pobladores sin dinero suficiente para alquilar o comprar un lote de terreno en cuotas. Para ellos la alternativa disponible fue convertirse en ocupantes, a menudo ilegales, de tierras fiscales, en zonas inundables o de escaso valor, en las llamadas "villas de emergencia". En 1956 unas 110.000 personas vivían en estas condiciones en el conglomerado y, de ellas, cerca de 35.000 en asentamientos ubicados en la propia ciudad de Buenos Aires.

Dos son las conclusiones que es posible extraer de esta somera reconstrucción de la cuestión de la vivienda y sus soluciones durante los años del peronismo. La primera es que la acción del gobierno contribuyó y mucho a corregir el déficit que encontró a comienzos de su gestión. La segunda conclusión se refiere a las consecuencias del principal instrumento al que se recurrió para ello, el crédito subsidiado. Como ocurre con las políticas redistributivas de alcance general, al momento de recoger los beneficios emergen las diferencias en el punto de partida de los que son sus destinatarios, esto es, dife-

rencias en cuanto a los medios económicos, a la información, a los contactos sociales y políticos. Vista desde este ángulo se comprende que la tajada mayor en la política de acceso a la vivienda llevada a cabo por el peronismo haya correspondido a quienes estaban mejor ubicados para aprovecharla, el vasto sector de las clases medias. Más en general, si cabe afirmar que entre 1946 y 1955 estamos ante un proceso de democratización del bienestar es a condición de reconocer al mismo tiempo que ése fue un proceso cuyos resultados se distribuyeron en proporción a los recursos de poder e influencia de los distintos grupos sociales.

Una confirmación adicional la encontramos en el terreno de las políticas de protección social. Comenzando por las jubilaciones, tenemos que la previsión social había comenzado a ser reconocida en el país de manera muy limitada en 1904 con la creación de la caja de empleados públicos. En los años sucesivos la cobertura de las necesidades de la vejez se fue extendiendo poco a poco, en 1915 a los trabajadores ferroviarios, en 1921 al personal de los servicios públicos, en 1923 a los empleados bancarios, en 1939 a los periodistas y al personal de la marina mercante. El gran impulso a la previsión social vino con la Revolución de junio de 1943; en ese año se creó la caja de empleados de comercio y, ya instalado el gobierno peronista, la caja del personal de la industria en 1946. El salto en el número de afiliados al sistema previsional fue considerable: de los 481.837 que eran en 1943 pasaron a 2.317.946 en 1947, casi cinco veces más. Durante los primeros años del peronismo el régimen jubilatorio operó con un enorme superávit ya que era muy reducida la proporción de beneficiarios, circunstancia que permitió al gobierno contar con ingentes recursos para financiar las cuentas públicas.

Con independencia de su mayor alcance, el hecho es que el sistema de previsión siguió funcionando de acuerdo con cómo venía haciéndolo hasta entonces. La protección a la vejez se había ido desarrollando en el tiempo siguiendo la trayectoria de los esfuerzos propios de trabajadores por asegurarse medios de subsistencia una vez retirados del mercado de trabajo. Cuando fueron exitosos, esos esfuerzos se materializaban en un esquema jubilatorio sostenido por las contribuciones obligatorias de los trabajadores y sus empleadores. La extensión

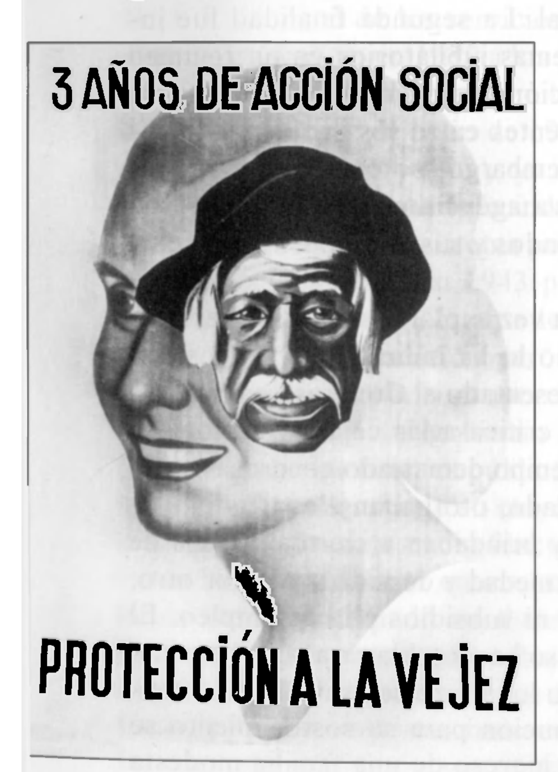
de este tipo de protección social a una nueva categoría de trabajadores daba lugar a la creación de un nuevo esquema, autónomo de los otros en su financiamiento y gestión y también diferenciado en cuanto a los beneficios que otorgaba. El monto de las jubilaciones era dependiente del nivel de las retribuciones percibidas por los trabajadores y éstas variaban tanto a lo largo de su historia laboral como, sobre todo, según cuál fuera el sector de actividad donde habían estado ocupados.

El peronismo terminó haciendo suya sin cambios apreciables esta fórmula de cobertura de los riesgos de la vejez basada en el principio de la participación laboral. En 1944 fue creado el Instituto Nacional de Previsión Social con dos finalidades principales. La primera, promover la jubilación entre los trabajadores que carecían de ella. Este objetivo fue, inicialmente, alcanzado como ya indicamos por medio de las cajas para los empleados del comercio y el personal de la industria. A ellas se agregaron luego, en 1954, las de los trabajadores rurales y los trabajadores autónomos, llevando a 4.691.411 el número de afiliados al sistema previsional. La segunda finalidad fue incorporar a los diversos esquemas jubilatorios en un régimen unitario para coordinar su acción y reducir la desigualdad de derechos y obligaciones existentes entre sus beneficiarios. El intento no fue muy lejos, sin embargo, porque las cajas pasaron a formar parte de la nueva agencia estatal en calidad de secciones, conservando sus fondos y sus regímenes jurídicos y administrativos.

La vía de la reforma fue otra vez explorada en el Primer Plan Quinquenal, 1947-1951. Como lo ha indicado Peter Ross, el documento oficial del plan, presentado al Congreso en octubre de 1946, contenía una fuerte crítica a las cajas previsionales existentes, por ser al mismo tiempo demasiado generosas y demasiado restringidas. Por un lado, otorgaban elevadas jubilaciones a una edad temprana y brindaban a ciertos grupos de trabajadores seguros por enfermedad y de vida pero, por otro, no ofrecían asistencia médica ni subsidios por desempleo. El Primer Plan Quinquenal propuso hacer tabla rasa con estas instituciones para introducir en su lugar una seguridad social universal. Los niveles de contribución para su sostenimiento se calcularían de acuerdo con el ingreso de una familia modesta promedio, con aportes de trabajadores y empleadores, incre-

mentados en forma progresiva según los salarios. Los beneficios comprendían jubilación a los sesenta años y seguros contra accidentes, en enfermedades, maternidad, incapacidad, fallecimiento y desempleo. La propuesta no llegó a ser implementada, sin embargo.

La presión más importante en su contra provino de los propios trabajadores afiliados a las cajas, que se resistieron a un proceso que conducía a una nivelación de los beneficios. Ésta fue una resistencia que el gobierno prefirió no desafiar. En 1953 una nueva legislación retrotrajo la situación al estado anterior a la creación del Instituto Nacional de Previsión Social, las cajas recuperaron su autarquía, y aquél vio limitadas sus atribuciones al decidir sólo en materia de recursos de apelación. El resultado de la gestión peronista fue, así, la extensión de la red de protección social a secciones más amplias de la población pero también la fragmentación de la solidaridad pública en función de la distinta capacidad de presión de las categorías de trabajadores en el mercado.



Propaganda oficial.

La suerte corrida por la única innovación que se apartó de la fórmula que asociaba la protección social con los resultados en el mercado ilustró cuán sólidos eran los principios e instrumentos heredados del pasado. En 1948, por la ley 13.478, se establecieron pensiones no contributivas para los mayores de 60 años que no estuvieran amparados por algún esquema jubilatorio y no contaran con medios suficientes de subsistencia, a ser financiadas con fondos de la lotería nacional. Si bien tenía un carácter residual y sus beneficios estaban sujetos a que se probara la condición de indigente, este nuevo régimen ampliaba las

fronteras del sistema previsional más allá del principio de la participación laboral. Ocurrió que cuando fue reglamentado, en 1949, su aplicación quedó circunscripta a la Capital Federal y los territorios nacionales, excluyendo a las regiones más pobladas del interior donde los casos de extrema necesidad eran seguramente más probables y frecuentes.

Un desenlace en cierto modo semejante al observado en la previsión social se verificó en la política de salud pública. En este campo, la acción gubernamental tuvo una envergadura inédita en el país y quedó asociada a la figura del doctor Ramón Carrillo, su principal impulsor. Designado al frente de la recién creada Secretaría de Salud Pública en 1946, logró que en 1949 fuera promovida a la jerarquía de ministerio, cuya dirección ocupó hasta 1954. Desde esta plataforma, Carrillo procuró llevar a la práctica el programa desarrollado por el pensamiento sanitarista en la década precedente, un programa que ponía el acento en el primado de la intervención estatal y que confiaba a esa intervención la misión de centralizar las tareas de atención médica y de asistencia social a los efectos de una acción integral. Con el mismo espíritu que lo hiciera en materia de jubilaciones, el Primer Plan Quinquenal condensó dicha misión en el objetivo de crear un sistema unificado de salud que prometía brindar el cuidado médico, curativo, preventivo y de asistencia social a todos los argentinos. Esta ambición universalista, que apuntaba a alcanzar a la población como un todo sin distinciones, tropezó, sin embargo, con una variedad de obstáculos. Antes de referirnos a ellos destaquemos que, de todos modos, la acción gubernamental comportó un mejoramiento sustantivo en las condiciones de la salud pública.

Para limitarnos a unos pocos indicadores, la oferta de atención médica casi se duplicó en el período. En 1946 el número de camas en hospitales era de 66.300 y en 1954 sumó 131.440, con un incremento del 98,3%, y ello permitió, a su vez, que la cantidad de camas por cada 1.000 habitantes se elevara de 4 en 1946 a 7 en 1954. Esta mayor disponibilidad fue el resultado de las fuertes inversiones realizadas en la construcción de hospitales y puestos sanitarios, así como de los trabajos de modernización organizativa llevados a cabo para corregir las deficiencias heredadas del sistema de salud. Paralelamente, las campañas masivas y de alcance nacional para erradicar las en-

fermedades endémicas fueron una actividad central de la gestión de Carrillo. Entre ellas la lucha por erradicar el paludismo, que afectaba en particular a las provincias del norte, ocupó un primer lugar y tuvo un desenlace exitoso gracias a la utilización en gran escala de DDT y a eficaces acciones preventivas. Campañas similares se hicieron con respecto a enfermedades muy extendidas, como la tuberculosis y la sífilis, las cuales pudieron beneficiarse con la difusión contemporánea de la penicilina y sus derivados. Con la misma inspiración, la educación sanitaria de la población fue otra de las iniciativas prioritarias; como parte de ella fue obligatorio presentar certificados de vacunación para inscribirse en la escuela, realizar trámites administrativos y también viajar.

La acción del Ministerio de Salud Pública fue respaldada por la realización de obras de infraestructura. Con la consigna *Nada es más grande que el agua*, el gobierno peronista extendió los desagües cloacales, la construcción de acueductos y la provisión de agua potable. Los progresos en este terreno fueron, no obstante, lentos. En 1942 aproximadamente 6 millones y medio de habitantes tenían agua corriente y un poco más de 4 millones servicios cloacales; en 1955 los números eran 10 millones y 5 millones y medio respectivamente. Los problemas económicos hacia la mitad del período conspiraron contra estas inversiones y afectaron asimismo los planes de construcción de hospitales y centros de salud. Hubo sí una mejoría en la oferta de personal médico, tributaria, en general, de desarrollos previos, ya que debido a la duración de la formación en medicina —unos ocho años en promedio— los esfuerzos oficiales recién hubieron de tener efectos en el período posterior. Según las estadísticas disponibles, el número de médicos creció de 8.310 en 1934 a 22.412 en 1954, lo que llevó a que se pasara de un médico por cada 1.250 habitantes a cada 850 habitantes entre ambas fechas. El promedio nacional alcanzado al cabo de veinte años, es innecesario aclarar, reunía situaciones muy disímiles. Los mejores indicadores se registraban en la Capital Federal, Córdoba y Santa Fe. En el resto del país, la relación médicos por habitante, si bien mejoró, estuvo lejos de ser satisfactoria. Ocho provincias tenían un médico por cada 1.700 a 2.500 habitantes, mientras que en otras seis y en los territorios nacionales había menos de un médico por cada 2.500 habitantes.

Esta imagen de un progreso cierto pero desigual en los niveles de salud del país conserva toda su vigencia al considerar el impacto de las políticas oficiales de la época. Los datos revelan un descenso sostenido en la tasa de mortalidad para todas las edades de la población. La mortalidad infantil, por ejemplo, cayó de 80,1 por mil en 1943 a 70,4 por mil en 1947 y a 66,5 por mil en 1953. A su vez, la esperanza de vida promedio de los argentinos aumentó de 61,7 años en 1947 a 66,5 años en 1953. Al desagregar estos índices en términos sociales y en términos regionales se comprueba que los valores más positivos eran características de los estratos sociales más altos y de las grandes áreas urbanas de las provincias del Litoral. Fue precisamente contra diferencias semejantes y en nombre de la igualdad de oportunidades del conjunto de la población que Carrillo concibió el proyecto de un sistema unificado de salud.

Como anticipamos, dicho proyecto tropezó con obstáculos importantes, sobre los cuales Susana Belmartino ha llamado la atención. Para comenzar, en 1944, la Dirección Nacional de Atención Médica y Asistencia Social fue dividida en dos: la Dirección Nacional de Salud Pública, en la órbita del Ministerio del Interior, y la Dirección Nacional de Asistencia Social, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. El primer organismo se convirtió en 1946 en la Secretaría de Salud Pública, para transformarse, según fue indicado antes, en Ministerio en 1949. Fuera de la jurisdicción de Carrillo quedaron, pues, las actividades asistenciales, buena parte de las cuales hasta allí estaban a cargo de sociedades de beneficencia tradicionales. Su radicación en el ámbito de la Secretaría, más tarde, Ministerio de Trabajo y Previsión, habría de dar el marco institucional para un desarrollo todavía en ciernes de la acción sindical: la provisión de servicios de salud a los afiliados. El gremio más organizado de entonces, los ferroviarios, inauguró su propio hospital en 1944 y proveyó a los demás de un modelo a imitar, que recogía la experiencia de las mutualidades creadas por las comunidades de inmigrantes extranjeros en las décadas pasadas. Como parte de la relación privilegiada de los gremios con el gobierno peronista surgirán, así, las primeras obras sociales sindicales y lo harán en forma independiente de la pretensión del ministro de Salud de colocar bajo un comando unificado la atención médica y la asistencia social en el

país. En cuanto tales, las obras sociales sindicales implicaron la difusión de una fórmula de cobertura de salud a partir de criterios ocupacionales, cuyos resultados —una solidaridad tan fragmentaria y heterogénea en sus beneficios como la de las cajas de jubilaciones— estuvieron en conflicto con el programa universalista del proyecto de Carrillo.

En 1952, el Segundo Plan Quinquenal confirmó el eclipse de ese proyecto al incluir entre sus metas que los gremios desarrollaran sus propios servicios asistenciales. Para esa fecha era ya una realidad robusta pero también conflictiva con aquella otra iniciativa paralela del gobierno: nos referimos a la obra de la Fundación Eva Perón. Creada en 1948 como "Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón" para dar una estructura a las actividades que ésta venía realizando en el campo social, en 1950 tomó el nombre por el cual sería popularmente conocida. Con el surgimiento de la Fundación culminó la amplia reorganización de la asistencia social que había comenzado en 1944 y proseguido en 1946. Por medio de una sucesión de resoluciones, las sociedades de beneficencia privadas, administradas por damas de los círculos aristocráticos y sostenidas principalmente con dineros públicos, fueron transferidas con sus bienes e instalaciones al ámbito estatal. A partir de estos recursos y de otros que fluirían sin cesar, la Fundación Eva Perón se dirigió a los sectores más desamparados de la población, a ese ancho mundo de los humildes, como fue llamado, que quedaba, en los hechos, fuera de las instituciones de protección social basadas en la participación en el mercado laboral, ya sea porque no tenían un trabajo regular o porque en el caso de los más viejos, si bien habían trabajado toda la vida, muchos de ellos llegaban a la edad de retiro sin tener jubilación. La Fundación construyó hogares para huérfanos, madres solteras y ancianos indigentes, comedores escolares, hospitales de niños y policlínicas, colonias de vacaciones y hoteles de turismo, viviendas de bajo costo y escuelas de enfermeras. Por medio de actividades de prolongado eco en la memoria popular, también se hizo presente en las navidades repartiendo juguetes y bicicletas y en la organización anual de los campeonatos infantiles y juveniles de fútbol.

Volviendo a los avatares del proyecto de Carrillo, señalemos que las iniciativas de la Fundación colocaron un obstáculo adi-

cional al puesto por las obras sociales sindicales. En efecto, la política hospitalaria del Ministerio de Salud debió acomodarse a los planes de Evita, que siempre tenían prioridad, y ello le restó recursos y coherencia a la hora de las decisiones. Un último aspecto, relativo a su financiamiento, merece ser subrayado. Los fondos de la Fundación Eva Perón provinieron de varias fuentes. Entre las más sustantivas, de donaciones no siempre voluntarias de empresas y contribuciones extraordinarias de los sindicatos, de las entradas anuales de la Lotería Nacional, los casinos y las carreras, finalmente de los aportes regulares de los trabajadores —el salario de dos días no laborales al año y los aumentos salariales del primer mes de vigencia de nuevos convenios colectivos—. Estos aportes, sumados a las contribuciones de los sindicatos, convirtieron en parte a la Fundación en un mecanismo de redistribución de ingresos dentro del propio universo de los sectores populares, desde las categorías más prósperas a las otras más necesitadas. Considerado en el marco de la época, su función fue llenar el vacío dejado por el fallido propósito de crear una red de protección social abarcativa de toda la población.



El presidente Perón inaugura el Policlínico Evita, 30 de agosto de 1952.

A diferencia de las políticas sociales examinadas hasta aquí, fue en el terreno de la expansión de la educación donde la democratización del bienestar durante los años del peronismo tuvo un alcance más amplio. Por cierto, el punto de partida a este respecto era claramente mejor ya que recogía los frutos de una intervención pública bastante consistente a lo largo del tiempo y del valor arraigado que la educación tenía en grandes

franjas de la población como medio para el ascenso social. No obstante, a comienzos de la década del cuarenta el problema del analfabetismo continuaba siendo una fuente de preocupaciones, ha observado Raanan Rein. En este sentido, menciona los resultados de un relevamiento hecho entre jóvenes conscriptos por el Ministerio de Guerra del régimen de la Revolución de Junio. De ese estudio se desprendía que, por ejemplo, del total de conscriptos de la clase 1922 incorporados en 1943 el 18,52% era analfabeto. Distinguiendo por el lugar de origen, la proporción de conscriptos que tenía dificultades para leer y escribir era en capital 4,7%, provincia de Buenos Aires 14,20%, provincias del nordeste 23,38%, del centro-este 23,42%, del norte 25,42 %, del sur 18,52%. Estas cifras provocaron inquietud en los altos mandos pues —según fue subrayado en las conclusiones del estudio— al incidir "en la preparación de las reservas del Ejército" afectaban "la defensa nacional". Se agregó, así, una razón adicional a las que existían desde antes en la cultura argentina para dar a la educación el lugar central que tendría en la agenda del gobierno peronista. A par-

Cuadro II: Matricula de la enseñanza primaria

Año	Total de alumnos	Tasa de crecimiento
1921	1.195.774	
1930	1.482.942	2,4%
1931	1.563.016	
1940	1.972.570	2,6%
1941	1.987.257	
1945	2.033.781	0,4%
1946	2.049.337	
1950	2.272.108	2,1%
1951	2.359.854	
1955	2.735.026	3,1%

Fuente: Ministerio de Educación y Justicia, Departamento de Estadística Educativa, *La enseñanza primaria en la República Argentina 1913-1964*, Buenos Aires, 1964, pp. 14-15.

tir de entonces se incrementó la participación de los gastos en educación dentro del presupuesto nacional, siendo en 1953-1954 un tercio más de lo que era en 1946. Asimismo, en 1948 las actividades educativas fueron separadas de la esfera del Ministerio de Justicia y convertidas en la jurisdicción de un ministerio independiente. Con la reorganización administrativa y los mayores recursos financieros se puso en marcha una activa política dirigida a ampliar el acceso a la enseñanza. Sus resultados fueron visibles en todos los niveles pero sobresalieron en particular los alcanzados en el nivel secundario.

El crecimiento de la matrícula en la enseñanza primaria durante el período permitió retomar la tendencia expansiva de las primeras décadas del siglo. Entre los años 1921-1930 y 1931-1940 su tasa de crecimiento anual se habia situado en 2,4% y en 2,6%. Esta tendencia experimentó, sin embargo, un corte abrupto en 1941-1945; en estos cinco años la tasa descendió al 0,4%. Con la llegada del peronismo al gobierno la incorporación a la escuela volvió a crecer, en 1946-1950 al 2,1% y en 1951-1955 al 3,1%. A lo largo de la década la tasa de crecimiento de la matrícula fue superior a la de la población total, lo cual sugiere que el acceso a la enseñanza primaria se extendió a más sectores sociales de menores ingresos, que tuvieron a su alcance más escuelas y más maestros en las zonas centrales pero también en las zonas periféricas de la geografía del país. Sus resultados pueden ser vistos en parte por medio de la evolución de los índices de analfabetismo, siguiendo la descripción hecha por Mariano Plotkin. De 1947 a 1960 el porcentaje de analfabetos mayores de 14 años cayó del 13,6% al 8,9%. Al considerar su distribución por grupos de edad los progresos realizados aparecen con más claridad. Así tenemos que en 1960 el porcentaje de analfabetos entre los individuos cuyas edades estaban comprendidas entre 14 y 29 años —y que por lo tanto habían recibido buena parte de su escolarización durante los años del peronismo— representaban el 21,4% del total de analfabetos; trece años antes, en 1947, la proporción de los que tenían dificultades para leer y escribir en ese mismo grupo de edad era mayor y se elevaba al 25,1% del total de analfabetos.

Cuadro III: Matrícula de la enseñanza media

			Especialidad							
			Normal		Bachiller		Comercial		Técnica	
Año	Total	Tasa	Total	Tasa	Total	Tasa	Total	Tasa	Total	Tasa
1930	83.800		23.453		31.035		8.714		20.598	
1945	202.070	8,8%	50.331	7,1%	62.151	6,2%	27.780	13,6%	61.808	12,5%
1946	217.817		59.653		66.009		30.305		61.850	
1955	467.199	11,4%	97.306	6,3%	110.735	6,8%	83.257	17,4%	175.881	18,4%

Fuente: Ministerio de Educación y Justicia. Departamento Estadístico. Enseñanza Media Tomos I y II (Normal y Media) 1914-1963, Buenos Aires, 1964, pp. 58-59, 283.

Aunque en la propaganda oficial se otorgó mayor atención a la alfabetización y a la expansión de la enseñanza primaria, el hecho es que estos logros fueron comparativamente menores a los observados en la educación media. La matrícula secundaria, que venía creciendo desde 1930 a un promedio anual del 8,8%, entre 1946 y 1955 lo hizo al 11,4%, de tal forma que al final de estos diez años había casi dos veces más estudiantes que al comienzo. A la vista de esta evolución, David Wiñar se ha preguntado si el crecimiento más rápido de la matrícula secundaria implicó el acceso a este nivel de enseñanza de estudiantes provenientes de las clases asalariadas urbanas. Su respuesta es afirmativa y para ello señala que las modalidades que más aumentaron fueron aquellas en las que tiende a haber más estudiantes de ese origen social, la enseñanza comercial y la enseñanza técnica, según se desprende del Cuadro III. En términos más generales, el fuerte crecimiento de la matrícula total del nivel medio —varias veces superior al crecimiento vegetativo de la población, ubicado en torno del 1,8%— puso de manifiesto su extensión a la mayor parte de los hijos de las clases medias y, a la vez, la incorporación significativa de los hijos de los estratos altos de las clases trabajadoras, sectores que contaban con el capital cultural y los recursos materiales para sacar mejor partido de la ampliación de las oportunidades educativas llevada a cabo por el gobierno peronista. Finalmente, destaquemos que también la matrícula universita-

ria registró un sustancial aumento, con una tasa anual del 11,3% entre 1945 y 1955, multiplicando por tres el número de estudiantes que recibía educación superior, que pasó de 47.387 alumnos a 138.628.

Así como para el acceso a la educación puede afirmarse que las políticas oficiales y la elevación del nivel de vida se combinaron para dar mayor intensidad a un proceso que ya estaba en marcha desde tiempo atrás, lo mismo vale para otro capítulo importante de la democratización del bienestar, el desarrollo del turismo de masas. Éste fue un objetivo que estuvo presente desde un comienzo en la gestión del peronismo. Empero, lo que habría de distinguirla sería más la envergadura que la novedad de las iniciativas a través de las cuales se concretó. El esparcimiento en los lugares de veraneo como programa del uso del tiempo libre venía creciendo sostenidamente en la década del treinta, difundiéndose entre capas más amplias de la población. El balneario de Mar del Plata y las sierras de Cór-



Inauguración de una escuela-fábrica en 1950.

doba eran los destinos preferidos en el paisaje turístico del país, que incluía asimismo centros más lejanos y todavía incipientes en torno de las Cataratas del Iguazú, las estaciones termales de Mendoza y Salta y el lago Nahuel Huapi. El plan de obras viales de los gobiernos conservadores contempló precisamente a los dos primeros, con la pavimentación de las rutas dos y ocho, respectivamente, ensanchando las puertas de entrada al ocio estival. Al tren se agregó ahora el automóvil y luego el ómnibus y con ellos aumentó el flujo de veraneantes, atraídos por la proliferación de hoteles y pensiones al alcance de bolsillos más modestos. Los cambios con los que se encontraron los nuevos visitantes, mayoritariamente de clase media, fueron más visibles en Mar del Plata, donde la ciudad ofreció una pantalla más expresiva que las localidades dispersas de las sierras de Córdoba a las transformaciones urbanas inducidas por la expansión del turismo.

A fines de los años treinta, el gobernador Manuel Fresco promovió una modificación radical en la antigua villa balnearia de la elite social. En 1940, la demolición de la Rambla Bristol, de estilo francés, construida veintisiete años antes como manifestación espléndida de la sociabilidad aristocrática, resumió el fin de una época. En su lugar se levantó el complejo Bristol-Casino-Hotel Provincial, formado por dos macizos edificios gemelos, separados por una plaza de cemento, que albergaban en sus dependencias cuatrocientas habitaciones del hotel, cuarenta locales para negocios, un teatro-cine con dos mil localidades, treinta departamentos en el casino, restaurantes, balnearios con ochocientas sillas, locales para clubes deportivos, una pileta de natación y amplias salas de entretenimiento. La otra obra importante consistió en la construcción de un lugar acorde con el éxodo de la elite veraneante en dirección al sur, más allá del Cabo Corrientes, en Playa Grande. Las nuevas instalaciones comprendieron ocho edificios balnearios, una pileta de natación para mil bañistas, un restaurante en armonía con el estilo señorial del Golf Club, más locales de comercio y playas de estacionamiento cubiertas. La cesión de la Playa Bristol a los turistas más recientes y la radicación de los antiguos en Playa Grande convalidó las mutaciones del paisaje social operadas en los años previos y delineó el perfil perdurable de Mar del Plata como balneario



Almanaque Alpargatas, dibujo de L. J. Medrano, 1947.

de masas. Quedó, así, preparado el escenario para recibir a la nueva ola de veraneantes que afluyó a sus playas durante los años del peronismo.

Los 380.000 turistas arribados a Mar del Plata en la temporada de 1940 aumentaron diez años después a un millón y en 1955 crecieron más todavía, sumando 1.400.000. Entre aquellos para los que llegaba por fin la oportunidad de pasar las vacaciones junto al mar un número importante era beneficiario de la política de turismo social del gobierno. Con respecto a esta política corresponde indicar que retomaba, en gran escala, experiencias conocidas en los años previos y asociadas a los primeros centros de recreación veraniega dedicados a las familias obreras levantados a iniciativa de algunos sindicatos y organizaciones católicas. Los pilares del turismo social peronista fueron colocados en 1945. El decreto por el que se creó el aguinaldo estableció un descuento del 5% con destino a la promoción del turismo entre los trabajadores y la construcción de

colonias de vacaciones. Por vez primera se asignaron oficialmente fondos con ese fin, que en 1948 fueron transferidos a la Fundación Eva Perón. A ellos se sumaron otros provenientes de la estatización de los casinos en 1946. También en 1945 otro decreto generalizó al conjunto de los asalariados un beneficio que tenían sólo pocos gremios, las vacaciones anuales con goce de sueldo. En estas condiciones, una variedad de programas se pusieron en práctica.

El Ministerio de Obras Públicas construyó dos grandes colonias de vacaciones, una en Chapadmalal, a 30 kilómetros de Mar del Plata, con capacidad para 4.700 pasajeros, y la otra en Embalse Río Tercero, Córdoba, con instalaciones para 3.000. Su administración quedó a cargo de la Fundación Eva Perón, la cual amplió, a su vez, la oferta de alojamiento mediante convenios de alquiler con hoteles privados para dar albergue gratis, en especial a grupos de niños con sus maestros. Otro proyecto del Ministerio fueron las tres gigantescas piscinas, para 1.500 bañistas cada una, en las cercanías del aeropuerto de Ezeiza. La nacionalización de los ferrocarriles permitió agregar a los hospedajes oficiales varios hoteles levantados por las compañías británicas en Mendoza y Córdoba. En esta última provincia, en particular, diversos ministerios construyeron hoteles para sus empleados. Los programas de turismo oficial incluyeron, asimismo, a los gobiernos de provincia; entre ellos sobresalió el de Buenos Aires durante la gestión de Domingo Mercante, quién expropió 24 chalets en Playa de los Ingleses en Mar del Plata para uso de los sindicatos, instaló numerosos clubes de turismo en lugares de veraneo y promovió su propio plan con una consigna de gran impacto: *Usted se paga el viaje, la provincia el hospedaje*.

Este inventario, por cierto incompleto, de las iniciativas oficiales ilustra las mayores oportunidades que tuvieron los asalariados para emplear los diez días de tiempo libre al año puestos a su alcance por la generalización de las vacaciones pagas. Para apreciar sus resultados dirijamos la atención a la capital del ocio estival, Mar del Plata. En la visita que realizara en 1954, para la inauguración del muy celebrado Festival Internacional de Cine, Perón hizo un balance público de su gestión. Allí subrayó que a diferencia de lo que observara en un viaje previo, diez años antes, el balneario ya no era el recinto selecto

de un grupo de privilegiados porque "el noventa por ciento de los que veranean en esta ciudad de maravilla son obreros y empleados de toda la patria". Digamos, primero, que su representación de Mar del Plata hacia 1944 era escasamente fidedigna. Como ya destacamos, para entonces, los tiempos de la villa aristocrática habían sido simbólicamente clausurados con la demolición de la Rambla Bristol, para dejar paso al nuevo ciclo de la ciudad como balneario de masas. Igualmente, quien hubiese recorrido sus paseos y sus playas en 1954 habría comprobado que aún no había llegado la hora en que los obreros y empleados fuesen una mayoría entre los argentinos que llegaban a ellas en los meses de enero a marzo.

Los años del peronismo fueron más bien los que marcaron el avance final de las clases medias sobre Mar del Plata. Vistas en perspectiva, las políticas públicas que tuvieron mayor impacto en la ciudad balnearia fueron la sanción de la Ley de Propiedad Horizontal y los créditos subsidiados del Banco Hipotecario. Por medio de ellas, nuevos contingentes de pequeños y medianos comerciantes e industriales, profesionales y altos empleados pudieron volverse propietarios. Después de 1948 y en un corto lapso el setenta por ciento del casco céntrico quedó convertido en escombros, desapareciendo las villas y mansiones de la *belle époque* alrededor de la plaza y la avenida Colón. Las zonas de la ciudad que la elite veraneante abandonó, trasladando sus residencias al barrio Los Troncos, próximo a Playa Grande, fueron prontamente ocupadas por miles de departamentos, construidos en tiempo récord y con generosos créditos bancarios. Culminaba de este modo, bajo el peronismo, la secuencia iniciada con los conservadores: el desplazamiento de la elite social de sus dominios originales.

Los obreros y empleados a los que se refirió Perón participaron de esa expansión de la recreación veraniega pero lo hicieron previsiblemente de acuerdo con sus posibilidades. Muchos de los que recién se incorporaban al mundo industrial y urbano tenían necesidades más apremiantes en la economía familiar y les faltaban todavía los contactos y la información para descubrir las ventajas que el nuevo orden ofrecía. En verdad, los datos disponibles muestran que los beneficios del turismo social se distribuyeron siguiendo las líneas de estratificación interna de las clases asalariadas. Aquellos que primero

disfrutaron de ellos con recursos propios y subsidios públicos fueron los estratos más antiguos y mejor organizados: telefónicos, ferroviarios, estatales, municipales, empleados de correo y del comercio. El caso de los mercantiles se destacó entre todos. Anticipándose en muchos años al resto de los gremios, éste sería el único que pudo alojar en Mar del Plata a sus afiliados bajo techo propio con la compra en 1947 y 1948 de los hoteles Hurlingham y Riviera. Es difícil estimar el impacto de esas primeras experiencias de turismo social porque no se cuenta con indicadores confiables. Sí es posible sostener, empero, que sus beneficiarios se diluyeron en medio del millón de visitantes que llegaba a Mar del Plata en la temporada veraniega a principios de los años cincuenta. Éstas fueron, de todos modos, experiencias que dejaron un duradero recuerdo entre los que participaron de ellas y volvieron más verosímil la imagen oficial de Mar del Plata como *espejo de la democracia social argentina*.

EL DESENLACE CONFLICTIVO DE LA DEMOCRATIZACIÓN DEL BIENESTAR

El proceso de democratización del bienestar al que asistió el país durante la década peronista puede ser condensado en una imagen, la de una familia típica tal como aparece en forma recurrente en la propaganda oficial y los libros de lectura de la escuela. En ella, el padre está sentado leyendo el diario o escuchando radio, la madre se encuentra haciendo labores domésticas y los hijos, entre tanto, ocupados en sus tareas escolares. La escena reúne virtualmente rasgos característicos de la época.

En una breve enumeración, allí está presente, en primer lugar, la mayor prosperidad, producto del pleno empleo y los altos salarios, que permite al jefe del hogar disfrutar de su tiempo libre al cabo de la jornada de trabajo. A pesar de las fluctuaciones registradas a lo largo del período, la tendencia al fortalecimiento del poder adquisitivo de los salarios contribuyó a dar mayor seguridad económica a las familias. La proporción del gasto familiar que cubría el salario básico del trabajador industrial que en 1943 era del 85%, en 1955 se elevó a casi el 100%; de esta forma, el jefe del hogar estuvo en condiciones

de hacerse cargo, a partir de sus propios ingresos, de las necesidades de su familia. En estas circunstancias, más argentinos pudieron salir a buscar pareja y contraer matrimonio. Esto es lo que muestran las estadísticas. La tasa de nupcialidad que para el país era del 6,58 por mil habitantes en 1936-1940, pasó a 7,38 en 1941-1945, y a 8,32 en 1946-1950. No sólo aumentó el número de matrimonios. También se observó a partir de 1947 que los hombres y las mujeres por igual comenzaron a casarse a edades más jóvenes, ampliando, así, el universo abarcado por la imagen de la familia típica popularizada por el peronismo.

Continuando con sus detalles, en esa imagen se advierte, en segundo lugar, la confirmación de la mujer en los papeles tradicionales de esposa y madre. En efecto, en cuanto a la concepción del lugar de la mujer en la sociedad, los años del peronismo no trajeron consigo cambios apreciables. En parte, porque el aumento en el nivel de vida de la población y los mejores salarios de los jefes de familia permitieron que la declinación de la participación femenina en el mercado de trabajo observada desde tiempo atrás continuara su curso. En el censo de 1947 se registró su punto más bajo: sólo una de cada cinco mujeres que tenían 14 o más años tenía una ocupación remunerada. Recién hacia el final del período, entrando en la década del sesenta, el nivel de la participación económica de las mujeres comenzará a crecer. Entre 1946 y 1955, en cambio, una mayoría de ellas continuará viendo en el trabajo pago o en una carrera una parte secundaria de sus vidas y contará con las condiciones materiales para prolongar en el tiempo la primacía de su lugar como guardiana del hogar.



Imagen de una familia trabajadora reproducida en La Argentina de Perón.

Siguiendo a Catalina Wainerman en su investigación sobre las ideas dominantes en torno de la condición femenina —basada en

el análisis de los libros de lectura de la escuela primaria—, lo que se constata en estos años es, además, la fuerza de las concepciones heredadas. Por ejemplo el trabajo extradoméstico seguirá siendo concebido como una pesada carga y nunca la oportunidad para la realización personal. Un logro de entonces, el ejercicio de los derechos políticos con la ley del voto femenino de 1947, fue, a su vez, colocado en el marco de la visión tradicional. Así, el acto de votar habrá de ser presentado como la ocasión para que la mujer pusiera de manifiesto sus más profundos valores morales, como un instrumento para la preservación de los valores del hogar antes que la elección de un programa político. En los libros de lectura las mujeres famosas en la historia tendieron a ser celebradas por sus cualidades humanitarias y su sensibilidad social, esto es, por rasgos que se quieren esencialmente femeninos y no por sus logros científicos, artísticos o sociales específicos. El ejemplo sobresaliente es el de Eva Perón, que fue vista como una suerte de madre universal cuyo hogar era la patria y sus hijos el pueblo argentino.

A todo esto hay que agregar que la mayor escolarización de las mujeres —otro de los avances del período— amplió el público de las revistas femeninas surgidas en los años previos. Y en ellas, las nuevas lectoras encontraron historias cuyos temas dominantes giraban alrededor del romance, el casamiento, el hogar. En la ratificación de la concepción tradicional también ejerció un papel la publicidad: sea que se dirigieran al ama de casa de clase media o a la joven asalariada, los mensajes ponían el énfasis en ropas, cosméticos, artefactos domésticos, en la familia bien alimentada y el marido feliz. Esta cultura centrada en el hogar postergó cualquier atisbo de emancipación femenina y, en los hechos, su desigualdad de status frente al derecho laboral y al derecho civil no fue sustancialmente modificada.

Completando la descripción de la escena familiar, en ella tenemos, en tercer lugar, a los niños, *los únicos privilegiados* que reconocía un gobierno cuyo objetivo declarado era la reducción de los privilegios. Generalmente, eran dos los hijos que figuraban junto a sus padres y ello estaba en línea, si no con el ideal oficial, por lo menos con la trayectoria de la tasa de natalidad. En la Argentina, la transición hacia la familia pe-

queña, con pocos hijos, había comenzado tempranamente, de suerte que la descendencia final promedio de las parejas formadas hacia 1915 se acercaba ya a los tres hijos, según la estimación hecha por Susana Torrado para Buenos Aires. Esta transición muy probablemente se verificó con algún rezago en las grandes ciudades del Litoral, para comenzar mucho más tarde en las zonas rurales, donde por mucho tiempo las familias tuvieron más de cinco hijos.

La gestión del peronismo procuró revertir esta tendencia con medidas de promoción de la natalidad. Sin embargo, entre los grupos recién urbanizados, que llegaban al área metropolitana desde el interior, las prácticas anticonceptivas se difundieron rápidamente, estrechándose las diferencias con relación a los sectores de más antigua radicación. El fenómeno más novedoso del período radicó, en rigor, en la reversión temporaria de la tendencia entre los grupos de natalidad más baja, las familias de las clases medias y altas, a las que la bonanza económica de esos años estimuló a volver a tener más hijos.

Un detalle final y significativo de la imagen de la familia típica antes evocada merece ser subrayado. Con frecuencia, en el epígrafe se señala que lo que allí está representado es una familia trabajadora. Comentando esta escena, Luis Alberto Romero ha destacado que el modelo cultural propuesto para los trabajadores no era estrictamente proletario. Más bien, ese trabajador, sentado en un cómodo sillón en la sala de estar de su hogar, con saco y corbata, leyendo el diario o escuchando la radio, en compañía de su familia, correspondía a la representación idealizada de las clases medias. Eso fue, en efecto, lo que ocurrió durante esos años, en los que se redistribuyeron, junto a los ingresos, unos estilos de vida en cuya excelencia el gobierno instalado en 1946 en momento alguno dudó.

En verdad, el peronismo promovió un cambio social pero no propuso una cultura alternativa. Su audacia, en todo caso, consistió en crear las oportunidades que pusieran al alcance de nuevas mayorías los ideales y las costumbres que los sectores medios ya habían probado y en los que la ciudad se reconocía ufana. Así, la radio, el cine, las revistas acercaron la intimidad de los hogares de clase media a quienes sólo habían tenido ocasión de echarles una mirada subrepticia en el pasado y ahora eran invitados a imitarlos. Las que a menudo suelen ser in-

dicadas como las expresiones de una cultura popular en la ciudad —las comidas regionales típicas en los recreos de diversiones o las danzas folclóricas en los salones de baile— comprendían sólo a porciones reducidas de los sectores obreros, los recién llegados de la provincia, y eran episodios coloridos de su incorporación a la sociedad urbana en la que ya otros como ellos habían ido insertándose. Como destacamos antes, esa inserción resultó más dificultosa en el plano de la vivienda. Muchos de los que arribaban atraídos por la demanda de trabajo debieron instalarse en los refugios precarios de las villas de emergencia. Pero éstas, antes que el ámbito de una cultura de la pobreza destinada a reproducirse indefinidamente, habrían de ser entonces los eslabones últimos del vasto proceso de integración que aportó a los nuevos trabajadores una autoestima y la conciencia de pertenencia plena a una Argentina más igualitaria.

Concluyendo, para Buenos Aires y los grupos más establecidos de su estructura de poder y prestigio, la coexistencia con los efectos de la democratización del bienestar no sería empresa fácil. Por un lado estaba la velocidad con la que se producía el cambio en los distintos planos. Países más viejos habían pasado por transformaciones estructurales similares a las que conoció la Argentina desde que se intensificara la industrialización. Sin embargo, en ellos, la traducción de esas transformaciones estructurales al plano de las instituciones y los consumos, al plano de la sociabilidad entre las clases, fue más lenta y gradual, permitiendo una transición menos abrupta a la democracia de masas. Aquí ese proceso se comprimió en el plazo de una década. El largo brazo del Estado hizo que todo sucediera a la vez y rápidamente, el incremento del número de los asalariados, el desarrollo del sindicalismo, la redistribución de los ingresos y los bienes públicos y, en un nivel más profundo, la crisis de la deferencia y del respeto que el orden social preexistente acostumbraba a esperar de sus estratos más bajos.

Por otro lado, lo que volvía todavía más difícil la asimilación del cambio era el tono desafiante con el que eran introducidas sus novedades. El programa de reformas sociales adquiría a través del discurso oficial los contornos épicos de una reparación histórica de incierto y por ello mismo inquietante desenlace. Si para entrever sus alcances la respuesta se busca-

ba en el lenguaje poco conciliador que Perón y sobre todo Evita utilizaban para dirigirse a los vencidos de 1946, entonces los peores presentimientos eran verosímiles. Para adivinar que detrás de tanta hostilidad existía un respeto no menos sincero por los fundamentos últimos del orden económico y social que criticaban habría sido necesario contar con una serenidad de espíritu que pocos pudieron permitirse, envueltos como estaban en un clima de beligerancia y rechazo mutuo. Aunque el blanco de los ataques oficiales lo constituían las clases altas —esa multiforme y omnipresente oligarquía de la tradición política nacional—, las clases medias más antiguas se sintieron igualmente implicadas en la defensa de unos equilibrios sociales y políticos amenazados.

De este modo, Buenos Aires se convirtió en el escenario de un conflicto que fue diferente en sus manifestaciones del que tenía lugar en las empresas del cinturón fabril; se trató de un conflicto cultural por medio del cual la sociedad urbana reaccionó frente a aquello que resumía ejemplarmente cuanto tenía de irritante el cambio social impulsado por el peronismo: la irrupción pública de los migrantes internos. Todavía en 1945 Florencio Escardó pudo escribir en su *Geografía de Buenos Aires*, con inocultable satisfacción, que ésta era:

> "Una ciudad de la raza blanca y del habla española que ninguna otra ciudad del mundo puede reclamar. Es la ciudad blanca de una América mestiza. En ella un negro es tan exótico como en Londres. Y un gaucho también. En este sentido, es mucho más blanca (blanquísima) que Nueva York, que para conservarse blanca tiene que hacer racismo a piedra y lodo. Tampoco tiene aindiados ni mulatos. Sus hombres y mujeres no tienen todos el mismo color ni la piel ni el cabello pero son blancos".

Cuando reedita su libro en 1971, Escardó advierte que su descripción fue "la última anotación de un fenómeno pasado" porque "el interior, es decir, América, ya ha efectuado su marcha sobre Buenos Aires". Y luego recuerda que la ciudad llamó a los migrantes internos con "el mote cariñoso de los *cabecitas negras*", aludiendo a la tez más oscura de muchos de ellos. Es posible que, a la distancia, Escardó tuviera sus razones para

verlos con simpatía pero para sus contemporáneos de los años peronistas la referencia a los cabecitas negras tuvo una significación emocional muy distinta, si vamos a juzgarlos a partir de su actitud ante las muchedumbres del 17 de octubre.

Para una ciudad tan libre de prejuicios étnicos, puesto que era la amalgama de pueblos y culturas de orígenes muy diversos reunidos por las corrientes inmigratorias, la aparición y la extendida circulación del estereotipo de los cabecitas negras fueron reveladoras. Como sucede con los estereotipos que responden a una base étnica, el de los cabecitas negras tuvo por función subrayar la diferencia, marcar la separación entre un nosotros y los otros, oponer, en fin, al proceso de integración en marcha un proceso inverso, de segregación. Que esa segregación no haya tenido una expresión institucionalizada, que se manifestara sutilmente en el trato cotidiano y se revistiera con frecuencia de un blando paternalismo, no la hizo por ello menos real y efectiva; ella puso de manifiesto la desestabilizadora experiencia provocada por los efectos más visibles de la democratización del bienestar.

BIBLIOGRAFÍA

Alzugaray, R. A.: *Ramón Carrillo, el fundador del sanitarismo nacional*, 2 vols., CEAL, Buenos Aires, 1988.

Archetti, Eduardo: "Fútbol, imagen y estereotipos", en: F. Devoto y M. Madero: *Historia de la vida privada en la Argentina*, vol. 3, Taurus, Buenos Aires, 1999.

Ballent, Anahí: "La casa para todos: grandeza y miseria de la vivienda masiva", en: F. Devoto y M. Madero, *op.cit.*

Belmartino, Susana: "Transformaciones internas del sector salud: la ruptura del pacto corporativo", en: *Desarrollo Económico*, Nº 137, vol. 35, abril-junio, 1995.

Blengino, Vanni: *Más allá del océano. Un proyecto de identidad: los inmigrantes italianos en la Argentina*, CEAL, Buenos Aires, 1990.

Campins, M., Gaggero, H. y Garro, A.: "La Fundación Eva Perón", en: Castro Gómez, A. et al: *Estado, corporativismo y acción social en Brasil, Argentina y Uruguay*, Fundación Simón Rodríguez-Editorial Biblos, Buenos Aires, 1992.

Germani, Gino: *Estructura social de la Argentina*, Raigal, Buenos Aires, 1955.

———: "La movilidad social en la Argentina", en: Seymour Lipset y R. Bendix: *Movilidad social en la sociedad industrial*, EUDEBA, Buenos Aires, 1963.

———: *Política y sociedad en una época de transición*, Paidós, Buenos Aires, 1966.

Gutiérrez, Leandro H. y Romero, L. A.: *Sectores populares, cultura y política*, Sudamericana, Buenos Aires, 1995.

James, Daniel: "El 17 y 18 de octubre de 1945: El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina", en: *Desarrollo Económico*, Nº 107, vol. 27, octubre-diciembre, 1987.

Plotkin, Mariano: *Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista (1946-1955)*, Ariel, Buenos Aires, 1993.

Rein, Raanan: *Peronismo, populismo y política argentina 1943-1955*, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1998.

Romero, Luis Alberto: *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1994.

———: *Latinoamérica: las ciudades y las ideas*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2001.

Ross, Peter: "Justicia social: una evaluación de los logros del peronismo clásico", en: *Anuario de IEHS*, vol. VIII, Tandil, 1993.

Sabato, Hilda: *La política en las calles*, Sudamericana, Buenos Aires, 1997.

Scarzanella, Eugenia: "El ocio peronista: vacaciones y turismo popular en Argentina (1943-1955)", en: *Entrepasados*, N° 14, 1998.

Smulovitz, Catalina: *Políticas estatales de seguridad y asistencia social, 1943-1955*, tesis de licenciatura en Sociología, Universidad del Salvador, 1979.

Torrado, Susana: *Estructura social de la Argentina, 1945-1983*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1992.

Torre, Juan Carlos: "La ciudad y los obreros", en: José Luis Romero y L. A. Romero: *Buenos Aires, Crónica de cuatro siglos*, 2da edición, Altamira, Buenos Aires, 2000.

Torre, Juan Carlos y Pastoriza, Elisa: "Mar del Plata, un sueño de los argentinos", en: F. Devoto y M. Madero, *op.cit.*

Ulanovsky, Carlos: *Días de radio*, Espasa Calpe, Buenos Aires, 1996.

Wainerman, Catalina: *Sexismo en los libros de lectura de escuela primaria*, IDES, Buenos Aires, 1987.

Wiñar, David: "Poder político y educación. El peronismo y la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional", documento de trabajo, Centro de Investigación en Ciencias de la Educación, Instituto Di Tella, noviembre, 1970.

Yujnovsky, Oscar: "Del conventillo a la villa miseria", en: José Luis Romero y L. A. Romero, *op.cit.*

VI

Evita

por MARYSA NAVARRO



Perón repartiendo pan dulce y sidra en Vicente López, 24 de diciembre de 1946.



Uno de los cambios importantes ocurridos en la sociedad argentina durante la primera presidencia del general Juan Domingo Perón fue el ingreso masivo de las mujeres al mundo de la política. Este proceso se inició con la aprobación de la ley de sufragio femenino, número 13.010, y tuvo como eje y agente propulsor la transformación de Eva Perón, esposa del presidente, en Evita, una de las grandes figuras políticas femeninas del siglo XX.

La mitología sobre Evita, tejida con rumores, chismes, fantasías, ficciones, versiones no confirmadas e interpretaciones, en su gran mayoría huérfanos de fuentes documentales pero repetidos *ad nauseam*, ha sido la preocupación principal de muchas de las personas que han escrito sobre ella a partir de los años cincuenta. Este trabajo se propone dejar de lado las dimensiones mitológicas de Evita, por muy fascinantes que sean, y centrarse en la persona de carne y hueso que dio lugar a esa mitología, o sea en el personaje político, un tema que tradicionalmente ha encontrado resistencia tanto en círculos peronistas como

antiperonistas. Mi propósito es tratar de explicar cómo y por qué se introdujo Evita en la estructura de poder y qué hizo con el poder y la influencia que acumuló una vez que se inició el primer gobierno peronista.

Evita fue la primera esposa de un presidente argentino que usó su condición de primera dama no sólo para hacer política, sino también para gestar su propia candidatura a la vicepresidencia de la República. Hasta el momento, ninguna otra primera dama en ningún país del mundo ha tratado de imitarla, aunque cada vez son más las esposas de presidentes que además de cumplir funciones ceremoniales desarrollan actividades francamente políticas.

Evita decidió hacer política en una sociedad en la que las primeras damas, por lo general de un origen social incuestionable, eran personajes desdibujados, que frecuentemente pasaban desapercibidos y para los cuales la política estaba implícitamente vedada, si bien entonces como ahora se veía con buenos ojos que se dedicaran a alguna obra filantrópica. Había habido una cierta excepción en un pasado no muy lejano. Regina Pacini de Alvear, nacida en Portugal, había sido una primera dama ligeramente diferente no por lo que hizo durante los años en que su esposo fue presidente (1922-1928), sino porque antes de casarse con él había sido una famosa cantante de ópera. Pero una vez que Alvear ascendió a la presidencia, se convirtió en otra primera dama ejemplar, o sea, se hizo invisible.

La carrera política de Evita es tanto más notable puesto que a principios de los años cuarenta las mujeres argentinas ni siquiera podían votar en elecciones nacionales y la política era una actividad del ámbito público normalmente reservada a los hombres. Claro está que, a pesar de su exclusión formal de los procesos electorales, había mujeres que no se habían privado de hacer política desde hacía muchos años y lo seguirían haciendo hasta la primera presidencia de Perón. Así, por ejemplo, a fines del siglo XIX, principios del XX, mujeres como Juana Rouco Buela, María Collazo, Virgina Bolten y Marta Newelstein habían militado en el anarquismo cuando estaba en su auge, a pesar de la resistencia de muchos varones a la presencia de mujeres en el movimiento. Hoy olvidadas por los estudiosos del anarquismo, se las arreglaron para publicar un periódico, *La Voz de la Mujer*, organizar grupos como el Centro Luisa Michel

en Rosario y en Buenos Aires, participar en huelgas célebres (como la de los inquilinos), fundar el Grupo Alcalá del Valle y el Centro Anarquista Femenino.

Por su parte, desde principios del siglo XX, el socialismo también contó con un grupo importante de mujeres entre sus militantes: Gabriela Laperriere de Coni, las hermanas Fenia y Xenia Chertkoff, Cecilia S. de Baldovino, Carolina Muzzilli y Sara Justo, entre otras. Alicia Moreau de Justo merece una mención especial por haber desarrollado una intensa actividad política a lo largo de casi todo el siglo XX, no solamente en el socialismo sino también en el feminismo y en el campo de los derechos humanos. Algunas socialistas ocuparon puestos de dirigencia y todas ellas dejaron sus huellas en la izquierda argentina, aunque a veces sea difícil encontrarlas en las historias del Partido Socialista.

Finalmente, también desde principios del siglo XX, el feminismo representó un frente de lucha política para algunos grupos reducidos de mujeres, muchas de ellas las primeras egresadas de la universidad argentina. Cecilia Grierson, Elvira Rawson de Dellepiane, Elvira López, Petrona Eyle, Julieta Lanteri Renshaw, Sara Justo y Alicia Moreau de Justo, entre otras, emprendieron entonces una larga lucha para tratar de poner fin a su condición de ciudadanas con derechos civiles limitados y sin derechos políticos. Empezaron a criticar las desigualdades que afectaban a todas las mujeres y que las colocaban en una posición de tal subordinación a sus padres primero y a sus maridos después que nunca podían llegar a ser adultas. En su caso, la falta de derechos civiles representaba una irracionalidad particularmente difícil de aceptar. Así, por ejemplo, las médicas, como lo eran varias, tenían la vida de sus pacientes en sus manos, pero legalmente no podían firmar un contrato porque eran mujeres; en 1889, cuando Grierson se recibió de médica, descubrió que no podía ejercer su profesión.

Las feministas crearon organizaciones y patrocinaron congresos para demostrar la necesidad de reformar el Código Civil, ampliar las posibilidades educativas de todas las mujeres y obtener la aprobación de una ley que reconociera su derecho al sufragio. Si bien consiguieron algunas reformas importantes desde el punto de vista de los derechos civiles en 1926, sus

esfuerzos por conseguir el voto, particularmente intensos en los años treinta, estuvieron condenados al fracaso. Su última tentativa antes del golpe militar de junio, como muchas de las anteriores, murió en una Cámara de Senadores dominada por los conservadores y sistemáticamente opuesta al sufragio femenino.

Pero estas mujeres y otras, como las que militaban en el Partido Comunista, el Partido Radical o en el movimiento obrero, representaban solamente una minoría que no afectaba la visión dominante de lo que debía ser una mujer en la Argentina en los años cuarenta, cualquiera que fuese su clase social: una hija para la cual no era deseable demasiada educación y ciertamente nada que se pareciera al trabajo asalariado (ni siquiera para las de clase obrera) o la participación en el mundo público, ya que llegado el momento apropiado se convertiría en la fiel esposa (de un marido que probablemente no siempre le correspondería del mismo modo) y una madre sacrificada dedicada al cuidado de sus criaturas. En este contexto, correspondiera o no a la realidad, y sin tener en cuenta las críticas de las que fue objeto Evita por su origen social, su profesión y su relación amorosa con Perón —un político que desató tantas pasiones encontradas como ella—, no son de extrañar las fuertes reacciones que desencadenó su ingreso al mundo de la política desde un primer momento. Su presencia no sólo desafiaba el estereotipo de "la mujer argentina" sino también el de "la esposa" del Presidente. Aquí vale la pena mencionar un hecho irónico y es que, a pesar de las profundas diferencias ideológicas entre Evita y el grupo de mujeres socialistas mencionadas, había en varias de ellas un elemento común: al igual que Evita, estaban unidas a dirigentes políticos que avalaron sus actividades políticas.

Por lo general, dentro de la bibliografía sobre el peronismo, si bien se toma nota con mayor o menor entusiasmo de la presencia de Evita durante la primera presidencia peronista y se critica o alaba su gestión social en favor de los sectores populares y su apoyo al peronismo, no hay una preocupación mayor por explicar cómo y por qué se produjo su inserción en el sistema político argentino. Se soslaya el tema, quedando implícito en consecuencia que su presencia en el poder debía tener antecedentes, no rompió con el pasado y por lo tanto no tiene por

qué ser cuestionada. Además de no tomar en cuenta el problema histórico que plantea Evita, muchas veces esta visión da origen a una interpretación simplista, por la cual Evita, en tanto figura política, aparece como el resultado de su propia voluntad o la de Perón o la de ambos; esto no queda demasiado claro. En este caso, la explicación depende otra vez de la postura de los autores o las autoras con relación al peronismo. Así, la voluntad de Perón puede ser manipuladora y dictatorial o la expresión de su extraordinario genio político, mientras que la de Evita es por lo general fruto de su profundo resentimiento y de su ambición desenfrenada o de su infinita vocación de sacrificio.

DE LOS TOLDOS A ESTRELLA DE RADIOTEATRO

Por el momento, no sabemos con exactitud qué opiniones políticas tenía Evita hasta que conoció al coronel Perón, en enero de 1944 durante un festival para los damnificados por el terremoto de San Juan. En aquel entonces ella se llamaba Eva o Evita Duarte. Era actriz de cine y radioteatro, tenía 24 años, el pelo negro hasta los hombros y una sonrisa suave. Nacida en una familia humilde de Los Toldos, un pueblito de la provincia de Buenos Aires, era hija natural, como sus tres hermanas y su hermano. Después de terminar sus estudios primarios en Junín, donde la familia se había trasladado, como quería ser actriz, se fue a buscar fortuna a Buenos Aires. Tenía 15 años y era la década del treinta, cuando las oleadas de hombres y mujeres abandonaban sus pueblos para ir a la capital, en busca de una vida mejor. Evita tuvo suerte de conseguir trabajo en varias compañías de teatro al poco tiempo de llegar. En los años siguientes continuó haciendo teatro —también publicidad y cine— pero sin demasiado éxito. Hacia 1939, su suerte empezó a cambiar pues se incorporó a un elenco de radioteatro en momentos en que la radiofonía entraba en un período de gran expansión. En enero de 1944, cuando conoció a Perón, encabezaba el elenco de una compañía de radioteatro y además seguía haciendo cine.

Perón era un viudo de 48 años, alto, buen mozo, peinado a la gomina y de sonrisa gardeliana. Ocupaba dos puestos en el go-

bierno: era subsecretario de Guerra y encabezaba la recientemente creada Secretaría de Trabajo y Previsión. Muy pronto se perfilaría como la figura más conflictiva entre los militares que tomaron el poder en junio de 1943. La razón principal era la política social que empezó a desarrollar en nombre del gobierno militar desde la Secretaría de Trabajo. Era una política nueva, de acercamiento a los sindicatos, dura con los dirigentes obreros comunistas o socialistas que se rehusaban a colaborar con él, pero que apoyaba a los que respondían favorablemente. Adoptó medidas por las que propició la formación de nuevos sindicatos, aseguró el cumplimiento de las leyes laborales existentes y elaboró algunas nuevas, incluso para los hombres de campo, como el Estatuto del Peón (14 de octubre de 1944). El 1° de mayo de 1944, para sorpresa de los dirigentes sindicales, organizó un acto en la Secretaría para rendir cuenta al país de lo que había hecho "en bien de los trabajadores de la Patria".



Juan Domingo Perón junto a Eva Duarte.

A los pocos días de conocerse, Perón y Evita entablaron una relación amorosa, indudablemente intensa. Se lo vio visitarla en Radio Belgrano, sacarse fotos con ella y pasar a recogerla en su auto. Contrariamente a lo que se acostumbraba en esa época, no escondieron su relación, cosa que muchos de sus compañeros de armas no pudieron aceptar y rápidamente se convirtió en un factor irritante para ellos. En el ambiente pacato e hipócrita de la sociedad porteña de los años cuarenta, donde imperaba la doble moral para los hombres, sobre todo los de la burguesía, el comportamiento de Perón y Evita, que se mudaron a dos apartamentos contiguos y obviamente "se exhi-

bían" juntos, pronto se convirtió en una razón adicional para desprestigiarlo a él, dando origen también a una interminable serie de rumores sobre el pasado de la joven actriz y muy especialmente sobre sus presuntos numerosos amantes, tanto militares como civiles. Por otra parte, la ausencia de Evita en muchas de las ceremonias oficiales a las que Perón debía asistir, a medida que fue adquiriendo más poder, no podía menos que hacer más notoria la situación irregular de la pareja y, a la vez, causar tensiones entre ellos.

La relación entre Evita y Perón se consolidó en un período de gran actividad profesional para ella y en circunstancias políticas agitadas, por la política exterior del gobierno militar. Finalmente, la ruptura de relaciones diplomáticas con el Eje, el 26 de enero de 1944, desencadenó una serie de cambios que terminó con Perón agregando el Ministerio de Guerra y eventualmente la vicepresidencia de la Nación a sus funciones en la Secretaría de Trabajo y Previsión.

En este período Evita estaba haciendo un ciclo de vidas de mujeres famosas en Radio Belgrano. Pronto comenzó la filmación de *La cabalgata del circo* y unos meses más tarde empezaría a rodar su última película, *La pródiga*, la única en la que tendría un papel protagónico. Además, desde el 17 de junio de 1944, participaba en un programa de propaganda política auspiciado por el gobierno militar y la Secretaría de Trabajo, titulado "Hacia un futuro mejor", dirigido por el libretista de su ciclo de mujeres famosas, Francisco Muñoz Azpiri, recientemente nombrado director de la Sección Propaganda de la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia.

Cuando comenzó su relación con Perón, Evita entró de lleno en un mundo que muy pronto la fascinó. Los amigos civiles y militares de Perón que asistían a interminables reuniones en su departamento empezaron a darse cuenta de que, en vez de servir el café e irse, Evita se quedaba y escuchaba atentamente las discusiones. Al poco tiempo de convivir con Perón, vio de muy cerca —y sintió directamente— los embates de los enemigos del coronel, incluso los rumores sobre su persona, y la fragilidad del poder. Al hacer los programas de propaganda política aprendió a emplear conceptos nuevos frente al micrófono, haciendo uso de un lenguaje emotivo, con el que ella se sentía cómoda, ayudada por sus libretistas de radioteatro. En

este período, Perón, el militar de carrera, se transformaba también. Su ámbito ya no eran los casinos de oficiales, los ejercicios de tropas de montaña o la sesuda reflexión sobre estrategias militares, sino las negociaciones, los planteos y los enfrentamientos con sus compañeros de armas dentro del GOU, y fuera de él, con políticos y dirigentes obreros. Sus años de secretario del ministro de Guerra en la presidencia del general Agustín P. Justo le habían dado una experiencia útil para sus nuevas actividades. Además, se revelaba un orador extraordinario, de estilo nuevo, sin el engolamiento de los políticos tradicionales, con un lenguaje directo y ejemplos sencillos que los obreros y dirigentes sindicales que tenían contacto con su gestión en la Secretaría de Trabajo y Previsión aplaudían con enorme entusiasmo.

LAS MUJERES Y LA CAMPAÑA CONTRA EL CORONEL PERÓN

Las actividades de Perón eran apoyadas por un nutrido grupo de oficiales, entre otros el mayor Fernando Estrada, el coronel Domingo A. Mercante y el jefe de Policía, Filomeno Velasco, pero despertaban una fuerte oposición entre la oficialidad, miembros del establishment político argentino, la izquierda, los sindicatos que no le respondían y, a nivel internacional, los Estados Unidos. Después que el gobierno anunció las disposiciones para la reorganización de los partidos políticos el 31 de mayo de 1945, la oposición reavivó sus críticas y se multiplicaron los pedidos de "retorno a la normalidad". Hacia el mes de junio, unas voces nuevas se unieron a las protestas contra el gobierno pues por Buenos Aires empezó a correr el rumor de que el gobierno militar iba a dar el voto a las mujeres para que pudieran participar en las próximas elecciones. El 6 de junio de 1945, *La Nación* anunció que un grupo de "señoras", entre otras Victoria Ocampo, Silvina Ocampo de Bioy Casares, Hermina Brumana, Norah Borges de Torre y María del Carmen Portela, habían redactado una declaración contra el voto por decreto.

El rumor, sobre el cual el gobierno militar no hizo ningún comentario, se vio fortalecido por las actividades de la Divi-

sión del Trabajo y Asistencia de la Mujer, una de las nuevas reparticiones creadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión. El 3 de octubre de 1944, en un acto al que asistieron autoridades nacionales, artistas, obreras, trabajadoras agrarias y delegaciones sindicales, aunque no sabemos si Evita estuvo presente, Perón había inaugurado la División de la Mujer, con toda la pompa correspondiente. La nueva entidad, dirigida por la doctora Lucila De Gregorio Lavié, tenía el propósito de estudiar, entre otros temas, los problemas de las mujeres argentinas y la asistencia y protección de la familia y, si fuera necesario, también la elaboración de nueva legislación.

El 16 de julio de 1945, la División de la Mujer patrocinó una reunión a favor del sufragio femenino, en coordinación con la Comisión Pro Sufragio Femenino, presidida por la doctora Rosa Bazán de Cámara. Tuvo lugar en la Cámara de Diputados y entre las invitadas había una auténtica sufragista, Carmela Horne Arriola de Burmeister, fundadora y presidenta desde 1930 de la muy conservadora y católica Asociación Argentina del Sufragio Femenino. Apoyada por monseñor Gustavo Franceschi y la revista *Criterio*, la Asociación pedía el voto solamente para la mujer alfabeta mayor de edad y argentina nativa. Según *La Nación*, el acto tuvo un público numeroso y fue presidido por De Gregorio Lavié. Su objetivo principal fue reclamar el sufragio para las mujeres y elegir un grupo de representantes para entregar un petitorio a las autoridades. Cuando había hablado una larga lista de oradoras en representación de enfermeras, profesoras, escritoras y empleadas telefónicas, entró Perón. Después de agradecer la labor de la División de la Mujer, se atribuyó el honor de haber sido el primero en ocuparse de los problemas de las mujeres desde el Estado. No mencionó la posibilidad de que las mujeres pudieran votar por un decreto del gobierno y nada dijo de las luchas de las feministas por conseguir el sufragio. Pero recordó al público los compromisos internacionales que la Argentina había aceptado con respecto al voto femenino, refiriéndose implícitamente a las varias declaraciones de los Estados americanos en relación con el sufragio femenino adoptadas a partir de 1923 y sobre todo a la más reciente, la Conferencia sobre Problemas de la Guerra y la Paz, reunida en Chapultepec (febrero-marzo de 1945). Perón terminó su discurso comprometiéndose a hacer lo imposible para que el voto femenino fuera realidad.

Como lo señaló Perón, era la primera vez que un miembro del gobierno argentino proclamaba su apoyo al sufragio femenino, y si otro gobernante hubiera pronunciado esas mismas palabras, especialmente uno que no fuera militar, no hay duda alguna de que las feministas argentinas se hubieran alegrado profundamente. Pero el hecho de que el apoyo viniera del gobierno militar, y muy especialmente de Perón, fue para muchas mujeres la confirmación de que era un demagogo altamente peligroso y sirvió de detonante para su movilización, y la de las feministas, en contra del gobierno.

Desde el golpe de junio, el movimiento feminista había dejado prácticamente de existir. Muchas de las viejas feministas, Grierson, Lanteri, Alfonsina Storni, Sara Justo y las hermanas Chertkoff, entre otras, habían muerto. Todavía vivían algunas como Rawson de Dellepiane, retirada de la actividad política, Carmela Horne Arriola de Burmeister (la más conservadora de todas) y Moreau de Justo. Burmeister declaró su apoyo al gobierno, pero el nombre de Moreau de Justo volvió a aparecer en la prensa opositora desde el primer momento en que se gestó un movimiento de mujeres contrario al gobierno militar, un movimiento que quiso ser el frente femenino de oposición, en coordinación con el que se estaba articulando entre los partidos políticos. En esos meses también tuvo una actuación destacada Victoria Ocampo, fundadora en 1935 con María Rosa Oliver y Susana Larguía de la Unión de Mujeres Argentinas.

Como respuesta al acto patrocinado por la División de la Mujer, el 25 de julio, la Federación Universitaria de Mujeres organizó una Asamblea Nacional con representantes de grupos y organizaciones de mujeres para unificarlas a todas y discutir el sufragio. El documento que publicó un mes más tarde relataba la larga lucha de las mujeres por el voto, pedía el retorno a la normalidad constitucional y declaraba que el derecho al voto "sólo puede conseguirse y debe conseguirse según la Constitución. Cualquier acción que trate de conseguir el voto por otros medios es errónea e inconstitucional". También pedía a los partidos políticos que se comprometieran desde ya a conceder los derechos políticos a las mujeres en cuanto se restableciera la democracia. Con este documento, las feministas y sus aliadas dejaron de lado sus intereses en tanto mujeres, pu-

sieron el feminismo en un segundo plano y declararon su compromiso con "el frente democrático" y su oposición al gobierno militar y a Perón en particular.

El 27 de agosto de 1945, Moreau de Justo, junto con un grupo de mujeres, constituyó la Liga de Educación Política para capacitar a las nuevas electoras pues entendía que, como consecuencia de los acuerdos adoptados en Chapultepec, las mujeres argentinas recibirían el derecho al voto, aprobado por el Parlamento. El 2 de septiembre se constituyó la sección femenina de la Unión Democrática y al día siguiente, con el lema "Sufragio femenino pero sancionado por un congreso elegido en comicios honestos", tuvo lugar la Asamblea Nacional de Mujeres, la reunión más importante de la campaña femenina contra el gobierno militar. Su objetivo era pronunciarse sobre el sufragio femenino y reafirmar masivamente que las mujeres solamente lo aceptarían de un gobierno constitucional. Asistieron unas cuatrocientas personas, representando a diversos grupos. El acto fue la culminación de numerosas reuniones preparatorias realizadas en la Asociación Cristiana Femenina y en la Junta de la Victoria. Hablaron varias oradoras, entre otras Victoria Ocampo y la fundadora y presidenta de la Junta, Ana Rosa Schlieper de Martínez Guerrero, delegada argentina ante la Comisión Interamericana de Mujeres y su presidenta desde 1936 hasta noviembre de 1943, fecha en que el gobierno militar le retiró su aval.

Pero a medida que el enfrentamiento entre los partidos y el gobierno militar se fue agudizando, el tema del sufragio femenino pasó a segundo plano tanto para la oposición como para el gobierno. A mediados de 1945, el frente femenino se había diluido en la oposición, arrastrando con él a los restos del movimiento feminista y a las últimas sufragistas. Y nadie hablaba del voto femenino, pues el problema era Perón. Al frente de la oposición política el 16 de junio de 1945 se sumaron las asociaciones de empresarios publicando un *Manifiesto de las Fuerzas Vivas de la Nación*, que cuestionaba la política social del gobierno militar. Siguió luego una sucesión de réplicas entre los sindicatos, los empresarios y Perón. La ofensiva del frente opositor continuó en aumento hasta el desencadenamiento de la crisis de octubre, cuando Perón fue forzado a renunciar a sus cargos y luego fue detenido en la isla Martín

García. La crisis tuvo un momento culminante en la moviliza-ción obrera del 17 de octubre que logró la libertad de Perón y lo devolvió a la vida política.

El 17 de octubre, Perón comprobó que sus amigos militares y sus colaboradores militares y civiles en la Secretaría habían hecho lo necesario para que él saliera triunfante de la crisis. La labor que él había realizado desde la Secretaría de Trabajo también había rendido sus frutos y el movimiento obrero orga-nizado en su gran mayoría demostró su apoyo a Perón, a pesar de las diferencias entre los dirigentes sindicales. El 17 de octu-bre fue el acto fundacional de una relación carismática entre los descamisados y su líder, que lo llevaría a la presidencia de la Nación. Por lo tanto, Perón salió de la crisis fortalecido y, al haber renunciado, con la libertad de presentarse a las próximas elecciones presidenciales que el gobierno pronto fijaría.

Evita no tuvo una participación destacada durante la crisis de octubre, aunque indudablemente la situación fue muy an-gustiosa para ella. Trató repetidamente de conseguir un *habeas corpus* para sacar a Perón de Martín García y no pudo hacerlo. Pero la resolución de la crisis tuvo un impacto fundamental en su vida. El hombre al que amaba y cuya vida vio peligrar había salido ileso y gracias a la movilización de los descamisados había sido recibido triunfalmente en Plaza de Mayo. Como si esto fuera poco, unos días más tarde, el 21 de octubre, Perón y Evita se casaron. De la noche a la mañana, la joven actriz de origen social oscuro, con un pasado supuestamente dudoso y vida inconveniente, "la actriz Duarte" como la llamaban algu-nos, se convirtió en la esposa del político de la hora en la Ar-gentina y próximo presidente de la Nación. Evita Duarte fue relegada al olvido para dar paso a María Eva Duarte de Perón, como se llamaría oficialmente en los primeros años, antes de convertirse en Eva Perón. Pero la esposa del coronel Perón, la señora de Perón, fue también desde el primer momento "la compañera Evita". Su casamiento con Perón y, por lo tanto, el comienzo de su nueva vida fueron para ella inseparables de la crisis del 17 de octubre. Y así como Perón, el líder de los des-camisados, y los descamisados surgen el 17 de octubre tam-bién nace a la vida en esa fecha "la compañera Evita", una mujer que a partir de entonces puede enorgullecerse de su ori-gen social humilde y así lo hará repetidamente porque eso la

iguala a los descamisados, les recuerda que a pesar del poder que irá acumulando poco a poco, de sus joyas, de su proximidad al hombre más poderoso de la Argentina, sigue siendo una de ellos. Es una mujer que entiende lo que le ha sucedido, que sabe que su vida ha cambiado para siempre y que, como los descamisados, tiene ante ella un futuro extraordinario, gracias a Perón, pero consciente también de que sin ellos ella no lo tendría a él. De allí su deuda con ellos.

Pero su transformación en el personaje político más importante de la Argentina peronista, después de Perón, fue en realidad un proceso lento que comenzó durante la campaña electoral. Una campaña de estilo muy distinto de las que la Argentina estaba acostumbrada. Con el viejo político radical Hortensio Quijano, su compañero de fórmula, a su lado, Perón hacía discursos en mangas de camisa, sonriendo, hablando con un tono campechano como lo hacía en su rol de secretario de Trabajo y Previsión. Recorrieron en tren el interior del país junto con Evita, joven, bonita, siempre cerca de Perón, siempre sonriente, silenciosa y dispuesta a aceptar los papeles con mensajes para el candidato a presidente que le daban, junto con los ramos de flores.

Durante la campaña electoral se notó la presencia de mujeres, no solamente porque Evita acompañaba a Perón en sus giras sino también porque asistieron en grandes cantidades a los actos, tanto de la Unión Democrática como del Partido Laborista. Alicia Moreau de Justo también participó activamente en la campaña, sobre todo una vez que organizó la Comisión Coordinadora de Asociaciones Femeninas Democráticas. Del lado del laborismo, en el Centro Universitario Argentino, Hay-

Discurso de Eva Perón en el Luna Park durante la campaña electoral el 8 de febrero de 1946

"Han de comprender que yo, como mujer del pueblo, al que en ningún momento he de olvidar, lucharé a la par del coronel, que si abrazó la bandera de los descamisados fue persiguiendo un ideal que no sabe de traiciones ni de renunciamientos."

dée Frizzi de Longoni organizó la Secretaría Femenina del Centro Universitario Argentina 1945, que buscó coordinar a las mujeres que apoyaban a Perón.

El 8 de febrero de 1946 la Secretaría Femenina organizó un acto en el Luna Park para proclamar la fórmula Perón-Quijano, con la presencia de Perón y la presidencia de Evita. Después de los discursos de Edelmira Giúdice, Hermelinda Rosa Parela y Longoni, el público, que llenaba gran parte de las instalaciones, reclamó insistentemente la presencia de Perón. Evita se adelantó para tratar de explicar que Perón no iba a venir pues estaba enfermo y además estaba preparando un viaje a Rosario. El público la interrumpió con sus reclamos y no permitió que ella hablara o que se leyera un mensaje de Perón. El acto terminó precipitadamente con un gran griterío que continuó afuera, en una manifestación callejera que la policía dispersó con gases lacrimógenos.

EVITA Y LA SECRETARÍA DE TRABAJO

Si bien la presencia de Evita, como la de las mujeres en general, fue un hecho novedoso en la campaña electoral, fue una presencia silenciosa. Su voz empezó a oírse claramente una vez que Perón y Quijano ganaron las elecciones de febrero y tomaron posesión de sus cargos, en junio de 1946.

Al poco tiempo de asumir Perón la presidencia, la prensa empezó a dar cuenta de las visitas de la señora María Eva Duarte de Perón a fábricas, talleres u otras instituciones en clara demostración de que la Argentina tenía una primera dama distinta y, por el momento, sobre todo visible. Además, a partir de mediados de julio de 1946, empezó a ir tres veces por semana a una oficina habilitada para ella en el edificio de Correos por su amigo, el nuevo director de Correos y Comunicaciones, Oscar Nicolini. Allí Evita atendía las visitas de numerosas personas que llegaban con pedidos de ayuda, en particular muchos obreros que en vez de dirigirse al ahora Ministerio de Trabajo buscaban llegar a Perón, en tanto antiguo secretario de Trabajo, para resolver los distintos problemas que tenían. El 23 de septiembre Evita dejó de ir a Correos y se instaló en el viejo edificio del Concejo Deliberante, allí donde Perón había

tenido la Secretaría de Trabajo y Previsión. En el mes de noviembre, el Servicio de Información del Estado anunció que Evita atendería en la Secretaría, por lo tanto oficializaba sus actividades.

No sabemos con certeza si Evita fue la que se ofreció para ayudar a Perón y éste la dejó hacer o si el Presidente le pidió que atendiera ciertos pedidos y ella accedió, o fue una decisión a la que llegaron juntos, o un proceso que fue tomando cuerpo poco a poco. Tampoco sabemos si el traslado de Evita a la Secretaría de Trabajo fue parte de un plan ya elaborado o fue consecuencia de la cantidad de delegaciones obreras que insistían en ver al Presidente, como si todavía fuera secretario de Trabajo. El hecho es que Evita empezó a actuar con los obreros como si Perón fuera todavía secretario de Trabajo, recibiéndolos y hablándoles en su nombre, prometiéndoles hacerle llegar su pedidos. Se reunía diariamente con numerosas delegaciones que venían a saludar a Perón o a pedir su ayuda. A veces eran



Eva Perón junto a dirigentes sindicales, septiembre de 1948.

grupos que querían formar sindicatos nuevos o tenían conflictos laborales. Ella escuchaba y hacía preguntas, pronunciaba un pequeño discurso y remitía los problemas a las personas que podían solucionarlos en el Ministerio de Trabajo o en el Secretariado de la CGT.

Hasta su viaje a Europa (junio de 1947), el trabajo de Evita con los obreros fue muy importante para su transformación política pues es lo que permitió su inserción en la estructura de poder peronista y al mismo tiempo justificó su presencia en la misma: la convirtió en el nexo directo de los descamisados con Perón; por lo tanto, el eje crucial para la conformación del peronismo en el poder. Una vez que asumió la presidencia, Perón precisaba encontrar la forma de ejercer su liderazgo en un contexto muy distinto, desde el poder, y protegerlo de rivales como Mercante, su antiguo colaborador en la Secretaría de Trabajo y ahora flamante gobernador de la provincia de Buenos Aires, al que Evita por el momento no dudaba en llamar "el hermano de lucha" de Perón y "el más leal de los amigos de Perón". Los deberes presidenciales de Perón le impedían mantener contacto diario con los obreros, el nuevo Ministerio de Trabajo era una estructura burocrática que ponía una valla adicional entre ellos y, sobre todo, tenía una relación problemática con la CGT. La central obrera estaba en manos de dirigentes sindicales que durante la crisis de octubre habían aceptado ir a la huelga pero sin mencionar a Perón. Además algunos querían mantener la independencia del movimiento obrero y también reservarse el poder que habían acumulado. Perón necesitaba urgentemente conservar y fortalecer la relación que había establecido con el movimiento obrero organizado desde la Secretaría de Trabajo, pero además tenía que ampliarla incorporando a los miles de trabajadores que todavía estaban fuera de la estructura sindical y por lo tanto fuera de su control. Su objetivo no era fácil, teniendo en cuenta que los dirigentes sindicales eran en gran medida los mismos que habían fundado el Partido Laborista con el que Perón había ganado las elecciones, que fue disuelto en mayo de 1946, o sea, antes de asumir la presidencia.

En colaboración con el nuevo ministro de Trabajo, José María Freire, lo que Evita hizo en este período fue por un lado ayudar a neutralizar la influencia de los dirigentes sindicalistas-laboristas

que querían mantener su independencia y la de la CGT frente a Perón, identificando poco a poco a los dirigentes que estaban dispuestos a declarar su lealtad y su apoyo a Perón y presentaron su candidatura para la renovación de las autoridad del comité confederal de la CGT o la renovación de las cámaras legislativas de 1948. Por otro, facilitar la resolución de conflictos en fábricas o talleres y muy especialmente la formación de nuevos sindicatos. Cuando los dirigentes conseguían sus objetivos, Evita pronunciaba un discurso en el que les recordaba que el que había satisfecho sus necesidades tan justas era el viejo coronel Perón, ahora sentado en el sillón de Rivadavia, pero que seguía siendo el secretario de Trabajo. Por lo tanto, debían defenderlo como los descamisados lo habían defendido de los oligarcas y los vendepatria el 17 de octubre de 1945. Ella agradecía a todos en nombre de Perón, su esposo, y en su propio nombre, el de una humilde mujer del pueblo, igual a ellos.

La influencia de Evita fue creciendo a medida que era aceptada por los obreros. Éstos no se habían destacado en la sociedad argentina por su falta de discriminación contra las mujeres, incluso sus compañeras de trabajo. Sin embargo, a pesar de los impedimentos que encontraban para militar en los gremios, poco a poco algunas mujeres consiguieron hacerse nombrar delegadas a los congresos de la CGT. A partir de 1936 en los congresos de la CGT se oyeron cada vez más las voces de delegadas exigiendo apoyo a sus reivindicaciones específicas, y el congreso de 1942 adoptó entre otras medidas una resolución apoyando el sufragio femenino. El mismo sentido práctico que llevó a muchos dirigentes a aceptar a Perón, también les hizo aceptar a Evita. Fueron deponiendo sus reservas al ver satisfechos sus pedidos y resueltos sus problemas por la esposa de Perón, la persona más cercana a él. Por su parte, Perón veía que el trabajo de Evita en la Secretaría era beneficioso para todos los que lo apoyaban y muy especialmente para él. Sabía además que era la persona que más interés tenía en ayudarlo y protegerlo y, en contraste con sus otros colaboradores, por ser mujer y su esposa, era la única que no representaba un peligro político para él.

Si bien en los años siguientes la relación de Evita con los descamisados y la CGT conservaría y hasta aumentaría su importancia y ella pasaría de ser "el puente de amor entre Perón y

los descamisados" a transformarse en "la abanderada de los descamisados", mucho antes de ser la "Jefa Espiritual de la Nación", desde que la población se enteró de que podía acercarse a ella, recibía numerosos pedidos de ayuda personal. Las actividades de Evita en esta área empezaron a ocupar cada vez más tiempo en su vida diaria y finalmente, el 8 de julio de 1948, creó una organización, la Fundación Eva Perón. Según varios autores, el propósito ostensible de esta institución era reemplazar lo que había sido la Sociedad de Beneficencia de la Capital en la Argentina preperonista. Desde esta perspectiva, la razón de la actividad social de Evita se atribuye fundamentalmente a un desprecio que le habrían hecho las damas de la Sociedad de Beneficencia de la Capital, un desplante que le hizo exigir la disolución de esa institución.

Dejando de lado las numerosas diferencias entre la Fundación y la Sociedad, habría que señalar que los hechos no corroboran esta explicación, por demás fantasiosa, malintencionada y frívola. El proceso que llevó a la disolución de la Sociedad empezó antes de que Perón y Evita se conocieran. Desde el primer momento estuvo enmarcado en la política de modernización del Estado que desarrolló el gobierno militar y formó parte de un proyecto de reorganización de la salud pública y de la asistencia social; la Sociedad administraba una larga serie de instituciones educativas y de salud pública, entre otras el instituto de Maternidad Alberto Peralta Ramos, el Hospital de Niños y el Hospital Oftalmológico. El primer decreto que afectó a la Sociedad fue anunciado el 21 de octubre de 1943 (claramente antes de enero de 1944). Con esta medida el gobierno militar creó la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, como una dependencia del Ministerio del Interior. La nueva entidad tenía a su cargo todas las instituciones de asistencia pública (incluida la Sociedad), los hospitales y asilos, y el cometido de llevar a cabo la política de salud pública tal y como finalmente la definió en noviembre del año siguiente y se institucionalizaría en los primeros meses de la presidencia de Perón. La Sociedad de Beneficencia fue disuelta en septiembre de 1946, cuando Evita apenas había empezado a hacer sentir su presencia en el gobierno peronista y por lo tanto mucho antes de tener la influencia suficiente como para imponer una decisión de esa envergadura.



Eva Perón en la Fundación.

La creación de la Fundación le permitió a Evita recaudar fondos, que ella controlaba y solamente ella decidía en qué debían gastarse, para responder a los numerosos pedidos de ayuda individual que recibía constantemente, pero en particular los jueves, en su oficina. Pudo entonces distribuir todas las Navidades sidra y pan dulce a todas las personas que no podían comprarlos, repartir ropa, víveres y ayuda médica, de hecho desarrollar una política social paralela y a la vez complementaria de la del gobierno mediante la construcción de hospitales, escuelas, hogares de tránsito, campeonatos juveniles de fútbol y hoteles para que las familias obreras disfrutaran de vacaciones. Una política que además iba dirigida a los sectores populares que sentían menos los efectos de la política social del gobierno: las mujeres, los ancianos y la niñez. Evita puso en marcha la Fundación con 10.000 pesos, y cuando la cerró el gobierno del general Eduardo Lonardi en 1955 tenía un activo de

3.408.196.550,96 pesos. Si bien la Fundación recibía donaciones de particulares, la mayor parte de sus fondos provenían de la CGT, de los sindicatos y del Estado, que le concedió, por ejemplo, 10 por ciento de lo recaudado en la Lotería Nacional.

EL SUFRAGIO FEMENINO

A partir de 1949, sin dejar de trabajar con los sindicatos y la CGT, hacer discursos, visitar fábricas, inaugurar escuelas, seguir los vaivenes de la reforma constitucional con las consecuencias esperadas para la posible reelección de Perón y recibir visitantes en su oficina con un ritmo que cansaba a sus acompañantes, pero la dejaba dispuesta a seguir, Evita empezó a organizar el Partido Peronista Femenino. En realidad había tratado de trabajar políticamente con mujeres desde la campaña electoral, aunque no con mucho éxito, como lo demostró el acto del Luna Park. Una vez que Perón ascendió a la presidencia, sin embargo, la situación cambió y el primer discurso que pronunció por la radio del Estado, el 26 de julio de 1946, fue dirigido a las mujeres. Lo hizo para anunciar las nuevas medidas del gobierno en su campaña pro abaratamiento de la vida. El mensaje iba dirigido no a las mujeres argentinas sino a "las mujeres peronistas", las amas de casa peronistas, las esposas, hijas y novias de peronistas, que veían "sus hogares amenazados por la especulación y el agio". En este discurso, Evita delineó los límites de su universo femenino, el de las mujeres dispuestas a apoyar a Perón, y no se apartaría de él hasta el fin de sus días.

La condición de las mujeres en general había entrado en el discurso oficial como parte de la política social del gobierno militar, por intermedio de la División del Trabajo y Asistencia de la Mujer, o sea, de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y así como los obreros y los trabajadores del campo, las mujeres también se convirtieron en otro sector de la población hacia el cual el gobierno militar dirigió su mira. Hasta pareció dispuesto a desarrollar una política específica para ellas, por lo menos así lo anunció Perón en su discurso inaugural en el que justificó la necesidad de "dignificar moral y materialmente a la mujer", pues

eso significaba fortalecer la familia y por lo tanto la nación y, además de prometer mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, mencionó la necesidad de redactar un estatuto del trabajo femenino que definió como "el instrumento legal para la defensa y dignificación moral de la mujer que trabaja".

Como lo indica el discurso de Perón, la preocupación del gobierno pasaba por el problema de la madre trabajadora asalariada, no por la mujer obrera o empleada en sí. Ésta era una vieja preocupación en la sociedad argentina, compartida tanto por la derecha como por la izquierda, pues veía el trabajo asalariado de las mujeres casadas como algo nefasto para las familias o una desgracia que debía evitarse. El gobierno militar compartía esta concepción y a pesar de las promesas de corregir ciertas situaciones injustas, como la desigualdad de salarios, no cumplió con ellas. Tampoco se concretó el estatuto ni durante el gobierno de Farrell ni en las dos presidencias de Perón. De hecho, la División no sobrevivió a la transformación de la Secretaría en Ministerio, aunque años más tarde volvió a reaparecer. Es posible que el cambio de política se haya debido a la preocupación de Perón por la baja tasa de natalidad, por lo general atribuida al ingreso creciente de las mujeres a la fuerza de trabajo —percepción equivocada pues en 1947, la tasa de participación femenina en la fuerza de trabajo había bajado a un 20 por ciento.

Pero el otro tema de interés para la División, el sufragio femenino, que Perón había apoyado abiertamente y para el cual había una presión internacional cada vez más fuerte, recibió muy pronto la atención del nuevo gobierno. Si bien Perón no habló del sufragio femenino durante la campaña electoral, lo hizo cuando dirigió su primer mensaje al Congreso en el mes de julio y en octubre, cuando anunció su primer Plan Quinquenal, incluyó un proyecto de ley para conceder el voto a las mujeres. Para entonces, sin embargo, un Senado libre de conservadores ya había aprobado el 21 de agosto de 1946 un proyecto de ley presentado por el senador Lorenzo Soler unas semanas antes.

En la Cámara de Diputados el debate sobre el sufragio femenino tuvo lugar en septiembre de 1947. A pesar de las quejas de Evita y la prensa peronista, no hubo verdadera oposición al proyecto. Es que si bien los enfrentamientos entre laboristas/

peronistas y radicales eran continuos, éstos no podían oponerse a una medida que el partido apoyaba desde hacía varios años y que además formaba parte de su plataforma electoral, ni siquiera porque el gobierno peronista la patrocinaba. El único desacuerdo de fondo fue planteado por el diputado Reynaldo Pastor, que defendió la idea del voto femenino optativo.

En general, el tono del debate parlamentario fue muy distinto del que había predominado en la década del treinta. En ambas cámaras los legisladores ya no hicieron hincapié en las debilidades mentales o físicas de las mujeres (especialmente su falta de musculatura) o en sus deficiencias educacionales sino que, muy por el contrario, recalcaron sus contribuciones, su participación en la fuerza de trabajo y su presencia en los momentos importantes de la historia argentina. El ministro del Interior, Ángel Gabriel Borlenghi, recordó a los legisladores que Perón había apoyado el sufragio femenino en varias ocasiones y los radicales hicieron gala de su viejo compromiso con el mismo. Después de once discursos y cuando todavía quedaban más de veinte legisladores apuntados para hablar, el 9 de septiembre de 1947, se aprobó la ley 13.010 por unanimidad, entre ruidosas expresiones de alegría de la galería, donde también estaba Evita. La nueva ley finalmente corrigió las limitaciones de la supuesta "ley de sufragio universal", o sea la Ley Sáenz Peña de 1912, que poco tenia de universal, aunque así la llamaran los legisladores que la votaron. Dio a las mujeres argentinas los mismos derechos y obligaciones que tenían los varones, pero las eximió del servicio militar.

Vale la pena mencionar que con la ley 13.010 tanto el Estado como las mujeres argentinas entendieron por muchos años que su subordinación había terminado; habían alcanzado una total igualdad con los hombres porque eran ciudadanas. Por lo tanto, nada hicieron por cambiar otras restricciones que se quedaron en los tinteros de los legisladores en 1926, por ejemplo, el que las mujeres casadas no pudieran ejercer la patria potestad o el que las mujeres debían tomar el apellido del esposo y, si se negaban, ello podía ser causal de divorcio.

Buena parte de las obras escritas por peronistas tiende a atribuirle a Evita un papel predominante en la obtención del voto femenino. Ella, a su vez, en *La razón de mi vida* —el libro que publicó con su nombre en 1951 con un relato de su vida y de

sus vivencias peronistas—, afirmó con total desparpajo que resolvió "el viejo problema político de la mujer". Sin embargo, el análisis de los hechos indica algo muy distinto. Evita tuvo un impacto muy limitado y de último momento en la lucha de las mujeres argentinas por el voto. Las campañas de las sufragistas abrieron el debate a principios de siglo y consiguieron mantenerlo vivo hasta los años cuarenta. Evita apoyó la idea del voto al final de la última etapa, cuando de hecho ya no había un movimiento sufragista, pero la medida venía avalada por el gobierno y por el contexto internacional, no tenía oposición abierta desde las esferas de poder —el único partido opositor con representación en el Parlamento también la apoyaba— y los conservadores ya no tenían cómo oponerse.

No hay indicaciones de que le preocupara no poder votar hasta el 27 de enero de 1947, fecha en que pronunció su primer discurso sobre el tema, en momentos en que la medida ya estaba aprobada en la Cámara de Senadores. En los años treinta, después de trasladarse a Buenos Aires, no se acercó a los grupos feministas y durante la campaña para las elecciones de febrero no hizo una declaración pública sobre la exclusión de las mujeres del proceso electoral, cosa que podría haber hecho si le hubiera importado mucho el tema, especialmente teniendo en cuenta la posición de Perón.

Evita pronunció seis discursos sobre el voto por la radio del Estado entre el 27 de enero y el 19 de marzo, como parte de la campaña auspiciada por el gobierno y patrocinada por la Comisión Pro Sufragio Femenino que Evita presidió. El propósito de los discursos era generar apoyo para el voto y el empadronamiento entre las mujeres peronistas, en un contexto en que la indiferencia por obtener el voto era grande en las huestes peronistas. El problema era, por un lado, que ya no existían ni los resabios de un movimiento feminista, que por otra parte nunca había sido un movimiento de masas y, por otro, tanto el voto femenino como la participación de las mujeres en el mundo de la política no eran vistos con buenos ojos por los sectores que apoyaban a Perón. Por mucho que Perón estuviera a favor del voto femenino, no era un tema prioritario para los peronistas o las peronistas, ni siquiera para aquellos que venían de la izquierda y/o del movimiento sindical, pues si bien aceptaban el principio del sufragio femenino, no quiere decir

que estuvieran dispuestos a trabajar para hacerlo realidad, ni mucho menos a ir a una huelga por él.

Los discursos de Evita buscaron despertar en sus oyentes mujeres el entusiasmo que ella sentía por la posibilidad de votar y también convencerlas de la importancia que tenía su participación cívica para la continuación de Perón en el gobierno —aunque nadie hablaba todavía de reelección, la que lo hacía implícitamente era ella—. En su discurso del 27 de enero les recordó que eran todas compañeras; "yo misma soy pueblo", les dijo. "Los latidos de esa masa que sufre, trabaja y sueña, son los míos." Insistió en que las conocía desde el 17 de octubre, cuando estuvieron con sus esposos, hermanos o hijos pidiendo la libertad de su líder, el coronel Perón, ganándose con ello el derecho al voto. Con un lenguaje emotivo, se dirigió a ellas no como individuos, sino como madres, mujeres que son "el resorte moral del hogar". En su discurso del 12 de febrero afirmó que millones de mujeres argentinas sabían que el derecho al voto era impostergable. "La mujer puede y debe votar en mi país." Señaló que las conquistas de la revolución debían estar acompañadas por el derecho de las mujeres a elegir y que Perón necesitaba "del baluarte inviolado del hogar y del impulso intuitivo y sustancialmente conservador de la mujer" para su gobierno. Y una vez más les recordó que era solamente "la compañera Evita, camarada del primer trabajador argentino y primera ejecutora de sus decisiones de gobernante". En su mensaje del 19 de marzo, relativamente corto, recalcó la superioridad moral de las mujeres y su impacto en la sociedad. El hecho de votar no solamente significaba depositar una boleta, transformaba a la mujer en "verdadera orientadora de la conciencia nacional".

Discurso de Eva Perón sobre el voto femenino el 19 de marzo de 1947

"La salvaguardia de la revolución nacional, y la consolidación de sus frutos, está en cierto modo en nuestras manos. Hemos dado al hombre, por delegación, nuestra responsabilidad argentina. Debemos retomarla. Debemos defenderla."

Dos meses después de su último discurso, cuando el voto languidecía en la Cámara de Diputados, Evita interrumpió su campaña. Habiendo aceptado una invitación del gobierno de Francisco Franco, se embarcó para Europa en el viaje que la transformaría en una de las primeras grandes celebridades de la posguerra, cuya hermosa cara sonriente o silueta elegante vestida en París aparecería a partir de entonces en innumerables revistas en el mundo entero. El 23 de agosto de 1947, por la tarde, la nave que la traía de regreso se acercó lentamente al puerto de Buenos Aires y la muchedumbre que la esperaba estalló en vítores y expresiones de alegría. Exactamente un mes más tarde, el 23 de septiembre, en una ceremonia en Plaza de Mayo auspiciada por la CGT y a la que asistieron delegaciones del interior, pero según *La Nación* con más hombres que mujeres, Evita recibió una copia de la ley 13.010 de manos de Perón. El ministro del Interior, Ángel Gabriel Borlenghi, Perón y Evita pronunciaron sendos discursos. Aquél explicó al público que si bien muchos políticos habían prometido darles el voto a las mujeres, sólo Perón había cumplido su promesa, agregando también que así como los descamisados habían encontrado a su líder en el presidente de la Nación, "la mujer argentina, después de tantos años de vivir huérfana de quien la condujera al triunfo, ha encontrado en la señora María Eva Duarte de Perón la verdadera líder de sus reivindicaciones".

Evita pronunció un discurso en el que habló de "una larga historia de lucha, tropiezos y esperanzas" en la cual las mujeres tuvieron que enfrentar "la calumnia, la injuria y la infamia", además de maniobras por parte de los enemigos del pueblo. Éstos usaron los poderes de la oligarquía y los intereses antiargentinos para tratar de derrotar el derecho de las mujeres al voto. Pero esta vez también fueron derrotados como el pueblo los derrotó el 17 de octubre. Y así como "los hombres argentinos supieron elegir al líder de su destino e identificaron en el general Perón todas sus ansias negadas, vilipendiadas y burladas por la oligarquía sirviente de intereses foráneos", las mujeres no podían hacer otra cosa que consolidar esa histórica conquista. Terminó definiendo el voto como una herramienta con la cual, junto con Perón, las mujeres perfeccionarían la democracia argentina.

A pesar de sus referencias a luchas pasadas, Evita nada

dijo de las sufragistas, ni tampoco las mencionó Borlenghi, un viejo dirigente sindical de la Federación de Empleados de Comercio hasta junio de 1943. En ambos discursos, como en el de Perón, se ignora el pasado y al no nombrarlo se borra, arrastrando los nombres de feministas como Lanteri, socialistas como Moreau de Justo y radicales como Rawson de Dellepiane. Los discursos, pronunciados en el mismo lugar en el que surgieron el líder y los descamisados el 17 de octubre de 1945, tenían el propósito de escribir una nueva historia fundacional, contextualizada por Perón, en la que Evita era la figura central. Cuando Perón puso la ley en sus manos, la ceremonia se convirtió en un acto de fundación para ella, su contrapartida de lo que fue el 17 de octubre para Perón. Como lo dijo claramente Borlenghi, Evita se transformó en la líder de las mujeres. Y en su discurso, ella anunció que con el voto las mujeres tenían el deber de volver a elegir a Perón, aunque no mencionó la necesidad de reformar la Constitución para que eso fuera posible.

Si bien a fines de 1947 Evita ya formaba parte de la estructura de poder peronista, su influencia se acrecentaba día a día y periódicos como *Democracia*, que había adquirido, daban a conocer todas sus actividades, aunque todavía no ocupaba una posición excepcional. Así, por ejemplo, para la celebración del 17 de octubre no habló desde el balcón de la Casa Rosada. El año anterior pronunció un discurso —el 9 de octubre por Radio del Estado— dirigido a las mujeres para recordarles la gesta del 17 de octubre y pedirles que fueran a la plaza como lo habían hecho en aquel entonces. Pero hacia fines del año 1948 su situación había cambiado apreciablemente. El comité confederal de la CGT había renovado su plantel y ahora todos los dirigentes eran peronistas declarados. El nuevo secretario general, José Espejo, era un entusiasta peronista y pronto se convirtió en el amigo incondicional de Evita, iniciándose un período de muy estrecha colaboración entre los dos. Las elecciones legislativas de 1948 habían debilitado todavía más los restos del laborismo. Todos los nuevos candidatos tenían el aval de Perón. Ese mismo año, el más reacio de los legisladores laboristas, el dirigente sindical Cipriano Reyes, fue detenido y encarcelado, acusado de un atentado contra Perón y Evita. Por último, la Fundación Eva Perón ya había

empezado a funcionar y pronto comenzaría el programa de construcción de flamantes edificios y la habilitación de nuevas entidades.

EL PARTIDO PERONISTA FEMENINO

Mientras Perón se ocupaba de los grandes problemas nacionales e internacionales, Evita se había convertido en su delegada ante los descamisados y a la vez en la "abanderada de los descamisados" y su "plenipotenciaria" ante él. Como líder de las mujeres, era también la "abanderada de las mujeres y de los humildes" y dentro de unos meses sería presidenta del Partido Peronista Femenino. Evita ocupaba indudablemente una posición excepcional, aunque no formal, pero reconocida y aceptada, dentro del gobierno peronista. La oficialización de su posición tuvo lugar durante la celebración del 17 de octubre de 1948, de-



Asamblea constitutiva del Partido Peronista Femenino, 26 de julio de 1949.

clarado "Día de la Lealtad". Ese año, por primera vez, Evita habló desde el balcón de la Casa Rosada junto con Perón y no se dirigió a las mujeres, sino a sus "queridos descamisados".

La fundación del Partido Peronista constituyó otro momento importante para Evita. El 26 de julio de 1949, mientras en el Luna Park se reorganizaba el Partido Peronista, en el Teatro Cervantes, ante unas mil mujeres, Evita anunció la creación del Partido Peronista Femenino, o rama femenina. En un discurso de puro estilo evitista, emotivo, dramático, con un lenguaje apasionado, de radionovela, donde la precisión y el análisis brillaban por su ausencia, y apelando sobre todo a la mujer-madre, Evita definió el papel de las mujeres peronistas en la Argentina de Perón y sentó las bases de lo que sería el Partido Peronista Femenino. Explicó que las mujeres debían unirse y organizarse en un partido político porque ya eran ciudadanas. En el pasado habían sufrido los males de todos los argentinos, con una injusticia mayor: no poder elegir ni ser elegida. Las que habían salido a trabajar fueron doblemente víctimas por la miseria que sufrían en sus hogares y la prepotencia patronal que además las hacía trabajar con un sueldo menor. Las mujeres tenían la obligación de integrarse a la lucha en defensa de Perón porque contaban con valores espirituales superiores a los de los hombres, eran la "fuerza moral del pueblo". Debían aceptar los objetivos que Perón había fijado —el justicialismo y la Tercera Posición— y demostrar "la más estricta fidelidad a la doctrina, la obra de Perón y la personalidad del general Perón... Para la mujer ser peronista es, ante todo, fidelidad a Perón, subordinación a Perón y confianza ciega en Perón".

Unos días más tarde Evita empezó a seleccionar personalmente un grupo de 23 mujeres, por lo general jóvenes y sin ninguna experiencia política anterior, a las que llamó delegadas censistas. Mientras el gobierno patrocinaba una campaña para el empadronamiento de las mujeres, Evita dio a sus censistas el cometido de recorrer el país, incluso los territorios, para determinar qué mujeres podrían afiliarse a la rama femenina y en una segunda etapa abrir unidades básicas, los locales del partido que cumplirían las funciones de centros culturales, asistenciales y de reclutamiento partidario. Cada unidad básica tenía al frente una subcensista y dos secretarias. En 1952, según Evita, había 3.600 unidades básicas en todo el

país. El trabajo de organización del partido en la capital estuvo en manos de Teresa Adelina Fiora, una extraordinaria colaboradora de Evita en la Fundación, cuya Escuela de Enfermeras había puesto en marcha. Desde Buenos Aires, Evita dirigía las actividades de las delegadas y subdelegadas vigilando sus decisiones, exigiendo informes, disciplina, trabajo y muy especialmente distancia de los dirigentes del Partido Peronista.

Evita organizó la rama femenina como una estructura paralela al partido masculino y completamente independiente de él. Teóricamente las actividades de ambos debían ser coordenadas por el Consejo Superior del cual ella formaba parte. Pero de hecho nadie, con excepción de Perón, se atrevía a darle órdenes a ella. Por su parte, ella mandaba a todos y solamente aceptaba órdenes o sugerencias de Perón y junto con él era la única que las daba al partido femenino. Evita dirigió la rama femenina con mano de hierro, sin permitir interferencia alguna de los dirigentes partidarios, y exigiendo disciplina, trabajo, lealtad y obediencia ciega de sus senadoras, diputadas y demás autoridades partidarias. El partido no tuvo autoridades nacionales hasta julio de 1951. La Comisión Nacional organizada en esa fecha tuvo a Evita de presidenta; María Rosa Calviño de Gómez, secretaria de organización; Dora Gaeta de Iturbe, secretaria de prensa; Juana Larrauri, tesorera, y Delia Degliuomini de Parodi, Amparo López de Ochoa y Agueda G. de Barro, vocales. Calviño de Gómez y Larrauri serían elegidas senadoras en las elecciones de noviembre y Gaeta de Iturbe y Degliuomini de Parodi, diputadas.

Por otra parte, Evita no conseguía siempre lo que quería. Cuando llegó el momento de discutir las candidaturas partidarias para las elecciones presidenciales de 1951, los hombres del partido se salieron con la suya y tuvo que aceptar un número de candidatas a diputadas y senadoras menor que el que ella quería.

Si bien la organización del partido femenino fue indudablemente ventajosa para Evita por la cuota adicional de poder que adquirió con él y también para Perón, por los resultados de las elecciones, la pregunta insoslayable es ¿por qué organizó Evita un partido compuesto solamente por mujeres y de dónde sacó la idea? La respuesta, por el momento, no es definitiva, ni mucho menos, pero una investigación preliminar apuntaría la

mira hacia España, el único pais que en los años cuarenta tenía una organización política femenina, compuesta por mujeres y dirigida por mujeres, la Sección Femenina de la Falange. En su viaje a España, Evita demostró interés en las actividades de la Sección Femenina, visitó varias de sus instalaciones y mantuvo conversaciones con su directora, Pilar Primo de Rivera.

El trabajo denodado de las censistas, los fondos generosos de la Fundación y la energía y los discursos de Evita, a pesar de estar ya muy enferma, dieron los resultados esperados en las elecciones del 11 de noviembre de 1951. Perón recibió el 62,5 por ciento de los votos. Las mujeres representaban un 48,9 por ciento del padrón electoral y de las 3.816.460 que votaron por primera vez, 2.441.558, es decir el 63 por ciento, lo hicieron por él. Además votaron por 29 mujeres: 6 senadoras y 23 diputadas, todas elegidas personalmente por Evita. Estas cifras eran extraordinarias en 1951 y lo siguen siendo para muchos países todavía hoy, especialmente teniendo en cuenta que el número de mujeres elegidas fue mayor en realidad, pues también en las legislaturas provinciales salieron elegidas representantes femeninas. En las elecciones parlamentarias de 1955, ya muerta Evita, el número de legisladoras nacionales aumentó otra vez —las diputadas llegaron a 37 y las senadoras a 8—, y a partir de entonces se estableció una tradición por la cual la rama femenina tendría derecho a proponer un tercio de los nombres incluidos en las listas electorales del Partido Peronista.

No todos los partidos políticos siguieron el ejemplo del peronismo y presentaron listas con candidatas mujeres en las elecciones de noviembre. Así, por ejemplo, no lo hicieron ni los conservadores ni los radicales, aunque los socialistas, demócratas progresistas, comunistas y Concentración Obrera sí lo hicieron. Alicia Moreau de Justo fue una de las tres candidatas que presentó el Partido Socialista, ninguna de las cuales fue elegida. Por su parte, el Partido Comunista presentó una candidata a la vicepresidencia, Alcira de la Peña, tres senadoras y siete diputadas, ninguna de las cuales fue elegida.

Durante su primera presidencia, un contexto económico favorable, por lo menos hasta 1950, permitió que Perón continuara la política económica y social iniciada entre 1943 y 1946. El impacto de Evita en su afianzamiento fue decisivo. Su inserción en la estructura de poder contribuyó poderosamente a que Perón

pudiera mantener intacto su liderazgo carismático de los descamisados pues reforzó los lazos que los unían, facilitó la eliminación de dirigentes demasiado independientes e impidió el surgimiento de liderazgos competitivos. Por otra parte, si recordamos que una vez en el poder el peronismo fue un movimiento conformado por tres elementos, la CGT "columna vertebral del movimiento", el partido peronista y la rama femenina, los tres debieron su afirmación en parte a la persona de Evita. A partir de 1946, su intermediación entre Perón y los descamisados, articulados en la CGT, ayudó al proceso de peronización de la central obrera. En 1948, con la cúpula de la CGT en manos de dirigentes que se declaraban peronistas y desaparecidos los restos del laborismo, existían las condiciones para la formación de un nuevo partido político que respondiera única y exclusivamente a Perón, o sea el Partido Peronista.



Perón y su esposa en una recepción oficial.

Pero, además, Evita fortaleció la base política y social del peronismo al organizar la incorporación de las mujeres al partido y preparar su participación en las elecciones de 1951. Y con los fondos de la Fundación extendió los beneficios sociales a sectores marginales que también se identificaron con el peronismo. La Fundación fue un medio de propaganda extraordinario por las obras que realizó, especialmente después de 1950, cuando las dificultades económicas comenzaron a hacerse sentir y solamente Evita tenía acceso a fondos para inaugurar hospitales, hogares-escuelas u hoteles.

Hacia 1949, Evita había cambiado de nombre y oficialmente

era sólo Eva Perón, la esposa del Presidente, pero también Evita, una figura política de primera magnitud y enorme popularidad, cuyo liderazgo carismático complementaba el de Perón. A pesar de su poder e influencia, tanto como presidenta de la Fundación como en su gestión al frente de la rama femenina, subordinó sus actividades a los intereses y objetivos de Perón. Si bien ciertas condiciones estructurales favorecieron su incorporación a la estructura de poder, la ayudó sobremanera su condición de mujer y de esposa, ya que era la única persona que no podía competir con Perón con lo cual pudo convertirse en una persona indispensable para él y para los descamisados. Por otra parte, su misma condición de mujer y esposa, y por lo tanto de un ser subordinado, tanto desde el punto de vista legal como social, definió en gran medida su liderazgo en la Argentina de los años cuarenta.

Evita entró al mundo de la política sin el derecho de ciudadanía, desde el ámbito privado, desde su casa, el viejo Palacio Unzué de la calle Austria, que era la residencia presidencial. Pero para marcar lo que estaba haciendo y que todo el mundo entendiera su significado, tuvo que salir de la residencia e instalarse en un lugar fundamental para el surgimiento del peronismo, la Secretaría de Trabajo, o sea la oficina que su esposo —el coronel Perón, el mismo que ahora estaba en la Casa Rosada— había ocupado hasta octubre de 1945. Evita trató su trabajo político como una extensión del rol que la sociedad aceptaba para una mujer casada, aunque desde el primer momento no escondió su dimensión política. Así por ejemplo al mismo tiempo que desempeñaba actividades de ayuda social, adecuadas para la esposa del presidente, se reunía con dirigentes sindicales y obreros también para ayudarlos, al igual que a su esposo, que ya era general y presidente, pero al que ella insistía en llamar el coronel Perón.

Dentro de los límites que le impuso su subordinación, sin embargo, muy pronto aprendió a ejercer el poder y la influencia que iba adquiriendo, como si siempre le hubieran pertenecido por derecho "natural". En un siglo en el que las mujeres no empezarían a imaginarse conduciendo a un país hasta muchas décadas más tarde, y todavía son muy pocas las que han conseguido hacerlo por derecho político propio y no como herencia de un esposo muerto, Evita tuvo la audacia de soñar con la vicepresidencia de la República Argentina. Permitió que la

CGT y la rama femenina lanzaran la fórmula Perón-Perón. Primero lo hizo la CGT, el 2 de agosto de 1951. Emitió un comunicado por el cual doscientos miembros del comité confederal pidieron que Perón fuera candidato a la presidencia por segunda vez y que Evita fuera consagrada vicepresidenta. Al día siguiente una reunión de las delegadas y subdelegadas censistas en la quinta presidencial de Olivos proclamó su adhesión a la fórmula Perón-Perón. Por unos días pareció que el entusiasmo de las bases, sobre todo el de la rama femenina, ganaría la partida. La CGT organizó una enorme manifestación en la Avenida 9 de Julio, donde se instaló un gigantesco palco para la proclamación de las candidaturas de Perón y Evita el 22 de agosto de 1951, durante el Cabildo Abierto del Justicialismo. Las columnas llegaron desde temprano con grandes carteles que anunciaban "Perón-Eva Perón 1952-1958" y un gran número de mujeres se situaron cerca del palco con pañuelos blancos en la cabeza o agitándolos en sus manos. Perón aceptó presentar



Palco oficial del 17 de octubre de 1951.

El renunciamiento de Eva Perón

Perón ingresó al palco sin Evita, acompañado de sus ministros, legisladores, miembros del Consejo Superior del Partido Peronista y de la CGT. Abrió el acto Espejo y de inmediato anunció que iría buscar a Evita. Se retiró y al momento volvió con ella, lo que motivó ruidosas exclamaciones por parte de la multitud. Después de cantar el Himno Nacional, Espejo reanudó la parte oratoria con un largo discurso en el que recalcó que el acto de ese día era un verdadero cabildo abierto, un plebiscito para pedirle a Perón que siguiera al frente del gobierno y que Evita integrara la fórmula de los trabajadores.

[...]

Evita le siguió en el uso de la palabra, afirmando en el tramo final de su discurso:

"Yo no soy más que una mujer del pueblo argentino, una descamisada de la patria pero una descamisada de corazón, porque siempre he querido confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los que sufren, trabajando codo a codo, corazón a corazón con ellos para lograr que lo quieran más a Perón y para ser un puente de paz entre el general y los descamisados de la patria". Sin mencionar directamente la candidatura a la vicepresidencia, llegó al final de su discurso: "Yo siempre haré lo que diga el pueblo. Pero yo les digo que así como hace cinco años he dicho que prefería ser Evita antes que la mujer del Presidente, si esa Evita era dicho para aliviar algún dolor de mi patria, ahora digo que sigo prefiriendo ser Evita. Yo, mi general, con la plenipotencia espiritual que me dan los descamisados, os proclamo, antes que el pueblo os vote el 11 de noviembre, Presidente de todos los argentinos. La patria está salvada porque la gobierna el general Perón".

"Sólo los pueblos fuertes y virtuosos son dueños de su destino", comenzó Perón una vez que se calmaron las demostraciones que puntualizaron las manifestaciones de Evita. La palabra de Perón, tanto como la de Evita, fueron interrumpidas frecuentemente por aplausos y vítores, pero una vez que él finalizó Espejo se acercó al micrófono para aclarar que Evita no había dado una respuesta afirmativa a la propuesta del pueblo y que el cabildo abierto pasaba a cuarto intermedio hasta el día siguiente en que la CGT le pediría su respuesta definitiva. La multitud lanzó un ¡NO! ensordecedor y Evita, acercándose al micrófono, con voz ronca y desgarrada, inició un diálogo inolvidable con ella.

"Mis queridos descamisados: Yo les pido a los compañeros de la CGT, a las mujeres, a los niños, a los trabajadores aquí congregados, que no me hagan hacer lo que nunca quise hacer. Yo les pido a la Confederación General del Trabajo y a ustedes por el cariño que nos une, por el amor que nos profesamos mutuamente, que para una decisión tan trascendental en la vida de esta

humilde mujer, me den por lo menos cuatro días para pensarlo".

"¡No! ¡No! ¡Ahora!", gritaron. Tuvo que repetir cuatro veces "¡Compañeros!" antes de conseguir un minuto de silencio. "Compañeros: Yo no renuncio a mi puesto de lucha, renuncio a los honores. Yo me guardo, como Alejandro, las esperanzas, por la gloria y el cariño de ustedes y del general Perón." De nuevo se alzó el grito de "¡Ahora!". En vano trató de explicar, razonar, ganar tiempo, la multitud la interrumpía para decir "¡Hoy! ¡Ahora!". "Compañeros: se lanzó por el mundo que yo era una mujer egoísta y ambiciosa; ustedes saben muy bien que no es así. Pero también saben que todo lo que hice no fue nunca para ocupar ninguna posición política en mi país. Yo no quiero que mañana un trabajador de mi Patria se quede sin argumentos cuando los resentidos, los mediocres que no me comprendieron, ni me comprenden, creyendo que todo lo que hago es por intereses mezquinos..." La frase quedó en el aire pues el público la interrumpió otra vez. Pidió entonces que esperaran la respuesta hasta el día siguiente y le gritaron de nuevo "¡NO!". Con voz rápida y entrecortada, les aseguró que "esto me toma de sorpresa. Hace mucho que yo sabía que mi nombre se mencionaba con insistencia, y no lo he desmentido; yo lo hice por el pueblo y por Perón, porque no había ningún hombre que pudiera acercarse a distancia sideral de él, y por ustedes, porque así podían conocer a los hombres con vocación de caudillos, y el general, con mi nombre, momentáneamente, se podía amparar de las disensiones partidarias, pero jamás, en mi corazón de humilde mujer argentina, pensé que yo podía aceptar este puesto..." Pero la multitud no quería oír sus explicaciones y la interrumpió otra vez. "Esta noche.." alcanzó a decir, "¡No! ¡No! ¡Ahora!" Pidió dos horas de espera. De nada sirvió. Impotente, Evita se retiró y pasó el micrófono a Espejo, quien anunció: "Nosotros esperamos aquí su resolución. No nos moveremos hasta que nos dé una respuesta favorable a los deseos del pueblo trabajador". Se oyó entonces una ovación delirante y en la noche que caía la multitud, encendiendo antorchas, se aprontó a esperar. Evita se acercó entonces al micrófono para decir su última palabra: "Compañeros: como dijo el general Perón: yo haré lo que diga el pueblo". El acto terminó pocos minutos más tarde, después que se leyó el decreto declarando feriado el día siguiente y que Perón recomendó, como lo hacía usualmente, que la gente se desconcentrara lentamente y con tranquilidad.

[...]

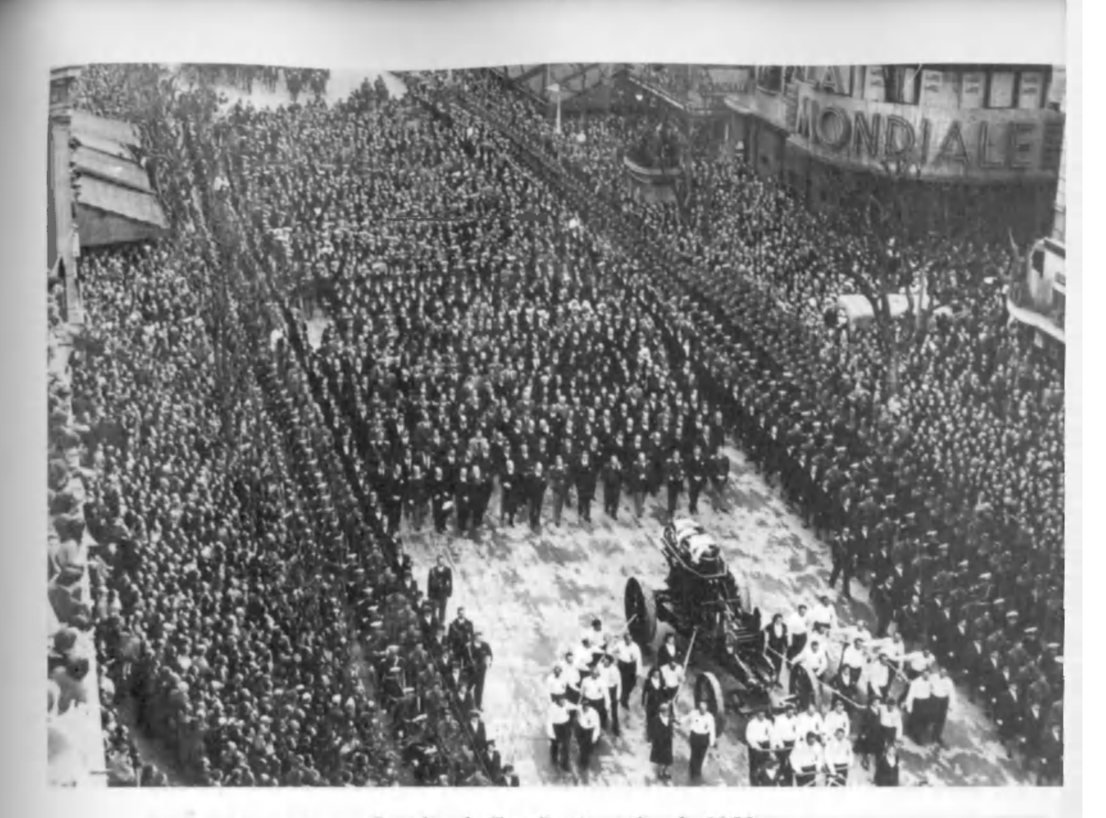
Nueve días más tarde, en un discurso transmitido por la cadena nacional de radiodifusión, con voz cansada pero firme, Evita anunció su "decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo" quisieron honrarla.

Marysa Navarro, *Evita*, Corregidor, Buenos Aires, 1981, pp. 272-274.

su candidatura para su reelección. Evita pronunció uno de sus clásicos discursos combativos y apasionados en el que recordó el 17 de octubre y la fidelidad de los descamisados a Perón, fustigó a los enemigos del pueblo, o sea a la oligarquía, los vendepatrias, los mediocres, los entreguistas y los cobardes, agazapados todos en sus guaridas, prontos a atacar de nuevo, y se definió como una mujer de pueblo, una descamisada que trabajaba para que los descamisados quisieran más a Perón. A pesar del clamor de la multitud y de la insistencia de Espejo, se rehusó a dar su consentimiento, pidió unas horas más, afirmando antes de retirarse: "Yo haré lo que el pueblo diga".

La maquinaria de propaganda peronista se puso en marcha para hablar de "su renunciamento", pero fue una decisión que se vio obligada a tomar por presión de las Fuerzas Armadas y a la cual Perón en último término se plegó. Pero a pesar de las loas peronistas al "renunciamiento", el hecho es que en un acto de una audacia excepcional Evita apostó a que la fórmula Perón-Perón podía ser un sueño realizable para ella, la mujer más poderosa e influyente de la Argentina. Por mucho que lo negara, tuvo ambiciones politicas, algo que la oposición le enrostraba como el peor insulto que podía lanzar contra ella, pues era una pasión admirable en un hombre pero supuestamente despreciable para una mujer. Evita buscó la vicepresidencia, permitió que la CGT y sobre todo la rama femenina (que no actuaba sin su consentimiento) propusieran y exigieran la fórmula Perón-Perón y prepararan el 22 de agosto. Mantuvo abierta la posibilidad de su candidatura hasta el último momento. Pero entendió que habia perdido la pulseada, aceptó su derrota y se retiró a la residencia.

A partir de entonces, su vida tomó un giro cada día más penoso. El 24 de septiembre cayó enferma y tuvo que interrumpir sus actividades. El golpe militar del general Benjamín Menéndez la sorprendió todavía recluida en la residencia. El 17 de octubre estuvo dedicado a Evita oficialmente y, aunque ya muy enferma, asistió a la concentración en Plaza de Mayo. Perón pronunció un discurso excepcionalmente generoso hacia Evita. Cuando ella habló, pidió a los descamisados que juraran defender al general hasta la muerte y gritaran allí mismo "La vida por Perón". El 6 de noviembre fue operada pero la inter-



Sepelio de Eva Perón, julio de 1952.

vención no consiguió detener su enfermedad. Se repuso lo suficiente como para votar por primera vez en su vida el 11 de noviembre y disfrutar del nuevo triunfo de Perón. En el mes de junio lo acompañó en un auto abierto cuando asumió la presidencia por una segunda vez, pero fue su última salida. Falleció el 26 de julio de 1952.

****

El impacto de Evita en la vida política argentina fue apreciable a pesar de no haber alcanzado la vicepresidencia, y su gestión afectó indudablemente a todas las mujeres argentinas, hasta a aquellas que la rechazaban visceralmente. Sin embargo, curiosamente, "la abanderada de los trabajadores" demostró una extraordinaria falta de interés en las obreras o empleadas en tanto obreras o empleadas o en las condiciones de trabajo de las mujeres. Esto no quiere decir que no hiciera nada por

ellas pues a través de la Fundación, tanto en Buenos Aires como en el interior, construyó jardines infantiles para las criaturas de mujeres que tenían un trabajo asalariado, comedores escolares, hogares de tránsito para trabajadoras y su famoso Hogar de la Empleada que visitaba a menudo pues le gustaba cenar en su restaurante. Pero las trabajadoras asalariadas no contaron con una política específica que contemplara sus necesidades y las equiparara con los hombres. En términos generales las condiciones de trabajo para las mujeres durante el peronismo cambiaron en la medida en que fueron alteradas las de los hombres, pero las desigualdades entre los dos géneros no fueron eliminadas. Como había sucedido antes y seguiría sucediendo después, el principio de a igual trabajo igual salario, junto con el sufragio femenino enarbolado por los socialistas en su primer programa mínimo de 1895, quedó de nuevo en un principio pues las diferencias salariales entre hombres y mujeres no desaparecieron en los nueve años de gobierno peronista, así como tampoco después. En el movimiento gremial tampoco se registraron cambios positivos para las mujeres. Al contrario, algunas de las pocas dirigentes obreras que habían alcanzado cierta relevancia antes del año 43, como Dora Genkin de la Unión Obrera Textil, se perdieron en las bases pero no fueron reemplazadas. Si bien no tenemos datos precisos sobre el nivel de sindicalización femenina y masculina, sí sabemos que la dirección de los sindicatos quedó en manos de hombres, hasta aquellos en los que las mujeres tenían una presencia importante, por ejemplo la industria textil. A pesar de la influencia que Evita alcanzó a ejercer sobre algunos miembros



Sello postal en el segundo aniversario de la muerte de Eva Perón, 1954.

del comité confederal, parecería que no usó su buenos oficios para facilitar la mayor inserción de las mujeres en la dirección de las organizaciones sindicales o para alterar las prácticas discriminatorias contra ellas, ya fuera en los sindicatos o en los lugares de trabajo.

Quizás haya que buscar la explicación de esta falta de preocupación en la manera en que Evita definió su trabajo, como una extensión de su papel de esposa y en función de las necesidades de Perón. Si bien desde 1946 hasta su muerte emprendió actividades insólitas para la esposa de un presidente en esos años, desde acompañar a Perón en la campaña electoral o viajar a España sin él en representación oficial de la Argentina, hasta escribir una autobiografía o fundar un partido compuesto y dirigido por mujeres, explicaba a quien quisiera oírla que lo hacía pura y exclusivamente porque los descamisados y su esposo precisaban de su ayuda. Su discurso a las mujeres era un eco del discurso oficial peronista desde el año 45, un discurso que no se apartó nunca de una visión tradicional de la mujer-madre, aunque proviniera de una mujer que en su vida personal no era madre, pero por sus actos se transformaba en una esposa ejemplar y una madre paradigmática, que no necesitaba de criaturas propias pues todos los desamparados y los necesitados, como decía ella, eran sus hijos. A pesar de su apariencia novedosa, porque era dicho por una mujer, desde el poder y en un lenguaje inesperado pues provenía de las radionovelas, era un discurso muy tradicional. A veces era también ambiguo y contradictorio. Si por un lado Evita impulsaba a las mujeres a salir de sus casas, a organizarse, a comprometerse con las actividades de las unidades básicas y transformarse en militantes peronistas, prontas a defender a Perón de sus enemigos como lo defendieron los descamisados el 17 de octubre, les recalcaba que debían hacerlo sin olvidar sus deberes femeninos, o sea siendo buenas esposas y, sobre todo, buenas madres, y al exigirles que obedecieran ciegamente a Perón les pedía que no pensaran por sí mismas y que cambiaran al padre o al esposo por otra figura masculina todavía más poderosa.

Aunque también es verdad que con sus palabras, pero sobre todo con sus actos, Evita legitimó el compromiso político para las mujeres, en particular las de clase obrera y de clase media, reforzando y ampliando lo que previamente había sido preocu-

pación de minorías. Pasarían muchos años antes de que todos los partidos políticos argentinos abrieran sus puertas de par en par a las mujeres, les permitieran ocupar puestos directos o posiciones en las listas electorales desde las cuales pudieran ser elegidas, pero finalmente lo hicieron. La participación de miles de mujeres en la organización, dirección y funcionamiento de las unidades básicas fue una experiencia positiva para ellas, como lo fue también el ingreso de cuarenta y cinco mujeres al Congreso Nacional, si bien su presencia no significó la incorporación de temas específicamente femeninos en los debates parlamentarios. Tal como lo habían querido las feministas durante muchos años y también lo quiso Evita, la adopción de la ley 13.010, que permitió la incorporación de casi la mitad de la población adulta a la vida política del país, fue lo que inició el proceso.

BIBLIOGRAFÍA

Bianchi, Susana y Sanchis, Norma: *El partido peronista femenino (1949-1955)*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1988.

Borroni, Otelo y Roberto Vacca: *La vida de Eva Perón*, Galerna, Buenos Aires, 1970.

Chávez, Fermín: *Eva Perón en la Historia*, Oriente, Buenos Aires, 1986.

———: *Eva Perón sin mitos*, Ediciones Theoría, Buenos Aires, 1996.

Navarro, Marysa: *Evita*, Corregidor, Buenos Aires, 1981.

———: "El liderazgo carismático de Evita", en: *La Aljaba*, Segunda Época, vol. V, Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Nacional de Luján y Universidad Nacional del Comahue, La Pampa, 2001.

Page, Joseph: *Perón, a Biography*, Random House, Nueva York, 1983.

Perón, Eva: *Mensajes y discursos. La razón de mi vida. Historia del peronismo*, Fundación Pro Universidad de la Producción y del Trabajo y Fundación Evita Perón, Buenos Aires, 1999.

Pichel, Vera: *Mi país y sus mujeres*, Sudestada, Buenos Aires, 1968.



VII

La formación del sindicalismo peronista

por LOUISE DOYON



na de las demostraciones obreras en las que expresan "sólo volver al trabajo con la alabra de Perón".



La reacción dominante en las filas del movimiento sindical ante la Revolución de 1943 fue de cauta expectativa. Sólo los comunistas se apartaron de esa actitud, para denunciar desde un comienzo las orientaciones filofascistas del régimen militar. La posición de los comunistas era explicable: a los pocos días del golpe sus principales dirigentes y militantes fueron puestos en prisión. La prudencia del resto de los líderes sindicales no habría de ser recompensada, sin embargo. En julio fue promulgado un decreto que otorgaba a las autoridades del gobierno el poder para determinar qué entidades podían representar a los trabajadores ante las empresas y el Estado, al tiempo que condicionaba ese reconocimiento a la renuncia a toda participación en la vida política. Un mes más tarde, haciendo uso de sus flamantes poderes, los militares ordenaron la intervención del principal sindicato de la época, la Unión Ferroviaria, conducido por dirigentes socialistas. Así, comunistas y socialistas, las dos principales corrientes sindicales, terminaron conociendo el

rigor represivo del nuevo régimen, a pesar de las diferencias ideológicas y tácticas que los oponían entonces y desde hacía tiempo atrás.

LOS LÍDERES OBREROS ENTRE LA AUTONOMÍA Y LA SUBORDINACIÓN POLÍTICA

Al momento en que se produjo la Revolución de Junio difícilmente se podía hablar de los trabajadores como un sector social organizado a nivel nacional. El sindicalismo tenía una implantación desigual en el país. Su presencia era más evidente en los sectores del transporte y los servicios, como los ferrocarriles, el correo, el puerto, los bancos, el comercio, los gráficos. En cambio, era más incipiente y limitada en las actividades de la industria. La inserción de los gremios en los transportes y los servicios había sido el fruto de una labor perseverante desde los años veinte y su culminación era un gremialismo reformista y negociador dirigido por los socialistas y, en menor medida, por los sindicalistas. La expansión de las manufacturas industriales a partir de la mitad de los años treinta creó nuevas oportunidades para la organización. Quienes procuraron explotarlas fueron los comunistas quienes, saliendo del lugar periférico que ocupaban hasta entonces, se lanzaron con tácticas más militantes y agresivas a instalar entre los nuevos trabajadores la conciencia de la acción gremial. Estos esfuerzos se tradujeron en un alza de la agitación obrera a partir de 1936 pero sus resultados en materia de sindicalización fueron bastante magros, debido a la hostilidad de los empresarios a la acción sindical. No obstante, hacia 1942, los comunistas llegaron a compartir con los socialistas el liderazgo del movimiento sindical y a disputar con ellos sobre los rumbos a seguir en la vida política y social. Si al producirse el golpe de 1943 no se podía hablar de un sindicalismo de alcance nacional, porque sólo el 20% de los trabajadores estaba organizado, tampoco se podía hablar de sindicalismo unido porque los conflictos entre socialistas y comunistas habían conducido a la formación de centrales sindicales rivales.

Es en este marco que los militares desplegaron sus primeras medidas de corte represivo. En octubre de 1943 la estrategia

oficial hacia los sindicatos comenzó a cambiar con la designación de Perón en el Departamento Nacional de Trabajo. A diferencia de sus camaradas, Perón tenía una visión de la cuestión social más elaborada y menos simplemente regresiva. Para él ni una masa proletaria sometida a los avatares del mercado ni una fuerza obrera organizada e independiente ofrecían garantías para la estabilidad del orden social. En el primer caso, una situación semejante podía potencialmente dar lugar a rebeliones obreras disruptivas como las de principios de siglo. El segundo caso tampoco era una alternativa tranquilizadora porque un sindicalismo fuerte y autónomo podía expandir las luchas económicas hasta un verdadero conflicto de clases. Para evitar los riesgos de una y otra situación, Perón entendía que era preciso rehabilitar el papel mediador del Estado entre el capital y el trabajo. En su opinión, si los poderes públicos continuaban ignorando la cuestión social, mientras proseguía la difusión de las ideologías de clase entre los trabajadores, el orden social del país estaba amenazado. Así, la intervención estatal aparecía como un reaseguro contra el peligro de una agudización de la lucha de clases. Con este convencimiento, maniobró dentro de la elite militar y obtuvo su designación al frente del Departamento Nacional de Trabajo, con vistas a hacer de él la plataforma de lanzamiento de una estrategia preventiva de vasto alcance.

Para ponerla en marcha trató de disociarse de las medidas represivas del régimen e inició contactos con dirigentes de los principales gremios, a los que invitó a que nombraran asesores con el fin de hacer una revisión exhaustiva de las quejas presentadas a



Habla el coronel Perón en el primer aniversario de la Secretaría de Trabajo, 26-11-1944.

la vieja oficina laboral. Como señal de buena voluntad, en diciembre de 1943 dejó sin efecto el decreto sobre organizaciones gremiales del mes de julio. La respuesta de los dirigentes sindicales estuvo lejos de ser clara y entusiasta. Más bien se acercaron al jefe militar con bastante recelo, porque predominaba en ellos un antiguo prejuicio hacia los hombres de armas, que la línea oficial de la Revolución de Junio no hacía más que confirmar. Por otro lado, Perón tampoco podía dar pronta satisfacción a los reclamos sindicales ya que su lugar en el régimen aún no estaba consolidado. Recién en mayo de 1944, luego de haber desplazado a sus rivales en el Ejército y afianzado su poder personal, Perón comenzó a pasar de las promesas a los hechos. Entonces, los controles oficiales sobre el sindicalismo se aflojaron; los obreros ferroviarios recuperaron la conducción de su sindicato. Una serie de decretos se ocuparon de promover las negociaciones colectivas bajo la tutela estatal. Según las nuevas normas los convenios entre sindicatos y empresas tenían validez si eran previamente aprobados por la Secretaría de Trabajo; y una vez que ésta lo hubiera hecho revestían carácter obligatorio dentro del respectivo sector de actividad y podían ser implementados a la fuerza en caso de existir resistencia patronal. En los 15 meses posteriores a mayo de 1944 se firmaron cerca de 700 contratos, una cifra que revela toda su significación cuando se la compara con los 400 contratos concertados entre 1941 y 1943. A su vez, la Secretaría de Trabajo facilitó la sindicalización proveyendo a los organizadores sindicales de credenciales oficiales para que pudiesen entrar a las empresas y afiliar a los trabajadores. Este respaldo permitió, asimismo, que los lugares vacantes dejados por el encarcelamiento y la represión de los comunistas fueran ocupados por socialistas o por nuevos militantes obreros.

Los principales beneficiarios de la acción de la Secretaría de Trabajo fueron, inicialmente, los viejos sindicatos del transporte y los servicios, que tenían una mayor capacidad para articular sus demandas y presionar sobre los poderes públicos. El apoyo que recibieron los sindicatos de la industria se concentró sobre todo en romper la fuerte resistencia de los empresarios a la negociación colectiva. En un caso y en el otro la novedad estuvo en la transformación del Estado en una instancia

política a la que podían recurrir los trabajadores para equilibrar las relaciones de fuerza en el mercado de trabajo. Muy pronto, Perón trató de comprometer políticamente a quienes recibían su respaldo con el fin de ganar adhesiones hacia el régimen militar y de construir una base de apoyo político alrededor de su liderazgo personal. En este intento tuvo un éxito limitado. En general, los dirigentes obreros aprovecharon las nuevas oportunidades que les abría la Secretaría de Trabajo, mientras que, al mismo tiempo, trataban de mantener la mayor distancia respecto de un gobierno cuyas orientaciones políticas juzgaban tan críticamente como lo hacían los partidos políticos. Por cierto, la resistencia de los sindicalistas a aparecer públicamente asociados al régimen militar estaba lejos de satisfacer a Perón. Sin embargo, éste no estaba todavía en condiciones de imponer su voluntad; en esos días llegó a decir: "Para mí el movimiento obrero es como una orquesta: si algún violín desafina no tengo más remedio que dejarlo sonar porque no tengo otro para reemplazarlo".

Los principales gremios persistieron en su táctica oportunista hasta el fin del verano de 1945. En ese momento cambió la coyuntura política del país debido a la inminencia del triunfo de los ejércitos aliados sobre Alemania y Japón. Bajo la dirección de Perón, los militares en el poder se adaptaron a los nuevos tiempos. En primer lugar, se declaró la guerra a los países del Eje; luego, las figuras conocidas por sus simpatías fascistas fueron desplazadas de los cargos públicos y se restablecieron las libertades políticas; finalmente, se anunció la próxima normalización institucional del país mediante la convocatoria a elecciones libres. En lugar de darle un respiro, estas iniciativas del régimen militar fueron interpretadas, tanto en Washington como en los medios locales, como las señales premonitorias de su próximo colapso y, en los hechos, alentaron a sus adversarios externos e internos a movilizarse para imponer su rendición incondicional y la transferencia del poder a la Suprema Corte.

En un escenario políticamente cada vez más polarizado, los sindicatos se vieron forzados a abandonar su postura de neutralidad en el conflicto que dividía al país. Sobre todo, cuando los empresarios se sumaron al conflicto, cuestionando públicamente las medidas de protección laboral de la Secretaría de



17 de octubre de 1945.

Trabajo. Y, más todavía, cuando a comienzos de octubre Perón fue obligado a renunciar y luego detenido por sus propios camaradas del Ejército. En tales circunstancias, los dirigentes obreros tomaron partido, como venía haciéndolo ya la mayoría de los sectores trabajadores, y salieron en defensa de Perón y sus políticas. Fue entonces que tuvo lugar la movilización popular del 17 de octubre, que frenó la ofensiva de la oposición, rescató a Perón de su derrota temporaria y reabrió el juego político con vistas a las elecciones presidenciales de febrero de 1946.

Imbuidos de una segura confianza en su propia fuerza luego de la exitosa culminación de la jornada de octubre, líderes obreros de los más variados orígenes —socialistas, sindicalistas, radicales, independientes— fundaron el Partido Laborista con la intención de participar en forma autónoma en la contienda electoral. Desde un comienzo, éste fue un objetivo bastante problemático porque los dirigentes del flamante partido ofrecieron a Perón la candidatura a presidente. Esta decisión, mediante la cual no hacían más que reconocer el liderazgo de

Perón entre los trabajadores, ratificado en forma multitudinaria el 17 de octubre, fijó límites claros a sus pretensiones de autonomía. Así ocurrió por ejemplo en los debates realizados para la conformación de la coalición electoral. En ellos Perón impuso la incorporación de un sector disidente del radicalismo —la UCR-Junta Renovadora— a pesar de la opinión en contrario de muchos laboristas, que veían en él una expresión más de la vieja política. Algo semejante ocurrió con la designación de la candidatura a vicepresidente: los laboristas debieron resignar el nombre de Domingo Mercante, un militar conocido por su gestión en la Secretaría de Trabajo, y aceptar en su lugar a Hortensio Quijano, jefe de los radicales disidentes, que Perón propuso para ampliar la convocatoria a los sectores no obreros del electorado. Más tarde, durante la campaña electoral, los esfuerzos de los dirigentes laboristas por hacer oír su mensaje fueron opacados por el mayor eco alcanzado por Perón, quien se convirtió en el verdadero eje de la confrontación con el frente opositor de la Unión Democrática.

Producido el triunfo electoral de Perón el 23 de febrero, afloraron las tensiones que atravesaban su coalición electoral al recrudecer el enfrentamiento que oponía a los laboristas y a los políticos de la Junta Renovadora. Debido a que habían provisto buena parte de los recursos materiales y organizativos que hicieron posible la victoria electoral, los laboristas esperaban un papel principal en el nuevo gobierno. Pero se encontraron envueltos en las intrigas de los políticos, que pretendían marginarlos de la distribución del poder. En el conflicto, el reclamo de los laboristas iba más allá de la busca de recompensas a su aporte electoral y se nutría de la gran desconfianza que sentían hacia los representantes de la política tradicional. El rechazo era recíproco porque para los radicales disidentes los electos por el partido sindical eran poco más que analfabetos políticos. A los efectos desestabilizadores de esta pugna se sumó el deseo de Perón de afianzar su predominio sobre la coalición. Durante la reciente campaña y porque carecía de un aparato político propio había tenido que apoyarse en los sindicatos para la movilización electoral. Ahora que ésta había terminado con la ratificación de su liderazgo personal, había llegado también la hora de convertir ese liderazgo en un principio de autoridad dentro del movimiento triunfante. El 23 de mayo,

diez días antes de asumir el gobierno, ordenó la disolución de los partidos de la coalición peronista y la unificación de sus simpatizantes en una nueva organización partidaria bajo su conducción.

Los radicales renovadores no opusieron reparos a la orden de disolución; en cambio, sí lo hicieron los laboristas, los cuales, reunidos el 24 de mayo en un congreso del partido, decidieron por mayoría desoír el llamado a la unidad. La resistencia fue de corta duración. Una vez que Perón dejó en claro que su decisión era irrevocable, un numeroso grupo de legisladores recién electos en las listas laboristas optó por acatarla. El comité ejecutivo del partido sindical inició entonces conversaciones con delegados de Perón para definir los términos de la unificación. El 17 de junio, y luego de haber obtenido seguridades de que las fuerzas laboristas tendrían una representación



El presidente del Banco Central, señor Miranda (en el centro), toma posesión en el cargo a Luis F. Gay (segundo desde la izquierda) como presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Están presentes el coronel Aníbal F. Imbert y Oscar Nicolini (primero y último desde la izquierda respectivamente).

importante en la nueva organización partidaria, presentó su renuncia y llegó a su fin la breve experiencia de autonomía política de los sindicatos. Sólo el vicepresidente, Cipriano Reyes, mantuvo la negativa a la unificación, pero su rebelión fue pronto una aventura personal que no sobrevivió al celo represivo del flamante régimen. La desigual relación de poder entre las autoridades del Partido Laborista y el liderazgo popular de Perón determinaron el desenlace. La disolución del partido fue ciertamente un serio revés pero no implicó la total capitulación del proyecto dirigido a dar a los sindicatos una voz independiente dentro de la coalición de gobierno. En noviembre de 1946 debía producirse la renovación de las autoridades de la CGT. En la ocasión, desde las oficinas de la presidencia se adelantó el nombre de un candidato oficial, pero los votos de la mayoría de los delegados sindicales llevaron a la secretaría general de la central obrera a Luis Gay, dirigente telefónico y hasta hacía poco presidente del Partido Laborista. La designación de Gay representó una reivindicación póstuma de la fallida experiencia laborista a la vez que condensó el malestar existente por el incumplimiento de la promesa de asegurar a los dirigentes obreros una participación destacada en el nuevo partido unificado.

Las pretensiones de autonomía sindical reaparecieron en la gestión que Gay imprimió a la CGT. Convocó a los diputados de origen sindical recién electos para conformar un bloque informal que tuviera una personalidad diferenciada en el Congreso. Asimismo, promovió la creación de un consejo técnico integrado por profesionales a los efectos de producir iniciativas propias desde la CGT. Este desafío a la unidad de la coalición gobernante no pasó desapercibido en los círculos oficiales y precipitó un conflicto con Perón. Decidido a ratificar su autoridad sobre las fuerzas adictas, Perón aguardó el momento oportuno para desplazar a Gay. Ese momento llegó en enero de 1947, con la visita de una delegación de sindicalistas norteamericanos, invitados por el gobierno para observar de cerca el clima de libertad sindical reinante en la Argentina. El hecho es que, luego de esa visita, desde la prensa oficial se montó una maliciosa campaña en contra de Gay, presentándolo como un agente interesado en introducir una cuña entre Perón y el movimiento obrero en combinación con el sindicalismo norte-

Luis Gay y la autonomía sindical

"Después de mi designación como secretario de la CGT visité a Perón y me felicitó, diciéndome luego que ahí en la presidencia había un equipo que me habría de asesorar sobre las declaraciones que debía hacer y las medidas que debía tomar. Para no violentarlo enseguida le respondí: 'Mire, señor presidente, usted tiene muchos problemas importantes que atender, así que déjenos a nosotros, los hombres que tenemos veinticinco años en el movimiento obrero, dirigir a la CGT'. Él, con toda prepotencia, me replicó: '¡Entonces, a los sindicatos autónomos los dirijo yo!' 'Bueno, ése es un problema suyo, señor presidente, y de los autónomos, pero —le puntualicé— a la CGT la dirigimos nosotros.'"

Luis Gay, *El Partido Laborista en la Argentina*, Biblos-Fundación Simón Rodríguez, Buenos Aires, 1999, p. 202.

americano. Ante lo que era una condena clara a su línea de acción, Gay presentó su renuncia.

En el momento en que el gobierno comenzaba su lucha para atacar las más flagrantes desigualdades sociales, el principio de la autonomía sindical aparecía como una traición a la causa peronista porque en los hechos cuestionaba la identidad de intereses entre Perón y el sindicalismo. Por esa razón, el secretario de la central sindical se encontró prácticamente solo frente a un rival formidable. Con criterio realista, una mayoría de dirigentes obreros prefirió no insistir en una posición que llevaba a la ruptura con un socio que era indispensable para avanzar en las demandas obreras. Después de Gay, los otros miembros de la dirección de la CGT presentaron la renuncia, aceptando su subordinación política, y se replegaron a sus respectivos gremios. Sus lugares fueron llenados por dirigentes más complacientes a las necesidades políticas del gobierno. De este modo, la CGT dejó de aspirar a ser un representante del movimiento obrero ante el gobierno para comportarse más bien como un representante del gobierno ante el movimiento obrero.

En buena parte de la bibliografía producida por los críticos del peronismo, la disolución del Partido Laborista y la incorporación de la CGT a la esfera de influencia estatal han sido interpretadas como hitos que marcaron el repliegue del movimiento sindical como actor sociopolítico hasta 1955. La captura de esos focos de autonomía sindical habría inclinado la relación de fuerzas en el campo laboral a favor de los nuevos trabajadores industriales, que eran en su mayoría inmigrantes internos recién llegados y por ende carentes de una clara conciencia proletaria. Así, el movimiento sindical, sometido al control estatal, devendría en una fuerza impotente, mientras que la masa obrera, predispuesta por su origen a una relación de tipo paternalista, se limitaría a recibir pasivamente los beneficios sociales y a confiar a las autoridades del gobierno la tarea de su implementación.

Sería poco sensato restar importancia a la cooptación de la CGT por parte de Perón. Pero la interpretación que comentamos se equivoca al hacer de este episodio toda la síntesis de cuanto ocurrió en el plano de la acción sindical durante la década. Perón logró ciertamente sofocar la posibilidad de que los sindicatos tuvieran una voz políticamente independiente. Sin embargo, no quiso o no pudo limitar su función como agentes de la lucha económica. Según se desprende de la reconstrucción histórica, los sindicatos consiguieron retener la capacidad de promover los intereses sectoriales de los trabajadores. La importancia alcanzada por el fenómeno de la organización hizo que la experiencia obrera en estos años no fuera equivalente a la de una masa amorfa e inorgánica activada por la convocatoria de un líder carismático.

Cuadro 1: Afiliación sindical entre 1946 y 1954 (número de afiliados)

	1946	1948	1950	1954
Industria	444.350	795.752	1.088.781	992.799
Transporte	178.109	306.977	311.623	411.531
Servicios	254.871	430.196	592.000	852.250
Total	877.330	1.532.925	1.992.404	2.256.580

Fuente: Elaboración propia a partir de actas de los comités centrales confederales y los congresos de la CGT.

Ya se indicó antes que hacia 1943 difícilmente se podía hablar en la Argentina de un sindicalismo de alcance nacional. Esto fue lo que cambió y muy rápidamente a partir de 1946. La afluencia sin precedentes de los trabajadores urbanos a los sindicatos y la febril actividad de éstos con los auspicios del gobierno produjeron en un corto lapso un crecimiento impresionante del movimiento obrero organizado. El período en el que la afiliación resultó más intensa fue el abarcado por los años 1946-1948. En 1948 la proporción de los trabajadores afiliados sobre la población asalariada se elevaba al 30,5% y seis años después, en 1954, había aumentado hasta el 42,5%. Si se excluye del cómputo a los trabajadores rurales, los porcentajes son aún más altos porque en la mayoría de las actividades económicas urbanas el promedio de afiliación se situaba entre el 50 y el 70 por ciento. Además de aumentar el número, cambió la composición del movimiento obrero. Hacia 1948 los trabajadores industriales habían desplazado a los trabajadores de los servicios y el transporte, pasando de representar el 33% de los afiliados en 1941 a un 52% en 1948. A partir de 1950 la campaña de afiliación llegó a los trabajadores del sector gobierno y el nivel general de afiliación alcanzó valores comparables a los de los países de Europa.

El marco legal dentro del que tuvo lugar la expansión sindical lo proveyó el decreto 23.582 sancionado en octubre de 1945. Este decreto se inspiró en el modelo corporativista condensado en la *Carta del Lavoro* de la Italia de Mussolini y estaba en sintonía con la preocupación oficial por colocar la organización de los intereses sociales bajo la supervisión del Estado. Por un lado, consagraba formalmente la libertad sindical al establecer que para el reconocimiento de una organización gremial sólo era exigible su inscripción en un registro especial. Por otro lado, condicionaba esa libertad de afiliación al distinguir entre dos tipos de asociaciones: las simplemente inscriptas y las que tenían personería gremial. Mientras que las primeras podían actuar como cualquier entidad civil, el derecho a negociar convenios de trabajo era adjudicado en exclusividad a las segundas, lo cual tenía una influencia innegable sobre la decisión individual de afiliarse. La concesión de la personería gremial fue una facultad que el decreto 23.582 reservó a los poderes públicos, los cuales, por medio de ella, ha-

bilitaban al sindicato con más afiliados a ejercer con carácter monopólico la representación de los trabajadores en un determinado ámbito territorial.

Para apreciar la significación de este marco legal hay que señalar que en los sistemas laborales de cuño liberal los conflictos de representación son resueltos a través de instancias propiamente sindicales. Entre tanto, el decreto de 1945 dispuso que la competencia para dirimir esos conflictos correspondía a las autoridades, a las que se encargaba la potestad legal para asignar la personería gremial luego de evaluar las credenciales de los sindicatos. En la coyuntura de 1945 el otorgamiento del monopolio de representación permitió discriminar a favor de los sindicatos favorables a la política de Perón y desplazar a sus adversarios, por lo que los dirigentes obreros no cuestionaron el fuerte intervencionismo estatal del emergente sistema de relaciones laborales. La contrapartida de todo ello fue un alto grado de supervisión oficial sobre la vida interna de las organizaciones gremiales.

Además del monopolio de representación, otro componente del estatuto de 1945 fue la centralización de los sindicatos. La principal unidad de representación reconocida fue la actividad económica. En consecuencia, el sindicato podía representar a todos los trabajadores, cualquiera que fuese su calificación profesional, empleados en las empresas de una determinada rama industrial (textil, metalurgia, etc.) o servicio (correo, comercio, bancos, etc.). Si bien no estaba descartada la autorización a sindicatos de oficios o de empresa, estos casos fueron poco frecuentes. En términos comparativos, la estructura sindical argentina resultaba, así, más centralizada que la chilena, donde la legislación sólo autorizaba la formación de sindicatos a nivel de empresa. A su vez, iba más allá de la de Brasil, en la que se excluía la posibilidad de que los sindicatos o federaciones nacionales pudieran amalgamarse en una confederación única.

La centralización sindical fue reforzada por la modalidad de organización interna más escogida por los sindicatos. En ella, las conducciones nacionales tenían una fuerte gravitación sobre las secciones locales. Primero, porque ejercían las funciones decisivas: negociar los convenios y declarar la huelga. Segundo, porque recibían directamente los aportes y cuotas sin-

dicales y luego los distribuían hacia abajo y también porque tenían el poder de intervenir a las seccionales locales que se apartaran de sus directivas. Este patrón centralizado de autoridad estaba, empero, contrabalanceado por la existencia de las comisiones internas. Aunque no estaban reconocidas por el marco legal, su multiplicación a lo largo de las empresas del país por la presión obrera garantizó la presencia sindical dentro y no sólo fuera del lugar de trabajo, siendo éste otro rasgo distintivo del gremialismo argentino. Expuestas permanentemente a los reclamos de los trabajadores, las comisiones internas constituyeron un reaseguro contra los riesgos de la cooptación de las organizaciones gremiales por el gobierno.

LA CONQUISTA DE NUEVOS ESPACIOS DE PODER A TRAVÉS DE LAS HUELGAS

El progresivo aumento de la tasa de sindicalización y la implantación paulatina de grandes sindicatos nacionales permitieron a los trabajadores aprovechar el contexto político favorable posterior a febrero de 1946 para lanzar una ola de movimientos reivindicativos. En los tres primeros años de la presidencia de Perón se asistió a una fuerte alza de los paros y huelgas, un fenómeno que pareció reflejar la decisión de los trabajadores de replicar la victoria alcanzada en las urnas también en el terreno económico. Éste es un dato a tener en cuenta para colocar en perspectiva la expansión de las reformas laborales que conoció el país en la época. En su origen un papel central le cupo sin duda a las iniciativas del gobierno. Entre ellas, el salario anual complementario, la generalización de las vacaciones pagas, la extensión de las jubilaciones y pensiones a todos los asalariados, el pago de indemnizaciones por despido y por accidentes de trabajo, la percepción de los haberes en caso de enfermedad. Pero la vigencia efectiva de estos mayores niveles de protección laboral fue asimismo el resultado de las luchas emprendidas por los trabajadores organizados, las cuales en muchos casos se proyectaron más allá de las iniciativas del gobierno, llegando incluso a entrar en colisión con él.

Cuadro 2: Huelgas en Capital Federal

Año	Huelgas	Huelguistas	Jornadas no trabajadas
1946	142	333.929	2.047.601
1947	64	541.377	3.467.193
1948	103	278.179	3.158.947
1949	36	29.164	510.352
1950	30	97.048	2.031.827
1951	23	16.356	152.243
1952	14	15.815	313.343
1953	40	5.506	59.294
1954	18	119.701	1.401.797

Fuente: Síntesis Estadística Mensual, Dirección Nacional del Servicio Estadístico. Ministerio de Hacienda. Año V, N° 12; Año IX, N° 12.

Las estadísticas disponibles constituyen una muestra parcial del movimiento huelguístico porque se limitan a registrar los conflictos laborales ocurridos en la Capital Federal y, por lo tanto, ignoran los que se verificaron en el cinturón industrial del Gran Buenos Aires y las ciudades del interior. A pesar de esta deficiencia sirven, de todos modos, como un barómetro del clima de agitación social y sus variaciones en el tiempo. A este respecto es sugestivo comprobar que el pico máximo de la movilización obrera tuvo lugar en el momento de la cooptación política de la CGT, un hecho que para algunos señaló el eclipse del sindicalismo como protagonista independiente de la Argentina peronista. Centrando la atención en este período inicial y con ayuda de la prensa es posible reconstruir la dinámica de los conflictos laborales.

Revisando esta información periodística, que es más rica que la que resulta de las estadísticas oficiales, se observan algunas tendencias. En primer lugar, que los movimientos reivindicativos no quedaron confinados a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires sino que abarcaron grandes ciudades del interior: Córdoba, Rosario, Tucumán, La Plata y Mar del Plata. En segundo lugar, entre los conflictos más importantes del período fue mayor la proporción de los que lograron sus objetivos que la de los que tuvieron que retroceder, y sólo un pequeño número fracasó por completo. En la primera categoría estuvieron las huelgas

organizadas por los trabajadores de la carne (octubre, 1946), los metalúrgicos del Gran Buenos Aires (noviembre, 1947), los panaderos del Gran Buenos Aires (junio, 1946) y del país (diciembre, 1948), la rama lana de los textiles (octubre, 1947), los bancarios (abril, 1948), los obreros de YPF (julio, 1948), los recolectores de basura de Capital Federal (mayo, 1947), los jornaleros de la construcción en Córdoba (abril, 1946), Rosario (junio, 1946) y Santa Fe (marzo, 1947). Las huelgas que tuvieron un desenlace parcial según los objetivos sindicales ocurrieron en las refinerías privadas de petróleo (abril, 1947 y enero, 1948), el sector de los ingenios azucareros (septiembre, 1948), el puerto (febrero, 1947). El conflicto más importante que se perdió tuvo lugar también en el puerto en enero de 1948.

En tercer lugar, la mayoría de los paros se produjo durante el trámite de la negociación colectiva. La práctica de la negociación de convenios fue estimulada desde el gobierno y hay que destacar que éste adoptó una actitud favorable a los reclamos de los trabajadores. Sin embargo, ésa no fue una respuesta automática y a menudo sólo los paros masivos y largos, que involucraban a un sector vital de la economía, consiguieron provocarla. Las huelgas estallaban generalmente una vez que las negociaciones llegaban a un punto muerto y eran un recurso para involucrar a las autoridades a favor de las demandas obreras. Este empleo táctico de la huelga muchas veces fue eficaz; otras, en cambio, trajo aparejado un costo para los sindicatos. Así, durante el conflicto en los frigoríficos en 1946 dirigentes obreros fueron encarcelados y se cerraron locales sindicales. Las victorias de los panaderos, tanto en 1946 como en 1948, se lograron después que el gremio fue intervenido; la derrota de los portuarios en 1948 culminó asimismo con la intervención del sindicato. En cuarto lugar, hay que destacar que la Secretaría de Trabajo mostró mayor predisposición a acceder a las demandas salariales que a los reclamos dirigidos al control de condiciones de trabajo. De hecho, en esta primera etapa de la gestión peronista los salarios reales crecieron a una tasa récord, aumentando un 50% entre 1945 y 1948. Que hayan sido menos acompañadas por las esferas oficiales no significó que las reformas en el ámbito del trabajo no se hayan concretado, según quedó reflejado por los avances normativos incorporados a los convenios colectivos.

En efecto, después de 1946 la movilización obrera, además de procurar la vigencia de las reformas laborales oficiales, se aplicó a limitar la autoridad de los patrones en la vida interna de las empresas. Sus antiguas prerrogativas sobre el derecho a contratar, despedir, transferir y promover a la fuerza de trabajo fueron fuertemente reducidas por la introducción de la figura de la antigüedad y la elaboración de una intrincada clasificación de tareas comúnmente llamada "el escalafón", que garantizaba igual remuneración por igual tarea. Debido a que estabilizaba la posición de los trabajadores en la jerarquía laboral, el escalafón disminuía la facultad patronal de administrar la fuerza de trabajo como una masa relativamente indiferenciada. Al mismo tiempo, brindaba una pauta predecible de ascenso que restringía la libertad de contratar de la empresa estipulando que las vacantes sólo podían ser llenadas por personal de afuera una vez que se hubiese garantizado la oportunidad de probar sus aptitudes a los trabajadores ocupados en la categoría inmediatamente inferior. En cuanto a las transferencias temporarias, se especificaba que el trabajador que era ubicado en una categoría superior para cubrir una vacante momentánea tenía el derecho a recibir el salario de esa categoría y debía ser reclasificado al cabo de dos meses. Los convenios también incluyeron importantes beneficios suplementarios, como licencias extraordinarias con goce de sueldo para exámenes si el trabajador era estudiante a tiempo parcial, para contraer matrimonio y en el caso del fallecimiento de un familiar directo. En cuanto a las remuneraciones, se preveía junto al aguinaldo el pago de un adicional por cada año de antigüedad y de una asignación mensual por hijos menores.

Esta breve enumeración de las cláusulas introducidas en los convenios pone de manifiesto la magnitud de la redistribución del poder que se produjo en los ámbitos de trabajo como resultado de las huelgas ocurridas entre 1946 y 1949. Y permite dar cuenta de las quejas de los empresarios, que se insinuaron entonces hasta volverse más abiertas y estridentes durante la segunda presidencia de Perón.

EL FIN DE LA BONANZA ECONÓMICA Y LA DECLINACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN OBRERA

Durante los últimos años de la década del cuarenta el panorama hasta aquí descripto sufrió importantes modificaciones. La expresión más notable de ello fue la disminución de los conflictos laborales, según quedó reflejado por la caida del número de paros y huelgas. Varios fueron los factores que se combinaron para producir ese estado de cosas. Señalemos, en primer lugar que una causa de la brusca reducción de los conflictos parece haber sido la satisfacción de las principales demandas económicas y profesionales que formaban parte de la agenda de reivindicaciones de los trabajadores. Éste es un dato importante a tener en cuenta, por lo que no corresponde equiparar apresuradamente la disminución de las huelgas con la disminución de la capacidad de los trabajadores para articular sus demandas. Tampoco se puede separar la mayor paz laboral del reconocimiento que habían alcanzado los sindicatos como representantes legítimos en las negociaciones con los empresarios. La mayor institucionalización de las relaciones laborales hizo que el recurso a la huelga dejara de ser el medio habitual para alcanzar las demandas. Otros factores importantes fueron el desarrollo y la afirmación de los mecanismos mediadores del Estado. Inicialmente la Secretaría de Trabajo y Previsión careció de los instrumentos legales y del personal competente para intervenir en la resolución de los conflictos. Hacia 1948 esas debilidades habían sido en buena medida subsanadas; a las mayores capacidades institucionales de la agencia laboral se sumó el hecho de que Eva Perón se integró a sus actividades y aplicó su condición de esposa del Presidente y su personalidad dinámica a la tarea de apaciguar el frente sindical.

Una vez identificados los factores hasta aquí mencionados pasemos a referirnos a la nueva actitud oficial hacia las luchas obreras, que fue menos favorable que en los primeros años. Comencemos señalando que el derecho de huelga era, en principio, incompatible con la filosofía del naciente orden peronista. No sólo desafiaba la pretensión del Estado de actuar como árbitro final de las negociaciones obrero-patronales, también ponía en cuestión el proyecto de promover relaciones de clase

no antagónicas. La tolerancia inicial del gobierno a las movilizaciones de 1946-1948 había descansado en la percepción del valor instrumental que tenía la protesta obrera para ayudar a desmantelar el antiguo orden excluyente. Pero una vez que los sindicatos hubieron sido reconocidos como interlocutores legítimos y que emergió una legalidad laboral que garantizaba derechos básicos a los trabajadores, el activismo sindical se volvió un anacronismo injustificable desde el punto de vista oficial. La confrontación debía dejar paso ahora a la búsqueda armónica de la prosperidad colectiva bajo la guía del Estado. Así, no fue un accidente que el derecho de huelga no llegara a alcanzar jerarquía legal y que fuese omitido tanto del marco que regulaba la acción sindical como de la Declaración de los Derechos del Trabajador que sería incorporada a la nueva Constitución de 1949. La libertad de los sindicatos para recurrir a la huelga ya no contó, pues, en adelante, con el beneplácito gubernamental.

Sin duda, en el cambio de actitud también influyó el fin de la bonanza económica en 1949, cuando luego de cuatro años de saldos positivos, el balance comercial cerró con déficit, debido a la declinación de los términos de intercambio. Hay que destacar que las señales del giro conservador del gobierno en su política sindical ya se habían insinuado antes, a mediados de 1947. Por entonces y cuando el nivel de huelgas estaba en franco ascenso, Perón convocó a los principales dirigentes obreros con el fin de denunciar dramáticamente la existencia de un complot comunista para sabotear la política económica. La conducción de la CGT se haría eco rápidamente de este llamado al orden y comenzaría con más frecuencia a advertir contra el uso indiscriminado de las huelgas. Las advertencias fueron luego seguidas de medidas punitivas contra los que desafiaran las directivas oficiales. Con el paso del tiempo, la central sindical fue ejerciendo cada vez más una función disciplinaria, en sintonía con las demandas del gobierno.

A propósito, uno de los síntomas más evidentes de la gradual sustracción de la CGT al control de los sindicatos lo puso de manifiesto la elección de los miembros del comité ejecutivo. En un movimiento sindical autónomo, las posiciones clave de una confederación nacional están generalmente reservadas a los sindicatos más poderosos, tanto en términos económicos como en



Regreso de la delegación de la CGT de visita oficial a la central obrera de Uruguay. 1) D. Disckin, 2) Angel Peralta, 3) José Espejo, 4) Raúl Costa, 5) Antonio Valerga, 6) José Alonso, 7) José Tesonieri, 8-5-1949.

organización. En el caso de la confederación peronista, después de 1946, la asignación de funciones no guardó correspondencia con la distribución interna del poder entre los sindicatos, convirtiéndose, en cambio, en una cuestión que respondía a las preferencias y necesidades políticas del gobierno. Así, luego de la destitución de Gay, sus sucesores fueron oscuras figuras surgidas de organizaciones marginales. El primero de ellos, Aurelio Hernández, del pequeño sindicato de los empleados de hospitales, fue quien volcó la central obrera a la tarea de exaltar las políticas oficiales y de fiscalizar la lealtad de los sindicatos. Al cabo de diez meses en el cargo fue forzado a renunciar, luego de ganarse la enemistad de los dirigentes de los grandes sindicatos, a quienes excluyó de manera sistemática de las decisiones, y de enfrentarse con Evita, que comenzaba a tener una influencia insoslayable en los asuntos laborales. Su lugar fue ocupado por José Espejo, también proveniente de un pequeño sindicato, el gremio de la alimentación, que contaba con el favor de la esposa

del presidente. El nombramiento de un hombre confiable como Espejo marcó la consolidación de la CGT en su papel de agente del gobierno ante los sindicatos y el endurecimiento de sus funciones disciplinarias. Las huelgas de 1949 y 1950 sirvieron para demostrarlo.

Hacia principios de 1949 ya no había lugar a dudas en cuanto a la revisión del punto de vista gubernamental relativo a la forma en que debía tomar la articulación de las demandas obreras. En las vísperas del 1° de Mayo Perón recomendó a los sindicatos no caer en la trampa de ir a la lucha por la lucha misma e indicó que habia llegado la hora de armonizar los intereses comunes de los trabajadores y de los empresarios, dejando de lado los conflictos estériles. Poco después, la CGT a través de su periódico retomó las directivas de Perón dejando entrever que las huelgas debían ser consideradas como un crimen contra las metas de la revolución peronista. Estas advertencias no impidieron, sin embargo, que estallaran varios conflictos en la industria frigorífica, los ingenios azucareros, los gremios gráficos, bancarios y ferroviarios. Una interpretación convencional de estos conflictos los ha presentado como el fruto de la lucha política de una minoría de sindicatos "concientizados" que se debatían por mantener su independencia frente al giro más conservador y autoritario del régimen peronista. En verdad, las causas de estos sindicatos tenían más que ver con los efectos de la desfavorable evolución de la situación económica por la que atravesaba el país.

Se mencionó ya el deterioro de los términos de intercambio, que habría de asestar un fuerte golpe a la dinámica de la prosperidad peronista. Agreguemos ahora que en 1949 la tasa de inflación alcanzó un récord histórico. El cambio de signo de la evolución económica no vino acompañado por un cambio significativo de la orientación de la política económica. En la época las autoridades parecieron abrigar la esperanza de sortear las dificultades sin introducir correcciones sustanciales. Esa confianza fue reforzada en 1950 cuando el estallido de la guerra de Corea dio un inesperado impulso a los precios del agro. Las medidas que adoptaron se limitaron principalmente a un racionamiento del crédito a las empresas y al sector público. Esto hizo que, si bien en términos generales los salarios reales se mantuvieran en los altos niveles de los años previos,

hubiera sectores que se apartaran de la tendencia al resentirse la capacidad económica de las empresas. Éste fue claramente el caso de la industria de la alimentación, cuyos empresarios procuraron ajustarse a la nueva coyuntura con reducción de salarios y puestos de trabajo.

En el origen de esta actitud había una decisión gubernamental: ante la necesidad de reducir sus compromisos financieros en un contexto de menores recursos, las autoridades anunciaron a fines de 1948 la decisión de terminar con los costosos subsidios a la industria de la alimentación. El principal impacto se hizo sentir en los ingenios azucareros y los frigoríficos. Los primeros fueron escenario de dos huelgas en 1949, la más intensa entre octubre y noviembre, luego que las negociaciones salariales se estancaron en torno a un aumento del 18% porque el gobierno se rehusó a renovar los subsidios a la industria. Disconforme con la oferta empresaria, la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA) lanzó una huelga general el 20 de octubre, que fue declarada ilegal y que trajo aparejado el retiro de la personería gremial al sindicato azucarero. Más tarde se lanzó una fuerte campaña de propaganda contra los dirigentes de la huelga, que culminó con el encarcelamiento de muchos de ellos y el cierre de locales sindicales. El 28 de noviembre la FOTIA levantó la huelga porque los trabajadores habían agotado su capacidad de resistencia económica. Días más tarde Perón anunció un incremento salarial del 60% al tiempo que acusó a la conducción sindical de traición y sabotaje. Después de esta confrontación la FOTIA permaneció intervenida hasta el fin del régimen.

En los frigoríficos el contexto económico era parecido. Ante la disminución de las exportaciones, los frigoríficos privados iniciaron a principios de 1949 una campaña con vistas a suprimir la injerencia sindical sobre la gestión de las condiciones de trabajo en las empresas. De este modo sería posible restablecer la autoridad de la gerencia y operar los cambios necesarios a la nueva coyuntura, comenzando con una disminución de los puestos de trabajo. El gobierno aceptó el punto de vista de las empresas y promulgó en septiembre de 1949 una resolución que apoyaba sus demandas. Con el respaldo oficial, los frigoríficos procedieron a actuar, acelerando el despido de trabajadores. La federación sindical respondió con una serie de paros

que se interrumpieron ante la amenaza de una intervención al sindicato y la promesa de una revisión de la resolución anterior. La solución de compromiso, en rigor, no fue tal porque si bien sujetaba las decisiones de despido a la consideración del Ministerio de Trabajo, reducía sustancialmente el poder de los sindicatos. La confrontación decisiva tuvo lugar cinco meses más tarde cuando a los despidos previos se agregaron muchos más por el cierre de un importante frigorífico. En esas circunstancias, el sindicato retomó el camino de la huelga en mayo de 1950 sólo para enfrentarse con la medida oficial de declararla ilegal y con la prisión de varios de sus dirigentes. Una semana después, y con la experiencia de los trabajadores del azúcar fresca en la memoria, los obreros de la carne volvieron al trabajo y luego el sindicato fue intervenido y puesto en manos de un nuevo elenco que consintió la gradual liquidación de los restantes derechos sindicales a favor de las empresas.

El segundo conjunto de huelgas ocurridas en este período involucró a los ferroviarios, los bancarios y los gráficos, gremios que habían alcanzado posiciones relativamente ventajosas antes de la llegada de Perón al poder. A partir de entonces experimentaron, sin embargo, una declinación respecto de las ventajas obtenidas por los trabajadores de la industria. Una de las causas de ello fue la consolidación al frente de dichos sindicatos de dirigentes que dieron más importancia al mantenimiento del beneplácito oficial que a la satisfacción de las demandas de sus bases. En estas circunstancias, los trabajadores apelaron a huelgas y paros antes de 1950: los bancarios realizaron una huelga no autorizada en 1948 y los ferroviarios organizaron paros periódicos entre 1947 y 1949 sin el apoyo de las autoridades sindicales. Hacia 1950 estos esfuerzos habían sido infructuosos y era ya un hecho su relegamiento de la posición de preeminencia que ocuparan en el movimiento obrero. El caso de los ferroviarios, donde habría de producirse el más grave de los conflictos, es ilustrativo.

La nacionalización de los ferrocarriles en 1947 significó para el Estado una fuerte carga financiera porque se encontró con un sistema de transporte obsoleto, tecnológicamente superado y en un lamentable estado de conservación. Frente a la necesidad de modernizar estos servicios, el gobierno optó por dar marcha atrás en la política de mantener los salarios ferro-

viarios en pie de igualdad con aquellos en rápida expansión en la industria, y acudió a diversas tácticas dilatorias entre 1947 y 1950. En este marco, en noviembre de 1950 comenzó una huelga en la línea general Roca por aumentos salariales. Tres días después el conflicto se extendió a otras tres líneas. Al día siguiente la presión obrera culminó con éxito en un acuerdo. No obstante, en la primera semana de diciembre las autoridades del sindicato Unión Ferroviaria intervinieron ocho seccionales implicadas en el movimiento de fuerza, el gobierno rescindió el acuerdo, redujo el aumento salarial concedido y despidió y encarceló a los líderes de la huelga. Un mes después, en enero de 1951, comenzó una nueva huelga que abarcó a todas las líneas ferroviarias, con el objetivo de reclamar la libertad de los dirigentes presos. Esta huelga fue declarada ilegal de inmediato y los trabajadores fueron movilizados por el Ejército. Cerca de dos mil trabajadores fueron detenidos y unos trescientos quedaron en prisión antes de finalizada la huelga tres días más tarde. La severidad de la represión tuvo mucho que ver con dos hechos: primero, que los cabecillas de la protesta se reclutaron entre antiguos dirigentes del gremio y militantes de izquierda desplazados, que cubrieron la vacancia de los liderazgos oficiales y, segundo, que los partidos de oposición respaldaron abiertamente la huelga en la expectativa de que se abriera una brecha entre los militares y Perón.

LA BUROCRATIZACIÓN DEL SINDICALISMO

La huelga de los ferroviarios fue el último conflicto de importancia; le seguiría un período en el cual los sindicatos habrían de canalizar sus demandas a través de los mecanismos institucionales bajo la vigilancia permanente del régimen. Como se ha destacado en las experiencias recién reseñadas, la intervención de la CGT a los gremios en huelga se había convertido en una constante. Antes de 1948, la mayoría de las intervenciones fueron resultado de problemas internos de la organización; luego de esta fecha, la abrumadora mayoría fue motivada por la negativa de un sindicato a poner fin a una huelga. Todas las intervenciones llevadas a cabo antes de 1950 constituyeron una flagrante infracción a los estatutos de la CGT. Hasta allí, los poderes de la

confederación estaban regulados por el estatuto elaborado en 1935, que no le otorgaba a la CGT poder alguno para asumir la dirección de ningún sindicato afiliado. Esto hubiera estado en total contradicción con los principios que gobernaban a los sindicatos de ese entonces. El nuevo estatuto elaborado en 1950 incluyó el poder de asumir la dirección de un sindicato miembro, pero sólo por el término de noventa días. Sin embargo, de los siete sindicatos cuya dirección asumió la CGT después de la reforma mencionada, en un solo caso se respetó el tiempo prescripto. Ninguno de los sindicatos que fueron intervenidos ofreció resistencias serias, pues eran conscientes de que la CGT actuaba como un agente estatal. Sin embargo, las discusiones mantenidas a propósito de la reforma estatutaria de 1950 revelaron el fuerte resentimiento de los dirigentes frente al uso de dicha sanción y hubo muchos que resistieron su inclusión. La moción para insertar en el estatuto de la CGT la cláusula que estamos comentando fue aprobada en el congreso sindical nacional de abril de 1950 por escaso margen, con 1.530.439 votos a favor y 1.491.053 en contra. La exigua mayoría sólo fue alcanzada porque se ordenó a los sindicatos intervenidos en esos momentos votar por la afirmativa.

Cuadro 3: Motivos y duración de los principales casos de intervención de sindicatos por la CGT

1946-1947	1948-1950	1951-1954
UOM (organización) 1946, 4 meses	AOT (huelga) 1948-49	U. Ferroviaria (huelga) 1951
UOCRA (org.) 1946-47	Bancarios (huelga) 1948-50	UPCN (otros) 1951-52
Sanitarios (org.) 1947-48	SUPA (huelga) 1948-51	Seguros (huelga) 1954-55
Calzado (huelga) 1946-48	UPPA (huelga) 1948-49	SUPA (org.) 1954
FOETRA (otros) 1947-50	FOTIA (huelga) 1949-55	Tabaco (huelga) 1954-55
Tabaco (huelga) 1947-49	Carne (huelga) 1950-53	Caucho (huelga) 1954
	Gráficos (huelga) 1949-53	UOM (otros) 1952, 2 sem.
	UOCRA (org.) 1950	
	Marroquinería (huelga) 1949-50	

Fuente: Doyon, Louise, *Organized Labor and Perón*, Tesis de doctorado, Universidad de Toronto, 1978.

Hacia 1950 el principio de la verticalidad estaba en pie de igualdad con el de la justicia social en el credo del peronismo.

La responsabilidad de ejercer los controles políticos en el movimiento obrero se había trasladado a la CGT. Como el desenlace de algunos conflictos ilustró bien, dentro del régimen se operó una división de tareas. Al gobierno le correspondió secundar, de buena o mala gana, los reclamos de los trabajadores. Así, a pesar de sus restricciones presupuestarias, tuvo que continuar subsidiando a los trabajadores de alimentos y a los ferroviarios. El prestigio de Perón sobrevivió intacto en esta coyuntura y no se vio contaminado por la aplicación directa de medidas punitivas. Mientras el gobierno preservaba su imagen popular, la CGT se encargaba de poner coto a la autonomía sindical y de sofocar las expresiones de rebeldía.

Fue así como se produjo un desplazamiento de dirigentes combativos. Algunos de ellos se habían formado antes de 1943. Con diversos grados de resistencia habían aceptado la disolución del Partido Laborista, con el convencimiento de que el peronismo ofrecía la oportunidad histórica para hacer de los trabajadores una fuerza de peso en la sociedad argentina. Este alineamiento político no significó, empero, que estuvieran igualmente dispuestos a admitir que los sindicatos abandonaran su papel reivindicativo. Al entrar en colisión con la tutela que el régimen pretendía ejercer sobre el movimiento obrero se encontraron en aprietos. Muchos de ellos eran vulnerables a la presión política por haber sido militantes de las corrientes de izquierda en el pasado y no pudieron sobrellevar el conflicto; algunos renunciaron voluntariamente, otros fueron obligados a ello, como ocurrió entre los dirigentes de los gremios de servicios. Sin embargo, por el número de cuadros sindicales implicado y por la violencia de los procedimientos, la remoción del liderazgo sindical fue más llamativa entre los gremios de la industria de reciente formación. Para esta nueva generación de dirigentes obreros la autonomía sindical en la arena económica formaba también parte integral de la victoria electoral de 1946. Y por ello mismo terminaron igualmente enfrentados al giro de la política laboral del régimen. Contra ellos fue más difícil recurrir al cuestionamiento de sus antecedentes porque eran criaturas del nuevo orden peronista; ello explica en parte la necesidad más frecuente de recurrir a la intervención directa de los sindicatos para forzarlos a actuar dentro de las directivas oficiales de paz y producción. Irónica-

mente, la caída de muchos de estos nuevos militantes se produciría como producto de su insistencia en continuar utilizando la huelga como instrumento de negociación política según habían aprendido entre 1946 y 1948.

La transformación del movimiento obrero por obra de los controles políticos del régimen peronista fue a su vez potenciada por los efectos de la burocratización de las organizaciones sindicales. El proceso de afiliación masiva iniciado en 1946 modificó notablemente el tamaño de los sindicatos, que antes de 1943 constituían generalmente pequeñas organizaciones de menos de 15.000 miembros. Seis años después, el movimiento obrero podía ufanarse de contar con ocho sindicatos que superaban los 50.000 afiliados y con un tamaño promedio, en los grandes sindicatos, de 89.000 afiliados. Después de 1950, cuando el proceso de sindicalización llega a su máximo, el movimiento obrero se encuentra ya dominado por organizaciones masivas que representaban a más de la mitad de los obreros organizados. En este marco tuvo lugar una importante expansión de la burocratización sindical. El tamaño de los nuevos sindicatos hizo más difícil la participación de un modo directo y continuo de sus miembros en la elaboración de los objetivos y en la administración de las funciones de las organizaciones sindicales, como había sido la práctica en los pequeños sindicatos de oficio hasta la década del veinte y en los sindicatos pequeños que continuaron existiendo hasta 1943.

En los tempranos comienzos del sindicalismo, cuando la organización en el nivel local era la norma, el pequeño cuerpo de afiliados estaba en condiciones de asistir a las reuniones para fijar las políticas del sindicato y, en el caso de problemas inesperados, podían ser fácilmente convocados para determinar las decisiones a adoptar. El tamaño reducido de estos sindicatos demandaba sólo un reducido número de cargos oficiales, ocupados en su totalidad por los obreros militantes, sin remuneración, cuya experiencia administrativa en poco superaba a la de los miembros ordinarios. El abultado número de afiliados sindicales en el período de la posguerra hizo imposible la continuación de esa forma de "democracia de base" y requirió, en cambio, la creación de una compleja división de tareas dentro del sindicato. Esto dio lugar al desarrollo de una clase profesional de líderes sindicales y a la creación de cargos adminis-

trativos no electivos de dedicación completa para ocuparse de las funciones administrativas de la organización. En los hechos, los funcionarios sindicales se convirtieron en gerentes burocráticos, que consideraban el crecimiento y la gestión de sus organizaciones como fines en si mismos y procuraban evitar actitudes confrontativas. Muchos de ellos habían arribado a sus posiciones actuales de la mano de las intervenciones y eran conscientes de que dependían de la aprobación oficial para retenerlas.

A su vez, la rápida institucionalización de las relaciones laborales estimuló la delegación de facultades en la cúpula sindical. Los complejos mecanismos creados para mediar en los conflictos entre capital y trabajo, como las comisiones paritarias y los tribunales laborales, crearon la necesidad de habilidades más profesionales en los dirigentes obreros y promovieron la formación de un cuerpo subordinado de expertos técnicos y legales. Con el paso del tiempo, los sindicatos ya no eran organizaciones defensivas, limitadas por la hostilidad del medio ambiente político a proteger tan sólo el salario de los trabajadores a través de formas de acción directa, como había sido la práctica antes de la llegada de Perón al poder. Más bien se convirtieron en organiza-

Cuadro 4: Número de concurrentes y de reuniones sindicales en Capital Federal

Año	Número de concurrentes	Número de reuniones
1946	759.497	3.858
1947	650.098	2.969
1948	505.467	1.530
1949	338.415	1.182
1950	257.306	914
1951	167.676	698
1952	226.604	740
1953	316.837	1.009
1954	321.703	1.109

Fuente: Síntesis Estadística Mensual, Dirección Nacional del Servicio Estadístico, Ministerio de Hacienda, Año V, Nº 12; Año IX, Nº 12.

ciones multifuncionales, que se ocupaban de una variedad de actividades; a las relativas a la negociación colectiva sumaron, sobre todo después de 1948, importantes funciones en el campo del bienestar obrero, como la provisión de alimentos baratos y la prestación de servicios turísticos, todo lo cual alentó la expansión del aparato burocrático sindical.

Dos fenómenos se combinaron, pues, para generar en el liderazgo sindical un acentuado conformismo y para drenar la vitalidad que había caracterizado la vida interna de las organizaciones. El primero, el verticalismo político, que premiaba el abandono de toda postura ofensiva y su reemplazo por una administración cautelosa de las conquistas pasadas. El segundo, la concentración de las decisiones en la burocracia sindical, que abrió una brecha entre las bases y los dirigentes, produciendo una abrupta caída en el número de las reuniones sindicales y en los asistentes a ellas.

LA CRISIS ECONÓMICA Y EL DIFUSO DESCONTENTO OBRERO

La penetración del régimen peronista en el sindicalismo había servido como un medio para consolidar la nueva configuración del poder y para fortalecer su capacidad de reconciliar las demandas obreras con las políticas gubernamentales. Como se ha mostrado, ese proceso no se produjo sin tribulaciones pero culminó transformando a los sindicatos en agentes políticos del régimen y, si no suprimió, por lo menos redujo su margen de acción en el terreno económico. En estas condiciones, el movimiento obrero pasó a insertarse en las estrategias políticas que Perón puso en marcha para encarar los renovados desafíos que enfrentaba su gobierno hacia 1950.

Tales desafíos tenían que ver inicialmente con la reorganización interna y la consolidación externa del poder peronista. En cuanto al primer aspecto, Perón propuso un redimensionamiento político de sus fuerzas adictas, distribuyéndolas en ámbitos separados dentro del movimiento. Los sindicatos se organizaron como la rama sindical, diferenciada de la rama masculina, confiada a políticos de clase media, y de la rama femenina, en la que se nucleó el electorado de mujeres bajo la jefatura

de Evita, que había propiciado su derecho al voto. Esta solución organizativa procuró atenuar los conflictos entre los sindicalistas y el sector político del movimiento que habían convulsionado la vida del Partido Peronista desde su creación. Respecto de la consolidación externa recordemos que la reforma constitucional de 1949 hizo posible la reelección de Perón en la presidencia. Con ese fin, los sindicatos fueron movilizados alterando, de hecho, las directivas oficiales. Hasta allí, desde el gobierno, se había insistido en la conveniencia de evitar los compromisos partidistas por los riesgos que entrañaban para la cohesión de los gremios. Esa filosofía fue revisada para acomodarla a las circunstancias y un congreso extraordinario de la CGT en abril de 1951 comprometió el apoyo incondicional a la candidatura de Perón. El sindicato de La Fraternidad, dirigido por una mayoría independiente, procuró sustraerse al compromiso invocando su tradición no partidista y fue tomado por asalto por la minoría peronista con el apoyo de la central sindical para sumarlo a una empresa política que no admitía neutrales.



Clausura de un comercio minorista.

El hecho a destacar es que la participación sindical en la campaña reeleccionista se asoció con los juegos de poder dentro del régimen. En efecto, fue desde la CGT que se propuso que Evita acompañara a Perón en la fórmula presidencial, en una operación política que ella alentó pero en la que aquél pareció no estar directamente involucrado. La movilización sindical culminó en una gigantesca concentra-

ción pública el 22 de agosto, donde el nombre de Evita fue levantado en medio de la aclamación popular. El veto de la jerarquía militar a la candidatura de Evita, ante el cual Perón y su esposa se inclinaron, hizo naufragar el intento, de tal modo que la campaña reeleccionista prosiguió, si bien en un clima político más tenso. En septiembre, una improvisada revuelta militar procuró sin éxito impedir las elecciones; éstas tuvieron lugar en noviembre y resultaron en un abrumador triunfo de Perón.

El otro desafío frente al que se encontraba el régimen era el agravamiento de la situación económica. El pico de la crisis llegó en 1951. Los términos de intercambio volvieron a caer, de tal modo que el modesto superávit comercial del año anterior se transformó en un cuantioso déficit. A su vez, la inflación volvió a acelerarse superando el aumento de la tasa salarial. Estos signos negativos se acompañaron luego por la pérdida de la cosecha de 1951-1952. En este contexto adverso, el gobierno produjo un giro de la política económica, revisando sus prioridades iniciales desde la expansión del consumo y la producción hasta la estabilización económica, desde el estímulo a la industrialización hasta el apoyo de la agricultura. El nuevo rumbo fue conocido una vez que Perón hubo obtenido su segundo mandato presidencial, a través del plan económico lanzado en febrero de 1952. Las medidas por las que se plasmó el doble objetivo de detener la inflación y resolver el déficit comercial externo llevaron la marca de las consideraciones políticas que condicionaban las opciones económicas del régimen. Así, por ejemplo, a la hora de actuar sobre el desequilibrio externo la alternativa de la devaluación fue descartada porque si bien era un medio rápido para salir del paso su costo era un incremento del precio de los alimentos y ello representaba un golpe sobre los sectores laborales. Descartada la devaluación, se apeló a la imposición de restricciones a las importaciones y a una reorientación de los subsidios a favor del agro. En cuanto al objetivo antiinflacionario, el plan se basó en políticas fiscales y monetarias más restrictivas e incluyó, además, una tregua social entre empresarios y sindicatos. Los mecanismos por medio de los cuales se intentó frenar la puja distributiva consistieron en un reajuste de precios y salarios por decreto y su posterior congelamiento por el plazo de dos

años, lo que implicó la suspensión de las negociaciones colectivas por ese mismo lapso. La vigilancia de la tregua social fue encomendada a la Comisión Nacional de Precios y Salarios, creada con representación del gobierno, los empresarios y la CGT.

La renuncia a la devaluación y la decisión de sumar a los sindicatos al monitoreo de la tregua social mostraron los esfuerzos del régimen por conciliar la salida a la emergencia preservando los intereses de sus bases populares de apoyo. Esos esfuerzos no fueron inicialmente suficientes para anular el impacto de la crisis. El nivel de la actividad económica cayó en 1952 y lo mismo ocurrió con los salarios reales. Más tarde se sabría que la estabilización sería, en términos relativos, menos costosa y que llegaría más rápido la recuperación de la actividad económica y del nivel salarial. Entonces, sin embargo, la adversidad económica coloreaba la experiencia colectiva de los trabajadores, a la que se agregó, ominosamente, en el invierno de 1952, la muerte de Evita. Sugestivamente, el estado del humor popular se puso de manifiesto poco más tarde, en ocasión del acto de conmemoración del 17 de octubre. Al dirigirse a la multitud reunida, el secretario general de la CGT, José Espejo, fue recibido por un coro de silbidos y estridentes abucheos. El ridículo y la vergüenza que cayeron sobre el hombre que había supervisado la retirada defensiva de los sindicatos en el plan de estabilización fueron la primera manifestación del malestar obrero en medio de la emergencia. El incidente, es preciso destacar, fue instigado por los rivales de Espejo en el sindicalismo y el partido, que aprovecharon la muerte de Evita, hasta allí su protectora, para ajustar cuentas. Rápidamente, después del 17 de octubre, Espejo y todo el comité ejecutivo de la central sindical fueron despedidos y sus lugares ocupados por otros dirigentes igualmente menores y desconocidos, como era previsible que ocurriera en un sindicalismo cuya dinámica política respondía a las conveniencias de la Casa Rosada.

Empero, el episodio del acto del 17 de octubre no sería un acontecimiento aislado, una manifestación momentánea de descontento. Fue más bien un llamado de atención cuyas reverberaciones dejaron una secuela prolongada en los círculos gubernamentales. Ello se puso claramente de manifiesto en la

reacción hipersensible del gobierno y la CGT ante una convocatoria de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza para un congreso sobre el costo de vida lanzada en marzo de 1953. El objetivo de la convocatoria era poner al movimiento obrero en estado de alerta frente a algunos episodios de aumentos de precios que amenazaban al plan antiinflacionario oficial. La iniciativa de los electricistas no pudo ser más inoportuna políticamente. Por entonces se había producido un reavivamiento de la agitación de los opositores al régimen mediante una ola de rumores sobre negociados y enriquecimiento clandestino de altos funcionarios. Los rumores comenzaron a multiplicarse a fines de 1952, a raíz de un creciente desabastecimiento y encarecimiento de la carne para el consumo interno. Para enfrentar la situación, Perón ordenó en marzo de 1953 una investigación reservada; sus conclusiones implicaron a Juan Duarte, hermano de Eva y secretario privado del Presidente, quien renunció a su cargo el 7 de abril. Dos días más tarde, Duarte apareció como víctima de un suicidio y su muerte enrareció más todavía el clima político. En esas circunstancias, la CGT organizó una semana más tarde una concentración de apoyo popular a Perón que habría de tener un final trágico. Militantes juveniles de la oposición colocaron bombas que estallaron entre la multitud,

Perón reconoce los problemas de la carestía de la vida ante los sindicatos

"Evidentemente, en los últimos tiempos se han producido conflictos entre los consumidores y los comerciantes [...] Se ha roto el nivel de vida que nos habíamos establecido desde marzo pasado (1952) [...] La CGT me planteó el problema en toda su gravedad. Ellos dicen que los sindicatos no pueden seguir así [...] Es la primera vez que la Confederación me colocó la espada en el pescuezo, pero con verdad y justicia y para esos que andan por las calles diciendo que serán los líderes defensores de los asalariados [...] les digo a voz en cuello que los trabajadores están mejor representados por la Confederación que por los otros porque la Confederación puede trabajar para la solución de los problemas [...] Por eso debemos llevar tranquilidad a los compañeros de los sindicatos que están un poco indignados, con justicia..."

provocando siete muertos y decenas de heridos. La réplica de los manifestantes no se hizo esperar y muchos de ellos marcharon sobre la sede del Jockey Club y la incendiaron para proseguir, ante la pasividad policial, provocando destrozos en las sedes partidarias del socialismo, el radicalismo y el conservadurismo. A ello siguió el encarcelamiento de importantes figuras de la oposición.

En este marco, tanto la central sindical como Perón se apresuraron a vincular la propuesta de Luz y Fuerza con un complot para desacreditar al gobierno. Los autores de la iniciativa contra la carestía de la vida optaron en consecuencia por abandonarla. La inquietud, sin embargo, existía y el propio Perón la había reconocido poco antes con franqueza.

En los meses subsiguientes los focos más generalizados de intranquilidad sindical disminuyeron porque las presiones inflacionarias fueron puestas bajo control. No obstante, en un nivel más profundo, subsistía el descontento entre los trabajadores. El enfático respaldo de Perón a la conducción de la CGT representó, en verdad, la admisión indirecta del grado en que estaba afectada la credibilidad del oficialismo sindical. El descrédito de muchos altos jefes obreros no podía sorprender, ya que su manejo de las organizaciones tenía un fuerte sesgo autoritario. La mayor parte de su actividad estaba dedicada a hacer la apología de la gestión del gobierno y a cumplir con sus obligaciones partidarias, en detrimento de sus tareas sindicales. No pocos de ellos hacían oídos sordos a las quejas por la violación de los contratos de trabajo que presentaban los trabajadores en contra de las empresas. En los casos más flagrantes de desprestigio, los dirigentes cuestionados resultaban de poca utilidad para el régimen ya que por esa causa disminuía su capacidad para asegurar el apoyo obrero a las políticas oficiales. Fue así como, en paralelo con la defensa de Perón del sindicalismo oficial, comenzó a operarse, sobre todo después de la caída de Espejo, un recambio en la conducción de numerosos gremios.

La secuencia típica se desenvolvía en tiempos de elecciones y tenía por telón de fondo la insatisfacción de las bases. La emergencia de un candidato rival a la conducción oficial que, explotando la insatisfacción existente, reunía los apoyos para convertirse en un serio contendiente por el poder tenía un efec-

to previsible: las autoridades laborales le brindaban a éste su apoyo financiero y político y terminaba por alzarse con la conducción de la organización. Ello habría de ocurrir en los textiles, los panaderos, los gráficos, los zapateros, los telefónicos, los trabajadores de la construcción y los del transporte público. Con independencia de los incidentes específicos a cada uno de los casos, el hecho es que se produjo un recambio en las conducciones oficiales en favor de dirigentes más sintonizados con el clamor de los afiliados. Por cierto, el hecho mismo de que sus credenciales fuesen aprobadas por las autoridades laborales hizo que estos nuevos dirigentes estuvieran lejos de ser militantes contestatarios. También ellos habrían de operar dentro de las pautas oficiales pero por lo menos como nuevos dirigentes que procuraban mostrarse más sensibles a los problemas laborales y utilizar al máximo el espacio político limitado en que debían actuar. Es importante destacar que los intentos por cooptar a las oposiciones obreras que surgían promovidas por las presiones de abajo fueron bastante efectivos para legitimar a las organizaciones gremiales. El número de reuniones y asambleas sindicales así como de participantes aumentó considerablemente en 1953 y 1954 respecto de los bajos niveles del período 1950-1952.

LOS TRABAJADORES ENTRE LA LEALTAD POLÍTICA Y LA DEFENSA DE SUS INTERESES ECONÓMICOS

Al permitir la regeneración del liderazgo sindical, el régimen trató de mantener los disensos dentro de límites manejables. No pudo, en cambio, frenar la determinación de los trabajadores de recuperar el terreno perdido en materia de salarios, ahora que lo peor de la emergencia económica había pasado. A pesar de la vigencia de la tregua laboral, comenzaron a sucederse casos de aumentos extraoficiales de salarios obtenidos por los delegados de fábrica, que los sindicatos se vieron forzados a tolerar como hechos consumados. La intensidad de este movimiento reinvidicativo por fuera de las pautas oficiales se vería corroborada por la fuerte crítica que Perón hizo a fines de 1953 al comportamiento de las comisiones internas. Su intervención salió al cruce de las demandas salariales mo-



Acto en el Luna Park en ocasión de cumplirse el décimo aniversario de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde la izquierda: Carlos Vicente Aloé, Eduardo Vuletich y el presidente Perón junto a otros dirigentes, 1953.

torizadas por algunas comisiones internas del gremio gráfico. "Algunos sindicatos —sostuvo entonces—, desconociendo los convenios colectivos, han iniciado un movimiento por mejores salarios. Ellos negociaron directamente con la patronal, acción que está prohibida por las normas que rigen al movimiento obrero argentino. Ningún afiliado tiene el derecho de exigir aumentos de salarios si no es a través de sus propias direcciones sindicales." Luego de la advertencia de Perón, la movilización de los gráficos fue rápidamente puesta bajo control.

A medida que se acercaba el fin de los dos años de suspensión de las negociaciones colectivas la preocupación oficial se hizo más viva. Aunque no hubo declaraciones públicas parecía que el gobierno pretendía mantener la tregua laboral más allá de la fecha límite de marzo de 1954. Sea prolongando la vigen-

cia del congelamiento salarial, sea otorgando un aumento simbólico, en los círculos oficiales campeaba la opinión de no volver al patrón de negociaciones abiertas y flexibles de los primeros años. La promulgación de la ley de convenios colectivos en septiembre de 1953 procuró definir el marco para los tiempos por venir. La ley 14.250 ratificó el papel fundamental del convenio colectivo centralizado por rama de actividad, desalentando la negociación por empresa. Además, sujetó su vigencia a la homologación por parte del Ministerio de Trabajo e incluyó entre los criterios para su aprobación que los acuerdos de salarios no afectaran significativamente la situación económica general o produjeran un deterioro grave en las condiciones de vida de los consumidores. Las implicaciones de esta fórmula de control de la conveniencia de los convenios colectivos eran claras; los poderes excepcionales de los que se había investido el Ejecutivo en medio de la reciente emergencia económica se consagraban normativamente y éste podía recurrir a ellos toda vez que lo juzgara necesario.

Ocurrió, sin embargo, que la situación laboral que se delineó en el segundo trimestre de 1954 vino a poner en evidencia la brecha existente entre las intenciones proclamadas por el gobierno y su capacidad para convertirlas en una realidad efectiva. La explosión de los conflictos laborales a un nivel desconocido desde 1950 representó, en efecto, un duro golpe para el Presidente porque hizo patente sus limitaciones para regular las demandas obreras a pesar de los controles políticos que condicionaban la acción del sindicalismo. Antes de ocuparnos de este nuevo período de movilizaciones obreras señalemos que hacia febrero Perón resolvió abandonar la postura que había insinuado repetidamente durante el año anterior, optando por despejar el retorno a las negociaciones colectivas. Dos razones seguramente pesaron sobre su decisión. En primer lugar, había terminado por admitir que el mantenimiento de un freno a la presión salarial sólo conduciría a una mayor erosión de la autoridad de los sindicatos. Los dirigentes obreros le habían transmitido sus inquietudes en vista de las expectativas generadas entre los trabajadores por la próxima finalización de la tregua de 1952.

En segundo lugar, las elecciones legislativas a realizarse en abril otorgaron a las demandas de los sindicalistas un peso adi-

cional. La efervescencia de los círculos de la oposición antiperonista hacía necesaria una victoria oficialista rotunda en las urnas y para ello era importante la cooperación de los aparatos sindicales. En estas condiciones se gestó en el gobierno un consenso sobre la urgencia de descomprimir la situación salarial; restaba determinar de qué modo hacerlo. Una alternativa era apelar a un aumento general de salarios desde el gobierno. Empero, el otorgamiento de un aumento de las remuneraciones que estuviera en línea con las expectativas de los trabajadores corría el riesgo de convertirse en una provocación a los empresarios, que reclamaban un plazo de respiro más largo a fin de recuperarse de los reveses de la crisis reciente. Así las cosas, Perón buscó una salida que comprometiera menos su capital político. Dando un giro de ciento ochenta grados sobre la que había sido su posición de siempre, resolvió retirarse de la primera línea de la inminente confrontación obrero-patronal dejando que el desenlace respondiera a la relación de fuerzas en la economía. A falta de una directiva explícita de Perón fue la CGT la que se ocupó de interpretar el pensamiento oficial y, en la víspera de la reapertura de las negociaciones salariales, desde su periódico sostuvo: "...hemos llegado a un equilibrio perfecto (entre precios y salarios). Por lo tanto no debemos destruir este estado de cosas". Lo que vino después mostró que la opinión dominante entre los trabajadores era bien otra.

Al reabrirse las negociaciones en el mes de abril de 1954 la magnitud de la brecha entre las posturas de las partes en pugna salió a la luz. La mayoría de los sindicatos reclamaba aumentos de salarios cercanos al 40 por ciento y, en casi todos los casos, la patronal sólo estaba dispuesta a otorgar del 3 al 5 por ciento. Un mes y medio después las negociaciones llegaron a un punto muerto. De acuerdo con la actitud que había adoptado, el gobierno se negó entonces a ir más allá de ofrecer sus buenos oficios, preparando de este modo el terreno para una escalada de la confrontación. Es difícil encontrar una descripción completa de los conflictos porque la censura oficial impidió una adecuada cobertura periodística en los diarios de circulación nacional. No obstante, una cuidadosa lectura de algunos diarios de provincia permite alcanzar una idea acerca de los conflictos. En lugar de recurrir a la huelga abierta los trabajadores apelaron al trabajo a reglamento y al trabajo a desgano para romper el es-

tancamiento de las negociaciones: éstas eran tácticas menos onerosas a los ojos de la opinión pública, comportaban una desestabilización de la producción sin poner en riesgo el pago del salario, y además no exponían tanto a los trabajadores a la represión oficial.

Las interrupciones en la actividad económica comenzaron durante la primera semana de mayo. Entre los sectores afectados se contaron los petroleros privados, las industrias láctea, textil, del calzado, del vidrio, del cemento, metalúrgica y del caucho y el sector de seguros. Por regla general, el trabajo a desgano se prolongó entre dos y tres semanas; las excepciones se verificaron en los seguros, los servicios portuarios, las hilanderías de la rama textil, donde los conflictos continuaron hasta bien entrado junio. Hacia fines de mayo, la mayoría de los sindicatos había firmado acuerdos por aumentos salariales del 15 al 18 por ciento. En las industrias del tabaco, el caucho y las metalúrgicas, las negociaciones fueron, empero, más arduas y los trabajadores se vieron forzados a ir a la huelga por casi dos semanas para alcanzar concesiones similares. Entre ellas, la de los metalúrgicos adquirió gran notoriedad debido a la aspereza de los enfrentamientos. Confrontados a una patronal que se resistía a modificar su oferta original del 3 por ciento de aumento salarial, los dirigentes del sindicato no tuvieron otra opción que lanzar un paro general para contener la ira de los trabajadores. A lo largo del conflicto terminaron, sin embargo, perdiendo el control del movimiento. Después de un sangriento choque entre grupos sindicales rivales, en el que murieron tres personas, un gran contingente de obreros decidió marchar a la Casa Rosada en procura de la intervención de Perón sólo para ser detenidos a mitad de camino por la represión policial. Convencidos de que la mediación del gobierno se produciría con el retorno al trabajo, los trabajadores levantaron el paro y más tarde obtuvieron incrementos salariales comparables a los ya logrados por los demás sectores.

La agitación social de mediados de 1954 no debe interpretarse como una señal de ruptura política de los trabajadores con el régimen peronista. A lo largo de los conflictos éstos se esforzaron por mantener a Perón al margen de su protesta, que apuntó principalmente a los empresarios y no al gobierno. Por lo demás, el mensaje que se desprendió de los resultados de las

elecciones legislativas del mes de abril no dejó dudas al respecto: en ellas, el partido peronista volvió a imponerse con un caudal de votos comparable al de 1951. Ahora bien, el hecho de ratificar que el peronismo seguía siendo la única alternativa política válida no significó que los trabajadores estuvieran dispuestos a acatar ciegamente las directivas oficiales. Este dato gravitó en el comportamiento de los dirigentes obreros. Si bien en la mayoría de los conflictos de 1954 la decisión de pasar a la acción fue promovida desde las comisiones internas, los líderes de los sindicatos nacionales también la hicieron suya, conscientes de que no podían sobrevivir al frente de sus respectivas organizaciones sin un mínimo de respaldo de sus bases. A pesar de lo que se dijo antes sobre los efectos desmovilizadores del proceso de burocratización sindical, la actitud de los dirigentes obreros en esta coyuntura fue un reflejo de los nuevos tiempos. Así, pues, si bien nada autoriza a hablar de una ruptura política, algo había cambiado en las relaciones entre los trabajadores y el régimen. El fracaso de la CGT en cumplir las funciones de policía que solía desempeñar mostró, a su vez, una mayor sensibilidad a la modificación operada en el humor de los trabajadores. El recurso tan habitual a denunciar en las luchas obreras la obra de agentes provocadores dejó paso, ahora, al reconocimiento de la lucha social y del conflicto de intereses, conceptos erradicados de su vocabulario desde hacía varios años. El hecho de que la central sindical se viera privada de actuar como aparato de control, interviniendo los gremios en huelga, vino a poner de manifiesto que de allí en más las políticas oficiales sólo podían prosperar en un marco de mayor consenso. Y ello condenó de antemano la última iniciativa de Perón en el campo económico-social.

El plan de estabilización de 1952, cuyos resultados permitieron sortear en el corto plazo la emergencia económica, fue uno de los dos ejes del cambio operado en las prioridades económicas del régimen peronista. El otro eje apuntó a corregir los desequilibrios estructurales de la industrialización. Para ello alentó una nueva ola de sustitución de importaciones, ahora centrada en la producción local de maquinarias y equipos y de combustibles, al tiempo que puso mayor énfasis en la modernización y el aumento de la producción agropecuaria. El esfuerzo de capitalización que demandaba este cambio estructu-

ral se desplegó en tres frentes. El primero fue la devolución al sector rural de parte de la rentabilidad perdida, redefiniendo la política de precios y subsidios. El segundo consistió en el estímulo a las inversiones extranjeras, con la aprobación de una ley más permisiva de radicación de capitales. El tercer frente fue una campaña a favor de la mayor productividad del trabajo. A diferencia de lo que ocurriera en los dos primeros frentes, los avances en este último fueron casi nulos.

La mayor productividad del trabajo podía, en principio, generarse en parte revirtiendo la obsolescencia del parque industrial, con la introducción de nuevos y más modernos equipos. Pero en una coyuntura dominada por los desfavorables términos de intercambio, las posibilidades de importar bienes de capital en gran escala eran limitadas. Por consiguiente, y como la fabricación local de maquinarias era todavía un proyecto, el logro de aumentos de la productividad quedaba reducido al incremento del rendimiento por obrero con los equipos existentes. Con este objetivo, los empresarios se embarcaron a partir de 1953 en una abierta ofensiva orientada a la revisión de las regulaciones laborales vigentes y a poner fin a la injerencia de las comisiones internas en la vida de las empresas. Se trataba, en fin, de eliminar de los contratos laborales las cláusulas que coartaban la autoridad de la gerencia para disponer de la fuerza de trabajo y de limitar las atribuciones de los delegados del personal.

A fines de 1954 el gobierno se hizo eco de la demanda de los empresarios y convocó a una asamblea tripartita para discutir los problemas de la productividad. Con ello calculó mal su



Propaganda oficial instando a producir más

margen de maniobra y puso en peligro su credibilidad al facilitar el escenario para que quedaran al descubierto tanto las contradicciones que atravesaba su coalición social como sus dificultades para actuar como árbitro. El sindicalismo supo, desde un comienzo, cuáles eran las intenciones de los empresarios porque éstos se encargaron de dejar claro que reclamaban el derecho a establecer con menos restricciones las condiciones que determinaban el uso de la fuerza de trabajo. No obstante, quizás para no poner en apuros al gobierno, aceptaron sin entusiasmo asistir a las deliberaciones del Congreso de la Productividad. Pero una vez sentados en la mesa de negociaciones, los delegados de la CGT se ocuparon de rechazar cada una de las concesiones que en materia de flexibilidad laboral reclamaban los empresarios. Desde un primer momento y durante las semanas que duraron las sesiones, la CGT se negó a ceder terreno y reafirmó constantemente que el conjunto de garantías y protecciones obtenidas antes de 1950 formaban parte integral de la revolución peronista y eran, por ende, innegociables. La declaración final suscripta por la CGT y la representación patronal de la CGE en marzo de 1955 fue una mezcla de vagas generalidades e intenciones piadosas y una prueba elocuente del callejón sin salida en que se hallaban. Fue sugestivo que Perón no hiciera esfuerzo alguno por neutralizar la resistencia de los jefes sindicales y se resignara, en definitiva, a ver cómo naufragaba este postrer intento de pacto social.

La CGT frente a la campaña de la productividad

" [...] no estamos dispuestos a ceder en esta causa ninguna de las conquistas logradas, obra de un genio cuya visión de estadista parece interpretar el sueño prócer de un apóstol entregado a la redención humana, y que por ser así de grande, así de hermosa, nosotros estamos dispuestos a defenderla con toda decisión."

Del discurso del secretario general de la CGT, Eduardo Vuletich, en la sesión inaugural del Congreso Nacional de la Productividad y Bienestar Social, 1955; en Juan C. Torre (comp.), *La formación del sindicalismo peronista*, Legasa, Buenos Aires, 1988, p. 336.



Congreso de la Productividad. Eduardo Vuletich y José Ber Gelbard (tercero y cuarto desde la izquierda) presiden la reunión, 22-11-1954.

Para entonces, la atención de Perón estaba capturada por el conflicto que lo enfrentaba con la Iglesia y que habría de precipitar el alzamiento militar y su posterior derrocamiento en septiembre de 1955. En estos episodios finales, la CGT volvió a reaparecer fugazmente en el centro de la escena. Fue cuando comunicó a los militares leales a Perón la disposición de los trabajadores para custodiar conjuntamente la suerte del régimen. Los jefes militares, inquietos por la posibilidad de la creación de milicias obreras, rechazaron prontamente la oferta. Finalmente, el 19 de septiembre, luego que Perón optara por abandonar toda resistencia al golpe militar, la CGT dirigió un mensaje radial a los trabajadores exhortándolos a guardar la calma en esa hora aciaga.

En la trayectoria del movimiento obrero argentino el período 1946-1955 constituye una coyuntura decisiva. Durante esos años, abandonó la condición periférica que ocupaba hasta entonces para ganar una influencia insoslayable en la vida económica y política del país. Éste fue un logro posibilitado en gran parte por el

respaldo que recibió desde el Estado en el régimen peronista. La relación entre el movimiento obrero y los poderes públicos en este período tuvo consecuencias para ambos. El peso del liderazgo popular de Perón y su papel en la promoción de las reformas laborales facilitó la penetración y supervisión de las organizaciones obreras por parte de los poderes públicos. Dificilmente se pudo hablar entonces de un sindicalismo que actuara como un grupo de presión autónomo. La contrapartida fue igualmente verdadera. Los poderes públicos quedaron expuestos a las demandas de los trabajadores que aspiraban a representar y se transformaron en uno más de los instrumentos a través de los cuales éstos ampliaban su participación social y política. El conjunto de garantías incorporadas a las instituciones laborales y la presencia de los sindicatos en la gestión del régimen introdujeron condicionamientos que habrían de limitar su margen de maniobra en la adopción de políticas económicas. Por otro lado, las medidas legales que levantaron los obstáculos a la acción sindical hicieron aflorar la movilización obrera en gran escala. Entre 1946 y 1955 el régimen peronista debió convivir, así, con una agitación social que no siempre se encuadró bajo las consignas de producción y conciliación de clases. En estas circunstancias, la acción de las organizaciones obreras estuvo afectada por la tensión entre su apoyo político a la conducción del Estado, a través de la cual se producía la integración política de los trabajadores, y su responsabilidad hacia las reivindicaciones socioeconómicas de sus bases. Las soluciones que recibió este dilema parece que no comprometieron su legitimidad. En efecto, de todas las creaciones del régimen, el sindicalismo fue aquella que logró sobrevivir a su caída, en 1955, para tener una gravitación a la vez permanente y determinante en la historia posterior de la Argentina.

BIBLIOGRAFÍA

Baily, Samuel: *Movimiento obrero, nacionalismo y política en Argentina*, Pardos, Buenos Aires, 1984.

Bitrán, Rafael: *El Congreso de la Productividad: la reconversión económica durante el segundo gobierno peronista,* El Bloque, Buenos Aires, 1994.

Cerrutti Costa, Luis B.: *El sindicalismo, las masas y el poder,* Trafac, Buenos Aires, 1957.

Del Campo, Hugo: *Sindicalismo y peronismo*, CLACSO, Buenos Aires, 1983.

Doyon, Louise: *Organized Labor and Perón, 1943-1955,* tesis de doctorado, Universidad de Toronto, Canadá, 1978.

Gay, Luis: *El Partido Laborista en la Argentina*, Biblos-Fundación Simón Rodríguez, Buenos Aires, 1999.

Godio, Julio: *Historia del movimiento obrero argentino*, Corregidor, Buenos Aires, 2000.

James, Daniel: *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976,* Sudamericana, Buenos Aires,1990.

Luna, Félix: *Perón y su tiempo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1993.

Monsalvo, Luis: *Testigo de la primera hora del peronismo*, Pleamar, Buenos Aires, 1974.

Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos: *Estudio sobre los orígenes del peronismo*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1971.

Pontieri, Silveiro: *La confederación general del trabajo*, Pirámide, Buenos Aires, 1972.

Reyes, Cipriano: *Yo hice el 17 de octubre,* G.S. Editores, Buenos Aires, 1973.

Torre, Juan Carlos: *La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1990.

Torre, Juan Carlos (comp.): *La formación del sindicalismo peronista* (artículos de Torre, J.C.; Doyon, L.; Little, W.; Pilone, J. y Gandio, R.; Horowitz, Y.; Giménez Zapiola, M. y Leguizamón, C. M.), Legasa, Buenos Aires, 1988.

VIII

El empresariado: la política de cohabitación y oposición

por JAMES P. BRENNAN



El presidente Perón y José Ber Gelbard (a su derecha) reciben a la Federación Argentina de la Industria del Papel.



La decisión de Perón de pilotear la transición que transformaría una sociedad agraria en una sociedad industrial fue la piedra angular de la promesa peronista de grandeza nacional para la nueva Argentina y formó parte de la legitimidad de su régimen. Durante el gobierno de Perón, las causas de la "independencia económica" y la "justicia social" parecieron por momentos convertirse prácticamente en sinónimos de mayores niveles de producción industrial. La industria representaba el sendero de un destino nacional, mientras que la Argentina pastoril se describía como la encarnación del decrépito y agonizante orden oligárquico, con sus groseras desigualdades sociales y la degradante subordinación a los intereses extranjeros. La "independencia económica", declarada en Tucumán el 9 de julio de 1947, inscribió en la constitución justicialista un nuevo curso para la economía nacional, un avance decisivo hacia la autarquía, en el que se asignaba a la industria el papel de liberadora de la nueva Argentina. Tal industrialización no sólo implicaba tra-

tar con una clase obrera muy ampliada como un actor social y político fundamental, sino también con los industriales.

LOS INDUSTRIALES Y LOS ORÍGENES DEL PERONISMO

La relación entre Perón y las clases capitalistas del país sigue siendo una cuestión nebulosa y controvertida entre los historiadores. El papel desempeñado por los industriales en el ascenso del peronismo y su apoyo al régimen fueron objeto, en especial, de varias interpretaciones. En la década de 1960, Torcuato Di Tella fue el primero en sostener que una "elite contraria al *statu quo*", compuesta esencialmente por nuevos industriales, había coadyuvado a apoyar el golpe de 1943 que llevó al Ejército, y a un joven oficial llamado Juan Domingo Perón, al poder. Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero se hicieron eco de esta interpretación y sostuvieron que esos orígenes debían encontrarse en una alianza policlasista que incluía a nuevos industriales surgidos en la década de 1930 como consecuencia del proceso de industrialización mediante sustitución de importaciones. Otro especialista, Dardo Cúneo, autor del que sigue siendo el estudio más importante sobre el empresariado en la política nacional, había expuesto algunos años después del análisis de Di Tella una interpretación bastante diferente. Cúneo destacaba la oposición de la Unión Industrial Argentina (UIA), por entonces la principal asociación de industriales del país, y en especial su malestar por las políticas laborales del gobierno militar, lo que en definitiva la llevó al desastroso intento de contribuir a financiar a los opositores de Perón en las elecciones presidenciales que se aproximaban y a un malogrado *lockout* patronal de tres días en enero de 1946. Los informes de inteligencia de la embajada norteamericana durante los meses de ascenso de Perón al poder dieron crédito a la debilidad del apoyo de los industriales en el período de formación de la coalición peronista, tesis que ha sido confirmada en estudios académicos ulteriores.

Es indudable que el ambicioso coronel, con las reformas laborales y su vitriólico lenguaje político, despertó un profundo recelo en los industriales y, en rigor de verdad, en las clases



José María Bustillo dirige la palabra en la inauguración de la Sociedad Rural. A su izquierda, el embajador Spruille Braden, 1945.

capitalistas del país en general. Consciente de la inquietud que recorría las filas de los empresarios, Perón procuró aventar sus temores y convencer a la patronal de los beneficios que podrían obtener con sus políticas. En un discurso pronunciado el 25 de agosto de 1944 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resaltó el éxito de sus reformas en la erradicación de la influencia comunista dentro del movimiento obrero y sermoneó a los empresarios sobre las ventajas de la armonía de clases y la cooperación con los trabajadores. A fin de que funcionara como un interlocutor eficaz de los sindicatos, instó a los empleadores a crear una confederación nacional que los agrupara, una asociación que fuera el equivalente capitalista de la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT). Más que como un enemigo de las clases capitalistas del país, Perón se dirigía a ellos como su salvador y protector, y les prometía la paz social necesaria para preservar la inviolabilidad de la propiedad privada y alcanzar la prosperidad futura.

También en otros aspectos los esfuerzos de Perón tendían a

la conciliación con el empresariado. En agosto de 1944 el presidente Farrell lo había nombrado director del recién creado Consejo Nacional de Posguerra. Establecido con el fin de preparar al país para las perturbaciones económicas que muchos empresarios consideraban inevitables tras el fin de la guerra, el consejo incluía a representantes de las empresas, así como del gobierno, las Fuerzas Armadas y los sindicatos. Aunque insatisfechos con los planes de Perón en favor de una mayor intervención estatal en la economía con el objeto de promover la "justicia social", muchos integrantes de las filas empresarias reconocían, al menos en principio, la utilidad de un organismo oficial que coordinara los ajustes necesarios para la marcha de la economía de posguerra. A esta iniciativa se sumaron otras medidas importantes del gobierno militar, como la creación, a fines de 1944, del Banco de Crédito Industrial, que en sus primeros años fue una fuente de financiamiento no sólo para la industria sino para las empresas en general e incluso la agricultura.

Pese a esas propuestas, en las filas empresarias eran pocos los que creían convincentes las palabras tranquilizadoras de Perón, a la vista de sus diatribas públicas contra la comunidad empresarial y las concesiones a sus partidarios de la clase obrera. El congelamiento de los alquileres, los decretos que

Reservas iniciales de la UIA frente a la política social de Perón

"La UIA entiende que los medios que corresponde adoptar en nuestro país para lograr el bienestar de los trabajadores no pueden coincidir siempre con los que convienen a los países que han llegado, hace tiempo, al máximo de su evolución industrial, explotando por completo sus recursos naturales, y donde los trabajadores tienen ya su elevado 'standard' de vida. Bien distinta es la situación de nuestro país, donde la explotación de nuestros recursos está todavía en sus comienzos y donde existe, pues, la posibilidad de aumentar las actividades productivas y la renta nacional."

Revista de la Unión Industrial Argentina, abril de 1945.

impedían el desalojo de aparceros e inquilinos y los convenios colectivos favorables a los trabajadores industriales eran el tipo de medidas que galvanizaban la oposición de la Bolsa de Comercio, la UIA y la Sociedad Rural Argentina (SRA). La UIA, por ejemplo, alternaba los elogios a determinadas disposiciones oficiales beneficiosas para los intereses de los industriales con estridentes críticas contra la filosofía económica subyacente del gobierno militar que Perón había llegado a dominar. El presidente de esa organización, Luis Colombo, y José María Bustillo, presidente de la SRA, hicieron causa común en su oposición a él y sufrieron detenciones temporarias en 1945 por orden de Perón, debido a sus abiertas críticas. Cuando a fines de 1945 Perón convenció al presidente Farrell de que estableciera el aguinaldo por decreto, toda la comunidad empresarial cerró filas. El 27 de diciembre, miembros de la UIA, la SRA y otros grupos patronales se reunieron en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y decidieron realizar un *lockout* de tres días como protesta contra el decreto y para oponerse, implícitamente, a la candidatura de Perón a la presidencia. Aunque el *lockout* fue exitoso, no sucedió lo mismo con su oposición, y Perón y sus seguidores obtuvieron una resonante victoria electoral el 24 de febrero de 1946. En medio de la euforia popular suscitada por esa elección, una sensación de abatimiento reinaba en la comunidad empresarial.

Perón llegaba al poder con las grandes organizaciones patronales francamente alineadas contra él. Pero, ¿qué pasó con la historia del empresariado durante la siguiente década de régimen peronista? En este punto parece necesario distinguir entre el papel del empresariado en el ascenso de Perón y su relación con el Estado peronista a lo largo de casi diez años en el poder. Es muy notorio que mientras gobernó Perón, los industriales no se opusieron de manera unánime al régimen, que hubo importantes divisiones en sus filas y que aquél entabló una relación de trabajo, si no una franca alianza, con algunos industriales y hasta con ciertos sectores de la industria. Como clase, los industriales no se opusieron, naturalmente, a un régimen que hacía mucho por promover sus intereses. Aunque sus márgenes de ganancia brutos disminuyeron entre 1946 y 1948 como resultado de las políticas laborales y salariales del gobierno, la tasa de rentabilidad de los capitales aumentó en gran

medida. Los créditos para el sector privado, por ejemplo, crecieron un 30 por ciento en 1947 y un 15 por ciento en 1948, principalmente los destinados a las manufacturas. En esencia, este financiamiento permitió subsidiar los incrementos salariales alentados por las políticas laborales de Perón. La proporción de los préstamos otorgados a la industria por un sistema bancario nacionalizado en 1946 también aumentó del 28 al 55 por ciento entre 1945 y 1950. Los márgenes de ganancia en el sector fueron muy altos entre 1946 y 1955 y beneficiaron no sólo a una nueva clase de industriales sino también a las empresas ya instaladas. Las grandes empresas recibieron su parte de los subsidios y créditos bancarios y sacaron tanto provecho como los nuevos industriales del proteccionismo y las numerosas medidas oficiales que expandieron el mercado interno.

En cuanto al proceso de ascenso de Perón al poder, la actitud opositora de los industriales no debería presentarse con demasiada rigidez. Gran parte de la confusión con respecto a su papel se debe a que se omite reconocer las divisiones en sus filas, incluidas las existentes dentro de la misma UIA. Esta entidad, pese a su nombre, no había surgido propiamente hablando como una organización de los industriales, sino que representaba más bien los intereses económicos dominantes de la capital y la provincia de Buenos Aires, es decir, los que predominaban en el país. En sus primeros años de historia, la organización fue manejada, en realidad, por la elite terrateniente y, pese a un respaldo verbal al proteccionismo, no adoptó un programa estrictamente pro industrial. Aunque en las décadas siguientes la UIA exigió medidas como la protección arancelaria y una legislación antidumping y los industriales controlaron desde principios de siglo su comité ejecutivo, a lo largo de la década de 1930, la UIA funcionó como un grupo de interés económico y un *lobby* más preocupado por proteger los oligopolios industriales establecidos que por encabezar un asalto de los industriales contra el orden agrario del país.

Sin embargo, hacia comienzos de la Segunda Guerra Mundial, la ideología de la UIA ya era más estrictamente pro industrial y estaba imbuida de un discurso nacionalista que exaltaba la "independencia económica" mediante la industrialización. El rápido crecimiento de la industria durante la guerra contri-

buyó a encauzarla en esa dirección. Los censos industriales realizados entre 1935 y 1946 revelan un proceso de dispersión de la industria argentina, por el que aparecen muchas pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores en expansión como el textil, el metalúrgico, el de maquinarias y el de electrodomésticos. Muchos de estos industriales imaginaban un nuevo papel para la industria en la vida nacional. La misma UIA había dado una cálida bienvenida a buena parte de las medidas pro industrialistas del gobierno militar: la creación de un Ministerio de Industria y Comercio y el establecimiento del Banco de Crédito Industrial (cuyo primer director fue el vicepresidente de la UIA, Ernesto Herbin), para mencionar sólo dos. No obstante, en sus necesidades de divisas y bienes de capital los industriales tradicionales que dominaban la organización todavía dependían demasiado del sector agroexportador para representar un desafío fundamental al modelo económico establecido. Aunque a medida que se acercaba el fin de la guerra la UIA seguía demandando una vigorosa intervención estatal para asegurar la supervivencia de la industria (apoyo para modernizar las fábricas del país, crear industrias básicas y mediar en las relaciones entre el capital y el trabajo), también aumentaba sus críticas al gobierno militar, en especial a las políticas laborales y a su arquitecto, el coronel Juan Domingo Perón. A principios de 1945, la UIA arreció en sus protestas contra determinadas medidas oficiales, como el establecimiento de escalas salariales fijas ("escalafón"), la eliminación del trabajo a destajo y el régimen de afiliación sindical obligatoria. También criticaba el uso que Perón hacía de "cierta terminología" que presentaba cualquier convenio colectivo como una "conquista" obtenida contra las pretensiones de un sector empresarial supuestamente avaro y egoísta.

Tras la victoria de Perón el empresariado se encontró en un aprieto. Aunque se había opuesto a él, advertía que podían obtenerse notorios beneficios si se establecía una estrecha relación de trabajo con su gobierno. El peso de la tradición y las animosidades recientes, sin embargo, eran demasiado grandes para permitir una reconciliación, por lo que las principales organizaciones patronales siguieron siendo hostiles a Perón. Apenas dos meses después de la victoria de éste, en las elecciones internas de la UIA un grupo antiperonista de-

rrotó a otro más conciliador que estaba dispuesto a trabajar con el gobierno. En junio de 1946, Perón intervino la organización y la despojó de su personería gremial en razón de su intervención en política y con el argumento de que había dejado de representar los intereses industriales en su conjunto. Sin embargo, la dimensión y la fortaleza de la lista pro peronista eran al menos tan significativas como el triunfo de la lista antiperonista. En realidad, aun antes de ser elegido, Perón había recibido más apoyo de las filas industriales de lo que a menudo se ha admitido, ya que los estudiosos presentan con demasiada frecuencia las actitudes de la UIA como si hubieran sido las de todos los industriales del país. El crecimiento del sector manufacturero durante la Segunda Guerra Mundial había introducido nuevos actores en la burguesía industrial y reorientado las prioridades de los ya establecidos. Industriales como Miguel Miranda, Rolando Lagomarsino y Aquiles Merlini conducían el bando pro peronista derrotado



Rolando Lagomarsino habla sobre el Plan Quinquenal en la Exposición Industrial, febrero de 1947.

Los empresarios metalúrgicos con Perón

"La política realista que sus gobernantes imprimen a la Argentina la ha alejado tanto de lo eminentemente capitalista como de lo crudamente proletario. Ni plutocracia ni comunismo. Su economía no sigue los lineamientos ortodoxos de ninguna doctrina y ha sabido, con ponderable mesura, adoptar una posición que le permitió mantener del liberalismo económico sus principios esenciales y tomar del intervencionismo estatal lo estrictamente necesario para asegurar la función social de la propiedad."

Metalurgia, órgano de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, septiembre de 1949.

dentro de la UIA y procuraban cultivar una estrecha relación con Perón.

El apoyo de Merlini era particularmente significativo. Como presidente de la Cámara Argentina de Industrias Metalúrgicas, dirigía el sector industrial que había experimentado el crecimiento más rápido durante la Segunda Guerra Mundial. La industria metalúrgica pronto se manifestó como la más franca partidaria de las políticas económicas peronistas, en especial las que pretendían consolidar los progresos de los años de guerra. Así, la cámara aplaudió cálidamente medidas oficiales como la protección arancelaria, los tipos de cambio favorables para la industria y el acceso a créditos baratos a través del Banco de Crédito Industrial. Incluso recibió con beneplácito, aunque dentro de ciertos límites, las políticas sociales peronistas de redistribución del ingreso que provocaron una notable expansión del mercado interno.

Sin embargo, ese apoyo no era simplemente el resultado de una actitud atenta al propio interés. El nacionalismo popular que encarnaba el peronismo tenía eco no sólo en la clase obrera sino en muchos otros grupos y clases; y ciertas facetas de la ideología peronista eran atractivas al menos para algunos industriales. Hay muchos ejemplos de una identificación concreta de la industria metalúrgica con ciertas medidas del nacionalismo económico peronista, como la nacionalización de los fe-

rrocarriles, aunque como es previsible la ideología nunca estaba muy lejos de los intereses sectoriales; en ese caso la cámara expresó su esperanza de que se recurriera a la industria metalúrgica local para suministrar los repuestos y material rodante de la que ahora era una empresa pública. El ejemplo más elocuente de una coincidencia entre el propio interés y la ideología tal vez haya sido su respaldo a los dos planes quinquenales de Perón y su participación en ellos. Los industriales metalúrgicos se contaron entre los voceros más entusiastas de sus objetivos, como el apoyo a la industria "nacional", la intervención estatal para aliviar los problemas y cuellos de botella que ésta enfrentaba, el desarrollo de una industria metalúrgica pesada y la búsqueda de la "independencia económica". Dado ese respaldo tan franco, no es sorprendente que cuando Perón intentó organizar a los industriales del país en una Confederación de la Industria (CI) pro peronista, miembros del sector metalúrgico como Merlini, Torcuato Sozio Di Tella, Alberto O. Schärer, Roberto van Gelderen y Marcos Zimmerman, todos integrantes de la cámara, fueran elegidos para constituir el primer comité ejecutivo. De hecho, Merlini fue designado primer presidente de la confederación.

LOS DILEMAS DE LA SOBERANÍA ECONÓMICA Y LA ECONOMÍA POPULAR

Pese al apoyo del sector metalúrgico, dentro de las filas industriales subsistía mucha oposición. En rigor, aun dentro de la industria metalúrgica había divisiones entre los grupos pro peronistas representados en la cámara, que fabricaban principalmente productos livianos (heladeras, cocinas, autopartes) para el mercado de consumo local, y los fabricantes antiperonistas de productos metalúrgicos pesados (maquinaria y equipamiento), que objetaban las políticas oficiales que permitían la libre importación de esos productos para la industria de bienes de consumo. En la crucial industria textil había una división similar entre los fabricantes de ropa que se beneficiaban con la expansión del mercado y que utilizaban lana y fibras de algodón de producción nacional y los industriales antiperonistas que dependían de las fibras importadas (seda y sintéticos) y

habían sido perjudicados por las restricciones que el gobierno imponía a su importación.

La cooperación estaba entonces cargada de contradicciones, y con el paso del tiempo surgieron tensiones con el gobierno aun entre los partidarios de Perón, lo cual fijó límites estrictos al apoyo al régimen o a la identificación ideológica con el justicialismo. Los problemas más graves eran los resultantes de las políticas laborales de Perón. Ya en 1947 los industriales metalúrgicos se quejaban de las actividades de las organizaciones de delegados gremiales, las comisiones internas, que supuestamente tenían un efecto negativo sobre la disciplina fabril, ya que "tergiversaban por completo el objetivo para el que habían sido creadas y se transformaban en una fuente de desorden, indisciplina y anarquía". La industria también se quejaba con frecuencia de los excesivos aumentos salariales otorgados a los trabajadores por los convenios colectivos, así como del ausentismo y del régimen de afiliación sindical obligatoria. Hacia 1949, y plenamente consciente de la inminencia de una crisis, la industria propuso soluciones: la abstención del Estado en lo relativo a las relaciones entre capital y trabajo, permitiendo que las partes interesadas actuaran libremente en la negociación de los convenios colectivos de trabajo, y la intervención estatal cuando estuvieran en juego las necesidades de la industria, por ejemplo sometiendo todas las importaciones a un conjunto de normas que regularan el otorgamiento de licencias de importación, a partir del requisito de que los bienes en cuestión no se fabricaran en el país.

Para ese momento, tal vez resignados a la idea de que los incrementos salariales iban a ser un aspecto permanente de las relaciones industriales de la Argentina peronista y conscientes, por otra parte, de que dentro de ciertos límites eran beneficiosos para sus intereses, los industriales metalúrgicos comenzaron a solicitar que esos aumentos fueran el correlato del crecimiento de la productividad. También argumentaban que las causas de sus dificultades para competir en los mercados extranjeros o sobrevivir en los propios sin protección del Estado eran el obstruccionismo de las comisiones obreras, la escasa productividad de los trabajadores y los costos laborales generalmente más elevados. Dada la gran cantidad de mano de obra que empleaba y su limitado acceso a la tecnología extranjera,

la industria metalúrgica era quizá la que hablaba más abiertamente de la necesidad de la racionalización y de una mayor productividad laboral. Poco a poco, las relaciones entre capital y trabajo en la industria se deterioraron. En el segundo gobierno de Perón, la "función social" del capital que los industriales metalúrgicos parecían apoyar se había convertido en poco más que la idea de "una paga justa por una jornada laboral justa".

La agricultura tenía recelos aún más grandes que la industria con respecto a la nueva Argentina de Perón. Como blanco favorito de las diatribas de éste, la clase de los estancieros desconfiaba particularmente de él y rechazaba todos los intentos de incorporarla al régimen. A fin de evitar un enfrentamiento directo con el gobierno, los grandes terratenientes del país renunciaron en fecha temprana a cualquier participación activa en la SRA, dejando una organización insignificante en manos de algunos colaboracionistas como Juan Carlos Picazo Elordy, un estanciero que fue el primer ministro de Agricultura de Perón. Pero la SRA peronizada era incapaz de convencer a la elite de los terratenientes de que apoyara las políticas de Perón. El mayor motivo de fricción estaba representado, sin duda, por las actividades del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), que se apropiaba de ganancias de la agricultura para solventar los gastos del gobierno, lo que provocó la declinación de la producción agrícola. Aunque Perón nunca cumplió las promesas electorales de realizar una reforma agraria, los recelos y finalmente la aversión contra él tuvieron amplia difusión entre los miembros de la elite terrateniente desde el primer día de su gobierno.

A medida que pasaba el tiempo, los problemas entre Perón y las clases capitalistas se agravaron. Durante su segunda presidencia, empezó a resultar evidente, tanto para el propio gobierno como para los empresarios del país, el agotamiento del modelo peronista original de crecimiento económico, que se basaba en una redistribución del ingreso a través de aumentos salariales para la clase obrera y en la promoción industrial mediante un consumo interno creciente, subsidios, créditos bancarios y regulaciones proteccionistas. Perón intentó adaptarse, como lo demostraban los términos del Segundo Plan Quinquenal, con su énfasis en el aumento de la productividad laboral, el estímulo de las exportaciones agrícolas y una mayor receptividad al capital

extranjero. El mundo empresario acompañó estos ajustes de una manera ambigua. Aunque plenamente de acuerdo con los planes para incrementar la productividad laboral, los industriales, con la excepción de los sectores estrechamente vinculados a la exportación, como los frigoríficos, recelaban de cualquier redistribución del ingreso que los perjudicara en beneficio de la agricultura. Los fabricantes de lavarropas y heladeras, por ejemplo, se quejaban de los planes oficiales para bajar los aranceles de sus bienes o restringir la importación de las planchas de acero necesarias para manufacturar sus productos, que no podía proveer una industria siderúrgica nacional inexistente. De manera similar, la Sección de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y sus Repuestos, uno de los grupos de interés más poderosos dentro de la Cámara Argentina de Industrias Metalúrgicas a principios de la década de 1950, protestaba contra los planes del gobierno para mecanizar la agricultura y mejorar la productividad mediante la importación libre de aranceles de máquinas agrícolas de producción extranjera.

Los industriales también habían empezado a ver cada vez con más recelo el creciente sector público del país, las compañías estatales que ahora competían con las empresas privadas. Los industriales metalúrgicos, por ejemplo, criticaban la fabricación de motores eléctricos y otros productos metalúrgicos en las plantas militares de Córdoba, ya que en su opinión representaban una competencia innecesaria que perjudicaba la industria doméstica y obstruía el desarrollo industrial nacional. También, la cámara recibió con frialdad la ley de radicación de capitales de 1953 y las tratativas de Perón con compañías extranjeras como Standard Oil y Kaiser. En el marco del agravamiento de las tensiones, tal vez no haya sido sorprendente que los industriales metalúrgicos expresaran una moderada aprobación al derrocamiento del presidente en 1955. Entonces, criticaron los abusos del poder del Estado bajo el régimen depuesto pero también se ocuparon de advertir que la condena a esos abusos no debería usarse como pretexto para establecer un programa económico extremadamente liberal que dejara desprotegida a la industria nacional y significara un retorno a la Argentina pastoril.

Otras industrias e industriales eran aún más críticos de Perón y sus políticas que los integrantes del sector metalúrgi-

co. Como resultado de ello, los esfuerzos del presidente por nuclear a los industriales en una organización pro gubernamental sólo fueron parcialmente exitosos. Tras la intervención oficial de la UIA, Perón creó la Asociación Argentina de la Producción, la Industria y el Comercio (AAPIC) a fin de institucionalizar el apoyo de los grupos empresarios, tanto de la Unión Industrial como de los ajenos a ella, dispuestos a colaborar con el régimen. La estructura de la AAPIC no sólo incluía la industria sino también los intereses comerciales y agrarios y revelaba la intención de Perón de cortejar al mundo empresario en general, fortaleciendo la base policlasista de su régimen y su representación corporativa. En el plano ideológico, es posible que los miembros de la AAPIC se identificaran con algunas facetas del concepto de "comunidad organizada" de Perón y su nacionalismo económico. La AAPIC defendía con firmeza la intervención estatal en la economía y la armonización de los intereses de clase y utilizaba un vocabulario político que hacía hincapié en la "solidaridad", la "defensa de la nación" y en los ataques contra el "individualismo egoísta". Sus declaraciones programáticas revelaban más simpatía por un sistema corporativo que por el liberalismo clásico al que adherían la SRA e incluso la UIA. Así, en su manifiesto de diciembre de 1946 sostuvo:

> Debemos enfrentar con resolución el problema social. Armonia entre la agricultura, el comercio y la industria. Armonía entre el capital y el trabajo, a fin de que éste pueda alcanzar el confort material y aquél comprenda su papel de promotor del progreso. Armonía con el Estado, al que queremos alerta ante los problemas económicos y sociales del pais con el objeto de que todos puedan cumplir el papel especifico que les corresponde en la búsqueda de la prosperidad de la nación.

La profundidad de esta afinidad ideológica, sin embargo, no debe exagerarse. No habría que confundir el respaldo a medidas específicas del gobierno con la simpatía e incluso el acuerdo con la idea general de la política económica oficial. Como organización, la AAPIC nunca se identificó plenamente con el Estado peronista. Es posible que las imágenes de Perón y Evita

aparecieran con frecuencia en sus publicaciones y las muestras públicas de fidelidad al régimen fueran numerosas, pero en la mayoría de sus miembros la auténtica simpatía ideológica era superficial. La AAPIC tampoco mostró mucho entusiasmo por embarcarse en una campaña organizativa nacional de los empresarios a instancias de Perón, ya que temía que una organización nacional de ese tipo redujera la influencia de los intereses de Buenos Aires que habían dominado la SRA y la UIA y seguían haciéndolo en la propia asociación. De manera previsible, las principales preocupaciones de la organización no eran la promoción de la doctrina justicialista sino las condiciones del mercado, los problemas del transporte, el crédito, el acceso a los insumos y los convenios colectivos de trabajo. En verdad, la AAPIC adhirió a un peronismo más bien tibio y estableció una relación de trabajo con Perón con miras a su supervivencia económica. Por otra parte, el control gubernamental sobre ella siempre fue débil y la asociación no vacilaba en criticar al régimen, particularmente en cuestiones de salarios y precios, dado que las industrias que la integraban no solían ser suficientemente grandes para que los problemas relativos al control obrero tuvieran un lugar prominente en sus reclamos. En definitiva, como la mayor parte de los empresarios más poderosos del país, tanto de la industria como de la agricultura, se negaron a integrarla, la organización prácticamente no cumplió los objetivos que le había fijado Perón.

La imposibilidad de transformar la AAPIC en una poderosa asociación empresarial pro peronista decidió a Perón a disolverla y crear en su lugar la Confederación Económica Argentina (CEA). Como aquélla, la CEA representaba esencialmente los intereses económicos de Buenos Aires, aunque a diferencia de la AAPIC, logró vencer la resistencia de algunos de los miembros más poderosos de la desmantelada UIA, como la firma metalúrgica Siam Di Tella, Pirelli (el fabricante de neumáticos más grande del país) y la compañía cementera Loma Negra. Los vínculos directos que la unían a la Unión Industrial Argentina quedaron demostrados en su implacable *lobby* para conseguir que esa entidad fuera nuevamente legalizada y las propuestas de que su propia cámara industrial y la UIA se fusionaran, así como en la intención de que la recién reconstituida asociación de industriales se instalara en la anterior

sede de esa organización. Como en el caso de la AAPIC, su preocupación central era mantener buenas relaciones con el régimen, mover influencias en nombre de sus integrantes y redefinir la relación entre las empresas y el Estado en la Argentina de Perón. Una de sus inquietudes típicas fue la realización de una encuesta entre sus miembros con respecto a la discriminación y los obstáculos a la obtención de créditos del ahora nacionalizado sistema bancario del país.

Al igual que en la AAPIC, es posible que existiera cierta simpatía ideológica por el peronismo. En la ceremonia de fundación de la CEA, en agosto de 1948, la organización declaró públicamente que una de sus metas era "obtener una legislación social que respondiera a un ideal de colaboración y entendimiento entre el capital y el trabajo". También propiciaba una visión más amplia de la planificación industrial que la que había tenido la antigua UIA. Trabajaba activamente en pos del establecimiento de un sistema nacional de colegios industriales para crear una mano de obra más calificada mientras proponía la expansión de un viejo programa de la UIA de auspiciar conferencias y financiar investigaciones, a fin de promover y difundir el conocimiento tecnológico y científico en la Argentina. Otros proyectos, como el Instituto del Trabajo, destinado a estudiar todos los problemas relacionados con el trabajo y las relaciones industriales, y su respaldo a una colaboración estrecha con el gobierno para investigar las tendencias del comercio internacional e idear estrategias de comercialización de los productos argentinos en el exterior, revelan un nuevo tipo de organización empresarial. Pero como en el caso de la AAPIC, la CEA funcionó principalmente como un grupo de *lobby* y presión dentro del Estado peronista, que actuaba en nombre de los intereses empresariales establecidos en el país, y en particular de su sector industrial.

INDUSTRIALES Y BOLICHEROS

Aunque la CEA representaba en proporción abrumadora a las firmas porteñas, pocos meses después de su fundación los empresarios del interior ya ejercían presión sobre ella para que abriera sus filas. La rivalidad que los pequeños empresarios



Inauguración del Congreso de la Industria en la Facultad de Derecho, 18 de mayo de 1953.

del interior sentían hacia Buenos Aires era evidente desde hacía algún tiempo. Entre 1946 y 1950, las asociaciones empresariales se habían movilizado en las provincias, particularmente en el noroeste, una región próspera durante el período colonial, cuando había tenido estrechos vínculos con las minas de plata de Potosí, y que contaba desde fines del siglo XIX con una floreciente industria azucarera protegida por el gobierno nacional, pero que ahora sufría un proceso de decadencia económica. Las primeras movilizaciones de los empresarios provincianos, sobre todo dueños de establecimientos minoristas pero también pequeños agricultores y algunos industriales, tuvieron objetivos estrictamente defensivos: protestar contra las políticas impositivas del gobierno y en especial contra los aumentos salariales que había decretado (ahora otorgados por las convenciones colectivas de trabajo), medidas que los empresarios de la opulenta Buenos Aires no acogían con agrado pero que eran consideradas catastróficas por los pequeños empresa-

rios del interior. Estos últimos, no obstante, pronto trascendieron la protesta por esos problemas inmediatos e intentaron participar en la planificación económica peronista. En 1946 se realizó en Santiago del Estero el Primer Congreso de Planificación del Norte Argentino, que reunió a empresarios del noroeste a fin de elaborar propuestas y movilizarse en apoyo del Primer Plan Quinquenal de Perón. En diciembre de 1948 las secciones del noroeste de la ex AAPIC organizaron el Congreso del Norte y constituyeron la Federación Económica del Norte Argentino (FENA) para abordar los problemas específicos de la región.

En mayo de 1950, los miembros de la FENA, junto con representantes de las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Juan, San Luis, Chaco y Mendoza, se reunieron en Catamarca para realizar el Segundo Congreso Económico del Norte y firmar el Acta de Catamarca, en la que se comprometían a apoyar la formación de una organización empresarial nacional dedicada al desarrollo regional y el federalismo económico. Ese compromiso se concretó en diciembre del mismo año, cuando pequeños empresarios de todas las provincias se congregaron en Mendoza para constituir la Confederación Argentina de la Producción, la Industria y el Comercio (CAPIC), una organización expresamente creada para representar los intereses estrictamente provinciales. Las dos reuniones de 1950 también se convirtieron en foros para la manifestación de los reclamos generales de las provincias, así como de su profundo sentimiento federalista. En ellas se advertía igualmente una pronunciada animosidad de clase; prueba de ello es que estos pequeños empresarios pronto comenzaron a ostentar con orgullo su condición de "bolicheros", pequeños mercachifles, *self-made men* e improvisados empresarios que adoptaban con entusiasmo lo que antes había sido una caracterización despectiva que les aplicaba la elite empresarial de Buenos Aires, del mismo modo que la clase obrera peronista había hecho orgullosamente suya la identidad antaño despreciada de descamisados.

Hacia principios de 1950 resultaba claro que los planes de Perón para crear una única organización empresarial basada en los intereses económicos dominantes del país habían fracasado. El legado de los efectos de la depresión de la década de

1930 en muchas de las provincias, la débil integración del interior a la economía nacional y su constante subordinación a Buenos Aires, sumados ahora a la indignación suscitada por las políticas impositivas y salariales del régimen y las bancarrotas potenciales que implicaban, movilizaron a los pequeños empresarios en lugares tan improbables como Salta, Catamarca y el Chaco. Poco después, los representantes de la CAPIC comenzaron a concurrir a los plenarios de la CEA, donde expresaban sus deseos de que la organización se preocupara por los problemas del interior. Desde el principio, los intereses azucareros del noroeste proclamarían con particular intensidad las exigencias de que el gobierno prestara atención a sus problemas. El transporte era una de las principales preocupaciones, en especial el estado ruinoso del ferrocarril de Salta a Antofagasta, Chile, una salida vital para las economías azucareras del noroeste, que en opinión de los empresarios locales sólo podían revitalizarse mediante la intervención gubernamental y la inversión pública. Los productores de algodón, té y yerba mate de las provincias del nordeste también demandaban la reparación de los transportes inadecuados y se quejaban especialmente de la falta de instalaciones apropiadas para el almacenamiento de sus productos. En el Tercer Congreso Económico del Norte, realizado en Resistencia en 1951, los temas en discusión fueron una muestra de las inquietudes de los pequeños empresarios del país: los inconvenientes con el crédito, la promoción industrial y el transporte. Poco a poco, estos intereses económicos regionales, sobre todo del noroeste y el nordeste, ganaron influencia dentro de la CEA y el apoyo empresarial a Perón asumió un carácter distintivamente provinciano. La misma CAPIC dejó de ser una organización defensiva para empaparse de un genuino sentimiento federalista que encontraba en ciertos elementos de las políticas económicas peronistas, en especial su insistencia en promover el mercado interno y un papel gubernamental activo en el desarrollo económico, principios con los que podía identificarse.

Pese a la creciente influencia del interior, la CEA seguía estando bajo la dominación de los industriales porteños. Perón, siempre sensible a los cambios de humor y de condiciones políticas en su país, comenzó a presionar a esa confederación para que organizara a todos los hombres de negocios de la na-

ción y emprendiera una campaña de empadronamiento que no dejara ninguna actividad empresarial al margen de una estructura gubernamental de aspiraciones corporativas. Así lo exigía la cambiante suerte del mismo Estado peronista. A principios de la década de 1950 los puntos débiles del gobierno ya empezaban a ser evidentes. Era necesario un sólido frente empresarial para responder con eficacia a las mayores exigencias laborales e impedir divisiones dentro de las filas del capital. Perón quería disciplinar a las empresas a fin de evitar problemas como la reciente capitulación de algunos industriales textiles ante las demandas sindicales en la negociación de los convenios colectivos y las presiones inflacionarias que sus aumentos salariales agregaban a la economía. El deslucido papel de la CEA, que no lograba actuar como una dinámica asociación del empresariado, incitó a Perón a tomar la iniciativa y a auspiciar en diciembre de 1951 una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para discutir la reorganización de las asociaciones empresariales del país, que concluyó con la creación de tres confederaciones nacionales divididas por sector (industria, comercio y agricultura). En agosto del año siguiente el gobierno fundó la Confederación General Económica (CGE), obligando a los miembros renuentes de la CEA a incorporarse a ella.

La formación de la CGE, sin embargo, no fue estrictamente obra de Perón. La movilización de los empresarios provincianos entre 1946 y 1950 se había producido independientemente de cualquier iniciativa de su parte y, en un principio, incluso contra sus deseos. Por otro lado, las políticas económicas peronistas entre 1946 y 1951 habían contribuido a generar nuevos intereses provinciales e industriales, como la industria metalúrgica cordobesa, beneficiados por la expansión de las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) bajo el régimen de Perón, y habían convertido en agricultores a quienes antaño eran aparceros y en dueños de negocios minoristas a antiguos empleados de tiendas. Estos sectores demandaban representación, una representación que también estaba imbuida de los intensos sentimientos federalistas tan vigentes en las provincias. En realidad, los miembros de la CAPIC habían respondido a la iniciativa de Perón con más entusiasmo de lo que éste esperaba, organizando federaciones económicas en el ni-

vel de las bases en todo el interior, a fin de elegir representantes a las tres confederaciones nacionales que en conjunto designarían la conducción nacional de la CGE.

Los miembros de la CGE provenían principalmente de las filas de la ahora desaparecida CAPIC y un provinciano y ex viajante de comercio destinado a ser la figura dominante de la organización en las siguientes dos décadas, José Ber Gelbard, fue designado como su primer presidente. Gelbard, un catamarqueño hijo de inmigrantes judíos polacos y propietario de un negocio minorista, se convertiría en el principal ideólogo de la "burguesía nacional" y el defensor más elocuente de una alianza entre los empresarios y el movimiento obrero y un programa económico nacionalista y federalista. Poco después de que lo eligieran como presidente de la CGE, Perón promulgó la ley 14.295, la famosa "ley de asociaciones profesionales de empleadores", que establecía la existencia de una organización patronal por sector industrial para negociar con los trabajadores (el equivalente capitalista de un derecho-obligación similar que Perón otorgaba a los sindicatos) y enumeraba los procedimientos a seguir en la negociación de los convenios colectivos. Tanto los empresarios como el movimiento obrero participarían en la Comisión Económica Consultiva, una idea que a juzgar por los debates internos que suscitó en la CGE era muy bien recibida por la organización del empresariado.

Ideológicamente, los pequeños empresarios del interior que dominaban la CGE encontraban en el ideario peronista muchos elementos con los que simpatizaban. El antiliberalismo y el nacionalismo de estos hombres eran sus características ideológicas sobresalientes. La idea de Perón de una "comunidad organizada" y las responsabilidades sociales y nacionales del capital despertaban gran interés en individuos que habían sido testigos de la dominación de las políticas económicas del país por la elite porteña tradicional y sus socios británicos bajo la apariencia de la economía del *laissez-faire*. Mientras que las economías provinciales luchaban con la crisis de la década del treinta para recuperarse sólo parcialmente durante la guerra, la de Buenos Aires sobrevivía y luego florecía. En provincias donde la "cuestión laboral" recién empezaba a conocerse y entre los empresarios exitosos, como Gelbard, que sólo estaban distantes una generación del más humilde de los inicios y fre-

cuentemente vivían apenas un poco mejor que sus empleados o trabajadores, el discurso antioligárquico de Perón era absolutamente estimulante. Para reparar las distorsiones producidas por la secular dominación bonaerense de la economía nacional y restablecer un auténtico federalismo económico, estos pequeños empresarios apoyaban la planificación estatal y algún tipo de estructura corporativa. En una declaración, sugestivamente titulada "La crisis de la acción individual", la CGE afirmó en febrero de 1954:

> Si para el movimiento obrero organizado la acción individual resultó ineficaz, no hay forma de que pueda suceder de otra manera en el caso de las empresas. En el momento actual, los emprendimientos económicos no son un esfuerzo individual sino el de entidades organizadas con afinidades funcionales.

La CGE fue una persistente defensora de la "agremiación" del empresariado y de la necesidad de "organizar" y "armonizar" los intereses del capital para mayor beneficio de la nación. La entidad reservaba sus más cálidos aplausos para la planificación económica peronista, ya fuera en la forma de la junta estatal para la compra de granos (IAPI), los planes quinquenales o las actividades del Banco Industrial. El capital extranjero debía ser cuidadosamente regulado y estimulado en los sectores que estaban más allá de las posibilidades del capital nacional, a fin de introducir nuevos métodos de producción y nuevas tecnologías, pero siempre dentro de límites escrupulosamente establecidos y de conformidad con un plan económico nacional. Al igual que en el caso de la AAPIC y la CEA, la relación de la CGE y Perón era ventajosa para ambos. El Presidente tenía el apoyo del empresariado para sus políticas, mientras que los integrantes de la CGE podían promover sus propios intereses por medio del Estado sin que la organización fuera completamente absorbida por las muy frágiles estructuras corporativas del gobierno peronista. Sin embargo, para la época del derrocamiento de Perón las presiones sobre ella iban en aumento, por lo que es posible que el golpe la haya salvado de una absorción total en el Estado justicialista.

Las prácticas internas de la CGE están sorprendentemente

libres de himnos triunfales a Perón o de gestos de acatamiento a su régimen. El minuto de silencio propuesto en honor a Eva Perón en el momento de su muerte fue lo más cercano a un gesto de ese tipo, mientras que en muchas oportunidades la organización se esforzó sobremanera por destacar que su apoyo al Estado como entidad necesaria para fomentar la integración y el desarrollo económicos y, por lo tanto, su respaldo a las políticas del gobierno no significaban la adhesión a un partido político (es decir, al Partido Justicialista). Pero la CGE tenía mayor afinidad ideológica que las anteriores organizaciones del empresariado con el Estado peronista. Que esa entidad o Gelbard fueran o no peronistas es irrelevante. El propio presidente de la CGE afirmaba ser radical y hay ciertas pruebas de que mantenía una relación amistosa con los comunistas. Lo que sí resulta claro es que había compatibilidad ideológica y ambos estaban interesados en establecer vínculos orgánicos entre las empresas y el Estado.

La CGE estaba indiscutiblemente dominada por pequeños empresarios de las provincias, aunque en esos primeros años había una considerable representación de los intereses porteños, incluso de los más grandes, entre ellos, miembros de la Bolsa de Comercio, la UIA y la Sociedad Rural que querían conservar las buenas relaciones con el gobierno. En los primeros seis meses de 1953, sin embargo, Gelbard viajó por todo el interior para organizar "federaciones" provinciales en preparación para las próximas elecciones de la conducción nacional de la CGE, y como consecuencia de ello la composición del primer comité ejecutivo de ésta, elegido el 16 de agosto de ese año, resultó fuertemente favorable a los intereses provincianos. Una vez instalada en su cargo, la dirección de la CGE siguió dedicando el grueso de sus esfuerzos organizativos a las provincias, y Gelbard encabezó delegaciones a Paraná, Santa Fe, Rosario, Mendoza, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, Río Negro, Córdoba, San Juan y San Luis entre junio de 1954 y mayo de 1955. La organización también se interesó en las regiones más periféricas del país y creó la Comisión de Zonas menos Desarrolladas, que realizó conferencias en Comodoro Rivadavia y La Rioja en 1954 y auspició en marzo de 1955 el Primer Congreso Económico de la Patagonia.

El hecho de tener su principal sostén en las provincias signi-

ficó para la CGE el inconveniente de verse sometida con posterioridad a incesantes presiones para resolver los muy serios problemas económicos del interior, una situación que generó grandes tensiones entre sus miembros, cada uno de los cuales representaba una economía regional con intereses no necesariamente compatibles con los de las demás. Por ejemplo, los pequeños productores azucareros de Tucumán insistieron reiteradamente en que la CGE se dedicara a elaborar un programa que garantizara precios sostén para su industria, mientras que los productores vinícolas de Mendoza y San Juan demandaban lo mismo. En dos casos, Gelbard se negó resueltamente a embarcar a la organización en una campaña en favor de precios sostén para el azúcar, en tanto que la CGE se oponía a un paro de los productores de vino por idéntica demanda. La estructura de la CGE se ajustaba en gran medida al concepto de "comunidad organizada" de Perón. Sus tres divisiones, la Confederación de la Industria, la Confederación del Comercio y la Confederación de la Producción (agricultura), estaban organizadas en el nivel de las bases. Las federaciones provinciales elegían a las tres confederaciones nacionales, que a su vez elegían el organismo central de la CGE; la industria, el comercio y la agricultura tenían una representación igual en el comité ejecutivo, pero las federaciones también enviaban delegados propios (dos por provincia) que integraban ese comité, lo que aseguraba una influencia preponderante de las provincias. Las empresas, cualquiera que fuera su tamaño, tenían igual representación en todos estos niveles; esta situación hacía que las firmas pequeñas dominaran la organización, aunque sus fondos provenían mayoritariamente de las grandes compañías, ya que todas las empresas tenían que aportar a las arcas de la CGE el uno por mil de sus ganancias anuales. El comité ejecutivo, a su turno, integraba la Comisión Económica Consultiva del gobierno a través de su participación en la multitud de subcomités de ese organismo (precios, vivienda, comercio exterior, costo de vida, transporte, relaciones laborales y otros) para proporcionar asesoramiento empresarial sobre la política oficial. La CGE ejerció una considerable influencia en la política económica gubernamental en los últimos años de la presidencia de Perón. En 1954, por ejemplo, el Banco Central decidió autorizar las importaciones de maquinarias industriales so-

bre la base de planes elaborados en conjunto por la organización y el gobierno. Por otro lado, el federalismo, las prácticas democráticas y el apoyo en los pequeños empresarios del interior hacían que la CGE nunca se ajustara totalmente a los objetivos de Perón.

CRISIS Y DERRUMBE

El firme propósito de Perón de establecer una sólida organización empresarial no respondía estrictamente a su interés en fortalecer la base política de su movimiento. La crisis coyuntural, los serios problemas económicos de su segunda administración, también tenían mucho peso. Como ya se mencionó, su interés en disciplinar las indóciles actitudes de los empresarios quedó demostrado mejor que nunca en su conflicto con la industria textil. En un principio se asignó a la CGE la misión de conseguir que tanto los fabricantes como los minoristas de ese sector pusieran ciertos límites al alza de precios. Sin embargo, Perón se valió de la organización sobre todo para fortalecer a las empresas a fin de reducir su dependencia de los sindicatos y revertir el proceso de descenso de la productividad y aumento de las exigencias laborales. La CGE destacaba el concepto de la función social de la actividad empresarial y no actuaba de manera cínica cuando afirmaba estar profundamente preocupada por mejorar el nivel de vida de la clase obrera. Naturalmente, la prosperidad de ésta y la expansión del mercado interno se ajustaban a los intereses de los miembros de la entidad, pero había cierta auténtica simpatía por el concepto de la justicia social como instrumento de integración nacional y la gloria argentina.

No obstante, la conciliación de clases tenía sus límites. Aunque el discurso público de la CGE hacía hincapié en ideas como la "integración", una "economía social" y un "sector empresario patriótico", en sus tratos reales con el movimiento obrero la organización era un poco más convencional. Con respecto a las cuestiones salariales asumía una postura menos dura, ya que la mayoría de sus miembros dependía de un mercado robusto para sobrevivir. En cambio, las cuestiones relacionadas con los impuestos, la productividad y la actividad

fabril (esta última cada vez más importante debido al crecimiento de su sector industrial) revelaban en general que, en última instancia, su lealtad tenía como objetivo la rentabilidad de sus propias empresas. La CGE asumió una firme posición con respecto a la necesidad de compensar los aumentos salariales con una mayor productividad a fin de evitar el alza de la inflación, una postura que mantendría de manera coherente desde sus orígenes hasta el Pacto Social del gobierno peronista de la década de 1970. Sus debates y publicaciones internas revelan que las mayores críticas de sus miembros se dirigían precisamente a este aspecto de las políticas económicas del gobierno, que no lograba mantener el "equilibrio", el "orden" y la "reciprocidad" en las negociaciones de las convenciones colectivas, para ajustar los incrementos salariales a la mejora de la productividad.

A medida que pasaba el tiempo, la CGE ampliaba el alcance de sus críticas. Su sector industrial protestaba cada vez más contra el creciente poder de los sindicatos en los lugares de trabajo y objetaba, por ejemplo, que los capataces y él personal técnico tuvieran que afiliarse obligatoriamente a ellos, así como los efectos deletéreos que esa medida tenía sobre la disciplina y la productividad laborales. De manera similar, se quejaba de los abusos cometidos por los tribunales del trabajo y de lo que llamaba irónicamente "la industria del despido", que presuntamente incitaba a los trabajadores a hacerse despedir para cobrar jugosas indemnizaciones. Sus críticas no se limitaban a la actividad



'ropaganda oficial sobre la Universidad Obrera.

gremial. Pronto comenzó a oponerse al vasto conjunto de programas de acción social del gobierno y a la economía populista en general. La CGE, por ejemplo, atacó las políticas de vivienda peronistas y atribuyó al congelamiento de los alquileres la grave escasez de viviendas en el país, sosteniendo que la eliminación de esa medida era esencial si se pretendía que las empresas privadas resolvieran el problema habitacional. Ni siquiera la aparentemente sacrosanta estructura sindical peronista se salvó de las críticas, ya que la CGE propuso una revisión del sindicalismo industrial creado por Perón y su reemplazo por un sistema más flexible que permitiera la agremiación horizontal, es decir por oficios, de los trabajadores calificados.

En términos generales, Perón simpatizaba con las peticiones de las empresas y también quería doblegar el poder de los sindicatos en las fábricas e incrementar la productividad. Uno de sus primeros guiños a la industria en relación con la cuestión de la productividad había sido la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1952, que tenía su sede principal en el suburbio industrial de Avellaneda y filiales en todo el país. El objetivo de la "universidad de los trabajadores" era promover la educación científica y tecnológica y, por lo tanto, crear una fuerza laboral más calificada y presumiblemente más productiva. Según los estatutos de la universidad, la junta directiva debía incluir a industriales con posibilidades de ejercer influencia en la elaboración de los planes de estudio. Como parte de la iniciativa de Perón de fomentar la educación científica y tecnológica, el gobierno también creó el Centro Nacional de Documentación Científica y Técnica para difundir ese conocimiento en la comunidad empresarial y designó agregados de ciencia y tecnología en las embajadas argentinas de los países más desarrollados a fin de estar al corriente de los últimos adelantos en esos campos.

También fue Perón, y no la CGE, quien propuso por primera vez la convocatoria de dos asambleas para remediar los problemas que sus propias políticas laborales provocaban en los lugares de trabajo. La primera en 1954. La CGE coauspició, junto con la CGT, el Primer Congreso de Organización y Relaciones del Trabajo, realizado entre el 23 y el 28 de agosto de ese año. Para la entidad empresarial, el auspicio de la conferencia no era una medida meramente defensiva. Hacía mucho

que se interesaba en los conceptos norteamericanos de la administración científica y las reformas organizacionales, y de hecho había criticado a la UIA en muchas ocasiones, no sólo por sus prácticas monopólicas, sino también por su enfoque tradicional de la administración y su estilo paternalista, que la CGE consideraba como obstáculos para la creación de una cultura industrial moderna. Pero la intención del congreso era, en gran medida, restablecer el equilibrio de poder en el lugar de trabajo, que en esos momentos se percibía como ampliamente volcado en favor de los sindicatos. En su discurso de apertura, Gelbard expresó esta idea con cierta ambigüedad cuando declaró que el objetivo de la conferencia era alcanzar la "racionalización humanizada" de la fábrica, necesaria para aumentar la productividad y, con ello, satisfacer las demandas salariales que las empresas consideraban cada vez más gravosas. Las sesiones del congreso se dedicaron a cuestiones de relaciones industriales como la psicología industrial, los incentivos a la productividad, los programas de capacitación y la organización científica de la firma. Pese al interés manifiesto de Gelbard en la racionalización "humanizada", la principal sugerencia de la reunión fue bastante más convencional: la adopción de sistemas de trabajo a destajo cuidadosamente cronometrados para compensar las limitaciones tecnológicas de las fábricas argentinas y la caída del diez por ciento en la producción per cápita que a juicio de la CGE se había dado en esas fábricas entre 1943 y 1953.

El segundo y más célebre congreso de la productividad, el Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social, realizado entre el 21 y el 31 de marzo de 1955, también fue convocado ante la insistencia de Perón y recibido con un poco menos de entusiasmo por la CGE, que ahora dudaba de la posibilidad de implementar los planes de racionalización y productividad debido a que el Estado peronista, en su búsqueda de apoyo contra la creciente oposición a su régimen, apelaba en mayor medida a la clase obrera y los sindicatos. No obstante ello, la CGE insistió una vez más en la necesidad de restablecer el equilibrio de poder en los lugares de trabajo a fin de mejorar la productividad y superar los cuellos de botella estructurales de la industria argentina, y aceptó participar en el congreso. A lo largo de los diez días que duró la conferencia volvieron a dis-

cutirse las teorías de la administración científica y las técnicas de la reforma industrial. Como resultado de la reunión se firmó el Acuerdo Nacional de Productividad y se creó el Instituto Nacional de Productividad; este último supervisaría la implementación del primero con representantes de las empresas y el movimiento obrero que se reunirían en consulta permanente.

Contrapunto de empresarios y sindicalistas sobre la campaña de la productividad

José Gelbard, presidente de la CGE, declaró: "Cuando se dirige la mirada a la posición que asumen en muchas empresas las comisiones internas sindicales, que alteran el concepto de que es misión del obrero dar un día de trabajo honesto por una paga justa, no resulta exagerado, dentro de los conceptos que hoy prevalecen, pedir que ellas contribuyan a consolidar el desenvolvimiento normal de la empresa y a la marcha de la productividad. Tampoco es aceptable que, por ningún motivo, el delegado obrero toque un silbato y la fábrica se paralice [...] Otro factor negativo que nosotros no podemos silenciar es el del ausentismo [...] Hay que terminar con los lunes de huelga..."

Eduardo Vuletich, secretario general de la CGT, expresó: "Hacen también a la productividad quienes honradamente se han dado a la tarea de pregonar por todos los ámbitos de la patria que de nada serviría obtenerla si para ello fuera menester alterar, aunque sólo fuera en parte, la legislación de amparo que hoy tienen los trabajadores argentinos [...] Son oportunas y necesarias estas aclaraciones por cuanto en los últimos tiempos hemos podido escuchar frases duras contra un sector obrero al que se le imputan bajos rendimientos o desinterés en el desempeño de la diaria labor que ejecutan. Sostenemos que ese sector ha sido y sigue siendo lo más positivo, lo más concreto y sustancial con que cuentan nuestras producciones en el campo de la economía nacional. Se habla de ausentismo. Es indudablemente un mal que debemos y estamos dispuestos a combatir; pero, eso sí, queremos que cuando se comparen estadísticas actuales con las correspondientes a los años de la explotación oligárquica se sepa diferenciar el ausentismo culpable del socialmente justo, que resulta de la aplicación de las leyes obreras justicialistas".

Discursos en la sesión inaugural del Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social, del 21 al 31 de marzo de 1955.

Las actas del congreso, sin embargo, revelaban los verdaderos obstáculos a cualquier consenso entre el capital y el trabajo en cuestiones de racionalización y productividad. En lo que se refería a la manera de hacer que sus industrias fueran más eficientes, las sugerencias de sindicatos como los que agrupaban a los trabajadores de Luz y Fuerza, textiles y de la construcción hacían invariablemente responsable de cualquier traba a la eficiencia y la productividad a la dirección de las empresas. El sindicato de la construcción, por ejemplo, señalaba que los grandes problemas en su industria eran el empleo estacional y las subcontrataciones, y propiciaba su eliminación.

Recelosa de las intenciones de Perón y tal vez consciente de la imposibilidad de alcanzar en ese momento un equilibrio entre el empresariado y el movimiento obrero bajo su régimen, la CGE reaccionó con relativa indiferencia ante la caída del gobierno algunos meses después. No montó una huelga patronal y procuró mantener buenas relaciones con las nuevas autoridades oficiales. Una sensación general de alivio caracterizó la actitud de las clases capitalistas del país ante el fin del régimen peronista. Pocos meses antes del golpe, Aquiles Merlini, que presidía desde mucho tiempo atrás la Cámara Argentina de Industrias Metalúrgicas, había hecho una evaluación de tono característicamente pesimista de la economía nacional. Merlini señalaba que el Segundo Plan Quinquenal no había logrado crear una industria siderúrgica nacional y transmitía el malestar general existente entre los industriales del país. El gobierno de Perón había prometido mucho al empresariado y era indiscutible que había cumplido algunas de sus promesas. Pero Perón se había visto trabado por la naturaleza misma de su movimiento y su apoyo en los sindicatos. La fortaleza del componente obrero en la alianza populista peronista impedía que Perón implementara plenamente las políticas que los industriales metalúrgicos y otros sectores empresariales del país habían reclamado y que él mismo consideraba necesarias. Ciertos factores sobre los que el Presidente no tenía control, como las condiciones económicas internacionales y el deterioro de los términos del intercambio en su segunda administración, también frustraron sus planes para atraer a las clases capitalistas del país. Cuando sobrevino el final, ni la CGE ni las asociaciones sectoriales de empresas como la de la industria

metalúrgica expresaron pesar, y ni hablar de reagruparse para apoyar al régimen caido. Lo que antaño parecía una alianza prometedora había zozobrado en sus propias contradicciones, incapaz de crear una Argentina económicamente soberana o de generar la paz social entre el empresariado y los trabajadores que Perón había buscado con tanto ahínco.

Traducción de Horacio Pons

BIBLIOGRAFÍA

Ansaldi, Waldo et al.: *Argentina en la paz de dos guerras, 1914-1945*, Biblos, Buenos Aires, 1993.

Bitrán, Rafael: *El Congreso de la Productividad: la reconversión económica durante el segundo gobierno peronista*, El Bloque, Buenos Aires, 1994.

Brennan, James P.: "Industriales y bolicheros: la actividad económica y la alianza peronista, 1943-1976", en: *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, N° 15, 1997.

Castel, Pablo: *Empresariado nacional y cambios sociales*, El Ateneo, Buenos Aires, 1985.

Cúneo, Dardo: *Comportamiento y crisis de la clase empresaria*, Pleamar, Buenos Aires, 1967.

Di Tella, Torcuato: "Populismo y reforma en América Latina", en: Claudio Véliz (comp.), *Transformación de América Latina*, Fondo de Cultura Económica, México, 1969.

Freels, John William: *El sector industrial en la política nacional*, EUDEBA, Buenos Aires, 1970.

Gerchunoff, Pablo: "Peronist Economic Policies, 1946-1955", en: Guido Di Tella y Rudiger Dornbusch (comps.), *The Political Economy of Argentina, 1946-1983*, MacMillan, Londres, 1989.

Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas: *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*, Ariel, Buenos Aires, 1998.

Giménez Zapiola, Marcos y Leguizamón, Carlos M.: "La concertación peronista de 1955: el Congreso de la Productividad", en: Juan Carlos Torre (comp.), *La formación del sindicalismo peronista*, Legasa, Buenos Aires, 1988.

Lewis, Paul: *La crisis del capitalismo argentino*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1993.

Logrippo, Adelaida: *Las fuerzas económicas argentinas*, Ediciones Proinco, Rosario, 1954.

Lucchini, Cristina: *Apoyo empresarial en los orígenes del peronismo*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1990.

Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos: "Crecimiento industrial y alianza de clases en la Argentina, 1930-1940", en: *Estudio sobre los orígenes del peronismo*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1971.

Niosi, Jorge: *Los empresarios y el Estado argentino, 1955-1969*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1974.

Schvarzer, Jorge: *Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina*, CISEA/Imago Mundi, Buenos Aires, 1991.

Seoane, María: *El burgués maldito*, Planeta, Buenos Aires, 1998.

Swiderski, Graciela: "La UIA: ¿sustitución de importaciones o mercado externo?", en: Mario Rapoport (comp.), *Economía e historia. Contribuciones a la historia económica argentina*, Tesis, Buenos Aires, 1988.



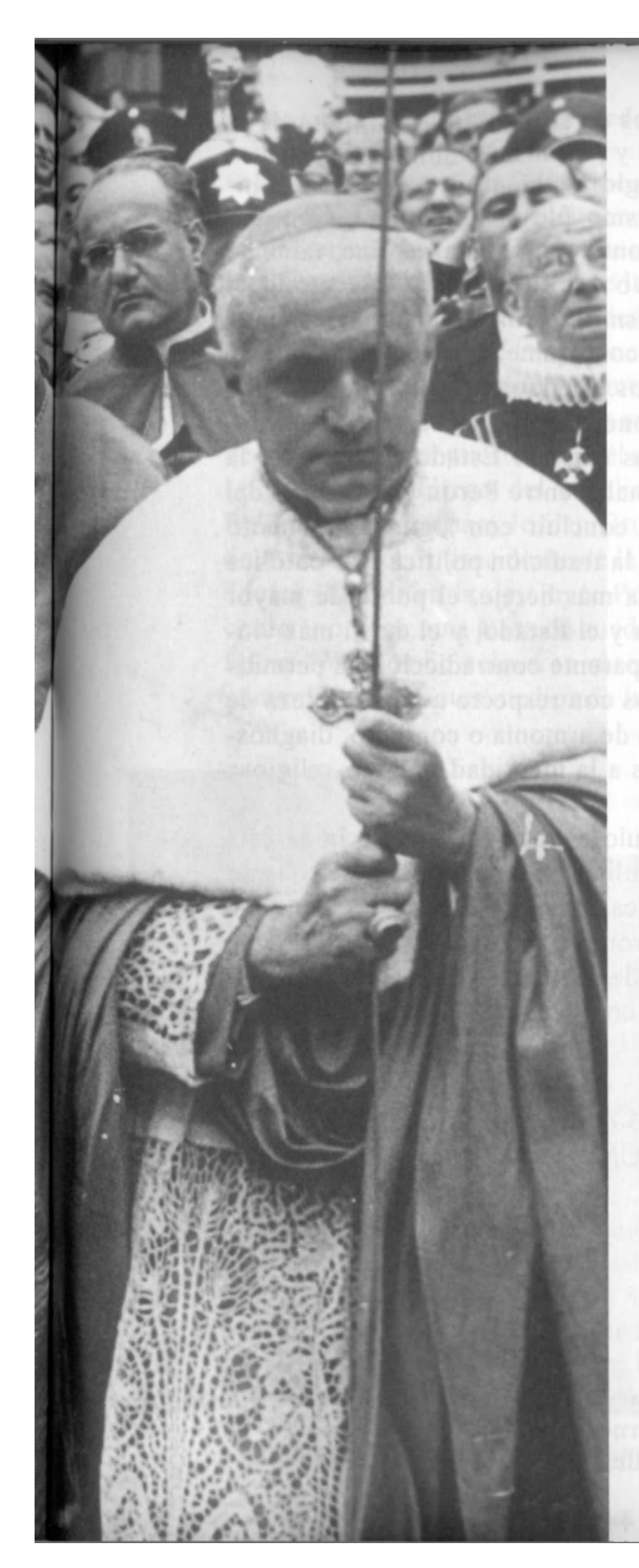
IX

El peronismo y la Iglesia Católica

por LILA CAIMARI



auguración del Congreso Eucarístico celebrado en Rosario. El presidente Perón,
vita y los cardenales Caggiano y Ruffini, 1950.



El estudio de las ideas y tradiciones políticas que confluyeron en el peronismo ha establecido respuestas relativamente firmes para algunos interrogantes sobre la naturaleza de la ideología peronista, de estatus tan polémico. Hoy sabemos bastante sobre la importancia de la formación militar de Perón, sobre los elementos que provinieron del fascismo europeo, del New Deal de Franklin D. Roosevelt, de las ideas promovidas por el Partido Socialista argentino durante los años treinta, de distintas vertientes del nacionalismo, etc. Las enumeraciones de elementos primarios de los que se nutrió el peronismo incluyen frecuentemente al catolicismo, lo cual no es sorprendente si recordamos que Perón mismo reivindicó muchas veces algunas encíclicas sociales como fuente de inspiración de su movimiento, y que éste atrajo masivamente a los militantes católicos de aquellos años.

No obstante, resulta difícil aceptar la categorización del peronismo como movimiento inspirado en el ideario católico por la simple razón de que la confluencia

de ideas sociales estuvo lejos de ser el único resultado de la asociación entre catolicismo y peronismo: el mayor enfrentamiento Iglesia-Estado del siglo también fue parte de esta intensa relación. Si el peronismo fue el movimiento político más católico de la historia contemporánea argentina, también es el que más conflictos tuvo con la Iglesia y los católicos: junto al idilio con el catolicismo, los incendios de iglesias de 1955 también forman parte, confusamente, de la memoria colectiva de los contemporáneos. Cualquiera que sea el nivel de análisis elegido —las relaciones ideológicas entre peronismo y catolicismo, o las políticas entre el Estado peronista y la Iglesia Católica, o las personales entre Perón y miembros del clero—, siempre es posible concluir con algún fundamento que el peronismo representa la tradición política más católica de nuestro país, y también la más hereje, el punto de mayor acercamiento entre la Iglesia y el Estado, y el de su más violento enfrentamiento. Esta aparente contradicción ha permitido diagnósticos muy variados con respecto a la naturaleza de ambos actores y su vocación de armonía o conflicto, diagnósticos frecuentemente ligados a la identidad político-religiosa de los autores involucrados.

El propósito de este capítulo es recorrer la historia de esta relación examinando la peculiar articulación del peronismo histórico a la tradición católica, así como algunos aspectos de las relaciones del Estado peronista con la Iglesia que pueden brindar claves para comprender el inexplicable salto de la estrecha asociación de 1945 al conflicto radical de 1955.

PERONISMO A IMAGEN CATÓLICA, IGLESIA A IMAGEN PERONISTA

Sin duda, la primera campaña presidencial de Perón generó muchas expectativas en las filas católicas mediante discursos y actos que parecían traslucir una ferviente fe religiosa, así como su adhesión a fundamentales diagnósticos de la Iglesia universal sobre los males del mundo moderno. Estas declaraciones no hacían sino reforzar la asociación de Perón con las políticas religiosas del gobierno militar del que era heredero, ya que, en sus tramos iniciales, habían generado un acerca-

miento Iglesia-Estado sin precedentes en la historia de la Argentina independiente.

En efecto, a poco de instalarse en el poder en junio de 1943, el programa de gobierno del general Ramírez había adquirido un inconfundible aire de restauración católico-nacionalista. Los síntomas más claros de que la agenda oficial debía mucho a la que el catolicismo había desarrollado durante la década precedente estaban en las opciones de reclutamiento del nuevo gobierno y en una infinidad de medidas tomadas entre fines de 1943 y marzo de 1944. Las más emblemáticas fueron una serie de intervenciones puestas bajo el control de figuras provenientes de lo más férreo del catolicismo nacionalista: Alberto Baldrich en Tucumán, Jordán Bruno Genta en la Universidad del Litoral y el ex presidente de la Acción Católica mendocina, doctor Pithod, en la de Cuyo. Por primera vez en la historia contemporánea, una masa de cuadros del Estado provenía de la Iglesia. Y éstos no sólo eran católicos de nota: había también numerosos militantes medios de la Acción Católica, que en los



Congreso Eucarístico Nacional, octubre de 1944.

años treinta había adquirido notable dinamismo alimentado por el ideal de la recristianización de la sociedad argentina. Y no faltaban miembros del clero, como el capellán Wilkinson, ideólogo del GOU y figura omnipresente en los primeros tramos del gobierno de facto.

También de la agenda católica provenían las nuevas orientaciones en el área de la educación, la más largamente codiciada para poner en marcha el programa de restauración espiritual de la nación. Los cambios más emblemáticos en este plano fueron el intento de regresar la enseñanza universitaria a los caminos de la metafísica y el tomismo, y la introducción por decreto de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, auspiciada por quien desde octubre de 1943 fue el ministro de Instrucción Pública, el escritor católico Gustavo Martínez Zuviría. A pesar de que los proyectos recristianizadores de los nuevos dirigentes no siempre coincidían entre ellos, las nuevas medidas en el terreno educativo fueron vistas como un triunfo histórico de la Iglesia sobre las fuerzas que desde 1884 habían defendido la enseñanza laica. Y, con poquísimas excepciones, tal triunfo fue recibido con alborozo en el mundo eclesiástico: los sueños de tantas décadas se transformaban finalmente en realidad.

Sin embargo, el triunfo católico no era tan rotundo como estos festejos sugerían. De hecho, las medidas introducidas en 1943 polarizaron aún más un universo ideológico ya muy tenso por el contexto internacional. Para quienes representaban la otra cara de la guerra cultural que había dividido a la sociedad desde los años treinta, esto no era más que una batalla perdida. Una batalla importante, no obstante. Como los católicos, los estudiantes universitarios, intelectuales y militantes radicales o socialistas que se oponían a la instauración de la enseñanza religiosa veían en este debate mucho más que un desacuerdo confesional. Desde su punto de vista, esto era parte de la lucha por salvar el alma nacional del autoritarismo fascista-clerical por el que la encarrilaban el régimen y sus aliados de la Iglesia. El año 1944, con la derrota de Alemania y la accidentada entrada de la Argentina en el bloque de los aliados, mostró hasta qué punto las victorias de los nacionalistas en materia de política exterior habían sido efímeras. Y cuando, en un contexto ideológico internacional de triunfo de los valores democráticos, Perón fue consagrado el heredero politico del gobierno

militar, muchos se preguntaban por el futuro de los logros católicos obtenidos en 1943.

Es, pues, en este contexto de ansiosas expectativas de un lado y otro que deben interpretarse los gestos de religiosidad que Perón hizo públicamente durante su campaña electoral. Dichas manifestaciones —como la publicitada peregrinación al santuario de la Virgen de Luján y algunos discursos electorales "católicos" de mucha visibilidad— se insertaban en el marco de una campaña concentrada en la reivindicación de la política social ya desarrollada por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Los discursos se referían casi unánimemente a la inspiración de esa obra en la doctrina social de la Iglesia Católica desarrollada en las famosas encíclicas *Rerum Novarum* y *Quadragesimo Anno* de León XIII y Pío XI. La adopción de la Doctrina Social de la Iglesia como contexto ideológico en el cual Perón insertó su obra atrajo a muchos dentro del mundo eclesiástico —en particular a quienes desde la Juventud Obrera Católica (JOC) trabajaban por la difusión de esas mismas ideas en círculos oficiales desde hacía tiempo.

Además de tener la virtud de atraer a los militantes "jocistas" y a los miles de miembros de la Acción Católica que siguieron el nacimiento del peronismo con entusiasmo, las referencias "católicas" de Perón estaban destinadas a tranquilizar a quienes temían que el nuevo movimiento de los trabajadores desembocara en algún proyecto subversivo. Si el público eclesiástico era percibido como el destinatario principal de los mensajes católicos, esto no parece evidente en el uso de esas referencias por el candidato laborista: la primera alusión de Perón a la "opinión extraordinariamente autorizada" de León XIII en cuestiones sociales no fue hecha ante una audiencia católica, sino en el contexto de su más famoso discurso "patronal", el emitido en la Bolsa de Comercio en 1944.

La carta pastoral del Episcopado del 15 de noviembre de 1945, en la que se prohibía a los fieles votar por partidos que incluyeran la enseñanza laica en su plataforma —como haría la Unión Democrática— fue interpretada por contemporáneos e historiadores como la muestra más clara del apoyo de la Iglesia oficial al candidato de los trabajadores. Un documento que definía tan precisamente el precio del apoyo eclesiástico mostraba a las claras que el Episcopado esperaba de Perón garantías



El coronel Perón saluda a monseñor De Andrea, julio de 1945.

con respecto al futuro de las ventajas recientemente obtenidas en el terreno educativo. Pero dichas demandas no suscitaban en el candidato católico más que sonrisas y evocaciones de las encíclicas. El cálculo político no era ajeno a estas evasivas: quizá para ahorrar un conflicto con sus aliados laboristas anticlericales, o para evitar promesas públicas que recordaran peligrosamente los orígenes autoritarios de su reciente trayectoria política, Perón insertó sus referencias católicas en la lógica de su discurso electoral sobre cuestiones sociales, y no en la de las demandas de la pastoral del Episcopado. Naturalmente, en contraste con la Unión Democrática —donde la defensa de la enseñanza laica era una de las raras coincidencias programáticas de radicales, socialistas y comunistas—, la naturaleza exacta de las referencias católicas de Perón parecía irrelevante. Y la agitada campaña de 1945-46 terminó de polarizar posiciones, distrayendo a unos y otros del hecho de que el candidato católico no era un candidato eclesiástico.

Los primeros años de gobierno peronista, por lo demás, dieron la razón a los miles de católicos que habían visto en Perón al líder que finalmente aplicaría los ideales defendidos y promocionados desde diversas organizaciones y publicaciones eclesiásticas o de inspiración católica. La flamante oposición antiperonista, organizada desde 1945 en torno a principios liberales y seculares, compartía la misma percepción, aunque veía el encuentro entre el nuevo gobierno y la Iglesia como un signo puramente negativo, la prueba más obvia de la esencia autoritaria del candidato de los trabajadores, que no dudaba en aliarse con una Iglesia oscuramente vinculada al saliente régimen de facto.

Si todos coincidían en este diagnóstico, para celebrarlo o deplorarlo, es sin duda porque muchos y muy visibles indicadores iban en esa dirección. Entre 1946 y 1949, el peronismo aparecía como la entidad política que más explícitamente bus-



Oscar Ivanissevich despide a un contingente de niños que parte a Mar del Plata, 10 de octubre de 1948.

caba asociarse a la Iglesia y la tradición católicas en la historia moderna argentina. Los signos más visibles de esta vinculación no provenían de Perón, que después de la victoria electoral parecía haber perdido interés en las encíclicas. Los principales voceros del peronismo católico se encontraban en la miríada de nuevos funcionarios reclutados en diversos sectores del mundo de la Iglesia: la Acción Católica, claro, que aportaría dinámicos militantes imbuidos de las ideas del catolicismo integracionista a los que el peronismo parecía brindar una oportunidad única de cristianizar la sociedad; pero también representantes de las elites provinciales de un catolicismo más tradicional, intelectuales católicos independientes y algunos ilustres representantes de la vertiente católico-hispana del nacionalismo de los años treinta.

Los temas preferidos del flamante catolicismo peronista no eran ya la inspiración de la doctrina de la Iglesia en las políticas sociales del gobierno, que después de las elecciones habían adquirido legitimidad propia y ya no necesitaban referentes externos para justificarse. La presencia del catolicismo se manifestó en una multiplicidad de imágenes, temas y símbolos rápidamente introducidos en el discurso político del flamante movimiento. Los ejemplos sobran. Basta con leer los discursos de los diputados oficialistas que en marzo de 1947 defendieron la legalización de la enseñanza religiosa definiendo al peronismo como la única entidad política que entroncaba con la tradición hispana de trescientos años de catolicismo y como el defensor del alma nacional de los intentos de secularización y ateísmo de la oposición radical. O revisar los mensajes del nuevo secretario (luego ministro) de Educación, Oscar Ivanissevich, quien se refirió a su obra como la enseñanza del "ideal de Dios, el ideal de las virtudes del Evangelio, el ideal de la patria, el ideal de la familia" y a los maestros como los "héroes de la cruz y el libro". O recorrer los documentos de Arturo Sampay, autor y promotor de la reforma constitucional de 1949, a la que presentó como la implementación de las ideas de la encíclica *Quadragesimo Anno*. Incluso funcionarios con poca conexión anterior con el universo católico hacían un esfuerzo por ponerse a tono con el clima general de comunión católico-peronista: tal era el caso del gobernador de Buenos Aires, Domingo Mercante, quien en 1948, en el marco de una



Eva Perón en el Vaticano, 1947.

importante celebración eclesiástica, sintetizó la opción de la sociedad contemporánea en los mismos términos que el cardenal Copello: "Con Cristo o contra Cristo". Sin duda más visible aún fue la temprana adopción de elementos católicos por Eva Perón, quien desarrolló la posición oficial en favor de la legalización de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y utilizó frecuentemente la autoridad eclesiástica para legitimar su campaña en favor del voto femenino. Su publicitada gira europea de 1947 también estuvo impregnada de temas e imágenes católicos tradicionales. Durante su paso triunfal por España, recibió de manos de Franco la gran cruz de Isabel la Católica, y las crónicas periodísticas de su visita al Vaticano estuvieron rodeadas de fotografías de la Primera Dama de rodillas, vestida de negro y con mantilla.

La intensa apelación al catolicismo que enmarcaba tantas iniciativas de este primer peronismo vino de la mano de un

despliegue igualmente visible a nivel de las relaciones Iglesia-Estado. La iniciativa que a ojos de todos pareció sellar la alianza entre el nuevo gobierno y el Episcopado fue la legalización de la enseñanza religiosa en la educación pública, introducida por decreto por el gobierno militar de 1943. La larga batalla parlamentaria que rodeó esta legalización, la amplia y despareja cobertura de prensa de que gozó y la euforia que la sanción de la medida finalmente produjo en el mundo eclesiástico —desde la jerarquía que se desplazó a la Casa de Gobierno a agradecer la medida al Presidente, hasta el último miembro de Acción Católica, movilizada masivamente para hacer presión sobre el Congreso durante los debates— la convirtieron en el hito emblemático del idilio entre la Iglesia y el Estado peronista.

La educación era el más obvio, pero no el único, elemento de este acercamiento. A ojos del Episcopado, la inédita expansión del ítem "Culto" en el presupuesto nacional, transfiriendo una serie de gastos institucionales de la Iglesia al Estado, era al menos igualmente grata. El número de puestos eclesiásticos mantenidos con fondos oficiales se duplicó, y el monto de los salarios tradicionalmente pagados por el Estado aumentó entre 50 y 100%. El personal eclesiástico recibió además los beneficios del aguinaldo, aplicado a toda la administración nacional a partir de 1947. En esta época el Estado prestó infinidad de servicios a la Iglesia: el pago de gastos de peregrinaciones a Europa, pasajes oficiales para delegaciones católicas en el país y el extranjero, 637 subsidios destinados a la compra de edificios y a la reparación, conservación y construcción de parroquias y residencias parroquiales, etcétera.

Sin duda los obispos también apreciaban la introducción paralela de medidas destinadas a limitar las libertades de los cultos no católicos —particularmente protestantes— que la Iglesia oficial demandaba desde hacía años. El flamante Registro Nacional de Cultos destinado a controlar las actividades de grupos religiosos que hacían proselitismo también era parte del paquete de iniciativas situadas en la línea de las políticas filoeclesiásticas del régimen militar saliente y claramente concebidas por el nuevo gobierno peronista para consolidar sus relaciones con el Episcopado.

La participación oficial en celebraciones eclesiásticas multi-

tudinarias típicas de aquellos años, tales como el Congreso Mariano de 1948, era generosa tanto en recursos como en el tiempo invertido por altas autoridades nacionales y provinciales. Las ceremonias en las que alternaban los encendidos discursos de funcionarios peronistas con los del cardenal Caggiano o Copello inevitablemente traían a la memoria de antiguos miembros del Episcopado el recuerdo del Congreso Eucarístico Internacional de 1934, en el que por primera vez un presidente de la República, Agustín P. Justo, había colaborado y participado activamente en celebraciones eclesiásticas de esa naturaleza. Que aquel acercamiento no había estado motivado por inquietudes espirituales del Presidente sino por la necesidad de adquirir nueva legitimidad en un contexto de crisis política e ideológica no era un secreto, pero tal distinción no había disminuido en nada los beneficios que el cambio había implicado para la salud institucional de la Iglesia. En 1948, el peronismo parecía querer situarse en la continuidad de la tradición de colaboración Iglesia-Estado iniciada quince años antes por Justo y recientemente retomada por el gobierno militar inaugurado en 1943.

Parece difícil exagerar el peso de esta colaboración estatal en el balance que la jerarquía eclesiástica hacía del peronismo en los primeros años. Contrariamente a la percepción de contemporáneos, la Iglesia argentina de los años cuarenta no era tan fuerte como parecía. A diferencia de Vargas, Perón nunca trató con una Iglesia con nutrido personal ni fuerte liderazgo. Es cierto que la institución había crecido mucho en tamaño e influencia en los años treinta, impulsada por la creación de la Acción Católica, el acercamiento al Estado ya mencionado, la multiplicación de diócesis y la estela de euforia dejada por el Congreso Eucarístico de 1934. No obstante, esta Iglesia así fortalecida lo era sobre todo por oposición a un largo pasado de debilidad que se remontaba a la Independencia. Los eventos de 1810 habían inaugurado una crisis que había dejado a lo que se convertiría en la Iglesia, ya marginal durante el período colonial, virtualmente desintegrada. Desprovista de liderazgo y de personal, la institución debió atravesar el siglo XIX y buena parte del XX negociando su espacio con gobiernos que alternaban entre el regalismo y el franco anticlericalismo.

En los años cuarenta, este Episcopado liderado por el carde-

nal Copello —principal responsable de la recuperación institucional de la década precedente— tenía aguda conciencia del enorme crecimiento del espacio y la influencia de la Iglesia en la sociedad argentina y de la nueva legitimidad del catolicismo como fuente de modelos para esta misma sociedad. Pero, ejerciendo el oficio de larga duración por definición, los obispos también sabían que esta fuerza era relativamente reciente y que su consolidación dependía en gran medida de la continuidad del interés de futuros dirigentes estatales en esta asociación. Por lo demás, la nueva importancia del catolicismo de los años treinta como fuente de modelos sociales y políticos no producía automáticamente la recuperación —por definición lenta— de los mecanismos de producción y reproducción de la institución eclesiástica. En otras palabras: si bien la infraestructura básica de la institución experimentaba innegables mejoras —en este sentido la multiplicación de diócesis, también realizada durante el gobierno de Justo, había sido más crucial que el Congreso Eucarístico—, ésta seguía todavía lejos de los espectaculares avances simbólicos de la religión en el espacio público.



El presidente Perón se entrevista con monseñor Copello.

En este contexto, la consolidación de logros corporativos era una de las preocupaciones primordiales de los líderes de la Iglesia de aquellos años. A diferencia de Miguel De Andrea, cuyo acceso a la jefatura de la Iglesia nacional había sido vetado por Roma, el cardenal Copello era una figura de envergadura política limitada. Su obra en la Iglesia no fue por ello menos decisiva. Con dotes administrativas excepcionales y un perfil más exclusivamente corporativo que el del carismático —pero también polémico— De Andrea, Copello se concentró en la expansión de parroquias y seminarios, la búsqueda de apoyo económico y el reclutamiento de nuevos militantes en las organizaciones dependientes del Episcopado. Esta obra se desarrolló a veces a un precio que ciertos sectores del catolicismo criticaban, incluso antes del controvertido acercamiento al Estado peronista. El evidente apoyo de la jerarquía eclesiástica debe comprenderse entonces en este contexto y en el marco del tipo de liderazgo de la institución, que sin duda veía en la primera evolución del peronismo un signo prometedor para la salud institucional de la Iglesia.

Sin embargo, tanto Perón como el Episcopado pagaban un precio alto por este acercamiento. Los obispos sacrificaban alianzas tradicionales, como la que había unido a la Iglesia a las grandes familias que lideraban la Sociedad de Beneficencia de la Capital, ahora intervenida por Armando Méndez San Martín, funcionario peronista con sólida reputación anticlerical. Y cuando una minoría de militantes católicos demócratas, o miembros aislados del clero, denunciaron a esta dirigencia eclesiástica que vendía la independencia institucional "por un plato de lentejas", el cardenal Copello desplegó el más crudo autoritarismo para silenciar a los rebeldes. Durante los años del idilio, los católicos antiperonistas no tenían un espacio legítimo en la Iglesia y debían salir del mundo católico para encontrar aliados políticos. Por su lado, Perón también debía hacer malabares para mantener disciplinadas a sus bases laboristas, que provenían de una larga tradición anticlerical y manifestaban ruidosamente su descontento ante las concesiones del candidato de los trabajadores a esta Iglesia "oligarca".

Estos matices, sin embargo, no eran parte de la percepción del público en general. El peronismo había llevado hasta su máximo punto el apoyo material y simbólico del Estado a la

expansión corporativa de la Iglesia, así como a su influencia en el aparato estatal. El despliegue publicitario con el que los medios oficiales rodearon tal apoyo brindó todos los elementos para que la imagen de colaboración fuese inquebrantable. Sin saberlo, quienes promocionaban el acercamiento entre la institución eclesiástica y el Estado estaban preparando el terreno para que las posteriores acusaciones oficiales contra la Iglesia "materialista" pareciesen plenamente justificadas, sobre todo a ojos de muchos peronistas que lo habían seguido con más resignación que orgullo.

Hacia 1949, la enorme mayoría de partidarios y opositores del peronismo, católicos y anticlericales, estaban convencidos de que, para bien o para mal, el gobierno y la Iglesia trabajaban en estrecha colaboración. Peronismo y catolicismo estaban ligados por infinidad de lazos, espirituales y materiales.

LAS TRAMPAS DE LA FE

Como sabemos hoy, el peronismo resultó ser una entidad mucho más compleja que la expresión política del ideario católico, nacionalista o laborista, o que la combinación de las diversas tradiciones en las que Perón pudo haberse inspirado. Un aspecto poco conocido de esta original apropiación de tradiciones preexistentes reside en la peculiar relación ideológica entre peronismo y catolicismo. Los primeros signos de un punto de vista peronista sobre la religión diferente del discurso católico-peronista aparecieron, curiosamente, durante los primeros tiempos. Pasarían varios años hasta que el cambio fuese integrado al centro del discurso oficial y que el aparato partidario lo radicalizara y magnificara, haciéndolo visible a ojos de todos. Como veremos, esta demora permitiría que el peronismo desarrollara simultáneamente proyectos contradictorios con respecto al papel de la Iglesia, poniendo en marcha un dispositivo letal para las relaciones entre el Estado y la Iglesia y complicando irreversiblemente la situación de los militantes católicos que habían optado por el peronismo.

La gran fiesta católico-peronista de los años cuarenta tenía un gran ausente, que en su momento no fue considerado tal. Perón mismo parecía ajeno a la atmósfera creada por las ini-

ciativas católicas de su gobierno, a las que los nuevos funcionarios peronistas de raíz católica imprimían tanto fervor. Si bien las medidas ya mencionadas mostraban que el Presidente se preocupaba por estar a la altura de las expectativas que católicos y dirigentes eclesiásticos habían depositado en él, dejaba que otros llevaran a cabo su parte del cumplimiento de un tácito pacto electoral con la dirigencia eclesiástica. Perón no fue parte visible de las iniciativas católicas más populares de este período. Su atención estaba concentrada en temas más apremiantes: la organización de un nuevo gobierno, la problemática peronización del partido que lo había llevado al poder, el encuadramiento de los sindicatos, la nacionalización de los servicios públicos, etcétera.

La campaña por la legalización de la enseñanza religiosa fue delegada en manos de Eva Perón y funcionarios identificados con el mundo católico, además de las huestes de la Acción Católica y la prensa eclesiástica. Cuando los jefes del Episcopado se trasladaron para agradecer personalmente la iniciativa al Presidente, éste no se refirió a las ventajas de la ley que sus diputados católicos habían defendido como una opción vital para el futuro argentino, sino a la inspiración de su histórica obra social en la Doctrina Social de la Iglesia. La interpretación católica de la reforma constitucional de 1949 fue elaborada por uno de los ilustres peronistas reclutados en las filas eclesiásticas, Arturo Sampay, y no por Perón, cuyos discursos de lanzamiento de la reforma hablaban de justicialismo, no de catolicismo.

La única ocasión en la que el Presidente tuvo una iniciativa que lo involucró personalmente en un evento eclesiástico en los años del "idilio" fue la organización de una ceremonia en honor al obispo de Resistencia, monseñor De Carlo, a quien Perón deseaba manifestar su reconocimiento por la labor social desarrollada en su diócesis. Este evento —planeado para 1947 pero finalmente realizado en 1948 debido al pedido de De Carlo de que varios párrafos del discurso presidencial fuesen modificados— sería justamente el primero que revelaría los síntomas de la futura separación entre el peronismo y el catolicismo.

El elogio que Perón hizo de monseñor De Carlo, pronunciado en un discurso ante altos dignatarios de la Iglesia, adquirió

Perón en favor de otro catolicismo

"[...] Declaro pues que mi fe católica me pone dentro de la exigencia constitucional. Quiero también señalar que siempre he deseado inspirarme en las enseñanzas de Cristo. Conviene destacar esta dualidad, porque al igual que no todos los que se llaman demócratas lo son en efecto, no todos los que se llaman católicos se inspiran en las doctrinas cristianas. Nuestra religión es una religión de humildad, de renunciamiento, de exaltación de los valores espirituales por encima de los materiales. Es la religión de los pobres, de los que sienten hambre y sed de justicia, de los desheredados; sólo por causas que conocen bien los eminentes prelados que me honran escuchándome, se ha podido llegar a una subversión de los valores y se ha podido consentir el alejamiento de los pobres del mundo para que se apoderen del templo los mercaderes y los poderosos y, lo que es peor, para que quieran utilizarlo para sus fines interesados."

Discurso del presidente Perón ante el Episcopado argentino en el homenaje a monseñor Nicolás De Carlo, 10 de abril de 1948.

la forma de una definición del perfil de obispo ideal. Según el Presidente, los mejores obispos eran los que estaban más preocupados por procurar el bien del pueblo que por acumular beneficios materiales para la Iglesia; los que usaban el dinero obtenido del Estado para construir barrios obreros —tal había sido el caso de De Carlo— en lugar de palacios arzobispales. Y la mejor Iglesia era la que se despojaba de sus bienes y optaba por el camino del pueblo que el peronismo estaba liderando en la sociedad argentina. El mensaje presidencial terminaba con una amonestación abierta dirigida al clero: "He querido y he logrado que los trabajadores reciban retribuciones justas, y en mis esfuerzos a tal fin encaminados —que no representan un objetivo político sino social— me habría gustado alcanzar la colaboración del Episcopado, como espero obtenerla en adelante. [...] Es mejor y más conveniente para la vida del Estado, como para la de la Iglesia, volver a las costumbres sencillas".

Este mensaje no era simplemente el fruto de un exabrupto pasajero. Con motivo de la visita de Eva Perón al Vaticano,

Perón había enviado una carta a Pío XII en la que exponía similares quejas sobre la tibieza evangélica del clero nacional, que a su juicio se notaba en la poco entusiasta colaboración de los prelados con la obra social de su gobierno. La implicación de varios sacerdotes en el seudoatentado contra Perón, que derivó en el encarcelamiento de Cipriano Reyes en septiembre de 1948, reveló una inesperada animosidad anticlerical en la prensa peronista. Usando argumentos anticlericales clásicos, diversos artículos criticaron entonces la hipocresía y la dudosa moral privada de los curas en cuestión.

Sin duda, opacado por la abrumadora evidencia del gran espacio otorgado al catolicismo en el proyecto peronista y por la visibilidad que los católicos tenían en ese proyecto, el impacto de estos incidentes fue insignificante. Sólo más tarde —cuando el peronismo ya estuviera firmemente establecido en el poder y su identidad mejor definida— estos "deslices" se convertirían en el único discurso religioso del oficialismo.

Una vez que Perón impuso su poder sobre la inicial coalición formada a su alrededor para las elecciones de 1946, su objetivo esencial fue un largo y vigoroso trabajo de organización y expansión del Estado para encuadrar a la sociedad argentina en organizaciones unánimemente peronistas. Este proyecto no era nuevo: desde los inicios de su gobierno, Perón se había referido a la necesidad de lograr la unidad en el seno de la comunidad nacional mediante el consenso alrededor de ciertos valores primordiales que todos debían compartir. Dichos valores fueron formulados en discursos presidenciales, libros y panfletos, constituyendo una Doctrina Nacional a la que Perón se refería más insistentemente a medida que su poder se consolidaba. El Estado tenía un papel esencial en este proyecto de unificación espiritual, y alrededor de 1950 los resortes de este Estado ya estaban firmemente controlados por Perón.

A medida que su situación en el poder se afirmaba y que el proyecto de unificación espiritual se hacía posible, Perón dejó de presentarse como el continuador de tradiciones nacionales preexistentes. Si en 1945 éstas podían brindarle legitimidad en el momento de construcción de una identidad política todavía precaria, en 1950 las referencias a fuentes de inspiración no peronistas constituían innecesarios obstáculos al proyecto de unificación espiritual, máxime si dichas fuentes estaban bien

definidas y estructuradas y eran, por ende, difícilmente manipulables. El peronismo de los años cincuenta, ya consolidado en el aparato del Estado, dejó de presentarse como un nuevo capítulo en la línea de tradiciones sociales, políticas o ideológicas pasadas, para aparecer como la primera entidad política capaz de *romper* con esas tradiciones.

La evolución de las referencias religiosas en el universo peronista es un ejemplo, entre otros, de este cambio más amplio. En 1950, Año del Libertador General San Martín, la celebración de los símbolos y fiestas peronistas, cuya forma había madurado considerablemente desde el 17 de octubre de 1945, fue más espectacular que nunca. Uno de estos cambios había sido, precisamente, la eliminación de las misas de campaña celebradas como parte de los festejos peronistas de los primeros años. En 1950 las relaciones entre el Estado y la Iglesia se enfriaron notoriamente, enfriamiento esta vez percibido por muchos contemporáneos. El inicio de la deserción de cuadros católicos del peronismo también data de esta época. En 1950, finalmente, se desarrolló un nuevo discurso religioso oficial: el "cristianismo peronista", no sólo definido como una entidad independiente del catolicismo sino, tácita y a veces explícitamente, contra la tradición católica. En los años siguientes las formas de esta separación se multiplicarían y su intensidad llegaría a la exasperación.

CRISTIANISMO DE IGLESIA Y CRISTIANISMO DE ESTADO

La ruptura con la tradición católica era en realidad sólo un aspecto de la nueva versión peronista de la religión, el "cristianismo peronista" promovido por el Estado. Definido como una religión popular, desinteresada de las formas pero fiel a la esencia social del mensaje cristiano, era presentado como el remedio a los antiguos males provocados por una Iglesia mundana y una religiosidad formal desligada del pueblo. De naturaleza esencialmente popular —y en este sentido, parte de una transformación que el peronismo introdujo en el lenguaje público en general—, este discurso religioso tomaba argumentos clásicos de ese anticlericalismo que critica a la institución y a

sus líderes en nombre de una vuelta a los principios olvidados del cristianismo original. La novedad en este caso no residía entonces en la naturaleza de los argumentos sino en el cambio de las reglas del juego: antes en el campo religioso, la legitimidad cristiana había sido desplazada a la esfera política. El "cristianismo peronista" era mejor porque era más puramente cristiano que el catolicismo de la Iglesia pero, sobre todo, porque era peronista. Y eran los líderes del peronismo, no los de la Iglesia, quienes definirían el buen cristianismo, así como a los buenos y malos cristianos.



Propaganda oficial de enseñanza religiosa.

Perón mismo marcó el tono de los nuevos tiempos, volviendo cada vez más a menudo sobre la idea de que la Iglesia argentina estaba dominada por un clero concentrado en intereses puramente materiales y que creyentes católicos profesaban una religión formal y superficial. Progresivamente, sus acusaciones dejarían de ser alusiones aisladas, para ser absorbidas y desarrolladas en el marco del nuevo discurso religioso partidario.

El Congreso Eucarístico celebrado en Rosario en octubre de 1950 fue un revelador de la nueva apropiación peronista de referencias católicas, así como de las relaciones institucionales con la Iglesia. En esta ocasión, el Episcopado encontró un gobierno poco dispuesto a colaborar. De hecho, la prescindencia oficial en la organización del evento rayaba en el sabotaje. Tal vez disgustados por la llegada del legado papal tres días después de la gran celebración del 17 de octubre, que le había evitado a monseñor Ruffini verse involucrado en un acto peronista multitudinario y cargado de símbolos autocelebratorios, Perón y Evita eligieron esa semana para irse de vacaciones,

delegando la recepción del legado en manos de funcionarios menores. El cardenal, por su parte, no dejó de mencionar tal desaire en el breve discurso que pronunció a su llegada al país. Mientras tanto, la prensa oficial mantuvo el importante evento católico en la más absoluta discreción. Ministros que habían tenido un papel destacado durante el Congreso Mariano de 1947 recibieron órdenes del jefe de protocolo de no participar en la organización del evento.

La reticencia oficial a colaborar con la Iglesia debe ser explicada dentro del contexto del deterioro reciente de las relaciones entre Perón y los medios católicos. Pocos días antes del Congreso Eucarístico, un acto espiritista organizado en el Luna Park bajo la consigna "¡Jesús no es Dios!", se abrió con el himno nacional, el homenaje al Libertador y una carta de adhesión al acto del Presidente y su esposa. Grupos de jóvenes católicos comenzaron entonces a gritar y a tirar panfletos, transformando la asamblea espiritista en una demostración de fuerza de la ACA que terminó con manifestaciones callejeras y varios arrestos. Significativamente, el incidente fue totalmente ignorado por los medios oficiales, absortos entonces en los preparativos de las ceremonias peronistas del Día de la Lealtad. Esta omisión potenció la reacción en el mundo eclesiástico. Todas las iglesias de la arquidiócesis organizaron actos de reparación de la "horrible blasfemia", actos inmediatamente anteriores a los inicios del gran encuentro católico de Rosario. Sin saberlo, los militantes que gritaban "¡Jesús es Dios!" en los principales actos del congreso estaban creando la primera consigna católica antiperonista.

El auspicio de Perón a un evento tan controvertido fue en su momento explicado como resultado de sus propias inquietudes espiritistas o de la influencia de miembros anticlericales de su gabinete. En verdad, la explicación remite a los caminos de la política, no los de la religión. Algunas semanas antes del acto del Luna Park, en una reunión de gabinete, el Presidente criticó la iniciativa del jefe de policía, que con celo católico ya anacrónico había dispuesto la clausura de los centros espiritistas de la Escuela Científica Basilio de la capital. Según afirmó Perón en esa ocasión, estos centros eran todos peronistas, y cerrarlos equivalía a clausurar unidades básicas, por lo que ordenó su reapertura inmediata. En este contexto, su decisión de

apoyar la asamblea espiritista puede haber sido un gesto de reparación más que una adhesión al culto en sí. Por cierto, esto no significa que ignorara el carácter irritativo de la iniciativa entre la comunidad católica. Que tal consideración no lo detuviera era en sí una muestra del deterioro de sus relaciones con los medios católicos.

Si el incidente espiritista había cambiado la imagen de Perón ante muchos militantes de la Iglesia, las cosas tampoco eran plácidas en las relaciones entre las cúpulas. Las instrucciones enviadas por la Nunciatura a la Presidencia, con detalles protocolares sobre la recepción al nuncio papal, tuvieron la virtud de irritar a Perón, poco acostumbrado a recibir órdenes, máxime si provenían de una institución ligada a la aristocracia católica, ganada al antiperonismo desde el principio.

El Congreso Eucarístico de 1950 reveló entonces el cambio profundo de la marea: mostró el inicio de una fuerte identidad católica opositora, y el progresivo retraimiento del Estado como garante de la hegemonía del catolicismo en la sociedad argentina; 1950 fue también, justamente, el primer año de la reducción de los fondos públicos destinados a las partidas del ítem culto en el presupuesto nacional. El evento proporcionó asimismo una ocasión para tomar el pulso del estado de las ideas sobre la religión del líder peronista. En un mensaje emitido en el congreso, al que Perón asistió a último momento y a regañadientes, el Presidente se refirió a la religiosidad católica en términos francamente peyorativos: "Es muy fácil someterse a los dictados de una religión si en ellos hemos de cumplir satisfactoriamente sólo las formas; pero es difícil una religión cuando uno trata de cumplimentar el fondo [...] Yo creo que ser un buen cristiano no es sólo cumplir con las formas de los rituales religiosos. No es un buen cristiano aquel que va todos los domingos a misa y hace cumplidamente todos los esfuerzos para satisfacer las disposiciones formales de la religión. Es mal cristiano cuando, haciendo todo eso, paga mal a quien le sirve y especula con el hambre de los obreros de sus fábricas para acumular unos pesos al final del ejercicio".

Aparentemente, para Perón, el único cristianismo verdadero era el peronista: "[...] nosotros (los peronistas) no solamente hemos admirado y admiramos la liturgia y los ritos católicos sino que admiramos y tratamos de cumplir esta doctrina [...]

Por eso, compañeros, el peronismo, que quizás a veces no respeta las formas pero que trata de asmilar y cumplir el fondo, es una manera efectiva, leal y honrada de hacer el cristianismo, por el que todos nosotros, los argentinos, sentimos inmensa admiración. [...] Queremos ser cristianos en nuestras obras y no por la ropa que nos ponemos ni por los actos formales que realizamos, y también por ello, compañeros, nos hemos puesto a la obra de difundir nuestra doctrina".

El potencial anticlerical de las afirmaciones de Perón era evidente. A través de su líder, el peronismo ya no se presentaba como el continuador de la tradición católica, que en los discursos oficiales posteriores comenzó a aparecer ajena al espíritu justicialista. Precisamente, el peronismo proclamaba ahora constituir el remedio a los males causados por esta tradición llena de vicios, mediante el redescubrimiento del esencial mensaje cristiano, finalmente rescatado del olvido al que lo había condenado la Iglesia. Así, mucho antes de la explosión del escandaloso conflicto Iglesia-Estado de 1954-55, el peronismo desarrollaba un discurso religioso que incluía como parte esencial un diagnóstico negativo con respecto al clero y los católicos. Por supuesto, este cambio no era el fruto de vaivenes espirituales del Presidente, sino más bien una muestra de su irritación al ver que el mundo católico daba cada vez más espacio y visibilidad a los adversarios del peronismo, y que el Episcopado había hecho poco y nada para revertir esta tendencia. La indignación que esto producía en Perón, aun en la época en que los católicos antiperonistas eran una minoría claramente marginada por las autoridades de la Iglesia, no es un secreto. Sus repetidos pedidos al Episcopado para que "pusiera orden" en la institución encuadrándola explícitamente en el proyecto peronista provenían de una fundamental falla en su interpretación de los códigos y prácticas eclesiásticos: el Episcopado había apoyado el proyecto peronista, pero la naturaleza misma de la institución eclesiástica hacía imposible una peronización como la de otros ámbitos de la sociedad. Esta resistencia fue interpretada por Perón como un signo de la ingratitud con que la Iglesia recibía los beneficios que le había proporcionado su gobierno en los primeros años. Una vez confirmado este diagnóstico, el Presidente comenzó a referirse al clero como una corporación ingrata con costumbres pedi-

güeñas. El peronismo buscaría otro espacio y otros agentes más propicios para desarrollar su concepción de la religión.

En años siguientes, la disociación entre el universo peronista y el eclesiástico se desarrolló de muy diversas maneras. Naturalmente, los voceros del nuevo mensaje religioso peronista ya no provenían de la Iglesia: los militantes católicos estaban desertando de este proyecto que había revelado ser algo muy distinto de lo imaginado en 1945. Los que decidieron quedarse en el peronismo, por su parte, debieron enfrentar la difícil opción entre una u otra lealtad. La nueva religión era predicada por Perón y Evita, en primer lugar, y luego por funcionarios a quienes esta atmósfera permitía dar rienda suelta a un anticlericalismo que precedía al descubrimiento del "cristianismo peronista"; o por católicos que, como Raúl Mendé, el secretario de Asuntos Técnicos y director de la Escuela Superior Peronista, adaptaron su léxico eclesiástico a la nueva fe.

En sus últimos meses de vida, Eva Perón contribuyó a definir el nuevo mensaje religioso del peronismo y a consolidar la imagen negativa del clero. En el libro que publicó con su nombre en 1951, *La razón de mi vida,* los nuevos temas cristiano-peronistas —el rescate de los principios "olvidados" del cristianismo original, las analogías entre la doctrina de Perón y la de Jesucristo, la oposición entre cristianismo "real" de los peronistas y cristianismo "formal" de los que van a misa, la referencia a la Iglesia como vil centro de poder, etc.— fueron desarrollados profusamente. Y a medida que se acercaba el final, Eva Perón radicalizó los términos políticos de la nueva religión, mediante mensajes radiales que construían la definición peronista de la Navidad como la fiesta de los humildes, y paralelos entre los pastores de Belén y los descamisados de Perón. La ola de religiosidad popular que rodeó su muerte era un signo más importante aún de los nuevos tiempos: las oraciones masivas en las calles y las peregrinaciones al santuario de Luján nacieron fuera de las iniciativas de la Iglesia oficial. El Congreso Eucarístico de 1934, que había reunido muchedumbres en oraciones provocadas y controladas por la jerarquía católica, parecía muy lejos en 1952. Las oraciones populares de la Argentina peronista prescindían de las autoridades de la Iglesia y eran dirigidas por conocidos curas peronistas, como Hernán Benítez o Virgilio Filippo, que habían renuncia-

do a su carrera en la Iglesia para abrazar públicamente el proyecto justicialista. La muerte de Eva reveló que el monopolio eclesiástico de las movilizaciones religiosas masivas era cosa del pasado.

La razón de mi vida, convertido en lectura obligatoria en todas las escuelas del país en 1952, permitió la entrada de temas "cristiano-peronistas" en la educación pública, compitiendo directamente con los cursos de catolicismo "eclesiástico" supervisados por el Episcopado e impartidos en las clases de religión. Ocho años después de la polémica imposición de la enseñanza religiosa obligatoria, y cuatro después de su publicitada legalización por el gobierno peronista, era evidente que dichas clases no habían colmado las expectativas de los católicos. Los cursos de religión languidecían en medio de quejas con respecto a su subordinación administrativa en el Ministerio de Educación, negligencia crónica de las autoridades escolares que permitían la asistencia irregular de los alumnos, el nuevo celo del Estado por defender los derechos de los alumnos no católicos y la transmisión rutinaria de los contenidos. En el contexto de peronización enérgica de la educación impulsada por el Segundo Plan Quinquenal, el catolicismo era, cada vez más, un elemento subordinado a la visión peronista del mundo, abrumadoramente dominante en los contenidos de la educación pública.

Otra de las vías por las que el "cristianismo peronista" conquistó las escuelas fue la ola de nuevos libros de lectura introducidos en 1953, famosos en la mitología antiperonista por su poco sutil contenido propagandístico. Un aspecto menos conocido de tales textos es que reflejaban fielmente las nuevas ideas peronistas sobre la religión. Más que una figura sobrenatural, Cristo era presentado como un líder social, cuyos orígenes humildes eran enfatizados y cuyo mensaje permitía numerosos paralelos con la obra de Perón y Evita. El cristianismo era definido como una doctrina de los pobres y débiles, y la Virgen de Luján, de la que Perón era públicamente devoto, "ensalzó a los humildes y humilló a los soberbios para enseñarles el camino de la humildad". Incluso el nuevo interés del peronismo por los derechos de los no católicos aparecía representado mediante lecturas que enseñaban el respeto de los católicos hacia otras religiones, un logro

más de la justicia social de Perón. Como es sabido, estos libros también incluían imágenes mágico-religiosas de Evita: Eva-hada, Eva-ángel, Eva-espíritu omnipresente, etc. Los textos, sin embargo, eran menos imaginativos que los dibujos y constituían en su mayoría estímulos a la oración nocturna, inatacables desde el punto de vista de la ortodoxia católica: Eva había hecho el bien en este mundo y ahora velaba por los niños desde el más allá.

La Escuela Superior Peronista, creada en 1951 para desarrollar la Doctrina Nacional y formar cuadros partidarios, proporcionó otro espacio para el desarrollo conceptual del cristianismo peronista. Los manuales de Doctrina Peronista escritos por el director de dicha escuela y antiguo militante católico, Raúl Mendé, y los programas de Ética y Filosofía peronistas, escritos por el ex jesuita Hernán Benítez, describían en claros términos la naturaleza "práctica y popular" de este cristianismo "de fondo y no de forma", heredero directo del mensaje social de Cristo.

UNA CRISIS EXPLICADA PERO INEXPLICABLE

Entre fines de 1954 y mediados de 1955, el gobierno peronista y la Iglesia Católica se vieron envueltos en un conflicto de proporciones escandalosas. Luego de varias semanas de críticas crecientes al clero por parte de la prensa y dirigentes oficiales, Perón mismo tomó la iniciativa de las hostilidades. En una reunión con los gobernadores de provincias y territorios en la quinta presidencial de Olivos, el Presidente se refirió abiertamente a un tema al que venía aludiendo



Portada de El hada buena*, libro de lectura de Clelia Gómez Reynoso.*

menos explícitamente desde hacía un tiempo: "Algunos han creído que en esto se trata de una cuestión de la Iglesia o de una cuestión de los estudiantes, o se trata de una cuestión de otro orden. No hay tal cosa. Aquí se trata de una cuestión política [...]. Esta vez parece que [los políticos de la oposición] han elegido otros lugares para preparar esta misma revolución, con la que vienen soñando desde hace diez años. La asociación Acción Católica Argentina, que es una asociación de orden internacional, también, sin duda, contará en su seno con antiperonistas. Hay un montón de antiperonistas que giran a la organización con toda hipocresía, porque van a muchas reuniones y dicen: 'Yo no vengo en nombre de la Acción Católica', pero actúan en nombre de ella. A ése de la Acción Católica es a quien nosotros tenemos que observar y tener en cuenta. De la misma manera ocurre con el clero. ¿Qué es el clero? Es una organización como cualquier otra, donde hay hombres buenos, malos y malísimos reunidos con altos dignatarios de la Iglesia [...]"

Lo que pareció al principio una iniciativa desconcertante del Presidente se convirtió de inmediato en una escalada mayor. Todo el aparato del partido gobernante fue puesto en movimiento para secundar las denuncias del líder. La CGT decretó un paro de tres horas para el 23 de noviembre, coincidiendo con un gran acto público convocado en el Luna Park. Allí, las críticas de los oradores a la Iglesia —sobre todo las del vicepresidente Teisaire, la presidenta de la rama femenina, Delia D. de Parodi, y el secretario de la CGT, Vuletich— alcanzaron niveles de retórica inéditos. Pronto se pasó de las declaraciones a las medidas concretas: decenas de sacerdotes fueron arrestados con excusas diversas y cinco feriados católicos fueron eliminados del calendario. En pocas semanas, el Ministerio de Educación desmontó el dispositivo que garantizaba el espacio del catolicismo en las escuelas públicas. A esto siguió una espiral de iniciativas parlamentarias: ante el estupor de los diputados opositores —que en 1947 habían tenido que defender el laicismo frente a sus adversarios católico-peronistas—, los legisladores justicialistas pasaron del debate sobre la igualdad de hijos legítimos e ilegítimos a la legalización del divorcio, la supresión de la enseñanza religiosa y, finalmente, un proyecto de reforma constitucional destinado a separar la Iglesia y el Estado.

Los católicos no tardaron en reaccionar. Ante la imposibilidad de publicar sus opiniones, organizaron una efectiva campaña de panfletos que transmitían información extraoficial sobre el conflicto, a la vez que articulaban las primeras explicaciones del fenómeno. A pesar de los esfuerzos por detener la escalada de la crisis, los obispos se vieron atrapados entre la ofensiva peronista y la presión de los cuadros católicos enfurecidos que esperaban directivas para defender su fe. En esta situación de debilidad, el Episcopado condenó cada vez más abiertamente las embestidas oficiales en repetidas pastorales contra la persecución religiosa. Paralelamente, la reacción católica fue amplificada por el apoyo encontrado en otros sectores de la sociedad y mostró su fuerza en la procesión del Día de la Virgen el 8 de diciembre de 1954 y, sobre todo, la de Corpus Christi el 11 de junio de 1955, ambas organizadas por canales informales contra las disposiciones del Ministerio del Interior. Esta última procesión, que finalizó con incidentes —la quema de una bandera nacional por grupos no identificados—, fue seguida pocos días después por la expulsión de un obispo presente en las ceremonias y por el bombardeo de la Casa Rosada por aviones de la Marina el 16 de junio, que provocó cientos de víctimas. Esa noche, grupos de jóvenes incendiaron las iglesias principales del centro de Buenos Aires y la Curia metropolitana.

A pesar de toda la información que existe sobre innumerables incidentes del conflicto Iglesia-Estado ocurrido entre noviembre de 1954 y junio de 1955, no hay consenso entre los historiadores con respecto al origen de tal explosión. La primera gama de causas posibles fue ofrecida en los numerosísimos testimonios de los protagonistas y testigos del conflicto. Perón mismo se refirió muchas veces al conflicto, aunque sus explicaciones cambiaron de acuerdo con el estado de sus alianzas políticas. Intentando minimizar su responsabilidad en el episodio, acusaba alternativamente a miembros de la Iglesia local que se metían en política, a una ofensiva pastoral internacional del Vaticano promoviendo movimientos demócrata-cristianos o a oscuras conspiraciones masónicas para enfrentar a la Iglesia y el peronismo. Algunos autores peronistas intentaron asimismo exculpar a Perón de su responsabilidad en la crisis, poniendo el peso de las explicaciones en las, para ellos,

malas influencias sufridas por el Presidente en sus últimos años en el poder; el conflicto termina siendo atribuido a la presencia contingente de ciertos funcionarios anticlericales.

No obstante, fueron los autores antiperonistas quienes más se ocuparon de analizar el conflicto, del que naturalmente obtenían más satisfacciones que sus adversarios caídos en desgracia. Nacionalistas católicos como Julio Meinvielle vieron el ataque a la Iglesia como la prueba final de la naturaleza perversa del peronismo, que mostraba así su tendencia comunista combinada con elementos de una conspiración judeo-masónica. Otras explicaciones, sin embargo, hicieron mejor carrera y fueron desarrolladas de diversas maneras: la decadencia moral del gobierno, el autoritarismo de un régimen que había intentado subordinar a la Iglesia, el espacio otorgado por Perón a diversas sectas protestantes, la irritación episcopal ante el culto a Eva Perón, el poder creciente de funcionarios masones, la cortina de humo para ocultar oscuros negocios con la Standard Oil, el desafío que el gobierno percibió en la creación de un Partido Demócrata Cristiano en 1954, los cambios de humor de Perón o la acumulación de estos y otros problemas. Las posibles fuentes de tensión mencionadas por testigos de muy diversos orígenes ideológicos parecen no tener fin, aunque el paso de dichas causas al efecto —en otras palabras, del Partido Demócrata Cristiano a la quema de iglesias— en ningún caso pareciese inevitable. El problema de interpretación de este conflicto, pues, no es la falta de causas aparentes, sino una superabundancia de hipótesis —ninguna de las cuales es absolutamente rotunda— que corre el riesgo de convertir la historia del conflicto de 1954-55 en un confuso mar de anécdotas. En este trabajo, la historia del desenlace de la relación entre el peronismo y la Iglesia Católica se ubica en el contexto que parece contener las claves más relevantes para su lectura: el del conflicto político de la Argentina de los últimos años peronistas.

PERONISMO CONTRA CATOLICISMO O EL LENGUAJE DE LA POLARIZACIÓN

¿Quién hubiera podido imaginar en 1946 que el fin de la década peronista estaría signado por la oposición catolicismo contra peronismo? Sin duda, los mensajes peronistas sobre la religión generaron un consenso sobre las diferencias entre el mensaje justicialista y el católico. Pero tal consenso explica la posibilidad de un conflicto, no las escandalosas dimensiones del choque de 1954. Si durante varios años los voceros del "cristianismo peronista" ya habían expresado las mismas denuncias repetidas mil veces por indignados funcionarios entre 1954 y 1955, lo que queda por explicar no es la aparición de críticas a la Iglesia, sino el cambio de su impacto. ¿Por qué se convirtió la crítica a la Iglesia en consigna peronista? Igualmente, el rápido reflejo defensivo de amplios sectores de la sociedad —entre los que el laicado católico era sólo una parte— ante las iniciativas peronistas contra la Iglesia sugiere que el encuentro entre antiperonismo y catolicismo también era anterior a 1954. ¿Por qué el catolicismo, inicialmente identificado con la causa peronista, se encontró ocho años después en las filas del antiperonismo? Además de brindar algunas respuestas a las viejas preguntas sobre las causas del conflicto Iglesia-Estado, el análisis de la constitución de la inesperada oposición catolicismo contra peronismo es un sugestivo ejemplo de la experiencia de los argentinos en la era peronista.

Resulta imposible comprender el cambio en la percepción mutua de católicos y peronistas sin aludir primero al contexto de extrema polarización política de los años 1950-55. La politización de todos los aspectos de la vida cotidiana —desde el deporte hasta la beneficencia, desde los medios de comunicación hasta la educación, desde las escuelas hasta la administración pública y el mundo militar— hizo que el eje peronismo/antiperonismo atravesara todos los ámbitos de la vida pública, y muchos de la vida privada. En este contexto, los múltiples aspectos de la experiencia cotidiana tomaron un sentido político: todo podía leerse como una forma de apoyo o de resistencia.

Como dijimos, las deserciones de militantes católicos al proyecto peronista se hicieron perceptibles en diversos ámbi-

tos hacia 1950. En la universidad, los militantes de ACA habían sido los únicos en adherir al justicialismo en un medio profundamente hostil al gobierno. Al imponer la subordinación de estos impetuosos estudiantes a dirigentes del partido y una peronización de los contenidos que hería la sensibilidad de estos militantes de clase media, Perón perdió cuadros valiosos. Paralelamente, la defenestración de Mercante en 1952 provocó el alejamiento de prestigiosos católicos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En las organizaciones obreras, los católicos sociales ya habían comprendido que el peronismo no era la encarnación de las encíclicas imaginada hacia 1945. Muchos de estos católicos desengañados volvieron a las filas de la Iglesia para convertirse, años más tarde, en líderes del catolicismo antiperonista del conflicto de 1954: "Pasamos a trabajar por la caída de Perón con el mismo celo y la misma fe que habíamos depositado en él", dice uno de ellos. Algunos de estos resentimientos catalizaron cuando en 1950 Perón apoyó el acto espiritista ya mencionado.

Los cambios en la atmósfera política del mundo católico, sin embargo, eran más amplios aún: no sólo muchos militantes que se habían comprometido con el peronismo comenzaban a volver a su primera lealtad católica, sino que quienes siempre lo habían criticado recuperaban una legitimidad perdida desde 1945. En los últimos años del peronismo, revistas católicas del prestigio y la ortodoxia de *Criterio* dieron la bienvenida a voces del catolicismo silenciadas por el Episcopado pocos años antes. Los católicos liberales fueron los evidentes beneficiarios de los nuevos aires, pero sus contribuciones sobre las virtudes de la democracia y el liberalismo político aparecían en sorprendente consonancia con los editoriales de monseñor Franceschi, cuyo furioso antiliberalismo de los años treinta y cuarenta parecía haberse esfumado en el nuevo contexto político. Después de un inicial apoyo al proyecto social del peronismo, los editoriales de *Criterio* evitaron alusiones a la situación nacional, aunque sin duda los lectores apreciaban los paralelos entre los artículos sobre la libertad de prensa en Europa y la situación local, donde esa libertad era cada vez más limitada.

El liberalismo político, efectivamente, era el lugar de encuentro de las heterogéneas filas antiperonistas. Si bien éste

había sido el caso desde 1945, en los años cincuenta los defensores de la democracia empezaban a encontrar apoyos en lugares inesperados. Por un lado, la polarización había hecho milagros, limando hasta las más intensas asperezas entre los católicos y sus enemigos ideológicos de no hacía tanto: incluso Julio Meinvielle, cuya fe en el autoritarismo nadie podía poner en duda, salió en defensa de su enemigo de siempre, el diario *La Prensa*, expropiado por el gobierno en 1951. Esta sugestiva aproximación también era posible gracias a los cambios operados en las directivas de la Iglesia universal. En el contexto de la Guerra Fría, el Vaticano había hecho pública su alianza estratégica con la causa del mundo libre. Este cambio pronto mostró potencialidades políticas en el contexto argentino. En 1950, un mensaje del Papa sobre la libertad de prensa —criticando la supresión de este derecho en los países comunistas— fue publicado en primera página del diario todavía independiente *La Prensa* bajo el título: "Dice el Papa que los dictadores violan derechos humanos al suprimir la libertad de prensa". La nueva preocupación de Pío XII por la libertad también había dado origen a una cantidad de artículos sobre el tema en publicaciones católicas extranjeras, artículos sistemáticamente reproducidos en *Criterio*. De esta época también data el intercambio de amistosas cartas con *La Nación*, cuyo interés en el catolicismo también parecía haber aumentado, así como su aprecio por la gravitación de *Criterio*, "cada vez más vasta y honda en la opinión independiente".

Si bien Perón se equivocaba cuando se quejaba de la falta de cooperación del Episcopado, la creciente percepción oficial de la Iglesia como un espacio de encuentro de "contreras" adquiere mucho sentido en el contexto de polarización de aquellos años. Además de la retirada de muchos católicos de los organismos oficiales y del retorno triunfal de los sectores antiperonistas del laicado a las organizaciones confesionales, cambios en las estrategias institucionales eclesiásticas —dictados por el Vaticano y perfectamente ajenos al contexto político argentino— fueron usados y entendidos en términos de la única grilla de interpretación de la Argentina de aquellos años: la de peronismo/antiperonismo.

Paradójicamente, la llegada del peronismo al poder no había sido positiva para la vida institucional de la ACA. Después de



Incendio de iglesias, 16 de junio de 1955.

la época dorada del Congreso Eucarístico de 1934, el reclutamiento se había estancado y la organización había perdido líderes dinámicos que habían optado por participar en el proyecto justicialista. Esta crisis era también parte de un cambio mundial —en los años cincuenta la Acción Católica era cuestionada aun en los países donde la experiencia había sido más exitosa—. Nuevas ideas sobre la importancia de la militancia de los laicos eran aceptadas por la jerarquía universal, dando impulso a una nueva variedad de organizaciones ya no definidas por sexo y edad, como la Acción Católica, sino por sector ocupacional. Así, a partir de 1950, el Episcopado argentino comenzó a promover nuevas organizaciones católicas estudiantiles, profesionales y obreras, mientras que las nuevas Ligas de Padres y Madres de Familia contribuyeron a un renacimiento de la militancia laica.

Si bien el origen de dicho renacimiento del laicado católico no puede reducirse al desengaño de los católicos con el peronismo, es indudable que muchas de las nuevas actividades fueron percibidas desde el gobierno como demostraciones de oposición. Más allá de lo que dijeran en aquellos encuentros, los estudiantes católicos que organizaban sus actos independientemente de los de la UES, los profesionales que se agrupaban por corporaciones para debatir problemas de actualidad, los numerosos militantes que acudían a las Semanas Sociales de ACA para definir la perspectiva católica del trabajo y el mundo obrero, ya decían mucho al evitar los canales sólidamente establecidos por el Estado para desarrollar esas mis-

mas actividades en un marco justicialista. Y si bien el lenguaje nunca era abiertamente opositor, los resultados de dichos encuentros eran políticamente claros para quienes vivían en la Argentina del peronismo y el antiperonismo. La fervorosa reivindicación del derecho de la Iglesia a hablar de temas sociales, la defensa de la libertad sindical garantizada en la Doctrina Social de la Iglesia y la nueva preocupación por defender a la clase media —preocupación expresada simultáneamente por tradicionales rivales ideológicos en el mundo católico, como monseñor Miguel De Andrea y Julio Meinvielle— tenían sin duda un significado muy preciso para los participantes. La irritación de Perón ante la proliferación de corporaciones católicas que se ocupaban de temas eminentemente peronistas no era un secreto: "Bien, les dije (a los obispos): Señores, yo no sé por qué salen ahora esas organizaciones de abogados, médicos y estancieros católicos. Nosotros también somos católicos. Sólo que para ser peronistas no decimos que somos peronistas católicos, judíos, budistas, ortodoxos, etcétera, porque para ser peronistas nosotros no le preguntamos a nadie a qué Dios reza. Para nosotros es lo mismo que pertenezca a cualquier credo, siempre que sea una buena persona, que es lo único que tenemos en cuenta".

El tema dominante del catolicismo de aquellos años, sin embargo, no era social ni económico, sino moral. Las publicaciones confesionales, siempre preocupadas por preservar códigos estrictos de decencia pública, aumentaron notablemente sus denuncias sobre la inmoralidad de los espectáculos, de las "modas indecorosas" y del peligroso culto del cuerpo exacerbado en los desfiles y concursos deportivos a los que el peronismo dedicó tanto espacio en los últimos años. Dichas denuncias canalizaban una importante objeción católica a la cultura popular, objeción que precedía al nacimiento del peronismo pero que en los años cincuenta se hizo dominante en las publicaciones eclesiásticas.

En este contexto, los rumores en torno a la UES volvieron a actualizar la cuestión moral. La Unión de Estudiantes Secundarios fue creada en 1953 para encuadrar las actividades de la población escolar secundaria fuera del horario de clases. El proyecto gozaba de gran favor en los altos círculos gubernamentales, desde donde se proporcionó generoso apoyo mate-

rial para organizar el ocio de los estudiantes, convertidos en las nuevas vedettes del peronismo. Las versiones sobre el uso que funcionarios peronistas hacían de esta vasta fuente de jóvenes no tardaron en circular en la oposición, agregando así a los tradicionales temas antiperonistas —el autoritarismo, la peronización de la sociedad, etc.— la fatal degradación de la imagen moral del gobierno. En esta nueva área de tensión, la Iglesia tenía el potencial para representar a muchos argentinos cuya identidad católica era hasta entonces secundaria.

Si la agregación de todos estos elementos hacía cada vez más factible un diagnóstico oficial de la Iglesia como un espa-

Panfleto antiperonista sobre la UES

"Escasez

Para abrir sin más demoras
las casas de los placeres
le están faltando mujeres
al gobierno en estas horas.
Las de antes ya son 'Señoras'
que viven del presupuesto
figurando en cualquier puesto.
¡Si hasta son legisladoras!
Y las candidatas clásicas,
las que están en buena edad,
ejercen su 'actividad'
en las unidades básicas.
Y las otras, las menores,
ya pasaron de reclutas
aunque son muy buenas p...
para el caso las mejores
no remedian la escasez
pues coinciden los rumores
en que avivados señores
las retienen en la UES."

Félix Lafiandra (h), *Los Panfletos. Su aporte a la Revolución Libertadora*, Ed. Itinerarium, Buenos Aires, s/f.

cio de oposición, sin duda los términos de dicho diagnóstico estuvieron profundamente determinados por el clima político de la época. La radicalización de la identidad peronista de los años cincuenta —exacerbada por eventos dramáticos como el *putsch* militar de 1951 y la muerte de Eva Perón en 1952— llevó los términos de la definición del peronista ideal al extremo de la vida y la muerte. Paralelamente, convirtió la denuncia del enemigo en el *leitmotiv* del discurso de Perón de los últimos años, mientras Evita, poco antes de su muerte, llamaba a sus partidarios a defender a su líder con la vida.

Durante el proceso de agudización de la polarización política y de exacerbación del tono discursivo del peronismo, la Iglesia nunca había sido explícitamente mencionada como un enemigo del pueblo aunque, como vimos, muchos elementos se habían acumulado para que dicha percepción fuera posible. Cuando en noviembre de 1954 se desató abiertamente el conflicto con la Iglesia, la información sobre el tema publicada en los medios de comunicación seguía de cerca el modelo preestablecido del enemigo. El "cristianismo peronista", ya maduro y establecido en los medios partidarios, mostraba al fin todo su potencial anticlerical.

A pesar de los esfuerzos de los jefes del Episcopado por calmar a sus bases, el laicado católico no tardó en articular un rabioso discurso antiperonista, que circuló en forma de panfletos clandestinos repartidos casa por casa por fervorosos militantes. Las tradicionales procesiones católicas se transformaron en abiertas demostraciones de antiperonismo. En la marcha de Corpus Christi del 11 de junio de 1955, los participantes habituales se habrán sorprendido de encontrarse codo a codo con manifestantes de religiosidad puramente nominal, o incluso con socialistas y comunistas, los enemigos laicistas y anticlericales de toda la vida. A pesar de que la mayoría no conocía los cánticos católicos coreados por los organizadores de la procesión, todos marcharon por las calles de Buenos Aires cantando a viva voz "¡Viva Cristo Rey!".

Aunque la traumática quema de iglesias ocurrida cinco días después era indudablemente una reacción al ya mencionado bombardeo de la Marina, dichos incendios respondían también a una lógica más profunda, una lógica que excede la del conflicto Iglesia-Estado. Tal vez en la quema del Jockey Club en

abril de 1953, y no en la lista de entredichos de Perón con miembros del clero, esté el más importante antecedente de la quema de iglesias del 16 de junio de 1955. Esa noche, las parroquias de barrio fueron dejadas intactas, mientras las iglesias "de los ricos" del centro de Buenos Aires eran saqueadas y quemadas: ataque a la Iglesia, claro, pero también transgresión ritual más profunda y violenta.

Las dificultades de los historiadores para explicar el conflicto entre Perón y la Iglesia son comprensibles: aun teniendo en cuenta los innumerables incidentes y tensiones acumulados en diez años de compleja relación, es imposible encontrar un potencial conflictivo capaz de dar cuenta de semejante estallido. En cambio, la cargada atmósfera política de los últimos años peronistas llevaba en sí el germen de un conflicto. Éste se parece mucho —en su composición, su violencia y su intransigencia— al que opuso a los defensores de Perón y los defensores de la Iglesia.

BIBLIOGRAFÍA

Bianchi, Susana: *La Iglesia Católica y el Estado peronista. Notas para un proyecto de investigación,* CEAL, Buenos Aires, 1988.

———: "La Iglesia Católica en los orígenes del peronismo", en: *Anuario IEHS*, Nº 5, 1990.

———: "Catolicismo y peronismo. La familia entre la religión y la política (1945-1955)", en: *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Doctor Emilio Ravignani* , Nº 19, primer semestre de 1999.

Burdick, Michael: *For God and the Fatherland: Religion and Politics in Argentina,* Albany State University of New York Press, Nueva York, 1995.

Caimari, Lila: *Perón y la Iglesia católica. Religión, Estado y sociedad en la Argentina (1943-1955),* Ariel, Buenos Aires, 1995.

Chiesa, Carlos: *Iglesia y justicialismo. ¿Anatema o reconciliación?,* Cuadernos de Iglesia y Sociedad, Buenos Aires, 1984.

Chiesa, Carlos y Sosa, Enrique: *Iglesia y justicialismo, 1943-1955,* Cuadernos de Iglesia y Sociedad, Buenos Aires, 1983.

Di Stefano, Roberto y Zanatta, Loris: *Historia de la Iglesia Argentina,* Grijalbo-Mondadori, Buenos Aires, 2000.

Forni, Floreal: "Catolicismo y peronismo", en: *Unidos,* Nºs 14, 17 y 18, 1987-1988.

Lubertino Beltrán, María José: *Perón y la Iglesia (1943-1955),* CEAL, Buenos Aires, 1987.

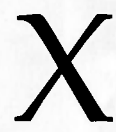
Mallimaci, Fortunato: "El catolicismo argentino desde el liberalismo integral a la hegemonía militar", en: AA.VV., *500 años de cristianismo en Argentina,* CEHILA, Buenos Aires, 1992.

Plotkin, Mariano: *Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista (1946-1955),* Ariel, Buenos Aires, 1994.

Stack, Noreen: *Avoiding the Greater Evil: The Response of the Argentine Catholic Church to Juan Perón,* Tesis doctoral, Rutgers University, New Brunswick, 1976.

Zanatta, Loris: *Perón y el mito de la nación católica,* Sudamericana, Buenos Aires, 1999.





Intelectuales y peronismo

por SILVIA SIGAL


José María Castiñeira de Dios asume como secretario de Cultura (primero desde la derecha). Está presente Leopoldo Marechal (segundo desde la izquierda), 1950.



Hay por lo menos dos puntos de acuerdo entre quienes se han interesado en la relación entre los intelectuales y el primer peronismo. El primero es que la casi totalidad de los escritores, artistas y universitarios liberales y democráticos fueron antiperonistas; el segundo, que si los intelectuales peronistas fueron muy contados, más contados fueron, entre ellos, quienes gozaban de prestigio y reconocimiento en el ámbito de la cultura. Puede imaginarse sin riesgo que sus protagonistas, peronistas o no, hubieran suscripto, hasta 1955, esta somera descripción. A partir de esta fecha, y con mayor vigor gracias a la formidable relectura del fenómeno peronista de fines de la década del 60, se agregó un tercer elemento, presente en la mayor parte de los trabajos recientes: se afirma que los intelectuales antiperonistas no comprendieron el peronismo y, más específicamente, sus componentes populares positivos. Sea porque se trataba de una elite espantada por la amenaza de las masas, sea porque contemplaban la realidad argentina con esquemas im-

portados de Europa, sea porque veían en el hecho peronista un nuevo avatar de los caudillismos tradicionales. Esta manera de ver las cosas desdibujó y puso en segundo plano los componentes no democráticos del régimen peronista que esa intelectualidad había tenido por motivos nada desdeñables de su antiperonismo.

Partiendo de las mismas dos observaciones iniciales nos proponemos explorar, en primer lugar, los orígenes del antiperonismo intelectual evitando, en la medida de lo posible, interpretaciones puramente retrospectivas. Después de una crónica del período anterior a las elecciones de 1946, en la cual prestamos una atención particular al mundo universitario, una segunda parte se ocupa de la vida intelectual durante el peronismo y de la relación entre gobierno y cultura.

También en la medida de lo posible trataremos de evitar razonamientos fundados en la "comprensión" del peronismo por los unos y en la "incomprensión" del peronismo por los otros, ya que suponen a menudo pensar al peronismo como un fenómeno unidimensional, o popular o autoritario, y partir de un saber acerca de lo que el peronismo fue *verdaderamente*.

EL GOBIERNO MILITAR DE 1943: UNA HERENCIA DUDOSA

En vísperas de una convocatoria electoral que anunciaba la continuidad de las prácticas fraudulentas, y en el clima general de descrédito que rodeaba al presidente Castillo, el golpe militar de junio de 1943 encontró expectativas favorables. Dos cuestiones principales estaban en juego: por una parte, el mantenimiento de la neutralidad argentina o su participación del lado de los aliados, y por la otra, el retorno a la Constitución o reformas institucionales inspiradas en el fascismo o el nazismo. Si los grupos radicales, buena parte de la opinión pública y, naturalmente, los nacionalistas apoyaban el mantenimiento de la neutralidad, buena parte de la izquierda y de las elites intelectuales estaba a favor de los aliados. Escribirá Victoria Ocampo: "Nosotros no somos neutrales, para nosotros un acto degradante es siempre un acto degradante".

Con el reemplazo del general Rawson por el general Ramí-



Gustavo Martínez Zuviría, ministro de Justicia e Instrucción Pública, sentado en su despacho con su secretario privado, Dr. Oscar Carreras, diciembre de 1943.

rez, en octubre de 1943, está claro que las tensiones en el seno del gobierno se han resuelto a favor del sector nacionalista. La preponderancia del catolicismo integrista y del grupo pro Eje del general Luis Perlinger, nuevo ministro del Interior, anuda opciones nacionales e internacionales: la orientación adoptada por el gobierno militar escindió, a favor o en contra, siguiendo un corte que no difería demasiado, al fin de cuentas, del que trazaban los acontecimientos europeos. Ofreció así contenidos más precisos a la oposición, no siempre nítida ideológicamente, entre "neutralistas" y "aliadófilos".

La nueva política se pone muy claramente de manifiesto en el terreno de la cultura con la designación del célebre escritor antisemita Gustavo Martínez Zuviría (Hugo Wast) como ministro de Justicia e Instrucción Pública, acompañado por Leopoldo Marechal como director general de Cultura; personajes

conspicuos del nacionalismo y del catolicismo pasan a ocupar puestos oficiales: Mario Amadeo en Relaciones Exteriores; Bonifacio del Carril, secretario del Ministerio del Interior; A. Silenzi de Stagni, Federico Ibarguren y Alberto Baldrich en la intervención de la provincia de Tucumán; Alfredo Villegas Oromí y Máximo Etchecopar en Salta; Ramón Doll, ministro de Economía en Tucumán y luego rector de la Universidad de Cuyo.

Pocas semanas más tarde, el 31 de diciembre de 1943, al mismo tiempo que se toman medidas de control de la prensa y de la radio, y de represión de organizaciones comunistas y socialistas, se declaran disueltos los partidos políticos y se dicta el decreto 18.411 por el cual se restablece la enseñanza obligatoria de la religión católica en todos los establecimientos dependientes de la Nación, volviendo atrás respecto a las "leyes laicas" de 1884. Culmina así el avance de la Iglesia —y de los sectores nacionalistas católicos— en el sistema educacional, avance que no carecía de antecedentes, siendo el más notorio la imposición de la enseñanza religiosa en las escuelas de la provincia de Buenos Aires en 1936 por el gobernador M. Fresco, pero también en Salta, Corrientes, Catamarca y Santa Fe. *La Nueva República* anticipaba en 1927 el programa que se ponía en marcha, cuando reclamaba el retorno a la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas primarias, "necesidad fundamental para el enderezamiento moral del país", afirmando que era "urgente soldar los cabos de la tradición lamentablemente rotos el día que se sacó al Cristo de las Escuelas". Para la Universidad, institución central de la cultura, el proyecto restaurador de los grupos católicos ultranacionalistas sostenía que "se impone, en primer lugar, la supresión de la Ley de Reforma de 1918, que fue un verdadero acto de estupidez por el cual el gobierno de las universidades argentinas pasó a manos de los comités electorales".

"La revolución será lo que sea su programa docente", escribía *El Pueblo*, diario oficial de la Iglesia, al día siguiente del golpe militar, dando la medida de la importancia que otorgaba a la política educacional, particularmente a la enseñanza elemental y secundaria pero también a universidades regidas en gran medida por los principios de la Reforma del 18. La decisión del nuevo gabinete cohesionó al frente católico y, liqui-

dando las posibles dudas iniciales, convalidó el apoyo inicial de la Iglesia y de los más notorios intelectuales católicos al golpe militar de 1943.

En efecto, la Universidad del Litoral fue intervenida el 28 de julio de 1943 y, al asumir su cargo, Jordán Bruno Genta sostenía la necesidad "...de la salvación de la juventud de las frívolas ideas modernas [...]. Aún estamos padeciendo el desorden de la revolución negadora cartesiana; y en el retorno a la filosofía perenne hemos de fincar los postulados de la nueva revolución que ha sido preciso realizar para afirmar los valores eternos". A la intervención le sigue una huelga estudiantil en agosto que, como respuesta a la represión, se convertirá en huelga por tiempo indeterminado.

Debido a la disolución de los partidos políticos, los universitarios y el movimiento estudiantil se convierten muy rápidamente en la cabeza más visible de la autodenominada "resistencia", particularmente en Buenos Aires, el Litoral y La Plata; fueron a la vez blanco privilegiado de las decisiones gubernamentales y cuartel general de la oposición. El 15 de octubre de 1943 profesores universitarios, políticos y otras personalidades de filiación conservadora, comunista, socialista y radical firman un manifiesto democrático, exigiendo la restauración de la democracia, la libertad de prensa, el respeto de los derechos políticos individuales y la solidaridad con los aliados. El gobierno declara cesantes a los universitarios que habían firmado (Bernardo Houssay, Mariano Castex, de la Universidad de Buenos Aires; Nicolás Romano, Roberto Giusti, José Peco y Nicolás Besio Moreno, de La Plata; Horacio Thedy, Cortés Pla y David Staffieri, del Litoral), provocando la renuncia de autoridades universitarias, entre ellas las del presidente de la Universidad de La Plata, Alfredo Palacios, y de su vicepresidente, Gabriel del Mazo. Le siguen nuevas intervenciones y la designación de notorios representantes de la derecha católica autoritaria: Rómulo Etcheverry Boneo en el Litoral, Tomás D. Casares en Buenos Aires, Lisardo Novillo Saravia en Córdoba, los tres dirigentes de la Acción Católica. A fin de octubre, la Federación Universitaria Argentina (FUA) decide efectuar una huelga por tiempo indeterminado y el ministro responde disolviéndola por decreto el 6 de noviembre.

El gobierno enfrenta asimismo al conjunto del cuerpo do-

cente. Acumulando entonces el cargo de secretario de Trabajo y Previsión y el de secretario de Guerra, el coronel Perón se dirige a profesores y maestros en diciembre de 1943 con un mensaje similar al que enviará, con más éxito, a otros gremios: "Comiencen ustedes por unirse. Piensen y sientan de una manera similar al amparo de nuestra bandera, tan grande y tan pura; y si consiguen que el magisterio deponga toda rivalidad [...] serán ustedes invencibles. Con este pedido de colaboración de todos los maestros, termino ofreciéndome para que, si ustedes pueden formar una institución, una asociación profesional, acudan cuando crean necesario a la Secretaría de Trabajo". Pero las relaciones entre maestros y gobierno no mejoran con el nombramiento, en marzo de 1944, del nacionalista católico José I. Olmedo como interventor del Consejo Nacional de Educación, menos aún cuando pone en "estado de comisión" a los docentes y administrativos para estudiar caso por caso su perfil ideológico, y deja cesantes a cuatrocientos funcionarios escolares. En marzo de 1945, *La Prensa* escribirá que "las verdaderas causas (de las cesantías) radicaban en la militancia de tales docentes y funcionarios en pos de una educación democrática, gratuita, obligatoria y laica, así como antifascista".

En junio de 1944, cuando recibe a una delegación de maestros católicos que se dirige a la Secretaría con demandas de sueldo, jubilación y escalafón, se manifiesta la importancia que la organización reviste para el coronel Perón: "No me he explicado nunca cómo una agrupación de personas que reúne a más de 36.000 miembros no tiene una ley orgánica acabadamente perfecta. Nosotros los militares, con menos personal, hemos sido garantizados por una ley que puede calificarse de perfecta [...] Nosotros vamos a tratar de ensayar el estudio de una ley orgánica para el magisterio en colaboración con el interventor del Consejo Nacional de Educación para ver si es posible realizarla en forma similar a la que tiene el Ejército [...] Esta ley orgánica ha encontrado siempre una oposición; y yo les diré por qué ha sido. Se creía que dictar una ley orgánica para los maestros era militarizar al magisterio, lo que es un error tan grave como si dijéramos que organizar una casa es hacer algo así como una cárcel".

La renuncia del general Ramírez el 24 de febrero de 1944 y la llegada de E. Farrell no habían alterado esencialmente la

política gubernamental en el área de la cultura. G. Martínez Zuviría abandona el ministerio de Justicia e Instrucción Pública pero es reemplazado por Alberto Baldrich, militante nacionalista católico que, invocando "la unión de la cruz y de la espada", había establecido sólidas conexiones con el Ejército y demostrado sus simpatías con el régimen fascista. A. Baldrich nombró a Carlos Obligado en la Universidad de Buenos Aires, quien rebautizó al Colegio Nacional de Buenos Aires, que pasa a llamarse Colegio Universitario de San Carlos, y nombra como rector al canónigo Sepich. En esos momentos el coronel Perón asumía plenamente las funciones de ministro de Guerra y poco después, el 7 de julio de 1944, cuando se resuelve a su favor el conflicto que lo enfrentaba con el general Perlinger, es vicepresidente de la Nación. Acumula entonces este cargo con los ya adquiridos: secretario de Trabajo y Previsión, presidente del Consejo Nacional de Posguerra y ministro de Guerra. Dos meses más tarde Alberto Baldrich es reemplazado como ministro de Instrucción Pública por el integrista católico Rómulo Etcheverry Boneo, que había sido presidente de la Junta Nacional de la Acción Católica e interventor en la Universidad del Litoral en 1943.

EL 45

A medida que se sucedían las derrotas nazis se organizaba un movimiento de oposición en el cual los universitarios tenían un lugar prominente. Un bloque que reunía, junto a la intelligentsia democrática, a políticos y universitarios que no había demostrado un igual fervor antifascista en los años recientes. Clases medias y elite, derecha liberal e izquierda, políticos y escritores confluyeron en Plaza Francia para festejar la liberación de París, celebración que era al mismo tiempo manifestación de oposición al gobierno militar.

En diciembre de 1944 la situación del gobierno del general Edelmiro Farrell se había tornado muy difícil. La guerra mundial estaba en su última etapa y el triunfo aliado era ya evidente. Si había no pocos "neutralistas" en las filas de la oposición civil que exigía la normalización institucional, para los ultras nacionalistas católicos que habían entrado en el gobierno la

neutralidad era una cuestión capital; es por esa razón que ante la ruptura de relaciones con el Eje, la declaración de guerra en marzo de 1945 y luego la firma del acta de Chapultepec, muchos de ellos, escritores y publicistas, renunciaron indignados; Federico Ibarguren, interventor federal en Tucumán, hizo colocar la bandera a media asta y Santiago de Estrada clausuró las puertas de la Universidad nacional. Como anota Lila Caimari, los nacionalistas católicos, decepcionados por el fin de la neutralidad, habían demostrado ser más nacionalistas que católicos. La Iglesia, en cambio, prestaba atención a sus conquistas en el campo de la enseñanza; pragmático y soberbio, *Criterio* escribía: "El establecimiento de la enseñanza religiosa católica en las escuelas de un país no constituye un libre obsequio del gobierno a la Iglesia, sino el reconocimiento del derecho de Cristo a llevar, por medio de dicha Iglesia, su Verdad al alma de los niños [...] Poco le importa que este reconocimiento sea hecho por el Gran Turco, el Emir de Afganistán o el Rey Cristianísimo. ¿Acaso no se conduciría de este modo si fuera el Soviet quien adoptara tal actitud?" Pero si a ojos de un Mario Amadeo, un Máximo Etchecopar o un Ignacio Anzoátegui las decisiones gubernamentales fueron suficientemente significativas como para justificar el pasaje a la oposición, la intelligentsia y los políticos democráticos y liberales no adoptaron una óptica análoga y siguieron exigiendo el retorno a las instituciones representativas.

La derrota del Tercer Reich y la consiguiente reorientación gubernamental se tradujo en medidas de liberalización política: el estatuto de los partidos políticos y la promesa de elecciones. Se levanta la intervención a las universidades, renuncia Etcheverry Boneo, son reintegrados en febrero los profesores echados un año antes y, en mayo, Jordán B. Genta es dejado cesante. El 7 de agosto es revocada la ilegalidad de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Los grupos reformistas se imponen en las elecciones universitarias y ponen a su cabeza a hombres opuestos al gobierno nacional, abriendo un foro de expresión política; una conferencia de rectores, reunida en julio de 1945, exigió públicamente la vuelta al orden constitucional. En Buenos Aires se convoca una asamblea universitaria de la que surgió el doctor Horacio Rivarola como rector y el consejo de la Universidad procede a suspender o dejar cesante

al personal docente que adhiera a "ideologías o sistemas contrarios a los principios de libertad y gobierno representativo".

Para grupos importantes de la intelectualidad democrática enfrentada al gobierno militar, si había un lugar donde la política tocaba la cultura, era en la Universidad y, más generalmente, en la educación. Y no había allí motivo alguno de entusiasmo. No les resultaba tampoco sencillo a los universitarios diferenciar a Perón, en tanto secretario de Trabajo y Previsión, de un gobierno militar del cual era vicepresidente. Los acontecimientos de agosto hacen más evidente para los universitarios que Perón es miembro prominente del régimen de junio. En efecto, estaba a cargo del Ejecutivo por ausencia de Farrell cuando se producen manifestaciones de universitarios festejando la rendición de Japón, que fueron prohibidas por el gobierno; el enfrentamiento entre estudiantes, grupos de choque de jóvenes nacionalistas y la policía tuvo como consecuencia tres muertos. La FUA decide una huelga, apoyada por las autoridades universitarias, y el gobierno responde exonerando docentes: Ernesto Sabato, José Luis Romero, Vicente Fatone, Alberto Ginastera,



Festejos por la caída de Japón, agosto de 1945.

Baltasar Jaramillo; un grupo de artistas (Basaldúa, Berni, Bigatti, Norah Borges, Horacio Butler, Castagnino, Centurión, Forner, Giambiagi, Policastro, Soldi, Spilimbergo y otros) resuelve expresar su solidaridad boicoteando el Salón Nacional. El 28 de agosto Perón se dirige por radio a los estudiantes afirmando: "Intervinimos la Universidad y los resentidos del proceso anterior, como los lastimados por vuestras propias conquistas, confundiendo la medida de gobierno creyeron que marcaba la hora de sus revanchas, y enfáticamente se lanzaron al ataque de las posiciones, tratando de formar una Universidad intransigentemente medieval. [...] A su vez, tuvimos que desplazarlos a ellos, y después de distintas medidas de gobierno que no siempre pueden ser explicadas en su verdadera naturaleza e intención, devolvimos la autonomía a la Universidad, mediante elecciones absolutamente libres. [...] ¿Por qué, entonces, sois los más intranquilos, permaneciendo en una agitación constante? Hace días desde mi despacho os he visto desfilar por las calles festejando —al principio— el triunfo de ideales humanos de fraternidad, democracia e igualdad que yo también, como el señor presidente, y los demás integrantes del gobierno, con idénticas ansias, compartimos. El tumulto callejero dejó un saldo doloroso que todos lamentamos. Nadie que no sea un descastado o un perverso puede creer que el gobierno se haya solazado con ello o lo haya provocado en un incomprensible afán de represión. Cayeron víctimas de la fatalidad [...] justifiqué vuestros afanes cuando actuabais en el rol de estudiantes pero no puedo justificar ahora vuestra conducta en defensa de posiciones políticas que no desempeñasteis". No todas esas afirmaciones eran falsas, al contrario, pero provocaron la ira de los estudiantes, que respondieron: "Esas intervenciones a las que en su mensaje tan bien acusa el coronel Perón, olvidando que está acusando al propio gobierno del que forma parte, pues fue él quien las envió..."

En verdad, el mensaje de Perón no sólo era inadecuado para su audiencia sino que tenía lugar cuando las cartas ya estaban echadas. La llegada del embajador de los Estados Unidos Spruille Braden, en mayo de 1945, había dado una organización a la oposición al coronel Perón, calificado de líder demagógico listo para instalar en la Argentina un régimen fascistoide. Braden reúne a empresarios y terratenientes enardecidos

por las decisiones de Perón en el ámbito del trabajo y embandera sectores importantes de una intelectualidad enfrentada con quien era ya el hombre fuerte del gobierno militar. Grupos de intelectuales habían adherido en junio al Manifiesto de las Fuerzas Vivas (trescientas entidades patronales) donde afirmaban encontrarse "profundamente preocupadas y alarmadas ante el ambiente de agitación social que daña la disciplina y el esfuerzo productivo de la colectividad. El clima de descontento se origina y es instigado desde las esferas oficiales". En julio de 1945 la lista de los firmantes de un texto de adhesión al embajador, agredido en unos volantes, es, apunta Félix Luna, "por mitades, una Guía Social y un 'Quién es quién' para estancieros, patrones de empresa, banqueros y políticos". Pero reúne igualmente a decenas de escritores, artistas, intelectuales de tendencias políticas muy diversas, para quienes Perón, demagogo y heredero de la mezcla de clericalismo y nacionalismo autoritario inaugurada en junio de 1943, poco justificaba la esperanza en una salida democrática. Entre ellos, Telma Reca de Acosta, A. M. Barrenechea, Aída Barbagelata, Dardo Cúneo, Enrique García Mérou, Bernardo Houssay, Marcos Merchensky, Aldo Pellegrini, Sigfrido Radaelli, J. Rey Pastor, Jorge Thenon, Enrique Wernicke, Cora R. de Sadovsky, Ricardo M. Ortiz, Margarita Argúas, Enrique Amorim, Amancio Alcorta, Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo, Leónidas Barletta, Jorge Luis Borges, Horacio Butler, Alberto Ginastera, Roberto Giusti, Vladimiro Acosta, Manuel Mujica Lainez, Evar Méndez, María Rosa Oliver, Luis Reissig, Luis Saslavsky, etcétera.

En septiembre, la Junta de Coordinación Democrática convoca a más de 250.000 personas a la Marcha de la Constitución y la Libertad. El régimen militar declara el estado de sitio y, ante la amenaza de intervención, las universidades son ocupadas por estudiantes y profesores. El gobierno responde clausurándolas y desde fines de septiembre hasta mediados de octubre de 1945 se suceden los enfrentamientos entre la policía y los estudiantes. El día 15, cuando Perón se encontraba ya detenido en la isla de Martín García, el presidente Farrell inicia sorpresivamente la normalización de las instituciones universitarias.

LA POLÍTICA SOCIAL DE PERÓN EN EL ORIGEN DEL ANTIPERONISMO Y EL PERONISMO INTELECTUAL

No caben dudas acerca de las transformaciones introducidas por el vertiginoso ascenso del coronel Perón desde su nombramiento a la cabeza del Departamento Nacional del Trabajo el 27 de octubre de 1943. La acogida favorable en medios sindicales tanto como la evolución de la actitud de las entidades patronales nos dicen que las intervenciones puntuales del coronel y los proyectos de la Secretaría han sido seguidos con atención. Y que medidas como el aguinaldo, el régimen de jubilaciones o el Estatuto del Peón son percibidos como subversivos del orden por la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural. La Unión Industrial, que pasa de un apoyo inicial a declaraciones veladamente críticas en septiembre de 1944, ya a fin de año hace conocer su oposición a la política social de Perón denunciando "la indisciplina que necesariamente engendra en los establecimientos el uso más generalizado de cierta terminología que hace presentar a los patrones en una posición de prepotencia y a cada arreglo, no como un acto de justicia sino como una conquista, que de ser necesario los trabajadores sabrían defender con la fuerza", mientras para la Confederación de Sociedades Rurales, "el Estatuto del Peón elimina la jerarquía del patrón para dejar a merced de los peones o de cualquier agitador profesional conspirando contra la tranquilidad y la vida de las familias y las de los hombres honestos que trabajan en el campo".

¿Hasta qué punto pueden hacerse observaciones análogas en el ámbito de la cultura? ¿Quiénes están lo suficientemente atentos a la nueva política social como para integrarla, sea a favor, sea en contra, en su actitud ante el dinámico coronel? Dicho de otro modo, ¿cómo se sitúan los intelectuales en "los orígenes del peronismo"? ¿Cómo puede aprehenderse, allí, "el origen del antiperonismo"?

A lo largo de 1944 la Secretaría de Trabajo y Previsión ocupa todavía, nos dice T. Halperín Donghi, "un lugar marginal en la atención colectiva". En efecto, hasta el momento en que se unifica la oposición a la muy plausible candidatura de Perón, no es para nada evidente que su política social haya tenido un eco en los medios intelectuales comparable al que tuvo en

otros grupos y actores sociales. Y eso por una razón al fin de cuentas bastante simple: durante esos meses decisivos nada permite suponer que la intelectualidad que será antiperonista, salvo quizá la que pertenecía al Partido Socialista o al Comunista, estuviera suficientemente informada. El primer discurso de Perón por la Red Argentina de Radiodifusión el 2 de diciembre de 1943 que, en ese carácter, podía llegar más fácilmente a los circuitos de la cultura —suponiendo que éstos se interesaran en el ex Departamento Nacional de Trabajo— no hacía sino refirmar el rol del Estado en el ámbito del trabajo, la importancia de la organización y el afán del coronel por evitar que los trabajadores fueran atraídos por los "falsos apóstoles" y "las fuerzas ocultas de perturbación del campo político-internacional". Otro discurso "audible", la conferencia en la Universidad de La Plata del 10 de junio de 1944, que provocó las iras del Departamento de Estado norteamericano por sus definiciones de la guerra y la satisfacción de un Scalabrini Ortiz por su defensa de la industria nacional, poco y nada concernía a la política social. Poco había allí que chocara con ideas de sectores que, como *La Nación*, habían saludado la designación del coronel Perón.

En el mismo sentido constata Félix Luna que "a principios de 1945, el movimiento obrero, institucionalizado y convertido en un instrumento incontrastable, era ya silenciosamente peronista" pero, agrega, "esto no se advertía aún y mucho menos en los círculos políticos e intelectuales". Los organizadores del masivo acto convocado por la CGT y la Comisión de Unidad Sindical el 12 de julio de 1945 en defensa de las mejoras obtenidas ante la ofensiva patronal evitaron cuidadosamente personalizar su adhesión a la figura de Perón, afirmando la autonomía obrera, y durante los tres meses siguientes, observa Juan C. Torre, "las organizaciones obreras estuvieron conspicuamente ausentes de las calles".

Es posible suponer, entonces, que antes de la irrupción obrera en la Plaza de Mayo, Perón no existía casi, por así decirlo, para núcleos importantes de la intelectualidad. O, mejor dicho, no existía en tanto líder popular real de masas, aunque sí por cierto como heredero del gobierno militar.

¿*Quid*, entonces, de los intelectuales o grupos intelectuales, por cierto escasos, que acompañaron a Perón antes de 1945?

La distinción entre el interés por la política engendrado por la defensa de valores y el interés por la política práctica utilizada por María T. Gramuglio a propósito de *Sur* durante los años treinta es útil aquí. A pesar de la tan citada afirmación de *Sur*: "El juego político no tiene nada que ver, en cierto sentido, con la actividad invisible y constante de las elites que se realiza sobre un plano moral —diría yo— casi metafísico", Gramuglio se pregunta si tales controversias pueden ser estimadas "políticas", y responde por la afirmativa. Aunque no impliquen una "intervención en la política práctica", la amenaza a valores que se postulan como universales "justifica y exige la atención de los intelectuales a la política, y torna necesaria, por lo tanto, la intervención en el debate de ideas"; *Sur* es, desde esta perspectiva, una revista política. Y si *Sur* puede ser considerada política en función de su compromiso con valores universales, políticos son, *a fortiori*, los escritores nacionalistas o católicos para quienes los valores y las ideas no eran menos importantes. La relación de los primeros con "la política práctica" había sido tradicionalmente fuerte y directa, y los católicos nunca fueron insensibles a "los manejos transitorios de la política" que podían repercutir sobre la capacidad de influencia de la Iglesia.

Se recorta así un conjunto cuyos integrantes —escritores, publicistas, historiadores o poetas— tenían en común ese "interés por la política práctica". Un "interés" que implicaba, aunque no necesariamente una práctica política, una apreciable información sobre la coyuntura argentina. En efecto, tanto los escritores cercanos a la Iglesia como los representantes de la amplia gama del nacionalismo habían estado atentos a las posibilidades que el golpe de junio abría para sus proyectos. Resulta por eso más fácil encontrar, en la galaxia nacionalista o católica, escritores que se afirmaron tempranamente a favor o en contra de la política social de Perón. Así Julio Meinvielle, cuyo modelo era Oliveira Salazar, ya decepcionado por la ruptura de la neutralidad, se pronuncia en contra del Estatuto del Peón, denunciando en *Nuestro Tiempo* un régimen demagógico; un itinerario similar al recorrido por el Partido Libertador de los hermanos Irazusta, duro crítico de la política económico-social del gobierno de junio.

Admirador de los regímenes totalitarios europeos, Ramón

Doll, funcionario del gobierno bajo Ramírez y ferviente publicista antisemita, simpatizará, en cambio, con el peronismo, al igual que Ernesto Palacio, cofundador de la Nueva República y miembro del comité de dirección del Instituto Juan Manuel de Rosas, que será elegido diputado peronista en las elecciones de 1946. También apoyan la orientación del coronel, desde posiciones diferentes, escritores como Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche, miembros de FORJA. Jauretche había tanteado sucesivamente, desde temprano, a responsables militares en busca de un lazo con sectores del radicalismo y había mantenido una estrecha relación con Perón hasta mediados de 1944. Scalabrini Ortiz evocará su emoción escuchando a un indio mataco hablar de Perón: "Aquel par de sílabas parecía gozar de virtudes taumatúrgicas. Era la advocación con que



Vino de honor ofrecido en el Plaza Hotel por becarios americanos a las autoridades de la Comisión Nacional de Cultura: Ernesto Palacio y Leopoldo Marechal (sentados, segundo y cuarto desde la izquierda), 9 de mayo de 1947.



Portada del libro de Juan D. Perón, El pueblo quiere saber de qué se trata, *editado en 1944.*

aquellos seres cándidos y sufridos se dirigían al ser —para ellos incorpóreo, invisible, intangible y sin embargo constantemente presente— que estaba tutelando sus vidas tan lamentables...”

No difiere en el fondo demasiado de lo que escribe, con singular perspicacia, un Manuel Gálvez, ejemplo tan significativo como excepcional —junto a Carlos Ibarguren— de apoyo precoz al peronismo por parte de intelectuales reconocidos. Partidario de un gobierno fuerte, Gálvez era ya un prohombre de las letras. Exitoso escritor con una larga carrera universitaria, se había interesado desde antiguo en los problemas sociales, lo cual no le había impedido expresar en su momento ideas antisemitas. En 1944, la Secretaría de Trabajo y Previsión difunde un libro, *El pueblo quiere saber de qué se trata*, que reproduce un artículo publicado por Manuel Gálvez en el diario *El Pueblo*, donde afirma que “el coronel Perón es un nuevo Yrigoyen. [...] Veo al coronel Perón como a un hombre providencial. Creo que las masas —que ya lo adoran— así lo van comprendiendo, con su formidable instinto. Es un conductor de hombres, un caudillo y un gobernante de excepción. Aquí donde tanto faltan los hombres de gobierno, pues la verdad es que ningún partido tiene hoy una gran figura, la aparición inesperada de este soldado que posee la intuición maravillosa de lo que el pueblo necesita es un evento trascendental”.

Aunque menos vehemente, ya en enero de 1944 monseñor Gustavo Franceschi ensalzaba la labor del coronel, en momentos en que defiende al gobierno de las acusaciones de totalitarismo desde las páginas de *Criterio*, con argumentos que pare-

cían en ese entonces válidos: "...entrometerse en la familia, en lo religioso, en la vida doméstica? Una de las características del totalitarismo es la organización gremial única y establecida por el Estado, la profesión organizada de arriba hacia abajo y como institución estatal; ahora bien, hace poco que el coronel Perón, secretario de Previsión y Trabajo, proclamaba la sindicación libre, abría ampliamente las puertas de sus oficinas a las instituciones profesionales fundadas por iniciativa particular, y tomaba medidas para robustecer su acción. Nada hay que tenga sabor a totalitarismo en el actual gobierno". No son casuales, entonces, la actitud de Gálvez y menos aún la de su esposa, Delfina Bunge, que publicará, también en *El Pueblo*, un muy sonado artículo donde traza el paralelo entre las masas que seguían a Cristo en Palestina y las reunidas por Perón el 17 de octubre, en abierto contraste con su medio cultural, donde no se ponían las esperanzas en "un caudillo" "adorado por las masas". Esa adoración pasaba desapercibida y será descifrada después del 17 de octubre como réplica de los muy parecidos sentimientos de las masas italianas o alemanas y, más generalmente, como manifestación de la temida era de las masas.

Si de "comprender el peronismo" se trata, es entre quienes no tienen como prioridad las instituciones democráticas donde se encuentran los que primero separan el grano de la paja y, advirtiendo el contenido social que va adquiriendo el gobierno militar, se pronuncian a favor o en contra de Perón. La intelligentsia liberal, en cambio, aterrada no sin razón por la experiencia europea, percibe ante todo cuánto de no democrático parece prometer el gobierno de junio. No importa solamente reconstruir la manera como el peronismo podía ser interpretado, esto es, colocarse en el lugar de los actores; importa también reconocer cuánto de grave y trágico tuvieron las experiencias totalitarias europeas y no desdeñar, como tan a menudo se hace, la perspectiva de su extensión a otras latitudes, o su recreación en otras latitudes tan poco tiempo después de la rendición del Reich.

PERONISMO POPULAR Y ANTIPERONISMO INTELECTUAL: ¿DOS CONFIGURACIONES OPUESTAS?

Es probable que el pasaje del "problema entre 'libertad' o 'tiranía', entre Rosas y Urquiza, entre 'democracia' y 'totalitarismo' " al "campeonato entre la 'justicia social' y la 'injusticia social' " según la célebre fórmula peronista de febrero de 1946 haya sido la operación discursiva que permite comprender la adhesión al peronismo. Pero si tal operación ha podido ser juzgada como un elemento explicativo del apoyo popular (y, más aún, de la constitución misma de la entidad 'pueblo'), está claro que no tuvo un éxito comparable en los medios intelectuales liberales de la época. Quizá sensibles a una redefinición que devaluaba la oposición entre "libertad" y "tiranía", no se vieron por eso "expropiados" del tema democrático. Muy por el contrario, persistieron en ver en Perón un dirigente demagógico y luego, en su gobierno, una tiranía que en términos contemporáneos se denominaría un régimen autoritario.

Este empecinamiento se explica, en primer lugar, por las dificultades que encontraban para disociar a Perón del gobierno militar, en el cual habían dominado grupos ultranacionalistas católicos, corporativistas y muy evidentes simpatizantes del Eje. Si esos intelectuales hubieran leído o escuchado los discursos de Perón, lo cual es poco probable, habrían observado que durante todo el período que precede a las elecciones de 1946 el coronel habla siempre en nombre de la Revolución del 4 de Junio, y lo seguirá haciendo por mucho tiempo.

Puede decirse que el antiperonismo de los intelectuales liberales (y no sólo el de ellos) era, en ese sentido, anterior a la aparición pública de Perón. O, al menos, que mucho debía hacer éste para borrar su identificación con un gobierno militar de muy dudosas credenciales democráticas, y no lo hizo.

Por otra parte, las políticas emprendidas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión ofrecían demasiadas similitudes con empresas corporativistas europeas como para facilitar la comprensión de cuánto había en ellas de ruptura de viejas jerarquías. El componente popular del peronismo, por último, no llevaba necesariamente a los intelectuales democráticos a cambiar su óptica, ya que tanto el régimen fascista como el to-

talitarismo nacionalsocialista habían sido conducidos también por líderes "adorados" por las masas populares.

Esta manera de ver las cosas era casi inevitable en esos años. Ni la orientación del gobierno de junio ni la de la oposición eran disociables de la escena internacional. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial se hace más evidente la relación entre política nacional y política internacional: se discute y se toma partido según la adhesión a los aliados o al Eje. La importancia de los debates y conflictos que tenían lugar en Europa era más notoria y más antigua en los medios letrados, tanto de derecha como de izquierda, y la Guerra Civil Española vino a seccionar el mundo intelectual, polarizando fuerzas también en la Iglesia, donde cada católico fue llamado a tomar posición.

Pero si el espacio internacional imponía a los intelectuales retículas de interpretación de la situación argentina, nada permite afirmarlo para las masas populares. Las interpretaciones del apoyo obrero al peronismo pueden por lo tanto, como lo han hecho, dejar de lado sin inconvenientes mayores la escena internacional. En efecto, los sectores populares estaban muy escasamente interesados y probablemente muy poco informados del ascenso del fascismo y del nazismo o de los avatares de la guerra. Cuando no fue así, y es el caso de dirigentes sindicales socialistas y comunistas, éstos también reaccionaron a las primeras tratativas de Perón y de Mercante con "una mezcla de interés escéptico y recelo", allí también, señala Juan C. Torre, "Perón era percibido, sobre todo, como una figura del régimen militar y, dentro de éste, formando parte de la fracción de los coroneles pro nazis".

A diferencia de la vasta mayoría de las clases populares, entonces, para el conjunto de los intelectuales el gobierno de 1943 y la figura del coronel Perón eran literalmente ilegibles fuera del contexto internacional. Perón vino así a incrustarse en un sistema de oposiciones preconstituido. En este sentido, los orígenes del peronismo popular y del antiperonismo intelectual fueron esencialmente asimétricos. El antiperonismo de la intelligentsia no nació como el espejo invertido de los componentes populares del peronismo, como sí lo fue en cambio el de los sectores patronales, que veían en los nuevos derechos obreros "desorden", "indisciplina" y "eliminación de la jerarquía del patrón".

"Los orígenes del peronismo" y "los orígenes del antiperonismo" estuvieron, además, desfasados en el tiempo. El indio mataco entrevistado por Scalabrini Ortiz podía responder "Estando bien. Estando un coronel Perón... Patrón pagando... Indio cobrando...", y ecos parecidos pueden encontrarse en los medios obreros. Es indiscutible que los orígenes del peronismo se encuentran en las nuevas políticas sociales pero no hay razones para concluir que se encuentran también allí los orígenes del antiperonismo en el ámbito de la cultura. No se comprende el peronismo que se expresa el 17 de octubre sin los meses previos de la Secretaría de Trabajo y Previsión; el antiperonismo de la intelectualidad democrática que emerge en mayo, en cambio, cristalizará como tal recién el 17 de octubre. Casi dos años, decisivos para la historia de la Argentina moderna, separan el peronismo de las masas populares del antiperonismo de los intelectuales.

Es innecesario volver a recordar las reacciones provocadas por el 17 de octubre. "Horda de desclasados", "lumpenproletariado", "malón peronista", "el candombe", que se lavaba "las patas en las fuentes", son algunas entre tantas figuraciones del pueblo en la Plaza en la mirada del Partido Comunista, el Partido Socialista o la gran prensa. Era nuevamente la barbarie de los caudillos, el naziperonismo o una combinación de ambos; así lo resume José Luis Romero el 3 de diciembre de 1945, cuando se abre la contienda electoral con partidos reorganizados: "Ciudadanos: Un fantasma recorre la tierra libérrima en que nacieron Echeverría y Alberdi, Rivadavia y Sarmiento: el fantasma fatídico que se levanta de las tumbas apenas cerradas de Mussolini y Hitler. Sólo la movilización de la ciudadanía puede disiparlo, y el Partido Socialista, que está empeñado en esa lucha, saluda a la Universidad por su conducta heroica y convoca a sus hombres para cubrir sus filas".

No se equivocaba Perón cuando afirmaba que la oposición —y en ella la intelectualidad— veía un "problema entre libertad o tiranía, entre Rosas y Urquiza, entre democracia y totalitarismo", antes que tales sospechas parecieran confirmarse. Pero el "campeonato entre la justicia social y la injusticia social", la verdadera alternativa según el candidato, estaba demasiado entreverado para la intelligentsia con la herencia de un gobierno que tan tardíamente había roto con el Eje.

Los escritores en favor de la Unión Democrática

"Los que suscriben se dirigen a sus conciudadanos para formular la siguiente declaración:

Desde el movimiento militar del 4 de junio de 1943 la libertad de expresión y de pensamiento ha sido castigada y perseguida como nunca pensamos que pudiera serlo a esta altura del desenvolvimiento del país, en abierta pugna con la tradición argentina y en contra de la Constitución Nacional.

Se ha destituido de sus cargos y agraviado oficialmente a quienes pidieron democracia efectiva y solidaridad americana.

Se ha encarcelado, confinado y torturado a obreros y estudiantes por el delito de reclamar el imperio de la Constitución y de las leyes.

Se ha exonerado a profesores por declararse en solidaridad con quienes protestaron frente a los atentados cometidos contra aquellos que celebraban la victoria de las Naciones Unidas.

Se ha arrestado, sin causa alguna, a rectores de universidades, escritores, artistas y hombres de gran significación en la vida de nuestra cultura.

Se ha establecido la censura de la prensa y de la radiotelefonía y de la propaganda cívica y se han suspendido y clausurado diarios y revistas.

Se han disuelto organismos que no tenían otro fin que articular la adhesión de la mayoría del pueblo argentino a los ideales de las naciones que luchaban contra los países totalitarios y se han realizado actos de persecución racial.

[...]

En las próximas elecciones habrá que optar entre una tendencia que proscribe y escarnece la libertad de expresión y de pensamiento y otra que la hace posible. Nada menos que eso es lo que va a decidirse en esta terrible hora de nuestra historia [...]"

Firman, entre otros: Octavio R. Amadeo, Abelardo Arias, Leónidas Barletta, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, José P. Barreiro, Armando Braun Menéndez, Silvina Bullrich, Carlos Alberto Erro, Samuel Eichelbaum, Raúl González Tuñón, Alfonso de Laferrere, Alberto Gerchunoff, Eduardo Mallea, Homero Manzi, Julio Payró, Victoria Ocampo, María Rosa Oliver, Ulyses Petit de Murat, Ernesto Sabato, Álvaro Yunque.

La Prensa, 1° de febrero de 1946.

Las universidades

Como vimos, en el ámbito universitario no resultaba evidente la diferencia entre el régimen de junio y el nuevo movimiento promovido desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Diferencia que se hizo aun menos perceptible el 30 de abril de 1946, dos meses después de las elecciones que dieron el triunfo al coronel Perón, cuando Farrell decidió la intervención de las universidades. No contribuyó tampoco a la clarividencia de los universitarios el nombramiento como interventor en la Universidad de Buenos Aires del antiliberal militante doctor Oscar Ivanissevich, acompañado por un equipo heterogéneo: Carlos Astrada, Tomás Casares, Agustin Nores Martínez. Para este eminente cirujano, que será promovido por Perón al puesto de ministro de Educación en 1948, el "esquema fundamental y constructivo: Hogar, Familia, Patria y Dios" había sido "destruido poco a poco por los librepensadores", lo cual lo llevaba a concluir que, como "no pudieron poner en lugar de esas ideas directrices otras equivalentes, entregaron al hombre a sus instintos primos. Y el hombre entregado a esos instintos, sin hogar, sin Dios y sin bandera, es, sin duda señores, inferior a la bestia". En cuanto a la Universidad, consideraba en 1946 que "La Reforma Universitaria agregó un veneno violento, el cogobierno estudiantil, que malogró sus buenas iniciativas. El cogobierno universitario no puede ser sino el resultado de una mentalidad perversa e inconsciente. Sostengo que el cogobierno estudiantil establece una promiscuidad perniciosa entre profesores y alumnos". Menos contundente, el doctor Felipe Pérez informaba sobre los resultados de su gestión como interventor de la Universidad de Córdoba que "si esa fuerza (la Universidad) no se orienta dentro de los requerimientos de la nueva conciencia político-social de la Nación, su influencia resulta perniciosa en grado sumo".

A lo largo de 1946 se suceden los despidos de docentes, las suspensiones y expulsiones de alumnos; para quebrar la huelga de la FUA el gobierno decide suspender por dos años a los alumnos que no se presentasen a rendir examen en diciembre. Las universidades perdieron en pocos meses el 70% de sus do-



Oscar Ivanissevich inaugura la red escolar de radiocomunicaciones en la Escuela Industrial N° 7, 1948.

centes y un tercio del cuerpo profesoral al finalizar el año 1946; los profesores cesanteados fueron 423 y los renunciantes 823; las cifras que proporciona Félix Luna para 1946 son las siguientes: en Buenos Aires renunciaron 116 docentes y 32 fueron cesanteados, en Córdoba las cifras son 265 y 63, en La Plata 102 y 141, y las proporciones fueron similares en Cuyo, el Litoral y Tucumán. Buena parte de las renuncias se debió a la presión ejercida sobre los profesores para aprobar sin mayores exigencias a los alumnos que se presentaran a dar examen durante la huelga universitaria. Este proceso provocó una fractura profunda entre quienes ocupaban desde ese momento puestos de dirección y quienes resultaban marginados de las instituciones oficiales, los que veían quebrada una carrera académica que había seguido hasta entonces un curso previsible. Estos intelectuales, cuando no eligieron el exilio, buscaron crear lugares de supervivencia intelectual así como fuentes alternativas de ingresos; para ello fue providencial que muchas de las principales editoriales pertenecieran a opositores del gobierno: durante la década peronista se desempeñaron como

directores de colección, traductores o correctores de pruebas en Losada, Abril, Emecé, Sudamericana, Hachette, Kraft, El Ateneo; la editorial Peuser congregó a muchos de los expulsados del Museo Etnográfico y del Instituto de Geografía en la preparación de *Argentina: suma de geografía*.

Con un cuerpo docente renovado y con las organizaciones estudiantiles declaradas fuera de la ley, comienza un período de conformismo pasivo apoyado sobre una reorganización administrativa, la ley universitaria 13.031 sancionada el 9 de octubre de 1947. Por ella se suprimió gran parte de lo adquirido por la Reforma, en especial la participación de los estudiantes en la conducción de la institución y la elección de las autoridades por los profesores: los rectores fueron nombrados directamente por el Poder Ejecutivo y los decanos designados por los rectores.

La ley no dejaba duda alguna acerca del papel destinado a la enseñanza superior: "Las Universidades no deben desvirtuar en ningún caso y por ningún motivo sus funciones específicas. Los profesores y alumnos no deben actuar directa ni indirectamente en política, invocando su carácter de miembros de la corporación universitaria, ni formular declaraciones conjuntas que supongan militancia política o intervención en cuestiones ajenas a su función específica, siendo pasible quien incurra en trasgresión a ello de suspensión, cesantía, exoneración o expulsión, según el caso".

El propósito anunciado por la ley universitaria —despolitizar la Universidad— no se vio sin embargo confirmado por el comunicado de agosto de 1946, que hacía saber que los puestos de la administración nacional serían llenados por quienes compartieran las ideas gubernamentales y que se concretó poco más tarde en la exigencia de la ficha partidaria como condición para todo nombramiento en la función pública. Esta incursión manifiesta de la política, que repercutió primero profundamente en el ámbito de la educación primaria, secundaria y universitaria, tuvo, como en otros regímenes, consecuencias ambiguas. Agudizó enconos y fue, para algunos, un problema de conciencia, pero más generalmente la ficha de afiliación se convirtió en un papel con escaso significado, un objeto más en un espacio público cubierto por bustos y fotografías de Perón y Eva Perón.

Una nueva operación se puso en marcha a comienzos de los años cincuenta enderezada a debilitar la oposición en los claustros: el peronismo creó una organización propia, la Confederación General Universitaria (CGU), que no logró concitar —a pesar de las ventajas materiales que ofrecía— más que un interés limitado. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires una investigación efectuada en 1954 muestra que mientras el Centro Reformista contaba con aproximadamente 4.000 afiliados, la CGU no llegaba a más de 200. En la Facultad de Arquitectura las cifras fueron de 1.600 y 400 estudiantes, respectivamente. El efímero cambio de actitud del Partido Comunista hacia el régimen en 1952, que obligaba a sus militantes a incorporarse a la organización gubernamental, no multiplicó por cierto notoriamente sus efectivos.

El gobierno recurrió, frente al continuo hostigamiento estudiantil, a procedimientos nuevos para la época: exigencia de



Delegados del primer Congreso de la CGU en una recepción brindada por el presidente Perón y Eva Perón en la quinta presidencial de Olivos, 3 de diciembre de 1950.

un certificado policial de "buena conducta" para proseguir los estudios y policías de civil omnipresentes en aulas y oficinas universitarias. Como resume Halperín Donghi, si en 1944 la Universidad era para el nuevo régimen un problema político antes que ideológico o cultural, el peronismo terminó por ver en ella sobre todo un problema policial.

Esto no significa que el peronismo careciera de ideas acerca de la Universidad. La creación de la Universidad Tecnológica Nacional, del régimen de dedicación exclusiva para docentes, la proliferación de institutos, la gratuidad de la enseñanza, el aumento de estudiantes, indican tanto la apertura de la Universidad como la intención, no siempre llevada a la práctica, de limitar la importancia de las clases magistrales atribuyendo un papel mayor a la investigación y a las prácticas de seminarios. El Presidente así lo asegura en el discurso de noviembre de 1947, cuando las universidades le otorgan el doctorado "Honoris Causa por su obra en favor de la cultura nacional": "(Es) necesario situar en el primer plano de la actuación universitaria la extensión y la investigación científicas. Basta leer la nueva ley para comprender que es ésa su idea madre. En la Universidad no ha de haber lagunas entre los albores de nuestra personalidad política independiente y la historia que arranca hace más de tres milenios, de los berroqueños riscos pirenaicos y carpotevetónicos y, al mismo tiempo, organizar la investigación científica" y concluye: "Entre un arquitecto que sepa construir un hermoso rascacielos y otro que ponga sus conocimientos al servicio de la solución del problema social de la vivienda es éste mucho más útil que aquél. Lo mismo se puede decir de todas las actividades profesionales".

En el ámbito de la educación pública se confirma el lugar otorgado a la Iglesia. En 1946 se formaliza la enseñanza obligatoria de la religión, la Virgen de Luján es entronizada patrona de las escuelas, se colocan crucifijos en las oficinas del Ministerio de Educación y se incorporan ceremonias religiosas a las conmemoraciones cívicas. El régimen privilegia sobre todo la enseñanza primaria y secundaria, donde se hacen sentir muy nítidamente tanto el retroceso del laicismo como el avance del adoctrinamiento peronista. Son conocidas las nuevas obligaciones de los docentes primarios y secundarios: comentar los discursos más importantes, utilizar *La razón de*

mi vida como texto, hacer dibujar a los alumnos las empresas nacionalizadas, utilizar la materia "Educación ciudadana" para la propaganda gubernamental, etc. En poco diferían en realidad las escuelas del espacio público, ambos consagrados a la celebración de las realizaciones gubernamentales, de Perón y Eva Perón en simbiosis con la omnipresente simbología católica. Si la revista *Criterio* esquiva temas políticos durante los años peronistas, no sorprende la participación activa de intelectuales católicos en empresas culturales oficiales —naturalmente hasta el conflicto que opuso al gobierno y la Iglesia en 1954—. Tales intelectuales aportan los nombres más consagrados al reducido núcleo de intelectuales peronistas o próximos al peronismo del cual constituyen una proporción importante.

La penetración y sobre todo la eficacia de la propaganda del régimen fue infinitamente menor en la Universidad que en la enseñanza primaria y secundaria. Aunque no faltaban las cátedras de Filosofía en las que el tomismo era de regla, o de historia donde la benevolencia hacia Rosas era altamente conveniente, y a pesar de la introducción en 1952 de cursos de formación política obligatorios, escasas eran las exigencias de conformidad en lo que concernía al contenido de la enseñanza. El peronismo excluía la oposición política abierta y se contentaba generalmente con signos exteriores de lealtad: firma de iniciativas como el doctorado Honoris Causa para Perón, presencia en actos públicos u observación del duelo por la muerte de Eva Perón. Si las manifestaciones de fidelidad al gobierno fueron exteriores ello no disminuyó su significación, como lo atestiguan los "puntajes" que les fueron atribuidos en los procesos realizados después de 1955 con el fin de evaluar el comportamiento de los docentes.

Conviene recordar la celebración del importante Congreso Internacional de Filosofía en 1949 por iniciativa del presbítero doctor Juan Sepich, director entonces del Instituto de Filosofía de Mendoza. Al congreso, donde Perón hace una larga intervención, asistieron o enviaron contribuciones nombres considerables: Nicola Abbagnano, Nicolai Hartmann, Martin Heidegger, Benedetto Croce, Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Jean Hyppolite, Bertrand Russell; Hans Georg Gadamer lo recordará años más tarde como un acontecimiento decisivo en su

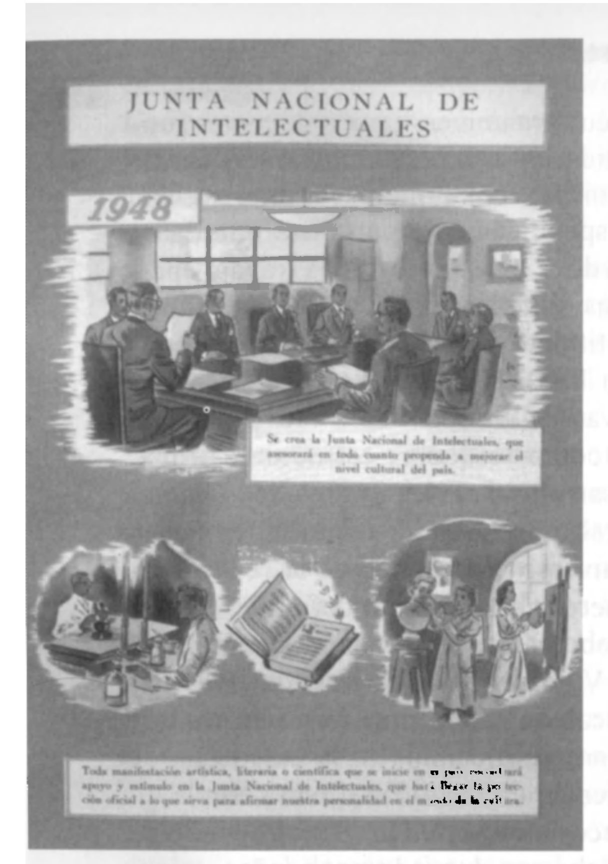
vida intelectual. Asistieron, entre otros, Carlos Astrada, Luis Juan Guerrero, Miguel A. Virasoro, Octavio Derisi, Carlos Cossio, Héctor Llambias, Alberto Palcos, Ismael Quiles, Alfredo Poviña, pero entre los 93 congresistas argentinos no se contaba naturalmente ningún representante de la intelectualidad liberal antiperonista.

Si se encuentran nombres poco conformes con una leyenda negra de la Universidad peronista como los de Luis Guerrero, Claudio Sánchez Albornoz o Carlos Astrada, en lo esencial es cierto que la enseñanza se abrió al pensamiento católico más reaccionario, a profesores sin otra legitimidad que su profesión de fe política —que la oposición había bautizado los "flor de ceibo" o los "residuales"— y, más simplemente, a docentes (adjuntos, jefes de trabajos prácticos) que veían una oportunidad inesperada de promoción. La suerte de las academias no fue muy distinta. En la lista de las autoridades nombradas en 1948 figuran nombres que para nada sugieren preferencias políticas, como el de Adolfo Bioy o el de Ricardo Levene, con credenciales profesionales y culturales reconocidas y reclutados en medios tradicionales. Pero las academias no salieron indemnes de las políticas gubernamentales: en septiembre de 1950 fue adoptado el proyecto de "reorganización de las academias" y el decreto fue promulgado dos años más tarde. La Academia de Letras, que había rechazado la inclusión del término "justicialismo" en el diccionario, fue intervenida cuando se negó a proponer la candidatura de Eva Perón para el Premio Nobel de Literatura. Si el objetivo era "imbuir con sentido peronista a la cultura del país", como lo sostiene el diputado Filippo, Diana Quatrocchi-Woisson anota, para el caso de la Academia de Historia, que el resultado no fue introducir una nueva concepción de la historiografía sino simplemente terminar con toda actividad: los académicos fueron echados pero nadie vino a reemplazarlos. Destino similar al de las otras academias hasta 1955. La mediocridad reinó en una Universidad reticente a la innovación, particularmente en humanidades, al tiempo que, articulado a ese control autoritario que hacía las veces de política cultural, el catolicismo tradicional expresaba las opciones efectivas del peronismo.

Los intelectuales peronistas

Así, el régimen cedió la cultura universitaria a docentes rutinarios o a intelectuales solidarios con los componentes de derecha y católicos del peronismo, componentes que provenían menos de una ideología específicamente peronista que de su muy evidente deuda con la doctrina católica. Dos trabajos permiten evaluar las tendencias dominantes en sociología. El primero es obra del profesor titular de Sociología de la Universidad de Cuyo, publicado en 1952: "Hay que descubrir aquellas leyes generales constitutivas de modos vivenciales a los que técnicamente designamos como 'esquema estructural primario' que no son sino un desarrollo de la ley interna de lo humano, que llamamos ley moral o ley natural, como muy bien lo saben quienes ven en el universo la totalidad de lo real referida, como a su origen primero y a su destino definitivo, al Ser Perfectísimo, substancia sobrenatural increada, a Dios". En el segundo, el profesor J. A. Villoldo, de la Universidad de Buenos Aires, revela la significación de las transformaciones que tienen lugar en la Argentina, verificando "... la existencia de una sociología latinoamericana, en conexión directa con la civilización progenitora, greco-latino-cristiana, de origen ibérico [...] que a estas horas lucha con denuedo por acuñar, en superación sintética, la estructura de Tercera Edad que salve, reconcilie y transfigure los elementos más nobles del Coloniaje y la Emancipación, de la Edad Media y la Modernidad y ello mediante la afirmación del raciovitalismo grecorromano católico, manifiesto en las soluciones económicas, políticas y sociales que están a la vista".

Pero no todo fue peronismo tomista. Fuera de la Universidad, y a medida que transcurría la administración peronista, militantes estudiantiles provenientes de las izquierdas advertían la ambigüedad de su oposición a una dictadura con amplias bases populares; más decididos, algunos escritores y ensayistas con militancia política dieron su apoyo crítico al peronismo combinando diversamente marxismo y nacionalismo. Comunistas como Juan José Real y Rodolfo Puiggrós, o de manera más indirecta Jorge Abelardo Ramos, desde la izquierda trotskista, quien después de publicar *América Latina, un país*, hace conocer *Crisis y resurrección de la literatura ar-*



Propaganda oficial.

gentina en 1954 en su editorial Indoamérica. Política y cultura se alinean allí prolijamente en dos columnas: "Imperialismo" y "Emancipación", siguiendo en mucho la tradición del nacionalismo revisionista. Sin embargo, se sabe, prácticamente todo lo que contaba en el campo cultural argentino se ubicó en el antiperonismo. La lista de unos cincuenta intelectuales peronistas cuidadosamente establecida por Ernesto Goldar es ya una enumeración canónica. Aun incluyendo artistas populares y "hombres de tango y lunfardo" (Homero Manzi, José Gobello, Tulio Carella, Cátulo Castillo), muestra que se trataba de una porción extremadamente limitada en la cual, salvo excepciones, son escasos los intelectuales consagrados, y los universitarios reconocidos brillan por su ausencia.

Pero si la intelectualidad antiperonista era ideológicamente heterogénea, el grupo de intelectuales peronistas no lo fue menos aunque compartían, sí, una muy escasa adhesión a las instituciones democráticas. Reúne escritores católicos (de Leopoldo Marechal, Constancio C. Vigil y Arturo Cambours Ocampo a Ignacio Anzoátegui), historiadores revisionistas, nacionalistas o provenientes de FORJA (Ramón Doll, Fermín Chávez, Eduardo Astesano, J. J. Hernández Arregui, R. Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche), miembros del grupo Boedo (Elias Castelnuovo, Nicolás Olivari, César Tiempo) pero también un Juan José de Soiza Reilly o un Enrique Pavón Pereyra. La lista de colaboradores en los suplementos literarios de *La*

Prensa a partir de 1951, cuando el diario es expropiado y pasa a estar bajo control de la CGT, permite citar nombres cercanos al Partido Comunista no manifiestamente peronistas pero cuyas eventuales diferencias con el régimen no alcanzan a equilibrar el beneficio de ver sus textos publicados: Atilio Castelpoggi, Enrique Amorim, Jorge De Lellis, Enrique Wernicke, Juan L. Ortiz... Que no se trataba de escritores o artistas claramente identificados con el peronismo parece mostrarlo la ausencia de la mayoría de ellos en las empresas intelectuales oficiales. Para dirigir la Junta Nacional de Intelectuales, fundada en 1948 para promover la creación artística y científica, fueron convocados Gustavo Martínez Zuviría, Carlos Ibarguren y Delfina Bunge de Gálvez, católicos nacionalistas de renombre. El intento fracasó al igual que otros similares, como el de insuflar nueva vida a la Asociación Argentina de Escritores (AADE), creada por escritores nacionalistas en oposición a la SADE: "Abundaban los autores de textos escolares y escaseaban los hombres de auténtico prestigio, casi todos los cuales estaban en SADE", recuerda el mismo Manuel Gálvez. Como señala Plotkin, el fracaso es reconocido, en los hechos, por la inclusión de J. L. Borges y Victoria Ocampo en una lista de los mejores escritores argentinos publicada por la *Síntesis de las letras argentinas* editada por la Secretaría de Prensa y Difusión en 1952. Y no fueron los Premios al Mérito en el arte, la ciencia y la técnica establecidos por ley a quienes se destacaran en dichos campos en conformidad con "los postulados de la doctrina nacional" los que podían proveer una consagración reconocida por el campo cultural argentino.

Es poco seguro que Perón estuviera particularmente interesado en contar con una intelectualidad adicta más allá de su muy evidente voluntad de eliminar voces discordantes. En 1950, su discurso dirigido a escritores asociados a la Confederación Argentina de Intelectuales plantea con nitidez la división entre hombres de acción y hombres de concepción, afirmando la primacía de los primeros —entre los cuales naturalmente se cuenta—. La acción, las reformas, deben venir primero ya que, "como decía Alejandro el Grande 'Yo ocupo el terreno, mis abogados después dirán por qué' ". Las ideas son sin embargo importantes: se trata de "la doctrina" "una síntesis que no es necesario enseñar, que es necesario inculcar, que se

puede inculcar y que estamos inculcando al pueblo" y que "ha salido ya, diríamos, de las fuerzas primarias de la prédica: los misioneros de Perón, como se llaman los obreros, porque mi acción ha sido primero ahí. No hemos podido todavía invadir, diríamos así, algunos horizontes, especialmente el de los intelectuales". ¿Cuál es la misión de éstos? El general es muy claro: "No quiere decir que yo infravalore la importancia de la prédica de nuestra doctrina que ahora es más importante que todo lo demás, porque todo lo demás está hecho, la persuasión debe venir por la persuasión colectiva que he empezado con los misioneros de Perón. Pero ahora necesito a los predicadores de nuestra doctrina".

Prédica y organización. Efectivamente, manifestó desde muy temprano que también aquí como en todos los otros ámbitos de la vida social, la organización era necesaria, "se piense como se piense". Organización que la Junta de Intelectuales debía proveer, como la Comisión Nacional de Cooperación Intelectual que publicara *Argentina en marcha,* con trabajos de Marechal, Astrada y Guglielmini. Pero desde el punto de vista de sus protagonistas fueron también intentos de crear sistemas de legitimidad alternativos a los de la intelectualidad liberal y democrática; la revista *Sexto Continente*, fundada en 1949 por Alicia Eguren y Armando Cascella, encarnó más acabadamente este proyecto aunque no con más éxito. La publicación frecuente de autores latinoamericanos no impidió que terminara siendo una "mezcla confusa" de nacionalismo, catolicismo derechista, nativismo y apoyo al régimen, como lo ejemplifican diversos textos, entre ellos el siguiente, de 1949: "Pues es una enorme mentira que la dignificación de la Patria y su resonancia en el mundo exterior se halla únicamente a cargo de los artistas e intelectuales [...] Para nuestro criterio actual, el primer ganadero que se fue a Inglaterra a importar toros de raza era un soñador de tanta alcurnia, y su obra fue tan patriótica y trascendente como pudo serlo en su hora la de Rivadavia, Ameghino o Leopoldo Lugones".

Los años peronistas no fueron ciertamente propicios para los intelectuales liberales o de izquierda, pero el peronismo no creyó tampoco necesario colocar en puestos de decisión a aquellos intelectuales de cuño nacionalista popular que habían saludado su advenimiento y prefirió convocar a conservadores

tradicionales o católicos para integrar el aparato judicial y dirigir la enseñanza. Los miembros de FORJA, grupo yrigoyenista formado en 1935 que adhirió inmediatamente al peronismo en ascenso, quedaron relegados a los márgenes del movimiento y del poder. Manuel Ugarte, venerado mentor del grupo, fue nombrado embajador en México y Atilio García Mellid enviado a Canadá. Arturo Jauretche resultó designado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, miembro del grupo renovador que rodeara al gobernador Mercante durante el relativamente breve lapso de su gobernación, junto con Miguel López Francés, Arturo Sampay y Julio C. Avanza. Scalabrini Ortiz dirá más tarde: "Durante la época de Perón me tuvieron con la boca tapada. Ni un diario me abrió sus columnas. Ni una revista. Ni una tribuna. Sólo alcancé a dar tres conferencias en un centro obrero y Borlenghi lo hizo clausurar... [...] Es claro que mi obra tenía un precio: el precio que siempre pongo, la absoluta libertad para escribir, y el gobierno de Perón hubiera sido constantemente hostigado por mí, para bien de Perón y del país". Y Jauretche: "Tampoco bajo el régimen que ahora llaman de la dictadura [...] porque estaban prohibidas las ideas y el pensamiento que profesaba, lo tuve prohibido bajo la vigencia de esas ideas porque la política pequeña del movimiento triunfante en el 45 no toleraba que llegasen hasta el pueblo los hombres que pudieran tener alguna independencia".

En cuanto a los historiadores revisionistas, Ernesto Palacio, diputado nacional sobre quien debía recaer la presidencia de la Cámara, fue desplazado por el general Perón, quien le prometió la dirección de un gran diario que nunca apareció; presidirá durante un breve período, entre 1946 y 1947, la Comisión Nacional de Cultura y diversos autores registran su muy módica actuación. Vicente Sierra, historiador rosista, reemplazará durante un año, en 1946, a Ravignani como director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Buenos Aires y Ramón Doll, agente fiscal de la provincia de Buenos Aires a partir de 1946, no tendrá ningún rol importante durante el gobierno peronista. Puede recordarse en fin que Perón ordenó a los peronistas que se abstuvieran de participar en los debates entre revisionistas y antirrevisionistas, y se ha subrayado a menudo que bautizó los ferrocarriles nacionalizados con los nombres de los principales representantes de la "historia oficial".

La cultura bajo la dictadura

El advenimiento del peronismo constituyó indudablemente una mutación cultural —en su sentido amplio— en la historia argentina. Pero no puede decirse que haya marcado ostensiblemente el espacio intelectual. Es que en el plano de la cultura docta el peronismo carecía de una estrategia propia y no contaba ni siquiera con una ideología que permitiera decidir en conflictos propiamente culturales. Caracterizado por un antiintelectualismo más pronunciado aún que el de otros populismos, se limitó, esencialmente, a una gestión autoritaria del espacio público, que su decisión de no compartir el control de los medios masivos puso rápidamente de manifiesto.

Los grandes diarios, y en esto coincidían con las universidades, habían estado contra Perón durante la campaña electoral; ya presidente, sólo contaba con el apoyo de *Democracia*, *El Laborista* y *La Epoca*. El gobierno procedió entonces, por diversos medios, a controlar los medios de prensa y la radio. Retomaba así una política prácticamente inaugurada en el país por el gobierno de junio, y confirmaba buena parte de las sospechas de la intelectualidad democrática. Cuando Raúl Apold llega al frente de la Secretaría de Informaciones de la presidencia y, luego, con la creación de la "comisión Visca", quedan casi liquidadas las expresiones opositoras, generalizando el uso de alusiones o perífrasis. Al final del régimen, el imperio editorial oficial estaba integrado por 13 editoriales, 17 diarios, 10 revistas y 4 agencias informativas y el gobierno monopolizó la radio, entonces medio de comunicación por excelencia, que Perón fue el primer presidente en utilizar magistralmente.

¿En qué medida este autoritarismo se ejercía sobre los círculos intelectuales no oficiales? Se observa en realidad una suerte de compromiso de hecho basado en el respeto de los límites impuestos por una muy evidente censura dirigida a impedir la expresión de críticas políticas al gobierno. El régimen peronista no buscaba la sujeción ideológica de la cultura letrada. No se proponía tanto acallar las voces opositoras como mantenerlas al margen de manera que la palabra adversa era admitida o, mejor dicho, ignorada, mientras fuera públicamente inaudible. La revista *Sur*, por ejemplo, se permitió no escribir nada sobre la muerte de Eva Perón en 1952 y, dado que se había decretado

duelo nacional, se limitó a poner una banda negra en la tapa de la revista. Pero la amenaza gubernamental estaba siempre presente ya que los límites que separaban las publicaciones de los círculos opositores y la esfera pública eran vagos y cambiantes. La censura trazaba una frontera que algunos círculos restringidos podían transgredir recurriendo a alusiones o a referencias codificadas, que no se diferenciaban demasiado de idénticas precauciones tomadas por los medios de difusión que no habían pasado bajo el control gubernamental. Son conocidos los ejemplos literarios que mezclan oposición al régimen y desprecio por la nueva presencia popular. "Las puertas del cielo" donde Julio Cortázar describe peyorativamente un baile popular del Palermo Palace, la parodia del régimen a través de la descripción de un sangriento partido de fútbol en un cuento de Cortázar publicado por *Sur* en 1948, el de Bioy Casares, también en *Sur*, en 1954, donde el autor utiliza la historia de un escritor joven bajo el régimen de Rosas para establecer un paralelo con el régimen de Perón, y el cuento de Bustos Domecq (Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares) "La fiesta del monstruo" —el general Perón, nunca nombrado—, escrito en 1947 y publicado en *Marcha* en septiembre de 1955.

Pero es menos en estas críticas políticas oblicuas que en las muy directas al clima cultural reinante que se expresa la posición de *Sur*. Si durante los años 30 y comienzos de los 40 el tenor político de la revista residía en la defensa de valores democráticos y antifascistas, ahora se lo encuentra en la desazón ante la mediocridad cultural durante los años peronistas. Mediocridad que fue a la par de una impresionante ampliación de los consumos culturales: en el cine, fenómeno de masas, que llegó a cifras de producción nacional inéditas en la Argentina (158 películas entre 1947 y 1949) pero sin éxitos similares en cuanto a calidad, en la eclosión del tango y de la música folclórica tanto como en las funciones del Colón gratuitas o a precios reducidos; la industria editorial conoce un auge sin precedentes debido a la disminución de importaciones de libros españoles como consecuencia de la guerra y la multiplicación de libros y revistas fue paralela a la democratización del público lector. La orientación de la plástica oficial fue previsiblemente realista.

Si los gustos del régimen no impidieron las expresiones ori-

Ivanissevich sobre la pintura peronista

"Entre los peronistas
no caben los fauvistas
y menos los cubistas
abstractos, surrealistas.
Peronista es un ser
de sexo definido
que admira la belleza
con todos sus sentidos."

Del discurso del ministro de Educación en la inauguración del XXXIX Salón Nacional de Artes Plásticas, septiembre de 1949.

ginales en circuitos cerrados sobre sí mismos, la crítica a esa mediocridad y vulgaridad, no siempre disociable del rechazo a la masificación de la cultura, fue, como ha señalado Flavia Fiorucci, la vía elegida por *Sur* para expresar su oposición al régimen.

Pero el hecho es que *Sur* y *La Nación* aparecen regularmente, a pesar de encontronazos, finalmente menores, con el gobierno: la revista se vio obligada a reducir el número de páginas y su directora, Victoria Ocampo, fue brevemente encarcelada en 1953. *Realidad* e *Imago Mundi* se publican sin trastornos mayores, *Raigal* comienza sus colecciones en las postrimerías del período. Menos afortunada fue la historia de la Universidad Popular Alejandro Korn, de La Plata, organizada por intelectuales socialistas, que reunió profesionales, escritores y ensayistas que participaban también en *Imago Mundi*, El Colegio Libre o el Instituto Libre de Segunda Enseñanza.

El Colegio Libre de Estudios Superiores y la Sociedad Científica Argentina logran mantener sus puertas abiertas durante algunos años: en 1952 los cursos del Colegio fueron suspendidos en Buenos Aires (un seminario sociológico creado en el Colegio de Rosario pudo proseguir, sin embargo, hasta 1955) y en 1953 la Sociedad Científica se encuentra en estado de liquidación. El proyecto cultural del Colegio, fundado en 1930 para crear un espacio consagrado a "una educación superior prote-

gida de la reacción antirreformista de la universidad oficial", se transforma durante el peronismo: bajo la dirección de Arturo Frondizi, sus nuevas cátedras apuntan menos a la difusión que a la formación de un "Ejército de la cultura" y a la formulación de "un proyecto de largo plazo para el país". Abiertamente antifascista, el Colegio se había inscripto en la oposición al gobierno militar de 1943 y, luego, al peronismo (José Tamborini, candidato presidencial del frente antiperonista en 1946, había sido miembro de la dirección). La llegada de Perón al poder afectó tanto las actividades de la institución como la vida profesional de sus miembros, especialmente de los docentes: de los 26 profesores universitarios miembros del Colegio sólo 4 permanecieron en la Universidad.

El peronismo había dejado sobrevivir publicaciones con una circulación restringida pero la Universidad, institución pública por excelencia del espacio intelectual, difícilmente podía gozar de una tolerancia análoga. Puede afirmarse, empero, que los intelectuales de oposición fueron tratados por el régimen más como disidentes que como voces subversivas del *statu quo*. En ese espacio, cuyo volumen era ciertamente más limitado que el de la cultura popular, admirablemente servida por la radio, el cine y la prensa, se insertaron revistas universitarias como *Verbum*, *Centro* o *Contorno*. Oscar Terán ha mostrado convincentemente los puntos de confluencia del grupo que se constituye en la Universidad de Buenos Aires con temas y con miembros eminentes de *Sur* (Guillermo de Torre, Héctor A. Murena); los estudiantes también están conectados con profesores expulsados de la Universidad que tienen una visibilidad cultural y preocupaciones diferentes, a quienes convocan para formar parte de concursos organizados por sus revistas o centros. Se constituye una red cuyo mínimo común denominador es el antiperonismo, el interés por mantener viva la cultura gracias a lazos con la producción internacional y el intento de compensar la mediocridad de quienes controlaban las aulas. Esta red pone en comunicación la revista *Imago Mundi* —José Luis Romero, Francisco Romero, Roberto Giusti, Alberto Salas— y el Colegio Libre de Estudios Superiores (o el Instituto Libre de Segunda Enseñanza) que tienen no pocos nombres en común. Como recuerda Gino Germani, historiando la sociología argentina: "La institución del Colegio Libre de Estudios

Superiores adquirió un rol importante durante el régimen peronista. La mayoria de los intelectuales y profesores que habían dejado su cátedra en la Universidad estatal continuaron con sus enseñanzas en el 'Colegio' ".

A menudo sobre la base de instituciones preexistentes, se mantiene durante la década una vida intelectual extraestatal ubicada en el campo antiperonista; la dicotomía peronismo/antiperonismo consolidó la relación entre valores culturales y políticos, borrando muchas de las diferencias ideológicas entre los opositores al régimen.

Con características propias, el teatro independiente, "vocacional", se inserta también en ese campo. Sus comienzos pueden fecharse en la década del treinta, cuando Leónidas Barletta fundó el Teatro del Pueblo, buscando quebrar la hegemonía del teatro comercial. En las dos décadas siguientes el movimiento se hizo más importante, ganando en coherencia e influencia. El teatro La Máscara se fundó en 1939, y a fines de los cuarenta Alejandra Boero y Pedro Asquini crean el Nuevo Teatro; se agregan a ellos el Instituto de Arte Moderno, Fray Mocho y



Francisco Romero, tras renunciar a su cátedra en 1946, dicta clases en su casa por pedido de sus alumnos.

Los Independientes. Calificado de "fenómeno argentino curioso, casi de masas", el teatro "vocacional" representaba obras europeas y americanas contemporáneas y pudo proseguir con relativa tranquilidad sus actividades durante los años peronistas. Alrededor de esta actividad teatral se tejió una vida cultural progresista —con clara influencia del Partido Comunista— que constituyó una suerte de espacio comunitario de reconocimiento mutuo y una subcultura de oposición cuyo periódico cuasi oficial, puede decirse, fue el semanario *Propósitos* dirigido por el mismo Leónidas Barletta. Su público era "...una clase media que veía en el teatro independiente una forma silenciosa de oposición a Perón", como recuerda Kive Staiff en su entrevista con John King: "En un clima de oscurantismo cultural, estos teatros eran vistos como pequeños bolsones de resistencia y contaban con seguidores leales. Aunque Perón percibía esta oposición indirecta, no impuso una censura rigurosa y los teatros tuvieron mucha libertad".

Esta combinación de autoritarismo y permisividad ponía de manifiesto bastante exactamente el carácter de la política cultural del peronismo: censuraba a los intelectuales pero no legislaba, casi, sobre la cultura. Con esta relación singular entre política y cultura el régimen convertía a la cultura letrada en un espacio disidente.

BIBLIOGRAFÍA

Barbero, María I. y Devoto, Fernando: *Los nacionalistas*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1983.

Caimari, Lila: *Perón y la Iglesia Católica,* Ariel, Buenos Aires, 1995.

Ciria, Alberto: *Política y cultura popular: la Argentina peronista. 1946-1955,* Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1983.

Fiorucci, F.: "La revista *Sur* y el peronismo, 1945-1955", Tesis de licenciatura en Ciencia Política, Universidad de San Andrés, s/d.

Germani, Gino: "La sociología en la Argentina", en *Revista Latinoamericana de Sociología*, nº 4, 1968.

Halperín Donghi, Tulio: *Historia de la Universidad de Buenos Aires*, EUDEBA, Buenos Aires, 1962.

———: *Argentina, democracia de masas,* Paidós, Buenos Aires, 1972.

King, John: *El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta*, Gaglianone, Buenos Aires, 1985.

Luna, Félix: *Perón y su tiempo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1993.

Mangone, C. y Warley, Jorge A.: *Universidad y peronismo (1946-1955)*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1984.

Plotkin, Mariano: *Mañana es San Perón*, Ariel, Buenos Aires, 1994.

Puiggrós, Adriana (dir.): *Peronismo: cultura política y educación (1945-1955)*, Galerna, Buenos Aires, 1990.

Quatrocchi-Woisson, Diana: *Los males de la memoria. Historia y política en la Argentina*, Emecé, Buenos Aires, 1995.

Torre, Juan C.: *La vieja guardia sindical y Perón*, Sudamericana, Buenos Aires, 1990.

XI

Vicisitudes de una política exterior independiente

por JOSÉ PARADISO



Visita del presidente chileno Ibáñez a la Argentina.



La política exterior del peronismo no ha escapado al destino de ese fenómeno político en su conjunto. A pesar de todo lo que se ha dicho y escrito sobre su naturaleza y trayectoria, queda aún un amplio espacio para el análisis y la discusión. Quienes la han criticado y los que la han defendido lo han hecho involucrando un juicio sobre el peronismo todo. En ocasiones ella ha sido considerada una gran responsable de las desventuras argentinas posteriores, otras veces como la expresión de un razonable pragmatismo cuando no como la obra de un sagaz visionario. Probablemente ninguna de estas versiones sea la correcta, aunque cada una de ellas puede reclamar para sí una parte de la verdad.

ESPERANDO UNA NUEVA CONTIENDA. INCERTIDUMBRES Y FRUSTRACIONES

La formación profesional y los hábitos intelectuales de Juan Domingo Perón lo predisponían a una alta ponderación de las circunstancias internacionales, a las

que presumía de conocer bien. La misión que el Ejército le había asignado en 1939 para apreciar la situación del continente europeo había fortalecido esa perspectiva, del mismo modo que le había permitido sacar conclusiones sobre los rasgos dominantes de la época, sea sobre el lugar central que adquiría la temática social, el ascenso del intervencionismo estatal o las formas en que se desenvolvían las relaciones de poder en el mundo.

En primer lugar, estaba convencido de que aquella que terminaba al momento de iniciar su mandato no iba a ser la última guerra. En junio de 1944, en una célebre conferencia pronunciada en ocasión de la inauguración de la cátedra de Defensa Nacional en la Universidad Nacional de La Plata, en su carácter de ministro de Guerra, expuso sus puntos de vista sobre esta materia, los que se sustentaban, según sus palabras, en la posibilidad de haber asistido en Europa a la crisis más importante que había presenciado la humanidad. En esa conferencia sostendría que la guerra era "un fenómeno social inevitable", de manera que no había razón para que lo que siempre había ocurrido no siguiera ocurriendo. Tampoco les asignaba a las alianzas demasiadas chances para sostenerse después de la victoria contra un enemigo común: "Alguien tendría que demostrar inobjetablemente que los Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Rusia y China, en el caso de que las Naciones Unidas ganen la guerra, y lo mismo que Alemania y Japón en el caso inverso, no tendrían jamás en el futuro intereses encontrados que los lleven a iniciar un nuevo conflicto entre sí". Al margen de lo que podía decirse sobre un pronóstico de final abierto cuando ya se había producido el desembarco aliado en Normandía, lo más significativo era el pronóstico de lo que ocurriría desde la batalla final en adelante. Naturalmente, sus adversarios de adentro y de afuera del país presentarían estas apreciaciones como la confirmación de una posición que mostraba poco celo democrático al igualar los valores en pugna en la guerra.

Lo cierto es que, lejos de estremecerse ante la perspectiva de una nueva contienda, Perón depositaba su expectativa en las oportunidades que para el país podrían derivar de su estallido. En este punto, la cuestión de los alimentos ocupaba un lugar privilegiado. En realidad, la idea de que la condición de pro-

ductor de cereales y carnes constituía para la Argentina una carta de triunfo de valor estratégico siempre estuvo presente en las representaciones del líder del justicialismo, a tal punto que se la verá reaparecer en ocasión de su retorno en los años setenta. Ya desde los inicios de su carrera política argumentaba que en un mundo cada vez mas superpoblado, la necesidad primaria seria producir comida y que en la lucha económica por el futuro estarían fatalmente involucradas las regiones del mundo con grandes reservas territoriales. Para los años posteriores a la guerra, haciéndose eco de informes técnicos provenientes de organismos internacionales que describían una situación de emergencia y demandaban una coordinada expansión de la producción, los funcionarios gubernamentales pronosticaban un grave problema de abastecimiento agravado por la caída de la producción y una brusca declinación de las reservas mundiales.

Otro componente de la apreciación sobre el orden de posguerra bastante común entre quienes en esos días habrían de tomar las principales decisiones, y que no dejó de tener consecuencias sobre el curso de los acontecimientos, fue la idea de que en el mundo habría de producirse un pronto retorno a la normalidad prebélica. Muchos tenían la convicción de que Inglaterra, la gran potencia con la que la Argentina había mantenido durante décadas una "relación especial", habría de recuperar su lugar de predominio entre los grandes poderes, lo que comportaba una subvaloración del ascenso de los Estados Unidos como nuevo poder hegemónico global. Paradójicamente, esta interpretación se nutría de las representaciones de dos sectores antagónicos: los intereses agroexportadores ligados al mercado británico y los sectores nacionalistas dispuestos siempre a sobredimensionar las capacidades de su adversario tradicional.

En rigor, estos diagnósticos no facilitarían las tareas nada sencillas que la diplomacia de Buenos Aires habría de enfrentar desde principios de 1946. Para la Argentina de posguerra el balance de una contienda frente a la cual se había mantenido tercamente neutral hasta poco antes del final mostraba facetas contradictorias. Por un lado, acumulaba un saldo comercial favorable con su principal cliente europeo, saldo con el cual podía esperar afrontar las demandas de un postergado equipa-

miento de materias primas, combustibles y bienes de capital, y consolidar así el programa industrializador plasmado en el Primer Plan Quinquenal. Por otro lado, había quedado prácticamente aislada de la comunidad internacional, sospechada de haber estado del lado de los vencidos y arrastrando un prolongado litigio con la potencia que habría de regular el orden mundial posbélico.

Este aislamiento se había agravado en 1944, después de la ruptura de relaciones con el Eje y la posterior renuncia del general Pedro Ramírez y su reemplazo por Edelmiro Farrell. Los Estados Unidos no reconocieron al nuevo presidente y retiraron su embajador, actitud que fue imitada por otros países. A principios de 1945, cuando la Argentina tuvo que permanecer al margen de la conferencia interamericana extraordinaria celebrada en el palacio de Chapultepec, en la ciudad de México, un agudo observador, empleando términos que, curiosamente, se le aplicarían nuevamente a principios de los años ochenta, la calificó como una suerte de "paria internacional". Es cierto que la tardía declaración de guerra, una decisión en la que Perón tuvo un importante papel, ya convencido de la necesidad de terminar con el neutralismo y el consiguiente aislamiento de la Argentina, le había abierto el camino de retorno y que para esto habían pesado sus antecedentes, su gravitación en el contexto hemisférico y el respaldo de sus pares de la región; pero estos mismos factores probablemente impidieron que los argentinos, fueran gobernantes o gobernados, extrajeran todas las conclusiones que deberían haber extraído de sus actitudes recientes. En otro plano, también debían computarse como parte del balance de la guerra las transformaciones del sistema productivo y los cambios de la estructura social ocurridos en paralelo con aquéllas. Si bien estos capítulos estaban referidos al orden económico y político interno, plantearían demandas específicas que no dejarían de tener repercusiones sobre el modo de llevar la política exterior y ubicarse frente al mundo.

Si el poder relativo y la importancia estratégica del país eran cartas que podían hacerse valer al momento de gestionar su reingreso a la comunidad de naciones, los recelos provocados por las simpatías que algunos de sus dirigentes habían sentido por el Eje —no siempre por razones ideológicas— probarían ser bastante resistentes al cambio de circunstancias. Al margen

de la limpieza del proceso electoral que lo había llevado al poder, el gobierno peronista no podía librarse fácilmente del peso que suponía ser visto como heredero de un régimen militar pro fascista. Mucho más cuando para progresar hacia esa posición hubo de tropezar con un nada prudente embajador norteamericano dispuesto a convertirse en implacable adversario y a poner todos los obstáculos posibles en el itinerario del exitoso coronel valiéndose de aquellos antecedentes. Spruille Braden, quien había llegado a Buenos Aires en mayo de 1945 como resultado de la normalización de los vínculos diplomáticos que siguió a la declaración de guerra, podía creerse el mejor defensor de la democracia con el mismo ímpetu con que creía que el Reich alemán planeaba recomponer sus fuerzas en el lejano Río de la Plata. Sin embargo, en la campaña electoral terminó proveyendo a su adversario de una muy oportuna y efectiva carta de triunfo.

Lo cierto es que durante el primer tramo del gobierno peronista, el contexto exterior le depararía incertidumbres y frustraciones antes que oportunidades. Las primeras porque el orden mundial no estaba definido ni en lo político ni en lo económico y podían conjeturarse distintas evoluciones, casi todas ellas igualmente plausibles. La Guerra Fría todavía no estaba definitivamente instalada, aunque los indicios de fractura de la alianza antifascista aumentaban día tras día, alimentando los pronósticos acerca de una nueva conflagración. En el plano económico, los mecanismos que se diseñaron en la célebre conferencia de Bretton Woods celebrada en julio de 1944 para rehabilitar los flujos de comercio mundial sobre bases multilaterales aún no funcionaban satisfactoriamente y los diagnósticos respecto del tiempo en que tardarían en hacerlo no eran ni certeros ni alentadores. Las propias potencias que regían aquel orden y los funcionarios de los organismos internacionales que procuraban promoverlo serían sorprendidos más de una vez por la marcha de los acontecimientos y se verían obligados a admitir que la consolidación de un nuevo esquema marchaba más lentamente que lo esperado: todavía en 1949 los directores del Fondo Monetario Internacional reconocían que la sujeción al comercio bilateral y a las divisas inconvertibles era muy superior a la de antes de la guerra. Bastaba repasar los comportamientos de los distintos países para verificar la

prudencia con que se manejaban en medio de tantas incógnitas.

Entre tanto, las frustraciones provinieron principalmente de estas circunstancias económicas y se materializaron en las dificultades para utilizar libremente los saldos comerciales acumulados durante la contienda y retenidos en el Banco de Inglaterra, como consecuencia de decisiones de actores externos —por ejemplo, la inconvertibilidad de la libra— o de la persistencia de los recelos y prevenciones respecto del gobierno de Buenos Aires por parte de grupos o figuras con poder suficiente como para incidir negativamente sobre su trayectoria. Todo ello limitó su capacidad de maniobra y lo expuso a los efectos indeseados de sus propias y legítimas acciones. Por citar uno entre muchos ejemplos: en las condiciones en que se encontraba la economía, imposibilitada de valerse de los saldos favorables bloqueados en Londres y afectada por el deterioro de los términos de intercambio, era razonable que procurara obtener los mejores precios por sus productos agropecuarios, algo que, por lo demás, hacían otros exportadores. Sin embargo, no pudo evitar que esa actitud fuera juzgada críticamente y se le tratara como si las autoridades argentinas procuraran aprovecharse de una situación de carencias mundiales exigiendo precios exorbitantes para los productos del país. Ante esta situación, de poco valían las pruebas que podía ofrecer respecto de su contribución a los países afectados por la guerra o las seguridades que ofrecía de su disposición a aumentar ese aporte en el caso en que hubiera un mínimo de reciprocidad.

En suma, no es difícil imaginar todas las dificultades que suponía tomar decisiones en un período de transición en el cual los rasgos del orden mundial emergente distaban de estar definidos con nitidez y no se producía "el retorno a la normalidad" anunciado por los más férreos defensores del *statu quo* anterior a la guerra. En este punto, las ideas generales sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo —el ingreso en una era "social", el ascenso de un Estado activo y planificador, la tendencia a la nacionalización de servicios públicos o sectores estratégicos de la economía— no bastaban para abordar las cuestiones coyunturales, todas las cuales exigían respuestas rápidas que no podían esperar horizontes más despejados ni certezas firmes. Tal situación fogoneaba la ya natural disposición

de Perón y sus seguidores a actuar pragmáticamente y a elegir, en cada caso, aquellos caminos que sugirieran las circunstancias y contribuyeran a acrecentar su capital político.

REINTEGRARSE A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

La designación de Atilio Bramuglia como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores fue probablemente una de las decisiones más afortunadas de Perón. Prestigioso abogado laboralista de orientación socialista, que había participado en la redacción del programa del Partido Laborista, el canciller parecía la persona más adecuada para pilotear la diplomacia argentina en el ciclo político que se inauguraba. El escenario que tenía por delante el nuevo gobierno en febrero de 1946 demandaba cautela pero en modo alguno aislamiento. Tanto la política como la economía necesitaban, antes que nada, de un esfuerzo de "reinserción internacional" que terminara con la condición de marginación del país. La declaración de guerra a las potencias del Eje hecha en abril de 1945 había sido la condición indispensable para ese reintegro y merced a ello una delegación del país había participado en las sesiones inaugurales de la Organización de las Naciones Unidas. Pero era necesario hacer bastante más. Al menos un sector importante del nuevo gobierno entendía que era imprescindible abrirse al mundo, aunque esa apertura habría de tener acentos diferentes de la que había caracterizado a la Argentina de la época de la economía agroexportadora. Ahora se trataba de recuperar la consideración de los demás y proveerse de los elementos requeridos para el crecimiento sobre base industrial, que era tanto el fundamento de la independencia económica como el requisito para el bienestar de la población y, en última instancia, la condición de la viabilidad del proyecto político todo.

A pesar de algunos gestos que en cierto modo parecían contradecirlo, el propósito oficial de vinculación con el mundo fue muy explícito y aparecería una y otra vez en diversas presentaciones del Presidente y sus ministros. Esto se puso de manifiesto en una de las primeras disposiciones del gobierno: la elevación al Congreso para confirmar la adhesión a las Actas de Chapultepec y ratificar la Carta de las Naciones Unidas aprobadas por decreto a mediados de 1945.

Debate en la Cámara de Diputados sobre la adhesión a las Actas de Chapultepec y ratificación de la Carta de las Naciones Unidas

"Joaquín Díaz de Vivar [miembro informante del despacho de la mayoría]: 'Desde el punto de vista económico, las resoluciones de las Actas de Chapultepec son contradictorias [...] en mi opinión los acuerdos de Chapultepec son el puente de plata tendido para que la dictadura del supercapitalismo, denunciado en 1938 por el presidente Roosevelt, penetre profunda y definitivamente en los débiles países latinoamericanos hasta transformar a todo el continente en una inmensa factoría sometida a su explotación'.

"Ernesto Sammartino [UCR]: 'Las objeciones que puedan hacerse a la Carta de las Naciones Unidas son más serias que las que provocan las Actas de la Conferencia Interamericana de México. Sin embargo, los enemigos de estos acuerdos internacionales atacan con mucho mayor acritud lo que llaman las Actas de Chapultepec. El primer deber de los representantes argentinos en la Asamblea de las Naciones Unidas será promover esas reformas urgentes y básicas para incorporar el principio de universalidad, de la igualdad absoluta de todos los Estados, de la supresión del veto, de la renovación democrática del Consejo de Seguridad y de la ampliación de las facultades de la Asamblea General, que debe ser soberana en todos estos asuntos, para responder a un alto pensamiento y a una definida construcción democrática, para terminar con el vasallaje colonial'.

"Reynaldo Pastor [conservador]: 'Sin embargo, analizando el conjunto de todas las resoluciones, el conjunto de todos los compromisos, de todas las obligaciones que han sido convenidos y sancionados en esas dos actas, en esas dos grandes actas internacionales, es imposible dejar de ver cómo ha surgido y cómo se ha impuesto después de muchos años el viejo intento de la Liga Panamericana, principio o convención que nuestro país combatió invariablemente en todas las conferencias donde trató de imponérselo en forma directa o indirecta. Por eso digo que entre las consecuencias que arrojan estas actas, una de ellas es la de haber transformado o modificado doctrinas que la República sostuvo con gran decisión, con gran valentía y con indiscutible autoridad moral ante otros congresos internacionales, en los cuales fue escuchada, respetada y tenida en cuenta su opinión'.

"*Atilio Bramuglia [ministro de Relaciones Exteriores y Culto]: 'Creo que los poderes ejecutivos anteriores no han tenido una verdadera política internacional, y no la han tenido porque las características esenciales del desenvolvimiento de nuestra política internacional no se han fijado con claridad en los últimos años y, por el contrario, se ha seguido una política oscilante, una política de aislacionismo en instantes en que el mundo se está transformando para lograr el mejoramiento de todas las clases sociales'.*

"*Luis Dellepiane [UCR]: 'Me veo en la necesidad de manifestar categóricamente que estoy en absoluta disconformidad con la adhesión a las Actas de Chapultepec y con respecto a la ratificación de la Carta de las Naciones Unidas [...] ¿Qué es lo que puede llevarnos a una vinculación con ese edificio (ONU) que se derrumba? ¿Qué es lo que puede llevarnos a vincularnos en este instante, en que no se pronuncia una sola palabra de paz en los debates que se están celebrando en el Consejo de Seguridad? Se nos dice que vamos a quedar aislados. ¿Aislados de qué? No vamos a recuperar el prestigio internacional perdido, al ser materialmente débiles, si no proclamamos los altos ideales de paz, de justicia y de libertad, reclamando la organización de una auténtica Asociación de Naciones'.*

"*Arturo Frondizi [UCR]: 'La Argentina pone la firma al pie de un documento que compromete una política en el orden interno, una política en materia económica y en materia financiera y esa política tiene demasiados aspectos antinacionales. La Argentina, señor Presidente, no puede suscribir sin reservas ni el Pacto de las Naciones Unidas ni las Actas de Chapultepec. Hay allí obligaciones de todo tipo que la Argentina no podrá cumplir. Si se cumplieran fielmente los acuerdos de Chapultepec, podría llegar a destruirse no sólo la formación de una conciencia nacional, sino también la formación del país desde el punto de vista económico, financiero, militar y cultural'.*

"*Atilio Bramuglia [ministro de Relaciones Exteriores]: 'No podemos vivir en el aislamiento. Eso no debe ocurrirle más al país, porque la república no puede vivir aislada, sino que tiene que sufrir la suerte de todos los hombres de la tierra'."*

Cámara de Diputados, *Diario de Sesiones*, 1946.

Ya en junio de 1946, Perón había anunciado su intención de elevar esos instrumentos al Congreso para que se expidiera sobre los mismos. Que no se trataba de un paso fácil de dar lo prueban los esfuerzos para convencer a la opinión pública de sus ventajas y las fisuras que se produjeron en una coalición gobernante que ya por entonces comenzaba a registrar tensiones entre sus componentes políticos. Ante el solo anuncio del tratamiento parlamentario, sectores nacionalistas, muchos de los cuales se contaban entre los sostenes iniciales del gobierno, se lanzaron a una intensa campaña de agitación contra lo que consideraron una primera e imperdonable traición de Perón. A la hora de las sesiones, en torno del Congreso se estableció una estricta protección policial complementada con una rigurosa fiscalización de las barras asistentes al debate.

Pero no se trataba sólo de la discrepancia de pequeños núcleos, sino de una controversia de mucho mayor envergadura ante la cual el Poder Ejecutivo trató de emplear todas sus herramientas persuasivas, siempre con el argumento central de que el país no podía quedar aislado en un mundo sometido a profundos cambios. En el transcurso del debate Atilio Bramuglia diría: "Argentina no puede estar distante de las naciones de América y del mundo. En los últimos años se ha seguido una política de aislamiento en instantes en que el mundo se ha transformado para lograr el mejoramiento de todas las clases sociales [...] El país está descapitalizado. Tiene trigo y carne pero no tiene máquinas y tiene que estar en el concierto de las naciones para intercambiar sus producciones".

Este primer gran debate parlamentario sobre política exterior de la era peronista resultó un auténtico test, por lo que reveló de intenciones políticas y concepciones ideológicas de los participantes. Tal vez lo más llamativo de las discusiones hayan sido los elevados tonos y la abundante fundamentación jurídica y política exhibida por los diputados que intervinieron en ellas y un curioso entrecruzamiento de posiciones entre oficialistas y opositores que hizo que se registraran discrepancias no sólo entre los bloques sino en el interior de ellos. La verdad es que, por razonables que fueran los argumentos del Presidente o del canciller en orden a la necesidad de terminar con el aislamiento, no parecieron suficientes para conseguir el respaldo franco de una oposición en su mayoría decidida a de-



El ministro de Relaciones Exteriores Juan Atilio Bramuglia con el embajador ruso Miguel Gregorievitch Sergueieff en una recepción por el aniversario de la Revolución Rusa, 1947.

mostrar que esas ratificaciones constituían inaceptables concesiones a las potencias dominantes y revelaban la claudicación del gobierno respecto de sus iniciales proclamaciones antiimperialistas.

Casi en paralelo con la ratificación de los instrumentos que simbolizaban el reingreso de la Argentina a la comunidad internacional, la diplomacia peronista adoptó otra decisión de singular relevancia: en los primeros días de junio se anunció el establecimiento de relaciones con la Unión Soviética. Que esta iniciativa no era ajena al propósito general de reubicación internacional parecía probarlo el hecho de que las conversaciones que habrían de culminar en la normalización se habían iniciado en forma muy reservada en el curso de 1945 contando con el beneplácito del Departamento de Estado, por entonces interesado en facilitar sus propias negociaciones en la ONU con quien todavía era su aliado en la guerra y, en consecuencia, dispuesto a propiciar la normalización de relaciones de los paí-

ses latinoamericanos con la capital soviética, cosa que casi todos ellos ya habían hecho. Perón era decididamente anticomunista pero, a esa altura de los acontecimientos, comprendía que Moscú se había convertido en uno de principales protagonistas del nuevo orden mundial, además de ser la potencia que había mostrado mayor hostilidad hacia el gobierno argentino en el momento en que éste decidió dar un corte a la cuestión de la neutralidad. Adicionalmente, un país afectado como ningún otro por la guerra y, en tanto tal, necesitado de alimentos, no podía ser sino un mercado prometedor para la producción pampeana y hasta daba pie a la hipótesis de que, a cambio de una normalización de relaciones que convertía a la Argentina en abastecedor de un mercado no tradicional, tal vez fuera beneficiada por la transferencia de algunas de las plantas industriales que los soviéticos desmantelaban en Alemania para trasladar hacia su territorio.

De todos modos, a mediados de 1946, cuando ya se había enrarecido el clima entre Moscú y Washington, los hechos tenían otra connotación y los juegos en los que se ingresaba eran mucho más delicados. Es muy probable que Perón calculara que, a la par de ventajas materiales, con este gesto satisfacía varios objetivos simultáneos: daba una prueba de independencia, calmaba a la más ruidosa que importante oposición de izquierda y advertía a los funcionarios estadounidenses sobre lo que estaba dispuesto a hacer en caso de que continuaran con su hostigamiento. Fuera o no ésta la intención de un hombre convencido de las virtudes de la astucia política, todo debía hacerse con equilibrio y sin ir más allá de lo prudente; esto es, no debía confundirse con un cambio de alineamiento que favoreciera los planes de Moscú, ni dar demasiado aire a los comunistas locales. Por eso retaceó la firma de un tratado comercial de largo plazo tal como lo pretendían los negociadores soviéticos. La necesidad de mercados hizo que, en paralelo con las tratativas con la Unión Soviética, entre mediados de 1947 y mediados de 1949 se celebraran convenios comerciales con Checoslovaquia, Rumania, Hungría, Polonia y Bulgaria.

Una iniciativa gubernamental de julio de 1947 es muy reveladora tanto de las intenciones como de ciertos viejos hábitos heredados por la diplomacia peronista. Se trató de un texto elevado a las cancillerías de América y a la Santa Sede en el cual se hacía un llamado a los pueblos y gobiernos del mundo para que promovieran la pacificación interna e internacional. En la parte declarativa del "Plan pacifista proyectado al continente", como se lo denominaba, se afirmaba: "Los pueblos y gobiernos alcanzarán el equilibrio y la tranquilidad interna en el respeto a la personalidad humana, creando una economía de abundancia, fortaleciendo los derechos de los trabajadores y organizando las formas y medios de comprensión espiritual [...] Los pueblos y gobiernos deberán promover los factores determinantes del equilibrio mundial fundamentándolo en el respeto recíproco, la igualdad jurídica, el arbitraje obligatorio, la cooperación económica y la paz permanente, para asegurar la normalidad política internacional, la seguridad económica mundial, la justicia social en el universo y la pacificación de los espíritus".

En un mundo donde dominaba "la ansiedad de la paz", la Argentina propiciaba una amplia cruzada pacifista evocando su extensa tradición legalista. El gesto, cuya importancia puede deducirse de la amplia difusión que se le diera desde los más altos rangos del gobierno y de la reiterada mención al mismo en cuanta reseña de la política exterior se hiciera en esos años, merece más que un comentario irónico; revelaba, una vez más, tanto tendencias profundas que hacían a la autopercepción nacional —en última instancia estaba en línea con el proyecto de Pacto Antibélico de No Agresión y Conciliación de los años treinta, cuyo autor fuera el primer Premio Nobel argentino, Carlos Saavedra Lamas— como la ubicuidad de las maniobras diplomáticas y el entrecruzamiento entre objetivos dirigidos hacia el ámbito doméstico y hacia el exterior. Simultáneamente, Perón daba testimonio de su ductilidad política: quien esperaba una nueva guerra que creía inevitable trataba de prestigiar al país mostrándolo y mostrándose él mismo como un cruzado de la paz. Claro que aunque nadie cuestionara ni el sentido ni el contenido de la propuesta —que por otra

parte se acompañaba de efectivas disposiciones de ayuda alimenticia para países afectados por grandes carencias, como el caso de Italia—, ella no era suficiente para neutralizar los efectos del prejuicio antiargentino ni podía impedir que se la interpretara como parte de un propósito propagandístico menos desinteresado que el que le adjudicaban sus inspiradores.

La verdad es que una circunstancia inesperada le permitiría a la diplomacia de Buenos Aires efectuar una contribución efectiva a la paz mundial que superaba las mejores intenciones de la retórica. En la segunda mitad de 1948, la decisión de las autoridades soviéticas de bloquear los accesos terrestres a la ciudad de Berlín, ubicada dentro de su zona de ocupación, llevó la tensión internacional al punto más alto en lo que iba de la posguerra y reanimó las predicciones sobre una tercera gran contienda. En octubre, cuando el tema se instaló en el Consejo de Seguridad de la ONU, al delegado argentino le fue transmitido el encargo de ejercer la presidencia debido al involucramiento directo de los Estados Unidos, que ocupaba ese lugar, en la crisis alemana. Debido a los recelos que provocaba la figura de José Arce, delegado ante la Organización, el gobierno argentino decidió que el ministro de Relaciones Exteriores tomara directamente el tema en sus manos.

Apoyado por la mayoría de los miembros no permanentes del Consejo, quienes constituyeron una Comisión de Neutrales, el canciller Bramuglia adoptó una activa postura mediadora procurando —con una habilidad que muchos se apresuraron a destacar— reducir las áreas de discrepancia entre las potencias involucradas en el conflicto, y si bien sus propuestas más de una vez chocaron contra la inflexibilidad de los vetos soviéticos, tuvieron influencia en la posterior resolución del conflicto. Ello le valió un reconocimiento generalizado que algunos hicieron extensivo al propio Presidente y que fue visto por sus responsables como un modo efectivo de rehabilitación del prestigio del país.

Más allá de lo que aparece como una orientación bastante definida, durante las primeras etapas de la política externa del peronismo abundaron las vacilaciones y las contradicciones. Detrás de ello podían descubrirse distintos factores, incluida la forma de reclutamiento y asignación de funciones dentro del cuerpo diplomático y la heterogeneidad de la coalición política

e ideológica sobre la que se sostenía el gobierno. Por ejemplo, muy pocos puntos de contacto podían encontrarse entre la moderación y las ideas progresistas del ministro Bramuglia con el talante conservador y la ambición del embajador en Washington Jerónimo Remorino, o con las actitudes del mencionado José Arce, otro conservador, convencido defensor del franquismo, que no perdía oportunidad para mostrarse como declarado adversario de la Unión Soviética y convencido defensor del régimen de Franco. Además de las diferencias ideológicas que interferían en las decisiones, estaban las intrigas en el interior del propio gobierno —Remorino aspiraba abiertamente a reemplazar a Bramuglia— que al presidente no le interesaban o no le resultaba sencillo desalentar.

Uno de los tantos ejemplos de esta situación lo constituye la relación con España. Aunque no se quisieran exagerar las repercusiones del episodio, la vinculación con el régimen español incluyó desde su defensa en el seno de la ONU, oponiéndose a la resolución de fines de 1946 que instaba a los Estados miembros a proscribirlo diplomáticamente y vetar el ingreso del país a la Organización, hasta la firma del protocolo Perón-Franco de 1948, pasando por la designación de embajador en el preciso momento en que muchos países retiraban sus representantes en Madrid. Todo este episodio admite muchas y plausibles explicaciones políticas y económicas; era, sin embargo, inevitable que fuera visto como un gesto que confirmaba las inclinaciones neofascistas de las autoridades de Buenos Aires. En su descargo, éstas argumentaban que se trataba de un acto de leal reciprocidad ante un país y un gobierno que no se habían sumado al hostigamiento impulsado por los Estados Unidos en la época de la guerra, pero eso no impedía que afectara el esfuerzo destinado a rehabilitar su imagen externa y que, en tanto tal, comprometiera la voluntad de integración a la comunidad democrática de naciones. Al parecer, esta circunstancia no pasó desapercibida para Bramuglia, quien, entre otras cosas, se mostró francamente reticente al muy promocionado viaje de Eva Perón a Madrid de mediados de 1947, una actitud que fortalecería la antigua animadversión de la primera dama hacia él y contribuiría al posterior desplazamiento de una de las figuras que habían logrado mayor prestigio dentro del primer gabinete peronista.

De todos modos, el propósito de reinserción no había sido infructuoso. Al presentar un balance de los primeros dos años de gobierno en una conferencia pronunciada en la Casa Rosada ante los integrantes del Poder Legislativo, el Presidente se refirió al capítulo correspondiente a la política exterior en los siguientes términos: "Nosotros recibimos un país que durante cuarenta años había seguido una política contraria a lo que parecía indispensable realizar en los tiempos actuales, y como consecuencia de ello se encontraba en un aislamiento absoluto dentro del núcleo al cual pertenecemos y desligado totalmente del resto de los países del mundo [...] De manera que la situación del país en el orden de la política internacional, tanto en lo que respecta a los grandes Estados como para los Estados menores de Centro y Sudamérica, no era en manera alguna una situación que podríamos llamar confortable". La presencia de representantes argentinos en los organismos políticos mundiales, la participación en las más importantes reuniones internacionales —segunda parte de la primera Asamblea y segunda Asamblea General de las Naciones Unidas, Conferencia Interamericana para el mantenimiento de la Paz y la Seguridad, Conferencia Mundial de Comercio y Empleo—, la designación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en septiembre de 1947, más la normalización de relaciones con los países socialistas, la mencionada iniciativa pacifista y la firma de treinta y cinco convenios y acuerdos comerciales en dos años —en contraposición a los veintidós suscriptos entre 1943 y 1946— eran presentados como indicadores de una amplia y efectiva articulación con el mundo.

Sin duda, este desempeño en muchos sentidos exitoso de la diplomacia argentina le debía mucho a las aptitudes de Bramuglia; sin embargo, en octubre de 1949 éste se alejó de su cargo. Contra lo que se sospechaba, el factor desencadenante de la renuncia no fue el antiguo e inocultable fastidio que Evita sentía por el canciller desde el momento en que éste se negara a presentar un pedido de hábeas corpus en ocasión de la prisión de Perón en octubre de 1945. En verdad, el hecho precipitante fue la durísima disputa que éste sostuvo con el embajador Remorino, su celoso e intrigante competidor, en el despacho y en presencia del propio Perón.

LA TERCERA POSICIÓN

Una de las singularidades del peronismo fue el intento de compatibilizar el esfuerzo de retorno a la comunidad internacional con una definición "tercerista" proclamada desde 1946-47 como base doctrinaria del movimiento. Esta concepción debía mucho a la creencia muy idiosincrásica de la existencia del destino providencial de un país ávido de grandeza y habituado, al menos en el caso de sus capas dirigentes, a la prosperidad. En la coyuntura, la Tercera Posición, una fórmula que "el genio tutelar argentino ofrecía al mundo como solución para sus más acuciantes problemas", satisfacía varios propósitos; los principales: proveer de un marco ideológico a la fuerza política que estaba conformándose; fortalecer, hacia adentro y hacia afuera, la imagen de su fundador y rehabilitar el prestigio del país mostrándolo como una sociedad regida por valores universales de paz, justicia y libertad.

La variante argentina del tercerismo no podía dejar de tener repercusiones internacionales en un tiempo en que los extremos de los que procuraba diferenciarse estaban representados y liderados por dos superpotencias envueltas en una Guerra Fría que escalaba peligrosamente y que ejercitaban, conforme

---

La Tercera Posición

"En el orden político, la Tercera Posición implica poner la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad en un sistema cooperativo de gobierno mundial. En el orden económico, la Tercera Posición es el abandono de la economía libre y de la economía dirigida por un sistema de economía social al que se llega poniendo el capital al servicio de la economía. En el orden social, la Tercera Posición entre el individualismo y el colectivismo es la adopción de un sistema intermedio cuyo instrumento básico es la justicia social. Esta es nuestra Tercera Posición, que ofrecemos al mundo como solución para la paz."

Mensaje del presidente Perón al inaugurar las sesiones del Congreso Nacional, 1° de mayo de 1950.

---

una lectura no demasiado desencaminada, sendas formas de imperialismo: el que se ejercía a través de la penetración económica y el que apelaba a la penetración política e ideológica. Por otra parte, la "solución argentina", a la que se le atribuía el mérito de haber probado en la práctica su viabilidad y eficacia, se ofrecía como alternativa ecuménica: "Nuestro campo de acción es el mundo, pues los grandes movimientos como el peronismo no son acontecimientos nacionales sino universales". En ese sentido debía interpretarse como una postura que no significaba aislamiento o neutralidad sino una doctrina positiva.

La Tercera Posición era presentada como una "política social internacional de orientación cristiana". Sus ejes centrales los constituían los temas de la paz, el desarrollo, la equidad y el respeto a la persona humana. Desde el inicio, el discurso peronista se instaló en ese andarivel: "Nuestra empresa universal debe interpretarse como un afán pacifista. Debe colocarse la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad en un sistema cooperativo de gobierno mundial. Debemos trabajar en favor de la creación de una conciencia mundial de que el hombre está por sobre sistemas e ideologías". Según los códigos interpretativos del peronismo, el imperio de la paz en el mundo reconocía dos requisitos básicos: en primer lugar, el respeto efectivo de la soberanía y autodeterminación de los Estados, frente a la amenaza de los dos imperialismos cuyas sedes centrales se localizaban en Washington y Moscú respectivamente; en segundo término, la vigencia de la justicia social: "Para propugnar las bases de la paz internacional —se decía— es menester la tranquilidad de la paz interna consolidada. La paz interna sólo se logra cuando los derechos del trabajador se abren paso en la legislación [...] El descontento, la miseria, la desocupación, forman en cada país el clima necesario para la empresa guerrera [...] La paz que todos ambicionamos no vendrá sino por el camino de la justicia social. Ella no podrá llegar a ser realidad si la justicia social no trata de igualar las condiciones de todos".

La conformación de un orden económico mundial más equitativo y la intensificación de los instrumentos de cooperación internacional —aquellas que con el tiempo cristalizarían como reivindicaciones del Sur en vías de desarrollo— fueron

demandas que se mantuvieron con coherencia y continuidad en todos los foros multilaterales, regionales o universales en los que hubo de participar desde 1947 hasta el final. Uno de los primeros ámbitos donde se deslindaron posiciones fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo celebrada en la capital de Cuba entre fines de 1947 y principios de 1948. La Argentina veía en la Carta de La Habana una peligrosa subordinación de los regímenes económicos a las necesidades norteamericanas de mantener sus niveles de ocupación y de abrir mercados para sus excedentes productivos de los años de guerra. Ello comportaba un riesgo para sus propios objetivos de ocupación y consolidación industrial. Similares opiniones se expresaron en el segundo trimestre de 1948 en la IX Conferencia Interamericana celebrada en Bogotá. En esta ocasión, una extensa delegación, presidida por el canciller Bramuglia, expuso los méritos de una "democracia planificada" y el propósito de construir un "Estado de justicia social", denunció la falta de equidad derivada del deterioro de los términos de intercambio, abogó por un aumento de los recursos destinados a cooperación técnica y financiera, por la creación de un organismo de crédito regional y propuso un proyecto de Carta Interamericana de Garantías Sociales en la que se incluían los derechos de los trabajadores. A su vez, el presidente del Banco Central propuso la creación de un Banco Interamericano "destinado a coadyuvar al desarrollo económico de los países americanos mediante el aumento de la producción y el fomento industrial, promoviendo la elevación del



Portada de Posición internacional argentina, *de Juan Domingo Perón, 1950.*

nivel de vida y de las condiciones sociales de los pueblos".

Mas allá de lo que pueda decirse acerca de la consistencia conceptual de estas definiciones, debe admitirse que algunas de ellas presuponían matices demasiado sutiles, sobre todo para los funcionarios del Departamento de Estado. Este tipo de consideraciones no se contaba entre las características del "enfoque de Guerra Fría" al que eran cada vez más adeptos y que los llevaba a creer que quienes no estaban con ellos le hacían el juego al enemigo comunista. Por otra parte, seguramente hartos de las veleidades porteñas y memoriosos de los rispidos choques durante los años de la guerra, apenas reconocerían en esas definiciones lo que pretendía, con tonos legitimadores, transmitirse desde Buenos Aires: la búsqueda de alternativas en condiciones de colocar las estrategias occidentales de contención del comunismo sobre bases más efectivas.

En verdad, el rechazo a los extremos, fueran modelos económicos o prácticas políticas, era menos simétrico de lo que aparecería en ciertos discursos oficiales. Para el Perón de esa época, el comunismo era el peligro natural del mundo y la amenaza mayor a la civilización mientras que el capitalismo, en su forma más depredatoria, el responsable del surgimiento de tal amenaza e incapaz de discernir que a una doctrina sólo podía vencérsela con otra doctrina superior. Si bien se sostenía que frente al antagonismo de la Guerra Fría existía en el mundo una neutralidad potencial, la diplomacia peronista no sería equidistante ni negaría la pertenencia al mundo occidental. "Lo que está en juego —decía Perón— es el orden futuro de nuestra civilización. Nuestro país se encuentra alineado en el bando occidental y conformando una 'unión libre' dentro de los pactos de Bogotá y Río de Janeiro. En otras palabras, su gobierno es aliado." En rigor, esta postura nunca fue seriamente desmentida. Cuando desde Washington se lo interrogaba sobre la virulencia de ciertas manifestaciones nacionalistas, la respuesta más frecuente era que ellas o bien se dirigían al consumo interno o eran expresión de grupos adictos a los que no se podía controlar fácilmente.

Si bien podrían discutirse la oportunidad y, en ocasiones, el tono entre estridente y desafiante de ciertas posturas, muchas de las causas sostenidas por la diplomacia argentina en esos años se correspondían con las ideas predominantes en la mayoría de

los Estados de su mismo rango. Nos referimos a la afirmación de la igualdad jurídica de los Estados a través del cuestionamiento a la institución del veto en la organización mundial, los criterios para la admisión de nuevos miembros, el aumento de las atribuciones de la Asamblea General o el de integrantes del Consejo Económico y Social o a las reiteradas apelaciones en favor de un ordenamiento de la economía mundial que obrara en beneficio de los productores de materias primas y alimentos e introdujera equidad en las relaciones de intercambio.

En años recientes, en particular, se ha presentado como uno de los rostros oscuros del primer peronismo la acogida de responsables de crímenes de lesa humanidad o de simpatizantes de los regímenes totalitarios europeos —alemanes, italianos, croatas o colaboracionistas franceses o belgas—. En las decisiones sobre esa materia se superponen y convergen motivaciones diversas: desde la más "inocente" y pragmática búsqueda de científicos y técnicos alemanes útiles para los fines del desarrollo industrial diagramado en el Primer Plan Quinquenal hasta las afinidades ideológicas de sectores políticos aliados al gobierno o de miembros de la burocracia estatal, pasando por el modo en que el propio Perón interpretaba la naturaleza y los alcances de los fenómenos fascista y nacionalsocialista. De todos modos, siempre fiel a su búsqueda de compensaciones y equilibrios, el líder del justicialismo se cuidó bien de no generar rechazos en la comunidad judía. La Argentina fue uno de los países que recibió mayor cantidad de refugiados de ese origen, se contó entre los primeros en reconocer al Estado de Israel —aunque en medio de una sorda disputa en la cúspide diplomática que enfrentó a Bramuglia con el representante ante las Naciones Unidas, José Arce— y hubo numerosas personalidades judías en el gobierno y entre los simpatizantes de la fuerza política que lo sostenía.

LOS DESENCUENTROS CON WASHINGTON

En oportunidad de la ya mencionada recapitulación sobre política exterior hecha por el Presidente en 1948 se afirmó que el principal problema político que había tenido que resolver al instalar su gobierno era la vinculación con los Estados Unidos

de América y que muchos de los objetivos de la política internacional no habían podido establecerse ni alcanzarse sin que antes se resolviera, pacífica y favorablemente, un distanciamiento que en algún momento había llegado muy cerca de la ruptura. En la actualidad, se felicitaba Perón, el problema estaba totalmente resuelto por medio del entendimiento pacífico y sólo quedaban algunos vestigios de incomprensión pero de significado apenas marginal: "Nos mantenemos en el camino de reencuentro y caminamos juntamente", diría con indisimulada satisfacción.

Durante la inmediata posguerra, las fricciones con Washington tuvieron como principal fogonero al embajador Braden quien, alejado de sus funciones en Buenos Aires, pasó a desempeñarse en el área latinoamericana del Departamento de Estado. Desde allí continuó con su pertinaz hostigamiento a las

El gobierno de Perón visto desde Washington

"[...] La situación política en la Argentina produce un desgaste en sus relaciones con Estados Unidos, y no podemos dejar de tomar conocimiento de esta situación. Durante la administración de Perón, el Partido Peronista ha controlado completamente la vida política argentina. Ganó todas las elecciones y tiene el 100 % de representantes en el Senado y más de los dos tercios de mayoría en la Cámara de Diputados. También controla las gobernaciones de provincias y Legislaturas. La fuerza que ha mantenido unido al partido ha sido la combinación de las personalidades de Perón y su esposa. Perón es incuestionablemente el hombre más fuerte de la Argentina pero no es un dictador absoluto. Fue puesto en funciones por los trabajadores, que continúan siendo su más fuerte sostén. Para mantener este apoyo debe favorecer una política popular hacia ellos, siendo esto una limitación a su poder así como la fuente de él. Esto explica por qué muchas veces sus expresiones públicas no coinciden con las opiniones que manifiesta privadamente. Otros factores de limitación a su poder lo constituyen el grupo de extremo nacionalismo dentro de su partido y el enfrentamiento con los sentimientos de autonomía de las provincias.

Desde que se convirtió en Presidente, Perón ha sido más favorable a la cooperación con EE.UU. que muchos de sus seguidores y, a menudo,

autoridades argentinas, acompañado por funcionarios de otras esferas de la administración Truman y un sector muy influyente de la prensa estadounidense. La presión de estos sectores alcanzó para neutralizar las actitudes conciliadoras de su reemplazante en Buenos Aires, el embajador Messersmith, empeñado en mejorar las relaciones difundiendo una imagen más comprensiva de la naturaleza del fenómeno peronista, y desestimó, considerándolos sospechosos, los gestos de acercamiento insinuados por Perón, quien en 1946 había asegurado que en caso de guerra su país se alinearía con los Estados Unidos y respaldó la pretensión de ese país de mantener su control sobre los arsenales nucleares, un tema que en los orígenes de la Guerra Fría era portador de una fuerte carga política.

Acertado en la apreciación de las consecuencias del conflicto con Washington, el balance presidencial de 1948 erraba al

---

más que el Partido Radical, su principal opositor. Tanto los nacionalistas como los radicales apoyan la nacionalización de la industria petrolera, mientras que Perón no excluye a los intereses privados. El Partido Radical se opone a la ratificación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual fue firmado por la Argentina en Río de Janeiro. La industrialización, mecanización de su agricultura y desarrollo económico son de primera importancia en el programa de Perón y, según se cree, él siente que estos objetivos pueden ser fácilmente realizados si EE.UU. colabora con sus exportaciones industriales y su conocimiento técnico.

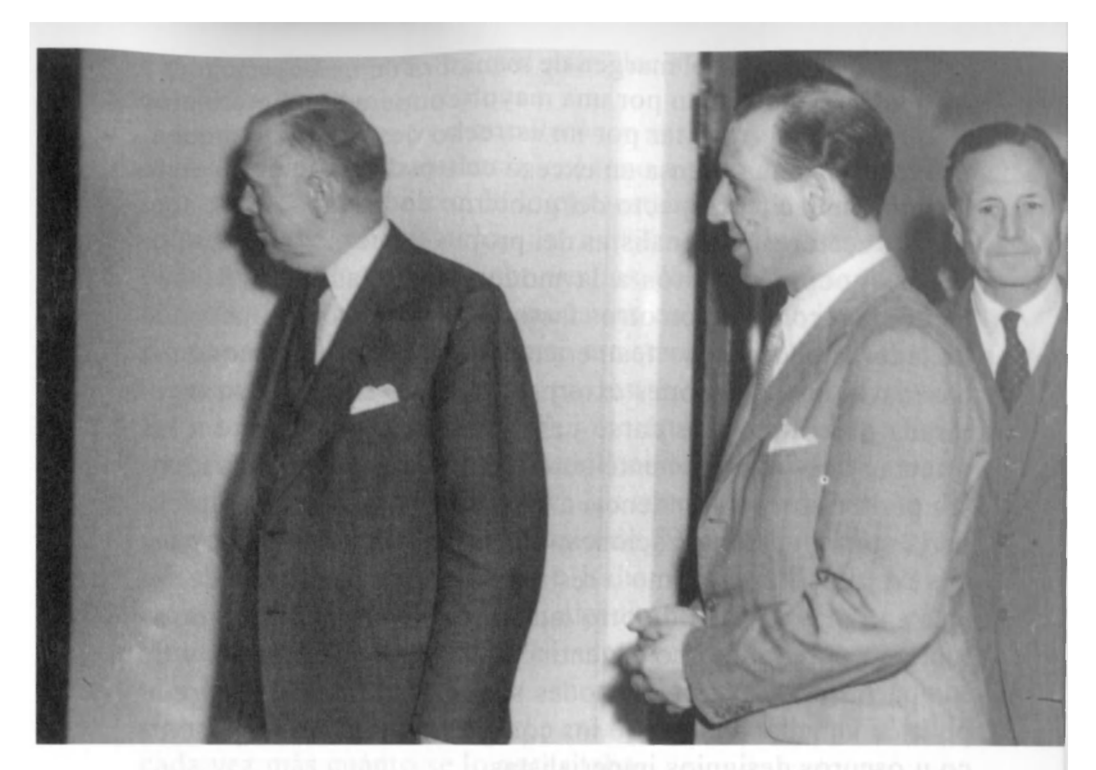
Un fenómeno único en la política argentina es la señora de Perón. Ella no tiene cargo político pero está tan próxima a su marido en cuanto a poder político que hay una seria discusión sobre si tiene menos, el mismo o más poder que él. Mientras que un año atrás se creía que estaba en contra de EE.UU., recientemente ha expresado en privado que está en una posición conciliadora. Sus actitudes emocionales se ven reflejadas en decisiones de importancia. Su vengatividad se ha manifestado en numerosas ocasiones y sus represalias reflejan tanto crueldad como buena memoria."

Memorándum interno del Departamento de Estado, octubre de 1951, en Félix Luna, *Perón y su tiempo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1993, p. 659.

darlo por saldado. Los vestigios de incomprensión eran todavía más fuertes de lo que creía, y se necesitarían varios años más para que pudiera hablarse con mayor propiedad de "camino de reencuentro" con la superpotencia del Norte. Es cierto que hacia la época del informe la relación había mejorado sensiblemente. A mediados del año anterior funcionarios estadounidenses habían admitido que las desinteligencias eran menos intensas que en el pasado reciente, de modo que no constituían un obstáculo para tramitar el acuerdo de seguridad regional previsto en la Conferencia de Chapultepec y que se había postergado en gran medida por las sospechas respecto del gobierno argentino. Por eso, en agosto de 1947 la Argentina había sido parte de la Conferencia de Río de Janeiro de la que surgiera el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Si bien sus posiciones no siempre coincidieron con las de Washington ni satisfizo todas sus demandas, el episodio fue interpretado como un paso efectivo en la dirección de una mayor disposición a cooperar. Además, Perón invitó al titular de la Casa Blanca para que visitara Buenos Aires luego de su permanencia en la capital brasileña.

Por otra parte, después del exitoso desempeño en la crisis de Berlín, el canciller Bramuglia había sido invitado por el general George Marshall para entrevistarse con él y con el presidente Harry Truman e incluso había recibido elogios de una prensa habitualmente hostil al gobierno argentino. Para entonces, Spruille Braden y los sectores más antiperonistas del Departamento de Estado habían dejado sus puestos y los intercambios entre ambas capitales no eran tan ásperos como en el pasado reciente. Sea por razones estratégicas asociadas al agravamiento de la tensión internacional y el consecuente interés por cubrir todos los flancos de la seguridad continental, sea por la gravitación de sectores exportadores deseosos de ganar participación en el mercado argentino, las autoridades norteamericanas parecían estar dispuestas a una relación más constructiva. Probablemente, en algunos círculos también contara la inquietud por la posibilidad de que Gran Bretaña intentara recuperar parte de su antigua influencia en el Río de la Plata.

Del lado argentino, obraban en la misma dirección las urgencias económicas que comenzaron a hacerse sentir hacia la segunda mitad de 1948, esto es, la necesidad de lograr finan-



En el Hotel Quitandinha, Juan Atilio Bramuglia y George Marshall luego de una conferencia, 19-8-47.

ciamiento para sostener el programa industrial y el antiguo interés de las Fuerzas Armadas por renovar su equipamiento y restablecer el equilibrio militar regional favorable al Brasil. Por esa razón, la directiva principal que, después de la inesperada renuncia de Bramuglia, Perón le habría transmitido a su sorpresivo y sorprendido sucesor, Jesús Hipólito Paz, era "apaciguar y atenuar la posición beligerante que por razones políticas tuvimos que tomar respecto de los Estados Unidos". Claro que, como se desprende del testimonio del propio Paz, el estilo de Perón afloró nuevamente en el comentario con el que completó la consigna al nuevo ministro: "Usted será el hombre que procurará encontrar los términos que faciliten el acuerdo. Será el simpático. Yo haré el papel de duro". Llamativamente, las mismas consignas y el mismo comentario se repetirían a mediados de 1951 cuando Paz dejó la Cancillería en manos de Remorino y fue designado embajador en los Estados Unidos.

De todos modos, el margen de maniobra de quienes en uno y otro lado se inclinaban por una mayor cooperación no era muy amplio. Debían transitar por un estrecho desfiladero flanqueados, allá, por una prensa en exceso celosa de cualquier indicio de contemplación respecto del gobierno de Buenos Aires, aquí por los sectores nacionalistas del propio gobierno o de la oposición, poco dispuestos a la moderación. También obraban contra la reconciliación otros factores acaso más profundos: de un lado, la decisión norteamericana de imponer una economía basada en las inversiones externas y la libre empresa; su inveterada dificultad para darse una política flexible frente a las orientaciones relativamente autónomas y estatistas de los países periféricos y su tendencia a asignarse la misión de emprenderla contra nacionalizaciones, intentos de control del comercio exterior, bilateralismo o restricciones a la operatoria de firmas extranjeras, etc.; de otro lado, las prácticas político-institucionales del gobierno argentino y la disposición, de él y de sus partidarios, a expresar todas sus interpretaciones sobre la política mundial a la luz de los códigos del vínculo hegemónico u oscuros designios imperialistas.

En el momento del acercamiento, las autoridades de Buenos Aires habían recibido la seguridad de que la Argentina tendría una importante participación en el Plan Marshall de reconstrucción europea. Ése era un aporte vital para la marcha de una economía que comenzaba a mostrar signos de vacilación, de manera que se esperaba con gran ansiedad la materialización de la promesa. Nutriendo tal expectativa, varios informes provenientes de medios políticos y gubernamentales de los Estados Unidos mencionaban que una efectiva movilización de la producción argentina de alimentos sería una contribución a la recuperación europea. Sin embargo, aquella promesa no sólo no se cumplió, sino que la potencia del Norte hizo todo lo posible para colocar sus excedentes de trigo a precios subvaluados con gran perjuicio para los negocios argentinos. La forma en que se condujeron los funcionarios de la Administración de Cooperación Económica [ECA], encargada de la implementación del Plan, siempre ha sido un tema sujeto a controversias, pues se la ha atribuido a la supervivencia de los prejuicios antiargentinos, a los estilos burocráticos o a la presión de intereses económicos estadounidenses pero, cualquiera que sea la

explicación, lo cierto es que esas decisiones no podían sino complicar la relación mutua.

La reiterada mención que Perón y sus ministros harían por esos días de tal circunstancia y el tono airado de sus comentarios, más que un indicio de lo que estaban dispuestos a hacer en represalia, reflejaban lo vital que era aquella participación para un país deseoso de obtener los dólares necesarios para comprar combustibles y maquinarias en los Estados Unidos. Lo que seguramente descartarían era que la ECA actuaba por sí misma. Así, acompañando las protestas, volverían a activarse los mecanismos de negociación y compensación: posponer la ratificación del Tratado Interamericano en el Congreso y tratar de valorizar la carta de los mercados europeos, sea a través del convenio anglo-argentino de junio de 1949, sea mediante gestiones con Alemania, Francia e Italia. Vistos en perspectiva, estos gestos —en apariencia contradictorios— formaban parte de un patrón de negociación bastante coherente y no desmentían la decisión de mantener abiertos los canales de vinculación con un interlocutor mucho más poderoso del cual se sabía cada vez más cuánto se lo necesitaba.

En esa misma época hubo un acontecimiento interno que gravitó sobre la relación con los Estados Unidos. En mayo de 1948, después de unos comicios para elegir diputados nacionales en la Capital Federal y nueve provincias que le habían dado amplia mayoría en el Parlamento, Perón anunció el propósito de reformar la Constitución. Enmarcada en equívocas maniobras discursivas, la iniciativa apuntaba a posibilitarle un nuevo mandato. Las elecciones constituyentes se realizaron a fines de ese año y la convención encargada de la reforma sesionó durante el primer trimestre de 1949, sancionándose en pocos meses la nueva Carta. Si la eliminación de la cláusula que impedía la reelección del presidente no podía dejar de tener eco en el exterior en tanto era un indicador del estilo y las intenciones del caudillo argentino, el articulado que reservaba el control estatal sobre los recursos del subsuelo y las fuentes de energía o la consideración de los servicios públicos como bienes inalienables del Estado ratificaba una orientación que los defensores de la economía de libreempresa no podían observar más que con extremado recelo.

En realidad, la incorporación del célebre artículo 40 fue un

ejemplo más de que Perón adoptaba decisiones sin estar totalmente convencido de su conveniencia. Como ya había ocurrido durante el primer tramo de su gestión, cuando dio marcha atrás en su intención de explotar el petróleo argentino a través de una empresa mixta entre YPF y la Standard Oil de New Jersey, también ahora dejaba avanzar al ala más estatista y nacionalista del gobierno y del movimiento político que conducía, revelando un estilo de conducción no siempre fácil de desentrañar.

De todos modos, 1950 resultó un año algo más auspicioso. En una época en la que los intercambios de funcionarios de alto nivel eran rápidamente interpretados como pasos decisivos en toda diplomacia de distensión, la llegada a Buenos Aires del subsecretario de Estado Edwar Miller registrada en febrero y el viaje del ministro de Hacienda Ramón Cereijo a Washington durante el mes de marzo bastaron para que se pensara que la relación entre ambos países ingresaba en un nuevo cauce. La definitiva concesión de un crédito del Eximbank por 125 millones de dólares que venía siendo objeto de fatigosa negociación y la ratificación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca a poco de iniciada la guerra de Corea fueron gestos de un acercamiento por entonces muy celebrado pero que a la postre volvería a ser fugaz.

En efecto, durante el transcurso de 1951 la relación volvió a experimentar un nuevo retroceso. Como en otras oportunidades, era más fácil identificar las distintas manifestaciones del retorno de los recelos y los reproches que encontrar explicaciones satisfactorias de los mismos; probablemente porque no se le ha prestado la atención necesaria a las complejas conexiones que suelen enhebrarse entre política interna y política exterior. Dos temas que alimentaron ese enfriamiento fueron la actitud oficial ante la guerra de Corea y la acentuación de los perfiles autoritarios del gobierno.

A fines de junio de 1950, los ejércitos norcoreanos irrumpieron en territorio de Corea del Sur y el mundo creyó, una vez más, que se encaminaba hacia la tantas veces anunciada tercera guerra. La respuesta de los países occidentales fue inmediata. La Organización de las Naciones Unidas intimó al país agresor a un retiro inmediato de sus tropas y un par de meses más tarde sus efectivos, colocados bajo el comando del gene-

ral Douglas Mac Arthur, comenzaban sus operaciones en la península donde, tras diversas alternativas, recuperarían el sur ocupado y avanzarían dentro del territorio de Corea del Norte. En octubre la crisis se agrava debido a la intervención de fuerzas chinas que, junto con las norcoreanas, en enero de 1951 ocupan Seúl, la capital sureña, la que a su vez fue recuperada por el Ejército multinacional dos meses más tarde.

La ambigüedad argentina ante la guerra no se debió a que hubiera experimentado dudas respecto de quién era el agresor y de la legitimidad de la respuesta de la comunidad internacional tal como ésta se materializó a través de las disposiciones de la ONU, sino a razones de política interna que llevaron, en definitiva, a la decisión de darle la espalda al llamado que el Consejo de Seguridad hiciera para poner efectivos militares bajo el mando unificado de la Organización. Existen suficientes testimonios que respaldan la versión conforme la cual inicialmente Perón estaba dispuesto a cumplir con tal compromiso mediante el envío de un batallón de voluntarios, pero que desistió de tal apoyo como resultado de presiones provenientes de adentro y de afuera del gobierno. Si ésa era su verdadera intención y no una típica maniobra destinada a mostrar una disposición que debía doblegarse ante la reacción de la opinión pública o de los miembros de su propio movimiento, es difícil saberlo. Si las movilizaciones opositoras ejercieron un papel respecto de la decisión final probablemente haya sido porque permitían calcular el costo político de esa decisión en la perspectiva de un año electoral.

El rédito político de las posturas nacionalistas era lo último que Perón hubiera desestimado en su campaña por la reelección. En noviembre de 1951 el oficialismo jugaba una carta política decisiva y no se necesitaba mucho para imaginar el uso que la oposición, presionando desde la izquierda, hubiera hecho no ya del compromiso de enviar tropas sino de las eventuales bajas argentinas en un teatro de guerra demasiado lejano. Los discursos de los miembros de la bancada radical durante las sesiones en las que se había debatido la ratificación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no podían dejar ninguna duda al respecto. Para los más influyentes de entre ellos, la Argentina debía desentenderse completamente de lo que no era más que una lucha mundial por el dominio de

Asia y el Pacífico. Lo mismo sostenían los sectores "neutralistas" del gobierno.

Lo cierto es que, dentro de ese horizonte electoral, el Presidente procuró convertir lo que podía constituir un problema en una oportunidad. La fórmula "tomaré la actitud que quiera el pueblo y ninguna otra", enunciada en julio de 1950 en un mitin multitudinario, comportaba réditos políticos inmediatos; de paso, lanzaba una consigna con la que pretendía fortalecer la entidad de su doctrina pacifista: insistió en remitir la explicación de todo belicismo a las ambiciones imperialistas y, aprovechando el foro de la Conferencia de Cancilleres realizada en Washington, propuso abordar constructivamente el tema de la guerra mediante un procedimiento presentado como propio del tipo de régimen que representaba: el plebiscito popular.

Un aspecto secundario aunque no irrelevante de la cuestión eran sus propias apreciaciones sobre el sentido y el alcance de la guerra de Corea, algo que aparecía claramente expuesto en los artículos que, con el seudónimo de "Descartes", publicaba en la prensa adicta. Muchas veces, haciéndose eco de argumentos esgrimidos por la derecha norteamericana, criticaba la forma en que la administración Truman venía conduciendo desde 1945 los intereses occidentales. Poner énfasis en esos presuntos errores fue un modo de señalar que también lo eran las actitudes de Washington respecto de su régimen. Al margen de estos matices, Perón daba pruebas de contar con una información amplia y una perspectiva bastante completa de lo que estaba en juego en el conflicto. Por ejemplo, registraba circunstancias que tanto los analistas internacionales como quienes estaban involucrados en las principales decisiones contemplaban ampliamente en sus apreciaciones —tal el caso del comentario respecto de que, al haber dejado caer a China en manos del comunismo o haber dejado a la península coreana fuera de su perímetro de seguridad, Washington había alentado indirectamente la invasión—. En cambio, fallaba una vez más al percibir el conflicto como el primer paso hacia la anunciada tercera guerra.

El segundo motivo de enfriamiento se vinculaba todavía más estrechamente con el escenario interno. El gobierno peronista se acercaba al fin del primer mandato en una situación poco confortable. Buena parte de lo que había intentado con el

cambio de marcha de la economía emprendido a principios de 1949, cuando relevó a su primer equipo económico, estaba comprometido por imprevistas calamidades naturales. La inflación comenzaba a erosionar los ingresos salariales mientras que plagas y sequías reducían violentamente las cosechas y con ello la capacidad de importar. El panorama político se enrarecía a la par que flaqueaba la economía. La designación de la fórmula presidencial provocaba irreparables lesiones y cambios en la relación de fuerzas en el interior del partido gobernante y en la coalición que lo sostenía. Las corrientes opositoras se activaban, los universitarios se agitaban y algunas huelgas resonantes, como la de los ferroviarios, conmovían a un gobierno que pretendía ser auténtica y exclusiva expresión de la clase obrera. Tampoco faltaría una frustrada asonada militar, significativa, sobre todo porque reflejaba síntomas de ruptura de los equilibrios que hasta allí habían sostenido todo el proceso político.

El año 1951 no era pues el momento más oportuno para aplicar medidas de ajuste que pudieran tener repercusiones electorales. En lugar de ello, era más fácil aumentar la presión por el lado de los derechos y libertades de la ciudadanía y jaquear a las instituciones de la democracia liberal por las que, en rigor, no se tenía sino un aprecio instrumental. Así fue que se restringió la acción de los opositores y de la prensa, y el discurso oficial adquirió un tono agresivo e intolerante atribuyéndose el monopolio de los altos ideales del país y adjudicando a los adversarios, calificados como testaferros de intereses foráneos, las más pérfidas intenciones. La expropiación, en los primeros meses de 1951, del diario *La Prensa*, uno de los matutinos más antiguos e influyentes de la Capital, constituyó el ejemplo más elocuente de esta elección política y tendría amplias e inesperadas derivaciones; entre las más importantes, el hecho de rehabilitar el clima de tensión con Washington. Los funcionarios norteamericanos, independientemente de lo que en ese momento particular de la Guerra Fría les sugirieran los cálculos estratégicos sobre amigos y aliados, no pudieron menos que hacerse eco de la estridente solidaridad de los diarios norteamericanos con el colega porteño y de la presión de los sectores liberales que veían confirmadas sus antiguas prevenciones respecto del mandatario argentino y de su régimen.

Perón parecía dispuesto a elegir: si su objetivo principal en la coyuntura era neutralizar las tensiones del frente interno y asegurarse la reelección, a éste debían subordinarse la mayoría de las decisiones. La reforma electoral que se practicó en esa oportunidad —manipulando los límites de las circunscripciones electorales— no fue sólo resultado de un irrefrenable hábito de desconsideración institucional; más bien sirvió como indicador de la importancia que le asignaban a la consulta un líder y un partido siempre dispuestos a acrecentar el poder. Una vez ratificado el apoyo popular podía pensarse en renovar y ajustar el proyecto político de cara a situaciones económicas cada vez más comprometidas. Se podría contar entonces con el espacio necesario para aplicar programas menos distribucionistas y tal vez neutralizar a la oposición con instrumentos menos drásticos que los que se venían empleando. En lo exterior, el fastidio de Washington podía considerarse un costo tolerable y sólo momentáneo ya que, después de un resultado favorable del gobierno en las urnas, sus funcionarios tendrían que admitir que Perón y el peronismo eran realidades con las que debían y les convenía convivir.

Por otra parte, en 1952 habría elecciones en los Estados Unidos, de modo que la posibilidad de que allí se produjera un cambio político se seguía con indisimulada expectativa. Perón no dudaba en resaltar los méritos del general Eisenhower, candidato del Partido Republicano, y confiaba en él no sólo para volver a encauzar la estrategia general de un Occidente "necesitado de líder que lo dirija y organice la acción conjunta e integral de conducción de la guerra", sino para colocar sobre nuevas bases las relaciones bilaterales perjudicadas por conceptos y prácticas de la gestión demócrata. Esta expectativa se basaba en buena medida en el hecho de que Eisenhower también era militar, lo cual reflejaba, una vez más, lo que por entonces era el profundo recelo de Perón respecto de la clase política de aquí o de allá.

LA RELACIÓN CONSTRUCTIVA. LOS BUENOS VECINOS

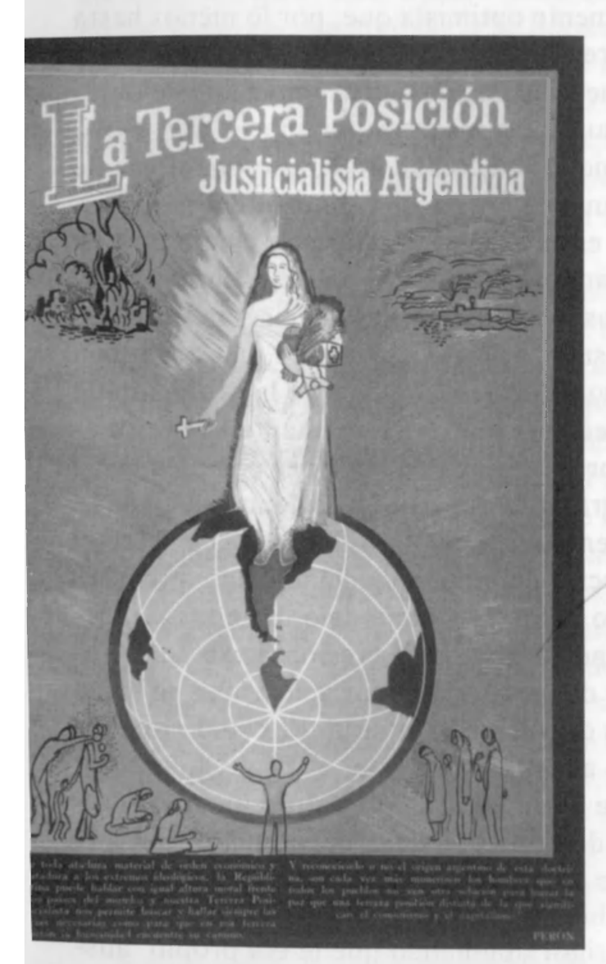
Seguramente el nuevo habitante de la Casa Blanca no llegaba al poder sintiendo recíproca simpatía por el morador de la

Casa Rosada, pero a la postre, el último tramo del peronismo sería el de mejor relación con Washington. Este nuevo giro fue resultado de un conjunto de circunstancias que, en uno y otro lado, apuntalaron una positiva modificación del vínculo: por parte de la Argentina, las demandas económicas y las necesidades derivadas de inevitables correcciones de rumbo en esa materia; por parte de los Estados Unidos, las definiciones de política exterior impulsadas por una nueva administración decidida a frenar a Moscú y a Pekín con procedimientos más efectivos que los empleados hasta entonces y dispuesta a mayor contemplación para con los usos y estilos políticos de quienes se manifestaban dispuestos a ser sus aliados y amigos.

En cuanto a las circunstancias internas hay que destacar que la versión imprudentemente optimista que, por lo menos hasta 1951, Perón seguía ofreciendo de los resultados de su modelo de desarrollo era desmentida por una crisis imposible de ocultar y que alcanzaría su punto máximo durante el transcurso del año siguiente. Aunque puede admitirse que una dosis de optimismo era políticamente necesaria para mantener la adhesión de la base social en una etapa electoral, a esta altura ya no podía seguir afirmándose, como era habitual en la propaganda oficial, que todos los problemas estaban resueltos y que la Argentina había pasado definitivamente de una economía de miseria a una de abundancia. Lejos de eso, la evolución de los indicadores macroeconómicos era inquietante. A tal situación se respondería por medio de dos acciones complementarias: en lo inmediato, tratar de revertir la tendencia declinante de la tasa de crecimiento, detener la inflación y cambiar el signo deficitario del sector externo; a mediano plazo, preparar un programa destinado a corregir el modelo de industrialización sustitutiva, haciéndose eco de la presión de sectores industriales deseosos ya de pasar a la exportación pues se había llegado a la saturación del mercado interno. El Plan Económico de 1952 respondió al primer objetivo, el Plan Quinquenal que habría de aplicarse entre 1953 y 1957 al segundo. Sin resignar los propósitos de construir una "economía social", la orientación general de los instrumentos utilizados estaba en línea con las recetas liberales en favor de las cuales Washington presionaba con el rigor dogmático que le era propio: austeridad, estabilidad, política monetaria restrictiva, disminu-

ción de la inversión publica, transferencia al sector privado de empresas públicas, incentivo a la iniciativa privada y flexibilización de los instrumentos de regulación y control, auspicio al ingreso de capitales y énfasis en la productividad. El cambio no resolvería todos los problemas pero parecía destinado a mejorar sensiblemente el cuadro crítico que ensombrecía el horizonte peronista.

Del otro lado, Eisenhower había llegado al poder con un propósito prioritario: retomar la iniciativa ante la amenaza comunista blandiendo duras críticas contra la estrategia de contención tal como había sido llevada por su antecesor. Con él, y con su secretario de Estado John Foster Dulles, la cruzada anticomunista alcanzaría sus tonos más agudos y el "occidentalismo de Guerra Fría" apelaría a un mayor disciplinamiento y estrechamiento de las alianzas políticas y militares. Aunque América Latina no ocupara un lugar central en sus preocupaciones iniciales, la nueva estrategia no podía dejar de tener consecuencias sobre las relaciones con la región en conjunto y con cada una de sus partes individualmente. Por un lado, porque se colocaría mas énfasis en la solidaridad hemisférica y en el alistamiento de los instrumentos de seguridad mutua para defensa del mundo libre; en segundo lugar, porque se pondría menos celo en el tipo de



Propaganda oficial sobre la Tercera Posición.

régimen escogido por aquellos que se colocaban decididamente de su lado. Al aliado no se le exigiría el test de respeto a las instituciones de la democracia liberal, menos cuando mostraba más disposición hacia las directivas del mercado, trataba con mayor consideración a las inversiones externas y moderaba las tentaciones neutralistas. En definitiva, como no se trataba de exigir el acatamiento efectivo de las formas republicanas del gobierno democrático, bastaba con que ellas se mencionaran como un ideal a alcanzar en algún momento. Con la misma duplicidad que le atribuía a quienes contrariaban su voluntad, Washington hacía suyo un valor tan preciado por la región como el principio de no intervención, pero reservando su acatamiento sólo para la tentación de imponer sistemas democráticos o de propiciar el respeto de los derechos humanos. En otras esferas se mantendría la discrecionalidad de siempre. Afirmar que debían respetarse las características de cada sociedad y el derecho de darse la forma de gobierno que se ajustara a éstas servía para contrastar con las aspiraciones soviéticas de imponer regímenes comunistas y para justificar las gestiones autoritarias.

Todavía a principios de 1953 persistían los recelos entre Buenos Aires y Washington, en especial debido a los ataques de los diarios estadounidenses y al tono de las réplicas locales, fueran oficiales o paraoficiales. En este punto, Perón se equivocaba al proyectar al escenario norteamericano las relaciones domésticas entre prensa y gobierno. Le costaba admitir que el tratamiento que le daban los medios escritos del Norte no contaba con el beneplácito del Departamento de Estado o que éste no pudiera hacer nada para impedirlo. No podía entender —o le convenía que se creyera que no podía hacerlo— la interferencia de la prensa en los planes del gobierno de una de las grandes potencias del mundo. De todos modos, las fuerzas e intereses que ahora presionaban en favor de la reconciliación eran suficientemente poderosos como para neutralizar las prevenciones y las críticas de la prensa o de algunos políticos y funcionarios, en especial de aquellos alertados respecto de lo que consideraban una peligrosa campaña de penetración del peronismo en otros países latinoamericanos.

El informe que el hermano del presidente Eisenhower hiciera al concluir su gira por Latinoamérica de mediados de 1953 en la que se incluyó una estadía de un par de días en Buenos

Aires, no fue más que un capítulo menor de la nueva diplomacia estadounidense. Reflejaba, en todo caso, la voluntad de atender algo más a una región en la que se pensaba, por cierto exageradamente, que el comunismo había puesto pie a través de un gobierno constitucional guatemalteco de signo progresista como era el del coronel Jacobo Arbenz. Pero más allá de lo que significara en cuanto al diseño de un nuevo programa político por parte de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, la visita tuvo en la Argentina una gran repercusión; seguramente mayor que la que deseaban otorgarle los estrategas de Washington. Perón, dispuesto a aprovechar bien la oportunidad, restó importancia a la circunstancia de que la estadía de Milton Eisenhower en la capital argentina coincidiera con un fin de semana —señal que, interpretada en clave diplomática, le quitaba entidad a la visita—, y lo hizo objeto de las mayores expresiones de simpatía y reconocimiento.



Milton Eisenhower (primero desde la izquierda) junto al presidente Perón durante su visita a la Argentina.

Mucho más auspiciosos para los propósitos argentinos serían los términos en que se expresó el nuevo secretario asistente para Asuntos Americanos John Moors Cabot en una exposición realizada en octubre de ese mismo año. En esa oportunidad, el funcionario no sólo sugirió que resultaba inconveniente para los intereses de Estados Unidos intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos tratando de imponerles normas estrictas de conducta democrática, sino que mencionó explícitamente la importancia de la Argentina como país de alto valor estratégico del Atlántico Sur para cualquier programa de defensa hemisférica.

Hacia 1954, los funcionarios norteamericanos apreciaban con inocultable satisfacción lo que aparecía como una mayor disposición del gobierno de Buenos Aires a liberalizar la economía y combatir la amenaza comunista; a su vez, los empresarios del Norte ponderaban el hecho de que la Argentina pudiera convertirse en una auspiciosa promesa de buenos negocios. Las dos visitas que hiciera a Buenos Aires el secretario asistente para Asuntos Latinoamericanos Henry Holland en septiembre y diciembre de ese año constituyeron un elocuente ejemplo del nuevo clima. En la segunda de esas ocasiones, el funcionario del Departamento de Estado había declarado que, para su país, no había asunto regional al que se le acordara más importancia que la creciente cooperación con la Argentina. Por otra parte, después de largas negociaciones, el Eximbank estaba dispuesto a acordar un crédito para el equipamiento de la planta siderúrgica de San Nicolás.

Naturalmente, para que se produjera ese sensible mejoramiento del clima mutuo hubieron de pesar algo más que los nuevos conceptos de contención implementados por la superpotencia y una mayor aproximación a la ortodoxia económica por parte del gobierno argentino. Tal como podía haber previsto Perón, el holgado triunfo obtenido por su partido en las elecciones de fines de 1951 había obligado a ajustar los cálculos políticos de Washington. El líder argentino encaraba su segundo período presidencial con un respaldo plebiscitario y no se vislumbraba que ese apoyo hubiera de ceder en el futuro próximo. En una de las evaluaciones hechas por el Departamento de Estado a principios de 1954 se afirmaba: "El poder que ejerce Perón actualmente es mayor que nunca". Las elec-

ciones legislativas de abril de ese año ratificaban esa cómoda hegemonía, desautorizaban a quienes todavía confiaban en una modificación de la escena política y fortalecían el criterio pragmático: en definitiva, era preferible apostar a un régimen que debía moderarse forzado por la necesidad que propiciar un cambio que podía desembocar en una guerra civil o llevar al poder a una fuerza que resultara más antinorteamericana que el propio peronismo.

A simple vista, no era perceptible que la hegemonía de que gozaba el partido oficial estuviera volviéndose contra ella misma y llevaría, a corto plazo, a un inesperado desenlace. La compulsión hacia el control político, que se nutría tanto de un concepto totalizador del poder como de la lógica de una perspectiva "revolucionaria" que se atribuía como objetivo principal sellar definitivamente la unidad de la Nación, maltrataba a las instituciones y, por tales vías, terminaba provocando una enorme fractura en el seno de la sociedad. Tal como lo anunciaban en un documento secreto elaborado por el Partido Peronista para diseñar la estrategia electoral, los seguidores de Perón, "sin darse pausa en la búsqueda del poder", estaban dispuestos a "emplear todos los medios y conceptos, a fin de que todos los habitantes de esta Patria sean peronistas, excluyendo al antiperonismo de las corrientes de opinión pública". Naturalmente, ese empeño no podía sino conducirlos hacia las antípodas de la unidad nacional que su líder afirmaba como supremo objetivo del movimiento.

LAS CARTAS ALTERNATIVAS

En verdad, el "arreglo" con los Estados Unidos iniciado en el transcurso de 1953 no significó un alineamiento exclusivo e incondicional con la potencia americana; tampoco constituyó una evidencia de que la voluntad negociadora del peronismo quedara definitivamente resignada y se abandonaran los propósitos de llevar adelante una política exterior de tonos independientes. Prueba de ello es que la Argentina se negó a suscribir un acuerdo militar bilateral del tipo del que Washington firmara con buena cantidad de países latinoamericanos y, si bien su representante en la Conferencia Interamericana realizada en

Caracas a fines de 1954 adoptó una actitud premeditadamente ambigua, junto con México optó por la abstención en ocasión de la condena al régimen guatemalteco de Arbenz auspiciada por el Departamento de Estado. Por otra parte, no excluía múltiples aperturas en diferentes sentidos, ni suponía que el mercado local se reservaría exclusivamente a empresas de origen estadounidense. Del mismo modo que Washington persistía en sus hábitos de poderío, el peronismo insistiría en gestos de relativa autonomía destinados a preservar su prestigio y ampliar su capacidad de desempeño. Las principales cartas de las que podía valerse para compensar la presión hegemónica eran Latinoamérica, Europa y la Unión Soviética y el resto del bloque socialista. Las tres opciones se jerarquizaban de modo diferente en función de criterios prácticos y de consideraciones ideológicas. A Latinoamérica y Europa se las colocaba en el primer rango, tanto por las oportunidades de orden económico y político como por razones geográficas, históricas y culturales. En el caso de los países del Este lo que importaba principalmente eran las posibilidades comerciales y, secundariamente, que un gesto hacia ellos podía servir como instrumento de regateo con Washington o para neutralizar a los siempre fastidiosos militantes del comunismo local para los cuales la amistad hacia Moscú solía importar más que sus propias tribulaciones.

Para un concepto de la ecuación político-diplomática como el de Perón, el antagonismo con los Estados Unidos siempre había sido razón suficiente para recostarse hacia Europa. Esa desavenencia neutralizó la eventual disposición a cambiar de zona de influencia impulsada por unos pocos, esto es, a modificar la tradicional relación especial con Londres en beneficio del nuevo centro hegemónico de la economía mundial; aunque, en cierto modo, tal decisión hubiese sido coherente con lo que pensaba parte de la vertiente nacionalista antibritánica de la que el peronismo se había nutrido inicialmente. Si de un lado Braden y los castigos económicos dictaban las interpretaciones sobre el "imperialismo principal" que se atravesaba en el camino argentino, de otro lado el nuevo perfil productivo del país, la tensión entre las necesidades e intereses ligados a la relación histórica y las que resultaban de las nuevas condiciones que marcaban el desenvolvimiento del tradicional triángulo comercial del Atlántico pesaban sobre las decisiones obli-

gando al gobierno a embarcarse en variadas y complejas tramitaciones. El pragmatismo parecía aconsejar que lo que se negaba en una ventanilla debía buscarse en otras; sólo que ellas no eran intercambiables y no todas las bocas de atención estaban en condiciones de atender las necesidades específicas de un país en vías de industrialización. Recién en la primera mitad de los cincuenta la recuperación económica de Europa le daría respaldo fáctico a la estrategia de diversificación, lo que se reflejó en el flujo de las inversiones de ese origen desde 1953 en adelante.

Naturalmente, una cosa era el continente y otra Gran Bretaña. En virtud de lo que durante décadas habían sido los flujos de inversión y comercio derivados del modo de articulación de la Argentina al mercado mundial y, como consecuencia de ello, cuestiones puntuales como la suerte de las libras bloqueadas, los ferrocarriles o las exportaciones de carne, las negociaciones con Londres no podían menos que colocarse en la primera fila. Ellas se materializaron en un conjunto de tratados, convenciones y protocolos tramitados a lo largo de todo el ciclo del peronismo: el tratado Miranda-Eady de septiembre de 1946, el Convenio Andes de principios de 1948 y prorrogado hasta marzo de 1949 y luego hasta 1950, el protocolo adicional de abril de ese año, el protocolo Paz-Edwards de abril de 1951, el acuerdo de diciembre de 1952, un nuevo convenio en abril de 1955. No deja de ser un dato lleno de singulares resonancias políticas que un sector de aquel nacionalismo incorregiblemente antibritánico que había contribuido a crear el clima ideológico dentro del cual surgió el peronismo haya juzgado a estas negociaciones como una confirmación de la tradicional subordinación y no vacilara —en la letra de uno de sus exponentes, el historiador Julio Irazusta— en calificarlas como "la entrega más vergonzosa hecha por un gobierno argentino en favor de Inglaterra".

Del mismo modo que la relación con los Estados Unidos, aunque en un nivel de flujos económicos, políticos y diplomáticos mucho menor, la relación con la Unión Soviética osciló entre momentos de euforia y retrocesos. La Argentina no rompió relaciones como lo hicieron la mayoría de los países latinoamericanos en la fase de mayor hostilidad de la Guerra Fría, pero mantuvo el vínculo con rienda corta. Entre 1949 y 1953

las relaciones diplomáticas pasaron por momentos muy tensos, pero a partir de esa fecha las cosas mejoraron sensiblemente, probablemente por algunas de las razones que alentaban el acercamiento a los Estados Unidos y, del otro lado, porque la URSS emprendía una línea de mayor apertura comercial. En febrero de ese año José Stalin concedió una audiencia desusadamente extensa a Leopoldo Bravo, dirigente político sanjuanino que se desempeñaba como embajador en Moscú, algo que en todo el mundo se interpretó como una inequívoca señal política. Poco después arribó a Moscú una misión comercial argentina y enseguida una similar soviética fue recibida en el país. Por fin en agosto se firmó el postergado convenio comercial que hizo posible un aumento de los intercambios y en 1955, poco antes del derrocamiento del peronismo, se instalaba en Buenos Aires la primera exposición industrial y comercial soviética. En la misma época, la apertura al Este incluía la recepción de dos misiones comerciales provenientes de China (1952 y 1954) y la prórroga o firma original de convenios con varias de las denominadas democracias populares del Este europeo.

Es oportuno recordar que en esos años los sectores que propiciaban políticas económicas de orientación nacionalista —entre ellos la mayoría de los fuerzas que constituían la oposición política al peronismo— sostenían que los intercambios económicos con el mundo socialista constituían el recurso más apto para aquellos países periféricos que procuraban reducir su dependencia y fortalecer los procesos de transformación productiva. Los rendimientos de la economía soviética, en particular en el campo de la industria básica, parecían respaldar tales planteos, tomados muchas veces, y por cierto no sólo en la Argentina, como indicadores de una política exterior independiente adaptada a las demandas del desarrollo económico.

EL LUGAR DE LATINOAMÉRICA: "UNIDOS O DOMINADOS"

La tercera y, en cierto sentido, más importante carta de la que procuraría valerse el gobierno fue la de la relación con Latinoamérica. Algunos investigadores y funcionarios norteame-



ropaganda oficial sobre el intercambio entre los pueblos.

ricanos, tanto como amplios sectores de los países de la región, sobre todo de los vecinos más próximos, vieron en las iniciativas regionales del peronismo un intento por limitar la influencia de los Estados Unidos o convertirse en potencia dominante en América del Sur; sin embargo, las cosas parecen haber sido más complejas y seguramente estaban bastante lejos de los designios de reconstitución del Virreinato del Río de la Plata que le atribuyeron los más exaltados adversarios sudamericanos. En aquellas acciones hubo menos política de poder y ambiciones expansionistas que un conjunto de propósitos políticos y económicos acaso difíciles de concretar pero bastante menos censurables.

Por de pronto, las vertientes políticas e ideológicas que convergieron inicialmente en el justicialismo les reservaban un lugar destacado a las expresiones latinoamericanistas y casi todas ellas reivindicaban un destino hemisférico para un país con fuerte tradición europeísta. Aunque esta perspectiva tenía antecedentes, su fortalecimiento, tanto en los ámbitos civiles como en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, se produjo en los años inmediatamente anteriores al ascenso de Perón al poder. Desde el inicio de su gestión, Perón manifestó la intención de mantenerse fiel a esta línea e incorporó a su discurso el objetivo de la unidad continental. Ya en agosto de 1946, en una entrevista concedida a periodistas extranjeros en la que anunciaba el abandono de la política aislacionista, confesaba su de-

seo de formar parte de un bloque de naciones sudamericanas que contrabalanceara a los Estados Unidos. Por otro lado, la reiterada mención que a lo largo de toda su trayectoria hiciera de la tendencia hacia la continentalización parece indicar que se trataba de una creencia muy acendrada que explica gran parte de sus decisiones. Creía sinceramente —no hay prueba alguna de que en esta materia no lo fuera—, y en cierto modo en contradicción con sus inclinaciones realistas, que la historia de la humanidad consistía en una evolución desde la unidad familiar primitiva hasta la integración universal, pasando por las fases intermedias de la tribu, la ciudad, el Estado feudal, la nación y el continente. Como sospechaba que la fase continental ya estaba en curso y que los conductores debían acatar y acompañar lo que la historia decidía, interpretaba que su misión era hacer algo para cumplir ese mandato. Otro componente de esa visión, ya mencionado antes, era la idea de que la lucha fundamental en un mundo superpoblado y superindustrializado sería en torno de la comida y las materias primas, de modo que, siendo América Latina la zona del mundo con más reservas de ambos elementos, la unidad de la región permitiría que la circunstancia de la que surgía la principal amenaza para su supervivencia se convirtiera a la vez en la mejor oportunidad.

Los dos elementos —continentalismo y recursos naturales— convergían en una perspectiva estratégica que constituiría uno de los ejes sobre los que se definiría la dirección de la política exterior. Sobre estas ideas generales gravitarían a su vez circunstancias económicas y políticas coyunturales que determinaban tiempos, énfasis, procedimientos. En este segundo plano sobresalían dos objetivos: la demanda de mercados y la búsqueda de recursos políticos para la negociación, la construcción de equilibrios de poder y la neutralización de la propaganda adversa difundida desde Washington. Si bien ambos objetivos estaban íntimamente vinculados, los proyectos de uniones económicas se pueden reconocer como instrumentos orientados hacia lo primero, mientras que las gestiones para construir un eje junto con Brasil y Chile —reeditando el antiguo ABC— se colocan en línea con lo segundo.

Las vinculaciones económicas con la región fueron muy valoradas desde los años de la inmediata posguerra, sobre todo debido a las dificultades de abastecimiento en mercados tradi-

cionales. Los tratados con Chile y Bolivia suscriptos en 1946 y 1947, del mismo modo que gestiones con Ecuador, Colombia y Uruguay, fueron mencionados frecuentemente como ejemplo de las intenciones y realizaciones del flamante gobierno. Se los presentó como iniciativas destinadas a "integrar economías complementarias", a aumentar la libertad económica de los participantes y a "cimentar la prosperidad y el bienestar de los pueblos sobre uniones económicas". En la misma época se firmaron convenios con Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Brasil. De todos modos, sólo a partir de 1952-53 esa orientación adquirió un tono dominante. La relativa pausa producida entre ambos tramos puede atribuirse a un conjunto de razones, entre ellas a la forma en que se compaginaban los objetivos políticos y económicos y su corrección en función de cambios del contexto y la evolución del modelo de industrialización desde una primera fase orientada hacia el mercado interno a otra en la que se incorpora el objetivo de la exportación de manufacturas.

La apertura de la economía, insinuada tibiamente hacia 1949-50, cuando se empezaron a hacer sentir los primeros síntomas de desequilibrio, y profundizada a partir de 1952-53, le devolvería un lugar destacado a la región. Tanto los técnicos y funcionarios del gobierno como los sectores empresariales coincidían en las limitaciones de un modelo económico cerrado y en la necesidad de un desarrollo más armonioso de los distintos sectores productivos que complementara y ajustara el primer impulso industrialista de 1946-48. Los mercados latinoamericanos estarían, inevitablemente, en el camino de una nueva estrategia. Como explícitamente lo decía el Segundo Plan Quinquenal, debía promoverse "especialmente" el intercambio de productos manufacturados del país con destino a las naciones del continente. Corroborando este propósito, en un congreso realizado en 1953 los empresarios industriales proclamaban: "Los industriales aspiramos a la integración de toda la economía latinoamericana que permita un intercambio mayor y rompa el estrecho límite del mercado puramente nacional". También el mercado norteamericano comenzó a vislumbrarse como un destino posible y necesario de la producción local.

El objetivo latinoamericano trataría de alcanzarse a través

de dos acciones complementarias: por un lado, impulsando en los foros multilaterales la idea de un mercado común regional; por otro lado, gestionando a nivel bilateral acuerdos de unión económica. En abril de 1953 el delegado argentino ante la reunión de la CEPAL realizada en Quitandinha, Brasil, además de la reiterada moción en favor de la equidad en los términos de intercambio y de la necesidad de formular planes de desarrollo basados en una equitativa distribución de los beneficios en función social, propuso que se estudiaran las posibilidades de una integración económica gradual y progresiva de las naciones de América Latina. Esta iniciativa se respaldaba en el ejemplo del Acta de Unión con Chile que se había firmado en Santiago en febrero de ese año y a la que le seguirían el Tratado de Unión Económica con Paraguay, el Convenio de Complementación con Nicaragua, el Acta de Unión Argentino-Ecuatoriana y el Convenio de Unión Económica con Bolivia. También se intentó con Brasil, aprovechando la vuelta al poder de Getulio Vargas, pero el ensayo fracasó ante la hostilidad de los sectores políticos adversarios del líder riograndense.

A la idea de rehabilitación del ABC, aquella iniciativa conjunta de la Argentina, Chile y Brasil que había conmocionado a la diplomacia americana al promediar la segunda década del siglo, también la animaban propósitos económicos y políticos. Si bien ya en 1950 hubo menciones explícitas a la conveniencia y posibilidad de que los tres países se unieran, fue un poco más adelante que la idea cobró mayor impulso. Cuando se sostenía que ninguno de los tres países tenía por separado viabilidad económica pero que juntos constituían "la unidad económica más extraordinaria del mundo, sobre todo para el futuro", se mostraba la cara económica del proyecto; cuando se afirmaba que el acercamiento entre los tres permitiría que "no seamos siempre yunque que aguante los golpes, sino alguna vez martillo capaz de dar algunos golpes por su propia cuenta", se ponía el acento en la dimensión política de una alianza entre los tres países mayores de Sudamérica que pudiera ampliar su capacidad de negociación ante las grandes potencias.

Si bien hacia 1953 la capacidad de maniobra económica del país se reducía como consecuencia de las dificultades coyunturales y de las restricciones estructurales del modelo, había indicios de que podía estar ampliándose la capacidad de manio-

bra política. El retorno de Vargas en Brasil, el ascenso de Ibáñez en Chile y de Paz Estenssoro en Bolivia —todos ellos producidos en disonancia con las preferencias y los deseos estadounidenses— podían interpretarse como una merma en la capacidad de imposición de la potencia hegemónica y una prueba de la plausibilidad de políticas de compensación y equilibrio por parte de los más débiles. Si es tema de controversia la responsabilidad que pudo caberle al gobierno argentino en esta evolución, poco se discute su disposición a sacar de ella todo el provecho posible. Que tal oportunidad no hubiera tenido resultados como los esperados no sería sólo producto de responsabilidades ajenas sino de sus propios desaciertos.

Impulsar el proceso integrador no era lo mismo que pretender conducirlo, y por más que esta tarea respondiera a las intenciones más inocentes y se la presentara como el intento de "poner voluntades en paralelo" —concepto esencial para el ejercicio de la conducción—, las prácticas concretas a que daba origen no podían producir otra cosa que dificultades. En la óptica de Perón aquella conducción contemplaba dos acciones simultáneas: una dirigida hacia los gobiernos, con quienes se negociaba formal e informalmente, y otra orientada hacia los pueblos, en cuyo seno se procuraba sembrar la idea unitaria partiendo de la premisa de que eran los que realmente podían impulsarla, imponiéndose a conveniencias sectoriales ante las cuales las autoridades solían sucumbir. Puesto que esa siembra descansaba en la difusión del justicialismo y, en ocasiones, con el auspicio de agrupaciones políticas adictas en diferentes países, poca credibilidad tendrían las indicaciones de que no debía buscarse predominio ni intervención en los asuntos internos de los vecinos y menos el argumento de que la Tercera Posición era suficientemente atractiva como para que las autoridades de Buenos Aires necesitaran alentar una identificación que se producía espontáneamente. Si la doctrina justicialista traspasa las fronteras, solía argumentar Perón, no es nuestra culpa, las fronteras no son vallas para las ideas.

La decisión de impulsar una central sindical latinoamericana de filiación justicialista formaba parte del mismo proceso. En realidad, desde muy temprano se le adjudicó a la organización obrera un papel en la ejecución de la política exterior. Ya en 1947 se creó en la CGT el Departamento Internacional des-

de el cual se supervisaría el desempeño de los agregados obreros creados ese mismo año al modificarse la ley del Servicio Exterior y se coordinaría a las delegaciones sindicales en las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo en las cuales debían enfrentar el implacable ataque del sindicalismo norteamericano y sus clientes. Perón sugería que toda su política internacional era "total y absolutamente coincidente con la política sindical internacional" llevada adelante por la CGT. Paralelamente, durante años el mandatario argentino dedicó un tiempo muy considerable a difundir los puntos de vista y las bases doctrinarias de su movimiento y a exponer sus logros ante decenas de delegaciones sindicales extranjeras invitadas a Buenos Aires. Que esta prédica algún efecto tuvo lo prueba el hecho de que hubo dirigentes de distintos países que adhirieron a sus ideas y estuvieron dispuestos a acompañarlo en la construcción de la Central Sindical Latinoamericana (ATLAS), proyecto cuya concreción definitiva se produjo a fines de 1952 en una reunión realizada en la ciudad de México, en gran medida como respuesta a la creación de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores a principios de 1951 acaudillada por Serafino Romualdi, un dirigente de discutibles antecedentes que se desempeñaba como asesor en el Departamento de Estado. Debe decirse que los alcances de esta iniciativa en el plano laboral fueron, sin embargo, bastante magros.

En suma, alguna dificultad congénita parecía impedirle al peronismo hacer todo bien. En esta como en otras esferas, lo que construía por un lado lo comprometía por el otro. Así como en el plano interno el culto a la personalidad y las prácticas autoritarias minaban los logros de políticas económicas y sociales más que razonables y le quitaban sustento a lo más legítimo y meritorio de su proyecto doctrinario, en el plano exterior las iniciativas integradoras eran afectadas negativamente por actitudes que incomodarían a sus propios aliados reales o potenciales. De todos modos, y retornando al comentario con que se inició este capítulo, el balance de la política exterior del primer peronismo parece soportar bien un juicio crítico pero ecuánime. No fue la expresión irreprochable de un genial estratega, pero tampoco un compendio de desafíos gratuitos ni torpes aislacionismos.

BIBLIOGRAFÍA

Llambí, Benito: *Medio siglo de política y diplomacia,* Corregidor, Buenos Aires, 1997.

Luna, Félix: *Perón y su tiempo,* Sudamericana, Buenos Aires, 1993.

Page, Joseph: *Perón,* Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1984.

Paradiso, José: *Debates y trayectoria de la política exterior argentina,* Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1993.

Paz, Hipólito Jesús: *Memorias. Vida pública y privada de un argentino del siglo XX,* Planeta, Buenos Aires, 1999.

Potash, Robert: *El Ejército y la política en la Argentina,* Sudamericana, Buenos Aires, 1981.

Rapoport, Mario y Spiguel, Claudio: *Estados Unidos y el peronismo: la política norteamericana en la Argentina, 1949-1955,* Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1994.

Remorino, Jerónimo: *Política internacional argentina, 1951/1955,* edición del autor, Buenos Aires, 1968.

Van Der Karr, Jane: *Perón y los Estados Unidos,* Vinciguerra, Buenos Aires, 1990.

NUEVA HISTORIA ARGENTINA

TOMO 1: *Los pueblos originarios y la conquista*
Período: Prehispánico (hasta 1516)
Dirección de tomo: Myriam N. Tarragó

TOMO 2: *La sociedad colonial*
Período: Colonial (1516-1806)
Dirección de tomo: Enrique Tandeter

TOMO 3: *Revolución, República, Confederación*
Período: De la Independencia a Caseros (1806-1852)
Dirección de tomo: Noemí Goldman

TOMO 4: *Liberalismo, Estado y orden burgués*
Período: De la Organización Nacional (1852-1880)
Dirección de tomo: Marta Bonaudo

TOMO 5: *El progreso, la modernización y sus límites*
Período: De la hegemonía conservadora (1880-1916)
Dirección de tomo: Mirta Zaida Lobato

TOMO 6: *Democracia, conflicto social y renovación de ideas*
Período: De entreguerras I: Los gobiernos radicales (1916-1930)
Dirección de tomo: Ricardo Falcón

TOMO 7: *Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política*
Período: De entreguerras II: La década de 1930 (1930-1943)
Dirección de tomo: Alejandro Cattaruzza

TOMO 8: *Los años peronistas*
Período: Del peronismo (1943-1955)
Dirección de tomo: Juan Carlos Torre

TOMO 9: *Violencia, proscripción y autoritarismo*
Período: De la Revolución Libertadora al derrocamiento de Illia (1955-1976)
Dirección de tomo: Daniel James

TOMO 10: *Dictadura y democracia*
Período: Del Proceso de Reorganización Nacional al gobierno de Menem (1976-1999)
Dirección de tomo: Juan Suriano

TOMOS ESPECIALES

Arte, sociedad y política. Dirección de tomo: José Emilio Burucúa
Atlas Histórico Argentino. Dirección de tomo: Mirta Zaida Lobato - Juan Suriano

Esta edición de 5.000 ejemplares
se terminó de imprimir el mes
de enero de 2002 en
A & M Gràfic, S. L.
Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)

Este volumen de la Nueva Historia Argentina abarca el período que se extendió entre 1943 y 1955, los años peronistas. Tanto por las transformaciones sociales y políticas que introdujeron como por los conflictos que generaron en la convivencia entre los argentinos, los años peronistas (que abarcan la primera y la segunda presidencia de Juan Domingo Perón) han estado en el centro de la investigación académica y la reflexión intelectual del país. El tratamiento que recibieron no ha estado exento de la gravitación de las pasiones políticas que acompañan su trayectoria y el impacto posterior sobre el desenvolvimiento histórico de la Argentina. En este volumen los lectores encontrarán las contribuciones de especialistas en los diversos aspectos del período, cuyas obras han procurado aportar un conocimiento más equilibrado y riguroso.

Precedidos por una introducción, que ofrece una síntesis del período, los capítulos de este volumen se ocupan de temas centrales: las relaciones cambiantes de Perón con las Fuerzas Armadas y la Iglesia, sus apoyos institucionales originales, la transición desde la bonanza inicial a los problemas de la estrategia de desarrollo, los alcances y las modalidades de las políticas de bienestar social, las reacciones del mundo de los negocios y sus diferencias internas, las tensiones del sindicalismo entre su lealtad política y la defensa de las demandas obreras, el lugar de Evita y de la causa de las mujeres, la construcción de la doctrina justicialista, el antiperonismo de los círculos intelectuales, los avatares de una política exterior independiente.



"QUEREMOS LA UNIÓN Y FELICIDAD DE TODOS LOS ARGENTINOS"

PERÓN


ISBN 950-07-2181-3

9 789500 721813

www.edsudamericana.com.ar
Impreso en España